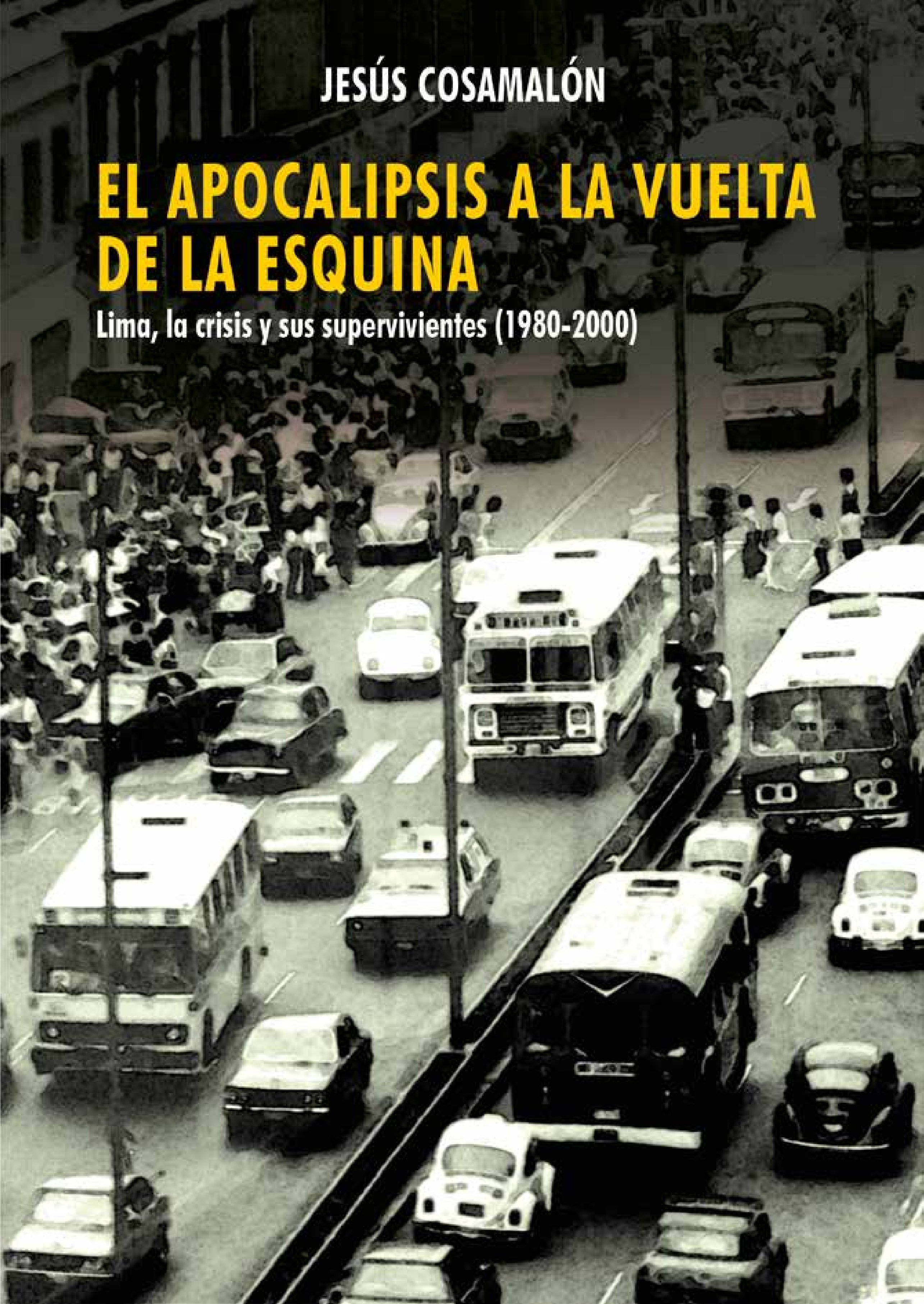


JESÚS COSAMALÓN

EL APOCALIPSIS A LA VUELTA DE LA ESQUINA

Lima, la crisis y sus supervivientes (1980-2000)

El apocalipsis a la vuelta de la esquina
Lima, la crisis y sus supervivientes (1980-2000)

JESÚS COSAMALÓN

EL APOCALIPSIS A LA VUELTA DE LA ESQUINA

Lima, la crisis y sus supervivientes (1980-2000)



FONDO EDITORIAL
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
Centro Bibliográfico Nacional

305.562 Cosamalón Aguilar, Jesús A, 1966-
C83 El apocalipsis a la vuelta de la esquina : Lima, la crisis y sus supervivientes, 1980-2000 / Jesús Cosamalón.-- 1a ed.-- Lima : Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2018 (Lima : Tarea Asociación Gráfica Educativa).
443 p. : il. ; 24 cm.

Bibliografía: p. 423-443.
Contenido: La ciudad, la crisis y los ambulantes -- La década maldita -- Los supervivientes.
D.L. 2018-16359
ISBN 978-612-317-420-0

1. Vendedores ambulantes - Perú - Lima - Condiciones sociales 2. Economía informal - Perú - Lima 3. Espacios públicos - Perú - Lima 4. Sociología urbana - Perú - Lima 5. Lima (Perú : Departamento) - Condiciones económicas - 1980-2000 I. Pontificia Universidad Católica del Perú II. Título

BNP: 2018-474

El apocalipsis a la vuelta de la esquina
Lima, la crisis y sus supervivientes (1980-2000)
Jesús Cosamalón

Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú
feditor@pucp.edu.pe
www.fondoeditorial.pucp.edu.pe

Diseño, diagramación, corrección de estilo
y cuidado de la edición: Fondo Editorial PUCP

Foto de carátula: detalle de *La avenida Abancay en los años 80*, Caretas)
Primera edición: noviembre de 2018
Tiraje: 500 ejemplares

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2018-16359
ISBN: 978-612-317-420-0
Registro del Proyecto Editorial: 31501361801105

Impreso en Tarea Asociación Gráfica Educativa
Pasaje María Auxiliadora 156, Lima 5, Perú

A la tienda de abarrotes de mis padres en el Rímac,
gracias a la cual conseguimos sobrevivir a todas las crisis.

Para Sebastián y Mauricio, nietos de dos provincianos
que llegaron a construir una nueva vida en esta selva de
cemento que llamamos Lima.

Índice

Agradecimientos

Esta investigación se pudo realizar gracias al apoyo que recibí de la entonces Dirección Académica de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, dirigida en ese tiempo por Margarita Suárez y Carlos Chávez. Gracias a las becas obtenidas como parte del Concurso de Proyectos 2007 y 2008 (Proyecto DAI-3495), pude diseñar y ejecutar la investigación que hoy sintetizo en estas páginas. Posteriormente, entre los años 2016 y 2017, tanto Carlos Chávez, desde la Dirección de Gestión de la Investigación PUCP, como Pepi Patrón, vicerrectora de Investigación, apoyaron de forma entusiasta la publicación de estas páginas. A todos ellos mi agradecimiento por apoyar un trabajo dedicado a la historia reciente.

El proyecto fue diseñado, dialogado y dirigido por un equipo de amigos y colegas de los cuales aprendí mucho gracias a su agudeza y capacidad de trabajo. Martín Monsalve y José Ragas se encargaron de elaborar parte de esta investigación; no solo se limitaron a cumplir puntual y eficazmente con sus compromisos, fueron el imprescindible apoyo en todas las discusiones que generaban la metodología, los resultados y sus interpretaciones. Muchas de las ideas expresadas en este libro son el resultado de sus críticas y sugerencias, las cuales me dejan con una enorme deuda por su generosidad y calidad intelectual.

El equipo multidisciplinario, bajo mi dirección general, contó con la labor de muy eficientes asistentes de investigación, en ese entonces estudiantes y hoy reconocidos profesionales y colegas. Quedo en deuda con la extraordinaria labor de María Elena Gushiken, Luis Miguel Silva-Novoa, John Sifuentes, Ignacio Vargas Murillo y Raúl Silva. Su trabajo fue fundamental para los resultados de la investigación.

La redacción de este libro demandó algunos años, tiempo en el cual me beneficié de comentarios y críticas a versiones parciales y preliminares. Una vez más,

Iván Hinojosa contribuyó con su agudeza intelectual y me alentó a terminar el trabajo; José Ragas leyó una parte de esta publicación, me indicó algunos vacíos y sugirió valiosas lecturas. Jorge Lossio también leyó uno de los tantos borradores y me ofreció valiosos comentarios. A principios de la década iniciada en el año 2010, tuve la suerte de ser convocado como docente en el Taller de Investigación en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la PUCP. En esos salones tuve la enorme suerte de trabajar con los arquitectos Wiley Ludeña y Luis Rodríguez, quienes me enseñaron muchísimo de la historia urbana limeña y me iniciaron en el conocimiento de los valiosos aportes de los arquitectos para la comprensión del pasado y presente de la ciudad. Sin sus enseñanzas los vacíos de esta publicación serían insalvables. Además, ambos colegas y amigos tuvieron la gentileza y sacrificio de leer los borradores de este manuscrito, de señalar sus múltiples deficiencias y de ayudar con importantes sugerencias. A todos los mencionados les ofrezco un enorme agradecimiento y mis disculpas si es que a pesar de sus advertencias aún persisten las deficiencias que me hicieron notar.

Maribel Arrelucea fue, en todos estos años, un constante apoyo que me permitió dedicarme a la redacción de este libro. Además, disfrutó conmigo y nos emocionamos con el recuerdo de esos años tan difíciles para todos. No me imagino estas páginas sin su contagiosa sonrisa, su mirada tierna y conmovedora cuando le mostraba algunas de las imágenes que se incluyen en esta edición. Además, y como siempre, estuvo muy dispuesta a leer la versión final de este trabajo, para sugerir nuevas ideas y evitar errores.

Finalmente, este libro lo dedico a mis dos hijos, Sebastián y Mauricio, nacidos al igual que yo en Lima, pero, como millones de limeños, nietos de provincianos que contribuyeron a construir la ciudad que habitamos. Quizá sea esta la mejor manera de no olvidar que la historia la hacemos todos, desde el lugar que nos toca habitar y construir, tal como fue la pequeña tienda de abarrotes que administraron sus abuelos en el Rímac.

Prólogo

En estas páginas quisiera respetar el espíritu del autor y de su magnífico libro, a saber, tratar de mantener la historia personal, pero al mismo tiempo comprenderla desde una perspectiva mucho mayor, asumiendo mi condición de ciudadana limeña, con una relación íntima con la ciudad de la que se ocupa este texto. Soy limeña de nacimiento, hija de madre migrante de la Amazonía y de padre chalaco. He vivido, y sobrevivido, buena parte de mi vida en esta ciudad. La he gozado, sufrido, amado y detestado. Creo que como todas y todos.

Lima es compleja y con problemas multidimensionales, que se juntan, atraviesan y superponen; con personas reales que sufren y ríen, que trabajan o intentan trabajar; con mujeres, hombres y, lamentablemente, también niños y niñas que salen a la calle y se instalan en ella para procurarse unos recursos económicos que de otra manera no pueden conseguir. Y precisamente el propósito de esta importante investigación es respetar y dar cuenta en la medida de lo posible de esa multidimensionalidad. Por ello resulta tan pertinente una aproximación inter y multidisciplinaria, con una interesante variedad de fuentes y testimonios. Suelo decir que son las universidades las que tienen facultades disciplinares, pero que el mundo real tiene problemas que exigen miradas múltiples e interdisciplinarias.

Precisamente por ello el autor propone un enfoque multicausal del tema de la informalidad en la forma específica que aquí se estudia, que es el comercio ambulatorio en la ciudad de Lima. La informalidad, desde el inicio, es presentada no como un problema de barreras legales propias de un Estado ineficiente y arcaico y que se resuelve con la titulación, como proclama un modelo bastante difundido, sino como un sistema que incluye ámbitos muy diversos, que van de la economía a las estructuras familiares, de los patrones de asentamiento urbano a la acción (o inacción) política, entre muchos otros. Una mirada que se propone ser integral es, así, multidisciplinaria.

Es curiosa la sensación de que un libro le ponga frente a los ojos, reflexiva y críticamente, experiencias que una misma ha vivido en esta Lima cuyo arco de significantes es tan amplio que va de «la ciudad jardín», «la ciudad chicha», «la ciudad señorial» a «Lima la horrible». Quienes hemos vivido en esta ciudad, que es todas las anteriores, entre 1980 y el 2000, nos encontramos aquí, en estas páginas, mirándonos con el asombro que está al origen de todo conocimiento, según dice la filosofía antigua. Y nos repetimos una y otra vez que Jesús Cosamalón tiene razón, y mucha, cuando dice que la informalidad no es ilegalidad y que los trabajadores de la calle no son «callejeros», sino que convierten las calles en espacios públicos para ganarse la vida. El tema de los espacios públicos me ha ocupado durante largos años y algunas investigaciones, pero como espacios de formación de opinión pública y acción política, nunca con los ojos puestos en los miles de conciudadanos que trabajan en ellos para subsistir.

Convivimos con la institución del serenazgo, con los guachimanes, con la seguridad privada, con vendedores y vendedoras ambulantes y en estas páginas vamos re-descubriendo sus orígenes, su historia, sus conflictos. Yo no recordaba que los primeros serenos fueron pagados por los comerciantes formales a partir de 1981, cuando fue prohibido el comercio ambulatorio por «la suciedad de las calles», pero sí me reconozco cuando el autor nos recuerda que en la década de los ochenta todo fue informalidad y deterioro; dice incluso «surreal». Pues sí, esos tiempos los recuerdo nítidamente, pues mis hijos nacieron en 1985 uno y en 1990 el otro. Y cómo no recordar los apagones, los coches-bomba, el agua con restos fecales, la inexistencia de (o la imposibilidad de acceder a) los pañales descartables, el miedo, las cintas adheridas a las ventanas y hasta una «lonchera bomba» en el colegio de mis niños.

Y también la amabilidad de la señora Luz, que me vendía las granadillas para los primeros jugos de los bebés, en una impecable carretilla con número de inscripción municipal, licencia y todo. Y recién ahora noto, o recién alguien me hace ver clara, la tremenda ambigüedad de las políticas municipales para con los y las vendedoras ambulantes: licencia, reubicación, desalojo, tolerancia o tolerancia cero, prohibición, Polvos Azules, Mesa Redonda, y así casi al infinito. ¿Reconocer el derecho al trabajo es lo mismo que reconocer el derecho de los ambulantes a ocupar los espacios públicos? ¿Es legítimo oponer el derecho de usar la vía pública para trabajar con el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a una urbe «en condiciones de higiene y ornato»?

La ampliación de la informalidad entre 1980 y 1990 se explica a partir de dos grandes procesos: el primero fue la brutal caída de los ingresos reales que obligó a la población a adquirir productos al menor costo posible; el segundo, un contexto favorable a la ocupación informal de las calles por causa de la debilidad del

Estado, que no logra controlar los espacios y no cubre adecuadamente los servicios públicos, facilitando el surgimiento de nuevos actores al amparo de estas zonas grises. A inicios de los ochenta se dice que «Lima ya no tiene limeños, tiene clubes de provincianos», citando *El Diario* de Marka en julio de 1980. Se nos recuerda que a partir de 1980 una ciudad mestiza, irreverente e informal emergió de las ruinas de la ciudad señorial; una Lima que nos muestra la heterogeneidad étnica y cultural de nuestro país. En realidad, no es exceso de Estado o de reglamentación lo que explica el aumento enorme de la informalidad sino, todo lo contrario, su ausencia. La ausencia del Estado. Hay que recordar que entre 1989 y 1990 se reconocieron 432 nuevos asentamientos humanos en Lima. Y que entre 1980 y 1992 se desplazaron aproximadamente 400 000 personas por causa de la violencia, la pobreza extrema o los desastres ambientales.

Y todos sabemos lo que sucedió a partir de 1990, que fue el propósito del primer gobierno de Fujimori, las reformas estructurales que todos y todas conocemos. Es el surgimiento de la «cultura combi», la «liberación del transporte público» (que nos hace la vida cotidiana cada vez más difícil hasta hoy, 2018, en Lima), la privatización de los servicios públicos, la desregulación de los mercados, la aparición de las AFP, de las universidades-empresa, y un gran etcétera. Barrios enrejados, parques con puertas, tranqueras, basura acumulada, menús callejeros en carretillas, desastres ambientales (El Niño), servicios públicos colapsados, privatización y más privatización y menos Estado. Hasta me había olvidado del robo de las tapas de los buzones del alcantarillado público, con el objeto de traficarlas entre las diversas fundiciones de la ciudad. Salvo algunos curiosos «focos» como la Sunat, en general, ausencia del Estado, como se insiste en este libro.

El «ambulante» como nuevo personaje urbano es claro desde inicios de la década de los años ochenta. Es claro que muchos son migrantes. Pero la crisis económica empuja a las calles a personas de todos los sectores sociales. Ellos incluso generan simpatía entre la población, que los defiende de las agresiones o desalojos de los policías o los serenazgos. Sin embargo, uno de los temas importantes que este libro quiere destaca es que hay un continuo, un vínculo, entre lo informal y lo formal: las propias empresas «emplean» a vendedores informales para abaratar sus costos y llegar a compradores a los que formalmente les cuesta mucho llegar. Polvos Azules es un muy buen ejemplo de ello. Y este me parece un ángulo sumamente enriquecedor para entender la complejidad del fenómeno del comercio ambulatorio en Lima.

Según se nos indica, diversas investigaciones han puesto en evidencia que las empresas formales recurren parcialmente a la informalidad en sus actividades para adaptarse mejor a la demanda o minimizar sus costos. Parte de este proceso consistía en la subcontratación de actividades como una forma de atenuar los riesgos de la actividad en época de desequilibrios económicos.

Nos recuerda el autor, historiador al fin y al cabo, que en la historia de muchos países las actividades fuera del ordenamiento legal han estado presentes constantemente, y en el Perú, por lo menos desde la época colonial al presente. Desde esta perspectiva, la informalidad es un espacio generado para la negociación y la agencia de los individuos, que se convierte en un modo de vida ampliamente difundido en las ciudades capitalistas globalizadas. Sin embargo, y esto me parece muy importante, el doctor Cosamalón se niega a llamarlos 'emprendedores'. Para él, y creo que, con buenas razones, argumentos y fuentes, son 'supervivientes'.

Algo que es notorio en nuestra experiencia cotidiana y que el libro desarrolla de manera muy interesante es el desarrollo de una ciudad que exige un aumento del desplazamiento de la población a grandes distancias, lo cual aleja a los individuos de su residencia y genera una demanda por personas que necesitan satisfacer sus necesidades en las rutas que emplean para desplazarse en el entorno urbano. De este modo, «el ambulantaje» (como lo llaman los investigadores mexicanos Capron, Giglia & Monnet) no solo sería una respuesta personal a un problema de empleo, sino una respuesta social al propio desarrollo de la dinámica urbana y su complejidad. En la definición de ambulantaje también debe considerarse el hecho de que el poblador que compra en las calles es un 'cliente ambulante', cuya movilidad puede ser mayor que la del propio ambulante. La conclusión del estudio de los mencionados investigadores es de gran importancia para el autor, y por ello me permito reproducirla:

> La racionalidad del comercio ambulatorio no puede reducirse a la autogeneración espontánea e informal de un empleo, ya que corresponde también a la satisfacción de una demanda específica, la del viajero urbano con sus necesidades de circulación (limpia parabrisas o lustrabotas), de comunicación (tarjetas telefónicas), de información, (periódicos), de diversión en tiempos de espera (payasos y malabares en los semáforos), de alimentación diferenciada según momentos del día, o de productos adaptados a las formas de sociabilidad (flores). Estas necesidades son las del cliente que llamamos el cliente ambulante (Capron, Giglia y Monnet, 2005, p. 26).

De este modo, se nos señala, aparece la adecuación mutua entre una oferta y demanda móviles. El cliente aprovecha el tiempo muerto de espera en un semáforo, compra en su ruta hacia alguna actividad, etcétera; mientras que para el vendedor la flexibilidad de horarios de trabajo y de independencia personal compensan las dificultades en el ejercicio de la actividad. Debo confesar que nunca había visto el fenómeno del comercio ambulatorio desde esta perspectiva y me parece que enriquece mucho la comprensión del mismo.

Pero quisiera volver al inicio: respetar el espíritu del autor y del libro y no olvidar las historias personales. Pienso en el señor Raúl, que trabaja en la esquina de la avenida Universitaria con La Marina, cerca de la PUCP, que nos espera cada lunes temprano con mentas y pañuelos desechables que sabe me resultan imprescindibles. Particularmente conmovedor, entre varios otros, me ha resultado el testimonio de la señora Eulogia Torres, vendedora ambulante de dulces, en un día de enfrentamiento entre Sendero Luminoso —que había convocado a uno de sus tristemente célebres «paros armados»— y la policía en el año 1989. La columna de Sendero marchó por la Plaza Manco Cápac, comenzó la balacera y la señora Eulogia se escondió detrás de su carretilla de dulces y al final la tuvo que dejar, pues una vecina le permitió refugiarse en un edificio. Su comentario fue: «Hasta ahora no entiendo por qué nos matamos unos a otros, no sé qué está pasando». Felizmente pudo recuperar su carretilla, aunque recobrar la confianza en trabajar en las calles de la ciudad probablemente le tomó un poco más de tiempo. Pero no tiene alternativa. Ser trabajadora ambulante es riesgoso, fue mucho más en décadas anteriores, es agotador e incierto. Es un centro de Lima que se ha convertido, como dice Wiley Ludeña parafraseando a José Matos Mar, «en el centro del desborde popular».

Me resulta imposible dejar de mencionar las diferencias y desigualdades de género que también atraviesan la experiencia del comercio ambulatorio en Lima. Para muchas mujeres de escasos recursos, durante la década de los ochenta, la venta de comida fue una actividad muy usual para completar los ingresos familiares, adecuado además a su rol (división del trabajo) en casa, pero además permitiéndoles salir un poco de la dependencia total respecto de la pareja, en el caso de que la hubiere. Aquí salta otra vez la desigualdad: el porcentaje de mujeres solas es mucho más alto que el de varones solos. Por ejemplo, en el rango de edad de más de 44 años, el 71% de los hombres tiene una pareja, mientras que solo el 50% de las mujeres la tiene. Además, lo preparado para vender también permite alimentar a la familia, con lo cual, se nos recuerda, «se optimizan» los esfuerzos y los recursos.

Datos actualizados refuerzan la tendencia de que son las mujeres, en particular las migrantes de la sierra, quienes no cuentan con muchas oportunidades alternativas al comercio ambulatorio, dada la nítida diferencia educativa respecto de los varones. Muchísimas de estas mujeres migrantes pasaban del servicio doméstico (que abandonaban por maltrato en las casas o por tener ya una familia propia) a ser vendedoras ambulantes. Ello les permite también mayor flexibilidad en el manejo de sus tiempos. Comida y ropa eran los rubros principales de negocio.

No hay, lamentablemente, mayor sorpresa en la constatación de que las mujeres son las más pobres de los pobres y las menos educadas de los menos educados. Pero ellas son las que cuidan y nutren y convierten la vía pública en una extensión del hogar, de lo privado, que permite en particular que las mujeres sin pareja puedan

seguir cuidando a sus hijos. Sin embargo, como bien señala el autor, se trata de temas que aún necesitan investigaciones más detalladas.

En su epílogo, que lleva como interesante subtítulo «¿El ave fénix? Las cenizas de la ciudad», Cosamalón reafirma su convicción de que las explicaciones basadas en la excesiva regulación del Estado no alcanzan para comprender el fenómeno; y es muy honesto cuando señala que la ternura y simpatía que le generan las personas a las que ha estudiado, por su energía y fortaleza para sobrevivir a la crisis económica, la violencia y la desintegración del Estado, se mezclan con el sentimiento de indignación ante la injusticia que padecen al tener que ganarse la vida en las calles, exponiéndose a muchísimos riesgos. Sin embargo, se niega a caer en lo que él mismo llama «un romanticismo cegador», que asume mecánicamente la existencia de buena voluntad en las personas pobres. Inspirándose aquí en Gustavo Gutiérrez, nos dice que «la opción por los pobres» de la Teología de la Liberación no supone que por ser pobres merecen caridad o compasión por su buena conducta.

Como todo buen trabajo de investigación, el libro propone respuestas y deja abiertas nuevas preguntas: ¿por qué tanta incapacidad para producir políticas públicas coherentes?, ¿por qué la ambigüedad pasa a ser la regla en la relación de los municipios con el comercio ambulatorio?, ¿por qué tanta ausencia del Estado? Lamentablemente, estas y otras preguntas que se abren siguen siendo válidas en este siglo XXI que avanza. Ya no hay terrorismo, pero persisten la pobreza, las desigualdades y, nítidamente, la informalidad.

Y para no salir del asombro mencionado, vuelvo nuevamente al inicio, a una historia personal. El libro de Jesús Cosamalón está dedicado a vidas de trabajadores esforzados, honestos, que viven buscándose diariamente el sustento, vidas frágiles que dependen de su ingenio, de su fortaleza y del azar, como la de don Luis Bendezú. A principios del siglo XXI don Luis, un anciano cargador de bultos, declaró que trabajaba cerca de doce horas por unos diez soles al día (más o menos tres dólares en 2017); él era consciente del abuso, «pero como no hay trabajo no me queda otra que soportarlo. Total, aunque sea los diez soles me alcanzan para alimentar a mis dos pequeños hijos»[1]. La reflexión que lanzó en la nota, tan simple como conmovedora, es la esencia que guio la escritura de estas páginas, nos dice el autor: «Imagínese si me enfermo».

Hace más de cincuenta años, la primera vez que nos mudamos a una casa con jardín, en Lima, trabajaba una vez a la semana un estupendo jardinero, don Jacinto Ugarte. Yo le pregunté una tarde qué pasaba si se enfermaba, porque le dolía la rodilla. Y me respondió que él no podía enfermarse. Me impresioné mucho. Y ahora

[1] *La República*, 1-7-2001, «Don Luis Bendezú, el rostro de millones subempleados marginados de la ley de Trabajo».

entiendo más. Así de dura sigue siendo la vida en Lima para algunos de nuestros conciudadanos y conciudadanas. No hay que perder la capacidad de indignarse y, como dice el autor, lo más peligroso es acostumbrarnos a esta situación, asumir que los responsables son las personas y que la vida es siempre así de injusta.

Gran libro, en el que he aprendido mucho de mi ciudad, de mí misma y de nosotros como habitantes de la misma urbe.

Dra. Pepi Patrón
Vicerrectora de Investigación
PUCP

Introducción

Año 2001. Después de una década de autoritarismo se convocó a elecciones luego de varios acontecimientos que remecieron la política peruana. El gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) había caído el año anterior en medio de graves denuncias de corrupción, manipulación de las elecciones y actos de violencia; hechos agravados por su polémica renuncia enviada desde la ciudad de Tokio por fax. El presidente constitucional Valentín Paniagua asumió el cargo el 22 de noviembre del año 2000 y convocó a elecciones, en las cuales salió elegido Alejandro Toledo, quien ocupó el mando desde el 28 de julio del año 2001 hasta el mismo día del año 2006.

Desde ese 22 de noviembre el ambiente se llenó de optimismo, al igual que en el momento vivido el año 1980, cuando se efectuó la salida de los militares del poder. Se pensaba que, con el retorno de la verdadera democracia, la independencia de poderes, la justicia social y la lucha contra la corrupción, por fin sería posible el desarrollo económico para las mayorías de nuestro país. Por ejemplo, así lo expresaron un par de niños originarios de Cajamarca y residentes solo un mes en la ciudad, al ser entrevistados por el diario *Liberación* el día en que Toledo asumió el mando, con el objeto de conocer sus impresiones ante ese hecho. Rosello Soto, de escasos siete años, y Lucía Huapaya, solo un año mayor, vendedores de dulces en la Plaza de Armas, señalaron con optimismo que el nuevo gobierno los ayudaría a salir de la pobreza. Lucía consideró que el presidente: «es cholo como yo, mi papá y mi abuelo. Yo quiero ser cocinera y también estudiar enfermería. Dice mi papá que él nos va a ayudar y yo le creo porque además me gustaría quedarme en Lima».

Dos niños que ni sumando sus edades llegaban a la mayoría de edad mostraban su esperanza de que esta vez sí dejarían de ser pobres, quizá como sus padres, quizá como sus abuelos, o aún más atrás. Trabajadores de las calles con ilusiones, como miles antes que ellos, su pequeña pero reveladora historia se convierte en el punto de entrada de este libro.

Este texto enfrenta la ardua tarea de historizar las formas de supervivencia que se utilizaron en las calles entre las décadas de 1980 y 2000. Lo primero es evitar el uso del término «trabajo callejero» de forma acrítica, el cual es correcto en cuanto a su significado literal, pero incorrecto en cuanto a la memoria y dignidad de quienes recurrieron a estas maneras de ganarse la vida. Las personas que trabajaron en las calles no eran 'callejeras' en el sentido moral del término. La calle se convirtió en el espacio para trabajar, no porque fuera el mejor de los mundos, sino porque permitió el contacto entre una demanda que necesitaba ser abastecida y una oferta compuesta por miles de personas necesitadas de obtener su sustento. Ni una ni otra se explica por separado; por ejemplo, el ambulante no existe sin la mano, no siempre amable, del comprador. Así, en las siguientes páginas, cuando aparezca la palabra 'callejero' o 'callejera' solo se hace con referencia al espacio que se ocupa, sin ninguna connotación moral o de clase. Como señala Mario Barbosa —en un libro al cual estas páginas le deben mucho—, se trata de estudiarlos «como trabajadores, no como delincuentes o marginales», analizar sus actividades económicas «en las calles a partir de sus características particulares, como alternativa de sobrevivencia para una amplia capa de los sectores populares» (2008, p. 15). El que ellos usen el espacio público para sobrevivir y autorregulen su tiempo no elimina su categoría de trabajadores. Además, como se observa en otras realidades, con frecuencia su labor también consiste en transformar y dar valor agregado a las mercaderías. Los vendedores de verduras y frutas escogen y seleccionan los productos, los cocineros transforman los ingredientes y los que venden manufacturas en las calles son a veces los propios fabricantes (Mendiola, 2017, pp. 12-13). Con más claridad:

> […] se busca establecer cómo sobrevive esta población a partir de unas actividades de subsistencia en un espacio abierto y cómo se apoya en redes de intercambio recíproco y en prácticas sociales particulares. Se busca establecer de forma general cómo sobreviven en medio de las precarias condiciones sociales, de una infraestructura insuficiente y del rechazo hacia sus actividades económicas y sus formas de vida (Barbosa, 2008, p. 15).

Si bien la historia de la venta callejera o de los oficios que se ejercen en la calle es muy antigua en el mundo, en América Latina y en el Perú, la llamada 'década perdida' (1980-1990) fue tristemente pródiga en la aparición de diversas y precarias formas de supervivencia. La grave crisis económica causada por la deuda externa, los ajustes inspirados o exigidos por el Fondo Monetario Internacional y la implacable aplicación de las políticas neoliberales tuvieron como consecuencia un retroceso económico que se expresó en el aumento de la pobreza y la caída del PBI per cápita en toda la región. No es el objetivo de esta introducción, ni del libro, poner en discusión si debieron o no aplicarse estas medidas, que en el caso

peruano se implementaron de forma consistente desde el año 1990. Más allá de los beneficios que se esgrimen a favor de ellas, lo concreto e inocultable es que las personas y familias pobres que vivieron esos tiempos sufrieron inmerecidamente las consecuencias de políticas económicas que solo tendrían resultados, cuando los hubo, para sus nietos. Mientras tanto, entre los años ochenta —o incluso antes en el Perú— y el año 2000, los pobres tuvieron que ingeniárselas para alimentarse y brindar educación y bienestar a sus familias, en medio de una creciente inseguridad y violencia urbana.

El reto mayor de estas páginas es sobrepasar el límite fácil y atractivo de lo truculento, de lo anecdótico basado en el drama humano. Las fuentes consultadas muestran con detalle muchas historias de dolor y esperanza, de trabajo y solidaridad, como también de desesperación y angustia. El objetivo de este libro es tratar de mantener la historia personal, pero al mismo tiempo comprenderla desde una perspectiva mucho mayor, que permita profundizar la evolución de la sociedad limeña de las últimas décadas y su rostro actual.

Este libro no afronta el estudio de algunas personas que por diversas razones fueron consideradas peligrosas para la sociedad, como ladrones y prostitutas. Su marginalidad impide que sus voces sean registradas por las fuentes, como sí sucede en el caso de otras actividades ejercidas en el espacio público. Además, el enfoque de este libro se concentra en la llamada «informalidad», de la cual son parte muchas actividades en las calles, pero que no deben identificarse automáticamente con la ilegalidad que rodea las formas de vida de los marginales de la ciudad. Así, sus historias aparecerán de forma incidental en estas páginas, porque este trabajo se concentra en aquellas personas que buscaron ganarse la vida en las calles, sin ejercer actividades consideradas marginales o delictivas desde su punto de vista. Ojalá en algún momento se pueda contar también la historia de las personas que han sobrevivido y aún viven dentro la marginalidad, quienes, sin importar la manera en que son percibidos, también son habitantes de nuestra ciudad.

La informalidad económica tiene varias interpretaciones —más adelante veremos las principales corrientes de análisis—, pero es bueno establecer cuál es el punto de partida de este libro. Como señala J. M. Burt, el Estado peruano nunca fue fuerte, como otros de América Latina:

> […] con frecuencia carecen de la capacidad para regular plenamente sus sociedades y a menudo encuentran resistencia social al extraer recursos a través de tributos y otros mecanismos, no mantienen un monopolio de la violencia y el empleo de esta por parte del Estado es usualmente rechazado y percibido como ilegítimo; y con frecuencia no garantizan el ejercicio de los derechos ciudadanos para todos los miembros de su comunidad política (Burt, 2009, p. 30).

Esta característica 'endémica' del Estado en el Perú se agravó durante la década de 1980. Si bien el proyecto de construcción del Estado-nación dirigido por los generales Juan Velasco Alvarado (1968-1975) y Francisco Morales-Bermúdez Cerruti (1975-1980) intentó fortalecer los recursos y la capacidad de gestión estatal, la crisis del petróleo, los enfrentamientos con diversos sectores de la población y las discrepancias entre los propios militares, además de otros factores, causaron la quiebra del proyecto y su rápido abandono. El retorno de la democracia significó una nueva esperanza, pero lo que Fernando Belaunde (1980-1985) recibió fue un Estado en quiebra, con escasos recursos y con muchas demandas que enfrentar, lo que lo superó largamente. Aunque la capital pudo contar con algún control eficiente por parte de las autoridades, dada la cercanía con el poder, durante la década de 1980 aparecieron las denominadas por Burt (2009) «zonas grises» no controladas eficientemente: «En estos casos, las instituciones del Estado podrían haberse visto obligadas a replegarse debido a una crisis fiscal, una alteración política, violencia insurgente […] el repliegue del Estado crea nuevas oportunidades para que otros actores establezcan sus propias estructuras de dominación y legitimidad» (p. 32). Desde mi perspectiva, las calles y plazas de la capital se convirtieron en una enorme 'zona gris' que permitió el surgimiento de nuevos actores que disputaron a las autoridades el control de los espacios públicos.

En ese sentido es evidente que la difusión del comercio informal no se produjo por el exceso de reglamentación de un Estado que controlaba el acceso al mercado, tal como argumentó Hernando de Soto (1986). Otras propuestas se habían fijado en la crisis económica y su consecuencia más visible, el desempleo, como la piedra de toque que explicaría el surgimiento de la informalidad[2]. Por otro lado, el trabajo pionero de Romeo Grompone (1985) se concentró en las relaciones sociales y las identidades urbanas que surgieron a partir del crecimiento de la economía informal. Sin entrar en detalles que más adelante se profundizarán, el impacto de la crisis y su relación con la informalidad no tiene su factor esencial en el desempleo. Las fuentes utilizadas en este libro revelan otro escenario: el derrumbe de la capacidad de gestión y control por parte del Estado, tanto a nivel nacional como local. Si bien el incremento de la migración y de la población urbana pusieron en jaque a las posibilidades de brindar servicios públicos adecuados, desbordando al Estado, no es menos cierto que los gobiernos locales no pudieron gestionar la ciudad por

[2] El principal conjunto de autores que defendió esta propuesta estuvo compuesto por Daniel Carbonetto, Jenny Hoyle y Mario Tueros y se puede analizar en su libro *Lima. Sector informal* (1988).

la escasez de rentas, las huelgas causadas de la caída de salarios y el poco apoyo que podían encontrar en el gobierno central, agobiado por problemas más graves[3].

Este libro propone que la ampliación de la informalidad económica y el aumento de los vendedores ambulantes durante las décadas de 1980 y 1990 fueron el resultado de dos procesos, productos de la crisis económica, y que no han sido relacionados de manera conjunta como parte de las explicaciones de esas transformaciones. El primer proceso fue la brutal caída de los ingresos reales que obligó a la población a adquirir productos al menor costo posible. Esta necesidad fue cubierta por los ambulantes gracias a la facilidad con la cual se podían adaptar a la demanda por sus bajos costos y flexibilidad, lo cual explica la rapidez de su expansión. La crisis económica se expresó en una demanda duramente comprimida por políticas de ajuste que no tuvieron mayores resultados hasta la década de 1990. La disminución del salario real en proporciones nunca vistas —que esperamos nunca más vivir— deprimió la capacidad de consumo de todos los estratos sociales, lo que creó una demanda que buscaba el menor precio posible. Como señala Miriam Granados, el comercio ambulatorio es una respuesta a

> […] la fragmentada y compleja estructura de la demanda en la ciudad de Lima. La deterioración [sic] de las condiciones económicas de la población y los cambios en los patrones de demanda han tendido a priorizar este mercado, de pequeña escala de operaciones y stock y de gran flexibilidad y variedad. Hemos visto que debido a su ubicación central y a la diversificación de bienes y servicios que ofrece a precios relativamente menores, el comercio ambulatorio cumple la función de proveedor (de venta minorista) de las clases populares. En efecto, la venta ambulatoria posibilita la distribución de una serie de mercancías, a las cuales no tendrían acceso los sectores de bajos niveles de ingreso (Granados, 1997, p. 60).

Esta perspectiva trata de incorporar la demanda dentro del análisis, no solo quedarse en la oferta, la relación con el Estado o el impacto urbano. Así, durante el periodo estudiado en esta investigación la crisis económica exigió la reconstrucción de las cadenas de abastecimiento entre productores, grandes importadores y público consumidor, proceso en el cual los ambulantes —y otros personajes que trabajaban en las calles— se mostraron muy eficientes para satisfacer a la población. Así, entre la empresa formal o semiformal (que elude algunas regulaciones) y el comprador final, se extiende una cadena de intermediaciones con diversos grados de informalidad en la cual el vendedor de las calles es uno de los eslabones, pero no el único.

[3] Casi al final de la investigación pude consultar el excelente estudio de Granados (1997), donde la autora llega a la misma conclusión a partir de su trabajo de campo. Además, varias de mis propuestas coinciden con sus hallazgos de mitad de la década de 1990.

Un aspecto que se deriva de esta perspectiva es la necesidad de incorporar la óptica de los compradores del comercio en las calles, sus representaciones e imaginarios, algunos de ellos plasmados en los medios de comunicación. Por ejemplo, en los medios de prensa, según Monnet, frecuentemente se confunden los conceptos de informalidad, ambulantes, oficios callejeros, ilegalidad y marginalidad, y se utilizan estas representaciones en función de ideologías políticas o políticas públicas (2005, p. 45)[4].

Estos hechos se desarrollaron en contacto con un segundo proceso, un contexto favorable a la ocupación informal de las calles por causa de la debilidad del Estado, el cual, al no lograr controlar los espacios y no cubrir adecuadamente los servicios públicos, facilitó el surgimiento de nuevos actores al amparo de estas zonas grises. Por ejemplo, la caída de los recursos de los municipios, entre otros elementos, ocasionó graves problemas para la administración de la capital. Arbitrios y tributos impagos, mientras los salarios que pagaban los distritos aumentaban con la espiral inflacionaria, trajeron como consecuencia constantes déficits en los presupuestos municipales, hecho que se expresaba en la deficiente seguridad, calles en mal estado y la acumulación de basura, entre otros problemas. Los municipios fueron incapaces de mantener el orden en la ciudad y hacer cumplir las reglamentaciones urbanas, lo que permitió la consolidación del fenómeno ambulatorio. Este proceso se evidencia en la ambigüedad con la cual se abordó el problema del comercio en las calles: no se supo si reprimirlo, regularlo u obtener beneficios para los municipios por medio de rentas o venta de quioscos. Por otro lado, esto explica la facilidad con la cual se difundió el comercio ambulatorio. La capacidad de hacer cumplir las disposiciones fue, por decir lo menos, muy difícil por causa de la falta de recursos y el progresivo fortalecimiento del ambulante en las calles, gracias al servicio que brindaba y las ambigüedades de las políticas municipales que oscilaban entre la tolerancia, el aprovechamiento y el rechazo[5]. Al ejercer los municipios una política dubitativa por su falta de capacidad para cumplir la ley, los ambulantes, entre otros trabajadores de la calle, lograron organizarse, negociar y proponer soluciones a las autoridades. En pocas palabras, exigieron la presencia de un Estado que respete, les conceda, regule y proteja su derecho a ganarse la vida honestamente. Este contexto facilitó la evolución de las prácticas de los ambulantes. Por ejemplo, Miriam Granados, en una estupenda investigación realizada a mediados de la década de 1990, estableció un itinerario de cómo evolucionaron los ambulantes del centro de Lima. En primer lugar, su estrategia se concentró en permanecer en las calles apropiándose de lugares comercialmente ventajosos; luego pasaron a «otro nivel de estrategias,

---

4 Para una discusión más amplia del concepto «metropolización», véase Bensús (2012).

5 Este tipo de política ambigua también ha sido observada en otras latitudes. Véase Bromley (2000).

las que involucran la coalición o el enfrentamiento con el resto de actores sociales e institucionales, concurrentes en el mismo espacio urbano. Todas estas, estrategias necesarias para garantizar su producción y reproducción» (Granados, 1997, p. 39).

La difusión del comercio ambulatorio, eje de este libro, junto con otras actividades en las calles, no solo causó problemas a las autoridades en cuanto al gobierno de la ciudad. Su impacto mayor fue el cuestionamiento de los imaginarios oligárquicos-criollos de la capital. Entre los años ochenta y la primera década de este siglo se disolvió lo que se consideraba la 'tradición' limeña, sin que surja un nuevo discurso que tuviera la fuerza para homogeneizar la cultura urbana con nuevos símbolos producto de la migración, la crisis y los nuevos actores. Además, este proceso se desarrolló en el momento en que Lima era atravesada por graves problemas de salud pública, ordenamiento, calidad de vida y seguridad. Como plagas bíblicas, una tras otra las dificultades emergían en las calles de la capital, lo que contribuyó a generar una imagen de decadencia urbana y de destrucción que caló muy hondo entre los limeños de esa época.

Un impacto de estas transformaciones, resultado de la crisis económica, la debilidad del Estado central y gobiernos locales, las necesidades de los consumidores y la búsqueda de formas de supervivencia de miles de limeños, es que en este proceso de cambio social se diluyeron, hasta el punto de casi desaparecer, las diferencias de clase, lo que generó una angustia mayor en los imaginarios urbanos. En la década de 1980, con una intensidad no vista antes, todos los sectores sociales, clases baja, media y hasta alta, recurrieron a la informalidad y la venta en las calles para agenciarse recursos. Todos se empobrecieron de una manera u otra, el fantasma de la miseria rondó muchas familias, especialmente en la clase media limeña. En ese tiempo observar a alguien que vendía objetos en la calle no significaba que el vendedor fuera necesariamente un pobre, si por esto entendemos el caso de quien carece de lo necesario para sobrevivir. Muchas personas vendían por razones diferentes a la supervivencia, pero lo relevante es que ocupaban y utilizaban las mismas estrategias de los más pobres de la ciudad. Además, con el empobrecimiento de la época y la gama de estrategias de supervivencia, no era posible distinguir entre un orate, un reciclador de desperdicios, un mendigo, un drogadicto o, incluso, un desempleado en desgracia; a todos ellos se les podía encontrar hurgando entre los basurales. Este proceso fue acompañado de otros más que contribuyeron a hacer de las calles un espacio de conflicto: el deterioro del sistema de transporte urbano y el paulatino desmontaje de las viejas jerarquías de etnia y clase amplificaron la sensación de caos urbano (Martuccelli, 2015, p. 104).

En este angustiante y surrealista escenario, las actividades en las calles fueron perseguidas por diversas causas: salud pública, evasión tributaria, seguridad, etcétera. Sin embargo, algunas de ellas por diversas razones lograron consolidarse

y ser aceptadas por las autoridades. Ciertas actividades en las calles representaban lo que se creía o se 'inventó' como tradición, otras fueron las más eficientes para cubrir la demanda, pero todas, en general, tuvieron que negociar su estatus con las autoridades (Granados, 1997, p. 94). Este proceso se hizo más notorio a partir de la gestión municipal de Alberto Andrade Carmona (1996-2002), quien retomó el imaginario criollo de la capital, no de forma excluyente, sino como base aglutinante de la identidad peruana. Durante su mandato, se logró desalojar a los ambulantes de diversos puntos de la capital, pero esto, como veremos, no significó una mejora en la seguridad. De este modo, el itinerario mostrado sustenta el corte temporal de este libro, cuyo inicio, en el año 1980, coincide con el estallido de la crisis económica y el reinicio de la democracia, mientras que el proceso de conflictos y reconstrucciones se cierra con el discurso criollo plasmado durante el mandato de Andrade a fines del siglo XX.

Más o menos hacia el año 2005, al observar las calles de la ciudad —especialmente en la siempre congestionada avenida Javier Prado— pude apreciar la existencia de un pequeño contingente de vendedores que ocupaban las pistas y que, al amparo de la demora en el tráfico, ofertaban todo tipo de productos. Además, noté que los bienes que ofrecían no eran los mismos a lo largo del día: por ejemplo, mientras por las mañanas y tardes vendían bebidas y algunos alimentos rápidos, al caer la noche vendían juguetes, adornos, flores, etcétera, oferta dirigida a los cansados viajeros que podían llegar a casa con algo con que alegrar la vida a sus familias. Los vendedores conocían perfectamente el mercado y características de sus compradores[6]. Cualquier limeño contemporáneo podría dar fe de esta realidad, más compleja de lo que este libro puede mostrar. Las líneas de transporte son el mercado ambulante que utilizan los vendedores para una gran variedad de productos, suben y bajan todo el día de los vehículos, donde ofertan golosinas y bebidas, pasando por lapiceros, plumones, hilos, folletos, etcétera. El producto más original que se podía obtener en esas calles era un adorno en forma de una carabela de madera de regulares dimensiones, el cual era exhibido por el vendedor a los automovilistas; el objeto en venta más extraño que observé al interior de una unidad de transporte fueron alicates. Recuerdo haber pensado que no creía posible que alguien estuviera pensando: «Me faltan alicates», pero mi escepticismo se derrumbó rápidamente al observar varias manos que se levantaron para solicitar el producto, incluida la mía.

Imaginé que estos vendedores —conocidos como «pisteros»— como veremos más adelante, no solo representaban una incomodidad urbana que detenía o complicaba el transporte público o incrementaba la inseguridad; por el contrario, cumplían una función muy antigua, pero que con los cambios de principios del

[6] En México se registra la misma situación (Mendiola, 2017, pp. 12-18).

siglo XXI se había adaptado a la nueva vida de las grandes capitales: facilitaban la vida de los conductores y peatones, eran una oferta móvil para una demanda igualmente móvil. Con este punto de partida elaboramos un proyecto de investigación multidisciplinario con el objetivo de comprender esta realidad desde su presente, pero sin descuidar su larga trayectoria histórica. Gracias a las facilidades de investigación que la Pontificia Universidad Católica del Perú otorga a los docentes, José Ragas, Martín Monsalve y yo, en el año 2007 presentamos un proyecto de investigación bajo mi dirección, *Los rostros de la calle. Tácticas y supervivencia de nuevos actores sociales en el mundo urbano. Una aproximación (Lima, 1980-2005)*, y una segunda parte, *Rostros de la calle (II). Representaciones audiovisuales y percepción de las actividades informales en Lima (1980-2005)*, en 2008; los cuales fueron generosamente financiados por la Dirección Académica de Investigación (DAI), que hoy funciona bajo el nombre de Dirección de Gestión de la Investigación (DGI). Además, el proyecto contó con el trabajo como asistentes de María Elena Gushiken, Luis Miguel Silva-Novoa, John Sifuentes, Ignacio Vargas Murillo y Raúl Silva, en ese entonces estudiantes de antropología, sociología e historia.

El método de investigación abordó tres frentes simultáneos. En primer lugar, un trabajo de campo destinado a comprender la manera en que se realizaban las labores en las calles. Esto trajo como resultado una serie de entrevistas y material fotográfico dedicado a algunos oficios, como emolienteros, fotógrafos de plazuelas, vigilantes de las calles y vendedores en las pistas. Se decidió entrevistar a estos personajes para recopilar la historia de vida de quienes se dedicaban a actividades de antigua data (emolienteros y fotógrafos) y de otros que parecían haber surgido en las últimas décadas. Un segundo punto fue completar una encuesta acerca de la percepción de los ambulantes en el público en general, organizada de forma tal que cubriera diversas zonas de la ciudad. Los materiales recopilados desde ambos frentes se usan fundamentalmente en la última parte de este libro. El tercer aspecto fue una amplia recopilación documental de fuentes hemerográficas y visuales. Evidentemente el volumen de periódicos y revistas disponibles es demasiado extenso como para pretender revisarlos día por día. Aunque sería lo ideal, es poco viable con los tiempos y costos de investigación contemporáneos. La decisión que se tomó fue revisar los principales diarios entre 1980 y 2001, con un corte cada tres años, especialmente porque coincidía con el año electoral municipal, que usualmente genera mayor volumen de noticias, quejas y exigencias[7]. Este corte permite abarcar más rápidamente el periodo y definir con seguridad una tendencia que, espero,

[7] Lamentablemente, los documentos en el Archivo Histórico de la Municipalidad de Lima (AHML) referidos a mercados y comercio ambulatorio durante este periodo aún no están disponibles, todavía se encuentran en uso en los archivos intermedios.

pueda ser confirmada con investigaciones más detalladas —en el mejor de los casos— o matizada y hasta corregida si se amerita.

Posiblemente una crítica que se podría lanzar, con alguna razón sin duda, es la idoneidad de los periódicos para abordar este tema. En este trabajo los diarios son una fuente muy importante, pero no es la única que se utiliza. También se incorporaron algunos documentos oficiales y entrevistas, especialmente en la parte final, pero, los diarios permiten conocer la percepción del problema y en algunas oportunidades la voz de los actores. En ese sentido, los periódicos permiten acercarnos a los imaginarios urbanos; esos supuestos que «no se cuestionan, lo que se supone que existe, aquellos aspectos y fenómenos y características que se asumen por parte de los sujetos como naturales, porque han sido integrados, entrelazados, en el sentido común» (Lindón, 2007, p. 9). Estos imaginarios tienen capacidad de influir en la conducta de los demás, se construyen «a partir de discursos, de retóricas y prácticas sociales. Una vez construidos tienen la capacidad de influir y orientar las prácticas y discursos, sin que ello implique que quedan inmóviles» (p. 10). Como señala Raúl Silva, los periódicos seleccionan la información, pero

> aun cuando sus líneas editoriales correspondían a posiciones ideológicas divergentes (marxismo y liberalismo), periódicos como *El Diario* de Marka, *La República, El Comercio, Expreso, El Correo* y *Extra*, coincidieron unánimemente en objetar críticamente la presencia de esta nueva población, [migrante y ambulante] siendo relacionados, si no responsabilizados directamente con otros problemas que aquejaban a la ciudad, como su decadencia estética, insalubridad, escasez de alimentos, caos vehicular e inseguridad ciudadana, y por otro lado, con ciertos atributos de carácter socio-económico y étnico, es decir, pobres y provincianos (Silva, 2007, p. 1).

Si bien la información de los diarios puede ser tendenciosa, como señala Silva —quien trabajó varios meses recopilando la información—, esta resulta muy útil para recuperar la vida cotidiana del trabajador de las calles como personaje histórico concreto e individual, con sus datos personales, educación, tipo de ocupación, expectativas sociales y políticas, características del oficio, etcétera (p. 2). Además, los diarios trasmiten la opinión de un sector de la población y ofrecen un vasto y rico testimonio gráfico que ha servido para reafirmar las impresiones que se obtienen desde otras fuentes. Esto no nos libra automáticamente de los peligros, pero es imposible hacer la historia del trabajo en las calles sin recurrir a este tipo de fuentes.

Este trabajo se divide en tres partes y un epílogo que hace las veces de reflexión final. En la primera parte, compuesta de cinco capítulos, se exponen las diversas interpretaciones de la informalidad, las ventas en las calles, las características de los ambulantes y su expansión en el escenario urbano. Además, se analizan las diversas

políticas municipales y su relación con los cambiantes contextos económicos. La segunda parte, compuesta de dos capítulos, desarrolla los imaginarios urbanos y cómo los afectaron los cambios sociales y culturales de la época, dentro de un entorno urbano marcado por la decadencia de la ciudad y el grave deterioro de la calidad de vida. La tercera parte, desarrollada en tres capítulos, analiza las razones de la supervivencia del trabajo en las calles, la presencia de nuevas actividades y la forma en que se negoció su consolidación. Por último, el epílogo reflexiona acerca de las políticas aplicadas por Andrade y su relación con la consolidación de un imaginario criollo.

A principios del siglo XXI, don Luis Bendezú, un anciano cargador de bultos, declaró que trabajaba cerca de doce horas por unos diez soles al día (más o menos tres dólares); él era consciente del abuso, «pero como no hay trabajo no me queda otra que soportarlo. Total, aunque sea los diez soles me alcanzan para alimentar a mis dos pequeños hijos»[8]. Don Luis era un verdadero sobreviviente de las calles y de todas las crisis. Seguro no hay ninguna ciudad en el mundo que se libre de estos problemas, pero más que los hechos mismos, que en algunos casos producen una justa indignación, lo más peligroso es acostumbrarnos a esta situación, asumir que los responsables son las personas y que la vida es siempre así de injusta.

Este libro está dedicado a vidas como la de don Luis, a trabajadores esforzados, honestos, que viven buscándose diariamente el sustento, vidas frágiles que dependen de su ingenio, de su fortaleza y del azar. Si bien es poco probable que don Luis se entere de que es protagonista de una historia mayor —ojalá él o sus descendientes lo sepan algún día— la reflexión que lanzó en la nota, tan simple como conmovedora, es la esencia que guio la escritura de estas páginas: «Imagínese si me enfermo».

8 *La República*, 1-7-2001, «Don Luis Bendezú, el rostro de millones de subempleados marginados de la ley de Trabajo».

Parte I
LA CIUDAD, LA CRISIS Y LOS AMBULANTES

Capítulo 1
Un largo debate
Definiciones del sector informal urbano

Propuestas y discusiones

Según diversos estudios, la preocupación acerca del surgimiento de esta nueva forma de participación económica, el sector informal urbano, comenzó desde los primeros años de la década de 1970, especialmente luego de la publicación de una investigación dedicada a los mercados laborales en el África (Pok & Lorenzetti, 2007). El tema se convirtió rápidamente en objeto de interés académico, especialmente para instituciones como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual desde 1972 buscaba comprender la evolución e impacto del capitalismo en las zonas llamadas periféricas. Desde esa fecha no han cesado de presentarse diversas publicaciones dedicadas a estudiar a este sector, que abarcan una gran dimensión de regiones y de subtemas[1].

La aparición del sector informal urbano más allá de las zonas periféricas, especialmente en Europa y en los Estados Unidos, renovó el interés en comprender sus características. Así, se pueden registrar estudios en diversos lugares del mundo, los cuales muestran que este problema ha dejado de ser exclusivo de las llamadas economías en vías de desarrollo o que sufren de constantes crisis económicas. En América del Sur, países que en la década de 1980 parecían alejados de este tipo

[1] Es imposible dar cuenta de todos los trabajos al respecto, pero algunos de los más valiosos son Pok y Lorenzetti (2007), que hacen una excelente revisión de los conceptos; Perry, Maloney, Arias y otros (2007), que presentan un nuevo análisis donde se revisan las diversas interpretaciones y se discuten sus alcances; Tokman y Délano (2001) y Tokman (2007), que tratan el problema de la seguridad social y las políticas de Estado; Cortés (1988) y Cimoli, Primi y Pugno (2005 y 2006), que discuten los límites del crecimiento económico con relación al sector informal y las exportaciones. Balances bibliográficos muy completos del tema son los de Lazarte (2000), Buren (2007), Salas (2006) y Mejía y Posada (2007). Finalmente, el tema ha sido retomado por Herrle y Fokdal (2011).

de problemas, como Argentina, Chile o Uruguay, por diversas causas, desde la última década del siglo XX, comenzaron a registrar la presencia de un pujante sector informal urbano, lo que motivó una serie de estudios acerca de la economía informal[2]. Un informe del año 2000 reconoce que este problema afectaba en diverso grado a las economías de todo el mundo: el porcentaje de participación del sector informal urbano en el PBI oscilaban entre el 40 y 60% en América Latina, y entre el 8 y 25% en las regiones desarrolladas (Europa, Japón y Estados Unidos)[3].

De este modo, el problema dejó de ser una preocupación exclusiva de los llamados países en tránsito al desarrollo o de desempeño económico por debajo de la media mundial. En el contexto de América Latina, en Argentina —que no padecía del fenómeno masivo de la informalidad— por ejemplo, se incrementó el porcentaje de trabajadores por cuenta propia de 7% de la PEA en 1947 a 12,5% en 1960, 19,4% en 1980, 22,4% en 1991 y 20,3% en el año 2000; incluso el 6,3% de estos trabajadores se encontraba dentro de las ventas ambulantes (Donaire, 2007, p. 58). En Chile, a principios del siglo XXI el sector informal urbano ocupaba el 32% de la mano de obra empleada en el sector urbano, mientras que se registraba un 57% en el caso boliviano[4]. La expansión del fenómeno en regiones desarrolladas, o que no habían sufrido masivamente su presencia, ha contribuido de manera decisiva a que el debate acerca de su surgimiento y características se renueve constantemente.

Se pueden organizar las interpretaciones en tres vertientes[5]. La primera de ellas, de corte estructuralista, fijó su atención preferentemente en la relación existente entre el surgimiento de la economía informal y la producción moderna o capitalista de cada lugar[6]. Como reconoce José M. Candia, esta perspectiva tuvo el mérito de abandonar el concepto de marginalidad propuesto anteriormente por Aníbal Quijano (2003). El peligro de esta última propuesta es que no permite

---

[2] La Cámara Argentina de Comercio (2006) informó hace varios años del preocupante aumento de los puestos fijos de venta callejera. Por otro lado, una nota del diario *La Nación* en el año 2007 señala que eran más de 4000 los puestos ilegales de venta en Buenos Aires, incrementándose en 17,4% la actividad respecto al 2006 (*La Nación,* 11-10-2007, «Denuncian que hay 4057 puestos de venta ilegal en las calles porteñas», http://www.lanacion.com.ar/informaciongeneral/nota.asp?nota_id=952084, fecha de consulta: 17/10/2007).

[3] Excepción hecha de los países en tránsito al desarrollo en Europa (Hungría, Bulgaria, Polonia, Rumania, Eslovaquia y la República Checa) (Kuchta-Helbling, 2000, p. 9).

[4] El caso más extremo era el de las naciones africanas: Uganda, 84%; Gambia, 72%; etcétera. Kuchta-Helbling (2000), considera que en el Perú alrededor de 51% de la mano de obra se encontraba en el sector informal (p. 7).

[5] Granados (1997) las clasifica respectivamente como «enfoque estructuralista», «enfoque neoliberal» y el «enfoque socio-antropológico» (pp. 27-29).

[6] Lazarte (2000) utiliza una visión más económica al centrar su reflexión a partir del aparato productivo, el empleo y la renta, entre otros factores.

establecer la articulación entre el sector informal urbano y el resto de la economía, considerándola un producto anómalo, literalmente 'secretado' por el sistema[7]. La perspectiva estructuralista considera que la incapacidad del sector moderno para absorber la mano de obra y proveer de empleo a la creciente migración campo-ciudad es el factor trascendental que explica el surgimiento de un sector informal urbano (Cortés, 1988, p. 43). Esta propuesta fue enriquecida con diversos estudios que mostraron la funcionalidad y articulación de este sector con el resto de la economía; el sector informal urbano permitía la reproducción a bajo costo de la mano de obra y la producción de bienes y servicios[8]. Como resultado de esta perspectiva, el sector informal urbano se definió como «las pequeñas unidades de producción y distribución de bienes y servicios», generalmente ubicadas en los países en desarrollo, «con manejo de mano de obra familiar, de escasa tecnología y bajo capital» (Pok & Lorenzetti, 2007, p. 8). La insuficiencia de esta propuesta ha sido ampliamente discutida. Los vacíos más evidentes son la ausencia del Estado en el análisis y la hipótesis no siempre verificada de la falta de opciones laborales de quienes se incorporaban al sector informal (Pinilla Cisneros, 2004). Finalmente, esta definición tan restrictiva del sector informal urbano dejaba fuera del campo semántico del concepto a las grandes empresas que decidían subcontratar o mantener parte de sus actividades fuera de la economía formal.

La segunda perspectiva está inspirada en la economía neoinstitucional que enfatiza el costo de transacción en las actividades económicas. En este caso, es un autor de origen peruano, Hernando de Soto, quien realizó uno de los aportes más influyentes, con la publicación de su estudio acerca del sector informal en la ciudad de Lima. De Soto desestima casi totalmente los factores estructurales —como el modelo de desarrollo o el desempeño macroeconómico— y se preocupa del papel del Estado en las economías latinoamericanas de origen colonial y su ineficacia

[7] Aníbal Quijano considera que la evolución del capitalismo produce cada vez más gente excluida de la economía, cuyas actividades informales no cumplen ninguna función dentro del sistema. Su artículo sostiene que el comercio informal, «no obstante servir principalmente a la propia población marginada, parecería también estar vinculado al mercado del proletariado urbano, al de las capas bajas de la pequeña burguesía no-marginal, y aun de los sectores medios asalariados, de bajos ingresos. Sin embargo, en lo fundamental, estas actividades deben contar ante todo con el mercado formado por la propia población marginalizada» (1972, p. 92). Esta propuesta tiende a concebir el universo del sector informal urbano como cerrado y atrapado en su propia lógica, interpretación que no se ajusta con los datos empíricos de los estudios realizados posteriormente.

[8] León Camargo y Caicedo Mora (2005) señalan que la demanda por este tipo de bienes es trascendental: «la demanda proveniente de presupuestos limitados, implica el crecimiento de lo informal ya que los artículos que se obtienen son de baja calidad y a precios cómodos para los reducidos ingresos» (p. 8).

para llevar adelante la modernización económica[9]. Al contrario que los estudios estructuralistas de inspiración marxista, De Soto considera que el Estado ha tenido históricamente demasiada injerencia en la economía y que los gobiernos latinoamericanos han sido manejados por intereses mercantilistas alejados del espíritu liberal que fomenta la libertad de empresa. Por ejemplo, el Estado peruano, caduco y arcaico, desde la segunda mitad del siglo XX se mostró claramente incapaz de ofrecer las reglas apropiadas para dinamizar la economía, dedicándose a proteger por medio de engorrosas barreras legales los derechos económicos de una minoría, la cual siempre se las ingeniaba para mantener fuera del juego a quienes sí eran capaces de tener la iniciativa económica.

La propuesta de Hernando de Soto se nutrió de otras investigaciones desde la década de 1960 dedicadas a las barriadas y su capacidad de autogestión, especialmente los trabajos mundialmente conocidos del arquitecto John Turner (1963) y del antropólogo William Mangin (1967). De acuerdo con Ana María Fernández-Maldonado, Turner visitó Lima entre 1957 y 1965, y mostró al mundo académico que las barriadas no eran lugares solo de delincuencia y marginalidad, y en 1968 Mangin y Turner publicaron un ensayo conjunto en que ensalzaron la lucha de los habitantes por conseguir una propiedad, conservarla y prosperar (Fernández-Maldonado, 2015, p. 5). Ambos autores, especialmente Turner, abogaron por la defensa de este proceso autogestionario ante la ineficiencia de la inversión estatal, antes que la erradicación de las barriadas; el arquitecto afirmó que «el movimiento barrial era un vehículo para el desarrollo local, la integración de la comunidad y, más aún, para la realización personal» (Fernández-Maldonado, 2015, p. 7)[10].

En la década de 1980 y con el progresivo derrumbe mundial del estado de bienestar expresado en la cada vez menor inversión pública, De Soto criticó el costo que supone la excesiva reglamentación y burocratización del Estado, tanto a nivel central como local[11], las cuales dificultan el acceso al mercado y elevan innecesariamente los costos de la formalidad, razón por la cual los actores, en un análisis costo-beneficio, optan por mantenerse fuera de la legalidad[12]. Estos hechos explicaban el auge de la construcción informal, que hacía que los poseedores de

[9] Véase especialmente el capítulo III de *El otro Sendero* (Soto, 1986).

[10] En 1971 Mangin estuvo en Lima y fue entrevistado por la revista *Caretas,* 437, 11-6-1971, «Gringo de barriada».

[11] Para conocer los trabajos influenciados por De Soto, véase Kuchta-Helbling (2000) e Iguíñiz (2008).

[12] La definición más representativa es la de Enrique Ghersi: «Son informales aquellas actividades en las que los individuos, pese a tener objetivos lícitos, se sirven de medios ilícitos para llevarlos a efecto [...] la libertad es la desobediencia civil al servicio de la libertad económica» (1991, p. 403). De aquí se deduce que son informales las actividades, no las personas.

los lotes, ante el elevado costo de las licencias y de la pérdida de horas/hombre de los trámites, optaran por desarrollar su vivienda al margen de las engorrosas regulaciones estatales y no pudieran valorizarla en el mercado.

En ese sentido, la definición de economía informal de Hernando de Soto abarca a las actividades económicas no delictivas que se realizan al margen del ordenamiento jurídico, tanto por desconocimiento como por la incapacidad real de cumplimiento[13]. Sin embargo, como señala Javier Iguíñiz, si la violación del ordenamiento jurídico es económicamente rentable, ¿por qué sería deseable incorporarse a la legalidad? La respuesta del Instituto Libertad y Democracia (ILD) a esta interrogante es insuficiente y contradictoria: porque la informalidad trae demasiados costos, producto de la exclusión de los beneficios de la formalización, reservados a quienes se aprovechan mercantilistamente del mercado (Iguíñiz, 2008, p. 12)[14].

Un aspecto positivo de esta propuesta es que permite recuperar la decisión de los actores, quienes antes de ser solo víctimas pasivas de los factores estructurales de la economía, cuentan con capacidad de elección[15]. Sin embargo, un aspecto de esta propuesta claramente desconcertante y contradictorio es, como señaló Flores Galindo (1988), la ausencia de personas concretas en su análisis. Es paradójico cómo De Soto presenta a los informales como defensores del libre mercado[16], de la iniciativa individual y del progreso, mientras que prácticamente no muestra a ninguno con su nombre y apellido: son personas anónimas. Abundan las denominaciones genéricas: 'el ambulante', 'un dirigente', etcétera.

---

[13] La definición de Bustamante lo resume así: «El no cumplimiento del ordenamiento jurídico por la mayor parte de la población obedece al mal diseño o al mal funcionamiento de dicho ordenamiento. En ese sentido, las actividades informales deben ser apreciadas como el sector visible y hasta sintomático de problemas institucionales que afectan severamente las relaciones entre el Estado y la sociedad civil» (Bustamante, 1990, p. 20).

[14] Tueros y Carbonetto llegaron a la conclusión de que, en el caso de la industria informal, «es la ilegalidad la que aporta beneficios definidos [...] para el industrial informal, el riesgo de la ilegalidad es menor que para el comerciante, mientras que, al mismo tiempo, cumplir con la Ley le significa mayores costos que el comerciante» (1985, pp. 80-81). Además, una investigación del año 2014 para Lima reveló que solo 17% de los ambulantes mencionó las dificultades para obtener una licencia como causa de su decisión de vender en las calles (Castellanos, 2014, p. 23).

[15] Miriam Granados encontró que algunos ambulantes del centro de Lima sí tuvieron opciones laborales, pero se decantaron por el comercio por brindarles mayores posibilidades de ingresos y otras ventajas (1997, pp. 35, 45, 65).

[16] Fernando Iwasaki señala que los grupos populares presentes en estas actividades desde la Colonia, «han ido formando en sus respuestas económicas las bases de la verdadera revolución, la del mercado libre y el capital» (1989, p. 166). Enrique Ghersi le agrega tintes proféticos: «La informalidad no es otra cosa que la revolución industrial que sucede en América 100 años después que en Europa. No es otra cosa que la nueva revolución industrial de América Latina» (1991, p. 424).

Tal vez se podría objetar que los entrevistados tienen derecho a conservar su anonimato, pero en el propio diseño de las encuestas aplicadas como base de su estudio se nota esta práctica contradictoria: «Nuestro censo se limitó a contar el número de vendedores y el de puestos y a clasificarlos según el giro principal del negocio, el tipo de infraestructura y el sexo y la edad de los vendedores. Puesto que solo se hizo por observación, la edad es un dato puramente referencial, basado en la apreciación de los censadores» (Alonso, 1989, p. 28). Entre las personas que se ganaron el derecho a tener un nombre en el libro se encuentran los traficantes de terrenos, los ladrones, los dirigentes detenidos por terroristas y otras personas que no se destacaban por ser partidarias del libre mercado[17]. Los anónimos son los comerciantes, los artesanos, pequeños talleristas y trabajadores, justamente aquellos a quienes probablemente sí les hubiera gustado ser reconocidos como emprendedores, con su nombre y apellido.

Así, al no reconocer su identidad como actores de su propia historia y mostrar su existencia solo a partir de la observación y de controladas entrevistas grupales, esta propuesta no permitió que la experiencia de los propios interesados fuera incorporada adecuadamente. Para el ILD el drama de estas personas consistía en ser víctimas de un Estado mercantilista que obstruía su progreso; sus nombres o condiciones de vida importaban mucho menos. Por ello las políticas que se derivan de esta propuesta se concentran en la eliminación de las diversas barreras burocráticas que limitaban la participación en el mercado, especialmente en cuanto a trámites para obtener licencias, acceso a la propiedad y derechos laborales, con la confianza de que estos cambios permitirían la inclusión de los informales en la economía de mercado, supuesta aspiración de estos empresarios en potencia, punta de lanza de la revolución capitalista[18].

Una tercera vertiente de interpretación surgió de la comprobada insuficiencia de eliminar los costos de la formalidad para resolver el problema del crecimiento del sector informal urbano[19]. La aparición de este fenómeno en diversos países, incluso en el bloque de los considerados modernos y desarrollados, puso en jaque

---

[17] Véanse las fotografías en Soto (1986, pp. 145-168).

[18] Bustamante (1990) considera que «la informalidad y sus externalidades negativas tenderán a reducirse en la medida en que se vaya conformando, mediante reformas institucionales básicas, un Estado abierto a la participación económica de todos y dispuesto a facilitar el desenvolvimiento del mercado» (p. 20).

[19] En 2005 se consideraba que en quince países de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela), el 50,3% del empleo no agrícola se encontraba en el sector informal. El mismo indicador fue de 47,5% en 1990 y de 49,7% en 2000, década en la cual las reformas liberales en América Latina introdujeron cambios que disminuyeron las barreras de acceso al mercado (Tokman, 2007, p. 98).

la hipótesis de los costos de transacción y la posibilidad de elección como fundamentos de la aparición del sector informal. Además, una deficiencia de la propuesta institucionalista respecto a otras es que no solo dejaba de considerar las variables macroeconómicas internacionales y locales, sino que también prescindía de la propia evolución del capitalismo mundial y su adecuación a los diversos entornos locales e internacionales[20].

Al partir más de la crítica que de la propuesta, no existe una etiqueta claramente definida para esta corriente de interpretación, que podríamos llamar multicausal. Uno de sus atributos, desarrollado simultáneamente por diversos autores, es enfocar el problema de la informalidad como un fenómeno integral, que no incluye a la dimensión económica aislada de otros factores de la realidad. Por ejemplo, hoy en día está claramente establecida la relación entre la informalidad y los circuitos formales de la economía; se trata de una larga cadena de dependencias mutuas y no de economías paralelas (Herrle & Fokdal, 2011, p. 5). Desde esta perspectiva, algunos autores se refieren a la informalidad como un sistema que incluye diversas áreas, como la economía, la estructura familiar, los patrones de asentamiento urbano, las formas de vida, la política, entre otros (p. 6).

Desde los estudios dedicados a la economía informal se destaca el continuo que conforman con la formalidad. Así, diversas investigaciones han puesto en evidencia que las empresas formales recurren parcialmente a la informalidad en sus actividades para lograr «un mayor grado de adaptación a las fluctuaciones de la demanda y minimizar sus costos» (Cortés, 1988, p. 47). Parte de este proceso consiste en la subcontratación de actividades como una forma de atenuar los riesgos de la actividad en época de desequilibrios económicos. De este modo, la informalidad no es solo una elección del actor sino también es el resultado de la transformación de la propia empresa capitalista, la cual se encuentra vinculada con la informalidad hacia atrás y hacia adelante del proceso productivo. Según Cortés, si utilizamos la definición de Hernando de Soto y sus colaboradores, corremos el riesgo de no diferenciar actividades informales de tipo capitalista —cuyo objeto es la acumulación y que tienen como característica ser parte de una estrategia para enfrentar las dificultades— de aquellas otras actividades informales con objetivos diferentes, como la supervivencia en medio de la crisis, y que pueden estar relacionadas con la actividad formal como productores de insumos, bienes y servicios (p. 48). La conclusión que se puede extraer de este trabajo es que el sector informal,

[20] Ciertamente la región no tuvo un comportamiento homogéneo. Los países andinos centrales, como el Perú, Bolivia y algunos lugares de Centroamérica y México sufrieron un aumento del sector informal urbano; mientras que en Argentina, Chile y Brasil disminuyó (Tokman, 2007, p. 100). En el caso peruano una mejor aproximación teórica en Babb (2008, pp. 193-200).

tal como se definía en la década de 1980, reunía demasiadas actividades disímiles no solo en cuanto a su tipo, sino en cuanto su racionalidad económica, su origen y su relación con la llamada economía formal.

Víctor Tokman y Manuel Délano también han insistido en este tema al señalar que parte del sector informal urbano está compuesto de actividades cuya lógica es de supervivencia, en economías en las que el 'buen' empleo no es suficiente para la oferta laboral. En países donde no hay seguridad social o que tienen un extendido desempleo, las personas buscan sus propias soluciones, «produciendo o vendiendo algo que les permita obtener algún ingreso para vivir» (Tokman & Délano, 2001, p. 12)[21]. Una segunda lógica estaría compuesta por la evolución de las empresas capitalistas que reducen sus costos con la subcontratación y responden de esa manera a las exigencias del mercado. Así, en el caso del Perú, para 1996, luego de las reclamadas reformas laborales, los trabajadores asalariados sin contrato llegaban al 40%; mientras en Argentina y Colombia eran 32% y en Chile eran 16%[22]. En los últimos años, Tokman ha vuelto a insistir en el problema del empleo adecuado, el cual no incluye únicamente los beneficios reconocidos por la legislación internacional, sino también la seguridad de tener empleo en el futuro. En su estudio se señala que la proporción de trabajadores con más de diez años de antigüedad en un empleo «fluctúa entre el 31,5 y el 52% en los países europeos y entre el 10 y el 21% en los latinoamericanos [...] los rangos se invierten en la franja de trabajadores con menos de un año de antigüedad, que oscila entre el 10 y el 15% en los países europeos y entre el 27 y el 51% en los latinoamericanos» (Tokman, 2007, p. 95). Estos indicadores son muy reveladores del problema de la subcontratación e inseguridad laboral en América Latina y de los efectos concretos de la flexibilidad en la legislación.

De este modo en los años noventa en el Perú, y en otros lugares de América Latina, la informalidad también se produjo por otras causas: la flexibilidad laboral y la consecuente inseguridad del empleo en el sector moderno de la economía. Las reformas laborales permitieron flexibilizar las condiciones laborales en favor del capital, lo cual se hizo con el objeto de dinamizar el crecimiento económico, pero en los siguientes años sus efectos fueron la informalidad en las relaciones laborales y

---

[21] Los datos de la investigación muestran que entre 1980 y 1990 en América Latina 3,5 de cada diez puestos de trabajo surgieron por cuenta propia, contribuyeron más que el sector público (1,5), moderno (1,5), microempresas (2,5) y servicio doméstico (1). Hay que resaltar que en esa década comenzaron a aplicarse las medidas de liberalización comercial y laboral exigida por los representantes de la escuela neoinstitucional de economía, decisiones que afectaron gravemente la economía de los sectores populares.

[22] Se debe añadir que Tokman y Délano también consideran los factores legales y de costo de transacción en el surgimiento de la informalidad (2001, p. 17).

la reducción de opciones adecuadas en el sector moderno y formal de la economía. Frente a ello, el sector informal ofrecía la posibilidad de autogenerarse un empleo probablemente 'más seguro', que permitía que el trabajador no se encuentre expuesto al despido, usualmente aplicado como parte de la estrategia de adecuación de la empresa al entorno económico[23].

Una limitación de este enfoque, que apunta básicamente a la creación y aplicación de políticas de Estado, es que al centrarse en el trabajador y sus condiciones laborales, y no en el tipo de actividad, tiende a eliminar las diferencias entre las diversas características del sector informal urbano, concentrándolas en el empleo 'típico' o 'normal' y el 'precario' o 'atípico' (Pok & Lorenzetti, 2007, p. 8)[24]. Desde esta propuesta, la informalidad no solo estaría compuesta por las actividades que 'tradicionalmente' han sido consideradas parte de ella, sino también por las medidas en las que incurren las empresas para la subcontratación de trabajadores, la cuales colocan al trabajador en una relación laboral carente de seguridad. Lo que caracterizaría al sector informal urbano es la distancia entre un modelo internacional de empleo 'decente' (de acuerdo con las normas de la OIT) y otro 'precario', que podría ser autogenerado o producto de una relación laboral legal, pero que desconoce derechos tales como la seguridad social o beneficios adicionales[25]. La ventaja de esta propuesta es que permite analizar el problema desde sus distintas vertientes: Estado, economía y actores. La desventaja es que por su interés en la determinación de políticas públicas tiende a eliminar las diferencias internas del sector informal urbano, simplificando en demasía la lógica de los actores y el desempeño mismo de cada actividad (Lazarte, 2000; Ochoa, 2004; Uribe & Ortiz, 2004; Buren, 2007).

Se puede concluir que, a pesar de las atingencias señaladas, desde la perspectiva de la tercera vertiente multicausal la informalidad sí tiene relación con el desempeño macroeconómico, la evolución del capitalismo tanto a nivel internacional como local y la legislación que regula la actividad económica. Una variante interesante de esta última perspectiva se encuentra presente en el informe del Banco Mundial. En ese documento se reconoce que la informalidad «no es particularmente más elevada

[23] Alejandro Toledo considera que durante la década de 1990 los costos en las empresas fueron reducidos por medio del despido de trabajadores (1991, p. 77). Un aporte muy sugerente de Tokman es que existe una estrecha relación entre producto per cápita e informalidad consistente: a menor producto per cápita, mayor porcentaje de sector informal urbano (Tokman, 2007, p. 100).

[24] Es parcialmente correcto que el empleo en el sector informal urbano es de menor 'calidad' que en el sector formal. Por ejemplo, en 1988 solo el 17,2% de los trabajadores del sector informal urbano aportaban al seguro social de salud (Carbonetto, Hoyle & Tueros, 1988, II, p. 384).

[25] Tal propuesta proviene de Alejandro Portes, quien definió al trabajador informal como aquel que carecía de cobertura social (citado por Tokman, 1991, p. 52).

en América Latina y el Caribe con respecto a otros países en desarrollo con ingresos per cápita similares» (Perry y otros, 2007, p. 1). Además, justamente por el crecimiento mundial del sector informal urbano en la década de 1990, luego de las reformas liberales se hace necesario abordar nuevamente la definición del sector, las causas de su aparición y su difusión. La definición que proponen intenta reconciliar las diversas visiones, aunque mantiene un sesgo neoinstitucional: «Se considera a la informalidad como una manifestación de las relaciones entre los agentes económicos y el Estado que, según la literatura económica, desempeña una función importante en cuanto a mitigar las fallas del mercado, asegurar el suministro de bienes públicos y mantener condiciones para la igualdad de oportunidades» (p. 1).

El reconocimiento de que existen factores limitantes para la participación en el mercado originados en la deficiente legislación estatal, es claramente insuficiente para comprender el fenómeno de la informalidad, así lo reconoce el informe emitido desde el propio Banco Mundial. Si bien es cierto que en el sector informal urbano hay mucho de 'escape' de la formalidad bajo la lógica costo-beneficio, esta se produce no solo por el exceso de reglamentación y su imposibilidad de obedecerla, sino por la escasa capacidad del Estado para hacer cumplir el ordenamiento jurídico, creando zonas liberadas del control de la autoridad y que se convierten en la frontera que cruzan los agentes económicos de ida y vuelta. De este modo no sería solo el exceso de reglamentación la causante de la informalidad sino también la incapacidad de aplicarla, es decir, la ausencia del Estado[26].

Otra conclusión del documento es que el sector informal es sumamente heterogéneo, de manera que es difícil distinguir en todos los casos entre exclusión o 'escape'[27]. Así, se establecen dos grupos: los trabajadores informales independientes y los trabajadores informales asalariados. En el primer sector[28] se incluye a los propietarios de microempresas, choferes de taxi, artesanos, vendedores callejeros, etcétera[29]. En el segundo sector se localizan los empleados domésticos, trabajadores familiares sin sueldo, subempleados de empresas formales, etcétera[30]. La importancia de esta división es que permite reconocer que el nivel de autoelección entre un sector y otro es diferente, como también la valoración de cada actividad. Por ejemplo,

[26] Martuccelli señala que el aumento de la informalidad es «indisociable de la profundidad de la crisis económica de la década de los ochenta» (2015, p. 109).

[27] Lazarte considera que fueron especialmente los antropólogos y sociólogos quienes se encargaron de mostrar la presencia de esta característica (2000, p. 13).

[28] Este grupo ocupa más de 35% del empleo urbano en el Perú, menos de 20% en Chile, Argentina, Brasil y Uruguay (Perry y otros, 2007, p. 5).

[29] Para una definición de este tipo de actividad, véase Mendiola (2017, pp. 16-17).

[30] El sector corresponde a 17% en Chile, más de 40% en Perú, México, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Paraguay (Perry y otros, 2007, p. 5).

son los trabajadores independientes los que tienen una tendencia a participar en la actividad de manera voluntaria, mientras que los asalariados informales no tienen mayor capacidad de elección: «En promedio, estos trabajadores no deciden por sí mismos permanecer fuera de los contratos formales ni de las instituciones de la seguridad social, y preferirían tener un trabajo equivalente en el sector formal. En estos casos, la exclusión y no el escape de la informalidad parece ser la razón por la que se encuentran actualmente en el sector informal» (Perry y otros, 2007, p. 6).

Una valiosa conclusión que se puede extraer de esta perspectiva es que entre los factores que no permiten un adecuado funcionamiento del mercado se encuentran las deficiencias en la formación del capital humano. Muchos trabajadores prefieren el empleo por cuenta propia en condiciones en que el sector formal no les asegura ingresos adecuados ni constantes[31], situación que se agrava en contextos de depresión económica o de inestabilidad. Esta puede ser la razón de la constante presencia de la informalidad a lo largo del tiempo. Como se puede notar en la historia de muchos países, las actividades fuera del ordenamiento legal han estado presentes constantemente, y en el Perú, por lo menos desde la época colonial al presente. Desde esta perspectiva, la informalidad es un espacio generado para la negociación y la agencia de los individuos, un área compuesta de un continuo entre la formalidad y la informalidad, con grados entre sí, que se convierte en un modo de vida ampliamente difundido en las ciudades capitalistas globalizadas (Herrle & Fokal, 2011, p. 7). Su característica es reunir un conjunto de actividades económicas, sociales, culturales y políticas que permiten la relación entre la sociedad y el Estado fuera de los ordenamientos legales vigentes, pero que, a su vez, usualmente permiten su negociación y reformulación.

En el Perú, a partir de la segunda mitad del siglo XX la intensa movilidad social y los cambios producidos por la modernización y las reformas contribuyeron a que el espacio de la informalidad urbana se amplíe sustancialmente. Es en ese contexto, especialmente entre 1975 y 2000, cuando el fragmento del sector informal urbano compuesto por trabajadores independientes se amplió (Perry y otros, 2007, p. 16). Además, la formalidad se vio afectada por factores endémicos no fácilmente cuantificables, como la discriminación racial y de género, lo que hizo aún más frágil el empleo formal y fomentó la difusión de la informalidad (Yamada, Lizarzaburu & Samanamud, 2012).

[31] En otros casos, como Santiago de Chile, se ha encontrado que las ventas ambulantes permiten un nivel de ingresos por encima de los salarios mínimos del sector formal (Prealc, 1988, p. 27).

La discusión sobre el sistema informal urbano en el Perú

En el caso peruano también tenemos varias tendencias de interpretación del fenómeno de la informalidad. Una de las primeras reflexiones desde el punto de vista sociológico fue publicada por Raúl Guerrero de los Ríos y Abelardo Sánchez León (1977). En este trabajo se afirma que la informalidad, representada por el autoempleo, el ambulante, el servicio doméstico y otras actividades, es causada por la incapacidad de absorción de mano de obra de la economía (pp. 50-51). Jorge Osterling y otros autores se interesaron tempranamente en la organización de los ambulantes, y analizaron algunos sectores en particular, como la venta de ropa (Osterling, 1979; Osterling, Althaus & Morelli, 1979).

La siguiente mención importante, aunque no circunscrita solo a la informalidad, es el clásico estudio de José Matos Mar. Él consideraba que el proceso de crecimiento demográfico ocasionó una

> presión de mayorías sobre la estructura del Estado, para obtener una mayor participación en los asuntos nacionales y en los beneficios de la modernidad, se opone a la rigidez excluyente del aparato institucional y su ordenamiento jurídico, y a la inadecuación del sistema a las nuevas circunstancias. En este enfrentamiento las estructuras de la cultura, la sociedad y el Estado resultan desbordadas y se revelan obsoletas. El desborde generalizado se expresa así bajo la forma de una implícita desobediencia civil de las masas en ascenso, que se limitan, por ahora, al cuestionamiento pacífico de la ley en los vacíos de poder generados por la crisis económica y la debilidad gubernamental, y que derivan a la violencia cada vez que el Estado y la institucionalidad intentan recuperar el control mediante el uso de la fuerza (Matos Mar, 1984, p. 19).

Matos Mar propone que el desborde se produjo por el vacío de poder resultado del debilitamiento del gobierno, no lo considera el producto de la agencia de los sectores populares o una consecuencia de la combinación de factores económicos, sociales y políticos. Sin embargo, su visión contribuyó a destacar los aspectos positivos del proceso al enfatizar la dura brega de los migrantes —sector que hacía gala de una gran creatividad y espíritu emprendedor— en medio de un entorno desfavorable. El jefe de familia presente en las actividades del sector informal urbano es «un hombre múltiple que día a día tiene que hacer frente a todos los problemas, haciendo gala de su ingenio y creatividad» (1984, p. 60). La interpretación de Matos Mar considera que el fenómeno de la migración, la «andinización» de Lima y la informalidad son parte del mismo proceso de construcción de una nueva sociedad peruana que emergía desde su base, desarrollo que carecía de solución de continuidad desde la época colonial, transcurrió por la etapa republicana y cuya

última fase se gestaba en Lima[32]. Este esfuerzo terminaría por construir un nuevo rostro del Perú, que dio fin al viejo Estado oligárquico-criollo. En la reedición de su texto del año 2004, su reflexión señala que las clases dirigentes criollas no fueron capaces de dirigir esa energía hacia la construcción de un nuevo Estado, al mismo tiempo que la profundización de la crisis económica, la violencia senderista y el éxodo de peruanos alteraron el escenario, lo que causó el fracaso del proceso (Matos Mar, 2004, pp. 118-119)[33].

La primera corriente que realmente llegó a producir resultados sistemáticos, fruto de la investigación empírica y del conocimiento teórico, fue liderada por Daniel Carbonetto desde inicios de la década de 1980. La principal publicación que reúne sus diversos aportes salió a la luz en 1988, dos años después del texto de Hernando de Soto, pero sus primeros trabajos datan de 1982. Esta propuesta se puede identificar como estructuralista, dado que concentra su atención en los factores de estas características que explican el surgimiento del sector informal urbano. Así, se señala como una de las principales causas del proceso la incapacidad del sector moderno de la economía para absorber el exceso de mano de obra (Carbonetto, Hoyle & Tueros, 1988, I, p. 13). Además, el segmento de población que optaba por esta vía de supervivencia provenía de hogares más pobres, con mayores responsabilidades familiares y menor nivel de calificación educativa y laboral (Carbonetto, Hoyle & Tueros, 1988, I, p. 65; Flor, 2000, p. 66). De hecho, según cálculos para la ciudad de Lima a fines de la década de 1970, no menos del 64% de los informales eran migrantes de origen nacional, con un nivel educativo considerado bajo, pues solo el 37% había cursado secundaria y la mitad únicamente primaria (Carbonetto, Hoyle & Tueros, 1988, I, pp. 126, 137). Esta perspectiva centrada en los factores estructurales no incorpora adecuadamente la capacidad de elección de los agentes, subvalora el rol de la legislación y, factor que pasa desapercibido, enfatiza como conclusión los mismos prejuicios de la opinión pública sobre este tipo de actividades: define a las personas en el sector informal urbano como pobres, migrantes y con baja educación, sin distinguir matices, por ejemplo, de género.

[32] Para un análisis actualizado de la discusión sobre el tema véase Sandoval (2000).

[33] Sinesio López, en el comentario a la edición de 2004, señala que entre los factores que contribuyeron al fracaso de la democratización de la sociedad peruana se encuentran no solo la incapacidad de la izquierda para superar las ambiciones personales y partidarias, sino «la carencia de una base material y de un piso económico más o menos sólido que le diera consistencia [...] su fracaso no fue solo político sino que obedeció también a la incapacidad de la economía para integrar a la producción y al consumo a las clases sociales movilizadas que buscaban integrarse al Estado y a la política democrática» (Matos Mar, 2004, pp. 223-225).

La segunda corriente interpretativa corresponde a los neo institucionalistas del ILD, dirigido por Hernando de Soto, la cual ya fue comentada anteriormente[34]. Vale la pena señalar que en los últimos esfuerzos de esta perspectiva se ha insistido en la necesidad de crear reglas de juego que permitan que los pobres logren capitalizar sus propiedades en el mercado, tal como, se supone, los países desarrollados permitieron en su momento que se consoliden los derechos fundamentales de propiedad, base del desarrollo del capitalismo y del progreso. Desde esta perspectiva se asume que los pobres ya cuentan con un ahorro visible y tangible en las propiedades y bienes que poseen, pero que sin los derechos adecuadamente definidos esos bienes no pueden convertirse en capital (Soto, 2000)[35]. Sin embargo, estudios realizados luego de las reformas de mercado y de la aplicación de la simplificación administrativa del Estado, sugerida y apoyada por el ILD, muestran que el impacto de la titulación en cuanto a la extensión del crédito y las hipotecas es irrelevante, lo que demostró empíricamente que el supuesto del cual parten los análisis del ILD era insuficiente (Iguíñiz, 2008, p. 27; Fernández-Maldonado, 2015, p. 15).

Una de las razones de la popularidad de las ideas de De Soto es el formato en el que se presentan sus propuestas, por medio de publicaciones más orientadas a la difusión que al debate académico. Otra de las razones, que sí es más profunda, es que el libro citado presenta la intensidad de la relación informalidad-pobres-propiedad. Aunque se puede demostrar el vínculo estadístico entre estos factores, la explicación de su correlación no necesariamente es correcta[36]. Si bien es cierto que muchos de los pobres en el sector informal urbano poseen propiedades que podrían ser la base de su incorporación al mercado, son más quienes no las poseen, y para quienes sí cuentan con ellas, las instituciones financieras no necesariamente se las valorizarían adecuadamente. El tercer factor atractivo del texto es el mito del éxito. Si bien se pueden citar múltiples casos triunfantes de empresarios y agentes económicos

[34] En 1989 Carlos Zuzunaga criticó la propuesta del ILD de aplicar la simplificación legal para disminuir paulatinamente la informalidad. Su opinión era que el Perú *real* se encontraba en las actividades realizadas fuera del marco legal por razones históricas y culturales (*Expreso*, 18-9-1989, «Informalidad con libertad y democracia»).

[35] Javier Iguíñiz cuestiona con evidencia empírica esta suposición, añadiendo que la propuesta de De Soto asume objetivos estrictamente económicos entre quienes poseen bienes o empresas en el sector informal urbano. Este 'descuido' de los aspectos sociales y culturales (en realidad es una omisión funcional a su estudio), no le permite comprender realmente el problema (Iguíñiz, 2008, pp. 17-18). Antonio Caria también cuestiona la relación titulación-hipoteca-progreso (2008, pp. 25-29); por último, Lissette Aliaga (2003) señala que la propuesta de De Soto omite la importancia del capital social, enfocándose en aspectos solo económicos del fenómeno.

[36] Hay algunos casos en contra de esa correlación; por ejemplo, en un estudio dedicado a las ventas callejeras en Colombia, el 79% de los vendedores residían en viviendas arrendadas (Medina Muñoz, 2005, p. 49).

que emergieron del sector informal, puede ser discutible si estos ejemplos son representativos de la actividad de todo el sector informal urbano. Por ejemplo, según los estudios que hemos visto, también deben ser considerados como parte del sector informal los asalariados y las empleadas domésticas. ¿Acaso estos casos pueden ser representados por el éxito en las otras áreas del sector informal urbano?

Una tercera propuesta está representada por los antropólogos y sociólogos —ya no economistas— interesados no solo en el origen y características económicas del sector, sino en los aspectos culturales y sociales de la actividad. Así, Jürgen Golte y Norma Adams (1987) y especialmente Adams y Néstor Valdivia (1991), realizaron investigaciones con el objeto de comprender los recursos culturales que los migrantes nacionales desarrollaban en su inserción social y económica en la ciudad. Uno de los aportes de esta perspectiva reside en el reconocimiento de que los agentes económicos no siempre actúan bajo la lógica de la acumulación de tipo capitalista[37]. En muchos casos, el objeto del funcionamiento de la unidad productiva es la supervivencia, la cual es posible gracias a las redes de parentesco[38]. Desde esta perspectiva, la aparición de la informalidad no se debe únicamente a la falta de oportunidades laborales o al cálculo costo-beneficio, también se debe al reconocimiento de una demanda urbana insatisfecha (Adams & Valdivia, 1991, p. 26)[39].

En esta línea de interpretación se encuentra el trabajo de Susana Pinilla Cisneros (2004), dedicada desde hace varios años al estudio y apoyo al sector informal urbano en el Instituto de Desarrollo del Sector Informal (Idesi). Su tesis de licenciatura en Antropología estudia los casos de aquellos informales que son definidos como exitosos, con el aporte indudable de tratar de incluir la propia voz de los actores. La condición de 'éxito' aplicada por Pinilla incluye a los agentes económicos que tengan uno o varios negocios en funcionamiento por más de diez años, que hayan acumulado patrimonio y logrado una mejora tangible en los niveles de vida familiar. Los agentes no se perciben a sí mismos como marginales, informales o

[37] Tokman reconoce que la empresa informal no siempre maximiza las utilidades sino los ingresos, constituyendo un «modo informal de producción» (1991, p. 45); de igual modo Lazarte considera que la constatación de esta característica en el sector informal urbano es uno de los aportes conceptuales más importante para el debate (2005, p. 14).

[38] La decisión de ser formal o informal viene luego de superar el umbral de la supervivencia: «Obligados a hacer empresa en condiciones de pobreza y precariedad económica, una vez que logran acumular y desarrollarse recién se plantea la necesidad formalizar su actividad» (Adams & Valdivia, 1991, p. 28).

[39] La misma conclusión se encuentra en Valerín y Chinchilla (2012). Para México, Mendiola (2017, p. 21).

microempresarios, considerándose mejor representados, de acuerdo a la autora, con términos como «empresarios populares» o «emprendedores emergentes»[40].

La metodología aplicada por Pinilla tiene el defecto de intentar caracterizar al sector informal a partir del grupo más exitoso (y minoritario). Pablo Macera, en el prólogo a la edición de testimonios de empresarios populares publicados por Idesi, señala que presentar el éxito de los agentes económicos del sector informal urbano se sustenta en el imaginario social que exige triunfadores, «de tal modo que muchos científicos sociales peruanos han mutilado su capacidad de observar los procesos de exclusión social. Cuando por el contrario, al interior de la informalidad existe una progresiva diferenciación social, de un lado los informales exitosos y del otro, aquellos de ingresos vulnerables» (Idesi, 1992, p. 21).

Otra propuesta destacada es la desarrollada por Lissette Aliaga. Sus trabajos utilizan ampliamente el concepto de «capital social» para comprender el sector informal urbano y especialmente el fenómeno ambulatorio (Aliaga, 2002a, 2002b, 2003). Sus aportes enfatizan que las redes de solidaridad son parte importante de ese capital, el cual, del mismo modo que la infraestructura, recibe inversión y mantenimiento (ver también Di Laura, 2016, p. 9). Desde esta perspectiva, el sector informal urbano se caracterizaría por un uso intensivo de este tipo de capital social, el cual «puede ser expresión del debilitamiento de los nexos con otros agentes externos, poniendo en evidencia una situación de fragmentación o de exclusión en el acceso a recursos e información en otros ámbitos sociales» (Aliaga, 2003, p. 113). Su trabajo recalca la enorme heterogeneidad del sector, en el cual «un reducido, pero significativo porcentaje alcanza niveles de acumulación» (Aliaga, 2002a, p. 10)[41]. La relevancia de los aportes de Aliaga consiste en el estudio específico de una actividad que durante mucho tiempo fue considerada la cara más visible de la informalidad: la venta ambulatoria. Su propuesta considera que el comercio ambulatorio es una «actividad que es parte de un sector económico productivo marginal o informal que expresa una de las estrategias de sobrevivencia de los sectores populares» (Aliaga, 2002a, p. 11).

Otro trabajo más reciente encontró que el 87% de las mujeres iniciaron su labor de ambulantes con el apoyo del cónyuge, familiares o amigos; algunas incluso aprendieron el negocio gracias a su entorno familiar (Beltrán y otros, 2016, pp. 72-73). Sin embargo, muchas veces el apoyo es solo moral, pero se le considera de gran valor. El 53% de las ambulantes entrevistadas recibió este tipo de soporte,

[40] Una crítica acerca de las diversas maneras de interpretar el éxito del sector en Grompone (1990, 1985).

[41] Matos Mar considera que alrededor de 16% del sector podría ser definido como «emergente» (1991, p. 240).

mientras al 17% le tocó este tipo de ayuda conjuntamente con algún incentivo económico. Uno de los testimonios es bastante claro al respecto:

> Mi suegra me apoyó incentivándome, ya que económicamente estaba bien mal porque me había separado del papá de mis hijas y me había quedado en nada, porque mi casa se quemó y solo quedó terreno. Mi suegra vino y me habló, me dijo que una mujer podía salir adelante sola, me habló de su experiencia, que había sacado adelante a sus hijos sola sin papá, y me regaló una mesa con un exprimidor de naranja, y de ahí yo lavé ropa y junté capital para comprar naranja (Beltrán y otros, 2016, p. 73).

El caso de los ambulantes

De este modo llegamos al estudio de una de las actividades más representativas del sector informal urbano: la venta ambulatoria. Esta actividad no solo es realizada por personas que cuentan con un bajo capital físico —que no necesariamente coincide con el volumen de capital social—, incluso en el límite de la supervivencia; también es ejercida por comerciantes con mayor capital debido a que la actividad no siempre se realiza de manera itinerante, lo cual permite la ampliación del capital físico. Esta actividad se caracteriza por la «venta de bienes y servicios en la vía pública, a diferencia del comercio establecido, que se desarrolla en locales privados» (Alonso, 1989, p. 23)[42]. La venta callejera ha motivado diversas reflexiones, especialmente para comprender su papel dentro del sector informal urbano; se le ha considerado como «actividad refugio» realizada por personas que no pueden integrarse a la economía formal en condiciones ventajosas y que distribuyen productos de las empresas modernas, lo que asegura su supervivencia (Toledo, 1991, pp. 96-99); o también como una forma exitosa de satisfacer la creciente demanda urbana (Arellano, 1991). Además, se ha establecido que los vendedores ambulantes tienen una rápida y eficaz percepción en los cambios en la demanda, es decir, desarrollan un marketing 'intuitivo' que les permite adaptarse a las transformaciones. Esto es posible porque en muchas oportunidades los diversos pasos entre la planificación y la ejecución de un negocio son realizados por la misma persona, lo que facilita la adaptación a los cambios (Saldarriaga y otros, 2016, p. 164).

[42] Más adelante, en el mismo texto, Alonso modifica su definición para adecuarla un poco mejor a los esquemas del ILD: «Definimos al comercio ambulatorio como el conjunto de establecimientos que por la naturaleza de los bienes y servicios que venden, podrían ser conducidos con mayor beneficio en un local privado, pero que sin embargo se conducen en la vía pública» (p. 25). De este modo, aquellos vendedores de bienes y servicios cuya única posibilidad de supervivencia se encuentra en ocupar las calles, sin elección por el giro y condiciones de la actividad, no son motivo de análisis: son los perdedores del sector informal urbano.

Fuera de nuestras fronteras hay tres casos destacables en los cuales existe una importante reflexión académica para comprender el problema: México, Argentina y Colombia. En el primer caso, el problema comenzó a estudiarse especialmente a partir de la década de 1980; pero, como señala José García Guzmán, el año clave fue 1982, dado que la crisis mexicana causó una súbita elevación del desempleo y, como consecuencia, un incremento de la población ubicada en el sector informal urbano, especialmente en el sector de las ventas callejeras en el área de la ciudad de México (García Guzmán, 2001, p. 80)[43]. Los diversos estudios y programas aplicados, especialmente el Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública de la ciudad de México, reconocieron que el problema tenía varias dimensiones, que tienen como inicio la falta de planificación y orden urbano para lograr un crecimiento armónico de los servicios, hasta la presencia de una demanda que no era abastecida adecuadamente por los comercios formales. Siguiendo con el interesante trabajo de García Guzmán, él propone clasificar a los vendedores ambulantes a partir de tres criterios: la forma económica de operar, el lugar de actividades y la infraestructura utilizada. De este modo se obtienen hasta siete categorías: vendedores de puestos fijos, semifijos[44], en vehículos rodantes[45], en vehículos motorizados[46], vendedores sin puesto[47] y, finalmente, vendedores en puestos sin estructura[48]. Un aspecto examinado por este trabajo —y otros más, como veremos más adelante— es el reconocimiento de la necesidad de incluir el punto de vista de los consumidores urbanos. Sin la existencia de una demanda insatisfecha por diversos motivos, la presencia de la venta callejera tendría poco sentido[49]. Desde esta perspectiva, los factores que se destacan son: la oportunidad de comprar a buen precio (de acuerdo con el presupuesto de cada grupo) y la

[43] El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública señala que en México el número de vendedores ambulantes aumentó 53% entre 1995 y fines del siglo XX, con una tasa superior al 5% anual (Cesop, 2005, p. 6). La evidencia más importante del sector se observa en la mejora de sus ingresos promedio: en 1995 se percibían 1,6 salarios mínimos mensuales, mientras que en 2003 el monto se elevó a 2,1 salarios promedio (p. 8).

[44] Trabajan en estructuras desarmables que se instalan diariamente y se retiran al finalizar sus labores.

[45] Generalmente venden solo un género de objetos, por ejemplo, alimentos y golosinas, que incluso tienen como clientes a los vendedores de puestos fijos o semifijos.

[46] Muchos de ellos se dedican a la venta de ropa, discos, etcétera; también ofrecen servicios de manera ambulatoria en los llamados *tianguis* (mercados móviles) de la ciudad.

[47] Transportan su mercadería en mochilas, bolsas, sus manos, etcétera. Se especializan en atender la demanda que se concentra en los espectáculos públicos y en las vías de alta concentración vehicular.

[48] Conocidos en México como *toreros*, ofrecen sus mercaderías en el suelo sobre una manta u otro objeto similar. El reporte del Cesop establece una tipología parecida, elaborada a partir del tipo de bienes que venden los ambulantes, su ubicación y la infraestructura que utilizan (Cesop, 2005, p. 5). Otra clasificación similar se encuentra en Saldarriaga y otros, 2016.

[49] La misma razón es citada en Bromley (2000, p. 5).

facilidad de comprar sin perder demasiado tiempo o desviarse de una ruta utilizada cotidianamente. Cada una de las actividades y las modalidades de su ejercicio, en cuanto a infraestructura y ubicación, se orientan a satisfacer una demanda específica que surge de la combinación de las características anteriores (García Guzmán, 2001, p. 97). De este modo, surgen desde mercados en la vía pública hasta los vendedores móviles que acercan al consumidor en tránsito el producto que cuando salió de su casa, lugar de estudio u oficina, no tenía planeado comprar, pero que con esta estrategia termina por adquirir.

Argentina nos proporciona un ejemplo interesante, dado que, si bien se encontraban anteriormente actividades del sector informal urbano, en los últimos años el sector ha llamado la atención de los especialistas —economistas y especialmente sociólogos y antropólogos— debido a su crecimiento y por su notoria presencia en los espacios económicos y públicos[50]. Un aspecto interesante de estos trabajos es el énfasis en el estudio de las condiciones de vida, de trabajo y las relaciones sociales que se desarrollan entre los vendedores de las calles. Tal vez por el uso de esta perspectiva de análisis, las investigaciones en Argentina nuevamente ponen en discusión la relación de estas actividades con la marginalidad. Así, Pok y Lorenzetti consideran que en la definición del sector informal urbano se debe incorporar, entre otros factores, la precariedad laboral, la noción de marginalidad y la capacidad de reproducción de las unidades domésticas, elementos que muchas veces no son considerados desde un punto de vista economicista (Pok & Lorenzetti, 2007, p. 9).

Un ejemplo de esta perspectiva es el sugerente trabajo de Betsabé Policastro y Emilse Rivero (2006), quienes analizan el caso de los vendedores ambulantes de una línea de trenes de Buenos Aires (Mitre). Su estudio muestra que es sorprendente la variedad de actividades en ese reducido lugar de venta, encontrándose bastante bien organizada. Por ejemplo, en ese espacio se puede diferenciar entre los que venden productos, los músicos, los que venden en los vagones y los que venden en la plataforma de embarque, los vendedores antiguos (capangas) y los nuevos y, finalmente, entre quienes se proveen directamente su mercadería de quienes tienen algún vínculo de subordinación con otros. Su análisis muestra que el área de trabajo se encuentra organizada y jerarquizada, las reglas de juego permiten la convivencia de todos los interesados, de manera que nadie molesta a otro ni será molestado. Incluso hay reglas que tienen como objeto no interferir innecesariamente

[50] Pok y Lorenzetti afirman que «la informalidad en Argentina ha dejado de ser una franja marginal del mercado de trabajo para instalarse, ya desde hace tiempo, como rasgo constitutivo del mismo, abarcando prácticamente a la mitad de la población laboralmente activa para el período analizado» (2007, p. 12).

con los pasajeros o con el personal que labora en la ruta: para preservar el lugar de venta se evita el exceso de vendedores en toda la línea y solo se admite un vendedor al mismo tiempo en cada vagón. Es importante señalar que, entre los vendedores, al igual que en el caso de Lima, existe un claro conocimiento de qué rutas son más rentables y en qué momentos del día o de la semana cada actividad es más apropiada. Por último, la investigación estableció la existencia de acuerdos y reuniones entre los vendedores, salvo los músicos, con el objeto de resolver conflictos internos y con las autoridades, instancia en la cual los vendedores más antiguos tenían un liderazgo reconocido por los demás. Esto significa que los vendedores construyen un microcosmos de relaciones sociales no exento de tensiones, pero que logran ser resueltas por su propia iniciativa, al mismo tiempo que el liderazgo cumple el papel de tratar con las autoridades. Tal como señalan las interpretaciones más recientes, la informalidad es un espacio que permite negociar (Policastro & Rivero, 2006).

Por último, el caso colombiano nos muestra otro aporte importante en los estudios sobre las ventas en la calle. En este caso sí se ha abordado de manera más consistente el estudio de la demanda, tanto como a los propios vendedores. Hay una tendencia común a enfocar el problema desde la óptica del empleo, como señalan León Camargo y Caicedo: «Las ventas informales absorben trabajadores que desean ingresar al mercado formal pero que por diversas razones no pueden hacerlo […] sus destrezas y habilidades son escasas en un mercado altamente competitivo» (León Camargo & Caicedo, 2005, p. 14). De modo que, por las escasas barreras que existen para el ejercicio de la actividad, prefieren entrar a ella con una mínima inversión: ventas de alimentos preparados, frutas, libros, discos, etcétera. También existe una vertiente más original en el trabajo de Lina Medina (2005), quien se preocupa en destacar la heterogeneidad del sector, así como las interrelaciones del vendedor con las cadenas mayores de distribución de productos y, especialmente, «un análisis de la naturaleza de la demanda; es decir, de la descripción de los consumidores, de sus hábitos y de su opinión con respecto a esta actividad económica» (p. 42). Desde esta perspectiva, los vendedores de las calles no solo han adquirido una dinámica propia de crecimiento y de generación de empleo, sino que han desarrollado canales de distribución más eficaces para la actividad productiva: «Las actividades relacionadas con este término no son algo marginal, sino parte de un proceso concreto de re-configuración de la economía mundial» (p. 43).

Utilizar estas hipótesis derriba muchos de los presupuestos acerca de la venta en las calles. Por ejemplo, la investigación empírica señala que no todos los vendedores de las calles ofertan mercaderías de contrabando; por el contrario, la gran mayoría las adquiere de distribuidores legales o son los intermediarios entre el mayorista y el consumidor final (Alonso, 1989, p. 29). Esto se explica por la necesidad de las

empresas comercializadoras de acercar lo más que se pueda la oferta a la demanda. Al analizar esta última queda más clara la ventaja comparativa de trabajar en la calle: este tipo de venta permite el paso de una demanda 'pasiva' a otra 'activa'. Esto significa que existe un conjunto de compradores 'pasivos' que solo adquieren los productos cuando se los ofrecen en su paso por las calles, a diferencia de los clientes que salen en búsqueda de un objeto que se ofrece en un lugar específico (Medina Muñoz, 2005, p. 436, n.18). Refiriéndose a Santiago de Chile, el estudio del Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC) señala:

> Ellos dependen del transeúnte que está de paso y que se encuentra, de repente, con un artículo necesario o atractivo sin que este pueda ser motivo de una búsqueda activa, involucrando eventuales desplazamientos a otros sectores con gastos de movilización y tiempo, que pueden exceder fácilmente el valor del producto mismo. Los ambulantes tienen que seguir al cliente, y no el cliente al ambulante (2008, p. 37).

Por esta razón, el público no siempre tiene una visión negativa de esta actividad, sirviéndose de ella para satisfacer una parte de sus necesidades cotidianas[51]. Además, los comerciantes informales incluyen técnicas de mercadotecnia, por ejemplo, estrategias de ventas específicas para cada producto, adaptación más rápida del precio a la oferta y la demanda, amplia exhibición de productos y gran movilidad en la búsqueda de clientes (Arellano, 1991).

Sin embargo, el punto sensible, la externalidad negativa de la actividad, es el uso de las calles. Esto le agrega a la discusión un enfoque importante: el uso del espacio público. Como señala la autora, este es el lugar de tensión más importante entre el consumo, la oferta y las autoridades. En ese aspecto la gran mayoría de los encuestados consideró que esta actividad no era una manera apropiada de utilizar las calles, aunque rechazaban las medidas represivas (Medina Muñoz, 2005, p. 47). La clave reside en que las ventas callejeras usan espacios que pueden ser considerados simbólicos de la ciudad: plazas, calles importantes, etcétera. Esto trae diversos conflictos; por ejemplo, para un sector de la población y las autoridades, el uso de estos espacios para la venta callejera va contra su función urbana, crea inseguridad y afecta el ornato de la ciudad[52], mientras que para los vendedores esos mismos espacios son los que permiten hacer rentable su actividad, gracias al flujo

[51] El 62,8% de los encuestados afirma que las ventas beneficiaban de algún modo a la ciudadanía. Entre los beneficios se mencionó la generación de empleo, la distribución de productos a precios bajos, la facilidad para adquirir productos sin realizar grandes desplazamientos y el ahorro de tiempo de los consumidores (Medina Muñoz, 2005, p. 47).

[52] En México se observa el mismo fenómeno discriminatorio contra los vendedores callejeros; se les percibe como ignorantes, indígenas e incivilizados (Mendiola, 2017, pp. 16, 29).

peatonal o vehicular[53]. Cuando la venta callejera utiliza espacios menos cargados de simbolismo es mejor tolerada.

Precisamente, uno de los aportes más sugerentes acerca de la relación entre el uso del espacio, la dinámica urbana y la aparición del comercio ambulatorio proviene de la geografía urbana. Jérôme Monnet realizó una investigación dedicada a la ciudad de México en la que plantea nuevos elementos analíticos[54]. La definición que emplea es «ambulantaje», término acuñado en México y que «abarca el conjunto de actividades de intercambio económico (venta de bienes y prestación de servicios) que ocupan precaria o temporalmente un espacio de circulación abierto al público, ya sea porque la actividad está autorizada o se tolera temporalmente, ya sea porque la actividad se impone de manera informal o ilegal» (Monnet, 2005a, p. 37). Otra definición remarca la movilidad del vendedor, un trabajador que ofrece productos sin contar con una infraestructura permanente, y que puede ocupar estacionalmente las calles o que puede movilizarse junto con los medios que utiliza para vender. El comerciante es parte de los vendedores urbanos que utilizan el equipamiento de la ciudad compuesto de parques, plazas, calles, transporte, etcétera, para lograr vender sus productos (Graaf & Ha, 2015, p. 2).

Esta forma de concebir el problema se concentra en las relaciones establecidas entre la actividad y el espacio público, y deja en segundo plano la extensión del comercio o su formalidad: lo fundamental es el uso de las calles y plazas para realizar las ventas. Una segunda perspectiva que se deriva de este punto de partida, es la necesidad de abordar las características del ambulantaje no solo en términos de estructura social o económica, sino también desde la óptica de los usuarios y sus representaciones en los medios de comunicación e imaginario social. Por ejemplo, en los medios de comunicación masivos, según Monnet, aparece una confusión entre informalidad, ambulantaje, oficios callejeros, ilegalidad y marginalidad (Monnet, 2005a, p. 45)[55]; además, estas representaciones son funcionales a las diversas posturas políticas partidarias o públicas.

La presencia de este sector no es exclusiva del desarrollo del capitalismo durante el siglo XX; tampoco se puede interpretar su difusión solo como una suerte de desobediencia civil ante la incapacidad de cumplir las normas excesivamente costosas, rígidas y controlistas de un Estado burocrático. Como señala Monnet, las raíces de este fenómeno son múltiples. Sus antecedentes incluyen, por ejemplo,

[53] Iván Alonso reconoce este aspecto, aunque no le da la importancia debida (1989, p. 41).

[54] El equipo de investigación agradece enormemente la generosidad del profesor Monnet, quien tomó contacto con nosotros gracias a Caroline Stamm. Él nos proporcionó varias de sus publicaciones y tuvo la amabilidad de acompañarnos en nuestras discusiones el año 2007.

[55] Para una discusión más amplia del concepto de metropolización, véase Bensús (2012).

formas de sociabilidad de corte preindustrial y el contexto de una demanda que no tiene el suficiente poder adquisitivo para adquirir bienes y servicios esenciales en condiciones adecuadas de calidad e higiene. Como veremos más adelante, esta propuesta es esencial para comprender el fenómeno en la ciudad de Lima en la década de 1980. Otro aspecto muy importante es el desarrollo de una ciudad que genera un aumento de los desplazamientos a gran distancia, extensos recorridos que alejan cada vez más a los individuos de su residencia, que a su vez generan una demanda compuesta por personas que necesitan satisfacer sus necesidades en las rutas que emplean para desplazarse en el entorno urbano. De este modo el ambulantaje no solo sería una respuesta personal a un problema de empleo, sino una respuesta social al propio desarrollo de la dinámica urbana y su complejidad. Por ello el trabajo de Monnet, Giglia y Capron (2005), sostiene que en la definición de ambulantaje también debe considerarse el hecho de que el poblador que compra en la calles es un cliente ambulante, cuya movilidad puede ser mayor que la del propio ambulante[56]. Esto explica, según los autores, el que las calles y vialidades públicas se constituyan en espacios donde se entrecruzan los diferentes actores en movimiento, producto de la metropolización del espacio urbano[57]. Esto construye un espacio simbólico que conforma el 'mapa' de la ciudad: las personas que transitan por ella conocen los puntos de encuentro y aquello que se puede comprar o no en ellos, de modo que el ambulantaje resulta funcional a la dinámica urbana y a las necesidades de sus habitantes. La conclusión de este estudio es de gran importancia:

> La racionalidad del comercio ambulatorio no puede reducirse a la autogeneración espontánea e informal de un empleo, ya que corresponde también a la satisfacción de una demanda específica, la del viajero urbano con sus necesidades de circulación (limpiaparabrisas o lustrabotas), de comunicación (tarjetas telefónicas), de información (periódicos), de diversión en tiempos de espera (payasos y malabares en los semáforos), de alimentación diferenciada según momentos del día, o de productos adaptados a las formas de sociabilidad (flores). Estas necesidades son las del cliente que llamamos el cliente ambulante (Monnet, Giglia & Capron, 2005, p. 26).

[56] El trabajo de Monnet, Giglia y Capron intenta una interesante clasificación de las diversas actividades que se realizan en las calles y espacios públicos de las calles de México. Un aspecto destacable es la metodología, consistente en la observación no solo del ambulante, sino del entorno urbano y de las relaciones que se establecen entre los diversos actores.

[57] Al igual que en el caso peruano, la existencia de semáforos y regulación del tráfico permite la conexión entre «las diversas modalidades de transporte humano. Por la interrupción (o la reducción de velocidad) de cada tipo de flujo, y por la conectividad entre modalidades y trasbordo, los cruces son favorables a la prestación de servicios a los viajeros urbanos» (Monnet, Giglia & Capron, 2005, p. 2).

De este modo, aparece la adecuación mutua entre una oferta y demanda móviles. Como señala Macera,

> Estos vendedores no son los verdaderos ambulantes, los originarios causantes de todo el proceso. El verdadero ambulante es el comprador ambulante; sin el cual no existirían los vendedores. Todavía más, aquellos vendedores ambulantes no han hecho otra cosa que resolver imaginativamente las necesidades previas de los compradores ambulantes. Por consiguiente es una de las muchas tonterías municipales y políticas hablar del problema de los vendedores ambulantes. Nuestro problema irresoluble es el de los compradores ambulantes (2009, p. 46)[58].

El cliente aprovecha el tiempo muerto de espera en un semáforo, compra en su ruta hacia alguna actividad, etcétera; mientras para el vendedor la flexibilidad de horarios de trabajo y de independencia personal compensan las dificultades en el ejercicio de la actividad (Mendiola, 2017, p. 21; Bromley, 2000, p. 6). Estas características no son totalmente nuevas en la historia del ambulantaje, al menos en las ciudades de origen colonial. Un estudio interesante de Alba, Exbalin y Rodríguez (2007) muestra que en la época colonial el ambulantaje es representado en los famosos cuadros de castas principalmente ocupando las esquinas y otros lugares estratégicos, y estaba relacionado ya desde esa época con la movilidad urbana: las ventas son realizadas por sectores sociales considerados inferiores, como la plebe urbana de la ciudad. Durante el siglo XX los ambulantes ampliaron su movilidad en la ciudad, gracias a las ventas a domicilio y el uso de la bicicleta, pero la venta de alimentos en la vía pública siempre fue una de las actividades más frecuentemente representada. A fines del siglo XX aparece el consumidor de estos servicios y bienes en las representaciones gráficas, en forma de muchedumbres y transeúntes que se agolpan en las calles de la ciudad. La conclusión de este trabajo es bastante relevante, pues constata que a lo largo de la historia de la ciudad el ambulantaje se adaptó al desarrollo urbano y formas de vida de cada período:

> No se trata de un fenómeno desvinculado del desarrollo urbano ni de las formas de vida o de ocupación del espacio propio a cada período. Se adapta a la movilidad urbana propia a cada época, pues los puntos privilegiados de venta en las representaciones coinciden con los espacios urbanos, que dan lugar a la circulación. El ambulante actual ya no se ubica en las salidas de las iglesias, en las plazas o puntos de convivencia social propios de la ciudad colonial y decimonónica, sino que ahora se encuentra principalmente en los puntos centrales del traslado metropolitano, como son las salidas del metro, las terminales de autobuses (Alba, Amaud & Rodríguez, 2007, p. 41).

---

[58] Véase también De la Flor (2000, p. 119).

Las consecuencias de estas actividades, a pesar de su funcionalidad, son varias. Entre ellas cabe destacar la tensión por el uso del espacio público, dado que las autoridades y la opinión pública consideran que algunos lugares de la ciudad deben encontrarse libres de este tipo de trabajo, mientras que quienes viven del ambulantaje y sus clientelas necesitan hacer uso de esos mismos espacios, convirtiéndose el enfrentamiento frecuentemente en una 'guerra' (Graaf & Ha, 2015). Por ejemplo, entre 1988 y 2003 se realizó en Bogotá una agresiva campaña de reubicación de los vendedores, con el objeto de recuperar el centro histórico. Un aspecto interesante y comparable con Lima es que Bogotá también sufrió los embates de la violencia urbana por medio de las guerrillas, al mismo tiempo que las condiciones económicas y falta de regulación urbana deterioraban el entorno (Donovan, 2004)[59]. Hasta 1988 el municipio había intentado infructuosamente regular el comercio callejero a través de la expedición de licencias que otorgaban al ambulante el derecho transitorio de usar la vía pública en una relación teñida de clientelismo político y corrupción (p. 118). A partir de ese año se comenzó a elegir alcaldes democráticamente, lo que alteró la concepción del espacio público, pues las autoridades electas fueron responsabilizadas directamente del orden urbano y del mantenimiento de los espacios públicos. A partir de ese momento se comenzaron a aplicar proyectos de reubicación que no siempre fueron exitosos, pero que muestran las tensiones que se generaban entre ambulantes, público y autoridades. Por ejemplo, los vendedores reubicados reconocían que sus nuevos lugares de trabajo reunían condiciones mucho más apropiadas de higiene y seguridad, pero aducían que ganaban menos de lo que percibían en la calles, al menos en la mitad de los casos encuestados por Donovan (2004, p. 132)[60]. La consecuencia de esta disminución de ingresos fue que en muchos casos los proyectos de reubicación fueron abandonados por los vendedores, quienes a pesar de sus supuestas ventajas, posteriormente se trasladaron a sus antiguas ubicaciones o invadieron espacios urbanos con menor vigilancia[61].

En el caso peruano esta perspectiva de investigación no se ha desarrollado convenientemente. Sin embargo, desde la sociología urbana se ha comenzado a hacer énfasis en la importancia de los espacios públicos en la construcción de la identidad de los habitantes, dentro de la cual el Centro se convirtió en uno de los lugares de referencia obligatoria. De la misma manera, se ha comenzado a estudiar

[59] Un hecho resaltante fue la intervención en 1985 del M-19 en el Palacio de Justicia, acción que causó la muerte de 115 personas (Donovan, 2004, p. 117).

[60] Un caso interesante que Donovan señala es que en aquellas ocasiones en que los vendedores fueron reubicados en mercados especializados sí se detecta una mejora en los ingresos.

[61] La ubicación apropiada es crucial para las ventas en la calle, sobre todo contar con un abundante flujo peatonal (Prealc, 2008, p. 37).

la movilidad de los habitantes en la ciudad y su relación con la concepción del espacio público, pero aún no se han integrado estas perspectivas al estudio de las ventas callejeras[62]. Entre las últimas aproximaciones al tema destaca la de Lissette Aliaga, quien estudió detalladamente el caso de los vendedores ambulantes de un distrito periférico de Lima, Independencia, por lo que no pudo considerar el conflicto por el uso simbólico del espacio del Centro de la capital. De igual modo, no existen trabajos, hasta donde tengo conocimiento, que estudien la manera en que ese comercio informal ha sido representado en los medios de comunicación y en la opinión pública[63].

Este balance teórico y metodológico nos permite plantear una propuesta de estudio para el caso limeño. La fuente principal que voy a emplear, los diarios, permiten reconocer los constantes conflictos por el uso del espacio y los imaginarios acerca de los ambulantes; tal representación tiene que ser contextualizada con las condiciones económicas y las características generales de la sociedad limeña. El centro del análisis será el comercio ambulatorio, pero junto con este sector incorporaremos la aparición de otros actores en el espacio público, y las condiciones en que se desarrolló la supervivencia de los sectores populares en ese periodo.

[62] Destacan los trabajos de Vega Centeno (2004, 2006).

[63] Un trabajo que se acerca parcialmente a esa perspectiva es el de Arellano (1991), quien analiza la práctica de los vendedores desde sus estrategias de venta, las cuales incluyen el uso del espacio y satisfacción de una demanda específica.

Capítulo 2
El centro en disputa:
la batalla por el control de las calles

La masa humana

El gobierno encabezado por el general Francisco Morales Bermúdez, presionado por los movimientos sociales y la crisis económica, convocó a elecciones presidenciales para el domingo 18 de mayo de 1980. Estas elecciones fueron consideradas como el triunfo de las luchas populares y un momento de gran esperanza en el futuro; se creía que con la ansiada democracia el gobierno legítimamente elegido lograría recuperar al Perú y lo enrumbaría hacia el desarrollo económico. Sin embargo, el 17 de mayo de ese año en la localidad de Chuschi (Ayacucho) Sendero Luminoso comenzaba su guerra contra el Estado peruano, y en Lima se iniciaba otro tipo de guerra entre los ambulantes, las autoridades y los vecinos de la ciudad. La década estaría muy lejos de traer la paz y el desarrollo por los que se había luchado en los años anteriores.

Desde 1970 el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada (GRFA, 1968-1980) nombró a los alcaldes de Lima, sin recurrir a ningún tipo de consulta popular[1]. Durante la dictadura, los burgomaestres no contaron con autonomía y el control de la ciudad estuvo en manos de los militares, especialmente durante la segunda mitad de la década de 1970, años en que las protestas fueron reprimidas con toques de queda y patrullaje militar[2]. Un ejemplo, el más dramático de ese

---

1 El último alcalde elegido fue Luis Bedoya Reyes (1964-1970); le siguieron, ya designados por el gobierno militar, Eduardo Dibós (1970-1973), Lizardo Alzamora (1973-1975), Arturo Cavero (1975-1977), Enrique Falconí (1977-1978), Roberto Carrión (1978-1980) y Piero Pierantoni (1980).

2 Sobre la base de la Constitución de 1979, se emitió la Ley Orgánica de Municipalidades en 1982, la cual comenzó la recuperación de algunos de los fueros y capacidades del gobierno local (Tueros & Carbonetto, 1985, p. 19).

periodo, fueron los saqueos e incendios en Lima durante el día de la huelga policial del 5 de febrero de 1975; evento que intensificó los enfrentamientos gremiales y dio fin a la primera fase del gobierno militar liderada por el general Juan Velasco Alvarado (Valladares, 2005, p. 7). Por ejemplo, las huelgas pasaron de un promedio de poco menos de cuatrocientos por año entre 1963 y 1972, a 562 en 1974 y 779 en 1975 (Parodi, 2004, p. 136).

La pérdida de autonomía de las municipalidades se evidencia en el decreto del GRFA que declaró en emergencia el Mercado Mayorista de Lima y las zonas aledañas, porque sus condiciones afectaban severamente la salud de la población de Lima. El gobierno consideraba que la administración municipal era deficiente y generaba «vicios de comercialización con el consiguiente encarecimiento de los artículos alimenticios». El decreto ordenó el traslado de los comerciantes a otros espacios a ser determinados por una comisión nombrada por el gobierno, compuesta por el prefecto del departamento de Lima y representantes de los ministerios de Salud y Agricultura, quienes coordinarían con los concejos municipales de Lima y La Victoria. Le correspondía al Ministerio de Agricultura proponer «las condiciones en que se continuará la administración de los mercados mayoristas de Lima, así como del terminal pesquero, una vez reorganizados»[3]. Uno de los regidores municipales visitó el terminal pesquero algunos días antes de esta orden y lo que observó fue una situación lamentable: entre otros detalles, los trabajadores municipales no tenían ropa adecuada y no contaban con botas. Este personal laboraba en «un lugar horrorosamente lleno de suciedad y agua, y no había recibido en el año ningún juego de vestuario»[4].

Los años de crisis económica causaron la expansión de un sector relativamente nuevo en la ciudad: los ambulantes. No era la primera vez en la historia de la ciudad que los hombres y mujeres se ganaban la vida en las calles, donde realizaban diversas actividades que les permitían obtener su sustento. Desde la época colonial, pasando por la republicana, los sectores populares utilizaron el espacio urbano para trabajar, y, mientras cuestionaban y evadían los controles de las autoridades, también negociaban con ellas (Iwasaki, 1989). También, luego de la Guerra del Pacífico, se generó una expansión de la venta en las calles ante la falta de empleo, lo que generó una seria preocupación en las autoridades por el peligro que suponía el incremento del comercio de alimentos en las vías públicas (Macera & Soria, 2015, pp. 169-170). Sin embargo, la dimensión de la crisis que se desató desde 1975 y su persistencia tuvieron como resultado que la presencia de este tipo de informalidad no tuviera precedentes.

[3] Decreto ley 17157, del 22 de noviembre de 1968.

[4] Sesión ordinaria, 6-11-1968, Boletín Municipal, noviembre-diciembre, 1968. Diversos testimonios en ese año describen la misma realidad.

Un primer aspecto es establecer las cifras y las características del comercio informal en las calles de Lima. Son tres las fuentes que se suelen citar: la primera proviene de un censo organizado por el Concejo de Lima y el Instituto Nacional de Estadística en 1976, que reveló la existencia de 61 343 vendedores en Lima; la segunda cifra proviene del trabajo de campo realizado por el ILD y publicado en 1989, que arrojó un total de 84 327 ambulantes; la última es una encuesta de las municipalidades en 1994. Otras aproximaciones cuantitativas son bastante discutibles porque se basan en estimaciones y proyecciones sin mayor base. El cuadro 1 muestra una comparación de las cifras.

Cuadro 1
Distribución de ambulantes en Lima (1976-1994)

Distrito	1976	%	1985	%	1994	%
Ate-Vitarte	734	1,2	4142	4,9	15 000	8,2
Barranco	102	0,2	418	0,5	3000	1,6
Carabayllo	1539	2,5	952	1,1	2000	1,1
Breña	1539	2,5	1728	2,0	2000	1,1
Comas	1737	2,8	3640	4,3	5000	2,7
Chaclacayo	------	------	------	-----	300	0,2
Chorrillos	1065	1,7	2055	2,4	1500	0,8
Cieneguilla	------	------	------	------	60	0,0
El Agustino	1173	1,9	2697	3,2	5000	2,7
Independencia	952	1,6	1423	1,7	1619	0,9
Jesús María	465	0,8	961	1,1	2000	1,1
La Molina	------	------	38	0,0	1200	0,7
La Victoria	9731	15,9	11 823	14,0	------	------
Lince	804	1,3	1703	2,0	2000	1,1
Lurigancho	------	------	------	------	1300	0,7
Lurín	------	------	------	------	358	0,2
Magdalena	695	1,1	1227	1,5	2242	1,2
Miraflores	381	0,6	1029	1,2	2000	1,1
Pachacámac	------	------	------	------	120	0,1
Pueblo Libre	314	0,5	503	0,6	------	------

Distrito	1976	%	1985	%	1994	%
Puente Piedra	------	------	815	1,0	700	0,4
Rímac	2091	3,4	3011	3,6	2000	1,1
San Borja	------	------	671	0,8	450	0,2
San Isidro	137	0,2	259	0,3	800	0,4
San Juan de Miraflores	1918	3,1	4652	5,5	5910	3,2
San Juan de Lurigancho	958	1,6	3856	4,6	25 000	13,7
San Luis	476	0,8	1180	1,4	------	------
San Martín de Porres	2713	4,4	9587	11,4	10 000	5,5
San Miguel	120	0,2	642	0,8	600	0,3
Santa Anita	------	------	------	------	5000	2,7
Santiago de Surco	499	0,8	1041	1,2	1000	0,5
Surquillo	1961	3,2	2818	3,3	2800	1,5
Villa El Salvador	------	------	2550	3,0	4160	2,3
Villa María del Triunfo	992	1,6	2244	2,7	5200	2,9
Los Olivos	------	------	------	------	2752	1,5
Cercado de Lima	13 565	22,1	16 662	19,8	69 000	37,9
Otros*	14 682	23,9	------	------	96	0,1
Total	**61 343**	**100**	**84 327**	**100**	**182 167**	**100**

Fuente: Nolasco (1993, p. 23), Aliaga (2002b, pp. 21-22) y Alonso (1989, p. 28).

En primera instancia, las cifras del cuadro 1 muestran una tasa anual de 3,6% de crecimiento del comercio ambulatorio entre 1976 y 1985; porcentaje que se eleva dramáticamente a 8,9% anual entre 1985 y 1994. Esta última tasa parece poco creíble por lo extremadamente elevada, aunque no hay otras cifras con las cuales contrastarla. Lo que sí queda claro es que el comercio ambulante creció notablemente entre 1976 y 1994, especialmente en algunas zonas de la ciudad. Tomando como base las cifras del cuadro 1 elaboramos el cuadro 2, que consolida los datos anteriores para los conos de la ciudad[5].

[5] En este cuadro se aplican las siguientes distribuciones. Cono Norte: San Martín de Porres, Comas, Independencia, Carabayllo, Puente Piedra y Los Olivos. Cono Sur: San Juan de Miraflores, Villa el Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos, Pachacámac y Lurín. Cono Este: El Agustino,

Cuadro 2
Distribución de ambulantes por zonas en Lima (1976-1994)

Zona	1976	%	1985	%	1994	%
Cono Norte	6941	11	16 417	19	22 103	12
Cono Sur	3975	6	11 501	14	17 312	10
Cono Este	2865	5	10 733	13	52 860	29
Cercado	13 565	22	16 662	20	69 000	38
Lima sin el Cercado	19 315	31	29 014	34	20 892	11
Otras	14 682	24				
Total	**61 343**	**100**	**84 327**	**100**	**182 167**	**100**

Se puede observar que entre 1976 y 1985 el comercio ambulatorio se ubicó fundamentalmente en los distritos más céntricos de la capital, incluido el Cercado. En 1976 estos distritos reunían al 53% de los comerciantes y en 1985 al 55%; mientras aparentemente en 1994 esta cifra se redujo a 49%. Solo el Cercado albergaba en 1976 al 22% de los ambulantes y en 1985 al 20%, cifra que aumentó en 1994 a 38%. La zona que aumentó con mayor intensidad su participación en el comercio ambulatorio fue el Cono Este, que duplicó su peso relativo entre 1976-1985 y 1985-1994. Una conclusión que interesa es que, en el caso del Cercado, a pesar de la disminución de su participación en el total, se registra un aumento de más de tres mil comerciantes entre 1976 y 1985, lo cual evidencia el crecimiento del sector a un ritmo de 344 nuevos ambulantes por año; mientras que en toda la ciudad durante el mismo periodo se incorporaban en promedio 2554 ambulantes por año.

El censo de 1976 es una de las fuentes más importantes para conocer las características sociodemográficas de los comerciantes. Lamentablemente, en los años posteriores los recuentos y datos obtenidos son mucho menos prolijos, lo cual impide su comparación[6]. De acuerdo con esa fuente, el 46,5% de los comerciantes

Ate-Vitarte, San Juan de Lurigancho, Santa Anita, La Molina, Cieneguilla y Chaclacayo. El Cercado es el centro de Lima; finalmente, Lima sin el Cercado incluye a Lince, Jesús María, Pueblo Libre, Breña, Barranco, San Isidro, San Luis, San Borja, San Miguel, Surco, Rímac, Miraflores, Magdalena, La Victoria y Surquillo.

[6] Una excepción es la publicación de Castellanos (2014), que combina una muestra obtenida de trabajo de campo con la Encuesta Nacional de Hogares de los años 2009 y 2011. Sus datos son muy posteriores a los límites temporales de este trabajo, pero los utilizaremos cuando sea oportuno.

eran hombres y el 53,5% mujeres[7]; sin embargo, esta distribución no era homogénea en el espacio urbano. La menor diferencia entre géneros (y la única a favor de los hombres) se encontraba en el Cercado, con 51,1% para los hombres y 48,9% para las mujeres[8]. En los demás distritos la ocupación estaba dominada por mujeres. Las diferencias más grandes se encontraban en espacios periféricos: El Agustino (14,4% hombres vs. 85,6% mujeres), Ate (18,3% vs. 81,7%), Independencia (18,6% vs. 81,4%), San Juan de Lurigancho (19,4% vs. 80,6%), Villa María del Triunfo (20,4% vs. 79,6%), Santiago de Surco (23,6% vs. 76,4%), Chorrillos (25,9% vs. 74,1%), Comas (30,2% vs. 69,8%), San Juan de Miraflores (32,6% vs. 67,4%). Continúan con una diferencia entre los hombres y mujeres de entre 34,8% y 30,6%, los distritos de Lince, San Luis y San Martín de Porres; luego con una diferencia de género a favor de las mujeres de 25,5% a 16,8%, Barranco, San Miguel, Rímac, Surquillo, Miraflores y San Isidro. Finalmente, con un porcentaje a favor de las mujeres entre 15,7% y 8,2%, Jesús María, La Victoria, Pueblo Libre, Breña y Magdalena del Mar (INEI, 1977, pp. 2-4).

Se puede notar una tendencia: en los distritos más populares la proporción de mujeres supera largamente a los hombres, convirtiéndose la venta ambulatoria en una importante opción laboral para las mujeres[9]. Esta característica del comercio ambulatorio en 1976 se nota también en la distribución por edades. Para tal efecto compararemos los dos extremos de las tendencias de distribución por género, Lima Cercado y El Agustino. En el primer caso, la distribución se altera al observarla por cortes de edad: alrededor del 34% de todos los ambulantes del Cercado se encuentra entre los 20 y 29 años de edad, con 54% hombres y 46% mujeres; entre los 30 y 44 años, 36% del total y con 44% de hombres y 56% de mujeres; mientras que entre las personas mayores de 44 años (19% del total), nuevamente se equilibra el género: 49% de hombres y 51% de mujeres. En el caso de El Agustino, el 23% de los vendedores del distrito se encuentra entre los 20 y 29 años, con 12% de hombres y 88% de mujeres; mientras que el 43% del total se encuentra entre los 30 y 44 años con la misma proporción entre géneros (INEI, 1977, pp. 2-4). Una característica que se puede notar es que en ambos distritos la gran mayoría de los ambulantes se encontraba entre los 20 y los 44 años; además, con una preeminencia de las personas entre los 30 y 44 años.

Se pueden señalar algunos aspectos importantes. En primer lugar, ambos cortes de edad reúnen el 70% de todos los ambulantes; en segundo lugar, en el

[7] A principios de la década de 2010, el 66% de los vendedores eran mujeres (Castellanos, 2014, p. 10).

[8] Realidad muy diferente a la de Santiago de Chile, donde el 65% de los ambulantes eran hombres (Prealc, 1988, p. 6).

[9] De acuerdo con Mendiola esta realidad sería similar al caso mexicano (2017, p. 17).

caso del Cercado, solo en el rango entre los 30 y 44 años las mujeres superan por 12% a los hombres. Es posible que este último rango incluya a las mujeres con familia y dependientes, lo cual explicaría el aumento de la presencia femenina, si consideramos la flexibilidad en el horario de las ventas ambulatorias[10]. Por ejemplo, al considerar el estado civil se tornan más claros algunos aspectos: entre los 15 y 19 años, el 8% de los hombres vivía con una pareja[11], mientras el 34% de las mujeres vivía en la misma condición. Entre los 20 y 29 años, el 57% de los hombres y el 70% de las mujeres contaba con pareja; entre los 30 y 44 años, 85% y 74%, respectivamente. Aquí la disminución de las mujeres con pareja se debía a la viudez, separación o divorcio; se contabilizaron 227 hombres que vivían bajo cualquiera de las condiciones mencionadas (2%) y, mucho más numerosas, 1724 mujeres en la misma situación (7%). Esto señala la presencia de mujeres solas o con hijos que debían buscar algún tipo de sustento y que declararon no contar con una pareja que contribuyera con los ingresos familiares[12]. Esto se hace más notorio en el rango de edad de los 44 años en adelante: el 71% de los hombres contaba con pareja y 10% eran viudos, divorciados o separados (615 hombres), frente a solo 50% de mujeres con pareja, pero 28% viudas, separadas o divorciadas (cerca de 2000 mujeres)[13]. También se debe considerar que este tipo de labor exige que la familia utilice la vía pública como una extensión del hogar, lo que permitía que las mujeres con hijos continúen su labor como madres. Dado que esta ocupación requiere de muchas horas de trabajo lejos del hogar, tiene como consecuencia que muchas de las tareas domésticas se realicen en el puesto de venta. «Así, el punto de concentración de padres e hijos lo constituye la calle donde ofrecen su mercadería, y no la vivienda donde residen» (Bazalar, 1976, pp. 72-73).

Respecto a las causas por la cuales las personas se dedicaban al comercio ambulatorio, 73% de los hombres y 94% de las mujeres declararon no tener

[10] Un estudio de un conjunto de mujeres ambulantes entrevistadas en el año 2016 reveló que el 87% tenía su negocio cerca de su domicilio, con el objeto de poder cumplir con sus labores domésticas. Una de ellas declaró: «Más que nada estoy cerca de mis hijos para llevarlos al colegio, estoy cerca viéndolos cómo están». Otra entrevistada señaló que podía decidir todo lo relativo a su bienestar: «Tu propio sueldo, tu propio horario, no hay vacaciones esperando el año, sales cuando quieres, tienes la capacidad de ahorrar, de crecer, eres tu propio jefe». El estudio también reveló que el 97% de las mujeres trabajaba entre seis y siete días por semana; el 27% entre diez y once horas diarias, 13% de doce a trece horas y el 17% de más de catorce horas cada día (Beltrán y otros, 2016, pp. 79, 89; Valerín & Chinchilla, 2012).

[11] En el censo se diferencian las condiciones de casado y conviviente, que he reunido en una sola categoría (INEI, 1977, p. 9).

[12] Castellanos encontró la misma característica en 2010 (2014, p. 11).

[13] En 2016, de acuerdo con Beltrán y otros, el 80% de las mujeres ambulantes comenzó el negocio por no tener otra alternativa debido al abandono de la pareja y el incumplimiento de sus obligaciones familiares (Beltrán y otros, 2016, p. 107).

ninguna otra ocupación disponible. Un aspecto interesante es que mientras el 71% de los hombres declaró que no podía conseguir otro trabajo, solo 39% de las mujeres señaló lo mismo. Para ellas, el trabajo como ambulante complementaba los ingresos familiares: 30% declaró que necesitaba de ingresos adicionales y 29% indicó otras causas (INEI, 1977, p. 10).

La gran mayoría de los ambulantes era de origen migrante, solo 19% provenía de Lima o Callao, la mayor parte había nacido en la sierra sur (44,2%)[14], 4,2% en la sierra norte o selva[15], 23,5% en la sierra central[16] y 9% en la costa[17]. Un aspecto evidente es que la gran mayoría de ambulantes provenía de zonas definidas como 'serranas' en el sentido de contar con regiones de altura y con una amplia población campesina. Incluso el departamento con mayor presencia en el sector, fuera de Lima, es Ayacucho con 8715 personas (37% de hombres y 63% de mujeres); seguido de Junín con 5309 individuos (41% y 59%); continúa el Cusco con 4951 ambulantes (45% y 55%); Áncash, 4729 (48% y 52%); Apurímac, 4627 (35% y 65%); Puno, 3568 (50% y 50%); Huancavelica, 3448 (45% y 55%); y, finalmente, Huánuco, 2546 (54% y 46%) (INEI, 1977, pp. 15-17). Como puede observarse, la proporción de géneros no es homogénea, aspecto que seguramente necesita una investigación más detallada y que excede los objetivos de este trabajo. La migración a Lima de las personas dedicadas al comercio ambulatorio no era tan reciente. De acuerdo con el censo, 42% tenía entre quince y más años de residencia; 25% entre diez y catorce años, y 13% entre cinco y nueve años. Esto significa que el 80% de los ambulantes tenían cinco o más años como residentes en la ciudad, tiempo quizá suficiente para adaptarse a ella y conseguir una manera más estable de ganarse la vida (INEI, 1977, pp. 18-23).

En cuanto al nivel de educación, solo el 4,4% de los hombres no contaba con ningún tipo de instrucción, 63% había cursado algún grado de primaria y 30% la había concluido; 30% había pasado por la secundaria y 7% la llegó a concluir[18]. En caso de las mujeres, en cambio, 35% no tenía instrucción; 53% había pasado por la primaria y 17% la finalizó; 9% llegó a la secundaria y solo el 1,5% la culminó. La mayor proporción de mujeres sin instrucción la tenía Ayacucho (55%); seguido de Apurímac (53%) y Huancavelica (48%). Estos datos respaldan la tendencia de que son las mujeres, especialmente las migrantes de la sierra, quienes no contaban

[14] Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Puno.

[15] Amazonas, Cajamarca, Loreto, Madre de Dios y San Martín.

[16] Áncash, Huánuco, Junín y Pasco.

[17] Ica, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes.

[18] En Santiago de Chile el nivel educativo de los ambulantes era mayor, más del 60% había cursado algunos años de secundaria (Prealc, 2008, p. 7).

con muchas oportunidades alternativas al comercio ambulatorio, dada la notoria diferencia educativa con los varones[19]. En 1983 el estudio de Eliana Chávez señala que el 63,9% de las mujeres en el sector informal urbano se ubicaba en el rubro de comercio al por menor, año en el que el 70% del presupuesto de una familia se gastaba en alimentos, lo cual significa que una madre de familia podía ahorrar parte de ese gasto dedicándose a su comercialización (Chávez, 1991, pp. 340, 350)[20]. La otra posibilidad, de larga data histórica, era el empleo en el servicio doméstico, pero, como veremos, este rubro disminuyó en importancia en la década de 1980. Además, esta ocupación es mucho más frecuente entre las mujeres solteras, las casadas prefieren otras actividades, entre otras cosas, para poder cuidar a sus hijos y evitar los maltratos de las familias que las contrataban (Möller, 1979, p. 451). Golte y Adams encuentran que el 90% de las mujeres que migraron entre 1940 y 1960 comenzaron su inserción en la ciudad como sirvientas domésticas, porcentaje que se reduce sensiblemente con las migrantes de las décadas posteriores, cuando muchas derivaban en el comercio ambulatorio: «Como ocupaciones de las mujeres siguen en importancia las domésticas que devienen en vendedoras ambulantes. Esta profesión, especialmente en lo que se refiere a la venta de ropa, empieza a cobrar importancia entre los migrantes recientes» (Golte & Adams, 1987, pp. 153, 179)[21].

En cuanto a la participación y estructura económica del sector, los datos más coherentes señalan que el comercio minorista representó en 1992 el 37% de la PEA con ocupación (Granados, 1997, p. 15) y entre 1994, 1997 y 1998 el 30,5%, 43,7% y 47,8% de la PEA, respectivamente, en condiciones de pobreza extrema (Aliaga, 2002b, p. 23). De acuerdo con los cálculos del ILD para 1985 los negocios de ambulantes representaban el 22% de todas las ventas minoristas y sus ingresos promedio superaban en 38% el salario mínimo vital (Alonso, 1989, pp. 39, 41). Respecto al giro de los comerciantes, aunque los parámetros entre el censo de 1976 y la muestra del ILD (1985) no son totalmente comparables, se pueden señalar algunos paralelos. En 1976 se contabilizó un 45% de ambulantes dedicados a la venta de alimentos (INEI, 1977, p. 41), mientras que en 1985 se registraron 57,6% en el mismo rubro (Alonso, 1989, p. 37); es, en ambos casos, la proporción más grande de comerciantes. En 1985, el 18,5% de vendedores ofrecían artículos de uso personal, cifra que no se puede comparar debido a que en 1976 no se empleó una

[19] En 2010 las mujeres en el comercio ambulatorio todavía contaban con una menor tasa educativa (Castellanos, 2014, p. 11).

[20] En 2010 la venta de alimentos seguía siendo la principal actividad de las mujeres, 55% vendía alimentos preparados y 24% sin preparación (Castellanos, 2014, p. 15).

[21] En el caso mexicano la percepción de las vendedoras era muy negativa, se las asociaba con la corrupción moral de las mujeres de la calle, tendencia que no es tan marcada en el caso de Lima (Mendiola, 2017, p. 41).

categoría similar; en 1976, el 14,3% de los ambulantes se dedicaba a la preparación y venta de alimentos y bebidas (INEI, 1977, p. 41); en 1985 esta categoría ocupa al 11,7%. En este último año, el 9,4% de los ambulantes vendía artículos para el hogar y la oficina, y 2,8% ofrecían diversos servicios (Alonso, 1989, p. 37). En 1976, si sumamos las categorías que tienen que ver con la alimentación (venta de alimentos y bebidas sin preparar y preparadas), tenemos el 59,3% del total de ambulantes; mientras en 1985 la venta ambulatoria de verduras ocupaba el 21% de todos los comerciantes; luego continuaban los vendedores de frutas con 12,9% y los comerciantes en abarrotes con 7,4%. En estas categorías se reúne el 41,3% del total de ambulantes, lo cual muestra su gran importancia para el abastecimiento de los productos básicos para la subsistencia cotidiana, más aún, si le sumamos a quienes vendían alimentos y bebidas preparadas, obtenemos 53% de todos los ambulantes de Lima (Alonso, 1989, p. 37). Como se puede observar, las cifras de los ambulantes dedicados al rubro de alimentación para 1976 (59,3%) y 1985 (53%) no difieren mucho entre sí. Además, un estudio realizado en 1975 muestra que el margen de ganancia en la venta de comida y bebidas era de 38%, superior al de la venta de libros (33%), artículos de cuero y vestimenta (28%), galletas y dulces (25%), frutas y verduras (23%) y artículos del hogar (22%) (Möller, 1979, p. 430)[22].

La crisis económica y la extensión del problema

En 1980 al último alcalde de Lima designado por los militares, Piero Pierantoni, le tocó enfrentar la explosión de la presencia de los ambulantes en casi todo el centro de Lima (como también del Callao)[23]. El problema se agravaba en determinadas épocas: por ejemplo, en la temporada de la procesión del Señor de los Milagros o en época navideña las calles se abarrotaban de vendedores y compradores, lo que contribuía a desatar el caos en la ciudad[24]. Desde principios de 1980 la prensa informaba que los ambulantes representaban un grave problema para la seguridad pública, debido a que se encontraban apostados en las puertas de los mercados e impedían

---

[22] Chávez y De la Flor (1998) ofrecen un listado muy completo de la variedad de formas del comercio ambulatorio, categorizadas de acuerdo al giro y tipo de infraestructura utilizada en 1995 (pp. 120-127).

[23] El uso de espacios públicos estratégicos y las críticas que se generan por la congestión del tráfico vehicular y peatonal son aspectos comunes a la expansión del comercio ambulatorio en el mundo (Bromley, 2000, p. 10).

[24] Esta proliferación también ocurría en algunas festividades religiosas. Durante la tradicional procesión del Señor de los Milagros, el templo de las Nazarenas y las calles adyacentes eran invadidos por miles de vendedores, quienes instalaban carretillas y quioscos para la venta de comida, turrones y otros productos. Por ejemplo «En la avenida Emancipación muchos puestos de madera ocupan gran parte de la vereda y hasta llegan a la pista» (*El Comercio*, 12-10-1980, «Ambulantes cercan las Nazarenas»).

la libre circulación[25]. Además, se les acusaba de comercializar mercadería ilegal, lo que estableció una asociación entre la venta en las calles y los actos delictivos[26]. Por ejemplo, se consideraba que una parte de las artesanías que se ofrecían en los puestos ambulantes de la cuadra siete del jirón Camaná era elaborada con materiales extraídos ilegalmente de las huacas de la costa norte[27].

De acuerdo al diario *El Comercio*, los mercados informales, llamados «paraditas», se encontraban en todo el centro de la ciudad. Las calles se encontraban «invadidas por vendedores ambulantes que exponen su variada mercadería sobre las veredas […] últimamente se han sumado a los vendedores ambulantes, artesanos que ofrecen en venta trabajos en pieles, artículos de plata, cobre, bronce y hasta huacos de dudoso origen. No faltan tampoco, cosméticos y blusas de origen extranjero seguramente ingresadas de contrabando»[28].

Otros medios denunciaban que el enorme mercadillo ambulante en que se había convertido Lima no tenía su origen en ningún 'problema social', su procedencia era «netamente comercial, industrial, económica y hasta de evasión de impuestos». Los ambulantes, desde esta propuesta, se dedicaban a esta actividad por causa de la rentabilidad que otorgaba la obtención de productos clandestinos, de contrabando, sin cumplir las reglamentaciones. El autor del artículo propuso separar a los «verdaderos ambulantes que venden pequeños artículos de los grandes ambulantes que deben someterse a los reglamentos que rigen el comercio en general. Entonces se conocería a los que realmente tienen que valerse de ese medio de vida», y agregó que de todas maneras debería eliminarse la venta de alimentos en la calle[29]. En esta nota se menciona una propuesta que será retomada varias veces: la necesidad de diferenciar al 'verdadero' ambulante de aquel que no necesita vender en la calle para sobrevivir.

La fiscalización de las autoridades usualmente no afectaba a los ambulantes, pero sí a los vendedores legalmente establecidos[30]. Este hecho era especialmente notorio

[25] *Correo*, 5-2-1980, «Ambulantes originan peligro en mercados».

[26] Además, se responsabilizaba a los ambulantes de la emisión de 200 000 litros diarios de líquido amoniacal, producto de la ausencia de urinarios públicos en la ciudad. Boletín Municipal, enero-marzo 1981, p. 62.

[27] *El Diario* de Marka, 18-8-1980, «Artesanía: fuente de ingresos para desocupados de Lima».

[28] *El Comercio*, 12-1-1980, «Paraditas proliferan en el centro de Lima». El mismo diario denunciaba la presencia de charlatanes que estafaban al público con la venta de yerbas y otros productos supuestamente provenientes de la medicina tradicional, reclamando la intervención de las autoridades (17-6-1980, «Piden erradicar a charlatanes que desnaturalizan medicina tradicional»).

[29] Enrique Romero Flores, «Lima convertida en gigantesca parada». *Correo*, 10-11-1980.

[30] Tueros y Carbonetto señalan: «En el estrato superior del pequeño comercio encontramos a los pequeños negocios establecidos fuera de los mercados, en zonas comerciales o no, que comprenden desde las bodeguitas hasta las tiendas de giro específico. Ellas son las que tienen que preocuparse de

en la venta de comestibles: los comerciantes decidían no vender los productos básicos cuando temían el alza de precios (controlados por precios oficiales establecidos por el gobierno) y fueron acusados de especuladores que pretendían, por medio de esta práctica, aprovecharse de la coyuntura económica. Los trabajadores de los mercados establecidos exigieron que los controles se ejercieran también contra los ambulantes. El secretario general de la Federación de Trabajadores de Mercados, Isidro Quintos, señaló: «Mientras que en los mercados hay todo tipo de control policial, municipal, sanitario, etcétera, los vendedores ambulantes son intocables»[31].

La proliferación de ambulantes en las inmediaciones de los centros de abastos fue considerada la razón por la cual los puestos de mercados eran abandonados por los vendedores[32]. Durante el año 1970 en el municipio se discutió la posibilidad de construir nuevos mercados para trasladar a esos ambulantes; sin embargo, no se llegó a concretar ninguna solución[33]. Más adelante, a mediados de la década de 1970, se continuó informando de la gran cantidad de locales en mercados en situación de abandono[34]. En el caso de un mercado en los Barrios Altos, muchos de los comerciantes preferían convertirse en ambulantes y utilizaban sus locales como depósitos. En el mercado La Aurora del centro de Lima, las inmediaciones se encontraban llenas de ambulantes que ocupaban pistas, veredas y bancas, y obstaculizaban el tránsito vehicular y peatonal. A pesar de los reclamos de los vendedores de los puestos del mercado, las autoridades no hacían nada para resolver el problema[35]. La situación en el Mercado Central era igual o peor: productos caros, suciedad, charcos de agua maloliente y falta de seguridad caracterizaban el interior del mercado[36]. La aglomeración de vendedores traía otras complicaciones, como ocurría en las inmediaciones del mercado Buenos Aires, en el jirón Fabri, ubicado cerca de la cuadra diez del jirón Cusco, lugar en el que se podía encontrar la calificada por el diario *El Comercio* como «la paradita más antihigiénica del

---

ajustarse a la mayor cantidad posible de reglamentaciones, puesto que, debido a su mayor visibilidad, están sujetos a más controles que las otras formas de empresa comercial» (pp. 26-27).

[31] *Correo*, 12-4-1980, «Secretario General de Federación de Trabajadores de Mercados: ¡Controles a trabajadores ambulantes!». En México se observa la misma tensión entre vendedores con puesto en los mercados y los que usaban la calle (Mendiola, 2017, p. 37).

[32] En 1969 se informaba en sesión de regidores que «los mercados municipales se seguían destruyendo por falta de ingresos propios, porque la renta de esos mercados no alcanzaba para su sostenimiento». Boletín Municipal, agosto-setiembre-octubre de 1969 (p. 63).

[33] AHML, Actas del Concejo, 24-4-1970; 15-5-1970 y 7-8-1970.

[34] *Última Hora*, 24-9-1975, «Hay mercados desocupados» (citado por Bazalar, 1976, p. 107). Véase también Möller (1979, p. 462) y Soto (1986, p. 70).

[35] *El Comercio*, 24-2-1980, «Ambulantes originan congestiones alrededor del mercado de La Aurora».

[36] *Correo*, 11-02-1980, «Mercado Central es un infierno».

Cercado de Lima», la cual operaba en una zona que nunca se limpiaba y cuyos malos olores afectaban seriamente al vecindario[37].

De acuerdo con el diario *Correo*, la municipalidad había decidido subastar más de 200 puestos en mercados, cuyos arrendatarios preferían tenerlos cerrados y dedicarse a vender como ambulantes[38]. En 1981 el regidor Luis Castañeda Lossio, a cargo de la Comisión de Comercio y Abastecimiento, consideraba que no solo se registraban puestos abandonados, sino que se había permitido el cambio de giro de los comerciantes, razón por la cual no había, por ejemplo, un solo puesto de frutas ni verduras en el Mercado Minorista y que en el mercado Ramón Castilla los puestos de verduras y abarrotes «vendían cigarros, chocolates, caramelos al por mayor, beneficiando a los vendedores ambulantes y perjudicando a las amas de casa que no encontraban arroz, azúcar y otros productos de primera necesidad»[39]. Ese mismo año, el municipio discutió, sin resultado alguno, la posibilidad de transferir los mercados a los trabajadores, para evitar el costo que suponían[40]; ante esa negativa, los regidores solicitaron aumentar los alquileres de los puestos para poder solventar los gastos[41].

Se sostenía que la competencia de los ambulantes, quienes ofrecían productos más baratos pero de menor calidad y con peso fraudulento, debería ser erradicada para beneficio de la comunidad, y evitar de ese modo que más comerciantes se incorporen a la venta callejera[42]. De igual modo, el presidente de la Corporación de Comerciantes Minoristas de los Mercados, José Castañeda, opinaba que los ambulantes preferían vender en las calles porque allí no estaban sujetos a ningún control:

> Los mercados están prácticamente vacíos, mientras que por los alrededores, cientos de ambulantes venden en la calle, escapando a cualquier control. Pueden vender al precio que les da la gana, productos malos, deteriorados o falsificados y no pagan ninguna clase de impuestos. Es una clase privilegiada […] En cambio, los vendedores de los mercados estamos expuestos a que en cualquier momento nos apliquen severas multas, por 'quítame esta paja'. Esto no es justo[43].

---

[37] *El Comercio*, 20-1-1980, «Antihigiénica paradita funciona en el Pasaje Fabri en Barrios Altos».

[38] *Correo*, 1-7-1980, «En los mercados hay puestos desocupados». Un funcionario municipal entrevistado a principios de la década de 1980 ratifica la información del abandono de puestos (Tueros & Carbonetto, 1985, p. 55). En la década de 1980 en otras partes del país el negocio de los puestos de mercado también rendía pocos ingresos (ver Babb, 2008, p. 171).

[39] Boletín Municipal, enero-marzo, 1981, p. 60.

[40] Boletín Municipal, abril-junio, 1981, p. 8.

[41] Boletín Municipal, julio-setiembre, 1981, p. 35.

[42] *El Comercio*, 18-5-1980, «Conductores de puestos abandonan mercado por comercio ambulatorio».

[43] *Correo*, 1-7-1980, «En los mercados hay puestos desocupados».

También el desabastecimiento era resultado de la falta de distribuidores, la especulación y la protección que permitía suspender la venta frente a la descapitalización que producía vender los productos a los precios oficiales, ante la certeza de que los productos subirían de precio en un futuro muy cercano. Los ambulantes vendían fuera de esos controles, mientras que los tenderos estaban más expuestos a las regulaciones. Así, los comerciantes de los distritos de Barranco, Surco y Chorrillos se quejaron de la prepotencia de la Guardia Civil y la Policía de Investigaciones del Perú en sus rondas de control, y amenazaron con dejar de vender leche, azúcar y harina debido a los abusos y a los recortes en la distribución de los productos[44].

Los vendedores ambulantes de comestibles tenían el control de buena parte del abastecimiento de la ciudad, pero su proliferación no se debía únicamente a las necesidades de los desempleados, mujeres y otros grupos de ganarse la vida[45]. Desde fines de la década de 1970 la economía peruana se encontraba sometida a fuertes tensiones. El alza del precio del petróleo en 1973 ocasionó una severa inflación mundial, junto con una depresión económica por causa de la caída de la demanda por esa misma alza, lo que se conoció mundialmente como «estanflación», que golpeó las economías dependientes del petróleo. El gobierno militar inició, desde 1968, un ambicioso plan de reformas que reforzaba y ampliaba los controles en la economía, con el objeto de dirigirla hacia el desarrollo industrial y la autonomía. Lo que interesa resaltar es que como resultado de este modelo de desarrollo, el gobierno restringió las importaciones y amplió el control de los precios de los productos y servicios básicos, estos últimos bajo su administración directa[46]. El aumento de la demanda ocasionado por el sesgo prourbano del modelo, más el pobre rendimiento agrícola a pesar los intentos de la Reforma Agraria, ocasionaron una fuerte presión sobre las importaciones de los alimentos y el precio del dólar. Entre 1975 y 1978 el gobierno tuvo que lidiar con un severo déficit fiscal y caídas en la balanza comercial

[44] *Correo*, 15-7-1980, «Ahora los comerciantes amenazan con una huelga».

[45] Un estudio posterior, pero que puede ayudar a comprender mejor el problema, señala que a fines del siglo XX continuaba la tendencia por parte de los vendedores de alimentos de utilizar las pistas y veredas, obstruyendo la vialidad peatonal y vehicular (Alternativa & Desco, 2001, pp. 34-35).

[46] Pocos días después de tomar el poder, el GRFA anunció un plan nacional para la estabilización de los precios de los alimentos (decreto ley 17242, del 29 de noviembre de 1968). Algunas semanas después, el 2 de enero de 1969, el GRFA, por medio del Ministerio de Agricultura, solicitó a la Municipalidad de Lima permiso para instalar «puestos de expendio» con el objetivo de «regularizar los precios del pescado de consumo en la gran Lima». El municipio accedió a la petición, concediéndole el uso de puestos en los mercados Ramón Castilla, Mercedarias, Buenos Aires, La Aurora y Guadalupe. Este dato indica dos aspectos: en primer lugar, la preocupación por el precio de los alimentos; en segunda instancia, la existencia de puestos sin ocupar en los mercados limeños (Boletín Municipal, enero-febrero, 1969, p. 81).

y de pagos. La solución fue solicitar apoyo al Fondo Monetario Internacional (FMI), institución que brindaría apoyo financiero bajo la condición de cambiar el modelo desarrollista hacia uno de libre mercado. El gobierno de Francisco Morales-Bermúdez (1975-1980) inició paulatinamente esa transformación al devaluar la moneda, comprimir la demanda y restringir la expansión del gasto público, al mismo tiempo que la deuda externa se expandía peligrosamente[47]. La obligación de pagos contraída con el FMI tuvo como consecuencia la aplicación de programas de estabilización económica que aumentaron la inflación al eliminar los subsidios y comprimieron aún más la demanda, lo que golpeó duramente los ingresos de una buena parte de la población. Estas medidas eran, en pocas palabras, programas de 'ajuste', denominados por sus detractores como «fondomonetaristas»[48]. Este cambio en la gestión económica hizo de disparador de una serie de conflictos sociales, que derivaron en los paros nacionales de 1977 y 1978. Los militares resintieron esta presión y convocaron a una asamblea constituyente para 1979 y el retorno a la democracia para 1980.

Es llamativa la manera en que las interpretaciones del ILD desatienden el impacto de la crisis en cuanto a la demanda doméstica; solo consideran —para luego desestimarla— la variable del desempleo. Los indicadores económicos para el año 1980 no eran nada alentadores para la economía local: desde 1975 las exportaciones peruanas se encontraban estancadas, y aunque sus precios se recuperaron entre 1978 y 1979, lo que le dio oxígeno al gobierno, estos se vieron continuamente afectados por la baja en los términos de intercambio; la producción manufacturera, de acuerdo con los cálculos de Bruno Seminario, pasó de 3103,1 millones de dólares en 1976 (valorizados con el dólar de 1979) a 2725,8 en 1979 (Seminario, 2015, p. 1069); mientras que la PEA nacional aumentó de 7 274 310 personas en 1975 a 8 248 898 en 1980 (p. 1073), un aumento de casi un millón de personas. El desempleo nacional pasó de 4,9% de la PEA en 1975 a 5,2% en 1976, 5,8% en 1977 y 7,2% en 1978; el subempleo aumentó de 42,3% en 1975 a 44,2% en 1976, 48% en 1977 y 46,9% en 1978 (Parodi, 2004, p. 140); y el PBI per cápita disminuyó a un ritmo de -2,4% anual entre 1975 y 1981(Verdera, 2004, p. 13). Es especialmente relevante que entre 1975 y 1980 la inflación fue de 24% anual; solo en 1978 fue de 73,7% y en 1979 de 66,7%, tendencia alcista que se mantuvo durante los años siguientes (Seminario, 2015, p. 1081), mientras

[47] Ciertamente, la deuda pública comenzó a expandirse desde 1970 (Sean, 2001, p. 195). El total de deuda externa pasó de 4132 millones de dólares en 1973 a 9334 en 1979 (Parodi, 2004, p. 140).

[48] La inflación aumentó, entre otros factores, por la eliminación de varios subsidios de los alimentos, lo que afectó duramente la economía de los sectores populares (Parodi, 2004, p. 147).

que los salarios tenían en 1977 el 60% del valor real de 1973, continuando su caída hasta los años 1985-1986.

El PBI medido en Lima pasó de un crecimiento promedio de 6,7% entre 1970-1975 a 1,3% entre 1976-1981; con picos de -5,21% en 1977; -3,98% en 1978 y estancamiento de 0,0% en 1979. Solo se recuperaría notablemente en 1980 con 10,51% y 5,97% en 1981, pero este restablecimiento sería inestable, como veremos posteriormente (Garavito, 1997, p. 5; Schuldt, 2005, p. 36). En Lima la PEA pasó de 1 282 300 en 1975 a 1 298 200 en 1980; un aumento de 1,1%; mientras que el desempleo pasó de 6,5% en 1974 a 7,4% en 1975, 6,5% en 1976, 8,5% en 1977 y 8,0% en 1978; se recuperó en 1979 a 6,5% y volvió a aumentar a 7,1% en 1980. Como se puede observar, en este último año el desempleo aún se encontraba por encima de la tasa de 1974 (Garavito, 2000, p. 24). Mucho más relevante es observar que los ingresos sufrieron una merma constante entre 1975 y 1981: el salario mínimo cayó 5,4% anual, el salario promedio disminuyó 4,7%, y el sueldo promedio 2% (Verdera, 2004, p. 13). Esta depresión económica intensificó las protestas, lo que se reflejó en los paros nacionales, el primero de ellos el 19 de julio de 1977, que trajo como consecuencia el despido de más de 5000 trabajadores (Parodi, 2004, p. 145)[49].

No se ha considerado lo suficiente que los cambios en la estructura del empleo también tuvieron como consecuencia una disminución de la demanda doméstica en Lima. Así, la tendencia de las décadas de 1970 a 1981 es muy reveladora. En 1970 los profesionales y los empleados privados o públicos ocupaban el 32,1% del empleo, en 1975 esta cifra se elevó a 42,1%; mientras que en 1981 cayó a 39,1%; caída especialmente notoria en los empleados públicos no profesionales, que pasaron de 16,9% en 1975 a 10,1% en 1981[50]. El sector obrero en 1970 representaba el 26,4% del empleo, 23% en 1975 y 24,4% en 1981, aquí no se evidencia una disminución severa del sector, pero hay que recordar que los salarios cayeron con mayor fuerza que los sueldos de los empleados en ese periodo. Sin embargo, observado en un plazo un poco mayor, a fines del siglo XX un empleado público ganaba el 10% de lo que percibía a mediados de la década de 1960 (Schuldt, 2005, p. 155). Dos sectores que disminuyen constantemente son los trabajadores independientes no profesionales, que pasaron de 15,7% en 1970, a 13,9% en 1975 y 12,7% en 1981;

[49] Véase también *El Diario* de Marka, 14-8-1980, «Lima: ciudad de desocupados». Este periódico fue un proyecto muy singular, comenzó como una propiedad colectiva de empresarios, trabajadores y partidos de izquierda. Su auge comenzó a fines de 1980 con la dirección de Guillermo Thorndike, quien impuso una línea editorial sensacionalista. Finalmente, en la segunda mitad de la década de 1980 terminaría por ser manejado por integrantes y simpatizantes de Sendero Luminoso (Gargurevich, 2002, pp. 232-235).

[50] *El Diario* de Marka, 14-8-1980, «Lima: ciudad de desocupados».

de igual manera, las trabajadoras del hogar disminuyeron su participación de 9,8% en 1970, a 6,8% en 1975 y 6,5% en 1981. Por el contrario, el sector que aumentó fue el ambulantaje, que pasó de 2,5% en 1970, a 3,7% en 1975 y 5,1% en 1981, es decir, duplicó su peso relativo entre 1970 y 1981 (Verdera, 2004, p. 20). Es interesante hacer notar que la disminución de las trabajadoras del hogar coincide con el descenso del empleo y del sueldo en los estratos más altos. Es posible que muchas familias hayan tomado la decisión de prescindir del servicio doméstico por causa de la disminución de sus ingresos.

En conclusión, «el empleo y los ingresos en Lima fueron afectados negativamente por las políticas de estabilización, por su carácter fuertemente recesivo y por los reducidos reajustes de las remuneraciones nominales que las acompañaron» (Verdera, 2004, p. 14). Además, «existe una relación de largo plazo estable y positiva entre el producto y los salarios reales, dando sustento a la hipótesis del predominio del efecto de demanda del salario real sobre su efecto como costo» (Garavito, 1997, p. 28). Como dramático ejemplo de este efecto recesivo, en 1968 en el Perú el promedio de consumo diario de calorías era de 2070 por habitante y el de proteínas de 62 gramos; mientras en 1980 estas cayeron a 1590 y 50, respectivamente (Parodi, 2004, p. 155).

Las medidas económicas para contrarrestar esta situación y contener la inflación intentaron apoyarse en el control de los precios de los productos básicos. Sin embargo, la demanda por alimentos sobrepasaba largamente la producción local, y el abastecimiento se encontraba mermado por las restricciones en la balanza de pagos y la consecuente disminución de importaciones. Esto derivó en un mercado negro de alimentos, debido a que los precios reales tendían a subir, mientras los precios oficiales se mantenían retrasados. Este fracaso en la gestión económica es el punto de partida de la proliferación de ambulantes: los precios que ofrecían eran menores, debido a que sus costos operativos eran inferiores a los de los comerciantes formales. Por ejemplo, en las inmediaciones del Congreso de la República operaba un mercado informal de anteojos y servicios derivados. El negocio se encontraba en ese lugar por lo menos desde principios de la década de 1950, cuando comenzó la venta de anteojos de sol en la calle Andahuaylas. En 1995 todavía se encontraban vendiendo los pioneros, Segundo Véliz y Víctor Barrientos, quienes se abastecían de nuevos modelos, pero también de anteojos en desuso y aquellos con medidas que eran vendidos por sus propietarios o sus deudos. Cuando algún cliente necesitaba anteojos simplemente se probaba los que tenían medidas uno a uno, hasta que alguno de ellos se adecuaba a sus necesidades visuales[51]. Su gran atractivo era «su diferencial de precios respecto al de las tiendas establecidas, las cuales por un

[51] *El Mundo*, 22-1-1995, «Solo para sus ojos».

trabajo de calidad semejante —y muchas veces más lento— cobran regularmente el doble o más». Uno de los trabajadores, el señor Juan P., no veía en ese momento ningún atractivo «en establecer legalmente su negocio» (Tueros & Carbonetto, 1985, p. 45). Otro ejemplo de competencia en un rubro especializado fue el de la compra y venta de joyas, pues quienes en medio de la crisis utilizaban esos bienes como ahorro requerían de estos comerciantes. Existe registro fotográfico de puestos ambulantes dedicados a esta labor: «la competencia ambulatoria también llegó para los comerciantes, que se dedican a la compra de alhajas usadas y otros objetos valiosos»[52].

No hay que perder de vista este punto: la población sufría una grave merma en sus ingresos y necesitaba abastecerse de diversos productos y obtener servicios al menor costo posible, independientemente de las condiciones de venta. Una vendedora sostenía que «en un mercado cuesta más cara la fruta y la gente quiere comprar más cómodo» (Möller, 1979, p. 468). En la venta de ropa y accesorios se reconoce la misma situación, los ambulantes tienen precios más bajos por sus menores costos operativos, resultado, por ejemplo, del uso intensivo de la mano de obra familiar (Osterling, Althaus & Morelli, 1979, pp. 25, 33). De acuerdo con el ILD, en 1985 los precios de los alimentos y bienes ofrecidos por los ambulantes eran 8% más bajos a los de los mercados y tiendas; incluso entre los alimentos la diferencia podía situarse entre 10% y 16% (Alonso, 1989, p. 59). No se puede descuidar el lado de la demanda del análisis de la explosión del fenómeno ambulatorio; la crisis no incluye únicamente el desempleo y la posible conversión del trabajador en ambulante[53], también significó una caída de los salarios reales y una depresión económica que comprimieron la demanda, lo que hizo que la población busque los productos con el menor precio posible[54]. Iván Alonso, investigador del

[52] *El Comercio*, 5-10-1980, «Compran joyas en la vía pública».

[53] Existe evidencia de que los empleados en huelga o despedidos, como los profesores, recurrían a la venta ambulatoria para obtener su sustento. Por ejemplo, en 1980, quince meses después de haber sido despedidos, un conjunto de maestros fue repuestos en sus antiguos puestos. De acuerdo con sus testimonios, durante su despido se mantuvieron gracias a trabajos ambulatorios. Por ejemplo, el caso de Isabel Hijar, profesora de educación inicial, quien sobrevivió «vendiendo caramelos y cigarrillos, mientras que su madre preparaba tamales y comida para expender al público». La misma situación fue descrita para el maestro Gustavo Reyes, quien se dedicó a varios trabajos ambulatorios mientras duró su despido (*El Diario* de Marka, 11-8-1980, «Tras ser ambulantes, taxistas, mozos, maestros retornan hoy»). De acuerdo con la revista *Caretas*, en 1977 se despidió a cerca de 3500 personas, y el GRFA cesó a 239 secretarios generales de sindicatos, 207 secretarios de defensa, 165 secretarios de organización, 95 secretarios de actas y archivo, 122 secretarios de prensa y propaganda, 102 secretarios de economía, 84 secretarios de asistencia social y 727 dirigentes más (*Caretas*, 616, 22-9-1981, «Juego desleal»).

[54] Un estudio de la ONG Alternativa sostiene que, a fines de la década de 1980, no menos del 40% de la población era atendida por el comercio ambulatorio (Nolasco, 1993, p. 25).

ILD, a pesar de su sesgo institucionalista, comprendió el problema, aunque no lo desarrolló por darle prioridad al argumento de las barreras legales. Alonso (1989) sostiene que «los consumidores requieren de la existencia de comerciantes en lugares cercanos, para que la accesibilidad de los productos haga su compra menos costosa. En consecuencia, suponemos que el comercio ambulatorio responde no al desempleo, sino a necesidades urbanas percibidas por los ambulantes» (p. 47)[55]. Como señala Miriam Granados (1997), «así, la presencia de la venta ambulante se explica no solamente por el exceso de oferta de trabajo existente sino por una demanda suficientemente extendida tanto para el tipo de mercaderías que se ofrece, como para su estilo de comercialización» (pp. 33-34).

Ambigüedades de la política municipal

La sensación de una ciudad invadida por las masas se difundió por los medios masivos de comunicación, y tuvo como escenario el centro de la ciudad, especialmente el emblemático Jirón de la Unión. Además, se puede notar que se intenta representar el comercio ambulatorio como una de las consecuencias de la migración de la población andina a la capital. Un aspecto notorio es que se caracteriza al ambulante principalmente como vendedor de comida en las calles y como mestizo o indígena. Este imaginario se sustenta en las descripciones de la ciudad elaboradas a lo largo del periodo colonial y republicano. Como muestran Macera y Soria, durante buena parte del siglo XIX en la Plaza Mayor se podía encontrar una muchedumbre de vendedores de comida y comensales, espacio en el que los ambulantes eran percibidos como negros y cholos (2015, p. 39).

El alcalde Piero Pierantoni intentó solucionar el problema de la expansión de los ambulantes por dos vías. Por un lado, convocó a un debate entre febrero y marzo para discutir el problema con especialistas de distintas disciplinas (derecho, sociología, urbanistas, etcétera), y concibió a los ambulantes como un problema social[56], preocupación que se encuentra en la alcaldía desde principios de la década de 1970[57]. En ese año un informe de la municipalidad sugiere modificar la reglamentación, cuyo texto se estaba coordinando con la Cámara de Comercio de Lima. En el anteproyecto de ley se afirmaba que el problema del ambulantaje tenía complejas causas socioeconómicas

[55] Alonso demuestra más adelante en el mismo texto que (contradictoriamente respecto a su tesis principal) «en la medida en que las remuneraciones per cápita suben, el número de vendedores disminuye» (p. 53).

[56] *Correo*, 13-1-1980, «Alcaldía anuncia realización de gran fórum: el problema de los ambulantes en debate».

[57] AHML, Actas del Concejo, 12-3-1970.

> que no pueden resolverse en forma compulsiva y drástica, dejando de lado el aspecto social y humano del vendedor ambulante que, como consecuencia del desempleo, hace del comercio callejero fuente de aprovisionamiento para su cotidiana subsistencia; para que el anteproyecto de ley propicie la formación de mercados cooperativos que ocuparán los ambulantes, dejando libre la vía pública; define al vendedor ambulante, lo empadrone y le pone requisitos para eliminar de ese comercio a malhechores y mujeres de mal vivir que encubren sus actividades ilícitas aparentando ser ambulantes; autoriza a las Municipalidades a fijar el número de ambulantes que limita sus zonas donde pueden ejercer sus actividades y los obliga a pagar la tributación de ley [...][58].

Como se evidencia en la cita, en 1970 el espíritu de las disposiciones municipales era el de reubicar a los ambulantes en mercados, pues se consideraba que su situación era producto del contexto antes que resultado de una voluntad de afectar a la ciudad. También se pone en evidencia una preocupación que se encontrará en los siguientes años: la necesidad de diferenciar al 'verdadero' ambulante de quien utilizaba la calle con otros fines. Esta política no sería respaldada por las siguientes administraciones, que optaron fundamentalmente por la vía de la represión. Así, en 1980 el alcalde Pierantoni inició un plan de desalojo de los vendedores orientado a 'limpiar' el centro de Lima con el objeto de proceder a su remodelación, especialmente en la avenida Uruguay y los jirones Belén y Quilca; esta vez no se trataba de reubicar a los vendedores, se los expulsaba de las calles[59]. El plan, heredado de la gestión del anterior alcalde, Roberto Carrión, pretendía recuperar Lima para ponerla a la altura de capitales como París, Buenos Aires, Madrid o Roma[60]. A diferencia de los planes posteriormente desarrollados en la segunda mitad de la década de 1990, se trataba de reconvertir a la capital en una ciudad cosmopolita antes que retornar a la «arcadia criolla»[61].

Así, el 15 de enero, mucho antes del mencionado conversatorio, comenzó una campaña relámpago destinada a erradicar cerca de 120 quioscos de los más de 500 que ocupaban algunas calles del centro. Puestos de ventas y de servicios ubicados en las avenidas Abancay, Uruguay y Alfonso Ugarte fueron eliminados[62] debido al

---

[58] AHML, Actas del Concejo, 17-12-1970. No tengo más referencias de esta iniciativa de ley.

[59] *Correo*, 14-1-1980, «Cambiarán el centro de Lima».

[60] *Correo*, 24-1-1980, «La Colmena será Boulevard».

[61] En este libro la palabra «arcadia» se utiliza en el sentido de la añoranza por un pasado limeño asumido como idílico, sin conflictos sociales, con una ciudad ordenada, limpia y sin migrantes. Como es conocido, fue Sebastián Salazar Bondy quien acuñó el concepto añadiéndole el matiz de una nostalgia por el tiempo colonial, ideario creado desde la perspectiva de las elites oligárquico-criollas de la segunda mitad del siglo XX.

[62] Posteriormente se amplió el operativo a las avenidas Colmena y Tacna.

peligro que representaban para los peatones, quienes debían transitar por las pistas por causa del bloqueo de las veredas por vendedores y compradores. El alcalde Pierantoni declaró que la cantidad de triciclos[63], puestos ambulantes de comida y otros productos, daban «asco» por causa de la pestilencia de la basura dejada en las calles por los ambulantes[64].

La acción municipal fue considerada por el diario *Correo* como de «limpieza», informaron que durante el operativo se decomisaron puestos dedicados a la venta de comida, copias de llaves, reparación de artefactos eléctricos, imprentas, ventas de discos, entre otras cosas. La única actividad que se consideró adecuada para el espacio urbano fue la venta de periódicos, los populares canillitas, actividad para la cual la municipalidad ofreció entregar puestos metálicos[65]. La acción, llamada «Operativo municipal de erradicación», fue resistida por los vendedores, quienes reclamaron la devolución de las mercaderías incautadas y adujeron que la destrucción de sus quioscos era quitarles su única herramienta de trabajo, pero también reconocían que era comprensible el afán del nuevo alcalde para mejorar el ornato de la ciudad, por lo que exigieron que se realice sin razias ni confiscaciones[66].

Este clima tenso contribuyó a que el alcalde inicie otro tipo de política, claramente más conciliadora. Aprovechándose de un derecho que provenía de la época colonial, la sisa, las municipalidades lo convirtieron en un impuesto que gravaba el uso del espacio público (Budlender, 2009, p. 4)[67], aunque nunca estuvieron claramente establecidas ni la legalidad ni los montos[68]. Hacia fines del siglo XIX la Ley Orgánica de Municipalidades estableció este tributo, vigente hasta 1958, que afectaba a la introducción de todo tipo de ganado en la ciudad (Ghersi, 1989, p. 92). Sin embargo, diversos municipios en Lima aplicaron este tributo hasta la década de 1990, gravaban el uso del espacio público[69] a pesar de no contar con

[63] El triciclo se convirtió en el objeto más representativo de la venta en las calles y de la Lima de los años ochenta. Posteriormente, a mediados de la década de 1990, el grupo musical Los Mojarras se hizo célebre por su composición «Triciclo Perú», la cual refleja la dureza de la vida en esa época (Ccopa, 2009, pp. 133-136).

[64] *Correo*, 24-1-1980, «La Colmena será Boulevard».

[65] *Correo*, 15-1-1980, «Operación relámpago contra los quioscos: erradican 120 del centro de Lima».

[66] *Correo*, 17-1-1980, «Kioskeros reclaman».

[67] Desde el siglo XIX se discutió el pago de este tributo y el supuesto derecho que generaba para el uso de las vías públicas (Macera & Soria, 2015, p. 44).

[68] Es interesante que en el caso mexicano el pago tampoco estuviera claramente establecido y se cobraba de forma discrecional y en muchos casos abusiva (Mendiola, 2017, p. 38).

[69] Estos vaivenes de la política municipal también se expresan en las autorizaciones temporales para vender en el espacio público. Por ejemplo, en 1970 el municipio autorizó el uso de la avenida San Luis, esquina Mariscal Castilla como ubicación temporal para el centro de comercialización de pescado (AHML, Actas del Concejo, 23-10-1970).

una base legal. Esta contribución permitió a los ambulantes consolidar su derecho a usar el espacio público, al mismo tiempo que permitía obtener importantes rentas a municipios siempre necesitados de ellas (Ghersi, 1989, p. 95; De Soto, 1986, p. 74)[70], lo que permitiría a los ambulantes negociar con las autoridades el uso de las calles y plazas (Granados, 1997, p. 2; De la Flor, 2000, p. 64). Aunque la Municipalidad de Lima no cobraba este derecho, justamente con el objeto de no reconocerles a los ambulantes ese privilegio (Nolasco, 1993, p. 28; Ghersi, 1989, p. 95), hay evidencia de que desde fines de los años sesenta se les cobraba de una manera semiclandestina. Una indagación de la municipalidad descubrió que en el Mercado Modelo y otro más se cobraba un derecho a los ambulantes que vendían en el interior. Aunque en 1969 se les dejó de cobrar, en el debate de la sesión de regidores las opiniones estaban divididas en cuanto a la posibilidad de aplicarles un tributo[71].

El alcalde Pierantoni consideró la posibilidad de cobrarles a los ambulantes un gravamen de estas características, considerado por los vendedores como un 'cupo', aunque señaló que eso no significaría la cesión de derechos sobre la vía pública sino que solo sería un pago por su uso[72]. A fines de enero el alcalde se reunió con dirigentes de los comerciantes para negociar el pago del tributo, con el objeto de mejorar las alicaídas rentas municipales y financiar las obras que había anunciado[73]. Los comerciantes con tiendas establecidas calificaron la sugerencia como desatinada y manifestaron claramente su desacuerdo. Ellos se consideraban los principales afectados por la presencia de los ambulantes y los responsabilizaban de la baja de ventas[74]. Por ejemplo, una propietaria pidió «que salgan los ambulantes del Jirón de la Unión y de las calles principales», y solicitó su reubicación en otros lugares; mientras que diversos vendedores ambulantes entrevistados por el diario *Correo* prefirieron esperar a conocer los montos y condiciones del cupo para dar su opinión[75]. Además, el alcalde informó que en las siguientes semanas se retomaría el plan de remodelación de las avenidas Colmena, Quilca y Belén, razón por la cual era urgente solucionar el problema de los ambulantes. Sin embargo, no solo los ambulantes ocupaban la calle, se tiene referencias de que, desde la segunda mitad

[70] A principio de la década de 1990, cerca de veinte distritos limeños cobraban el derecho de uso del espacio público, sisa, a los ambulantes (Nolasco, 1993, p. 27).

[71] «Sesión extraordinaria», 19-3-1969, Boletín Municipal, enero-febrero-marzo, 1969, pp. 60-61.

[72] *Correo*, 17-1-1980, «Se cobraría un cupo a los ambulantes».

[73] *Correo*, 24-1-1980, «Alcalde se entrevista hoy con ambulantes».

[74] También existe la posibilidad de que las tiendas ubicadas en calles especializadas en la venta de algunos productos sufran con más intensidad la caída de la demanda, dada la competencia entre los negocios legalmente establecidos (Bazalar, 1976, p. 24).

[75] *Correo*, 18-1-1980, «Ambulantes verán el cupo».

de la década de 1970, justamente cuando estalló la crisis económica, las tiendas legalmente establecidas comenzaron a buscar diversas maneras de atraer a los compradores: «se sacan los escaparates a la calle, se viste de una manera llamativa a las vendedoras, o se las ubica en lugares estratégicos para prácticamente 'arrastrar' a los clientes a los centros de venta» (Bazalar, 1976, p. 24). Las tiendas también utilizaban la estrategia de contratar vendedores asalariados para la venta en la calle, especialmente entre los distribuidores de dulces y golosinas (Möller, 1979, pp. 425-427)[76]. De acuerdo con Osterling, este tipo de ambulantes eran conocidos con el sobrenombre de «chacales» (1979, p. 188).

El problema no fue ocasionado únicamente por la crisis económica y el aumento de ambulantes. Las autoridades también contribuyeron con este estado de cosas por medio de una serie de medidas ambiguas que permitieron la negociación entre los comerciantes y el municipio. En 1975 el acalde de la ciudad, Arturo Cavero, declaró a los medios que la represión de los ambulantes no era lo adecuado, pues «ellos han demostrado que quieren trabajar tranquilos, sin palos y sin correr» (Bazalar, 1976, p. 32)[77]. Por otro lado, los ambulantes del Cercado no pagaban ningún tipo de derecho por usar la vía pública, mientras en el vecino municipio de La Victoria una compañía privada encargada por el Concejo les cobraba un derecho a los ambulantes (Möller, 1979, p. 459). En 1980, a poco de iniciado el año, se anunció la suspensión de un inspector municipal del Callao, quien alquilaba irregularmente kioscos en una céntrica avenida de la provincia. De acuerdo con las denuncias de los propios comerciantes, el inspector llegó a concesionar varias cuadras de la avenida Sáenz Peña a tres individuos, quienes a su vez los realquilaron a otros vendedores de juguetes para la temporada navideña. El funcionario entregaba recibos a nombre del municipio, mientras los concesionarios lotizaban la avenida y alquilaban los lugares a otros ambulantes, así obtenían una buena ganancia[78].

Esta confusión legal no solo provenía de la Municipalidad de Lima y su administración del año 1980. Desde principios del siglo XX se intentó regular el comercio ambulatorio: en 1915 una ordenanza municipal intentó empadronar a los vendedores, estableció la obligatoriedad de las licencias para la venta de comida y diseñó una infraestructura para el uso de los comerciantes. El año siguiente, el alcalde Pedro de Osma reguló la venta de alimentos en las calles, exigió una inspección

[76] Möller considera que los ambulantes no afectaban el comercio formal, sus productos se dirigían hacia otro mercado. Es posible que en 1975 esto fuera correcto, pero con la crisis de la década de 1980 el panorama cambió radicalmente (Möller, 1979, p. 436).

[77] La prensa de la época tampoco consideraba al desalojo como la única opción. Por ejemplo, el diario *Última Hora* tituló una nota del 18 de agosto de 1975 «Desalojos: no es la solución» (citado por Bazalar, 1976, p. 65).

[78] *El Comercio*, 6-1-1980, «Suspenden a Inspector Municipal por irregular alquiler de kioskos».

de higiene y el uso de implementos adecuados por parte de los vendedores. Un aspecto importante de esta reglamentación es que impedía que el comerciante se estacionara en las calles, y prohibió la venta de frituras como choncholíes y comidas picantes. Durante las décadas de 1930 y 1940 continuaron las tensiones entre ambulantes y autoridades. En 1949 el diario *La Prensa* «emprendió una campaña contra las vendedoras ambulante de frutas, a las que calificaba de auténtica plaga urbana. En ese sentido, requirió a la autoridad municipal desplazarlas del centro de Lima hacia las calles apartadas». Incluso el diario *El Comercio* denunció que las vendedoras de comida enfermaban a la población con la temible tifoidea. En ese mismo año de 1949 el municipio insistió con la reglamentación e invocó a la población a rechazar la compra de productos elaborados con malas condiciones de higiene (Macera & Soria, 2015, pp. 175-188).

En la década de 1950 se incrementó el número de vendedores, percibidos como 'serranos' por la prensa de la época. Desde este tiempo se describe al centro de Lima invadido por diversos tipos de ambulantes, quienes son descritos como extraños a la capital y como responsables del deterioro urbano y la falta de higiene en las calles (Macera & Soria, 2015, pp. 189-191). Desde 1959 el municipio intentó nuevamente reglamentar el comercio ambulatorio, definido como negocios con capital limitado y que vendían artículos «que conducen por un medio liviano de transporte por determinados lugares permitidos de la ciudad, sin poder estacionarse en la vía pública más del tiempo necesario para efectuar sus ventas». La reglamentación citaba una diversidad de ventas permitidas: animales, objetos ornamentales, juguetes, objetos de limpieza, impresos, flores, verduras, frutas, hasta dulces, comida preparada, etcétera; y penaba con el decomiso a aquellos vendedores que traficaran productos fuera de la lista señalada (Tueros & Carbonetto, 1985, p. 37). El reglamento indicaba que estaba prohibido vender todo tipo de alimentos en el piso, exigía carné de sanidad, otorgaba placa de rodaje a las carretillas y obligaba a los ambulantes al pago de un impuesto. De ese modo, se admitía este tipo de ocupación en la ciudad (Bazalar, 1976, p. 166). También se agregó la prohibición del comercio ambulatorio a menos de 200 metros de mercados de abastos, hospitales, colegios, cinemas y edificios públicos, justamente espacios atractivos por el flujo de personas[79], disposición que en la década de 1970 había sido ampliamente desacatada por los vendedores[80].

[79] La venta en las calles siempre aprovecha ese tipo de contexto urbano (véase Mendiola, 2017, p. 33).
[80] *La Prensa*, 9-2-1971, «Los ambulantes de siempre» (citado en Bazalar, 1976, pp. 84, 86).

En 1964, el alcalde Luis Bedoya Reyes promulgó otras disposiciones para trasladar a los ambulantes de la avenida Abancay[81], acusándolos de evadir los controles y de ensuciar las calles, además de constituir una competencia desleal para los comercios legales (Möller, 1979, p. 457)[82]. La disposición no fue acatada por los ambulantes y se produjeron enfrentamientos con la Guardia Civil, por lo que los vendedores optaron por refugiarse en locales comerciales y estacionamientos del centro. Esto motivó que el Concejo decrete la prohibición de admitir carretillas, triciclos, etcétera, en esos lugares (Soto, 1986, p. 88). La violencia de la represión motivó a los ambulantes a organizarse, crearon el Sindicato de Pequeños Comerciantes y de Vendedores Ambulantes de las zonas de La Victoria y la Federación de Vendedores Ambulantes del Mercado Central y Calles Adyacentes (Fevacel), organización que surgió con el objeto de proteger a los ambulantes luego del incendio del mercado en 1964 (Soto, 1986, p. 89)[83].

Entre 1967 y 1971 la tensión contra los ambulantes aumentó, se presentaron más de cien denuncias en su contra, remitidas por los propietarios de comercios, asociaciones de mercados y algunas instituciones públicas, como ministerios, colegios y hospitales, acusándolos de atentar contra el ornato de la ciudad y de ser una competencia desleal (Möller, 1979, pp. 458-459). Desde 1969 el municipio dejó de lidiar con el problema de los ambulantes. La represión inicial se amparaba en las disposiciones que

> […] obligan a la Policía Municipal, a la Guardia Civil, al Concejo, y a las autoridades políticas a la erradicación y decomiso de los productos vendidos en forma ambulatoria, [en] los decretos supremos que disponen el decomiso de los productos farmacéuticos y cosméticos que no sean vendidos en farmacias, y de los lentes que no sean vendidos en ópticas, y a las normas del código sanitario sobre los productos de alimentos que se expendan en la calle sin los debidos controles bromatológicos[84].

Producto de la actividad del municipio y de las autoridades se produjo una reacción negativa en la opinión pública, más una serie de juicios contra el alcalde. Por esta razón, el Concejo decidió

[81] En 1970 la presencia de los ambulantes en esa avenida representaba una fuerte preocupación para el municipio (AHML, Actas del Concejo, 12-3-1970).

[82] Este argumento se encuentra presente en los reclamos los comerciantes formales de diversas partes del mundo (Bromley, 2000, p. 14).

[83] El antiguo Mercado Central se inauguró en 1902 y se destruyó por un incendio el 29 de febrero de 1964. El local actual comenzó a funcionar en 1967.

[84] «Sesión extraordinaria», 20-8-1969, Boletín Municipal, agosto-setiembre-octubre, 1969, p. 33.

> Exonerar al Sr. Inspector de Policía Municipal don Jaime García Montero del cumplimiento de sus funciones del cargo respecto de la ordenanza, Reglamento y demás disposiciones vigentes sobre el comercio ambulatorio, hasta que el Poder Judicial por los cauces propios de su Ordenamiento con la Ley de Procedimiento vigente defina la situación planteada por el auto apertorio [sic] de instrucción […] declarar que no serán imputables al Concejo Provincial ni a los Concejos Distritales de la Provincia, los perjuicios que pueda producir el comercio ambulatorio en las zonas prohibidas por las ordenanzas, Reglamentos y demás disposiciones vigentes[85].

Este es un hito importante. A partir de este momento la municipalidad dejó de ser la única institución encargada de velar por el orden urbano, y el control de las calles comenzaría a ser compartido entre el municipio, las autoridades centrales y la policía, lo que fragmentó el poder justamente en el momento en que el fenómeno ambulatorio comenzaba a masificarse. Se pueden ofrecer dos pruebas de esta confusión y fragmentación. En primer lugar, en el mismo año en que la municipalidad se «lava las manos» de lo que pudiera ocurrir con el comercio ambulatorio en la ciudad, la alcaldía publica una ordenanza general de ornato y paisaje urbano de la provincia de Lima, en la cual se permite el uso de quioscos en la vía pública, siempre y cuando se emplee el modelo que la municipalidad ofrecía[86]. Por otro lado, hasta 1982 el comercio ambulatorio también fue regulado por el Ministerio de Comercio, pero cuando este se integró con el de Economía en 1982, la atribución regresó al ámbito municipal, creándose la Dirección de Comercio No Organizado «para tratar específicamente problemas de la organización y planeamiento de la venta ambulatoria, que [era] una función que antes solo afectaba a la Policía Municipal» (Tueros & Carbonetto, 1985, p. 19). Entre 1969 y 1982 el comercio informal no solo había ganado en extensión, también había obtenido derechos y negociado su estatus en la ciudad, y sacó provecho, sin duda, de la fragmentación del poder y la oscilación de las disposiciones que pretendían regularlos[87].

En 1971 la Confederación General de Comerciantes (Conaco) propuso como solución la creación de ferias ambulantes y la liberación de algunas calles luego de las ocho de la noche, hora en que no afectarían a los negocios legalmente establecidos

---

[85] «Sesión extraordinaria», 20-8-1969, Boletín Municipal, agosto-setiembre-octubre, 1969, p. 33.

[86] «Sesión extraordinaria», 20-8-1969, Boletín Municipal, agosto-setiembre-octubre, 1969, p. 87. Las ordenanzas intentaban controlar una serie de aspectos urbanos, por ejemplo, prohibía el colgado de ropa (y lencería en general) en los balcones que den a la vía pública, también se prohíben los paraderos de transporte público en varias calles de la ciudad (pp. 88-89).

[87] En la ciudad de Arequipa también el problema comenzó a discutirse más intensamente desde 1969 (Yungure, 2009).

(Bazalar, 1976, p. 25; Macera & Soria, 2015, p. 193). En 1973 una comisión encargada por el GRFA dictaminó que los ambulantes deberían ser erradicados de todos los sitios prohibidos y propuso ferias ambulantes y micromercados (anteriormente propuestos por la Conaco) (Möller, 1979, p. 462). En 1975, año de grandes tensiones, existía al menos una organización de ambulantes con relativa fuerza: la Asociación de Vendedores Ambulantes de Lima Metropolitana, dirigida por Víctor Alcántara (Bazalar, 1976, p. 102)[88]. Esta agrupación logró negociar con el alcalde Cavero, quien cedió provisionalmente tres grandes avenidas para el comercio ambulatorio: Alfonso Ugarte, Grau y Abancay. De este modo se consolidó el derecho a ocupar las calles, con el compromiso de «respetar todas las arterias de Lima cuadrada e inclusive cooperar con la Municipalidad en lo que se refiere al control de sus ordenanzas, limpieza y conservación de la ciudad»[89].

En 1977, una comisión especializada, formada por representantes de varios ministerios, llegó a la conclusión de que el incremento del ambulantaje provenía de factores estructurales y recomendó que la solución no debía insistir en la represión y exceso de controles. Sus propuestas consistían en empadronar a los vendedores y asignar zonas permitidas y horarios, junto con apoyo crediticio y seguridad social, recomendaciones que no se implementaron (Tueros & Carbonetto, 1985, p. 39). En 1978, el alcalde de Lima, Enrique Falconí, reinició la política represiva, y alertado por la 'infiltración' marxista en las organizaciones de ambulantes desalojó gran número del Centro, pero luego de un tiempo no pudo impedir la reocupación del espacio (Soto, 1986, p. 94). En 1979 el alcalde Roberto Carrión intentó nuevamente negociar con los ambulantes y logró que limpien las calles del centro y usen uniformes. Sirviéndose de la coyuntura, las organizaciones comenzaron a 'lotizar' las calles, acción rechazada por las autoridades y la Conaco.

Las diversas políticas que oscilaban entre la reubicación, el desalojo y la tolerancia, facilitaron la proliferación de asociaciones de defensa del comercio ambulatorio[90]. Los vendedores dividieron las zonas de trabajo en sectores, eligieron delegados para coordinar la actividad comercial y el aseo de su zona, y coordinaron 'baldeos' con los vecinos (Osterling, 1979, p. 192). Osterling da cuenta de que

---

[88] Por esos mismos años (1973) se fundó en Puebla la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA), organización que cumplió similar función que las limeñas e incluso ambas tienen su auge hasta mediados de los años 1980 (véase Mendiola, 2017, pp. 1, 4).

[89] *Expreso*, 19-9-1975, «Ambulantes tienen tres avenidas y cuidarán ornato público» (citado por Bazalar, 1976, p. 103). Golte y Adams en su estudio de algunas comunidades de migrantes establecieron la importancia de las asociaciones para defender los derechos de los ambulantes a vender en las calles (1987, pp. 66, 213).

[90] Miriam Granados señala que las «percepciones, principalmente del gobierno local y central sobre el comercio ambulatorio, han cambiado a través del tiempo. Estas percepciones, como señala López Castaño para el caso de Colombia y en general para Latinoamérica, han oscilado entre el

en el Cercado existían varias cooperativas de vendedores en mercados y diversas asociaciones de ambulantes: la Asociación Nacional de Vendedores Ambulantes del Perú, el Comité para la Unificación y la Organización de los Vendedores Ambulantes del Perú, que dio paso a la Federación Departamental de Vendedores Ambulantes de Lima (Fedeval), fundada el 20 de mayo de 1979 (p. 199). Estas organizaciones se crearon con el objetivo concreto de defender el derecho de los comerciantes a ganarse la vida en el espacio público, y articulaban sectores que no estaban tradicionalmente representados en los partidos populares, tales como el APRA y las diversas agrupaciones de izquierda. Por esa razón, podían negociar directamente con las autoridades, sin recurrir a la intermediación de los partidos[91]. Sin embargo, debido al clima político de fines del gobierno militar y la masa de ambulantes representados, rápidamente llamaron la atención de los movimientos políticos[92].

Esta política dubitativa, y quizá oportunista, contribuyó a posicionar a los ambulantes en el espacio público. Son diversos aspectos los que se deben considerar. Por un lado, el argumento del derecho a trabajo, tema altamente sensible a la opinión publica en un momento en el que se sentían directamente los efectos de los ajustes en la política económica aplicados a fines de la década de 1970. Los trabajadores consideraban que su derecho a subsistir comprometía a las autoridades a conseguir una solución a su problema y solicitaban su reubicación en otros espacios[93]. Por otro lado, estaba la actitud de la municipalidad, que reconocía, al menos parcialmente, el derecho de los ambulantes a ocupar los espacios públicos. Además, los vendedores que usaban las calles, al no contar con un trabajo dependiente o formal, no pueden hacer ninguna huelga como se ha afirmado para otras latitudes. Es decir, su lugar de trabajo es al mismo tiempo su espacio de protesta, lo que hizo más visibles sus reclamos ante la opinión pública (Mendiola, 2017, p. 8).

El diario *El Comercio* se hizo eco de la preocupación por la expansión del comercio ambulatorio y señaló que debería solucionarse definitivamente el problema, no adoptarse medidas esporádicas. Su opinión se basaba en la consulta

---

'autoritarismo represivo', el 'paternalismo permisivo' y la 'tolerancia resignada'» (véase también De la Flor, 2000, p. 65).

Aunque las organizaciones limeñas comparten con las de la ciudad de Puebla (México) la defensa de los espacios públicos como lugares de trabajo, en el caso peruano, al estar bajo una dictadura militar, estas asociaciones populares e independientes contribuyeron con aumentar el descontento contra el gobierno y acelerar su caída. (Para el caso mexicano véase Mendiola, 2017, p. 3).

[91] La misma situación se observa en el caso de Puebla (ver Mendiola, 2017, pp. 8-9).

[92] A pesar de esta evidencia, aún persiste la imagen de que la migración hacia las ciudades no produjo una expansión de los sectores populares modernos, sino que más bien incrementó el número de trabajadores informales y por lo tanto la anomia y apatía política.

[93] *Correo*, 16-3-1980, «Ambulantes piden lugar para irse». Esta nota aborda el caso de los vendedores de la Plaza de la Bandera, en el distrito de Pueblo Libre.

realizada a especialistas pertenecientes al Instituto de Generación de Empleo Masivo, quienes sostenían que el caos urbano debería ser urgentemente resuelto. Para tal efecto, el economista Alejandro Ramos Cánepa propuso persistir en la colonización de la selva como una forma de derivar la necesidad de trabajo de los vendedores; sin embargo, otras personas entrevistadas consideraban que había que respetar el derecho de las personas a trabajar, aunque debería buscarse una solución para no afectar a la ciudad ni sus habitantes[94].

Este debate se tornó especialmente áspero en los días previos a la celebración de la independencia nacional. Para esas fechas, los ambulantes fueron obligados a abandonar diversas calles del centro, la denominada Lima cuadrada, entre ellas la avenida Abancay y las inmediaciones del Mercado Central. El alcalde Pierantoni ordenó el desalojo de los ambulantes de las calles del centro, con el objeto de limpiarlas y dejarlas listas para las fiestas de 1980. Anteriormente, en 1970, la Cámara de Comercio de Lima consideró la presentación de un proyecto de ley cuya argumentación señalaba que «los vendedores ambulantes […] constituyen un espectáculo que deforma la prestancia urbana de nuestra ciudad, impiden la normal circulación y ofrecen una imagen muy triste, para el visitante extranjero, devaneciendo [sic] los programas de incentivación turística en el que está actualmente el gobierno revolucionario» (Bazalar, 1976, p. 25). El diario *La Prensa* informaba en 1971 que vendedores de alimentos rodeaban el Ministerio de Educación, «en condiciones deplorables» (citado por Bazalar, 1976, p. 84)[95].

La política de desalojo fue apoyada totalmente por los comerciantes legalmente establecidos. La Conaco anunció su discrepancia con las medidas temporales, al mismo tiempo que exigían una solución definitiva del problema; los dueños de negocios entrevistados por el diario *El Comercio* consideraron de manera unánime que los ambulantes constituían una competencia desleal, «al margen de los problemas de higiene y ornato que originan», exigían que se formalicen y que no se les permita utilizar libremente las calles, y dieron su apoyo al desalojo[96]. Además, la preocupación comenzó a deslizarse hacia el ornato de la ciudad, de cara a la inminente trasmisión de mando presidencial. Así, los comerciantes entrevistados afirmaban que el aumento de ambulantes

[94] *El Comercio*, 14-7-1980, «Público demanda una solución al problema de vendedores ambulantes».
[95] La presencia de vendedores callejeros retaba el imaginario de ciudad de los comerciantes legalmente establecidos, que se autopercibían como 'gente decente', al igual que en el caso mexicano (Mendiola, 2017, p. 35).
[96] *El Comercio*, 19-7-1980, «Que los ambulantes dejen centro, apoyan dueños de establecimientos».

desdice de nuestra categoría de ciudad capital y provoca una serie de problemas, entre ellos la congestión de tránsito, tanto vehicular como peatonal [...] [La medida de desalojo] con motivo de las Fiestas Patrias y la llegada de dignatarios extranjeros para la ceremonia de la transmisión del mando presidencial, debería implantarse [...] [los ambulantes son] un cuadro poco grato a ojos del turista y en extremo delicado. La invasión de estos vendedores parece indetenible[97].



Figura 1. Vendedores de comida en los alrededores del Parque Universitario. «A la hora señalada». *Caretas,* 645, 4 de mayo de 1982, p. 48.

La relevancia de esta fecha era mayor que de costumbre: el 28 de julio de 1980 era la trasmisión del mando a un gobierno legítimamente elegido luego de doce años de dictadura militar. El municipio se encargaría de limpiar los monumentos en las plazas Ramón Castilla, San Martín, entre otros, con el objeto de ofrecer «una vista agradable a los ilustres visitantes extranjeros que asistirán a la ceremonia»[98]. Además, el alcalde consideraba que los ambulantes solo traían riesgos para la salud, como en el caso de los vendedores de comida, y añadió que «si la gente tuviera el civismo de no comprarles, no habría ambulantes»[99]. Mientras tanto, los vendedores que no se vieron afectados por la medida se dispusieron a ordenar, pintar y ornamentar sus puestos de venta, según el diario *El Comercio*, «como muestra de patriotismo, civismo y colaboración con la efemérides»[100].

[97] *El Comercio*, 19-7-1980, «Que los ambulantes dejen centro, apoyan dueños de establecimientos».

[98] *Correo*, 17-7-1980, «El centro de Lima quedará sin ambulantes».

[99] *El Diario* de Marka, 18-7-1980, «Ambulantes no quieren mercado exclusivo».

[100] *El Comercio*, 25-7-1980, «Especialistas contratados por ambulantes plantearán solución al gobierno».

Los vendedores ya se encontraban organizados y anunciaban que en su V Congreso, convocado para el 15 de julio de 1980, discutirían las propuestas de la autoridad, pero señalaban que «aunque ya hemos acordado mantenernos firmes en nuestros sitios, analizaremos otros pasos para impedir que nos saquen de los lugares que *por derecho* nos pertenecen»[101]. El vocero de los vendedores, Abraham Flores, dirigía la Asociación de Ambulantes Revolucionarios de la plaza Ramón Castilla, gremio que junto con la Asociación de Vendedores Ambulantes de la avenida Alfonso Ugarte, plaza Dos de Mayo y anexos, realizaron un operativo de limpieza el día anterior, cuyos gastos fueron sufragados con sus recursos. Cerca de cuatro mil ambulantes limpiaron las calles, labor que, de acuerdo con sus declaraciones, realizaban cada tres meses. Los ambulantes señalaron que el costo de la limpieza era cubierto totalmente por ellos, las demás instituciones solo coordinaban la intervención. Los dirigentes aprovecharon la oportunidad para exigir a las autoridades que cesen las órdenes de desalojos, que les ofrezcan escuelas superiores gratuitas y garantías para los 'auténticos ambulantes', tema que aparecerá luego en los proyectos de ordenanzas promovidos por los gremios de comerciantes informales y los políticos de izquierda. Los dirigentes Espinoza y Flores señalaron que para limpiar las calles coordinaban con las autoridades policiales y municipales, baldeando la zona «para impedir que se desarrollen focos infecciosos y para contribuir con el ornato de la ciudad»[102].

Este hecho muestra con claridad que los vendedores estaban interesados en demostrar su responsabilidad en cuanto al uso del espacio público, pero también la poca iniciativa y escasez de recursos por parte de las autoridades para resolver los problemas urbanos. Desde tiempo atrás, la limpieza pública de la ciudad se encontraba mal atendida. En 1970 se informó que solo el 60% de la flota de camiones se encontraba operativa[103], mientras en el año de 1980 poco menos de setenta camiones compactadores funcionaban adecuadamente, considerándose que se necesitaba un mínimo de doscientos[104]. La municipalidad reconocía que en 1981 solo contaban con 97 camiones compactadores y cerca de 200 camiones alquilados de baranda, inadecuados para el recojo de la basura; además, el 66% de ellos se concentraban en los distritos más céntricos, y dejaban sin atención a los periféricos, densamente poblados[105].

---

[101] *Correo*, 14-7-1980, «Vendedores callejeros anuncian V Congreso». El énfasis es mío.

[102] *El Diario* de Marka, 14-7-1980, «A todo costo, ambulantes limpian zona de trabajo».

[103] AHML, Actas del Concejo, 30-10-1970.

[104] *Caretas*, 549, 26-5-1980, «Basura que mata», p. 48.

[105] Boletín Municipal, julio-setiembre 1981, p. 69.

Adicionalmente, en 1980 las municipalidades se encontraban afectadas por una huelga de trabajadores, que solo llegó a solucionarse el 14 de julio[106]. Durante ese año el municipio sufrió varias huelgas de empleados y obreros, lo que trajo como consecuencia la proliferación de basurales en el centro de Lima. El alcalde Pierantoni decidió la creación de la Empresa de Servicios Municipales de Limpieza, con el objeto de privatizar el recojo de la basura y acabar con el negocio clandestino de la venta de desperdicios[107]. Esta medida fue rápidamente rechazada por los obreros y, a mediados de año, 4000 trabajadores se declararon en huelga. El centro de Lima se llenó de basurales, que contenían cerca de cuarenta mil toneladas de desperdicios y afectaban seriamente la salud de los habitantes.

Otro conjunto de ambulantes, organizados bajo la dirección de Guillermo Nolasco en la Fedeval, anunciaron una movilización para protestar por el inminente desalojo, y solicitaron a las autoridades municipales y estatales permiso para trabajar en las calles hasta el día 26 de julio[108]. Nolasco, secretario general del gremio, afirmaba que el gobierno no tenía un genuino interés en resolver el problema, atribuía su origen al «sistema capitalista en el cual vivimos», de esta forma expresaba una percepción diferente de la situación[109]. Incluso, en el contexto del ascenso a la presidencia de Fernando Belaunde, los ambulantes solicitaron una reunión con él, en la que exigieron el cese de los desalojos. La Fedeval entregó un documento con alternativas de solución, en el que le solicitaron al nuevo presidente que interceda por ellos ante el municipio y afirmaron que si no les concedían el uso de las calles no tendrían otra manera de vivir, prometían dejarlas el 26 de julio «limpiecitas con ocasión de los días de fiestas patrias y de la trasmisión de mando»[110]. Además, exigían respeto al derecho al trabajo y denunciaban el alza de la sisa, los decomisos, el acaparamiento y especulación en los pocos supermercados de la época (Monterrey, Scala, Tía, etcétera). Guillermo Nolasco afirma que, desde su fundación, la Fedeval se preocupó en concertar un reglamento del comercio ambulatorio con las autoridades. Elevaron varias propuestas a las autoridades edilicias, pero no obtuvieron respuesta. Este hecho podría demostrar que los ambulantes no rechazaban las regulaciones,

---

[106] *Correo*, 15-7-1980, «La normalidad volvió a municipios limeños».

[107] Las actas de la municipalidad muestran que desde 1970, con el alcalde nombrado por el gobierno militar Eduardo Dibós a la cabeza, se propuso la creación de una empresa paramunicipal de limpieza con el objeto de cubrir adecuadamente el servicio (AHML, Actas del Concejo, 12-3-1970). El interés fue retomado en 1980 y luego 1981, Boletín Municipal, julio-setiembre, 1981, p. 69.

[108] *El Diario* de Marka, 18-7-1980, «Ambulantes se movilizan».

[109] *El Diario* de Marka, 5-6-1980, «Dirigente de federación: “No hay ningún interés en problema de ambulantes”».

[110] *Correo*, 22-7-1980, «Dirigentes pedirán cita con Belaunde»; y 26-7-1980, «Cambia rostro de Lima».

sino que, por el contrario, las proponían como una manera de asegurarse el derecho a usar la vía pública[111]. La misma conclusión señala Miriam Granados en su estupendo estudio sobre los ambulantes limeños, «oponiéndose al enfoque liberal sobre el comercio ambulatorio, los vendedores ambulantes no solo no reclaman menos Estado, sino que demandan mayor presencia, intervención y regulación en su actividad» (Granados, 1997, p. 3).

Esta postura política no era casual, fue el resultado de años de preparación. De acuerdo con el testimonio de Guillermo Nolasco, la fundación de la Fedeval fue el resultado de un congreso que aglutinó a diversas asociaciones limeñas, «concluyendo en la elaboración de una plataforma de reivindicaciones, definiendo un plan de acción y fundando la Federación Departamental de Vendedores Ambulantes de Lima (Fedeval)». Desde 1975 los vendedores comenzaron a organizarse en contra de la represión y decomiso de sus mercaderías,

> […] desarrollando un intercambio de experiencias, una suma de capacidades en torno a objetivos comunes que, en ese momento, se expresó como dotarse de una propuesta de reglamento del comercio ambulatorio, para establecer reglas claras en nuestra relación con el Estado (municipalidades) y que, específicamente, permitiera viabilizar el desenvolvimiento de nuestras actividades comerciales de sobrevivencia en las calles[112].

En este momento se calculaba que existían unos treinta mil vendedores ambulantes que ocupaban las calles aledañas al Mercado Central, organizados esta vez en la Federación Nacional de Vendedores Ambulantes del Perú (Fenvap), cuyo secretario general era Roberto Araujo Espinoza. Esta organización anunció, sirviéndose de la falta de claridad de las políticas de la municipalidad, la contratación de un grupo de especialistas para elaborar un proyecto de ley con el propósito de «buscar una solución definitiva a la problemática ambulatoria, en beneficio de miles de personas, así como del ornato de la ciudad»[113]. Como prueba de esta capacidad de negociación, que tenía como objetivo consolidar su derecho a usar

[111] Entrevista personal, 2-2-2016, campus PUCP, San Miguel. Esta postura se mantuvo durante todo el tiempo (ver Carbajal, 1991; Granados, 1997, pp. 109-116).

[112] Red Assei, 21-5-2009, http://redassei.blogspot.pe/2009/05/un-nuevo-y-militante-aniversario-de-la.html, fecha de consulta: 21/1/2015. Esta federación contribuyó al debate de una propuesta de ley que reconozca al trabajador ambulante, llegando a constituir más de veinte federaciones distritales que discutieron las ordenanzas municipales. Cuando el municipio fue gobernado por Izquierda Unida, al mando de Alfonso Barrantes (1983-1986), y con Nolasco como regidor por ese partido, se aprobó la ordenanza 002-85, que regulaba el comercio ambulatorio en Lima.

[113] *El Comercio*, 25-7-1980, «Especialistas contratados por ambulantes plantearán solución al gobierno».

el espacio público, el dirigente afirmó que la desocupación de las calles de Lima cuadrada «se realizará pacíficamente, para luego retornar el 31 próximo, tal como *quedó acordado* en la reunión que sostuvieron con el alcalde de Lima»[114]. Sin embargo, los ambulantes retornaron el 30 de julio, un día antes de lo convenido. Argumentaban que los días sin trabajo habían mermado seriamente sus ingresos, pero, con una actitud negociadora, señalaron que «se sentían recompensados, por haber colaborado con una disposición que tenía por objeto dejar limpia toda el área colindante al Congreso». Desde las cinco de la mañana comenzaron a tomar posesión de sus lugares, luego de anunciar que «ahora se encuentran mejor organizados y que, de acuerdo a sus posibilidades, colaborarán estrechamente con las autoridades municipales, para mantener siempre limpias las áreas que ocupan»[115].

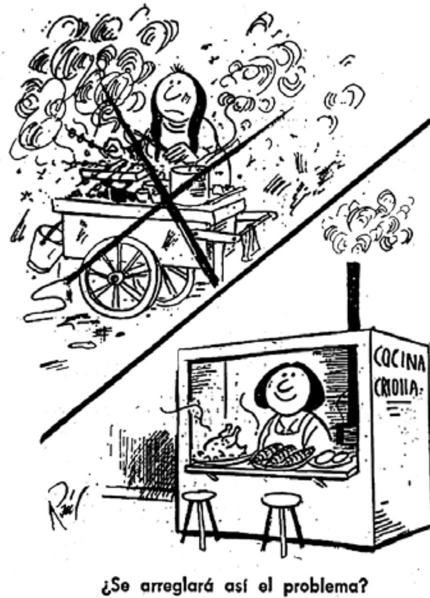


Figura 2. Caricatura que cuestiona la solución de los quioscos. *El Comercio*, 19 de setiembre de 1980.

Esta política ambigua de la municipalidad hacia los ambulantes, que por un lado deseaba reubicarlos y por el otro les cobraba el derecho a usar la vía pública, tuvo

[114] *El Comercio*, 25-7-1980, «Especialistas contratados por ambulantes plantearán solución al nuevo gobierno». El énfasis es mío.

[115] *El Comercio*, 30-7-1980, «Los ambulantes de la Av. Abancay retornaron ayer a sus 'puestos'».

como efecto un enfrentamiento entre las autoridades y los vendedores[116]. Como parte de su política de ordenamiento, el municipio decidió colocar quioscos autorizados para la venta de comida[117]. Los vendedores declararon a un diario que «esta actitud de la municipalidad significa un tácito reconocimiento a su derecho al trabajo y esperan cesen las continuas hostilizaciones de las que son víctimas»[118]. Los trabajadores consideraban que de ese modo ofrecerían mayor comodidad a sus clientes, aunque, de acuerdo con la nota, ya eran muy conocidas «las condiciones antihigiénicas de la venta de comida», lo que era una de «las principales causas de tifoidea»[119]. Como se puede ver, rápidamente se asoció la venta de comida en la calle con los problemas de salud pública[120]. Un aspecto interesante es que los comerciantes denunciaron que la municipalidad siempre buscaba la manera de obtener nuevos ingresos a costa de ellos, puesto que, de acuerdo con su testimonio, sus quioscos cumplían con los requisitos exigidos y no era necesario su reemplazo[121]. La medida fue finalmente aplazada, aunque se anunció que de todas maneras se prohibiría la preparación de alimentos y solo se permitiría la venta de refrigerios en los quioscos, con personal debidamente empadronado y con los registros sanitarios en regla[122]. Efectivamente, durante la década de 1980 la venta de comida fue una actividad muy usual para complementar los ingresos familiares. Como señalan Golte y

[116] Los vendedores de diversos distritos aprovecharon esta vía de negociación. Por ejemplo, los ambulantes en San Martín de Porres, organizados en una plenaria con cerca de 200 delegados representantes de los 40 000 trabajadores del distrito, ofrecieron pagar los derechos respectivos para que les permitan trabajar en las calles, «de acuerdo a sus modestos ingresos», solicitando «amplia libertad de trabajo en zonas que consideran necesarias, moralización de autoridades edilicias y policiales, ayuda sanitaria y gubernamental y libre derecho a la organización sindical» (*El Diario* de Marka, 16-8-1980, «Libertad para trabajar piden los ambulantes»).

[117] *El Comercio*, 11-9-1980, «Vendedores callejeros de alimentos cambiarán carretillas por kioskos». La medida incluía empadronamiento y el uso obligatorio del carné de sanidad.

[118] *El Diario* de Marka, 15-9-1980, «Ambulantes quieren que kioskos del Concejo se pongan en 'su' sitio».

[119] Solo en Canto Grande, parte del distrito de San Juan de Lurigancho, se estimaba que cerca de 300 000 pobladores estaban amenazados con este mal (*El Diario* de Marka, 29-9-1980, «Tifoidea amenaza a 300 mil pobladores de Canto Grande»).

[120] Esta asociación no era nueva. Durante el siglo XIX viajeros y cronistas de la ciudad denunciaron la lamentable higiene de los restaurantes limeños, muchos de ellos en manos de migrantes chinos. Un caso interesante es la lucha de las autoridades para desalojar a las lecherías del centro, locales en los que el ganado representaba un problema de salud pública. En 1866 se ordenó la salida de estos negocios de las calles céntricas y su traslado a las afueras de la ciudad, pero la presión del público que prefería tener más cerca a los vendedores causó el abandono de la medida (Macera & Soria, 2015, p. 59).

[121] *El Diario* de Marka, 15-9-1980, «Ambulantes quieren que kioskos del Concejo se pongan en 'su' sitio».

[122] *El Comercio*, 7-10-1980, «Aplazan el desalojo del centro de Lima de vendedores de comida».

Adams, para muchas mujeres, «el negocio de la venta de comida facilitaba en amplia medida la manutención de la unidad doméstica y se adecuaba muy bien al rol que además cumplía en la casa» (Golte & Adams, 1987, p. 105). También es conocido que la venta de comida en las calles permite a las mujeres salir de la dependencia personal, ganaban autonomía al mismo tiempo que incrementaban los ingresos de la familia (Picasso, 1986, pp. 12-14). Además, son muchas las ventajas que tiene esta actividad, entre ellas una mayor flexibilidad en el tiempo, un conocimiento previo que se puede utilizar y el hecho de que lo preparado permite alimentar a la familia (Picasso, 1986, p. 15)[123].

Las organizaciones de los ambulantes tomaron la iniciativa frente al problema, especialmente luego del ascenso al mando de Belaunde, el presidente que tenía una retórica orientada al pueblo y había ofrecido durante su campaña «un millón de empleos». Así, convocaron a una marcha con el objetivo de exigir una ley del trabajador ambulante, para poner fin a los desalojos y decomisos. Nolasco, máximo dirigente de la Fedeval, afirmaba que era necesaria una ley para lograr «nuestras justas reivindicaciones económicas y sociales que, como seres humanos, trabajadores ambulantes y contribuyentes del Estado, nos corresponde por justicia»[124]. Además, solicitaban reivindicaciones que incluían a las madres trabajadoras, exigían un seguro social para la atención materna debido a que ellas eran las de menores recursos por causa de los exiguos ingresos por la venta de comida. De acuerdo con su opinión, los ambulantes contribuían con el Estado por medio del pago de la sisa en varios distritos, más las continuas multas de las que eran víctimas. El vocero consideraba que el problema del ambulantaje no se originaba en la decisión de los vendedores de trabajar de esa forma, sino que el problema era básicamente «económico-social […] derivado por la falta de fuentes de trabajo [y] miserables condiciones de vida en el campo». Por esa razón consideraba al gobierno responsable de la situación, y solicitaba la creación y descentralización de fuentes de trabajo, «cese a los desalojos y persecuciones al trabajador, no al alza de la merced conductiva, no a los decomisos de mercaderías, entre otras»[125].

Como se puede observar, la estrategia de defensa de los ambulantes aprovechó el beneficio que les concedía la sisa para negociar su presencia en las calles, relacionada con su derecho al trabajo y la incapacidad del Estado para resolver el acceso a las necesidades básicas como salud, bienestar, etcétera. Por ejemplo, desde la perspectiva del urbanismo se ha destacado que la expansión de las barriadas fue potenciada por

[123] La misma realidad se vivía en Bolivia (Larrazábal & Larrazábal, 1988, pp. 22-26; Prealc, 2008, pp. 55-56).

[124] *Correo*, 20-8-1980, «Ambulantes reclamarán ley».

[125] *Correo*, 20-8-1980, «Ambulantes reclamarán ley».

«la incapacidad y los escasos recursos del Estado para cumplir con las estipulaciones de la ley», lo que motivó que «los migrantes se sintieran con derecho a invadir nuevos terrenos y a demandar la regularización de sus asentamientos» (Fernández-Maldonado, 2013, p. 66)[126].

El derecho al trabajo se convirtió en uno de los principios básicos de sus demandas. Por ejemplo, Roberto Araujo, dirigente de la Fenvap, señaló que su asociación defendería ese principio hasta sus últimas consecuencias y lucharían por conseguir una ley «que regule y norme el comercio ambulatorio en sus diversos ramos». Agregaba que «con esa ley conseguiremos que el trabajador ambulante se halle amparado para organizarse mejor y servir con eficiencia al consumidor, ya que desaparecerán las presiones del desalojo y las prebendas, coimas y otras tensiones a las que hoy se halla sometido»[127].

La estrategia incluía hacerse responsables de la limpieza de las calles, principal reclamo de la opinión pública. Desde mediados de la década de 1970 los ambulantes realizaban colectas con el objeto de pagar a los mal asalariados empleados de limpieza pública. Una ambulante entrevistada por Bertha Bazalar señalaba que «nosotros en la cuadra pagamos un sol por persona a fin de pagar un servidor de limpieza para que las tiendas no se quejen de que dejamos basura, nosotros contribuimos con el ornato de la ciudad» (Bazalar, 1976, p. 114). Los ambulantes organizados en la Fedeval, en cumplimiento del mandato municipal, adquirieron mandiles, pintaron sus carretillas, compraron nuevos tanques de agua y obtuvieron sus carnés sanitarios. Realizaron una limpieza general de las plazas Dos de Mayo, Unión y el Parque Universitario, con el objeto de mejorar su imagen y evitar su desalojo[128]. La acción de limpieza abarcó otros espacios, por ejemplo, en las inmediaciones del Mercado Central los vendedores «tomaron escobas y al ritmo del agua y del detergente dejaron limpias las calles de los alrededores [...] estos mismos vendedores aportan cincuenta soles diarios, quince mil soles en total, para pagar a una empresa que se encarga de limpiar diariamente los jirones Andahuaylas, Ayacucho, Ucayali y Billinghurst»[129].

De acuerdo con la nota, los vendedores asumieron la limpieza de las calles durante las huelgas de los empleados municipales. Uno de los comerciantes, Matías Alvarado, sostenía que «las calles en que nos dedicamos al comercio ambulatorio han permanecido limpias». Sin contar con el apoyo de la municipalidad, resolvieron

126 El trabajo clásico en el tema es de David Collier, *Barriadas y elites. De Odría a Velasco* (1978). Para las consecuencias sociales de la descomposición del Estado véase Burt (2008, pp. 81-98).

127 *El Diario* de Marka, 29-9-1980, «Ambulantes: Belaunde atenta contra el derecho al trabajo».

128 *El Diario* de Marka, 7-10-1980, «Esperando no ser desalojados, ambulantes cumplen con limpieza».

129 *Correo*, 11-10-1980, «Mercado Central quedará limpio, dicen ambulantes».

el problema de la limpieza, como señalaba Alvarado, «con un poco de voluntad y un aporte de 50 soles diarios tenemos las calles limpias»; consideraba que si otros hicieran lo mismo «no se vería basura en las arterias limeñas»[130]. Ese mismo día, luego de cumplir con la limpieza de las calles, los ambulantes de la federación dirigida por Araujo «se dirigieron al Palacio de Gobierno para entregar en la mesa de partes de la presidencia el pliego único de reclamos». Solicitaban «el servicio de seguro social, construcción de guarderías infantiles, congelación de las sisas y otros cobros municipales, plena libertad para el trabajo», entre otros puntos[131]. El seguro social y las guarderías en los centros de trabajo eran algunos de los beneficios que el Estado otorgaba a los trabajadores, pero no abarcaban a los vendedores ambulantes de las calles. Esta solicitud respondía a una necesidad creciente debido a la abundante presencia de mujeres con hijos, quienes se ganaban el sustento en las calles de Lima. De acuerdo con una nota periodística, que se asemeja en los datos a las cifras mencionadas anteriormente, de un poco más de 75 000 ambulantes, el 54% eran mujeres, con la mayoría situada entre los 18 y 35 años. Matilde Baralia, poetisa, activista feminista y autora de la nota, señalaba que las mujeres migrantes eran las principales afectadas por las duras condiciones de trabajo, pero también incluyó en su reflexión algunos estereotipos típicos de la época, como el origen campesino altoandino de las mujeres y, especialmente, la incapacidad de adaptarse al agresivo entorno urbano:

> Todas estas mujeres —o la gran mayoría— son provincianas que han llegado a Lima con la funesta ilusión de mejorar sus niveles de vida. En su mayoría, provienen de zonas agrícolas de las serranías, iniciándose con su llegada la problemática conocida como «*shock* cultural», referida a una serie de trastornos físicos y emocionales que sufren los provincianos migrantes cuando entran en contacto con un entorno socio-cultural que les es ajeno, resultantes de la llamada «cultura de la pobreza».

Su nota defiende el derecho de las mujeres a solicitar guarderías para cuidar mejor de sus hijos, expuestos en las calles a las inclemencias del tiempo y mal alimentados por causa de los bajos ingresos familiares. De acuerdo con ella, si la situación continuaba sin cambios:

> ¿Qué le puede dar a sus hijos un desocupado, un maestro cesante, una madre soltera de la clase popular? ¿Qué seguridad, qué hogar, qué educación puede ofrecer a sus hijos una mujer que debe tenerlos consigo a la intemperie, en plena calle 10 horas al día? Y por último, ¿qué porvenir tiene un niño que come

[130] *Correo*, 11-10-1980, «Mercado Central quedará limpio, dicen ambulantes».

[131] *El Diario* de Marka, 12-10-1980, «Ambulantes entregan su pliego».

> Nicovita[132], que reposa en las cajas de cartón de una leche que no consume, que respira todo el día el aire más contaminado del país y cuyas únicas lecciones son las que dicta la calle?[133].

Más allá del tono de la nota y de la realidad que pretende describir, las cuales efectivamente tienen contacto con hechos señalados en otras fuentes, puede notarse en este fragmento que el ambulante es ante todo una víctima más de la crisis económica y de las duras condiciones de vida urbana. El segundo aspecto relevante es que los problemas de los ambulantes comenzaron a interesar a otros sectores de la opinión pública, tales como las organizaciones políticas y las intelectuales feministas.

Luego de que la iniciativa de los ambulantes fuera conocida públicamente, la represión dejó de ser la única posibilidad de solución del problema. Las fuentes señalan que las autoridades tuvieron que sentarse a negociar con los representantes de los ambulantes, quienes no manifestaron estar en contra de las regulaciones, sino que, por el contrario, las habían cumplido. Directivos de la Fedeval, una de las asociaciones más activas, se reunieron con las autoridades edilicias, incluidos el alcalde Pierantoni y el inspector de sanidad, con el objeto de informar que habían cumplido los cuatro puntos acordados entre ellos y la municipalidad: «a) limpieza periódica del lugar que ocupan, b) la dotación de tanques de agua en cada carretilla, c) el uso permanente de mandiles y d) la obtención de un carné de sanidad»[134]. La política ambigua de las autoridades se hizo notar cuando, en la misma reunión, exigieron a los vendedores que adquirieran quioscos cuya ubicación sería decidida por el municipio, lo que formalizó la venta de los puestos. Esta solución fue rechazada por el gremio, no necesariamente por estar en contra de las regulaciones —como se puede ver habían cumplido con ellas—, sino por el elevado costo de las instalaciones que pretendían venderles[135].

La situación de los ambulantes llamó rápidamente la atención de la Izquierda Unida, una de las primeras organizaciones en manifestar su interés en responder a estas demandas. Alfonso Barrantes, quien encabezó ese partido para las elecciones municipales de 1980, consideraba que debía promulgarse una ley que garantizara su trabajo, su organización y derechos sociales. El programa que lideraba buscaba

[132] A fines de la década de 1970, práctica continuada durante los años ochenta, se denunció que en las zonas más pobres de Lima los habitantes utilizaban alimento para aves como comida para sus hijos, el más popular de ellos era de la marca mencionada en la nota (Barrig, 2014, p. 17). Un comediante callejero de la Plaza San Martín mencionaba en una de sus rutinas: «Usted todavía no ha aprendido a preparar flan de Nicovita, señora, ¡es el colmo! Usted debe tener a su prole desnutrida» (*El Diario* de Marka, 5-8-1980, «La Plaza San Martín está tomada»).

[133] *Correo*, 15-6-1980, «Las madres ambulantes de Lima».

[134] *El Diario* de Marka, 18-10-1980, «Los ambulantes se quejan de abusos».

[135] *El Diario* de Marka, 18-10-1980, «Los ambulantes se quejan de abusos».

regularizar el comercio ambulatorio, proponía zonas autorizadas y, especialmente, velar «por el abastecimiento alimenticio de la ciudad, promoviendo mercados populares, controlando precios y calidad de productos, etcétera». El programa combatía la especulación pues consideraba que ella «no proviene de los pequeños comerciantes, los dueños de bodegas de esquina o de las tiendas de barrio. Es promovida abiertamente y en grandes niveles por las empresas trasnacionales que controlan y manejan el comercio de los productos alimenticios básicos, como la leche, la harina, los aceites, etcétera»[136]. La preocupación por el abastecimiento de productos se convirtió en uno de los primeros puntos de la agenda para la ciudad, golpeada por la crisis y la escasez de alimentos. La postura de la izquierda consideraba que las regulaciones afectaban básicamente a los pequeños comerciantes, pero que se descuidaba la fiscalización de los grandes empresarios. Su plan de gobierno también recogió el pedido de guarderías, partían del supuesto de que la ausencia de un debido cuidado infantil y el abandono eran las causas de la proliferación de la vagancia y delincuencia. Para el caso específico de los ambulantes, la Izquierda Unida, de acceder al gobierno municipal, facilitaría la instalación de guarderías y jardines infantiles, financiados conjuntamente por los vendedores, municipio y gobierno central[137].

En defensa de la calle

El 23 de noviembre de 1980 se realizaron las elecciones municipales en las que ganó el arquitecto Eduardo Orrego, miembro del partido de gobierno, Acción Popular. El alcalde electo rápidamente manifestó su posición frente a los diversos problemas de los ambulantes en Lima y propuso la creación de 'zonas francas' (luego conocidas como campos feriales) destinadas al ejercicio de la venta ambulatoria, y anunció que uno de los lugares designados sería el malecón Rímac, luego conocido como «Polvos Azules». Incluso, en una concesión que disminuía las vallas estatales, anunció que en ese lugar se podría vender todo tipo de productos, incluidos los de contrabando y sin pagar impuestos, sería un equivalente a una zona franca. Los ambulantes entrevistados por el diario *Correo* manifestaron sus dudas ante el plan del alcalde electo. El mayor argumento de los vendedores se concentraba en el miedo a perder la ventaja que suponía el lugar que tenían en las calles, temían que de ser trasladados perderían su clientela. Algunos, los vendedores de ropa importada, estaban de acuerdo con la medida, otros no veían ningún beneficio. La tendencia era que los ambulantes que no solían cambiar de giro en el año o vendían ropa,

[136] *El Diario* de Marka, 10-10-1980, «IU plantea regularización del comercio ambulatorio».

[137] *El Diario* de Marka, 18-11-1980, «Mujer, atiende: Así protegerá la izquierda a los niños en Lima».

podían aceptar un lugar fijo, mientras que los vendedores que variaban el género de productos que ofrecían al público temían perder la ventaja que tenían de acercar la oferta a la demanda móvil. Así, una vendedora, calificada por *Correo* como «una escurridiza chiquilla», se opuso a su traslado del Jirón de la Unión, pues «moverse a otro lugar significaría perder clientes y plata». Otro vendedor, llamado Luis Rivera, señaló que «antes vendía ropa, pero como ya estamos en Navidad ofrezco juguetes que tienen mucha preferencia en los niños». Entre los que estaban de acuerdo, figura una sencilla vendedora de paltas que se ubicaba en la esquina del Jirón de la Unión y Emancipación, quien estaba dispuesta a aceptar la medida, pero acotó que en el espacio que vendía, «creo que no molesto a nadie»[138].

El Jirón de la Unión era muy importante como espacio para la venta por una razón evidente: es una calle de intenso tránsito peatonal —y en ese tiempo también vehicular— que comunica a la Plaza de Armas con la Plaza San Martín. Además, durante esos años muchos negocios y oficinas importantes, tales como las sedes principales de bancos, diarios y empresas, se encontraban ubicados en sus inmediaciones, razón por la cual miles de personas caminaban diariamente por ese lugar y se abastecían en las tiendas y negocios de la zona[139]. Por último, el Jirón de la Unión era desde el siglo XIX un espacio emblemático de las tiendas modernas y un bulevar representativo del desarrollo económico del Perú. Ese intenso tránsito vehicular y especialmente peatonal, se convirtió en una demanda móvil a la que había que acercar la oferta de todo producto imaginable que el ambulante fuera capaz de ofrecer. Así, no es que alguien salga a la calle con el objeto de comprar, por ejemplo, un cortaúñas o hilos, ocurre que en el camino se topa con un vendedor que ofrece esos productos, lo que hace 'recordar' al peatón de esa necesidad insatisfecha. Esa ventaja difícilmente se podía reemplazar con un lugar fijo de venta al público, salvo en el caso de la ropa y otros productos en los que el público sí salía a las calles con la misión específica de comprarlos, razón por la cual podrían funcionar espacios destinados a su venta. Además, en el caso de los objetos de vestir en general, la venta ambulatoria no daba la facilidad de probarse la ropa o el calzado, ventaja que sí ganarían en los puestos fijos. Sin embargo, el flujo peatonal y vehicular proporcionaban una gran demanda potencial que los vendedores sabían aprovechar, incluso aquellos que se dedicaban a la venta de ropa preferían estar cerca de este movimiento que les aseguraba clientes. Por ejemplo, Rosa Castro, vendedora de ropa, afirmó: «No queremos irnos. Que nos dejen en este lugar […] [si nos trasladan] perderíamos clientela y plata, pues de seguro nos

[138] *Correo*, 29-11-1980, «Frente a fórmula de Eduardo Orrego: ambulantes entre 'si' y 'no'».

[139] El abandono del centro como lugar de residencia de la elite, de negocios importantes y de grandes bancos se inició a fines de los setenta y se consolidó en la década de 1990 (Chion, 2002, p. 78).

mandarán a un sitio lejos, donde la gente no acudiría»[140]. Un testimonio proveniente de otra fuente señala que la plaza Ramón Castilla era un espacio codiciado para la venta de productos gracias a su conexión con la avenida Argentina, cordón industrial de la época que tenía un gran flujo peatonal (Tueros & Carbonetto, 1985, p. 44). Justamente a principios de la década de 1970 se intentó desalojar a los ambulantes de esta plaza, trasladándolos a un terreno cercano que servía de depósito de tranvías. La medida fracasó porque el público comprador no iba al nuevo lugar, de modo que los ambulantes regresaron a su antiguo emplazamiento (Bazalar, 1976, p. 44)[141].

Los ambulantes comprendían el riesgo que les suponía el traslado y, en parte gracias a las concesiones municipales, estaban dispuestos a defender sus lugares de trabajo, al margen de contar o no con algún derecho. *El Diario* de Marka entrevistó a varios de ellos, esta vez mostraba sus rostros en fotografías. No fueron anunciados como dirigentes, aunque esta omisión no necesariamente reflejaba la realidad, pues la intención de la nota era difundir las opiniones de los ambulantes 'cotidianos' del centro de Lima sobre la próxima medida de la alcaldía. Así, Melchor Condori, con ocho años de experiencia en la actividad en la avenida Abancay, señaló estar de acuerdo con el traslado, pero «siempre y cuando nos trasladen a zonas comerciales dentro del centro y se nos facilite la ayuda para mejorar nuestro negocio». Matilde Apaza, con seis años de vendedora de chocolates, fue más directa al señalar que la alcaldía debería asegurarles a los vendedores que los nuevos lugares de venta serían igualmente beneficiosos que las calles que ocupaban: «Que nos den garantías de que no nos vamos a morir de hambre en las zonas que nos den». De la misma opinión era Juan Condeso, vendedor de objetos de madera con ocho años de experiencia en las calles, quien sostuvo que «Si en las llamadas 'zonas francas' nos vamos a morir de hambre, no las aceptaremos». Damián Rodríguez, con quince años como ambulante, afirmaba que «la reubicación tiene que darse en estas zonas [las calles del centro] convenientes para nuestro negocio y para el público y no en 'zonas francas' que Dios sabe dónde se ubicarían»; Jorge Minalaya, despedido de un empleo público y con tres años de vendedor en las calles, «Estaba de acuerdo con la reubicación en la misma zona y no en las llamadas 'zonas francas'». Por otro lado, Damián Rodríguez, vendedor de zapatos, sí estaba de acuerdo con el traslado, siempre y cuando se hiciera efectivo en el Malecón Rímac «u otros [lugares] dentro de esta zona». Varios de los vendedores entrevistados no estaban en

[140] *Correo*, 29-11-1980, «Frente a fórmula de Eduardo Orrego: ambulantes entre 'si' y 'no'».

[141] Bazalar muestra varios artículos de periódico con el mismo tenor, especialmente la declaración de un vendedor que señaló que si lo trasladaban lejos «donde la gente no va a comprar ¿Qué vamos a hacer allí? No sé» (1976, p. 93). Véase también Möller, 1979, p. 436.

contra de un eventual traslado, siempre y cuando se efectuara cerca de sus actuales lugares de venta, oportunos por la gran concentración de peatones que constituían su potencial demanda. Como solución, planteaban que el gobierno expropie los terrenos de la Beneficencia Pública de Lima aledaños al Mercado Central y otras calles del centro, que se construyan en esos espacios mercados y galerías de venta para pagarlos poco a poco y ofrecían aceptar su traslado pacíficamente. Por ejemplo, Eusebio Calixto, vendedor de artículos de acero con siete años de experiencia, señalaba: «La beneficencia tiene aquí varios terrenos desocupados. Que nos cedan esos terrenos que quedan por los alrededores del Mercado Central y nosotros con gusto nos trasladaremos y trabajaremos en armonía con el Concejo». Un caso de oposición total la manifestó Jorge Castro, vendedor de frutas quien seguramente se beneficiaba mucho más del acceso directo a la demanda en la calle; él señaló no estar de acuerdo con la medida: «Quiero quedarme en el mismo sitio, ofrezco limpiarlo todos los días»[142].

En diciembre de 1980 el conflicto se intensificó debido a la campaña navideña y a la necesidad de los ambulantes de conseguir y mantener los mejores lugares para la venta de una diversidad de productos. En ese entonces, los productos de origen importado —algunos ingresados por contrabando— se convirtieron en los objetos de mayor demanda. Por ejemplo, se podían encontrar en las calles dulces y chocolates europeos, mantequilla australiana, frutos en conservas, juguetes de Taiwán, ropa de los Estados Unidos, China, etcétera. De acuerdo con el diario *El Comercio*, «Quien quiere comprar cualquier cosa para navidad, o simplemente para su uso diario, solo tiene que recorrer la Lima cuadrada. El único requisito es que guarde bien su dinero, para prevenir la intervención de los ladrones»[143]. Para lograr vender tal variedad de mercadería, muchas de ellas novedosas, los ambulantes debían conseguir los mejores lugares en las calles. Por esta razón el Jirón de la Unión se convirtió en el mejor escaparate y el más codiciado por los vendedores, que llegaban a pernoctar en la vía pública con el objeto de conservar su área de venta. Los lugares más cotizados se encontraban en las puertas de los establecimientos comerciales, como el caso de la plaza de La Merced, que coincidía con una tienda por departamentos muy concurrida. La lotización de las calles se producía por la necesidad de los ambulantes de dar mayor confianza al comprador, con el objeto de permitir el cambio del producto o comprar nuevamente al mismo vendedor.

[142] *El Diario* de Marka, 30-11-1980, «Ambulantes: que se expropien terrenos de la beneficencia». No acierta Hernando de Soto al señalar que «En lo fundamental, los ambulantes tratan de dejar la vía pública porque esta les impone una serie de limitaciones» (1986, p. 77). Este deseo no era una tendencia general, la opinión es muy diversa por la heterogeneidad del comercio informal, tal como también se ha demostrado para otros lugares de América Latina (ver Valerín & Chinchilla, 2012).

[143] *El Comercio*, 14-12-1980, «Chocolates y perfumes venidos de ultramar venden ambulantes».

Una señora que vendía polos en el Jirón de la Unión dijo que si ella no tenía un lugar fijo en la calle donde vender, «cómo la localizarían sus clientes, en caso de querer comprar más o cambiar la mercadería». Esta necesidad llevó a los ambulantes a enfrentarse entre sí, y posiblemente a organizarse para repartirse el espacio sin conflictos. Pocos días después, la batalla por las calles adquirió otra dimensión. Mientras en el distrito de Miraflores las calles eran tomadas por vendedores, aparentemente de clase media, que ofrecían productos de contrabando como licores, dulces, ropa, etcétera, la Guardia Civil inició un operativo de erradicación de los ambulantes en las inmediaciones de la Catedral de Lima. Esta vez se hizo uso de un vehículo blindado o tanqueta que causó zozobra no solo entre los vendedores, sino entre los numerosos compradores[144].

Los ambulantes invocaban su derecho a trabajar, estaban organizados y tenían capacidad de negociación. Parte de su posicionamiento fue ocasionado por las ambiguas políticas municipales que les concedieron el derecho de uso de las calles por medio de la sisa, los proyectos de compra de quioscos o la exigencia del cumplimiento de reglamentos. Otra parte de su consolidación como actor urbano provino de la crisis económica que afectaba a la población y a las instituciones públicas. Los ingresos de la población se habían visto fuertemente mermados, obligándola a buscar los precios más bajos posibles, sin la comodidad para comprar y muchas veces sin tomar en cuenta la calidad, legalidad o sanidad de los productos. Además, los municipios enfrentaban huelgas y desórdenes internos que impidieron el cumplimiento de sus responsabilidades frente a la ciudadanía, tales como mantener el orden urbano, la limpieza y la seguridad[145]. Por último, los vendedores ambulantes también fueron un eficiente canal de distribución de las numerosas mercaderías importadas en muchos casos introducidas de manera legal por grandes casas comerciales.

Así, estalló la batalla por las calles, que tenía como combatientes a los ambulantes, conscientes de que ocupaban de forma inconveniente las calles, pero dispuestos a defender su posibilidad de supervivencia; la opinión pública, que a la vez que utilizaba a los comerciantes era afectada por su presencia; y el municipio, incapaz de resolver el problema por encontrarse en la encrucijada formada por la represión, el aprovechamiento de los ambulantes como fuente de recursos y para la limpieza de las calles, y el desorden interno de la institución por la falta de recursos

[144] *El Diario* de Marka, 24-12-1980, «¡Insólito! Tanquetas contra ambulantes».

[145] Las huelgas se multiplicaron luego de la toma de mando del presidente Belaunde. Las expectativas que había generado y el clima politizado del momento trajeron como consecuencia una explosión de protestas, las mismas que tomaban las calles de Lima como escenario de la lucha (véase «Juego desleal» en *Caretas*, 616, 22-9-1981).

y los constantes enfrentamientos gremiales. No parece que el crecimiento, expansión y posicionamiento de los ambulantes proviniera de su rol como empresarios, bloqueado o negado por un Estado mercantilista interesado en mantenerlos en la pobreza como parte de una política clientelista. Por el contrario, ese mismo Estado atravesaba una grave crisis producto de las condiciones macroeconómicas y de sus ambigüedades políticas, y se manifestaba incapaz de administrar eficientemente el nuevo escenario social con el que se ingresó a la democracia. Para complicar más los hechos, Sendero Luminoso cerró el año 1980 con atentados en Lima que afectaron embajadas y bancos, además de su extraña toma de posición política expresada el 26 de diciembre por medio del acto cruel y macabro de colgar perros en los postes del centro de la ciudad.

Capítulo 3
La democracia y el fin de la tolerancia: Lima y los ambulantes (1981-1982)

Escobita nueva

Desde el 5 de enero de 1981 se instaló en la Municipalidad de Lima una nueva administración elegida democráticamente. El nuevo alcalde, el arquitecto Eduardo Orrego, recibió una alcaldía exhausta, sin rentas y con un grave déficit de apertura, razón por la cual tuvo que recurrir al Poder Ejecutivo —dirigido por su correligionario Fernando Belaunde— y al Congreso de la República, con el objetivo de encontrar una solución al grave problema[1]. De acuerdo con las autoridades municipales, la principal carga administrativa que soportaban eran los sueldos, que consumían más del 50% de las escasas rentas del año 1980; en enero de 1981 ya tenían dos semanas de atraso en el pago de sus trabajadores[2] y se proyectaba que a fines de 1981 los ingresos del municipio solo alcanzarían para pagar sueldos[3]. El alcalde Orrego enfrentaba una administración que no contaba con un padrón actualizado de predios, la recaudación por arbitrios cubría solo el 40% del costo del alumbrado público y limpieza, el 80% de los predios del centro pagaba una fracción del sueldo mínimo vital como tributo —a pesar de que

[1] El alcalde buscó también ayuda en el exterior. Al regresar de los Estados Unidos informó que había conseguido apoyo para su gestión. «Sesión del 12 de marzo de 1981», Boletín Municipal, enero-marzo, 1981.

[2] *Caretas*, 638, 2-3-1981, «Computando el déficit», p. 28.

[3] *El Diario* de Marka, 31-1-1981, «En emergencia Municipio de Lima: déficit de 15 mil mills. de apertura». De acuerdo con los representantes del municipio, la comuna se encontraba en problemas financieros desde 1976, pero las trasferencias del gobierno central la habían rescatado del apuro.

en muchos de esos locales se realizaban actividades comerciales— y existía una enorme evasión y subvaloración en el impuesto predial[4].

Además, desde enero el municipio enfrentaba un grave problema de limpieza pública, producto de las 200 000 toneladas de basura mensuales que debían ser recogidas (poco menos de 7000 toneladas diarias). Solo se recogía aproximadamente la mitad, y quedaban regadas en las calles cerca de 3500 toneladas cada día. Por último, se calculaban que existían treinta millones de ratas en la ciudad, con el grave peligro sanitario que esto entrañaba[5]. Para solucionar el problema, la Municipalidad anunció ese mes de enero de 1981 un operativo de limpieza que tuvo un éxito parcial, pues aparentemente solo se logró recoger la mitad de la basura acumulada en las calles de la ciudad[6]. La falta de autoridad municipal y los efectos de la crisis se notan en la concesión que obtuvieron los trabajadores de limpieza, a quienes se encargó comercializar por su cuenta los desechos no orgánicos a cambio de mantener la ciudad limpia, aunque no podían alimentar a las chancherías clandestinas con los desechos orgánicos[7]. Incluso se les acusó de malograr intencionalmente los camiones compactadores que no les permitían reciclar los productos, y de mantener en uso los anticuados y peligrosos camiones de barandas[8].

En medio de este mar de dificultades, el nuevo municipio decidió enfrentar el problema de los ambulantes con una decisión acariciada desde hace mucho tiempo: erradicarlos del centro de la ciudad. Los ambulantes eran conscientes de que la opinión pública los consideraba responsables de la acumulación de desperdicios en la vía pública, aspecto que tenía mucho de cierto, de forma que la Fedeval organizó la limpieza de la avenida Abancay, justamente en la cuadra en la que constantemente sus afiliados eran desalojados por la fuerza pública. Actuaron con cálculo político gremial e invitaron al alcalde Orrego y a los concejales a que concurran a la acción, sufragada con los aportes de los ambulantes afiliados[9]. De acuerdo con el testimonio de Guillermo Nolasco, el alcalde Orrego los invitó a participar de varias reuniones muy protocolares, pero en las que no llegaron a ningún acuerdo[10]. Por este motivo, la Fedeval, a pesar de que deseaba seguir en

---

[4] *Caretas*, 638, 2-3-1981, «La manzana podrida», p. 32; y «Sesión del 12 de marzo de 1981», Boletín Municipal, enero-marzo, 1981.

[5] *Caretas* , 633, 26-1-1981, «Mar de fondo. Basura a granel», p. 21.

[6] *El Diario* de Marka, 28-1-1981, «"Vamos a limpiar Lima" concluyó en un fracaso».

[7] El Concejo inició una investigación que demostró las conexiones entre empleados, obreros y criaderos clandestinos de cerdos (Boletín Municipal, julio-setiembre, 1981, p. 62).

[8] *Caretas*, 625, 26-11-1980, «Mar de fondo. La voz de la experiencia», p. 75 y *Caretas*, 633, 26-1-1981, «Mar de fondo. Basura a granel», p. 21.

[9] *El Diario* de Marka, 21-1-1981, «Federación limpiará Mercado Central y avenida Abancay».

[10] Entrevista personal, 2-2-2016, campus PUCP, San Miguel.

coordinaciones con el municipio, no comprometió su apoyo al alcalde. Nolasco, quien había sido nombrado concejal en el distrito del Rímac por Izquierda Unida, declaró que su gremio era independiente y que, por el contrario, el alcalde no había cumplido en enviarles una cisterna y otros implementos para la limpieza de la avenida Abancay, había enviado solo una para la plaza Castilla[11].



Figura 3. Ambulantes limpiando las inmediaciones del Mercado Central. Boletín Municipal, enero-marzo, 1981, p. 82.

En marzo de 1981 la alcaldía comenzó su ofensiva contra el comercio informal. Se anunció que representantes de la Conaco visitaron a Orrego con el objeto de manifestarle su preocupación respecto al problema de los ambulantes, solicitándole que se declarase zona rígida al cuadrado delimitado por las avenidas Malecón Rímac, Alfonso Ugarte, Paseo Colón, Grau, Cotabambas, Parque Universitario y Abancay. Las zonas permitidas, de acuerdo con el responsable de comercialización del municipio, Luis Castañeda Lossio, serían las primeras cuadras de la avenida Argentina (actual campo ferial Las Malvinas), la tercera cuadra de la avenida Grau, las cuadras dos y tres de jirón Amazonas y la zona frente a la Plaza de Acho. Además, los ambulantes deberían cumplir una serie de disposiciones de ornato y

[11] *El Diario* de Marka, 27-1-1981, «Limpieza de calles no es apoyo al alcalde Orrego».

aseo, y, para evitar que los comerciantes continúen en el centro de Lima, se preveía el decomiso de mercaderías y sanciones a quienes permitiesen la guardianía de carretillas e implementos de los comerciantes informales. Los únicos autorizados para trabajar en Lima cuadrada serían los lustrabotas y los vendedores de periódicos, conocidos como canillitas[12].



Figura 4. Plano de ubicación de las concentraciones de ambulantes (1981). *Caretas*, 641, 23 de marzo de 1981, p. 20.

Como se puede observar en la figura, la zona considerada rígida era justamente la que ocupaban masivamente los ambulantes, espacio de gran demanda generada por el flujo peatonal proveniente de la alta concentración de negocios, bancos y entidades públicas. En las semanas siguientes la tensión se instaló en la ciudad, especialmente luego de promulgada la nueva Ley de Municipalidades el 16 de marzo de 1981, la cual reincorporó al comercio ambulatorio dentro del ámbito municipal. Ante el inminente desalojo y reubicación, aparecieron en las calles las marchas de ambulantes, esta vez acompañados de políticos de izquierda, especialmente Hugo Blanco, quienes comenzaron a llamar la atención de la opinión pública al mismo tiempo que lograban capitalizar políticamente el momento[13].

Durante 1981 el municipio discutió en varias oportunidades el problema y acompañó sus boletines con fotografías que justificaban la erradicación de los ambulantes. Desde el principio se trató de demostrar la necesidad de las medidas al apelar al impacto negativo del comercio ambulatorio, especialmente en cuando a la viabilidad urbana y la limpieza de la ciudad, pero también se presentó la imagen

[12] *Caretas*, 641, 23-3-1981, «Ambulantes stop», p. 20.

[13] *Caretas*, 645, 4-5-1981, «A la hora señalada», p. 48.

de comerciantes que poco tenían que ver con personas necesitadas que buscaban ganarse el sustento en las calles.

Las fotografías insisten en mostrar un hecho conocido por todos: el intenso uso de las calles por parte de los ambulantes, que interfiere con el paso de peatones y vehículos de transporte, lo que aumenta la peligrosidad de las calles. En ese sentido, la avenida Abancay fue considerada uno de los casos más urgentes; además, se calificaba de feria al fenómeno ambulatorio, quizá como una manera de asimilarla al imaginario de las formas de comercio de las zonas andinas, distanciándola de las supuestas tradiciones limeñas.

En los boletines municipales de 1981 se destaca la congestión de las calles por la alta densidad de ambulantes. Por ejemplo, la leyenda de una imagen en el Boletín Municipal de abril-junio señalaba: «Este es el Jirón de la Unión. No se puede transitar. Los ambulantes prácticamente lo han tomado por asalto. La ciudadanía reclama acción. La Municipalidad estudia proyecto integral». El boletín se imprimió cuando ya se habían producido los desalojos; sin embargo, en las fotos se señala, en tono amenazante, que todavía estaban en proceso. Por otro lado, en las actas que incluye el Boletín Municipal no figuran más que menciones breves y generales acerca de las medidas que el alcalde tomaría en los días posteriores.

El discurso que culpaba exclusivamente a los ambulantes del deterioro del centro fue acompañado de una reinterpretación de los antecesores de los vendedores en las calles. De acuerdo con las fuentes que conocemos para el siglo XIX, los vendedores, hombres y mujeres, continuamente se encontraban en conflicto con las autoridades de la ciudad de Lima por el uso del espacio público (ver Cosamalón, 2017, capítulo 3). Sin embargo, en el imaginario de los editores del boletín, los vendedores del pasado se asemejaban a las acuarelas del pintor mulato Pancho Fierro; además, respetaban el espacio público y cumplían las disposiciones municipales. Así, por oposición, se afirma que los ambulantes de la década de 1980 poco o nada tenían que ver con las tradiciones limeñas. Una leyenda que acompañaba a una imagen en el Boletín Municipal muestra esta filiación del imaginario de los editores con el pasado representado en las acuarelas de Pancho Fierro: «Vendedora ambulante de principios del presente siglo veinte. Viste pañolón, chompa, amplia falda (pollera) y sombrero de paja. Expende frutas en grandes canastas de mimbre. No se emplazaban en la vía pública y eran vendedoras ambulantes respetuosas de las ordenanzas municipales»[14].

Pocos días antes de que se publique la ordenanza contra el comercio ambulatorio, Nolasco, dirigente de la Fedeval, acompañado de Agustín Haya de la Torre, otro político de izquierda, ofreció una extensa entrevista a la revista *Caretas* en la que

[14] Boletín Municipal, julio-setiembre, 1981, p. 71.

afirmó que solo en Lima los ambulantes eran cerca de 150 000, provenientes la mayoría de la zona sur andina. Su postura consistía en reconocer la necesidad de reglamentar el comercio, lo que incluía el pago de las contribuciones respectivas, pero con la salvedad de que solo debería permitirse el trabajo como ambulantes a «quienes verdaderamente [estén] necesitados de hacer uso de este medio de trabajo», y así evitar a quienes podrían aprovecharse de las condiciones. La negativa de la Fedeval a la reubicación se sustentaba en que el problema era integral y que «las zonas donde se nos pretende reubicar son las que al estar alejadas son inadecuadas para este tipo de comercio. Nosotros sabemos que nuestra permanencia en algunas calles dificulta el tránsito peatonal y vehicular y nosotros estamos llanos a reorganizar nuestra forma de trabajo». A cambio de la tolerancia de la autoridad, la asociación proponía limitar el uso del espacio en las calles, «la limpieza diaria y permanente a partir de servidores particulares, y en tercer lugar, una contribución económica a manera de sisa, al igual que lo hacemos en otros distritos de Lima». De acuerdo con su punto de vista, este tributo permitiría aumentar notablemente las rentas del municipio, la Fedeval no tenía mayor reparo en pagar, «pero sobre la base de que se reconozca nuestro derecho a trabajar en algunas zonas, limitadas si es necesario, que de todas maneras no signifique una reubicación en zonas despobladas». El gremio estaba dispuesto a ceder algunas de las calles conflictivas (Jirón de la Unión, Plaza San Martín y pasaje Olaya), pero los ambulantes insistían en mantener el comercio informal en otras, rechazaban los traslados debido a que no habían funcionado las experiencias de inicios de la década de 1970. Además, Nolasco señalaba que el alcalde no había tomado en cuenta el punto de vista del gremio y que sin la coordinación con ellos pronto otros ambulantes ocuparían los espacios desalojados[15].

Algunas semanas después de la entrevista, el 4 de junio de 1981, el municipio decretó la prohibición del comercio ambulatorio en el distrito del Cercado, y ordenó su reubicación en Polvos Azules y el jirón Amazonas para el 15 de junio de ese año (Ghersi, 1989, p. 188). En una entrevista concedida en 2016, Guillermo Nolasco consideró que la postura de la Fedeval no previó adecuadamente los posibles escenarios; su oposición a la municipalidad no consideró que muchos afiliados sí veían con buenos ojos su traslado a Polvos Azules, hecho que sería trascendental en las siguientes semanas[16].

[15] *Caretas*, 646, 11-5-1981, «¿Calle sin salida?», p. 26.

[16] Entrevista personal, 2-2-2016, campus PUCP, San Miguel. Incluso pasaron por alto que el municipio pensaba facilitar el acceso al público por intermedio de nueve líneas de transporte. *El Diario* de Marka, 7-6-1981, «Nueve líneas de ómnibus irán a Polvos Azules». En el caso mexicano también el desalojo fue posible cuando la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) accedió a la media, a pesar de lo cual posteriormente no cumplieron con lo que les habían prometido (Mendiola, 2017, p. 148).

La reubicación

La decisión de la alcaldía de reubicar a los ambulantes no fue adecuadamente discutida en el Concejo. Posiblemente la presencia de los representantes de izquierda, abiertamente comprometidos con los ambulantes, inhibió al alcalde de someter las propuestas a debate. Varios de ellos, como Diego García Sayán, inspector de abastecimientos, informaron que no habían sido consultados a pesar de ser parte de las comisiones respectivas. García Sayán apoyaba la reglamentación del comercio, consistente en un empadronamiento, limitación de las áreas de uso y un especial cuidado en permitir que se les concediera el derecho a trabajar en la calle solo a aquellos que no contaban con el capital suficiente. En este punto coincidía con la Fedeval, reconocía que un pequeño porcentaje de los ambulantes ganaba muy por encima del salario mínimo, grupo que no debía ser confundido con el resto que sí necesitaba ganarse la vida en las calles[17].

La reubicación fue anunciada inicialmente para el 15 de junio, pero luego fue sorpresivamente adelantada al lunes 8 de junio de 1981. El 10 de junio, el alcalde declaró en sesión de Concejo que se aplicaría para el problema de los ambulantes «la reubicación, el reordenamiento y la racionalización con un programa de construcción de centros de abastecimiento en el área metropolitana», pero no mencionó los resultados del desalojo[18]. El decreto se apoyaba en la legislación municipal de 1959, 1978 y 1980, y solo autorizaba el uso del espacio entre las avenidas Abancay, Tacna, La Colmena y el Malecón Rímac (salvo el tramo llamado Polvos Azules) a lustrabotas, fotógrafos ambulantes, canillitas y vendedores de refrescos en quioscos. Todos los demás, la gran mayoría, serían erradicados. Los vendedores, debidamente empadronados, de las calles La Colmena, Parque Universitario, Ocoña, Camaná, Emancipación, pasaje Olaya, Unión y Huallaga —justamente el lugar en donde trabajaba Nolasco en la venta de blusas—, serían reubicados en Polvos Azules; mientras que los comerciantes de las calles Abancay, Cusco y algunas cuadras de Huallaga serían trasladados a la zona entre los puentes Ricardo Palma y Balta, en la calle Amazonas[19].

El municipio invirtió 46 millones de soles en la adaptación de los espacios. Además, se sancionaría a quienes guardasen las mercaderías y otros implementos en el centro, recomendaban que los ambulantes utilicen en las zonas de reubicación mesas portátiles, carretillas o triciclos, sin emplear mantas o plásticos en el piso,

[17] *El Diario* de Marka, 7-6-1981, «Problema de los ambulantes nunca ha sido discutido en el municipio».

[18] Boletín Municipal, abril-junio, 1981, p. 42.

[19] El decreto fue publicado en el Boletín Municipal, abril-junio, 1981, p. 59, pero no forma parte de las decisiones de ninguna de las sesiones del Concejo.

y exigiéndoles mantener limpia su zona de trabajo. De otro lado, la limpieza de las zonas desocupadas pasaba a ser responsabilidad de los comercios legalmente establecidos, sin señalar si el municipio ayudaría en la limpieza de la zona[20].

La zona de traslado más importante, a ciertas cuadras del Malecón Rímac, era conocida por su nombre colonial: Polvos Azules. La municipalidad la empleaba como playa de estacionamiento y en los días previos al desalojo se encargó de lotizar el espacio, el cual no contaba con servicios básicos. La misma realidad se percibe en el caso de la calle Amazonas, espacio destinado a albergar cerca de tres mil ambulantes. En ambos casos se establecieron zonas para cada tipo de comercio, considerándose 1,5 metros cuadrados como espacio de venta para cada comerciante[21].

A las ocho de la mañana del 8 de junio de 1981 comenzó el traslado, mientras que la Fedeval anunciaba que resistiría la medida con el apoyo de los concejales de izquierda[22]. Las autoridades del municipio que se oponían a la medida, Ángel Delgado, Baltazar Caravedo y César Rojas Huaroto, sostenían que la disposición no había sido aprobada por el Concejo y acusaban al alcalde de violar la ley municipal[23]. Mientras tanto, dos gremios de ambulantes, la Fedeval y la Fenvap, anunciaron marchas de protesta para reclamar una reubicación concertada y ajustada a la ley[24]. Además, otros políticos de izquierda, Agustín Haya de la Torre, Hugo Blanco y Enrique Fernández Chacón, presentaron un proyecto de ley al Congreso con el objeto de lograr el reconocimiento del ambulante como trabajador, con lo cual conseguirían el amparo del Estado peruano y derechos como seguro de salud, de jubilación y sindicalización; al mismo tiempo, se les exigiría el pago de contribuciones al Estado central y a las municipalidades. Por último, principio que tenía por objeto delimitar al 'verdadero' trabajador de la calle de otros personajes que se aprovechaban de la situación[25], se consideró en la definición de ambulante solo a quienes no sobrepasaban un capital de 500 000 soles e ingresos brutos por debajo de los cien salarios mínimos anuales[26].

---

[20] Decreto de alcaldía 110, del 4 de junio de 1981, publicado en *El Diario* de Marka, 7-6-1981.

[21] *El Diario* de Marka, 8-6-1981, «Ambulantes hoy serán desalojados de las calles céntricas».

[22] *El Diario* de Marka, 8-6-1981, «Ambulantes serán hoy desalojados».

[23] *El Diario* de Marka, 8-6-1981, «Concejo no ha autorizado reubicación de vendedores».

[24] *El Diario* de Marka, 8-6-1981, «Bases lucharán contra orden de alcalde Orrego» y 9-6-1981, «Ambulantes: Orrego no ha cumplido su palabra».

[25] Propuesta que se mencionó desde 1980 (véase Enrique Romero Flores, «Lima convertida en gigantesca parada» en *Correo*, 10-11-1980).

[26] *El Diario* de Marka, 8-6-1981, «Ambulante es reconocido como verdadero trabajador». Como hemos visto anteriormente, la limitación del capital se utilizó desde 1959 como un filtro para establecer quién era legítimamente ambulante.



Figura 5. Enfrentamiento entre los ambulantes y las autoridades por el desalojo de las calles adyacentes al Mercado Central. *Caretas*, 651, «Milagro en Lima», 15 de junio de 1981, p. 21.

Pese a la resistencia, el desalojo se produjo, aunque con incidentes. Con un fuerte apoyo policial se procedió a cerrar el acceso a Lima cuadrada, la zona establecida como rígida por el municipio, no quedándole otra opción a los comerciantes que aceptar su traslado a los nuevos espacios designados por la autoridad, mientras los ambulantes no empadronados y aquellos que se oponían a la medida marchaban por las calles del centro de la ciudad[27]. La municipalidad registró rápidamente a los interesados en el traslado, y al mismo tiempo los vendedores reubicados se quejaban de la falta de servicios en las nuevas zonas y del reducido espacio destinado para la venta[28]. Hay que recordar, hecho que se puede notar hasta hoy, la ausencia de baños públicos en la ciudad[29]: los vendedores solían utilizar los servicios de negocios

[27] *El Diario* de Marka, 9-6-1981, «Desalojo fue todo un caos». El diario informa de veinte detenidos por causa de las protestas.

[28] *El Diario* de Marka, 9-6-1981, «Policía ocupó centro de Lima para erradicar ambulantes» y «Alcalde accesitario se corrió de los vendedores». Además, autoridades y padres de familia del colegio Santo Tomás de Aquino se oponían a la instalación de vendedores frente a su local. De acuerdo con el testimonio de Nolasco, muchas personas que no trabajaban en el centro fueron empadronadas, aprovechando la oportunidad que daba el municipio para trabajar en Polvos Azules (entrevista personal, 2-2-2016, campus PUCP, San Miguel). Por otro lado, algunos vendedores denunciaron a comerciantes que utilizaban a intermediarios para vender en las calles, conocidos como «chacales» (*El Diario* de Marka, 10-6-1981, «Hacinamiento y falta de servicios padecen los reubicados ambulantes»). La misma situación se informa en *Caretas*, 651, «Reubicación trabada, penosa», 15-6-1981, p. 21. Las autoridades municipales también eran conscientes de estos hechos, de acuerdo al diario *La República* del 27-8-1983, p. 7. Este diario fue fundado por Guillermo Thorndike, luego de su salida de *El Diario* de Marka; el diario de Thorndike rápidamente adoptaría un tono sensacionalista (Gargurevich, 2002, p. 236).

[29] Inicialmente el Concejo contempló la posibilidad de construir baños públicos para ser usados preferentemente por los ambulantes en el Parque Universitario, la Plaza San Martín, la plaza Unión, la avenida Abancay y en los alrededores del Mercado Central. A principios de 1981 el inspector de sanidad intentó negociar con los ambulantes para lograr que trabajen en condiciones de limpieza e higiene, antes que erradicarlos. *El Diario* de Marka, 24-1-1981, «Baños públicos construirán en zona céntrica de Lima».

y restaurantes, y luego de ser trasladados a las nuevas zonas se vieron obligados a buscar nuevas redes que les permitiesen el uso de los servicios, lo cual no era ni fácil ni rápido[30]. Los concejales de izquierda recusaron la legalidad de la reubicación y declararon su apoyo a los gremios de ambulantes. Diego García Sayán declaró su reconocimiento a la función social del ambulante y señaló que la medida tuvo éxito solo gracias al apoyo policial, el cual en algún momento tendría que ser derivado a otras actividades. Otros, entre tanto, enfatizaban el derecho al trabajo de los vendedores, vaticinaban el futuro fracaso de la medida y la reocupación de las calles por parte de los trabajadores[31]. Mientras tanto, el Concejo, en la sesión ordinaria del 10 de junio acordó dar pleno respaldo a las medidas tomadas por el alcalde[32]. Orrego señalaría semanas después que, efectivamente, no consultó la decisión a los regidores, porque «creía que todos estaban dispuestos a encontrar la solución dentro de la mejor armonía», a pesar de que las medidas fueron aplicadas sin ningún diálogo con los comerciantes[33].

Las marchas y protestas de los ambulantes no cambiarían el destino final de la reubicación[34]. Luego de ser reprimidos en varias oportunidades, su estrategia giró a exigir mejores condiciones de venta en los espacios señalados[35]. Mientras Polvos Azules parecía asentarse paulatinamente como un buen espacio para las ventas[36], como era previsible, la situación en Amazonas era muy diferente. Escasos compradores se acercaban a una zona conocida por la presencia de delincuentes, razón por la cual pocos ambulantes continuaron en ese lugar en los días, semanas y meses posteriores[37]. La Fedeval anunció que había acordado con el alcalde ampliar las zonas de reubicación y el espacio destinado a cada ambulante y autorización para el uso temporal de algunas calles de la avenida Abancay y los jirones Cusco

---

[30] El alcalde anunció el día 9 de junio que pronto se terminarían de instalar los servicios en Polvos Azules (*El Diario* de Marka*,* 9-6-1981, «La respuesta de Orrego: hay que embellecer Lima»). Mientras tanto, los ambulantes usaban la vía pública como baño, causando problemas de higiene en el lugar (*El Diario* de Marka, 10-6-1981, «Hacinamiento y falta de servicios padecen los reubicados ambulantes»).

[31] *El Diario* de Marka, 9-6-1981, «Exigirán derogatoria de decreto que autoriza arbitrario desalojo».

[32] Boletín Municipal, julio-setiembre, 1981, p. 71.

[33] Boletín Municipal, julio-setiembre, 1981, p. 28.

[34] En los siguientes días, varias marchas de ambulantes, acompañados de los concejales y diputados de izquierda, fueron duramente reprimidas. Véase *El Diario* de Marka, 11-6-1981.

[35] La consigna lanzada por la Fedeval de desocupar Polvos Azules fue parcialmente acatada. Algunos comerciantes intentaron retomar sus antiguas ubicaciones, pero algunos espacios como el Jirón de la Unión no pudieron ser retomados. *El Diario* de Marka, 13-6-1981, «Ambulantes deciden retornar a sus puestos en las calles».

[36] Sí se informa de conflictos, pero a la larga el lugar terminó por ser aceptado por los comerciantes. *El Diario* de Marka, 14-6-1981, «En Polvos Azules no hay agua, luz, ni baños públicos».

[37] *El Diario* de Marka, 10-6-1981, «Hacinamiento y falta de servicios padecen los reubicados ambulantes».

y Huallaga, pero desocupaban definitivamente el Jirón de la Unión. Asimismo, el municipio se comprometía a expropiar terrenos para destinarlos a la venta ambulatoria[38]. Paulatinamente, los comerciantes de Polvos Azules comenzaron a vender su mercadería, reclamaban seguridad y otros servicios, pero poco a poco aceptaban la ventaja de la ubicación asignada por el municipio[39].

Pocas semanas después del desalojo, el Jirón de la Unión mostraba un rostro diferente, los ambulantes habían desaparecido debido al resguardo policial. Además, las autoridades consideraban que gracias a esta nueva imagen, más ordenada y sin ambulantes, «todos han salido ganando: la ciudad, los comerciantes de la zona, los transeúntes y los propios comerciantes quienes tienen otro local, Polvos Azules»[40]. Efectivamente, hacia la última semana de junio, ese espacio comenzó a cobrar vida con la llegada de compradores que contribuyeron a consolidar la nueva plaza[41]. Mientras tanto, los ambulantes de Amazonas languidecían y rechazaban asentarse en esas calles[42]. La zona definitivamente fracasó en esta primera etapa, lo que causó que muchos ambulantes buscasen retomar la venta en las calles de las cuales habían sido desalojados[43].

El enfrentamiento no tuvo como resultado una victoria total de las autoridades frente al comercio ambulatorio. Las inmediaciones del Mercado Central, las plazas Unión y Dos de Mayo, continuaron ocupadas por miles de vendedores. Sus organizaciones, como la Asociación Revolucionaria de Vendedores de las plazas Ramón Castilla y Dos de Mayo, estaban alertadas de la decisión del municipio y se prepararon para el enfrentamiento. Además, como ocupaban el espacio desde hacía más de veinte años, estaban bien organizados, limpiaban la zona constantemente con barridos y baldeos, acciones que mejoraban su imagen pública. Posiblemente también influyó el hecho de que no solo vendían manufacturas, sino muchos alimentos sin preparar, es decir, abastecían a la zona de productos necesarios para la vida cotidiana[44].

---

[38] *El Diario* de Marka, 10-6-198, «Violenta represión contra marcha de ambulantes».

[39] Los ambulantes se quejaban masivamente del poco espacio que contaban para vender y de que les impedían guardar sus mercaderías en el centro. Trasladarlas todos los días desde sus hogares era imposible por las condiciones del transporte urbano. *El Diario* de Marka, 11-6-1981, «Invitan a Orrego a visitar nuevos puestos ambulantes».

[40] Boletín Municipal, julio-setiembre, 1981, p. 5.

[41] *Caretas*, 653, 22-6-1981, «Ambulantes. Casi O.K.», p. 18.

[42] *El Diario* de Marka, 11-6-198, «Los ambulantes continúan sin vender nada en Polvos Azules»; 14-6-1981, «Para el Concejo de Lima desalojo es 'irreversible'».

[43] *El Diario* de Marka, 15-6-1981, «Orrego a punto de fracasar con la reubicación de ambulantes».

[44] *El Diario* de Marka, 14-6-1981, «Ambulantes de La Unión y Dos de Mayo rechazan los anuncios de reubicación».

En otros casos, los vendedores que no lograban atraer compradores a Polvos Azules reocuparon las calles en lugares diferentes a su emplazamiento original, como fue el caso de los vendedores de artesanías de las calles Rufino Torrico y Cailloma, quienes finalmente se instalaron en la entonces avenida Wilson (hoy Garcilaso de la Vega)[45].

La respuesta del alcalde a los cuestionamientos de las medidas de desalojo marcaría la pauta del conflicto en los años posteriores. En su enfrentamiento con los ambulantes trataría de oponer el derecho de usar la vía pública para trabajar, con el derecho de los ciudadanos de contar con una urbe en condiciones adecuadas de higiene y ornato, al e hizo responsables directos a los comerciantes de atentar contra esos ideales. Se convirtió en una lucha simbólica por el imaginario urbano que defendía el municipio, consistente en un orden asumido como moderno y decente, en contra de la 'nueva' ciudad que emergía producto principalmente de la migración desde las sierras del Perú[46]. El burgomaestre declaró que había que «revivir, revitalizar Lima cuadrada», sostenía que el decreto de alcaldía se basaba en un antiguo decreto supremo de la época del presidente Luis Bustamante y Rivero, razón por la cual no necesitaba aprobación del Concejo[47]. Posiblemente el alcalde se refería al decreto supremo emitido por el gobierno del general Óscar R. Benavides en 1936, el cual prohibía la venta ambulatoria; de igual manera, el municipio había decretado acciones similares en 1947, 1950, 1959 y 1964 (Ghersi, 1989, pp. 186-187). Por otro lado, algunas de las críticas provenían del sector liberal que consideraba que deberían darse facilidades para que los ambulantes se integren al sistema, antes que prohibir o reubicarlos en espacios inadecuados. Por ejemplo, De Soto sostenía que el ambulante constituía una nueva fuerza y que lo adecuado era aprovechar su energía empresarial[48]. Su propuesta final consistía en «liberalizar la actividad económica, dándole el régimen legal adecuado, para que por un lado el informal pueda pagar el costo de integrarse al sistema, y del otro, para que el empresario formal pueda competir en igualdad de condiciones [...] en

---

[45] *El Diario* de Marka, 20-6-1981, «Ambulantes decidieron volver a trabajar en el centro de Lima». El ejemplo del municipio limeño fue continuado por el Concejo Provincial del Callao, iniciándose una campaña de erradicación de los ambulantes de varias calles del puerto (*El Diario* de Marka, 21-6-1981 a 27-6-1981).

[46] Esta política ya se insinuaba en la decisión de Pierantoni en 1980 de recuperar la Plaza San Martín como una forma de recrear el ambiente de principios del siglo XX de la ciudad (*Caretas*, 594, 31-3-1980, «Está bonito esto», p. 65).

[47] *El Diario* de Marka, 9-6-1981, «La respuesta de Orrego: hay que embellecer Lima».

[48] *Caretas*, 651, 15-6-1981, «Milagro en Lima», p. 21.

otras palabras es importante cobrar conciencia que la solución está en la integración y no en la erradicación»[49].

Para asegurar el control de las calles e impedir la reinstalación de vendedores, el alcalde anunció la creación de un cuerpo de serenos[50], y agregó que pronto se iniciaría una campaña de limpieza de las zonas desocupadas. La aparición de esta vigilancia costeada por los comerciantes formales muestra la escasa capacidad del municipio para hacer cumplir sus disposiciones, antes que un exceso de regulaciones. Por ejemplo, la Asociación de Comerciantes del Jirón de la Unión organizó un equipo de alguaciles, quienes se encargarían de asear la zona y, evidentemente, cuidar el orden[51]. Este sería el núcleo de la aparición de los vigilantes, posteriormente conocidos como «guachimanes». Los ideales del burgomaestre se evidenciaron al señalar que era tan grave el problema del comercio informal, que incluso a las calles del centro llegaban trabajadores desde Chosica y Comas, zonas lejanas e identificadas con la presencia de migrantes; además, informó a la opinión pública que la Comisión de Cultura del municipio había creado veinte premios para un concurso en que se distinguirían obras de pintura, fotografía monumental, escultura, «monografía[s] sobre Petit Thouars, afiches, esculturas sobre Mariátegui, Basadre y Haya de la Torre»[52]. Anteriormente el alcalde había declarado que los nuevos espacios de venta, como Polvos Azules, podrían convertirse en tradicionales, como la Feria de Huancayo, relacionaba así la venta ambulatoria con las ferias del interior[53]. De este modo se diferenciaba entre las formas de comercio, los ambulantes representaban las maneras andinas y los otros eran parte de la modernidad comercial. El 'nuevo' ideal que tenía un claro tinte criollo, se expresó más claramente en las declaraciones del inspector de sanidad del municipio, Jaime Sánchez de la Puente, quien señaló que las vendedoras de comida serían reglamentadas para «convertir[las] en acuarelas de Pancho Fierro»[54].

Los conflictos no finalizaron. Como ya sabemos, el comercio informal aumentaba en algunas épocas en particular, como durante las fiestas de navidad. A fines de 1981 comenzó el resquebrajamiento del control de las calles, mientras que Polvos Azules se consolidaba definitivamente como el nuevo gran mercado y comenzó a denominarse por parte de sus ocupantes 'campo ferial'. Los compradores

---

[49] *Caretas*, 652, 15-6-1981, «¡Vivan los ambulantes!», p. 23.

[50] Para tal efecto desde los primeros días de junio se puso en licitación el servicio apoyándose en el interés de los afectados por el comercio informal, ellos sufragarían los costos por causa de la escasez de fondos de la comuna.

[51] *Caretas*, 652, 15-6-1981, «Reubicación trabada, penosa», p. 21.

[52] *El Diario* de Marka, 10-6-198, «Crearán cuerpo de alguaciles».

[53] *Caretas*, 651, 8-6-1981, «Ambulantes: hora cero», p. 23.

[54] *Caretas,* 599, 14-5-1980, «De aquí a la eternidad», p. 64b.

no provenían únicamente de las zonas aledañas o de sectores populares, también personas de distritos de clase media eran asiduas compradoras. El éxito de este lugar se debía a la venta de productos importados —muchos de ellos provenientes del contrabando— y otras manufacturas a precios rebajados[55]. Paradójicamente el traslado fue considerado temporal por el alcalde, mientras se buscaban y construían los espacios definitivos; sin embargo, la crisis de las finanzas municipales paralizó el proceso, lo que convirtió lo temporal en definitivo[56] hasta el trágico incendio de Polvos Azules, el 1° de enero de 1993. Pronto serían otros los problemas que comenzarían a abrumar al municipio, de los cuales el ambulantaje parecía el menos urgente. La ciudad languidecía por el abandono de la elite y de las inversiones rentables, mientras el gobierno prefería invertir en obras públicas ubicadas fuera del centro de la ciudad[57].

Sepultados en la basura

El comercio ambulatorio era, en realidad, una de las piezas de un entramado mucho mayor de problemas. Como hemos visto, el surgimiento y expansión del ambulantaje no dependió fundamentalmente de las trabas estatales o del aumento del desempleo. Para su desarrollo confluyeron varios aspectos esenciales, la caída de los ingresos urbanos que generó una demanda en busca de los precios más bajos posibles, controles de precios que facilitaron la especulación por parte de los comerciantes y, especialmente, el desencadenamiento de una situación de desgobierno urbano ocasionada por la crisis económica y política[58]. Además, las organizaciones de ambulantes aprovecharon la ambigüedad de las políticas municipales desde 1975 y lograron posicionarse como actores importantes, de modo que en 1980 se convirtieron en una fuerza respetable en el escenario político[59]. Pero, sin duda, fue el deterioro urbano el contexto en el que los ambulantes pasaron a ser un problema secundario, salieron del ojo de la tormenta por un rato[60]. Ese deterioro era la expresión más clara de una enorme crisis económica que comenzó a desencadenarse

[55] *Caretas*, 679, 21-12-1981, «Navidad en Polvos Azules», p. 78. La asociación de estos espacios con la presencia provinciana se evidencia en el subtítulo del artículo: «Una feria mejor que la de Huancayo a espaldas de Palacio».

[56] *Caretas*, 672, 9-11-1981, «Consultando a Buda», p. 26.

[57] *Caretas*, 655, 6-7-1981, Augusto Ortiz de Zevallos, «La recuperación de Lima», p. 48.

[58] También es posible que los ambulantes dedicados a la venta de comida hayan ejercido cierta influencia al comprar alimentos al por mayor, generando escasez. Al menos eso señala el diario *Correo*, 27-5-1980, «Los ambulantes se llevan los alimentos».

[59] En el caso de Puebla también se nota una mayor tolerancia hacia el comercio callejero hasta la década de 1970 (Mendiola, 2017, p. 47).

[60] Para un recuento de los graves problemas de la ciudad, véase Augusto Ortiz de Zevallos (1992).

con fuerza desde 1982, que pulverizó los ingresos de la mayoría de ciudadanos y de las instituciones públicas, especialmente el Municipio, que desde el año anterior a duras penas logró cubrir algunos costos de los servicios esenciales. Y, posiblemente, no hay problema que refleje mejor esta situación de caos que la limpieza pública.

El problema de la basura comenzó a hacerse más grave desde los inicios del año 1980. El alcalde Pierantoni lanzó una campaña de limpieza a principios de ese año, convocó a *boy scouts*, personal municipal y ciudadanos en general, bajo el lema «Lima te quiero limpia», la cual no tuvo el éxito esperado[61]. En esta campaña, ante la huelga de los trabajadores municipales, los ambulantes se convirtieron en valiosos aliados del alcalde al contribuir decisivamente con la limpieza en el Mercado Central, la plaza Ramón Castilla y la plaza Bolívar. En opinión del burgomaestre, los comerciantes habían «contribuido a que ahora las calles de las zonas centrales luzcan limpias»[62]. Sin embargo, el entusiasmo por la limpieza disminuyó paulatinamente, de forma que cuando le tocó el turno al Mercado Mayorista de La Victoria, mejor conocido como 'La Parada', el operativo fracasó por la falta de apoyo de la población y de los comerciantes[63]. Aunque en los días posteriores los trabajadores municipales reanudaron sus labores, Lima continuó con enormes basurales en el centro, uno de los más grandes se encontraba en las inmediaciones del Palacio de Justicia en el jirón Azángaro y otro, uno de los más célebres, en el jirón Roosevelt[64]. Algunos días después se informaba de otro gran basurero en la avenida Brasil y otros más en los distritos de San Miguel, La Victoria y el Rímac: la ciudad se había convertido en un gran basural[65]. En mayo la situación era igual o peor, miles de toneladas de basura se acumulaban en las calles por causa de las huelgas y la falta de infraestructura[66]; y en agosto, luego de los intentos de limpieza por la ceremonia de toma de mando de Belaunde, la ciudad nuevamente se encontraba altamente contaminada por la basura. El presidente de la sección de ingenieros sanitarios del Colegio de Ingenieros del Perú, Alejandro Vinces, alertó de la peligrosidad de la contaminación ambiental producto de la basura. De acuerdo con sus cálculos, de los dos millones y medio de toneladas de basura que Lima producía anualmente,

[61] *Correo*, 29-1-1980, «Lima te quiero limpia. Nuevo operativo iniciará el Concejo» y 2-2-1980, «Dos mil barrerán Lima».

[62] *Correo*, 3-2-1980, «Pararon algunos obreros municipales».

[63] *Correo*, 4-2-1980, «Fracasó operación limpieza por huela de obreros municipales y falta de cooperación de vecinos».

[64] *Correo*, 8-2-1980, «De las calles y plazas de la ciudad ya recogen los basurales».

[65] *Correo*, 18-2-1980, «Calles y playas están a rebosar de basura» y 23-2-1980, «Lima: ciudad de basura».

[66] *Caretas*, 549, 26-5-1980, «Basura que mata», p. 48.

por lo menos 500 mil toneladas quedaban en las calles[67]. Desde fines de 1980 el problema había quedado peligrosamente latente, tanto Lima como el Callao se vieron afectados por miles de toneladas de basura sin recolectar en las calles por causa de las huelgas de trabajadores[68]. Como hemos visto, el alcalde Pierantoni trató de crear una empresa municipal para dejar de lado a los trabajadores en el recojo de la basura, decisión que fue bloqueada con éxito por los obreros, con el saldo trágico cuatro trabajadores muertos por la represión policial[69].

Al asumir el mando Orrego, una de sus primeras tareas fue tratar de arreglar definitivamente este problema. En las primeras semanas de enero la basura se extendía peligrosamente por la ciudad, especialmente en las calles del centro; los empleados municipales no se daban abasto para recoger los desperdicios, se hizo notoria la falta de infraestructura[70]. A tal punto llegaba la emergencia que los vendedores del Mercado Central amenazaron con un paro de 24 horas si es que la Municipalidad no se apuraba en retirar las 30 mil toneladas de basura que infectaban el sótano del local, una buena parte de ella producida por los ambulantes de la zona[71]. Una de las primeras campañas que el municipio desarrolló fue la de limpieza pública. Las escasas rentas y la falta de medios se intentaron resolver por medio de una convocatoria a la ciudadanía para colaborar con las autoridades, no solo al evitar ensuciar la capital, sino con escoba en mano a contribuir con su limpieza. La alcaldía no podía resolver el problema por sus propios medios.

Los resultados de esta campaña no fueron los esperados, no se logró recolectar más de la mitad de los desperdicios. Según algunas fuentes, 70 mil toneladas fueron erradicadas con el apoyo de camiones, palas mecánicas y cargadores frontales; mientras que en el distrito de La Victoria el operativo no contó con el debido apoyo de las autoridades, lo que generó que el mercado de La Parada quedara con gran cantidad de basura sin recoger[72]. En la sesión ordinaria del Concejo del día 24 de febrero de 1981, se discutió la necesidad de resolver este problema y se propuso una profunda investigación acerca de la denuncia de la venta clandestina de residuos a las chancherías. Como se mencionó anteriormente, los trabajadores habían conseguido la concesión de vender los residuos no orgánicos, pero estaban prohibidos expresamente de traficar los residuos orgánicos. La Municipalidad consideraba que no solo se hacía esto último, sino que operaban mafias en

[67] *Correo*, 10-8-1980, «Lima: ciudad enferma por la basura».

[68] *El Diario* de Marka, 5-12-1980, «Calles del Callao: pestilentes y sembradas de basura».

[69] *Caretas*, 549, 26-5-1980, «Basura que mata», p. 48.

[70] *El Diario* de Marka, 12-1-1981, «Basura rodea mercados y mercadillos de Lima».

[71] *Correo*, 14-1-1980, «Basural causará un paro en el Mercado Central "Ramón Castilla"».

[72] *El Diario* de Marka, 5-1-1981, «La Parada más sucia que nunca» y «Erradican 70 mil toneladas de basura en operativo limpieza».

complicidad con los trabajadores[73]. Esto convenció a las autoridades de la necesidad de reformar el sistema de recojo de desperdicios, tarea que quedaría pendiente las siguientes semanas.

Luego de resolver, al menos parcialmente, las tensiones con los ambulantes, el alcalde dedicó sus energías a resolver el grave problema de la basura. El obstáculo más importante que enfrentaba era la oposición de los propios trabajadores municipales, quienes, en parte en defensa de su salario y en parte en resguardo del control de los reciclajes, constantemente se declaraban en huelga[74]. En julio, el municipio tomó la decisión de descontarles sus haberes a los huelguistas y abonar ese dinero a trabajadores contratados para recoger la basura de las calles[75]. A mediados de julio la ciudad se encontraba en estado crítico, los basurales aumentaban mientras que la huelga de trabajadores continuaba y se radicalizaba[76]. Finalmente, hacia finales de ese mes, los trabajadores levantaron la medida y se dispusieron a dejar la ciudad limpia para las celebraciones de las Fiestas Patrias[77].

A fines de 1981 el municipio nuevamente se encontraba en un grave déficit. De acuerdo con el alcalde, se necesitaba urgentemente transferencias monetarias desde el gobierno central para lograr cancelar los sueldos de los trabajadores, especialmente luego de los aumentos decretados por el gobierno[78]. El Concejo también proyectaba un aumento de los arbitrios del 200% para el año 1982, con el objeto de equilibrar las arcas municipales y financiar el nuevo sistema de recojo de basura proyectado para funcionar a mediados del año 1982.

En noviembre de 1981, luego de la sexta huelga de trabajadores municipales, un buen número de trabajadores fueron despedidos y sus dirigentes detenidos, incluido el secretario general de la Federación Nacional de Obreros Municipales (Fenaomp), Nazario Tintaya. El municipio procedió a contratar nuevo personal para reemplazar la labor de los obreros, acusados ante la opinión pública de ganar sueldos elevados y trabajar pocas horas al día, más el privilegio de comercializar los desechos no orgánicos. Se calculaba que Lima había despedido cerca de 850 trabajadores; Miraflores, 350; San isidro, 380; Surquillo, 300; La Victoria, 900; Huancayo, 60 y Trujillo, 400[79]. La Fenaomp finalmente levantó la huelga, debilitada por la represión y los despidos masivos; mientras que varios alcaldes recomendaban

[73] Boletín Municipal, enero-marzo, 1981.

[74] *El Diario* de Marka, 19-7-1981, «En todo el país se cumple la huelga de obreros municipales».

[75] *El Diario* de Marka, 19-7-1981, «Orrego contrata recolectores con salario de trabajadores».

[76] *El Diario* de Marka, 22-7-1981, «Basurales se acumulan y amenazan la salud de la población de Lima» y 23-7-1981, «¡Tanta basura!».

[77] *El Diario* de Marka, 25-7-1981, «Municipales trabajarán de noche para dejar limpia toda la ciudad».

[78] *El Diario* de Marka, 21-12-1981, «Concejo de Lima al borde del colapso».

[79] *Caretas,* 674, 23-11-1981, «La guerra de la basura», p. 24.

a los destituidos formar empresas para contratar el recojo de basura con los municipios[80]. El alcalde de Lima también enfrentaba el problema de los trabajadores de limpieza pública despedidos, a quienes les ofreció trabajo si formaban empresas para que puedan contratar sus servicios con el municipio[81]. Luego de las cesantías la Fenaomp se restableció del golpe: Nazario Tintaya fue repuesto en su puesto de la Municipalidad de Pueblo Libre y comenzaron largos litigios en diversos municipios para la reposición de trabajadores; incluso algunos distritos dieron marcha atrás en los despidos (por ejemplo, La Victoria repuso a los 900 cesados)[82].

En diciembre de 1981 la situación era más que alarmante. Las ratas aumentaron peligrosamente en la ciudad, a pesar de los intentos de fumigación y de desinfección, y amenazaban a la población con epidemias[83]. Toneladas de basura seguían sin ser recogidas en las calles de la ciudad, y los nuevos trabajadores contratados no lograban cubrir las necesidades de la ciudad. Además, la escasez de recursos no permitía la renovación de la infraestructura de limpieza, los carros estaban abandonados por falta de repuestos y frecuentemente los fondos no alcanzaban ni para la gasolina[84]. La alcaldía propuso el reparto de bolsas entre los vecinos para evitar que lancen los desperdicios a la calle sin ninguna protección, medida que tampoco sirvió de mucho para resolver la situación[85].

Para solucionar el problema de manera definitiva el municipio convocó a una licitación para el servicio de recolección, transporte y disposición final de la basura de Lima (Licitación Pública Internacional 01-81). Se presentaron cinco firmas para obtener la buena pro, todas ellas de origen extranjero, aunque obligadas a asociarse con firmas peruanas de acuerdo con las bases de la licitación, anunciándose como ganador al consorcio francés SITA, formado por la *Societé Industrielle Transport Automoviles* y la constructora peruana Villasol. Sin embargo, rápidamente se suscitaron las denuncias de irregularidades en la buena pro[86]. Además, muchos trabajadores municipales consideraban que su puesto de trabajo peligraba con este

---

[80] *Caretas,* 675, 30-11-1981, «Las cartas están echadas», p. 20.

[81] *El Diario* de Marka, 19-12-1981, «Arbitrios de alumbrado y limpieza aumentarán en 200 por ciento».

[82] *El Diario* de Marka, 28-12-1981, «Municipales despedidos: "Iremos a la marcha y exigiremos reposición"» y 29-12-1981, «FENAOMP propone suspensión de decretos que autorizan despidos».

[83] *Caretas,* 677, 14-12-1981, «Fe de ratas», p. 33.

[84] *El Diario* de Marka, 4-12-1981, «Toneladas de basura siguen regadas en calles y plazas».

[85] *El Diario* de Marka, 6-12-1981, «Amas de casa no quieren bolsas de basura en casa» y 21-12-1981, «Las bolsas no están mal, pero es el colmo que nos quieran cobrar».

[86] *El Diario* de Marka, 2-7-1981, «Todo está preparado para favorecer a consorcio francés» y Ricardo Uceda, «Cómo limpiar Lima ensuciando una licitación» en *El Diario* de Marka, 12-7-1982.

nuevo contrato, aunque supuestamente estaban incluidos en el plan de la empresa[87]. El resultado final es que la Municipalidad no logró reorganizar eficientemente el sistema de recojo de basura, problema que continuó en los siguientes meses y años[88]. Incluso los mineros que llegaron a Lima en 1983 consideraban que la ciudad estaba muy descuidada, con muchos huecos: «hay mucha basura, por ejemplo, terrenos que se usan como basurero. Nosotros no pensábamos que así era la capital»[89].

[87] *El Diario* de Marka, 1-7-1982, «Licitación de la limpieza: un asunto que huele mal».
[88] *El Diario* de Marka, 18-7-1982, «Lima al borde del estado de emergencia sanitaria».
[89] *La República*, «No pensábamos que así era Lima», 14-10-1983.

Capítulo 4
Falla general:
la ciudad y la crisis total del sistema (1983)

El año en que estuvimos en peligro

La situación de la administración de la ciudad no puede separarse del contexto general del país, como tampoco de sus problemas sociales, económicos y urbanos. El aumento del comercio ambulatorio fue producto de la combinación de estos factores, los cuales se dieron cita en un contexto particularmente delicado: la crisis económica y su recrudecimiento desde 1982. Como veremos, fueron tan graves los problemas que tuvieron que enfrentar la ciudad y el país, que los ambulantes parecían uno de los menos apremiantes, lo cual permitió su expansión, al mismo tiempo que se consolidaba su función en el espacio urbano.

Entre 1980 y 1982 el gobierno intentó, bajo el liderazgo de Manuel Ulloa en el Ministerio de Economía, aplicar un plan de medidas ortodoxas y de liberación del mercado. Entre otras disposiciones se buscó controlar el déficit fiscal al restringir el gasto público y devaluar la moneda; esta última medida encareció las importaciones —un componente importante entre ellas eran los alimentos— y trató de favorecer las exportaciones. Para controlar la inflación y sanear la economía, el gobierno decretó la eliminación de muchas de las barreras arancelarias que encarecían los productos importados. Estas propuestas fueron acompañadas de una reducción del tamaño del Estado y su carga presupuestal. Asimismo, se favoreció la privatización y tercerización de las actividades y servicios públicos, especialmente la reducción paulatina de los subsidios alimenticios (Parodi, 2004, p. 157).

Estas medidas causaron una recesión que, en teoría, contribuiría a estabilizar el país, reduciría los diversos déficits —estatal, comercial y de la balanza de pagos— y dinamizaría las exportaciones. Sin embargo, el impacto fue mucho más recesivo de lo previsto. Por ejemplo, el Estado vio reducir sus ingresos como porcentaje

del PBI de 17% en 1980 a 14,4% en 1981, lo que aumentó el déficit fiscal en lugar de reducirlo; este evolucionó de -3,8% en 1980 a -6,6% en 1981, -7,6% en 1982, -10,4% en 1983, -6,6% en 1984 y -2,7% en 1985 (Parodi, 2004, p. 159). Además, parte de este déficit fue generado por la negativa del presidente Belaunde de contraer el gasto público y cancelar las onerosas obras que anhelaba desarrollar. Por otro lado, el contexto externo se tornó rápidamente desfavorable, disminuyeron las exportaciones y aumentaron las importaciones, lo que generó un creciente déficit comercial; al liberarse las barreras arancelarias aumentaron intensamente las importaciones —muchas de ellas ofrecidas en las calles por los ambulantes—, esto causó la quiebra de las manufacturas locales y un incremento del desempleo en el sector obrero, mientras aumentaba el peso relativo del sector servicios de 42% en 1980 a 49% en 1985 (Sean, 2001, p. 78). Este escenario se agravó sensiblemente cuando en 1982 estalló la crisis de la deuda. Con la contracción del crédito externo se produjo un serio déficit en la balanza de pagos, que pasó del 0,6% en 1980 a 10,2% en 1981 (Parodi, 2004, p. 161)[1]; situación que se complicó con el deterioro de los términos de intercambio, lo que concluyó en la decisión del gobierno de suspender el servicio de la deuda en abril de 1983.

Asimismo, factores de otra índole afectaron seriamente la economía peruana. Un severo fenómeno de El Niño golpeó al Perú, lo que causó un impacto destructivo valorizado en cerca de 1500 millones de dólares, lo cual trajo como consecuencia una histórica y dramática caída del PBI de -12,6%. La actividad económica de ese año se redujo en -12% en la agricultura, -40% en la pesca y -8% en la minería. Las medidas económicas anunciadas por el sucesor de Ulloa, Carlos Rodríguez Pastor, ajustaron aún más la economía nacional, lo que aumentó en 160% en promedio los precios y generó una inflación de 125%. Las medidas económicas fracasaron rápidamente. La recesión golpeó duramente el salario de la población, mientras el alza de precios se tornaba incontrolable. La respuesta del gobierno de controlar la inflación por medio de minidevaluaciones fracasó y causó un serio retraso en el tipo de cambio real del dólar. Entre 1980 y 1984 los precios controlados, entre los que se encontraban los alimentos básicos, aumentaron casi 100% anualmente —las alzas más graves se dieron en los años 1983 (160,5%) y 1984 (129%)—; mientras que la inflación general se mantuvo en 60,8% en 1980, 72,7% en 1981, 72,9% en 1982, 125,11% en 1983 y 111,5% en 1984, un promedio de 88,6% (Parodi, 2004, p. 158). Esto indica que el impacto inflacionario fue más fuerte en el sector de precios controlados, compuesto fundamentalmente de los servicios públicos y los alimentos. Sin duda este factor explica la necesidad de buena parte

[1] En 1983 la deuda externa peruana bordeaba los 11 mil millones de dólares.

de la población de ir en busca de productos básicos con el menor costo posible, al margen de su calidad o, incluso, comodidad e higiene.

La PEA en Lima aumentó 36,5% entre 1980 (1298,2 millones de personas) y 1985 (1773,3 millones), de las cuales 7,1% se encontraba desempleada en 1980, 6,8% en 1981, 6,6% en 1982, 9,0% en 1983 y 8,9% en 1984 (Garavito, 2000, p. 10). Si consideramos un promedio de 1 millón 400 mil personas como parte de la PEA entre 1980 y 1984, cada punto porcentual de desempleo representa, aproximadamente, 14 mil personas sin trabajo, lo cual significa que entre 1983 y 1984 más de 30 mil personas se convirtieron en 'nuevos' desempleados. El subempleo aumentó de 26,8% en 1981 a 28,0% en 1982, 33,3% en 1983 y 36,8% en 1984 (Parodi, 2004, p. 175). El PBI medido en Lima y Callao (1980=100) pasó de 106 en 1981, a 105 en 1982, 91 en 1983, 93 en 1984 y 94 en 1985[2]. Estos datos muestran una seria depresión económica entre los años 1983 y 1985, reflejada en una caída abrupta del crecimiento económico, aumento de los precios y una caída del salario real. Los sueldos perdieron 25% de su poder adquisitivo en ese periodo, los salarios 29% y las remuneraciones del gobierno central 36,5%, mientras que, los ingresos informales son los que sufrieron el menor impacto negativo: 22% (Parodi, 2004, p. 175). Esta es una de las claves del periodo, los ingresos de la población disminuyeron sensiblemente, obligándola a buscar las fuentes de abastecimiento más cómodas en términos de precio, aunque más incómodas en función de la calidad o de la higiene[3]. Tal como se ha registrado para el caso mexicano, los vendedores callejeros limeños cuentan con la ventaja de los precios bajos y una amplia flexibilidad de horario (Mendiola, 2017, p. 21).

Además, de acuerdo con el *Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación* (CVR), desde la segunda mitad de la década de 1970 Sendero Luminoso (PCP-SL) desarrolló una serie de actividades políticas en la ciudad, utilizándola como una de sus bases de apoyo para el desarrollo de la lucha armada, especialmente en las barriadas que se habían desarrollado desde la década de 1950[4]. Incluso el PCP-SL eligió una serie de zonas para desarrollar sus tácticas en el escenario urbano, en la cual el centro de la ciudad se convirtió en un objetivo

---

[2] A nivel nacional, considerando 1980=100, el PBI pasó a 104,4 en 1981, 104,6 en 1982, 91,4 en 1983, 95,8 en 1984 y 97,9 en 1985 (Garavito, 1997, p. 8).

[3] Para una evaluación más completa del empleo y su impacto en el periodo véase Verdera (1994).

[4] CVR, «La región Lima metropolitana» (2003, pp. 407-408). Desde sus inicios las barriadas fueron consideradas 'cinturones de miseria', pero también se desarrolló, desde mediados de la década de 1960, un pensamiento mucho más positivo acerca de su desarrollo, especialmente desde la arquitectura y sociología urbana (Fernández Maldonado, 2003, p. 63). Otro estudio importante es el de Jean-Claude Driant (1991), *Las barriadas de Lima*. En el libro de Collier (1978) se hace un recuento de las denominaciones que se usaron hasta fines de la década de 1970 (pp. 31-32). Véase también, Michael L. Smith (1992).

de atentados, acciones de sabotaje en contra de instituciones públicas y privadas (CVR, 2003, p. 410). Sus atentados comenzaron en 1980 —aunque los ciclos de más intensidad se sitúan entre los años 1984-1987 y 1990-1992— y sus acciones afectaron el transcurso de la vida cotidiana en la ciudad, donde se instaló el temor ante la violencia, que muchas veces fue indiscriminada[5]. De acuerdo con el informe de la CVR, entre 1980 y 1985 se registraron veintitrés hechos de violencia en la ciudad —atentados con dinamita, asesinatos, ataques a puestos policiales, entre otros actos—. Algunas de estas acciones afectaron a centros o espacios comerciales, lo que propagó mayor temor en la población. Por ejemplo, el 24 de noviembre de 1981 los terroristas atacaron a dos bancos en Miraflores y el 7 de febrero de 1983 atentaron contra la popular cadena de tiendas Monterrey. Sin embargo, el mayor temor de la ciudad se desarrollaba durante los apagones, que fueron producto de la detonación de torres de alta tensión, que obligaron a la población limeña a alterar su vida cotidiana y acostumbrarse a la constante falta de fluido eléctrico[6]. Quizá uno de los atentados más impactantes fue el ataque en contra del presidente del Jurado Nacional de Elecciones Domingo García Rada, el 24 de abril de 1984, cuyo auto fue ametrallado, lo que lo dejó mal herido y causó la muerte de su chofer.

A más represión, más ambulantes

En un contexto tan complicado como el descrito, el problema de los ambulantes dejó de ser percibido como el más grave de la ciudad. La intensidad de la crisis, la violencia y la pobreza se convirtieron en la principal preocupación de los habitantes de Lima y del país; incluso el número de desplazados por la violencia que buscaban refugio en Lima aumentó[7]. Además, los ambulantes no necesariamente solo ocasionaban problemas, por el contrario, contribuían parcialmente a solucionar las dificultades de abastecimiento gracias a su facilidad para bajar los costos y permitir que la población adquiera bienes esenciales a menor precio. Quizá esta situación se nota más claramente en la venta de comida en las calles.

En 1980 el diario *El Comercio* insistió en varias oportunidades en la falta de condiciones higiénicas en la venta de alimentos callejeros. Su información, basada en las fuentes oficiales de la Municipalidad, reveló que en el centro de la

[5] Para la estrategia urbana de PCP-SL el mejor trabajo es el de Jo-Marie Burt (2008).

[6] En Lima los atentados que afectaron el suministro eléctrico comenzaron en la zona sur el 4 de mayo de 1981. Luego se repitieron en toda la ciudad el 24 de noviembre de 1981, el 29 de marzo, el 2 y 19 de agosto de 1982; y el 27 de mayo de 1983, entre otras fechas (CVR, 2003, pp. 414-415).

[7] El artículo de Rodríguez (1997), contiene una serie de reveladoras entrevistas que narran estos dolorosos hechos. La mayoría de testimonios reiteran el rechazo de la población limeña ante la presencia de estos refugiados.

ciudad nueve de cada diez vendedores de ceviche ofrecían productos en malas condiciones sanitarias, e hicieron un llamado a la población para evitar el consumo de alimentos en estos puestos de venta, pero, a pesar de esta advertencia, el público seguía consumiéndolos[8]. La plaza Castilla fue descrita como un ambiente muy antihigiénico, llena de moscas, polvo y desperdicios que rodeaban los puestos de comida. Sin embargo, los comensales indicaban que «acudían a estos lugares porque sus medios económicos no les permitían consumir en un restaurante». Esa era la razón por la que el horario de venta más concurrido era el almuerzo, calculándose que en un restaurante el costo del menú era casi tres veces más caro que en los quioscos[9]. Por este motivo existía una genuina preocupación respecto al aumento de enfermedades gastrointestinales, entre ellas la tifoidea. Se consideraba que el número de casos de esta última enfermedad se había multiplicado por cinco desde 1978 y que fueron los 80 mil puestos de venta de comida los principales responsables. El diario consideraba que estos establecimientos precarios satisfacían la demanda de «gente de modestos recursos, procedentes de los "pueblos jóvenes", en su gran mayoría», quienes no tienen los medios para pagar el costo de la comida en un restaurante. Como solución a este problema se sugirió reemplazar los puestos de venta con más restaurantes populares[10].

No es de menor importancia que el sueldo de los empleados públicos haya caído seriamente durante este periodo; esto significa que miles de trabajadores de las entidades públicas debían sobrevivir con un ingreso cada vez menor y por esa razón necesitaban bajar el costo de su alimentación y de sus familias. En ese sentido, resulta bastante lógico que las carretillas de comida no tuvieran como clientes únicamente a transeúntes u otros vendedores de la zona, parte de los comensales eran la masa empobrecida de empleados[11]. Por ejemplo, una persona entrevistada por la revista *Caretas* para un informe acerca de la venta de comida en la calle, señaló que los restaurantes eran muy caros, además que se demoraban en servir[12].

Por estas razones, cuando a fines de 1981 la revista *Caretas* publicó una encuesta acerca de la percepción de los problemas del país en la cual se podía señalar más de una alternativa, 44% de los entrevistados consideró que la situación económica era su principal preocupación, 25% señaló al desempleo, 14% a la basura, 12% al terrorismo, 10% al hambre y 8% a las huelgas, entre otros factores —en ese

8 *El Comercio*, 13-10-1980, «Alimentos contaminados venden en esquinas de zona central de Lima».

9 *El Comercio*, 15-5-1980, «Cerca a plaza Castilla expenden comida en las peores condiciones».

10 *El Comercio*, 9-9-1980, «Venta ambulatoria de alimentos: grave atentado contra la salud».

11 Los puestos de comida del Parque Universitario también tenían como clientes a los empleados del cercano Ministerio de Educación. Guillermo Nolasco, entrevista personal, 2-2-2016, campus PUCP, San Miguel.

12 *Caretas,* 599, 26-5-1980, «De aquí a la eternidad», p. 64b.

momento la delincuencia apenas preocupaba al 3% de los entrevistados—. Quizá más interesante aún, el 29% de los encuestados consideraban que la peor institución o empresa estatal eran los municipios, posiblemente este indicador muestra el impacto directo de la falta de recursos para recoger la basura, sea por los defectos de en la administración urbana o los conflictos laborales[13].

Lo señalado no implica la ausencia de conflictos urbanos por la presencia de los ambulantes en la ciudad. El municipio luego de su victoria parcial en el traslado de los comerciantes, intentó continuar con las medidas, pero no logró mayores avances. La política municipal se concentró en la represión antes que en la negociación o en la búsqueda de alguna solución, las pertenencias decomisadas de los ambulantes eran rematadas y constantemente los afectados denunciaban la existencia de «coimas» y abusos que les impedían recuperar sus bienes[14]. De igual manera, el deterioro del control municipal sobre la ciudad se reflejó en el abuso de los vigilantes del Mercado Central quienes comenzaron a cobrar dinero y a extorsionar a los ambulantes para dejarlos vender en el interior del mercado[15].

Las secuelas de decomisos y abusos policiales producto de las disposiciones le dejaron al municipio una tarea compleja. Los ambulantes exigían la devolución de sus mercaderías decomisadas en los operativos destinados a su erradicación. La Municipalidad anunció el remate de los productos incautados durante los últimos dos años, consistentes en carretillas, quioscos y diversos productos manufacturados, tales como artefactos eléctricos, ropa, artesanías, juguetes, casetes, etcétera[16]. Sin embargo, los ambulantes impidieron su remate, y solicitaron que se les permita el pago de una multa a cambio de no perder toda la mercadería decomisada. Cientos de comerciantes afectados por las requisas rodearon el local municipal y amenazaron con arrebatar las mercaderías a quienes las comprasen, lo que obligó a las autoridades a suspender la medida[17].

Los conflictos comenzaron a ser cada vez más violentos, las erradicaciones hacían uso de la fuerza policial y muchas veces terminaban por generar la solidaridad del público testigo de estos actos. Por ejemplo, al cumplir una orden del alcalde Orrego anunciada verbalmente 48 horas antes, los alguaciles municipales con el apoyo de la fuerza policial y tractores, procedieron a eliminar los puestos de venta

---

[13] Le siguen la empresa de agua (ESAL), los teléfonos (*Compañía Peruana de Teléfonos*), la empresa eléctrica, los servicios de salud, etcétera. *Caretas,* 679, 28-12-1981, «Midiendo desgastes», p. 15.

[14] *Correo*, 6-7-1983, «Mafias se imponen hasta en el remate de triciclos».

[15] *Correo*, 19-4-1983, «Cambio de vigilantes piden en Mercado Central».

[16] *El Diario* de Marka, 5-1-1983, «Rematarán mercadería requisada a ambulantes». Esta medida fue previamente coordinada por la Fedeval, la cual llamó a los sindicatos a apoyarla (*El Diario* de Marka, 7-1-1983, «Ambulantes reclaman mercadería decomisada»).

[17] *El Diario* de Marka, 14-1-1983, «Ambulantes no permitirán remate de mercadería».

de comida en las inmediaciones del Palacio de Justicia. Ante esta situación, el «público lanzó silbidos de protesta en la avenida Roosevelt, cuando el tractor levantó en vilo un quiosco rodante y lo apachurró contra la baranda metálica del camión "[…] ¡Abusivos! ¡Salvajes!", fueron algunos de los gritos salidos entre el público»[18]. No es arriesgado suponer que esta solidaridad se originaba en la conciencia de la falta de empleo, tanto como en el uso que el público hacía de los servicios de los ambulantes[19].

El conflicto más grande se dio en el caso de los ambulantes asentados en la avenida Grau. La Municipalidad aceptó su ubicación temporal en esa calle mientras se desarrollaba la temporada navideña de diciembre de 1982, pero para febrero de 1983 aún se encontraban allí y, además, habían establecido quioscos y carretillas para la venta, lo que consolidó su presencia. Entre los productos que más vendían se encontraba todo tipo de calzado, carteras y ropa, abastecidos a bajo costo por una gran cantidad de talleres legales y clandestinos de la ciudad[20]. El regidor Luis Castañeda Lossio anunció que serían erradicados porque su permiso era temporal, aunque tenía la esperanza de que el diálogo con los ambulantes evitaría la violencia. Los ambulantes solicitaron apoyo de la Municipalidad para comprar terrenos y trasladarse, pero, en medio de la crisis, tal propuesta no tuvo éxito[21].

Las amenazas se cumplieron y el 16 de marzo de ese año los ambulantes fueron desalojados con el apoyo de la fuerza pública, un cargador frontal y un tractor[22]. Los comerciantes que pernoctaban en sus lugares de venta no pudieron impedir el desalojo, produciéndose algunos actos de violencia. De acuerdo con su dirigente, Jorge Espinoza, el año anterior el municipio los había reubicado desde el jirón Camaná, les habían exigido que se empadronen y les habían cobrado un derecho de ocupación de la vía pública[23]. El traslado desde el mencionado jirón fue causado por el propio auge de Polvos Azules, al convertirse este espacio en un mercado muy concurrido por los compradores, las calles adyacentes se llenaron

[18] *La República*, 19-2-1983, «'Limpian' a golpes kioscos de plazuela».

[19] El mismo operativo se llevó a cabo en la avenida Uruguay, con la misma violencia (*El Diario* de Marka, 21-3-1983, «Abusos de alguaciles denuncian ambulantes»). Sin embargo, en la plaza Dos de Mayo el resultado fue diferente, los vendedores de comida aceptaron su traslado hacia las calles adyacentes, quizá la diferencia entre ser erradicados y reubicados permitió que el resultado sea distinto (*Correo*, 7-9-1983, «Desalojan quioscos de la plaza Dos de Mayo»).

[20] En el Perú no contamos con estudios detallados al respecto, pero se conoce que en el caso de Santiago de Chile los vendedores de productos de cuero (cinturones, calzados, carteras) eran al mismo tiempo productores, lo cual al eliminar la intermediación les permitía mejores ingresos (Prealc, 1988, p. 32).

[21] *Correo*, 27-2-1983, «Erradicarán ambulantes de avenida Grau».

[22] *Correo*, 17-3-1983, «Desalojaron a ambulantes ubicados en avenida Grau».

[23] *La República*, 17-3-1983, «Orrego arrasa con 450 puestos de ambulantes en la avenida Grau».

de nuevos ambulantes considerados excedentes por las autoridades[24]. El conflicto por el espacio en el campo ferial fue tan intenso que los comerciantes de Polvos Azules propusieron enrejar la zona y pidieron a las autoridades el desalojo de los recién llegados[25].

La solución municipal de trasladarlos a la avenida Grau indicaba la insuficiencia de su plan de reubicaciones, incapaz de encontrar una solución a mediano plazo, mientras que permitían la legalidad temporal del comercio ambulatorio en esa zona por medio de los empadronamientos, los carnés y los pagos; es decir, nuevamente el Municipio actuó de forma ambigua. Aparentemente los comerciantes habían entendido que el municipio les buscaría otro lugar para trabajar, mientras que las autoridades no consideraban esa posibilidad[26]. Paulatinamente la Municipalidad perdió el control de la situación y se reveló incapaz de hacer cumplir sus disposiciones. A fines de marzo los ambulantes se habían reinstalado en el mismo lugar y reclamaban, por el contrario, la devolución de sus mercaderías. Para presionar a las autoridades, convocaron a una improvisada conferencia de prensa en la que informaron que en diálogo con el alcalde habían logrado que les devuelvan sus bienes. Además, solicitaban garantías para trabajar, dado que su mercado se había creado con la decisión municipal de trasladarlos el 17 de octubre de 1981, los comerciantes llamaron a este espacio «Campo Ferial de la avenida Grau»[27]. A mediados del año 1982 los comerciantes seguían en el mismo lugar, resistiendo los intentos de desalojo. El 2 de julio la alcaldía intentó erradicarlos nuevamente y enviarlos al campo ferial Amazonas, pero esta vez los comerciantes se encontraban preparados con piedras y palos, y lograron atrincherarse en el campo. El resultado fue de más de treinta comerciantes heridos y otros tantos policías e inspectores afectados. Además, como parte de su estrategia, dormían en sus lugares de venta, soportaban la humedad y el frío del invierno, e izaban banderas peruanas como una manera de reafirmar su condición de trabajadores nacionales[28].

Los ambulantes rechazaban tajantemente su traslado a Amazonas, señalaban en sus declaraciones que «ese lugar nunca será un centro comercial productivo, por allí no pasa ni el diablo»[29] y que en ese sitio «ni el diablo compra fósforos»;

---

[24] La fama del campo ferial era de tal magnitud, que los ambulantes del Callao solicitaron al prefecto su propio Polvos Azules. *Correo*, 21-5-1983, «Ambulantes chalacos quieren también sus Polvos Azules».

[25] *El Diario* de Marka, 28-5-1983, «Polvos Azules de todo, hasta una ilusión».

[26] *El Diario* de Marka, 18-3-1983, «Demandan investigar el desalojo de ambulantes».

[27] *El Diario* de Marka, 27-3-1983, «Ambulantes de la avenida Grau reclaman garantías». Otros vendedores sostenían que la Municipalidad los había trasladado allí desde el 8 de julio de 1981 (*Correo*, 8-8-1983, «Ambulantes de Grau se preparan contra el desalojo»).

[28] *Correo*, 3-7-1983, «Ambulantes de la avenida Grau se resisten a salir».

[29] *La República*, 2-7-1983, «Ambulantes evitan desalojo».

de forma unánime afirmaban que aceptarían su salida hacia otro lugar solo si este contaba con posibilidades comerciales[30]. Efectivamente, desde mediados del año 1983, era evidente el fracaso de Amazonas. Los comerciantes de ese campo solicitaban desesperadamente más apoyo al municipio para atraer clientela, pero la mala fama del lugar, la falta de apoyo policial y otros factores contribuían con el languidecimiento de la zona[31].

A pesar del incremento de la violencia, los ambulantes de la avenida Grau lograron mantener sus lugares de venta. El cuatro de agosto la fuerza pública reanudó el desalojo, esta vez con mayor violencia —se utilizaron gases lacrimógenos y vehículos rompe manifestaciones («rochabús»)—, lo que produjo un incendio y varios heridos de consideración, a pesar de lo cual los ambulantes resistieron. La defensa de su derecho a trabajar en las calles se sustentaba en el hecho de que, de acuerdo con sus testimonios, no ensuciaban las calles, lo que los hacía cuestionar a las autoridades y la decisión de desalojarlos. Afirmaban que ellos trabajaban de ese modo porque no había empleo, como uno de los comerciantes declaró «¿Qué quiere el gobierno si no hay empleos? ¿Que seamos delincuentes o terroristas?»[32]. En los días siguientes los ambulantes continuaron durmiendo en sus puestos[33], solicitaron al alcalde la renovación de su autorización para vender en la zona hasta fines de 1983, mientras se organizaban para comprar un terreno e indicaban que el lugar más apropiado era una propiedad de la Beneficencia Pública de Lima frente al Ministerio de Educación (hoy conocido como «El Hueco»)[34]. A fines del año 1983, en la temporada navideña, nuevamente los ambulantes comerciaron en la avenida Grau, esta vez con una «Feria de juguetes», señal de que finalmente habían logrado torcer la voluntad de las autoridades municipales[35].

Las medidas de control del comercio callejero se revelaron como insuficientes conforme transcurría el año 1983. A mediados de ese año no solo la avenida Grau fue reocupada por vendedores informales, diversas calles del centro fueron invadidas también. Por ejemplo, nuevamente el Jirón de la Unión, el Parque Universitario y las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola fueron reconquistadas por ambulantes. Para evitar ser despojados por los alguaciles municipales, los comerciantes se apostaban cerca de las esquinas, las cuales les permitían huir rápidamente de

[30] *Correo*, 3-7-1983, «Ambulantes de la avenida Grau se resisten a salir».

[31] *Correo*, 11-6-1983, «Vendedores de Amazonas se quejan».

[32] *La República*, 5-7-1983, «Desalojo sangriento».

[33] Esta estrategia era muy frecuente entre los trabajadores en varios lugares de América Latina (Mendiola, 2017, p. 77).

[34] *El Diario* de Marka, 7-8-1983, «Ambulantes piden quedarse hasta diciembre en avenida Grau».

[35] *Correo*, 16-12-1983, «Instintos burgueses».

sus perseguidores[36]. Desde el año anterior la Municipalidad había dado señales claras de no poder contener el aumento del comercio informal por sus propios medios. Así, el 14 de octubre de 1982 decretó sanciones «a los conductores y/o propietarios de inmuebles que permitan el comercio ambulatorio en las zonas frontales, áreas de acceso o umbrales de estos, dentro del perímetro de la Lima cuadrada» (Ghersi, 1989, p. 188). Esta medida corresponsabiliza a los propietarios o inquilinos de inmuebles del control de los ambulantes, lo que muestra la poca capacidad de control del municipio. El 19 de agosto de 1983 la alcaldía reiteró la orden que prohibía el comercio informal hasta una distancia de 100 metros del perímetro de los locales públicos dentro del distrito del Cercado (Ghersi, 1989, p. 189). Estas disposiciones, como otras de la misma naturaleza, no sirvieron de mucho para contener el avance del comercio informal. Semanas después de publicado el decreto, los ambulantes continuaban ocupando varios lugares cercanos a edificios públicos, aunque en algunos espacios, como la plaza Dos de Mayo, las autoridades tuvieron un éxito temporal al erradicar a los vendedores[37]. En algunas calles se permitió la venta de ciertos objetos, como libros en la avenida Grau, loterías y (primera vez que aparecen mencionadas) estudiantes de enfermería que medían la presión a los transeúntes; pero en otras se instaló una fuerte vigilancia que impedía la ocupación de los ambulantes. A pesar de todo esto, los comerciantes se las ingeniaban para instalarse nuevamente en las calles, una vendedora de golosinas de la avenida Abancay señaló que la custodia no podía ser eterna, «ya veremos, no podrán mantener esta rigidez todos los días. Además, tenemos el derecho de ganarnos la vida» [38]. Semanas después la fuerza pública los desalojó de la avenida Abancay, aunque nuevamente retornarían en las semanas siguientes[39].

La estrategia de los gremios de ambulantes no solo consistió en resistir los intentos de desalojo por parte de la autoridad. Mantuvieron sus prácticas anteriores y en varias oportunidades limpiaron sus zonas de trabajo, como muestra de su preocupación por el ornato de la ciudad, y para desmentir a quienes los responsabilizaban de la suciedad de Lima. Los ambulantes de la plaza Castilla se encargaron de asear la zona, según *El Diario* de Marka, debido a la inoperancia de los servicios municipales de limpieza, lo cual, de acuerdo con el contexto de la época, no parece nada improbable[40]. Nuevamente a fines de año, cerca de mil ambulantes que ocupaban las plazas Dos de Mayo, Castilla, y las avenidas

[36] *El Diario* de Marka, 1-7-1983, «Ambulantes volvieron a ocupar centro de Lima».

[37] *Correo*, 9-9-1983, «Ambulantes aún no se retiran de locales públicos».

[38] *El Diario* de Marka, 8-9-1983, «Rigurosa vigilancia municipal restringe comercio ambulatorio».

[39] *Correo*, 19-11-1983, «Desalojan ambulantes de la avenida Abancay».

[40] *El Diario* de Marka, 7-2-1983, «Ambulantes asearon la plaza Castilla».

Colmena, Emancipación y Argentina, se encargaron de baldear la zona con sus propios recursos. Además, habían contratado barredores, según lo comentaron los dirigentes: «de esa manera estamos colaborando con el Concejo de Lima y la comunidad, de los cuales esperamos toda su colaboración»[41].

Esta conocida estrategia, consistente en aceptar su responsabilidad en la limpieza y colaborar con el municipio, se sumó a la abierta resistencia del cumplimiento de las disposiciones que tenía como base los derechos que la alcaldía les había concedido paulatinamente. Por ejemplo, los trabajadores informales se negaban a pagar las respectivas licencias municipales que las autoridades les exigían, alegaban que ese pago no los ponía a salvo de las requisas y los desalojos. Diversos ambulantes en las inmediaciones del Mercado Central contaban con licencias municipales, a pesar de lo cual continuamente eran extorsionados por las autoridades. Además, indicaban que sus exiguos ingresos no les permitían pagar los permisos[42].

Las autoridades no contaban con mayores propuestas para resolver el problema del comercio informal. Los proyectos de construcción de nuevos mercados quedaron truncados ante la grave crisis financiera del municipio y los conflictos con los vendedores[43]. Por el contrario, la municipalidad les aumentaba el costo de alquiler de los puestos, en un esfuerzo por mejorar las alicaídas rentas de la institución[44]. Esta situación llevó a que los vendedores que contaban con puestos en los mercados reconsideraran su situación, agravada con la presencia de ambulantes en las inmediaciones de los locales, quienes, gracias a su informalidad, contaban con menores costos y, por ende, con menores precios, lo que atraía a mucha más clientela que los comerciantes formalmente establecidos. Los ambulantes podían mantenerse en el negocio por su ubicación y la facilidad que tenían para bajar sus costos, mientras que los comerciantes con puestos ubicados en mercados no tenían esa flexibilidad. Por ejemplo, en Ciudad de Dios, en el distrito de San Juan de Miraflores, los comerciantes del Mercado Cooperativo Ciudad de Dios sostenían que el costo de la electricidad hacía imposible que continúen con su trabajo. De acuerdo con su dirigente, Víctor Vásquez, numerosos agremiados tenían elevadas deudas con la empresa encargada (Electrolima) debido al tipo de tarifa comercial que les cobraban; además, el mercado se encontraba rodeado de ambulantes que afectaban seriamente el flujo de compradores al interior del mercado[45], pues

[41] *El Diario* de Marka, 23-10-1983, «Ambulantes limpiarán plaza Dos de Mayo».

[42] *Correo*, 30-7-1983, «Ambulantes no quieren pagar licencia municipal».

[43] En el caso del nuevo mercado del distrito de Surquillo, los comerciantes se negaron a pagar el monto propuesto como alquiler por el municipio por considerarlo elevado, razón por la cual se demoró su inauguración (*Correo*, 4-1-1983, «…Y Surquillo sigue esperando inauguren su mercado»).

[44] *Correo*, 22-6-1983, «Elevan alquileres en puestos de mercados».

[45] *Extra*, 31-1-1986, «Mercado de 'Ciudad de Dios' con amenaza de quiebra».

la avenida principal —que se encontraba delante de la puerta del local— se encontraba abarrotada de ambulantes[46].

De acuerdo con el diario *La República*, 240 comerciantes minoristas habían cerrado sus puestos y 200 más estaban a punto de tomar esa medida, agobiados por las bajas ventas; mientras que en las afueras del Mercado Central prosperaban miles de ambulantes. Agotados por la situación, los minoristas amenazaban convertirse en ambulantes si es que no desalojaban a los vendedores de las calles[47]. Otra fuente señala que el gremio de comerciantes minoristas amenazó con paralizar la venta de productos en protesta por la competencia desleal de los ambulantes, quienes no pagaban impuestos y vendían los productos por encima de los precios oficiales[48]; por último, los minoristas afirmaban que cerca de la cuarta parte de los puestos del Mercado Central estaban en situación de abandono[49].

Los propios comerciantes se encargaron de presentar propuestas ante las autoridades con el objeto de resolver el problema de la expansión de los vendedores ambulantes. Por ejemplo, el presidente la Asociación de Comerciantes Mayoristas Particulares en Productos Agrícolas y Diversos, Antonio Tello, informó que ya tenían un proyecto de construcción de un nuevo local en Santa Anita, cuya culminación se haría efectiva en el verano del año 1984. De acuerdo con su declaración, los alimentos bajarían de precio gracias a que la administración directa de los comerciantes aseguraría menores costos de transacción para los productos[50]. Los ambulantes también eran conscientes de la importancia que tenían para la alimentación de la población. En el II Congreso Ordinario de la Fedeval, realizado entre el 16 y 18 de agosto de 1983, Nolasco, reelegido como secretario general, señaló que con una ley del parlamento que reconozca al ambulante y que permitiera su organización, sería factible acabar con los especuladores que encarecían el precio de los alimentos[51].

[46] *Extra*, 5-6-1986, «Miles de ambulantes invaden avenida De los Héroes».

[47] *La República*, 1-10-1983, «Trabajadores de los mercados en quiebra».

[48] En los tiempos de precios controlados los alimentos sujetos a regulación desaparecían de las tiendas legalmente establecidas y reaparecían en manos de los ambulantes, quienes los vendían a precios más elevados. Esto, sin duda, fue posible gracias a una cadena de complicidades: autoridades, mayoristas y minoristas. Al vendedor minorista le preocupaban los continuos reajustes de los precios oficiales y la posibilidad de descapitalizarse al vender por debajo del siguiente precio oficial, por lo que especulaba con el bien. A las autoridades les era funcional mantener el mercado clandestino de productos, de lo contrario el desabastecimiento sería mayor. Finalmente, a los mayoristas, mejor informados que nadie, podían regular el flujo de productos en función de sus intereses comerciales, generalmente operaban bajo el modelo de 'cuotas' para las tiendas legalmente establecidas.

[49] *Correo*, 1-10-1083, «Comerciantes harán paro en protesta contra ambulantes».

[50] *Correo*, 21-6-1983, «Lima tendrá mercado más grande del país».

[51] *El Diario* de Marka, 27-8-1983, «Ambulantes dan fórmulas para abaratar alimentos».

Conexiones e intermediaciones

Los ambulantes comenzaron a proponer soluciones, por ejemplo, que la Municipalidad expropiase los terrenos baldíos para adjudicarlos a los comerciantes con el objeto de convertirlos en mercados y comedores populares; al mismo tiempo, la Fedeval rechazaba la disposición de impedir la presencia de vendedores en las inmediaciones de locales públicos e instituciones, aunque reconocían que los comerciantes callejeros obstaculizaban peligrosamente la vialidad de la zona[52]. Así, en algunos casos, fue factible la construcción de locales para los vendedores, como fue el conjunto de galerías ubicadas entre los jirones Cuzco y Andahuaylas, zona conocida como «Mesa Redonda»[53]. Una empresa privada se encargó del proyecto, inaugurado por el alcalde Orrego y el presidente de la Conaco, Herless Buzzio, quien afirmó que los ambulantes eran «pequeños empresarios»; mientras que el alcalde felicitó a los constructores por el edificio, las facilidades que ofrecían y «embellecer, además, la ciudad con construcciones de arquitectura moderna»[54]. Estas galerías pronto se hicieron importantes en la venta de artefactos eléctricos e importaciones, lo que generó la ocupación en sus inmediaciones de otro gran conjunto de vendedores ambulantes. Años después, este nodo comercial sin la debida regulación sería el escenario de una gran tragedia a fines del año 2001.

Este momento marca el cambio de percepción del ambulante por parte de algunos sectores. La Conaco comenzó a exigir la incorporación de los pequeños comerciantes en el sistema formal, antes que solo su erradicación, denominándolos «empresarios», y reclamaba para ellos apoyo crediticio y la eliminación de las trabas burocráticas por medio de un organismo especialmente dedicado a las pequeñas empresas. En 1983 también las autoridades municipales, como el concejal Luis Castañeda, comenzaron a compartir la idea de que la razón de la expansión del comercio informal era «la cantidad terrible de trámites que tienen que pasar. Y encima hay que llenar una serie de formularios sofisticados. Parece que les es más conveniente vivir al margen de toda esta legislación»[55]. Fueron los empresarios agremiados quienes solicitaron la disminución de las barreras por medio de un régimen especial, apelaron a la necesidad de todas las pequeñas empresas, conjunto

---

[52] *Correo*, 10-9-1983, «Ambulantes piden terrenos para levantar mercados».

[53] De acuerdo con las fuentes municipales, por lo menos desde el año 1968 se registra la concentración de ambulantes en la zona (AHML, Actas del Concejo, 17-3-1970).

[54] *Correo*, 17-9-1983, «Ambulantes inauguran galería de tiendas en centro de Lima».

[55] *La República*, 27-8-1983, «Informe. Ambulantes mueven 400 mil millones», p. 9. El asesor legal de varias asociaciones de ambulantes, Próspero Castillejo, también estaba de acuerdo con la existencia de una excesiva regulación. *La República*, 27-8-1983, «Informe. Ambulantes mueven 400 mil millones», p. 10.

en el que incorporaron a los pequeños comerciantes informales[56]. La Conaco planteó directamente la creación de ferias y mercados, la cooperativización de los ambulantes y la liberación de algunas calles del centro a partir de las ocho de la noche. Las ferias y la liberación las habían sugerido desde principios del década de 1970, pero esta vez añadieron la necesidad de crear un fondo de apoyo especial de ayuda financiera «para dotar a los ambulantes de los medios necesarios, como triciclos, y que los conviertan en pequeños mercados ambulatorios y en constante desplazamiento por los barrios de Lima»[57].

Es altamente probable que la conexión entre los grandes comerciantes y el consumo final haya pasado por los ambulantes y comerciantes callejeros. Por ejemplo, en el caso de Polvos Azules, la mayor parte de los productos que se vendían en sus puestos eran importados. El campo ferial se hizo famoso rápidamente por la enorme variedad de productos que se podían comprar (artefactos eléctricos, ropa, calzados, cosméticos, licores, cigarrillos, etcétera), al igual que muchos productos de manufactura local provenientes de los talleres de la ciudad, buena parte de ellos informales. Las autoridades denunciaron que los productos provenían del contrabando, pero los comerciantes aducían que les compraban a los mayoristas, quienes les vendían sin factura y evadían los impuestos respectivos. Uno de los vendedores del campo ferial señaló que si ellos exigían factura a sus proveedores «nos cobran el precio con que venden al público y así no tenemos ningún margen de ganancia»; los grandes almacenes en las inmediaciones de Mesa Redonda eran los que abastecían a los vendedores de mercaderías importadas, justamente las tiendas comerciales ubicadas en las galerías inauguradas en agosto de ese año[58]. Incluso, los vendedores de Polvos Azules señalaron que al principio las autoridades municipales no objetaron la venta de los productos importados, estaban más interesados en mostrar el éxito del campo ferial antes que controlar la legalidad de las mercaderías[59].

El hecho de que una parte de los productos vendidos en el campo ferial fueran artefactos eléctricos, tales como equipos de sonido, radio casetes, televisores, entre otros, podría avalar la declaración de varios vendedores de que los obtenían de otros mayoristas. Tal como expuso uno de ellos en defensa del origen legal de sus productos: «pueden ver mis registros, es cierto, yo vendo mercadería importada,

[56] *El Diario* de Marka, 28-8-1983, «Ambulantes y CONACO piden apoyo a pequeñas empresas».

[57] *El Diario* de Marka, 29-8-1983, «CONACO plantea feria de ambulantes».

[58] *El Diario* de Marka, 22-12-1983, «Mayoría de ambulantes vende sin factura». Miriam Granados (1997) también encontró que la mayor parte de ambulantes eran abastecidos por comerciantes formales de las galerías del Mercado Central, Mesa Redonda y Gamarra.

[59] *El Diario* de Marka, 28-5-1983, «Polvos Azules de todo, hasta una ilusión».

artefactos eléctricos, pero de empresas que están registradas»[60]. De hecho, la comercialización de mercadería importada de origen legal o no, sobrepasó los límites del centro de Lima, a fines del año 1983 cerca del óvalo de Higuereta en el distrito de Surco se instaló un mercadillo, luego conocido como «Polvos Rosados», que se especializó en la venta de juguetes, artefactos y otros bienes de origen extranjero, atendían así una demanda de clase media. *El Diario* de Marka, de conocida tendencia política de izquierda, ironizó con el hecho y afirmó que era una burla que personas de clase media se dediquen a la venta en las calles, considerándolos falsos ambulantes[61].

De este modo, en 1983, el ambulante dejó de ser un personaje marginal en la economía limeña. Si bien realmente no lo había sido nunca, su presencia se restringía mucho más a la alimentación y diversos bienes de consumo de pequeño valor; a fines de 1983 se podía obtener todo lo que uno quisiera por medio del comercio ambulatorio, no únicamente lo necesario para la vida cotidiana. Su importancia no había disminuido para los limeños, se habían convertido en una de las principales formas de acceso al mercado y abastecimiento de diversos tipos de bienes. Además, políticamente, sus gremios y sus dirigentes habían ganado presencia en los medios y la opinión pública gracias a la cerrada y muchas veces exitosa defensa de sus intereses. Esto explica que los medios de comunicación empezaran a interesarse en su presencia más allá solo de los episodios, lamentablemente comunes, de violencia en su contra.

El ambulante: nuevo personaje urbano[62]

En agosto de 1983 el diario *La República* publicó un especial dedicado al comercio ambulatorio, el cual intentó abordar las diversas aristas del problema y elaboró un detallado panorama de su realidad, en el que se señala que parte del problema era la informalidad de las propias empresas, la cuales para bajar sus costos eludían la formalidad en los contratos laborales y evadían impuestos. Y, muy importante, señala que el comercio informal creció «no solo porque se ha permitido la invasión

[60] *El Diario* de Marka, 28-8-1983, «Ambulantes y CONACO piden apoyo a pequeñas empresas». La mayor oposición provenía de la Sociedad Nacional de Industrias, quienes consideraban que la venta de importaciones baratas afectaba seriamente la industria nacional de diversos bienes como fósforos, golosinas, licores, cigarrillos, ropa, calzado, etcétera. *Correo*, 7-12-1983, «SNI dice que Polvos Azules es mercado del contrabando».

[61] *El Diario* de Marka, 24-12-1983, «El Polvos Azules de la pituquería limeña».

[62] Según tengo registrado el día 23 de agosto se celebra el «Día del ambulante», no he encontrado mayores referencias acerca de cuándo se instauró esa fecha. De acuerdo con Miriam Granados (1997), los vendedores la celebraban a mediados de la década de 1990.

de productos extranjeros, sino por el *deterioro del poder adquisitivo de la población*. Muchas de las personas que hoy se dedican al comercio ambulatorio son obreros arrojados de sus fábricas. Además, muchas de las personas que acuden a Polvos Azules u otros centros donde también se venden productos contrabandeados, pertenecen a *sectores de clase media, afectados seriamente por la política salarial* del gobierno»[63].

Al ambulante se le describe como un sufrido provinciano desempleado y hambriento, que se ve obligado a usar su ingenio para sobrevivir en la ciudad, que ocupa con sus triciclos y quioscos las calles, obstruyéndolas peligrosamente con sus mercaderías, que es perseguido y golpeado por las autoridades policiales y municipales, pero que representa la lucha por la supervivencia «en un país ya bastante castigado por las inclemencias del tiempo y las veleidades del ministro de Economía»[64]. El informe pasa revista a los espacios en los que abunda su presencia, señalaba que en el caso de la avenida Grau los propios ambulantes convirtieron el lugar en un mercadillo con el nombre de «Miguel Grau», mientras que los demás espacios fueron asignados por la propia municipalidad. En el campo ferial Amazonas se registraban numerosos puestos vacíos por causa de la poca afluencia de público comprador, los vendedores se quejaban del poco apoyo de las autoridades y de que vendían con las justas para sobrevivir. Los comerciantes incluso ofrecieron reintegrar el pasaje en micro de los visitantes, para animar a la gente a ir de compras a Amazonas[65]. Se especializaban en la venta de zapatos y carteras que adquirían a talleres locales, o, en su defecto, los compraban en baja cantidad de los importadores mayoristas de Lima. Pocos otorgaban facturas de venta debido a que sus proveedores tampoco les proporcionaban ese documento, lo que remarca esta característica intermediaria del comercio informal. Además, en ese momento se encontraban enfrentados con los dirigentes por malos manejos administrativos.

El caso del campo ferial Miguel Grau era diferente. Como sabemos, no se trató de un proyecto municipal, sino de una decisión de los ambulantes luego de una ambigua orden del alcalde de otorgarles un permiso temporal para el uso de la avenida. También vendían ropa y zapatos, pero con mejor suerte que en Amazonas. Además del jirón Camaná algunos provenían del Parque Universitario, no pagaban ningún derecho, pero estaban totalmente dispuestos a pagarlo y se encargaban de limpiar la zona por medio de un barredor contratado por ellos. Las

---

[63] *La República*, 27-8-1983, «Informe. Ambulantes mueven 400 mil millones», p. 2. El énfasis es mío.

[64] *La República,* 27-8-1983, «Informe. Ambulantes mueven 400 mil millones», p. 3.

[65] *La República,* 27-8-1983, «Informe. Ambulantes mueven 400 mil millones», p. 4.

mercaderías provenían de talleres locales —muchos de ellos informales— o de mayoristas importadores; de acuerdo con el informe del diario *La República*, sus precios eran en promedio 10% inferiores a los de las tiendas[66]. Este campo ferial era contiguo a otro de la cuadra 3 de la misma avenida, producto de la violenta ocupación por parte de centenas de ambulantes que se instalaron a principios de julio de 1981, lugar que también fue conquistado a pesar de los intentos de las autoridades de desalojarlos y también señalaron que se preocupaban de mantener limpia la vereda «y no malogramos el ornato»[67].

Los ambulantes de los campos feriales mencionados, Amazonas y Grau, consideraban que sus ingresos a duras penas alcanzaban para sobrevivir. De acuerdo con la nota, era evidente que sus capitales eran exiguos y que, además, compartían con el resto de peruanos la incertidumbre acerca de su futuro. Su gesta se convertía en simbólica en relación con el resto de trabajadores peruanos: «de aquí a diciembre están seguros, después probablemente tengan que afrontar otra trompeadera con los alguaciles y habrán más cabezas rotas, pero también más tenacidad, el hambre empuja hasta las voluntades más débiles»[68].

El caso con más éxito de todos era el de Polvos Azules, campo en el que se ubicaban cerca de 1850 comerciantes, quienes ofertaban todo tipo de productos importados. El triunfo del mercado se debía, de acuerdo con los propios dirigentes, a su buena ubicación cerca de la Plaza de Armas (hoy llamada la Plaza Mayor) y, especialmente, al entonces concurrido Correo Central. Los costos que enfrentaban eran muy bajos, la Municipalidad no les cobraba nada, aunque todavía no contaban con los servicios de luz, razón por la cual se alumbraban con Petromax, conocidos lamparines de querosene de la época. Las autoridades y los vendedores eran conscientes de que el lugar era transitorio, motivo por el cual los dirigentes señalaron que los asociados se encontraban reuniendo fondos para la compra de un terreno que les permitiría construir un mercado. El éxito del campo tuvo como consecuencia la llegada de otros ambulantes en los alrededores del campo, lo que obstaculizaba el tránsito y mermaba las ventas de los vendedores ubicados en el interior, situación que generaba conflicto entre los comerciantes de ambos bandos.

La visita de campo de los periodistas demostró la gran existencia de mercadería importada sin la debida documentación, una parte de ella electrodomésticos, productos que, según los vendedores, eran obtenidos legalmente de los mayoristas ubicados en el centro de Lima. Era conocido en ese tiempo que muchas personas viajaban a la ciudad de Tacna con el objeto de comprar productos importados que

[66] *La República,* 27-8-1983, «Informe. Ambulantes mueven 400 mil millones», p. 4.

[67] *La República,* 27-8-1983, «Informe. Ambulantes mueven 400 mil millones», p. 4.

[68] *La República*, 27-8-1983, «Informe. Ambulantes mueven 400 mil millones», p. 4.

luego eran negociados en la capital, eventualidad que los periodistas la comentaron a los dirigentes[69], quienes reconocieron la posibilidad y minimizaron su impacto en el volumen total de productos. Este hecho puede explicar la presencia de un porcentaje de la mercadería, pero resulta menos probable como origen de los electrodomésticos y otros objetos cuyo transporte como contrabando personal desde el sur era mucho más complicado[70]. La campaña de denuncias acerca del contrabando en el campo ferial, que no eran infundadas, afectaba la imagen de los comerciantes. Por ejemplo, cuando los periodistas quisieron fotografiar a una señora que ofrecía golosinas importadas, esta se negó y señaló que necesitaban su permiso para fotografiarla, posiblemente por el temor de que quede en evidencia que su puesto estaba lleno de productos importados[71]. Por otro lado, la autoridad municipal, representada por el concejal encargado, Luis Castañeda, señalaba que no era competencia de la comuna verificar el origen de las mercaderías, atribución que dependía del Ministerio de Economía[72].

De acuerdo con el informe el resto de ambulantes ocupaban las inmediaciones del Mercado Central[73], diversos jirones de Lima cuadrada y de las calles aledañas. Muchos de ellos eran 'verdaderos' ambulantes, en el sentido de que deambulaban por las calles como ropavejeros, lustrabotas, vendedores de dulces, etcétera; otros tenían lugares semifijos que utilizaban parcialmente en el día y luego abandonaban el lugar, tales como los emolienteros, los vendedores de comida, etcétera; finalmente, quienes utilizaban una infraestructura fija que dejaban en el lugar al finalizar el día, como vendedores de libros, abarrotes, etcétera. Esta sección se cierra con la intención de mostrar que el 'problema' del ambulante es en realidad una solución a la crisis que afectaba a todos, que ofreció un giro importante en la concepción de la situación. Además, de esta forma la presencia del comercio ambulatorio dejaría de ser percibida como la acción de otro, lo que demarcaba una frontera infranqueable entre un grupo de personas cuyas condiciones sociales, económicas, educativas, de origen o, por último, de suerte, los llevaron a tomar la decisión de vender en la calle, y quienes contaban con la ventaja de contar con un trabajo estable e ingreso seguro. En medio de la crisis esa frontera se diluía peligrosamente, de forma que el trabajo

[69] Quienes aún tenemos memoria de ese tiempo, recordamos a muchas personas que viajaban al sur con esa intención, luego de burlar los controles o pagar la coima respectiva, se ganaban la vida revendiendo los productos entre familiares y conocidos. Generalmente ofrecían ropa, calzados, relojes, perfumes y otros objetos que podían trasladarse en una maleta.

[70] *La República*, 27-8-1983, «Informe. Ambulantes mueven 400 mil millones», p. 5.

[71] *La República*, 27-8-1983, «Informe. Ambulantes mueven 400 mil millones», p. 5.

[72] *La República*, 27-8-1983, «Informe. Ambulantes mueven 400 mil millones», p. 7.

[73] El concejal Castañeda consideraba que más o menos eran 10 mil los ambulantes en esa zona. *La República*, 27-8-1983, «Informe. Ambulantes mueven 400 mil millones», p. 7.

ambulatorio se mostraba como el posible destino de los peruanos. Este aspecto es central: una de las consecuencias más importantes que trajo la extensión del trabajo en las calles y la crisis fue la disolución parcial de las distancias étnicas y de clase[74]. Cualquiera podía perder su empleo o ver quebrar su negocio y por lo mismo verse necesitado de recurrir a vender en las calles, independientemente de su estrato social, su etnicidad, su lugar de residencia o su educación: «Usted mismo —nadie está libre— puede ser el próximo ambulante. Vaya viendo su calle favorita y haga algo para que la terquedad de los que dirigen la economía del país no lo vayan a poner en esa penosa opción. No es tan simple ni tan fácil vivir como ambulante»[75].

Este posible destino final para los miembros de la clase media generó una creciente angustia (De la Flor, 2000, p. 71), amplificada por el miedo de ser confundidos con las clases bajas, con las cuáles su distancia no era únicamente de clase, sino étnica, reflejada en la percepción del color de piel. Además, como hemos visto, el trabajo de ambulante no era apreciado e incluso los propios trabajadores eran conscientes de esa realidad (Granados, 1997, pp. 47 y 103). Es decir, pertenecer a la clase media suponía ser percibido como «blanco»; mientras que los vendedores ambulantes eran percibidos como «cholos». Era el fin de las apariencias.

Actor político

El análisis del comercio ambulatorio reconoció las ventajas con que contaba frente al comercio formal, antes que solo señalar las externalidades negativas que ocasionaba. Por ejemplo, la Conaco indicaba que los ambulantes, de acuerdo con sus estudios, contaban con la posibilidad de la movilidad que les permitían «apoderarse de las ubicaciones más atractivas y muchas veces, delante mismo de los establecimientos comerciales, con quienes entran en competencia ofreciendo casi los mismos productos […] y a menores precios, debido a que no poseen ninguna carga tributaria» (1983, p. 6). Esta situación desfavorable para los comerciantes legalmente establecidos se agravaba al considerar los alquileres de puestos o locales, los pagos al personal y sus beneficios, etcétera. La institución ya no solicitaba su erradicación, reconocía que eran parte de un problema mayor, proponían su empadronamiento y su reubicación en mercados minoristas. Extrañamente, quizá al asociar esta solución con la idea de que estas representarían ferias tradicionales, sugerían que estos mercadillos podrían servir de «atracción turística» si es que estaban

[74] Es el conocido temor a la movilidad social descendente, que en Lima implica desplazamientos simbólicos de la etnicidad (Martuccelli, 2015, pp. 117 y 119). Un vendedor entrevistado por Miriam Granados (1997) contó la anécdota de un dirigente sindical que atacaba duramente a los ambulantes; cuando perdió su empleo estatal no le quedó otra opción que dedicarse a la venta en las calles (p. 123).
[75] *La República*, 27-8-1983, «Informe. Ambulantes mueven 400 mil millones», p. 5.

ubicados en «zonas periféricas de la ciudad, cerca de vías de acceso principales». La posición del gremio de comerciantes claramente concebía el problema como un producto de la presencia de excampesinos en Lima, expulsados por las malas condiciones de vida en las zonas rurales: «considerando que la actividad migratoria hacia las ciudades es parte causal del problema, la Conaco respalda la actividad agrícola descentralizada que pueda habilitar nuevas tierras de cultivo»[76]. Además, el sueño de algunos sectores parecería consistir en el retorno de los migrantes a «su lugar». Las autoridades municipales compartían este punto de vista. El concejal Luis Castañeda, responsable de las regulaciones, al ofrecer su explicación acerca del origen del comercio ambulatorio, rechazó de plano la responsabilidad del gobierno local y señaló que

> en primer lugar, es un fenómeno socioeconómico de orden estructural, porque hay un factor migratorio producto del desigual desarrollo de la actividad económica que ha originado excesivas presiones migratorias generando macrocefalia, es este caso Lima. Por otro lado, es una fácil alternativa de trabajo; nosotros no podemos desconocer los índices de desocupación y subempleo, que bordean el 50% de la población económicamente activa [...] Lima succiona todos los recursos del país y nosotros reconocemos que una de las causas del comercio ambulatorio es la fuerte presión migratoria sobre Lima[77].

De esta manera el prejuicio de que los ambulantes eran producto de la desocupación de miles de personas migrantes en la ciudad, mayormente campesinos provenientes de las zonas rurales, no era compartido únicamente por los especialistas que analizaban el problema como resultado de los cambios estructurales de la economía peruana, era un «sentido común» instalado en el imaginario de los peruanos, que no consideraban la posibilidad de que el problema también fuera una solución a sus propias dificultades económicas causadas por la crisis de ese momento.

Todos estos sucesos del año 1983, conflictos entre ambulantes y autoridades, la crisis económica y la conciencia pública de su impacto en las condiciones de vida de las mayorías, potenciaron el papel político de los comerciantes informales en Lima y sus organizaciones[78]. Por ejemplo, desde fines de la década de 1970 los ambulantes comenzaron a presentar propuestas destinadas a resolver los conflictos

---

[76] *La República*, 27-8-1983, «Informe. Ambulantes mueven 400 mil millones», p. 6.

[77] *La República*, 27-8-1983, «Informe. Ambulantes mueven 400 mil millones», p. 9.

[78] La situación también era notoria en el Callao. En la provincia existía el Sindicato de Ambulantes de la avenida Sáenz Peña, afiliado a la Fedeval. Este gremio se opuso tenazmente al prefecto del Callao y sus órdenes de reubicación; por el contrario, proponían un fondo de apoyo para los comerciantes, expropiación de terrenos y la mediación del Obispo del Callao, el Colegio de Abogados y el fiscal provincial para crear una comisión que busque una solución a los conflictos. *El Diario* de Marka, 16-6-1983, Aviso contratado, «Prefecto del Callao viola autonomía municipal».

suscitados por su presencia en la ciudad. En 1983 consideraban que era necesaria una ley que regule su actividad, propuesta presentada anteriormente como anteproyecto al Congreso en 1980, pero que no había sido tomada en cuenta por el Poder Legislativo. La Fedeval buscaba con esta ley que el ambulante sea considerado con todos los derechos y deberes de cualquier otro trabajador[79]. La popularidad del ambulante se reveló cuando el diputado de filiación trotskista Hugo Blanco fue suspendido de sus funciones congresales, por llamar «asesino» y «genocida» al general Clemente Noel Moral, jefe político militar de Ayacucho. El diputado declaró que se convertiría en «vendedor ambulante [...] ofreciendo café molido, y, a lo mejor, alguna otra baratija para sobrevivir y no caer doblegado ante la fiereza de la política económica del régimen»[80]. Considerado «agitador nato» por el diario, afirmó que no le temía a la policía y que mientras viviera como ambulante se encargaría de organizar a las masas para la revolución[81].

La imagen del ambulante comenzó a revelarse como más compleja. No era únicamente un desempleado, migrante o local, ni un personaje que se enriquecía gracias a las facilidades para vender en la calle, también su radicalización política podía percibirse como peligrosa. Por ejemplo, en 1980 un conocido locutor de radio, Juan Ramírez Lazo, denunció la presencia de vendedores de folletos y revistas comunistas (de origen soviético y chino) en los medios de transporte público, razón por la cual, de acuerdo con el gremio que representaba a estos vendedores, los choferes les impedían subir a los vehículos a vender[82]. En 1983 la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) presentó a un inválido que desde su silla de ruedas se dedicaba a recolectar fondos para Sendero Luminoso. De acuerdo con la investigación policial, esa labor era una práctica frecuente entre los militantes urbanos y abarcaba las inmediaciones del Mercado Central, las plazas Castilla y Dos de Mayo y la avenida Grau en sus colectas. Los encargados de la recolección «disfrazaban su actividad haciéndose pasar como humildes vendedores ambulantes que comercializaban ropa interior de mujer»[83]. Por otro lado, también se denunció la relación de los ambulantes con la venta de drogas, lo que aumentaba la «peligrosidad» de los comerciantes informales. Un vendedor de la plaza Dos de Mayo fue presentado por la policía como un distribuidor de pasta básica de cocaína, camuflada entre cigarrillos[84]. La policía comenzó a revisar a los vendedores

[79] *Correo*, 1-11-1983, «Ambulantes harán marcha para reclamar ley especial».
[80] *Correo*, 31-8-1983, «Hugo Blanco venderá café en las calles».
[81] *Correo*, 31-8-1983, «Hugo Blanco venderá café en las calles».
[82] *El Diario* de Marka, 1-11-1980, «Impiden trabajar a vendedores de libros y revistas».
[83] *El Diario* de Marka, 12-8-1983, «Inválido reunía dinero de ambulantes para Sendero».
[84] *Correo*, 12-10-1983, «Ambulante era paquetero en la plaza Dos de Mayo».

ambulantes de dulces, incluso los que contaban con carretillas de marcas conocidas, lo que difundió el temor y la desconfianza entre la población. Por ejemplo, en una foto de la primera plana del diario *Correo* se muestra una intervención policial contra un vendedor, quien fue revisado por un perro entrenado, pero en ese caso (frente al colegio Markham) «no se comprobó irregularidad alguna»[85]. El sentido de esta frase parece sugerir que la falta de comprobación no eximía de sospecha a los ambulantes.

En las elecciones municipales de 1983 se hizo presente en los medios una agenda de problemas urbanos consistente en los siguientes puntos: transporte urbano, ambulantes, limpieza pública y comercialización de productos. El diario *Correo* presentó un resumen de las propuestas de los principales candidatos al sillón municipal. Frente al tema del comercio, Alfredo Barnechea (APRA), proponía reubicar a los ambulantes en coordinación con los afectados, recuperar el control de los mercados mayoristas (en manos del Ministerio de Agricultura), construir mercados cooperativos y mejorar el control de los precios con participación vecinal. Alfonso Grados (AP), presentó las ideas de tecnificar a los vendedores de comida para lograr mejoras en la higiene, promover las asociaciones para adquirir terrenos, recuperar el control de los mercados mayoristas y liberar la venta de algunos productos perecibles o de difícil conservación. Ricardo Amiel (PPC) propuso techar el lecho del río Rímac para convertirlo en un mercado para los ambulantes y mejorar la infraestructura de los mercados para evitar los problemas sanitarios. Por último, Alfonso Barrantes (IU), quien sería a la postre alcalde, proponía solucionar el problema ambulatorio con la participación de comerciantes y vecinos, al legalizar el ambulantaje por medio de un proyecto de ley; finalmente, propuso exigir al gobierno quebrar los monopolios en el abastecimiento de productos alimenticios[86]. Queda claro que en 1983 entre los principales problemas de la ciudad se encontraban los precios de los alimentos y su adecuado abastecimiento (ONPE, 2005, pp. 64-65), además, el comerciante callejero dejó de ser percibido únicamente como un problema, era una fuerza electoral en la ciudad.

Durante la campaña, quien manifestó mayor cercanía con los ambulantes fue Barrantes, valiéndose de la tendencia política de la mayoría de las asociaciones y sus dirigentes; además, como hemos visto, desde 1980 en el municipio los concejales de izquierda y algunos diputados se manifestaron completamente a favor de los ambulantes y sus plataformas de lucha. Desde ese año el candidato de izquierda había hecho declaraciones favorables sobre el derecho de los ambulantes

---

[85] *Correo*, 24-9-1983, «Tras la droga».

[86] *Correo*, 13-11-1983, «Elecciones municipales: ¿Qué proponen los partidos?».

a ocupar las calles para trabajar[87]. En la elección Alfonso Barrantes fue el ganador, convirtiéndose en el primer alcalde de izquierda de la ciudad con cerca del 36% de los votos, seguido de Barnechea con 27%; pocos días después los ambulantes manifestaron su confianza en que las soluciones ofrecidas resolverían los conflictos en la ciudad[88]. Una vez realizada la elección y considerándose a Barrantes como virtual alcalde, la IU publicó su plan de gobierno, en el cual proponía negociar con los ambulantes y legalizar el comercio, y que contaba con la opinión de los vecinos, sin mencionar si se reubicaría o no a los comerciantes. La propuesta del partido de izquierda consideraba a la ciudad como parte del enfrentamiento entre la oligarquía y las clases populares, y acusaba a la primera de ser responsable de la especulación de tierras y del deterioro del entorno agrícola de Lima. Por esta razón, sostenía la necesidad de una intervención más decidida en los diversos problemas urbanos. Por ejemplo, planteaban la necesidad de regular el uso del agua, recurso siempre escaso, dándole a la municipalidad su administración para establecer diferentes tarifarios en función del tipo de uso y volumen de agua utilizado[89]. Respecto a la ciudad y los ambulantes, el programa de la IU consideraba que los problemas de abastecimiento provenían de los monopolios de los supermercados privados, propusieron en cambio una red de mercados cooperativos organizados por los minoristas, además de la construcción de nuevos centros de abastos a nivel mayorista. En las condiciones de vida tan duras de la ciudad de Lima, de acuerdo con el plan, las personas no optaban por ser ambulantes, era la única opción con la cual contaban para sobrevivir, al tener en consideración que

> No se escoge ser ambulante, se lo es porque en una sociedad como la nuestra las otras opciones son la vagancia o el delito. Los 300 000 ambulantes de Lima son víctimas del sistema económico injusto del Perú: aquellos que debieron dejar sus provincias en pos de algo mejor para sus familias; los jóvenes que no pudieron seguir estudiando y no obtienen trabajo, los despedidos de sus labores; las madres de familia que tratan de ayudar a sus modestos hogares, etcétera. ¿Cómo pueden ser estos compatriotas enemigos de las personas que tienen el cuasi privilegio de poseer un trabajo estable? Izquierda Unida sabe que el comercio ambulatorio es una consecuencia de toda la injusta estructura económica del Perú[90].

La IU proponía la legalización del comercio ambulatorio, la creación de un fondo municipal de apoyo al comerciante, el reordenamiento y control de los

[87] *El Diario* de Marka, 29-10-1980, «Barrantes planteó soluciones para el problema alimenticio».
[88] *El Diario* de Marka, 22-11-1983, «Ambulantes expresan confianza en solución de Barrantes».
[89] *El Diario* de Marka, 16-11-1983, «Es posible una ciudad para todos».
[90] *El Diario* de Marka, 16-11-1983, «Es posible una ciudad para todos».

emplazamientos de los ambulantes de Lima cuadrada en zonas céntricas cercanas, la expropiación de terrenos para la construcción de mercados y ferias para reubicar a los ambulantes y reglamentar el uso de la vía pública con la participación de los comerciantes en la comisión respectiva, pero, como se vería en los meses posteriores, la tarea no era nada sencilla.

Capítulo 5
Del caos al desastre: los fracasos en la gestión de la ciudad (1984-1995)

Montaña rusa

Intentar una síntesis de lo acontecido en esos once años es una tarea imposible de realizar en pocas páginas, sin mencionar la urgencia de encontrarle sentido y posibilidad de explicación. A diferencia de las páginas anteriores, el tiempo de análisis es más extenso debido a que existe el consenso de que las políticas relacionadas al comercio informal no ofrecen mayores avances, luego de la alcaldía de Alfonso Barrantes (1984-1986), con Jorge del Castillo (1987-1989) y Ricardo Belmont (1990-1995), solo cambiarían con la elección de Alberto Andrade (1996-2002)[1]. Las razones de esta inacción, como veremos, son varias. La agudización al máximo de la crisis económica (1987, en adelante), el aumento de las acciones terroristas en la ciudad y los enfrentamientos entre el alcalde y el presidente Alberto Fujimori (1990, en adelante), quien nunca logró que el candidato de su preferencia fuera elegido para el cargo.

En primer lugar, la intensificación de la crisis económica tiene varios pequeños ciclos. Una primera etapa (1985-1986), marcada por una efímera recuperación generada por la política económica expansiva del presidente Alan García (1985-1990), y luego una fuerte caída de los indicadores económicos, incluida una histórica cifra de inflación (1987-1990). Posteriormente, el retorno a la ortodoxia bajo la presidencia de Alberto Fujimori (1990-2000) por medio de una «política de ajuste» que comprimió duramente la demanda con el objeto de controlar la economía entre 1990-1993; seguida de estabilidad y crecimiento por medio

[1] Un buen recuento de las políticas de los mencionados alcaldes en Wendy Morán (2013).

del gasto público (1994-1995), y finalmente, una larga etapa de estancamiento económico (1995-2000).

La elección de Alan García en 1985 fue especialmente significativa por el tiempo de espera para que el histórico APRA finalmente llegase al poder. La situación económica heredada del gobierno de Fernando Belaunde era crítica, aunque entre 1984 y 1985 se había controlado en algo la caída de la economía, era necesaria una reactivación económica. El nuevo gobierno consideró que la inflación y la recesión estaban vinculadas por los altos costos de producción y la reducción de la economía de escala, que empujaban hacia arriba los costos unitarios de los productos. Por esta razón el ministro de Economía, Luis Alva Castro, aplicó una serie de medidas consistentes en un ajuste inicial de precios, elevándolos y asegurando su congelación; el incremento de sueldos y salarios por encima de la tendencia inflacionaria con el objeto de recuperar la demanda; beneficios de diversos tipos para la inversión de capital nacional, que incluía crédito barato para el agro e industria y barreras arancelarias; y una restricción en el pago de la deuda externa a un monto no mayor del 10% de las exportaciones. Estas medidas provocaron una rápida recuperación económica que se tradujo en el aumento del PBI de 10% en 1986 y de 8,4% en 1987, con una inflación que disminuyó de 159% en 1985 a 63% en 1986. Esta situación inédita generó un gran entusiasmo en la población y en los miembros del gobierno, quienes llegaron a pensar que habían resuelto el problema de la crisis. Sin embargo, la demanda empujó fuertemente las importaciones, 'quemando' cada vez más dólares mientras disminuían las exportaciones y se desplomaban las reservas. El déficit fiscal pasó de -6,4% en 1986 a -8,1% en 1987, -9,7% en 1988 y -8,4% en 1989, evidencia de una política económica insostenible (Parodi, 2004, p. 206). Finalmente, el desabastecimiento, la inflación y la caída del PBI causaron una grave crisis, sin precedentes por lo menos durante el siglo XX. En 1988 el PBI se desplomó a -8,8% y en 1989 a -11,7%; la inflación se elevó a 114,5% en 1987, 1722,3% en 1988 y, record histórico, 2775,3% en 1989; además, la proporción de pobres aumentó de 40% en 1985 a 54% en 1990 (Parodi, 2004, p. 206). El desempleo en Lima bajó inicialmente de 10% en 1985, a 5,4% en 1986 y 4,8% en 1987, y aumentó rápidamente en la fase crítica de la debacle a 6,4% en 1988 y 7,9% en 1989; esta última cifra representaba aproximadamente más de 170 mil personas desempleadas en la ciudad (Garavito, 2000, p. 10), mientras que el salario real cayó 72% entre 1987 y 1990 (Jiménez, 2009).

Esta volatilidad del PBI posiblemente influyó en el aumento del sector informal y el empleo por cuenta propia. Schuldt señala que el crecimiento económico, aún a tasas modestas pero continuas, genera una sensación de seguridad que favorece la inversión y el empleo, «la gente percibe optimistamente el futuro, aumenta su gasto, se endeuda y considera seguro su puesto de trabajo» (2005, pp. 40-41);

mientras que la volatilidad produce un pesimismo que se refleja, por ejemplo, en la falta de seguridad de mantener un empleo. De esta manera es posible que las personas prefieran mantener un negocio propio, aunque sea precario, antes que exponerse a un despido intempestivo; incluso, como señala Schuldt (2005), es en Lima donde se sintieron con más fuerza estas oscilaciones del crecimiento económico, lo que quizá explica el aumento del empleo por cuenta propia en la capital en la década de 1980.

La sorpresiva elección de Alberto Fujimori en 1990 no significó una rápida recuperación; por el contrario, en agosto el conocido paquete de medidas económicas, popularmente conocido como «el *shock*», provocó una «inflación correctiva» de 397%. Los combustibles se elevaron en 3000%, la electricidad en 5270%, el agua potable en 1318% y el servicio de teléfono en 1295%. Los salarios públicos se elevaron en 100% y el salario mínimo en 400%, muy por debajo del aumento de las tarifas y precios (Parodi, 2004, p. 265). El impacto recesivo de esta política fue devastador, especialmente entre los sectores populares, los cuales quedaron más empobrecidos, situación agravada por el recorte del gasto público. Además, las reformas económicas continuaron con una ofensiva en contra de los sindicatos y gremios[2], con el objeto de flexibilizar el campo laboral y atraer la inversión privada en diversas áreas, e incluyeron la privatización de las empresas públicas. Las medidas lograron controlar la inflación, apoyadas en una reducción de las barreras arancelarias y la reinserción en la economía mundial. Por otro lado, luego del denominado «autogolpe» del 5 de abril de 1992, el presidente tomó el control de todos los poderes del Estado. En ese momento la recesión continuaba, el PBI seguía cayendo, recuperándose solo a partir de 1993 y 1995 debido al incremento del gasto del gobierno con el objeto de aprobar en referéndum la nueva constitución (Parodi, 2004, p. 291). Lo que más nos interesa es que después de 1990 los salarios se recuperaron hasta 58,6% de su valor en 1987, manteniéndose alrededor de esa cifra hasta el 2008 (Jiménez, 2009). El desempleo en Lima se mantuvo en 8% de promedio durante toda la década de 1990-2000 y el año 1993 marcó el registro histórico de casi 274 mil desempleados en la ciudad, la cifra más alta del siglo (Garavito, 2000, p. 10).

El segundo aspecto relevante es el incremento de la violencia en la ciudad de Lima. El PCP-SL y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) realizaron una serie de actos violentos —entre ellos asesinatos, atentados terroristas, paros armados, etcétera— y difundieron pánico entre la población. Hasta fines de la década de 1980 la ciudad fue escenario de atentados con dinamita, voladuras de torres de alta tensión y ataques a miembros de las Fuerzas Armadas y policiales.

2 *La República*, 8-7-1992, «Vamos a limpiar sindicatos de la infiltración senderista».

En 1984 se incorporó el MRTA a la espiral de violencia, aunque rápidamente decretó el cese a sus acciones una vez que el APRA tomó el poder en 1985, lo que se mantuvo hasta 1987 (Rénique, 2105, p. 142). Uno de los hechos más dramáticos del inicio del gobierno aprista fueron los polémicos sucesos producto del amotinamiento de los presos por terrorismo en los penales de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara (1986), acción que terminó con centenas de reclusos muertos. Luego de estos acontecimientos los movimientos subversivos incrementaron sus actos de violencia en el espacio urbano. Por ejemplo, una cevichería del distrito del Rímac fue atacada por senderistas, quienes asesinaron a dos oficiales del Ejército y ocasionaron la muerte de cinco civiles (CVR, 2003, p. 414). Los apagones se incrementaron, lo que causó zozobra en la ciudad, algunas zonas se quedaban sin fluido eléctrico por varios días.

Los operativos policiales en las calles aumentaban la inseguridad ciudadana, en muchos casos por la poca discriminación en las detenciones, la arbitrariedad y los abusos. Como sabemos hoy las desapariciones y las torturas fueron parte de los procedimientos con los cuales se pretendía acabar con la violencia. Por ejemplo, el 3 de junio de 1989, luego del ataque a miembros del Ejército parte del regimiento Húsares de Junín el cual causó la muerte de tres personas, las Fuerzas Armadas y la policía efectuaron alrededor de 15 mil detenciones (CVR, 2003, p. 414). En 1989 las acciones y marchas por parte de los grupos subversivos comenzaron a aumentar en el centro de la ciudad; por ejemplo, el primero de noviembre el PCP-SL marchó por la avenida Manco Cápac, en el céntrico distrito de La Victoria, acción en la que se detonaron explosivos y se detuvieron a cerca de 150 personas (CVR, 2003, p. 414). El periodista César Hildebrant consideraba que en ese año vivir en Lima condenaba a los habitantes a una constante paranoia, esa sensación era como «una lenta fiebre del trópico, es desconfiar masivamente y soñar con un país donde la muerte sea una excepción»[3].

Entre 1990 y 1991 continuaron los asesinatos a políticos y atentados con dinamita[4], aunque las Fuerzas Armadas también contribuyeron con la zozobra por medio de los asesinatos selectivos, como fue el lamentable caso de la matanza de Barrios Altos, realizada por un comando militar denominado «Grupo Colina» el 3 de noviembre de 1991. Al año siguiente se produjeron varios atentados importantes: la explosión, el 5 de junio, de un camión que afectó al canal de televisión Frecuencia Latina, con un saldo de varias casas destruidas y tres trabajadores del canal

[3] *La República*, 8-10-1989, «Vivir en Lima, hoy».

[4] De acuerdo con José Luis Rénique, en 1991 Lima parecía una ciudad sitiada: «47% de los ataques y atentados senderistas realizados entre abril de 1989 y diciembre de 1992 se habían producido en la capital: 907 acciones» (2015, p. 154).

fallecidos; y uno de los atentados más recordados por los medios de comunicación y la población, la explosión de un coche bomba en la calle Tarata en el distrito de Miraflores el 16 de julio, que dejó al menos quince personas muertas, acto que motivó la represalia de las Fuerzas Armadas con la captura y desaparición de nueve alumnos y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como la «Universidad de La Cantuta». Cuando parecía que las cosas estaban empeorando, el 12 de setiembre de 1992 un grupo de inteligencia de la policía logró la captura del líder del PCP-SL, Abimael Guzmán, iniciándose un lento camino de descenso en la violencia de este grupo terrorista[5]. El MRTA continuó sus acciones urbanas, una de ellas fue el sonado caso de la toma de rehenes en la Embajada de Japón, el 17 de diciembre de 1997.

Ni para atrás ni para adelante

Finalmente, como corolario de todo lo anterior, el centro sufrió un sistemático abandono por parte de las autoridades; además, dejó de ser lugar de residencia de las elites —el proceso ya había comenzado antes— y también dejó de ser la sede de los principales bancos, oficinas y negocios de Lima. De acuerdo con la Municipalidad de Lima en 1985, 36% de los viajes desde el cono norte y 20% de los del cono sur tenían como destino final el centro de la ciudad, evidencia de una disminución del tránsito en la zona central (Boletín Municipal, 1985, p. 4). Solo por citar algunos ejemplos, la sede principal del Banco de Crédito del Perú se trasladó a La Molina en 1988, el diario *El Comercio* mudó su rotativa al distrito de Pueblo Libre en 1984, la casa central del entonces Banco Continental comenzó a construirse en San Isidro en 1979, el diario *La Prensa*, ubicado en el Jirón de la Unión, cerró en 1984; mientras que a principios de la década de 1980 el edificio del Ministerio de Pesquería se convirtió en sede del Banco de la Nación. Por otro lado, la construcción de grandes centros comerciales se realizaba fuera de los límites del centro de Lima. La plaza San Miguel e Higuereta a fines de la década de 1970, Camino Real, plaza Camacho, Arenales y Molicentro entre 1980 y 1982.

Más allá de la ausencia de uno u otro dato, queda claro que el centro dejó de ser simbólicamente eje económico y de poder. De acuerdo con Ludeña y Chion, entre 1980 y 1997 no se realizó ningún tipo de esfuerzo para la recuperación del centro, justamente el vacío en la gestión municipal hace constar que ese espacio

[5] La violencia no desapareció inmediatamente. El 27 de octubre de ese año se registró un grave atentado en contra de una empresa de transporte interprovincial (*La República*, 27-10-1992, «Infierno en terminal terrestre»).

> ya no era más el único espacio que podía representar de mejor manera las necesidades de centralización y simbolización de un poder emergente. Precisamente el vacío de poder y gestión que dejan estas dos dinámicas recusatorias de la vigencia del centro histórico sería ocupado por un nuevo y más activo sujeto social: la informalidad y el comercio ambulatorio sin más orden que la apropiación mercantil del espacio público (2009, p. 335).

La falta de gobierno en la ciudad fue un factor importante en la expansión del comercio informal, tanto como la crisis, el abandono del centro y la decadencia del espacio público que se expresó agresivamente en el enrejado de los parques. Como hacen notar los autores mencionados, los intentos de erradicación de los ambulantes se efectuaron de manera paralela con el cercamiento de los espacios públicos (Chion & Ludeña, 2009, p. 334).

A fines del año 1983 el diario *La República* publicó una encuesta acerca de cuáles eran los principales problemas de la ciudad de acuerdo con la opinión de los vecinos, con los siguientes de los resultados: la limpieza pública, 24,9%; hambre, 20,7%; terrorismo, 13,9%; corrupción, 7,15%; asaltos, 7%; transporte, 6,7% y vivienda, 6,2%[6]. A diferencia de la encuesta publicada por *Caretas* en 1980, mencionada anteriormente, en 1983 la limpieza se había convertido en la primera preocupación de los vecinos; había desplazado a todas las otras inquietudes, seguida por el hambre, reflejo de la mala situación económica del momento, y el terrorismo, que comenzaba su repunte en la ciudad. Esta encuesta refleja la honda preocupación que causaban los problemas de limpieza pública, al punto de desplazar todas las demás preocupaciones. En este contexto se inscriben las alcaldías limeñas de 1984 a 2003, falta de limpieza pública, crisis, violencia, decadencia del centro y expansión del comercio informal.

Luego de la elección de Barrantes como alcalde de la capital, a los pocos meses comenzó la campaña presidencial para las elecciones del 14 de abril de 1985. Barrantes, la principal opción de la izquierda, consolidó su posición de liderazgo al ser consagrado el candidato de la Izquierda Unida a las elecciones presidenciales. La campaña distrajo su atención de los problemas urbanos por varios meses, mientras el municipio continuó administrado por el teniente alcalde, Henry Pease. Además, el nuevo gobierno municipal decidió no continuar con la política represiva que había caracterizado a las gestiones anteriores.

Los esfuerzos de la comuna se concentraron en desarrollar el programa del «Vaso de Leche», destinado a distribuir ese alimento entre los niños más pobres

[6] *La República*, 4-11-1983, «Los males de Lima».

de la ciudad[7], ordenar el transporte urbano y mejorar la limpieza de la ciudad. En 1985 el municipio informó que solo contaba con doce camiones recolectores operativos, de los setenta que se suponía eran necesarios y, para colmo de males, estaban obsoletos[8]. La nueva administración trató de enfrentar este grave problema por medio de operativos de limpieza con la colaboración de ambulantes y vecinos, mientras que se concretaban las gestiones iniciadas durante el mandato de Orrego para obtener una donación del gobierno del Japón para mejorar la infraestructura de limpieza pública y se emitía la ordenanza 001 que la regulaba[9]. Respecto al transporte público se estableció una nueva estructura de líneas y paraderos, con un boletaje regulado por el municipio[10].

El 17 de abril se publicó la ordenanza 002 que reguló y reorganizó el comercio ambulatorio en Lima. Para tal efecto, las autoridades incorporaron las anteriores propuestas de los comerciantes[11], las sometieron al debate en diversos foros, las discutieron con otras fuerzas políticas y, finalmente, el Concejo la aprobó el 2 de abril de 1985. Esta disposición recogía muchas de las propuestas de gremios como la Fedeval, quienes trataban de evitar la presencia de los vendedores ambulantes llamados 'coyotes' o de quienes eran intermediarios contratados de los grandes importadores. La ordenanza reconoció a las organizaciones de ambulantes, incorporándolas en las comisiones de trabajo del municipio; aceptaba el derecho al trabajo y a la salud del vendedor; establecía la necesidad de regulación del comercio y de desconcentración del área central; promovía micro mercados en otros espacios[12] y creaba el Fondo Municipal de Asistencia al Ambulante (FOMA), financiado con las licencias municipales y la sisa —la cual posteriormente los ambulantes se negaron a pagar—, con el objeto de brindar capacitación, atención médica y asistencia técnica a los comerciantes, acción complementada por el apoyo financiero de la Caja Municipal (Chávez & De la Flor, 1998, pp. 144-145 y 161). El municipio consideraba que esta ordenanza era el reflejo de una postura más humana ante el problema, «comprendiendo que existe un amplio sector que

[7] En 1986 el municipio declaró que eran más de un millón los niños beneficiados por el plan. Boletín Municipal, junio, 1986, «300 millones de vasos de leche».

[8] Boletín Municipal, mayo, 1985 y junio 1986, «Limpiando Lima».

[9] Boletín Municipal, mayo, 1985, «Japón donó 26 mil millones». El Banco Mundial prestó 60 mil millones para el mismo objeto. La donación era equivalente a 3,5 millones de dólares de la época, y el préstamo a 7,3 millones.

[10] Boletín Municipal, junio, 1986, «Venciendo el caos».

[11] Guillermo Nolasco, entrevista personal, 2-2-2016, campus PUCP, San Miguel.

[12] Para implementar esta propuesta se publicó la ordenanza 010 el 5 de junio de 1986, la cual tenía por objeto normar y facilitar la gestión de micro-mercados. Boletín Municipal, junio, 1986, «Micro-mercados».

como producto de la crisis económica que vive el país y la falta de trabajo ejercen el comercio ambulatorio»[13].

La ordenanza reconocía diversos derechos a los ambulantes y establecía requisitos para ser considerado parte de la actividad. Quizá lo más resaltante, y que el ILD criticó duramente, era la limitación del capital para ser considerado ambulante (Ghersi, 1989, pp. 193-233). De acuerdo con la norma, el vendedor no debía sobrepasar como capital las dos unidades impositivas tributarias (UIT) anuales, no debía tener vínculo laboral con sus proveedores y su labor tendría que ser ejercida «individualmente [...] en forma directa y en pequeña escala» (Ghersi, 1989, p. 220). Hay que recordar que desde 1959 la municipalidad intentó delimitar el comercio ambulatorio en función del volumen de capital, preocupación que fue recogida en varios documentos antes de 1985[14]. Además, se exigía el cumplimiento de normas que regulaban la infraestructura, la higiene y la limpieza; por ejemplo, se requería una escoba y un tacho de basura para cada puesto, la limpieza en un radio de cinco metros de su lugar de venta, el uso de mandiles y guantes, etcétera (Ghersi, 1989, pp. 225-230). La crítica del ILD consideraba que esta reglamentación, como muchas del Estado, era absolutamente imposible de cumplir por lo engorroso, costoso y su sentido poco práctico. Sin embargo, como hemos visto anteriormente, varias de estas disposiciones eran practicadas por los ambulantes antes de ser establecidas por el municipio y estaban incluidas en los reglamentos que propusieron a las autoridades antes de 1985[15]. Por otro lado, la limitación al capital, que evidentemente suponía que la venta en la calle era una estrategia de supervivencia antes que acumulación capitalista, era parte de una política que pretendía defender al vendedor popular de aquellos que se aprovechaban de las condiciones y que indebidamente podrían ser beneficiados de los programas municipales —como los supuestos ambulantes de clase media de Miraflores—. Es verdad que la limitación tiene como consecuencia que el ambulante sea condenado a no progresar, pues si lo hacía ya no era considerado para programas como el FOMA, pero hay que tener en cuenta que muchos de los ambulantes no pensaban que su destino sea trabajar en la calle, así que ese espíritu parecía coincidir con el principio de mantener la actividad callejera para los menos favorecidos.

Esta ordenanza fue complementada por un plan de reubicación de comerciantes y promovía la compra de terrenos por parte de los vendedores con la gestión financiera de la Municipalidad, propuesta que no pudo desarrollarse por la ausencia de fondos y las dificultades organizativas de los ambulantes

[13] Boletín Municipal, junio, 1986, «Dos años de realizaciones».

[14] Véase Enrique Romero Flores, «Lima convertida en gigantesca parada» en *Correo*, 10-11-1980.

[15] Guillermo Nolasco, entrevista personal, 2-2-2016, campus PUCP, San Miguel.

(Chávez & De la Flor, 1998, p. 159). Tampoco funcionó la propuesta, de larga data, de gestionar la entrega de terrenos de la Beneficencia, considerándose como la opción más viable la creación de un nuevo campo ferial Las Malvinas (1985), ubicado en las primeras cuadras de la avenida Argentina. Este proyecto estaba destinado a albergar a cerca de 2500 vendedores provenientes de la plaza Unión, avenida Emancipación y alrededores. El traslado no fue fácil, los ambulantes consideraban poco apropiada la zona y temían que se repita el fracaso de Amazonas. Además, varias organizaciones interpusieron demandas en el Poder Judicial en contra de la Municipalidad, logrando suspender el traslado. La plaza Unión continuó ocupada por vendedores, menguando la asistencia del público comprador al campo ferial y amenazando su existencia (Chávez & De la Flor, 1998, p. 160)[16]. A pesar de esta realidad, el municipio consideraba en 1986 que el campo ferial Las Malvinas era un buen ejemplo del éxito de su gestión[17].

Las gestiones posteriores de Jorge del Castillo y Ricardo Belmont añadieron poco a estas disposiciones. Durante la gestión de Del Castillo (1987-1989), la crisis económica y política contribuyó para que el municipio tome la decisión de no enfrentarse con los ambulantes, aunque no se propuso nada nuevo al respecto, retomándose la prohibición de no ocupar las inmediaciones de las instituciones públicas y privadas, aumentando los decomisos y multas. Además, la intimidación que ejercían los grupos sediciosos contribuyó con esta inacción; poco después de instalado el nuevo Concejo y de un amago de reubicación de ambulantes, los subversivos atacaron e hirieron a un grupo de funcionarios municipales (Chávez & De la Flor, 1998, p. 162). En la gestión de Belmont (1990-1995) se reubicaron a otros ambulantes que se encontraban a espaldas del Ministerio de Economía (plaza Gastañeta), quienes fueron trasladados al campo ferial Las Malvinas, y a los vendedores de flores de las inmediaciones del Estadio Nacional, quienes fueron trasladados al Rímac y Barranco (Chávez & De la Flor, 1998, p. 163). En ambos casos las acciones no tuvieron mayor trascendencia y no aportaron ninguna solución al problema del comercio ambulatorio en el centro de Lima.

La importancia de los vendedores en la calle era bastante más grande de lo que se suponía, las medidas de reubicación y reglamentación se mostraron insuficientes por la incapacidad de hacerlas cumplir y por la enorme complejidad de las ventas callejeras, su extensión y su estrecho vínculo con el abastecimiento cotidiano[18].

[16] También se intentó reubicar en mercados especiales a los vendedores de comida del Parque Universitario y La Colmena.

[17] Boletín Municipal, junio 1986, «Dos años de realizaciones».

[18] Las dificultades nunca terminaron, por ejemplo, en fecha tan tardía como 1999 se insistía en asignar un lugar específico cada día para las vendedoras de artículos religiosos en el jirón Camaná, medida que era consistentemente resistida por ellas (Golda-Pongratz, 2013, pp. 106-107).

Por ejemplo, a principios del año 1986 los problemas de abastecimiento de víveres se agudizaron al punto que se solicitó al Ejército el transporte de papas desde Huánuco, compradas por el gobierno por medio de la Empresa Nacional de Comercialización de Insumos (ENCI)[19]. La importación de alimentos no satisfacía el aumento de la demanda provocado por la expansión de la economía y los vendedores al por menor tenían que hacer grandes colas para comprar los productos en el mercado mayorista. Como su negocio dependía de las ventas diarias, de alguna manera u otra se agenciaban los productos, conseguían los alimentos aunque sea por encima del precio oficial y los ofrecían en los mercados y «paraditas» de la ciudad, de otro modo los consumidores hubieran quedado totalmente desabastecidos[20]. Los problemas de abastecimiento también fueron explicados por las autoridades y comerciantes debido a la presencia de mafias que impedían la llegada de los productos al Mercado Mayorista y distribuían los alimentos entre grupos de ambulantes que especulaban con los productos[21].

La presencia de los vendedores ambulantes no se redujo, por el contrario, debido a los problemas de abastecimiento su importancia aumentó y su presencia se expandió por varios distritos en los que infringían las diversas ordenanzas municipales[22]. En el campo ferial Polvos Azules los comerciantes se quejaban de la proliferación de ambulantes en las calles adyacentes, incluso más de cien ambulantes habían tomado posesión ilegalmente de la zona destinada a ampliar el campo, razón por la cual, de acuerdo con el diario, los dirigentes advirtieron que si las autoridades no los desalojaban ellos mismos se encargarían de hacerlo o invadirían la ciudad nuevamente[23]. En todo caso las publicaciones del diario *Extra* enfatizaron el temor de que los ambulantes invadan los diversos distritos de la ciudad, sugerían la idea de que eran un elemento negativo en su desarrollo. Así, se publicó una nota que informaba que los comerciantes de Carmen de la Legua, agobiados por los altos costos de los tributos y licencias, la burocracia y la negativa a escuchar sus pedidos, amenazaban en convertirse en ambulantes. De acuerdo con Pedro Tineo, secretario general del Sindicato de Pequeños Comerciantes de

---

[19] *La República*, 10-1-1986, «Convoy del ejército traerá papa».

[20] *La República*, 10-1-1986, «Ofensiva policial pone en jaque a los especuladores».

[21] *Extra*, 25-1-1986, «Ambulantes apristas acaparan la papa». En el año 1983 se calculaba que alrededor de cuatro mil ambulantes vendían productos en las inmediaciones del Mercado Mayorista, especialmente 'limoneros' y 'paperos'. *Correo*, 13-11-1983, «Cuatro mil ambulantes invaden el Mayorista».

[22] Por ejemplo, las inmediaciones de la iglesia La Inmaculada, ubicada en la primera cuadra de la avenida Brasil, estaba inundada de «comerciantes ambulantes de comida que hasta han colocado mesas y sillas en plena vía pública» (*Correo*, 5-6-1983, «Ambiente limpio para el 7 de junio»).

[23] *Extra*, 20-1-1986, «Dos mil ambulantes amenazan con invadir 'Lima cuadrada'».

Carmen de la Legua, los comerciantes «mejor nos pondremos a vender en las calles, como ambulantes, pagando la sisa de 0.50 céntimos de Inti y asunto arreglado»[24].

La política municipal dirigida por la izquierda no estuvo al margen de los conflictos con los ambulantes, a pesar de la presencia de sus dirigentes en las comisiones municipales y del concejal Guillermo Nolasco. Trasladar a los comerciantes implicaba una labor de empadronamiento y selección acorde con la ordenanza; por otro lado, suponía aceptar que algunas calles de Lima cuadrada serían desocupadas de vendedores, desalojados de espacios codiciados por su cercanía con el flujo vehicular y de peatones. Así, la primera semana de febrero de 1986 estallaron diversos enfrentamientos, a pesar de la mediación de dirigentes y autoridades edilicias. Los comerciantes desalojados de la avenida Emancipación y alrededores del mercado La Aurora, se negaron a abandonar sus lugares, iniciando una marcha en protesta hacia el centro de Lima y se enfrentaron lanzando piedras a la policía y al regidor Nolasco, por lo que fueron duramente reprimidos[25]. Esta vez el concejal anunció que el municipio no retrocedería en la medida de traslado a Las Malvinas, acusando a estos vendedores de estar engañados por «elementos interesados en perturbar el programa de reubicación»[26].

El fracaso de las reubicaciones y la debilidad del municipio para hacer cumplir sus disposiciones contribuyeron con la expansión del comercio informal. A pesar de que se prohibía expresamente la presencia de ambulantes en las puertas de edificios públicos, existía un gran número de puestos de venta que aprovechaban el flujo de visitantes a esos lugares. Por ejemplo, en la puerta de los hospitales se podía encontrar gran cantidad de vendedores de todo tipo de productos: artículos de higiene personal, alimentos preparados, regalos, etcétera. Las autoridades intentaron negociar con los comerciantes, pero no llegaron a ninguna solución. El campo ferial de la primera cuadra de Cotabambas, en las inmediaciones del Parque Universitario, fue acondicionado para recibir a los vendedores de comida en un ambiente con servicios y condiciones de higiene adecuadas, pero los comerciantes regresaban constantemente a sus puestos originales, lugares en los que obtenían mejores ingresos por su estratégica ubicación.

A otros vendedores de las inmediaciones de las plazas Dos de Mayo, Castilla y avenida Emancipación también trataron de convencerlos de ir a Las Malvinas, bajo la amenaza de desalojo, pero tampoco se avanzó mucho[27]. A mediados del año 1986

[24] *Extra*, 25-3-1986, «Comerciantes de PP.JJ. amenazan en convertirse en ambulantes».

[25] Estos enfrentamientos fueron por la percepción de los ambulantes del centro de que la Fedeval se olvidó de su compromiso con las bases (Granados, 1997, p. 80).

[26] *La República*, 27-1-1986, «No más ambulantes en Lima cuadrada»; 7-2-1986, «Violento enfrentamiento de policías y ambulantes»; y *Expreso*, 12-6-1986, «Plaza Unión sin ambulantes».

[27] *Extra*, 23-7-1986, «Ambulantes serán retirados de puertas de hospitales».

el campo ferial Las Malvinas había sido remozado para recibir más ambulantes y se calculaba que a fines de año estaría en condiciones de albergar cerca de 3500 vendedores[28]. El proyecto, al contrario que Polvos Azules, fue meticulosamente preparado, incluía todos los servicios, auditorio, alumbrado, puesto policial, líneas de transporte, áreas verdes, juegos infantiles, etcétera. La planificación establecía que las primeras cuadras estarían ocupadas por los vendedores de jugos, verduras y frutas, continuaban los abarrotes, las artesanías, venta de alimentos preparados y, finalmente, los comerciantes de otro tipo de mercaderías. Sin embargo, a pesar del entusiasmo inicial, los vendedores paulatinamente fueron abandonando el lugar[29].

En diversos distritos de Lima los ambulantes y diversos trabajadores tomaban el control de las calles con el objeto de convertirlas en sus lugares de venta, aumentando los conflictos en toda la ciudad. En San Juan de Lurigancho los comerciantes invadieron el terreno para un parque público y lo convirtieron en mercadillo, provocando un enfrentamiento con los vecinos[30]; en San Luis no existía un mercado oficial, eran los ambulantes quienes abastecían a la población y vendían sus productos en lamentables condiciones de higiene; finalmente, en Chorrillos, los ambulantes y los comerciantes con puestos se enfrentaban cotidianamente por las ventas[31].

Las condiciones de limpieza de los mercadillos tampoco eran tan diferentes de la situación que se observaba en los mercados oficiales. Una buena parte de estas paraditas estaban inundadas de basura, insectos y roedores, por efecto del casi inexistente recojo de desperdicios. Las inmediaciones del Mercado Central, especialmente las calles Guillermo Billinghurst, Miró Quesada y Junín, se encontraban infectadas de roedores que aterraban a los vecinos, incluso en el sótano de este mercado se acumulaban cerca de 20 toneladas diarias de basura[32]; la misma situación se detectó en el mercado La Aurora en la avenida Emancipación[33]. Esta situación ambiental era de extrema gravedad en el Mercado Central, además, la gran mayoría de restaurantes y puestos de comida que operaban sin medidas de seguridad fácilmente podían causar un gran incendio, emergencia que no podría ser atendida por los bomberos por la imposibilidad de atravesar las calles abarrotadas

[28] Boletín Municipal, junio 1986, «Alameda comercial».

[29] *La República*, 7-6-1986, «Alameda ferial 'Las Malvinas' acogerá más de 3500 ambulantes».

[30] *Extra*, 5-1-986, «Vecinos derribaron pared de mercadillo». En otro lugar del mismo distrito los comerciantes se apropiaron del terreno para una biblioteca (*Extra,* 30-10-1986, «Ambulantes se instalan en terreno de biblioteca»).

[31] *Extra*, 14-10-1986, «Se adueñan de calles de San Luis» y 20-3-1986, «En mercado chorrillano guerra sin cuartel a los ambulantes».

[32] *Extra*, 9-7-1986, «Bomba de tiempo bajo mercado central».

[33] *Extra*, 6-1-1986, «Muladares y roedores alrededor de mercados».

con más de tres mil ambulantes[34]. Pocas semanas después de esta nota, un depósito de ambulantes ubicado en el jirón Miró Quesada se incendió causando graves pérdidas a muchos ambulantes, aunque felizmente sin fallecidos que lamentar[35].

Hermano ambulante

En noviembre de 1986 se convocó a una nueva elección municipal. El alcalde Barrantes se presentaba a la reelección, esta vez competía contra el candidato del APRA, en ese momento alcalde de Barranco, Jorge del Castillo y el exalcalde de Lima, Luis Bedoya Reyes por el Partido Popular Cristiano (PPC), entre otros. Este contexto político contribuyó a que la tensión entre el municipio y los ambulantes disminuya, incluso varios gremios de ambulantes reiteraron su apoyo al alcalde Barrantes; sin embargo, su administración proponía concretamente la conservación de Lima cuadrada y restringía las actividades económicas[36]. El 10 de noviembre se publicó un aviso en el diario *La República* firmado por decenas de organizaciones de ambulantes de Lima, quienes apoyaban la gestión del alcalde y solicitaban el perfeccionamiento de los planes municipales que los beneficiaban: FOMA, micro mercados, apoyo crediticio, guarderías, etcétera[37].

Desde principios del año 1986 se desató una competencia política entre los partidos para atraer el voto de los ambulantes, razón por la cual los diarios le dieron cobertura a sus problemas, y se buscaba solucionar sus dificultades. Por ejemplo, no solo la Municipalidad ofrecía crédito a los ambulantes, el gobierno aprista promovió la creación del Instituto de Desarrollo del Sector Informal, que desarrolló un programa de crédito solidario que incluía a los pequeños comerciantes[38]; el Banco Industrial también anunció un programa similar de apoyo al sector informal[39]; el Ministerio de Trabajo asimismo ofreció ayuda crediticia a los vendedores y la OEA contribuyó con fondos para la misma función[40]. La proliferación de apoyo para los ambulantes fue cuestionada por la Fedeval, en parte por la pérdida de iniciativa de la Municipalidad a quien apoyaban, la cual con menos recursos no podía competir

[34] *Extra*, 9-7-1986, «Bomba de tiempo bajo mercado central».

[35] *Extra*, 27-10-1986, «Se incendia depósito de ambulantes» y 28-10-1986, «Ambulantes quedaron arruinados».

[36] *La República*, 30-11-1986, «Las puertas del futuro».

[37] *La República*, 10-11-1986, «Hoy más que antes: los ambulantes con Barrantes».

[38] *Extra*, 24-2-1986, «Ambulantes y artistas, crédito sin intereses».

[39] *Expreso*, 14-6-1986, «Ambulantes reciben 6 primeros préstamos».

[40] *La República*, 10-7-1986, «Otorgan crédito a ambulantes» y 21-3-1986, «Otorgan 75 nuevos préstamos a los vendedores ambulantes».

con el gobierno central, y, también, por el inminente peligro de que muchas personas se hicieran pasar por ambulantes para obtener los beneficios[41].

El presidente Alan García recibió a los dirigentes de los ambulantes en Palacio de Gobierno, ellos les expusieron su rechazo a los desalojos y él les señaló que «el problema del comercio ambulatorio corresponde prioritariamente a la alcaldía metropolitana. Empero puedo interponer mi voluntad de ciudadano para dar solución a este caso»[42]. Cuando la campaña comenzó su recta final, el presidente García, con el objeto de apoyar al candidato aprista Jorge del Castillo y lograr el voto de los ambulantes, declaró, en la inauguración de un seminario internacional sobre el sector informal en América Latina, que alguna vez había trabajado como ambulante. De acuerdo con su relato, a los quince años de edad se dedicó a la venta de fotografías instantáneas para conseguir el dinero suficiente para pagar su entrada a la corrida de toros en la Plaza de Acho, debido a la negativa de su padre para sufragar el gusto[43]. Luego ensalzó la creatividad de los vendedores de la calle, afirmó que el informal «es uno de los instrumentos más importantes del gobierno para romper el círculo vicioso de una economía centralista y consumidora de dólares», e insistió en su papel dinamizador, creador y distribuidor de riqueza, equivalente al de un nuevo burgués[44]. El presidente consideraba que el sector informal era «el mejor aliado de un Estado democrático, popular y antiimperialista, que quiere nacionalizar en profundidad su economía»[45]. De acuerdo con su punto de vista, había que felicitar a quienes eran capaces de generarse su propio empleo, ellos representaban de forma más auténtica al país; señalaba que el ambulante era una muestra de ese esfuerzo cotidiano por sobrevivir día a día, tal como el caso del personaje que en pleno verano suele andar disfrazado de «ratón Mickey y que vive de dejarse tomar fotografías junto a los niños»[46].

Con esta declaración queda en evidencia que los ambulantes eran un capital político apreciable, eran un gran conjunto de votantes que había que convencer, con gran capacidad de arrastre por las condiciones familiares en las que se desarrolla el negocio. Además, desde la oficialidad se les dejó de percibir únicamente como un problema, realzando su papel positivo, como el que hoy conocemos bajo la idea de «emprendedores emergentes». Así, los contendientes por el sillón municipal intentaron atraer el interés de los ambulantes. Por ejemplo, Jorge del Castillo,

[41] *Extra*, 8-3-1986, «Falsos ambulantes tras crédito 'chicha'».

[42] *Expreso*, 2-3-1986, «Ambulantes dialogan con el presidente».

[43] *Expreso*, 28-10-1986, «Alan reveló que fue vendedor ambulante»

[44] *Expreso*, 28-10-1986, «Presidente destaca labor de informales».

[45] *La República*, 28-10-1986, «Trabajador ambulante es el gran aliado del Estado».

[46] *La República*, 28-10-1986, «Trabajador ambulante es el gran aliado del Estado».

cuya propuesta más importante era la construcción del tren eléctrico, visitó varios mercadillos de ambulantes, entre otros lugares el famoso y populoso «Tacora» (ubicado en las primeras cuadras de la avenida Aviación en La Victoria), conocido por la venta de productos robados[47]. Según Otta, los primeros comerciantes de baratijas aparecieron en la zona en la década de 1950, estimulados por el crecimiento del mercado mayorista de La Parada. Al principio la prensa lo llamaba «mercado de ingenio popular», brindando los servicios de «peluquería, soldadura, carpintería, mecánica, venta de autopartes, antigüedades, libros, muebles, etcétera» (2014, p. 93). A partir de esa década, fueron infructuosos los intentos de las autoridades para desalojarlos de la zona, en 1964 solo algunos comerciantes dedicados al rubro de autopartes se mudaron a la zona de San Jacinto. Para evitar futuros desalojos en 1970 se organizaron en una asociación[48], hasta su salida el año 2006[49]. Otro lugar que también contaba con la presencia de mecánicos fue la calle San José en Pueblo Libre, allí mecánicos y soldadores, entre otros, afectaban el tránsito apropiándose de pistas y veredas. Dado el tipo de materiales que usaban —oxiacetilénico, soldaduras eléctricas, entre otros—[50], fueron considerados altamente peligrosos en el vecindario[51].

En la década de 1970 este lugar en La Victoria sería rebautizado como «Tacora motors» por la constante presencia de autopartes robadas y comercializadas a la vista y paciencia de las autoridades[52]. El mercadillo era tan impresionante que, unos años después, la policía realizó un operativo para recuperar piezas hurtadas, encontrándose con la sorpresa de ubicar partes de una tanqueta del Ejército peruano en venta[53]. En ese lugar, el candidato Del Castillo ofreció que el tren contaría con un vagón especialmente acondicionado para los ambulantes, con el objeto

[47] El éxito del lugar promovió que otros espacios de la ciudad dedicados a la misma actividad, fueran bautizados como «tacoritas». *Extra*, 7-6-1986, «Peligrosos "tacoritas" aparecen en todo Lima» y 19-7-1989, «Tacora se muda al Jirón de la Unión». Es cierto que los medios de comunicación magnifican estos robos con el objeto de vender más ejemplares, de acuerdo con Eliana Otta (2014), la mayoría de los productos ofertados en Tacora no provenía de robos.

[48] En ese año en algunos distritos, como La Victoria, numerosos mecánicos utilizaban como taller la calle, incluso utilizando zanjas que construían ellos mismos (AHML, Actas del Concejo, 24-4-1970).

[49] En el año 2001 se podía encontrar gran cantidad de mecánicos informales en diversas calles de La Victoria (*Liberación*, 17-6-2001, «Mecánicos han convertido calles de La Victoria en talleres al paso»).

[50] *Extra*, 25-9-1986, «Soldadores ambulantes amenazan Pueblo Libre».

[51] *Extra*, 6-10-1986, «Talleres ocupan calle para trabajos».

[52] *Extra*, 7-2-1989, «Supermercado del robo en Tacora». No solo autopartes, se podía comprar casi todo género de electrodomésticos.

[53] *Expreso*, 25-3-1992, «Buscando autopartes en Tacora PNP encontró tanqueta EP».

de que puedan transportar sus mercaderías con una tarifa preferencial[54]. Por su parte, el candidato del PPC, Luis Bedoya Reyes, también trató de acercarse a los ambulantes, quienes no olvidaban sus enfrentamientos contra la comuna en el tiempo que fue alcalde de la ciudad. El candidato les ofreció apoyarlos en todo, en caso de ser electo construiría mercados comunales, declarando que «en lugar de perseguirlos [a los ambulantes] hay que apoyarlos»[55]. De acuerdo con la nota del diario *La República*, los ambulantes le guardaban rencor por su política represiva, recordando los enfrentamientos con las fuerzas municipales y policiales de la alcaldía del tiempo de Bedoya.

Diversas fuentes muestran el posicionamiento del ambulante como personaje de la ciudad, evolucionando del migrante que solo ensuciaba las calles y obstruía la vialidad urbana, hacia el esforzado trabajador que contribuía con la riqueza del país. Aunque no es el eje central de este trabajo, vale la pena citar el ejemplo del grupo musical Los Shapis, fundado en la ciudad de Huancayo en 1981 por Jaime Moreyra y Julio Simeón, conocido como 'Chapulín el dulce'[56]. El género musical que los hizo mundialmente famosos fue la «chicha», nombre algo despectivo con el que se bautizó a la mezcla de sonoridades caribeñas (cumbia, guaracha, salsa, etcétera) y del rock, con las provenientes del universo andino (huaynos, mulisas, etcétera)[57]. Su éxito en la década de 1980 se atribuyó, entre otras cosas, a la migración andina en la ciudad, la cual contribuyó con la consolidación de un mercado para los grupos dedicados a este género. Lo que nos interesa es que Los Shapis abordaron varios temas de contenido urbano, muy familiares para los habitantes de Lima, tales como el esfuerzo personal en «Mi tallercito» (1981), el drama del embarazo adolescente y el fatal aborto clandestino en «Bolso escolar» (1982), la lucha cotidiana de los jóvenes peruanos en «Somos estudiantes» (1984) y, canción que motiva esta digresión, «El ambulante» (1985).

Esta última producción musical fue lanzada como parte del disco *Por los caminos del Perú* y ensalzó la figura del ambulante. Al inicio de la canción y justo antes de que comience la letra, Chapulín el dulce declara: «cuidado que viene el municipal y te quite tu merca», frase que seguramente resultaba más que familiar para los ambulantes de la ciudad. La letra continúa de esta manera:

---

[54] *La República*, 27-10-1986, «Tren tendrá vagones para comerciantes».

[55] *La República*, 3-10-1986, «"Solo palizas hemos recibido de Bedoya", señalan los ambulantes».

[56] En el caso mexicano, la identidad de los vendedores callejeros se consolidó antes, entra otras cosas, por la brutalidad de la represión y las conexiones entre los comerciantes y los estudiantes universitarios. En el caso de Puebla se llegó a asesinar, juzgar con pruebas falsas, secuestrar niños y torturar a dirigentes. También usaron diversos medios artísticos para expresar su situación y protestar (Mendiola, 2017, pp. 100-106 y 132-134).

[57] Un reciente y muy buen análisis social y musical en Javier Tantaleán (2016).

Ayayayayay que triste es vivir
ayayayayay que triste es soñar
ambulante soy proletario soy
ambulante soy proletario soy
vendiendo zapatos
vendiendo comida
vendiendo casacas
mantengo mi hogar
ambulante soy proletario soy
ambulante soy proletario soy

La aparente simpleza de la letra esconde la compleja relación entre la canción y la realidad cotidiana con la cual se conectaba. El destinatario de esta canción es un personaje concreto que es retratado a partir de sus frustraciones (los dos primeros versos) y su condición de clase (los dos segundos); personaje, como se indica al principio, que debe estar atento para sobrevivir en medio de la represión municipal, si es que quiere mantener a su familia. Es el retrato de una gesta cotidiana, ante la cual la población es invitada a solidarizarse por medio de esta canción que ensalza al ambulante como trabajador honesto[58].

Este nuevo imaginario fue reforzado por otros medios, por ejemplo, la caricatura. Alfredo Marcos, reconocido dibujante, introdujo la tira cómica «El país de las maravillas» en el diario *La República*. En ella narraba de forma irónica la vida de los peruanos pobres, en una de sus secuencias se muestra lo siguiente:



Figura 6. Caricatura de Alfredo Marcos. *La República*, 14 de abril de 1986.

[58] El popular programa «Risas y salsa», lanzado por el canal 5 (PANTEL) en 1980, también incluyó una secuencia cómica en la que el ambulante era el protagonista, aunque fue retratado como un migrante 'avivado' que se dedicaba a estafar a la gente. Véase, «Los ambulantes» (https://www.youtube.com/watch?v=jBJcisDrLGE, fecha de consulta: 12/2/2016), secuencia probablemente grabada a mediados de la década de 1980. También en 1983 el galardonado grupo de teatro Yuyachkani estrenó «Los músicos ambulantes» (http://www.yuyachkani.org/web_obras/musicos.html, fecha de consulta: 12/2/2016).

Como se puede observar, la viñeta ofrece una visión del ambulante distante de la que lo identificaba con un migrante de baja educación, al contrario, Marcos lo representa como un desempleado educado, sin otra opción de sobrevivir que dedicarse a la venta callejera. Algunas notas periodísticas de ese tiempo informan incidentalmente de esta característica: ambulantes que contaban con estudios, pero que no encontraban otra manera de ganarse la vida. Por ejemplo, Ana Cámara, una humilde mujer que alumbró trillizos solicitó ayuda a la colectividad para solventar sus gastos, su marido, Albino Pacheco, era un estudiante de economía desempleado que se ganaba la vida como vendedor de canastas de paja en los mercados de la capital[59]. Otro estudiante de contabilidad de la universidad de San Marcos, que se ganaba la vida como repartidor de pavos, fue asesinado supuestamente por una mafia de vendedores de aves[60].

Un quincenario, publicado aparentemente por varios gremios de vendedores, portaba el título de *El ambulante* y difundía noticias del interés de los comerciantes. La edición de noviembre de 1986 anunciaba que la municipalidad no reubicaría a los ambulantes e informó a la colectividad de los diversos candidatos del gremio que se presentaban en las listas de concejales en varios distritos de la capital. También rescataba la memoria de las antiguas luchas, por ejemplo, le dio cobertura al acto de celebración del décimo aniversario de la asociación de trabajadores del Parque Universitario, evento al que asistió una regidora del Concejo Metropolitano[61]. Por último, en la sección cultural se incluyó una defensa de la música chicha y del grupo Los Shapis, mencionando la canción «El ambulante». De acuerdo con el redactor, «la chicha representa la respuesta de la juventud provinciana que busca su identidad en la capital, es decir Los Shapis o cualquier otro conjunto musical, imprime una respuesta a otros sectores sociales, que se movilizan a base de rock y otras formas de alienación venidas del extranjero»[62].

Como se puede observar en la figura, en este medio el ambulante adquirió una identidad propia. Era ya un personaje plenamente reconocido e identificable en el espacio urbano, su relevancia para el abastecimiento de la población, su extensión y diversidad de ocupaciones y su importancia política lo posicionaron como uno de los actores fundamentales de la década de 1980. Evidentemente, esta imagen 'positiva' convivió con la percepción de su presencia como amenazante por la ilegalidad de sus actividades o su posible vinculación con la subversión. A principios

---

[59] *Extra*, 7-4-1986, «Madre de trillizos pide ropitas y medicina».

[60] *Extra*, 27-12-1986, «A machetazos matan vendedor de pavos». Otro estudiante escolar que vendía helados casi fue asesinado por pedirle aumento de salario a su jefe (*Extra*, 13-2-1986, «Patrón arrojó al mar a niño vendedor de helados»).

[61] *El ambulante*, (3), noviembre, 1986, «Celebran aniversario trabajadores del Parque Universitario».

[62] *El ambulante*, (3), noviembre, 1986, «Las multitudes y Los Shapis».

de año fue capturado César Ramos, acusado por parte de la policía de ser parte del PCP-SL, quien se dedicaba a la venta ambulatoria de sortijas y baratijas, mientras que desarrollaba su labor de jefe de propaganda del movimiento subversivo[63]. También la falta de higiene y la posibilidad de enfermarse por el consumo de los alimentos que vendían los ambulantes, el contrabando y la falsificación de productos, eran algunas de las acusaciones que los comerciantes enfrentaban frecuentemente. Por ejemplo, en la campaña navideña de 1986 se acusó a los ambulantes de vender peligrosamente licores adulterados, panetones en mal estado y chocolates malogrados, abastecidos por fábricas clandestinas y mafias dedicadas a la falsificación de productos[64].

Las elecciones las ganó el candidato aprista Jorge del Castillo. Con la contienda electoral finalizada y la proliferación de vendedores que aprovechaban la campaña navideña, la tensión entre los ambulantes y el municipio se reinició. De acuerdo con los dirigentes de los comerciantes, el teniente alcalde, Henry Pease, les había prometido dejarlos vender durante esas semanas, siempre y cuando no interrumpan el tráfico vehicular. Sin embargo, el viernes 12 de diciembre fueron desalojados del jirón Camaná por un carro rompe manifestaciones, de acuerdo con las autoridades, debido a que obstruían el tránsito vehicular de la zona[65]. Así, el gobierno municipal de izquierda terminó su ciclo con los mismos argumentos de las anteriores gestiones: la represión de los ambulantes.

Peligros urbanos

La gestión de Jorge del Castillo (1987-1989) se desarrolló durante los peores años de la crisis económica de la década de 1980. Como se señaló anteriormente, hay consenso en considerar que durante esta administración no se generó ninguna política nueva para el problema del ambulantaje; el municipio siguió oscilando entre la tolerancia y la represión[66]. Quizá lo más destacable es la lucha política contra las organizaciones de ambulantes, las cuales fueron afectadas por la creación de otras de filiación aprista, fragmentando al movimiento (Granados, 1997, p. 197). Por otro lado, la crisis y su impacto agravaron las condiciones de vida de los peruanos,

[63] *Expreso*, 15-3-1986, «Cayó jefe de propaganda de "Sendero Luminoso"».

[64] *Extra*, 28-10-1986, «Licores falsificados invaden Lima». La verdad, muchos recordamos el emporio de venta de licores de la plaza de Acho, lugar en que se podían adquirir vinos, macerados, aguardientes, etcétera, por precios muy bajos, imposibles de obtener en tiendas que vendían productos bajo control sanitario.

[65] *La República*, 13-12-1986, «'Rochabús' desaloja ambulantes».

[66] Se puede señalar a la ley promulgada el 16 de junio de 1989 en beneficio de los cargadores en triciclos y carretillas como un caso que tangencialmente afectaba a los trabajadores en las calles. *La República*, 16-6-1989, «Dan beneficios a triciclistas y carretilleros».

que, sumada al recrudecimiento del terrorismo, contribuyó para que el problema del comercio informal pase definitivamente a un segundo plano. Como ejemplo tomaremos el año 1989, últimos meses de la gestión aprista y el peor momento de la severa crisis económica.

Nada más comenzando el año un paquete de medidas económicas golpeó una vez más la economía popular. Subieron los precios de todos los productos y servicios, en un promedio de más de 50%, mientras que el sueldo mínimo aumentó solo 32%[67]. Los comerciantes de todo el país se encontraban desconcertados, pues nadie podía prever con claridad el precio final de los productos, a los cuales había que agregarles el costo de transporte y otros factores. Los comerciantes con puestos en los mercados y las tiendas de abarrotes se encontraban desabastecidos, ENCI no enviaba los pedidos de leche y azúcar desde hacía semanas, mientras que los ambulantes se las ingeniaban para obtener los productos y venderlos, aunque sea por encima del precio oficial[68]. El impacto recesivo fue tan notorio que afectó las ventas de productos no esenciales para la vida cotidiana. Por ejemplo, en el mes de marzo, tiempo de la campaña escolar, los vendedores se quejaban de las bajas ventas, según su punto de vista, producto del alto costo de los alimentos que mermaba el presupuesto familiar para otros fines, incluso el educativo[69]. La misma situación se volvió a informar a fin de año, la temporada navideña de 1989 generó ventas muy por debajo de lo esperado[70].

Con el objetivo de paralizar la especulación y mejorar la distribución de alimentos, el gobierno persiguió la venta ambulatoria de comestibles, el Ministerio de Agricultura decretó la prohibición de su venta en las calles[71]. Los ambulantes denunciaban que los altos precios con los cuales se veían obligados a vender provenían de los propios funcionarios de ENCI y ECASA (la comercializadora de arroz), quienes les vendían 'por lo bajo' azúcar y arroz por encima del precio oficial, anunciando una huelga de hambre si no castigaban a los verdaderos culpables. Los comerciantes eran conscientes de que esta manera de obtener y vender productos era ilegal, pero señalaban que no les quedaba otra alternativa: «es nuestro medio de supervivencia el pequeño comercio, qué hacemos»[72]. Quizá lo más relevante y certero fue la declaración de un comerciante, quien opinaba que la labor de los ambulantes era esencial en la distribución de alimentos: «A ver, quién nos puede

[67] *Expreso*, 9-1-1989, «Suben agua, luz y teléfonos».

[68] *Expreso*, 9-1-1989, «Desconcierto entre los comerciantes».

[69] *Expreso*, 19-3-1989, «Casi paralizada la venta de artículos escolares».

[70] *Extra*, 15-12-1989, «Juguetes prohibidos».

[71] *Extra*, 18-5-1989, «Ambulantes siguen vendiendo alimentos».

[72] *Extra*, 26-5-1989, «Huelga de hambre masiva de ambulantes».

decir cómo nos van a reemplazar. Quiénes van a abastecer a nuestros clientes. No nos vengan con el cuento de los mercados populares o los tambos comunales, que en esos lugares no se encuentran los productos esenciales si no whisky, papel higiénico, etcétera, en grandes cantidades»[73].

Los dirigentes de la Federación Departamental de Ambulantes, cuyo secretario general era Edgard Carrasco, anunciaron un paro de un día —paradójicamente, desocupando las calles— de no derogarse el decreto ministerial que impedía la venta de alimentos en la calle. Carrasco señaló que su gremio estaba compuesto de profesionales recién egresados, expilotos de aviación y diversos desocupados por causa de la situación económica, quienes se ganaban la vida con la venta de comestibles en la vía pública. La importancia del comercio ambulatorio era la principal fortaleza del gremio, si se producía el paro «[las perjudicadas] van a ser las amas de casa porque nosotros abastecemos al 75 por ciento de la población capitalina, especialmente a quienes viven en los barrios marginales y asentamientos humanos que no tienen suficientes recursos para comprar alimentos en tiendas o supermercados»[74].

Bajo esta premisa, los ambulantes eran esenciales en el abastecimiento de los productos básicos de la ciudad, ellos vendían los alimentos por encima del precio oficial y condicionando su compra a la venta de otros productos, pero finalmente eran la única alternativa viable[75]. Como hemos señalado anteriormente, todo lo necesario para la vida cotidiana podía ser obtenido por medio de los vendedores de las calles[76]. Su expansión y fortalecimiento no provenía del exceso de regulación estatal o del desempleo en general, aunque eran factores que se encontraban presentes. Lo primordial fue la crisis económica que obligó a reconstruir de otro modo las cadenas de abastecimiento, mientras que el Estado se desmoronaba por la falta de autoridad, la escasez de recursos y la ambigüedad de sus políticas[77].

[73] *Extra*, 26-5-1989, «Huelga de hambre masiva de ambulantes».

[74] *Extra*, 1-6-1989, «Sin ambulantes por un día». Las organizaciones de ambulantes continuaron fortaleciéndose en los siguientes años. En 1991 Carrasco asistió como secretario general de la Fedeval al I Encuentro de trabajadores ambulantes del Cono Norte y Lima Metropolitana (Carbajal, 1991).

[75] *Extra*, 15-7-1989, «Hacen la plaza en ambulantes».

[76] En Polvos Azules se podían encontrar medicinas de todo tipo, algunas que solo podían ser expendidas con receta médica y que no se encontraban en las farmacias autorizadas. *Extra*, 22-9-1989, «En Polvos Azules venden medicinas».

[77] Algunos concejales se manifestaron en contra de los desalojos violentos, afirmando que lo adecuado era el diálogo mientras se les reubicaba en otro espacio. El regidor Ántero Flores-Araoz declaró que no se debía perseguir a los ambulantes y que deberían ser reubicados en lugares «donde puedan seguir con su actividad empresarial sin causar trastornos al vecindario, pero tampoco sin perder los ingresos a los que están acostumbrados y que constituye el sustento de sus familias» (*Extra*, 17-3-1989, «Mercado central es bomba de tiempo»).

Por ejemplo, los comerciantes de Breña denunciaron que el municipio lotizaba y alquilaba las aceras aprovechándose de la temporada navideña, mientras que el mercado se encontraba en muy malas condiciones higiénicas[78].

Un ejemplo que podemos profundizar es el de la venta de productos para la salud, medicinas y derivados. Desde antes de la década de 1980 los ambulantes comenzaron a distribuir diversos productos para la salud, por ejemplo, los anteojos. A pesar de las recomendaciones de los oftalmólogos respecto a los peligros de comprarles productos defectuosos, cada vez más vendedores se instalaban en las cercanías del Congreso de la República para vender estos productos[79]. Antibióticos, analgésicos, sueros y otras medicinas se podían obtener en los ambulantes, especialmente en las inmediaciones de los centros de salud, por un precio menor al de las farmacias, pero con el grave riesgo de adulteraciones y de mal estado de los productos[80]. A pesar de los pedidos y advertencias de los médicos y especialistas, las personas siguieron adquiriendo estos productos en las calles de Lima.



Figura 7. Caricatura acerca de la persecución policial a los ambulantes. *Expreso*, 18 de enero de 1989.

[78] *Extra*, 21-12-1989, «Alquilan veredas a ambulantes».

[79] *Correo*, 5-7-1983, «Anteojos comprados a los ambulantes son peligrosos».

[80] *Extra*, 15-10-1986, «Ambulantes venden sueros y antibióticos en Lima»; 5-1-1989, «Ambulantes venden medicinas»; y 26-10-1989, «Medicinas de ambulantes son la muerte». Además, hay que agregar a los ambulantes dedicados a la medicina tradicional que vendían una gran cantidad de yerbas para todo tipo de males, *Extra*, 5-8-1989, «Ambulantes tienen cura para todo» y 2-8-1989, «Yerberos, médicos de los pobres».

Los ambulantes no pudieron ser erradicados del centro de Lima, por el contrario, recuperaron varios de los espacios que habían perdido y cuando los desalojaban, retornaban al poco tiempo. La política municipal de persecución, decomiso y desalojo no dio mayores frutos. En el centro de Lima los ambulantes desocupaban las calles durante las mañanas, pero al caer la tarde reaparecían con la venta de todo tipo de productos y alimentos[81]. Incluso los ambulantes consiguieron un amparo judicial que impedía el desalojo municipal y que facilitó su ocupación de las calles[82]. De esta manera espacios que habían sido 'limpiados', como la Plaza San Martín, fueron retomados por diversos vendedores, charlatanes, cómicos, cambistas de dólares, libreros, etcétera; algunos de ellos instalados con carretillas y triciclos para la venta[83].

Otro caso interesante es el jirón Lampa, espacio destinado para la construcción de un bulevar, razón por la cual el alcalde ordenó el desalojo de los ambulantes. En ese momento la Central Trabajadora de Ambulantes de Lima Metropolitana (CETALM), se opuso tenazmente a la medida. Su máximo dirigente, Óscar Espinoza, rechazó la disposición señalando que los amparaba la constitución que garantizaba su derecho al trabajo y un fallo judicial a su favor. El desalojo tuvo un éxito parcial, algunos vendedores aceptaron su reubicación, mientras que otros convocaron a una marcha de protesta por las calles de la ciudad[84]. La Municipalidad insistió en el proyecto de construcción de un bulevar que pretendía convertir la zona en un espacio turístico, para tal efecto limpiaron y baldearon la zonas con el apoyo de los vecinos[85], pero los comerciantes, especializados en ferretería y productos eléctricos, resistieron los intentos de desalojo, convocaron a marchas de protesta y se enfrentaron a los efectivos policiales en varias oportunidades[86].

Mientras que esto ocurría en los relativamente nuevos espacios, los lugares con trayectoria continuaron generando conflictos. En Polvos Azules las contradicciones entre los dirigentes, el inusitado éxito del campo, la necesidad de los vendedores y hasta el temor a la subversión, se confabularon para que estallen los problemas. Un grupo de mujeres vendedoras fue desalojado violentamente del pasaje Santa Rosa y de la segunda etapa del campo. La policía aducía que entre los ambulantes se refugiaban subversivos, como aquellos que en agosto de 1986 atentaron contra

[81] *Expreso*, 15-1-1989, «Erradican ambulantes del centro de Lima» y 5-3-1989, «plaza Ramón Castilla luce sin ambulantes».

[82] *Expreso*, 15-2-1989, «Autorizan a ambulantes a invadir las calles».

[83] *Expreso*, 19-3-1989, «Ambulantes invaden Plaza San Martín».

[84] *La República*, 24-1-1989, «Ambulantes harán marcha de protesta».

[85] *Expreso*, 19-2-1989, «Convertirán jirón Lampa en boulevard».

[86] *Expreso*, 1-2-1989, «Ambulantes de Lampa provocan disturbios» y 5-3-1989, «Plaza Castilla luce sin ambulantes».

el Palacio de Gobierno; las vendedoras regresaron a pesar de la represión, y propusieron un empadronamiento de ambulantes y carnés para evitar la infiltración de terroristas[87]. Evidentemente la ubicación del campo ferial, casi a las puertas del Palacio de Gobierno, complicaba enormemente la labor de resguardo del recinto, el flujo de compradores y vendedores, de miles de personas diariamente, impedía cualquier tipo de control eficiente. Esta vez las autoridades ya no podían desalojar a los ambulantes, quienes fueron trasladados por el municipio, habían construido galerías y puestos en un laberinto mortal que posteriormente sería fatal para ellos mismos. Solo les quedaba fiscalizar el campo buscando productos obtenidos por medio del contrabando para promover el cierre del campo, intervención que se llevó a cabo en varias oportunidades. Por ejemplo, en la madrugada del 16 de agosto de 1989 el fiscal y las fuerzas policiales entraron al campo y forzaron el puesto de un vendedor donde encontraron cuantiosa mercadería sin la debida documentación, operación que se repitió en los casos de otros comerciantes[88]. El ILD protestó por el operativo, señaló que no se había permitido que los comerciantes muestren la documentación, lo cual era cierto debido a que la intervención se realizó a altas horas de la madrugada, lo que impidió a los comerciantes recabar la documentación. La institución afirmó que estas medidas actuaban severamente contra los más pobres, «humildes empresarios populares que no tienen vínculos con el poder»[89].

Mientras que esto ocurría en la ciudad, el municipio preparó un cuerpo de policías municipales dirigido por el concejal Juan José Vizcarra, quien impuso una preparación militarizada que pronto se haría notar. Uno de los hechos que contó con mayor cobertura fue el violento desalojo de la esquina de los jirones Camaná y Callao de Bertha Rodríguez Sánchez, una humilde vendedora de dulces y cigarrillos[90]. De acuerdo con el diario *La República*, fue golpeada en la cabeza por un policía municipal hasta perder el conocimiento, empero los reclamos de otros vendedores y peatones que intentaron defenderla. A pesar de la seriedad de sus heridas, la víctima no fue derivada a ningún nosocomio, reporteros del diario siguieron al camión municipal, el cual solo se detuvo ante la intervención de un policía de la Guardia Republicana, él obligó a los municipales a trasladar a la mujer a un hospital cercano, aceptando su pedido a regañadientes. La Sra. Rodríguez sufrió un cuadro de traumatismo cerebral, era madre de seis hijos y trabajaba hacía

[87] *La República*, 10-3-1989, «Vuelven a desalojar ambulantes».

[88] *La República*, 16-8-1989, «Fiscal requisa en Polvos Azules cuantiosa mercadería de contrabando».

[89] *La República*, 19-8-1989, «Arbitrario decomiso en Polvos Azules».

[90] El diario *La República* cubre varios de los acontecimientos que tuvieron como escenario esas calles, gracias a la cercanía de su local.

cuatro años en esa esquina, de esa manera completaba el ingreso familiar junto con su esposo[91].

La gravedad y difusión del caso impidieron que fuera ignorado por las autoridades. El alcalde de Lima, Jorge del Castillo, invitó a la señora Rodríguez al municipio, rechazó la violencia con la que fue tratada y le solicitó públicamente disculpas y, para que dejase de vender en las calles, le ofreció un puesto de ventas en el mercado de Barrios Altos. Además, ofreció investigar los hechos y sancionar a los responsables. La regidora Inés Gamarra, responsable del ordenamiento del comercio ambulatorio, aprovechó la ocasión para invitar a los ambulantes a solicitar algún puesto fijo en los mercados, prueba de que, como hemos visto, estaban en situación de abandono[92].

Los reporteros de *La República* la acompañaron hasta su hogar. En la nota publicada se muestra a una mujer trabajadora, humilde y sencilla, al punto de no guardar ningún tipo de rencor contra sus agresores, en su semblante «no se dejaba traslucir ningún ánimo de rencor ni de reproche por lo que le había sucedido». La señora Rodríguez reflejaba el perfil del buen ambulante, una sacrificada migrante originaria de Cerro de Pasco y humilde habitante de un pueblo joven. Ella se vio obligada a dedicarse a la venta ambulatoria para mantener a sus hijos: «soy el sustento de mi familia y por eso trabajo en la calle. La casita que tengo en el pueblo joven Huáscar de Canto Grande es muy humilde y está construida de esteras»[93]. La familia residía en Lima hacía quince años y contaba con escasos ingresos; el esposo, Alfonso Martínez, era un jubilado estatal, exguardián de la Universidad Federico Villarreal, percibía una miseria como pensión —recuérdese que 1989 fue el peor año de la inflación— y completaba sus magros ingresos lavando carros en diversos estacionamientos de Lima. La madre, luego de su agotadora jornada como vendedora, completaba sus necesidades lavando ropa: «yo lavo ropa seis días a la semana, incluyendo los domingos, hay veces que no tenemos qué llevar a casa para prepararnos un simple almuerzo»[94]. Esta familia de informales no encaja en el perfil de una actividad destinada a la acumulación ni se vio afectada por la excesiva regulación y sus costos[95], por el contrario, fueron víctimas de la debacle del Estado

---

[91] *La República*, 28-1-1989, «Municipales golpean hasta hacer perder el conocimiento a vendedora».

[92] *La República*, 31-1-1989, «Alcalde pide disculpas a vendedora golpeada por policías municipales». Días después de la disculpa, nuevamente los municipales reprimieron con dureza a los ambulantes. *La República*, 10-2-1981, «Censurable, innecesaria brutalidad» (fotografía).

[93] *La República*, 31-1-1989, «Alcalde pide disculpas a vendedora golpeada por policías municipales».

[94] *La República*, 31-1-1989, «Alcalde pide disculpas a vendedora golpeada por policías municipales».

[95] Otra historia similar en *Expreso*, 28-1-1992, «La necesidad los hizo informales».

y sus pensiones, de la situación económica y de la necesidad de supervivencia[96]. Semanas después el ofrecimiento se hizo realidad, la regidora Gamarra le hizo entrega de un puesto en la sección abarrotes del mercado Mercedarias de Barrios Altos[97].

Si ya era peligroso trabajar en las calles por la represión de las fuerzas policiales y municipales, estas no eran las únicas preocupaciones de los ambulantes. Laborar en las calles los dejaba expuestos a diversos peligros, como los accidentes. Por ejemplo, un microbús aparentemente tuvo una falla mecánica, producto de la cual el chofer perdió el control y arrolló a diez personas en la avenida Emancipación, causando la muerte de tres ambulantes. De acuerdo con el chofer, él trató de evitar uno de los incontables y enormes baches de las calles, razón por la que perdió el control del vehículo, lo que generó el atropello a cuatro ambulantes, tres de los cuales fallecieron[98].

Las acciones de la subversión frecuentemente causaban víctimas entre los ambulantes; por ejemplo, una marcha de trabajadores estatales en el cruce de las avenidas Tacna y Emancipación terminó en una balacera luego de la detonación de algunas bombas molotov; mientras que se incendiaban unas llantas en medio de la calle y los ambulantes trataban de apagar el fuego con baldes de agua, una bala hirió levemente en la cabeza a un ambulante y otra hirió en el brazo a un periodista[99]. No todos los ambulantes tuvieron tanta suerte. Los subversivos asesinaron 'accidentalmente' a un vendedor de chocolates que se ganaba la vida en los ómnibus ENATRU, objetivo de los atentados[100]. El fallecido, David Ramos Pariona, natural de Puquio, se dedicaba a la venta en las inmediaciones de la plaza Dos de Mayo y tan solo tenía cinco meses como residente en la ciudad[101]. En la misma plaza otro comerciante, Zacarías Copitán Colina, quien a las 6 a.m. se encontraba trabajando en su puesto de comida cerca de una tanqueta policial, fue asesinado

[96] La situación de este tipo de ambulantes era extremadamente frágil. Una humilde vendedora de chocolates no pudo afrontar el total abandono de su esposo, ante la imposibilidad de sostener a sus dos hijos, tomó la fatal decisión de quitarse la vida. *La República*, 19-6-1989, «Vendedora de chocolate se ahorca porque su esposo la dejó por otra».

[97] *La República*, 31-1-1989, «Alcalde pide disculpas a vendedora golpeada por policías municipales». Meses después de este incidente, se repitió la violencia en contra de los vendedores de la calle. En este caso no solo se persiguió y golpeó a los ambulantes, sino también a los típicos vendedores de emoliente del centro de Lima. Los emolienteros fueron reprimidos con dureza, se destrozaron sus carretillas y se rompieron sus equipamientos en diversas calles de la ciudad, entre ellas, nuevamente el jirón Camaná (*La República*, 22-6-1989, «Apalean a humildes emolienteros»).

[98] *Extra*, 12-1-1989, «Micro loco mata tres ambulantes».

[99] *La República*, 21-10-1989, «A balazos hieren a periodista en mitin».

[100] *La República*, 2-6-1989, «Matan humilde vendedor y queman ómnibus».

[101] *La República*, 2-6-1989, «Matan humilde vendedor y queman ómnibus».

brutalmente por la explosión de un cohete que estaba originalmente dirigido contra el vehículo policial. El infortunado comerciante dejó a cuatro hijos huérfanos[102].

Patrimonio negociado

Diversas personalidades e instituciones manifestaron públicamente su apoyo a la gesta de los ambulantes. Idesi, por medio de su directora Susana Pinilla, seguía ofreciendo apoyo crediticio, considerando que los vendedores no contaban con otra manera de ganarse la vida y sugirió la entrega de los terrenos de la beneficencia para la construcción de mercados[103]. Hernando de Soto declaró en los Estados Unidos que la informalidad, dentro de la cual se encontraban los ambulantes, estaba cambiando las estructuras de la economía peruana de una manera no violenta, y promovía la legalización de sus actividades antes que su erradicación[104].

La relación con los ambulantes nuevamente se tornó tolerante con el nuevo proceso electoral por el sillón municipal convocado para el 12 de noviembre. Los candidatos eran Ricardo Belmont Cassinelli del Movimiento Independiente Obras, Juan Incháustegui por el Frente Democrático (Fredemo), Mercedes Cabanillas por el APRA y Henry Pease por la IU. En ese contexto el candidato del Fredemo dialogó con los ambulantes de la avenida Grau, uno de los puntos álgidos de la ciudad, escuchó sus propuestas y sugirió la posibilidad de expropiar terrenos para la construcción de mercados[105], también planteó ampliar los campos feriales y liberar por las tardes algunas calles del centro para el uso de los ambulantes[106]. Henry Pease, propuso ampliar el reconocimiento del ambulante como fuente de empleo y comercialización, apoyar su formalización, la compra de terrenos y el uso de áreas descentralizadas de producción y comercio[107]. Mientras que el futuro alcalde Belmont asistía a eventos organizados por los ambulantes, como la inauguración del centro de administración del Centro Comercial Cooperativo El Hueco[108].

---

102 *La República*, 16-10-1989, «Con cohete de guerra asesinan a vendedor en plaza Dos de Mayo».

103 *Expreso*, 4-1-1989, «IDESI propone ayudar a vendedores ambulantes».

104 *Extra*, 18-4-1989, «Ambulante es una vía contra la pobreza».

105 *La República*, 8-11-1989, «Incháustegui dialogó con los vendedores ambulantes». El alcalde de Miraflores, Luis Bedoya de Vivanco, reclamaba una solución humana del problema, originado por «la explosión demográfica y la migración del poblador andino por falta de apoyo del Estado o por temor al terrorismo, como también por la búsqueda de nuevas perspectivas económicas en la capital» (*Extra*, 19-10-1989, «No hay que perseguir a ambulantes»).

106 *La República*, 12-11-1989, «Los programas municipales».

107 *La República*, 12-11-1989, «Los programas municipales».

108 *Extra*, 3-12-1989, «Informales usarán computadoras». Este mercado cooperativo recibió el terreno de la Beneficencia en noviembre de 1988, gracias a un decreto presidencial. Sus dirigentes anunciaron la búsqueda de financiamiento extranjero para la construcción del local, por tal motivo viajarían al

Belmont también planteó la construcción de nuevos campos feriales y centros comerciales, el municipio bajo su gestión municipal convocaría a un diálogo con los ambulantes y pediría apoyo a las universidades y colegios profesionales para lograr una solución armónica[109].

La gestión de Ricardo Belmont Cassinelli (1990-1992 y 1993-1995) tampoco consiguió mayores logros respecto al comercio ambulatorio. Se concentró especialmente en la construcción de intercambios viales que mejoraron la circulación de automóviles en la ciudad y en las zonas periféricas (Prolima, 2014, p. 42). Incluso la percepción que los comerciantes tenían de su gestión es que no interfirió con el comercio ambulatorio, los vendedores tuvieron mayor seguridad de permanecer en las calles durante su alcaldía (Granados, 1997, p. 74). Por otro lado —asunto de gran importancia en nuestro tema—, desde 1989 el Patronato de Lima, una asociación sin fines de lucro creada con el objeto de preservar el centro histórico, gestionó por intermedio de la Unesco la consagración del centro de Lima como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Como se conoce, en América Latina desde fines de la década de 1980 se comenzaron a aplicar de forma más consistente las políticas neoliberales, las cuales también implicaron un cambio en la concepción de la ciudad, semiprivatizando el espacio público, convirtiéndolo en un híbrido entre lo público y lo privado[110]. Las instituciones estatales se reformaron con el objeto de defender un nuevo orden urbano y la modernización capitalista, y excluían a quienes se resistían a tales cambios. De esta manera se reguló el uso del espacio en función de lo que se consideraba apropiado dentro del modelo neoliberal[111]. Este nuevo modelo urbano privilegia los gustos de las clases medias y altas, recupera un tipo herencia histórica de la ciudad, la cual debía ser preservada y que se consideraba alterada, en peligro de extinción o, simplemente, fuera de los cauces delimitados por lo que se percibe característico de su historia (Mendiola, 2017, p. 11).

Este Patronato se instaló en marzo de 1989, con la participación de Alejandro Miró Quesada, Augusto Elmore (redactor de la columna «Lugar común» en *Caretas* y uno de los grandes críticos de la expansión del comercio ambulante)[112] y el arquitecto Augusto Ortiz de Zevallos, entre otros. Su primer presidente, Eduardo Arrarte, dirigía una importante agencia de viajes y anunció que una de sus primeras

exterior para concertar los préstamos necesarios (*La República*, 9-12-1989, «Ambulantes buscan recursos para construir centro comercial»).

[109] *La República*, 12-11-1989, «Los programas municipales». De acuerdo con la nota del diario, la candidata aprista no precisó información respecto al tema ambulatorio.

[110] Esta misma situación se generó con la consagración del centro de Puebla como patrimonio mundial (Mendiola, 2017, pp. 106, 139, 161).

[111] Para el proceso limeño véase el artículo de Castillo Gómez (2015) y Martuccelli (2015).

[112] Véase *Caretas*, 594, 10-3-1980.

acciones sería la restauración de las áreas monumentales y la reubicación de los ambulantes, en coordinación con el alcalde Jorge del Castillo[113]. Luego se firmaría «La Carta de Lima», acuerdo entre varias instituciones y colegios profesionales con el objeto de formular un paquete de medidas para la recuperación de la ciudad. Entre las propuestas se consideraban la descentralización para evitar el flujo incesante de migrantes, mejoras en la gestión urbana y cuidado de la ecología, «porque no queremos seguir viviendo, [en una ciudad] cada día más ineficaz y triste, más insegura, contaminada y peligrosa»[114]. En 1990 el municipio creó una comisión para apoyar estas iniciativas, grupos en los que participaron conjuntamente con el Patronato y el Instituto Nacional de Cultura y que propuso el reglamento del centro de Lima, el 4 de diciembre de 1991. Finalmente, el 13 de diciembre, la Unesco nombró a Lima patrimonio mundial (Prolima, 2014, p. 43).

A las pocas semanas de esta distinción, el alcalde comenzó la campaña de erradicación de ambulantes del centro de Lima con la ordenanza municipal 0042 y se prohibió, una vez más, el comercio ambulatorio en Lima cuadrada, esta vez denominada «Zona monumental», y se reiteró la orden que impedía la guardianía nocturna de triciclos, carretillas y otros implementos de los comerciantes[115]. La solución propuesta por el Patronato de Lima expresa bastante bien la nueva imagen que se quería imponer en Lima, se la consideraba una ciudad histórica que debía mantener su pasado ideal, antes de las grandes migraciones y sin vendedores ambulantes en sus calles, o, al menos, solo con aquellos que coincidían con el tipo ideal de los impulsadores de las reformas. Era el inicio del retorno a lo que se consideraba la «tradición». Al igual que otros casos latinoamericanos, se apeló a la dignidad de la ciudad y la restauración de su pasado (Mendiola, 2017, pp. 143-144)[116].

Eduardo Arrarte, presidente del Patronato, declaró que la solución era trasladar a los comerciantes a los parques zonales de la periferia limeña, que «en algunos casos ya han sido invadidos por los pobladores para darles otro uso». Esto evidencia una concepción excluyente del centro de la ciudad, coherente con quienes percibían a los vendedores como extraños y advenedizos respecto al que consideraban el pasado colonial y republicano de la capital[117]. Arrarte solicitó el apoyo del gobierno

[113] *Expreso*, 31-3-1989, «Restaurarán perímetro céntrico de la capital».

[114] *La República*, 28-10-1989, «La Carta de Lima».

[115] *Expreso*, 15-1-1992, «Prohíben ambulantes dentro de Lima monumental».

[116] Sin embargo, una diferencia interesante es que en el caso limeño el Mercado Central sí se mantuvo; mientras que, en el caso poblano, los comerciantes fueron desalojados del mercado histórico, hoy convertido en un centro comercial.

[117] Este imaginario excluyente también se aplicó en Puebla (Mendiola, 2017, p. 146).

a través de la policía nacional y el Ejército para desalojar a los ambulantes[118]. Varios miembros del Patronato opinaban que la única posibilidad de recuperación del centro pasaba por la erradicación de los ambulantes, percibidos como marginales, migrantes, cholos, sin educación ni respeto por la ciudad (Granados, 1997, pp. 128 y 135); mientras que los comerciantes formales del centro opinaban que la mayoría de los comerciantes callejeros eran nocivos para la ciudad. Uno de ellos señaló que eran «cochinos, no aportan nada a la ciudad y sin embargo exigen al municipio que se les limpien las calles donde trabajan, que les mantengan los servicios en orden. Ellos son los que traen la delincuencia al centro de Lima, por ejemplo 'La cachina' habrá que levantarla con todo, no puedes tener consideración con ellos, es gente que compra ropa robada y lo venden como una cosa normal… ¡A cinco cuadras de la Plaza de Armas!» (Granados, 1997, p. 104).

Los dirigentes de agrupaciones de vecinos también opinaban duramente de los ambulantes. Uno de ellos señaló que «El centro Lima debe ser un centro de atracción turística y comercial… ya Lima no es como antes, los grandes centros de comercio, los hoteles, Crillón, Bolívar, Wilson, han bajado o cerrado por la proliferación de ambulantes, porque detrás de ellos viene el delincuente, hay ambulantes que trafican con el delincuente, trabajan en complicidad» (Granados, 1997, p. 104).

Desde la otra vereda, Gregorio Salas, dirigente de los ambulantes, señaló que deberían emplearse parte de los fondos destinados a reconstruir Lima para facilitar la compra de los terrenos para convertirlos en mercados y galerías[119]. Los comerciantes reaccionaron, un grupo de ellos anunció la formación de un movimiento político propio para luchar por sus intereses, alegaron que su situación era producto de la crisis económica y que contribuían con el crecimiento del país[120]. Mientras tanto, como señala Wendy Morán, las descripciones de los ambulantes comenzaron a radicalizar su imagen negativa, «al ser relacionado con el deterioro físico, con lo sucio y la contaminación, todas ellas acciones incivilizadas, debe ser desplazado fuera de los lugares de memoria» (2013, p. 82).

El diario *Expreso* dio una cobertura muy amplia al conflicto entre las autoridades y los ambulantes, destacando la incapacidad de las autoridades para cumplir sus ordenanzas, razón por la cual se preocupó en entrevistar a los dirigentes para ofrecer una visión más dramática del conflicto. Por ejemplo, introdujo notas acerca del drama que significaba trabajar como ambulante, entrevistando especialmente a mujeres migrantes que declaraban su incapacidad para dedicarse a otra labor. El diario afirmaba que, en consonancia con el ideal que se quería aplicar a Lima,

---

118 *Expreso*, 17-1-1992, «Propone parques zonales para reubicar informales».

119 *Expreso*, 18-1-1992, «Ambulantes en protesta sabotearán hoy el aniversario de Lima».

120 *La República*, 14-1-1992, «Ambulantes crean movimiento político y van a las elecciones».

los comerciantes eran «en su mayoría, provincianos que dejaron sus pueblos en la sierra y llegaron a la capital buscando nuevos horizontes para ellos y sus familias». Además enfatizó la idea —muy extendida en el sentido común de muchos habitantes limeños— de que muchas de estas mujeres tenían familias con demasiados hijos porque carecían de educación y del conocimiento de la planificación familiar[121].

Al acercarse el aniversario de fundación española de la ciudad (18 de enero) se anunció el desalojo de los ambulantes, pero la falta de apoyo policial y la encarnizada defensa de los ambulantes impidió su expulsión[122]. La ordenanza, como había ocurrido con las anteriores del mismo tenor, a pesar de las amenazas de desalojo y decomiso de sus productos, no fue acatada por los comerciantes. Las calles del centro continuaron abarrotadas de ambulantes, quienes junto con los taxistas informales —otro personaje de similares características—, obstruían el paso de vehículos y personas. Un caso especialmente conocido era el mercadillo de objetos en desuso y de dudosa procedencia, ubicado en las cuadras 10 y 11 de la avenida Nicolás de Piérola, denominado popularmente «La cachina», lugar que por la gran afluencia de compradores se convirtió en un dolor de cabeza para las autoridades, debido a que obstaculizaban el tránsito y atraía gran cantidad de delincuentes[123].

Otros comerciantes, como los de la avenida Grau, señalaban que contaban con permiso desde la gestión de Alfonso Barrantes, quien les permitió la creación de un campo ferial. Solo algunos fragmentos de las grandes avenidas se encontraban libres de comerciantes, gracias a la constante vigilancia policial. Los dirigentes de diversas asociaciones solicitaron dialogar con las autoridades, anunciando que estaban de acuerdo con la reubicación pero señalaron tajantemente: «responderemos con violencia si pretenden desalojarnos usando la fuerza»[124]. También la Fedeval, dirigida por Jesús Meza Chávez, anunció una marcha y la convocatoria a una asamblea para defender sus derechos[125]. No solo los ambulantes se opusieron a la medida, el diputado Enrique Ghersi, también miembro del ILD, declaró que la erradicación no tendría éxito por la improvisación de la medida y la ausencia de una solución real al problema[126]. De acuerdo con las noticias, el municipio solo comenzó a buscar un lugar apropiado para la reubicación luego de los desalojos[127]. El exregidor y futuro alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, declaró que el desalojo tampoco

[121] *Expreso*, 18-1-1992, «La necesidad los hizo informales», y 19-1-1992, «Familias con sus hijos en el comercio informal».

[122] *La República*, 16-1-1992, «Ambulantes se resisten a dejar zona monumental de Lima».

[123] *Expreso*, 17-1-1992, «Ambulantes se mantienen dentro de la Lima histórica».

[124] *Expreso*, 17-1-1992, «Ambulantes se mantienen dentro de la Lima histórica».

[125] *Expreso*, 17-1-1992, «Los informales piden diálogo y solución».

[126] *Expreso*, 17-1-1992, «Ordenanza de desalojo es una imprudencia temeraria».

[127] *Expreso*, 18-1-1992, «Ambulantes en protesta sabotearán hoy el aniversario de Lima».

era la solución y propuso entablar el diálogo con las asociaciones y brindar apoyo municipal para la construcción de mercados y galerías[128]. Finalmente, el exalcalde de Lima, Alfonso Barrantes, también opinó en contra del desalojo, especialmente por la total ausencia de una alternativa para los comerciantes[129].

En los siguientes días continuaron los conflictos. Las diversas asociaciones prolongaron las protestas, declarando a los medios de comunicación que no les quedaba otra opción de vida ante la crisis económica[130]. El alcalde Belmont, ante los crecientes conflictos, decidió bajar la tensión anunciando un plan de reubicaciones coordinado con los ambulantes y el gobierno central, el vicepresidente Máximo San Román había ofrecido el apoyo del poder ejecutivo para la construcción de «centros empresariales populares»[131]. Ante el pedido de diálogo del municipio los gremios de ambulantes suspendieron sus medidas de protesta, reocupando el centro de Lima y manteniéndose a la expectativa ante cualquier medida de fuerza por parte de las autoridades[132]. Además, el municipio concedió la posibilidad de permitir la ocupación del centro si es que los comerciantes utilizaban los módulos rodantes de venta que en los siguientes días les vendería la Municipalidad en cuotas mensuales, mostrando de nuevo una política ambigua respecto al comercio en las calles. El regidor Carlos Letts Colmenares, autoridad a cargo del problema, declaró: «estos pequeños comerciantes que ocupan plazas y avenidas a sabiendas que son zonas prohibidas, tienen todo el derecho del mundo de laborar sin ser perjudicados ni perjudicar a nadie. No los vamos a perseguir porque son seres humanos que pugnan por labrarse un porvenir y conseguir un pan para mantener a su familia»[133]. Días después el mismo regidor declaró que los desalojos se reiniciarían: «estamos decididos a poner en marcha el reordenamiento de la ciudad y creemos que la única manera de enfrentar este problema de los comerciantes informales que ocupan las zonas rígidas es con operativos sorpresa», anunciando que los ambulantes serían reubicados en los centros de comercio fuera de los distritos céntricos de la ciudad[134]. Además, el municipio les cobraba la sisa, al punto que cuando las autoridades intentaron aumentar el monto del cobro, se produjeron violentas protestas en el

[128] *Expreso*, 17-1-1992, «Plantean pequeños mercados funcionales».

[129] *Expreso*, 18-1-1992, «No les dieron alternativa».

[130] *Expreso*, 18-1-1992, «Ambulantes en protesta sabotearán hoy el aniversario de Lima».

[131] *Expreso*, 19-1-1992, «Ambulantes serán reubicados en centros empresariales populares».

[132] *Expreso*, 19-1-1992, «Ambulantes suspendieron marcha de protesta» y 20-1-1992, «Informales colaborarán en construcción de centros empresariales populares».

[133] *Expreso*, 20-1-1992, «Ambulantes no deberán ocupar zonas rígidas».

[134] *La República*, 21-1-1992, «No habrá tregua para ambulantes del centro».

centro de Lima[135]. Estas ambigüedades de la política municipal contribuyeron con la resistencia y negociación por parte de los ambulantes.

A fines del mes de enero no se había logrado ningún avance, continuaba la ocupación de las calles por parte de los comerciantes y el uso de depósitos en el centro de la ciudad[136]; muchos vendedores seguían guardando sus mercaderías en locales del centro, de forma precaria, a pesar de que estaba prohibido por la ordenanza municipal[137]. El regidor Letts señaló que se ofrecerían en venta alrededor de cuatro mil módulos para los ambulantes, a su juicio, por un precio módico. De acuerdo con su declaración, los comerciantes de varias calles de Lima estaban a favor de la medida. La ambigüedad de las medidas se evidencia en la declaración del regidor Letts, quien señaló que los miles de módulos se guardarían en las mismas playas de estacionamiento, él esperaba que los dueños de las playas no se opongan a la medida, «ya que guardarán algo más civilizado». Además, «las playas serían convertidas en centros de servicios para los módulos», que incluían los servicios higiénicos[138].

Los ambulantes inicialmente no reaccionaron de manera negativa ante la propuesta de la Municipalidad. El delegado de los ambulantes de la cuarta cuadra del jirón Huallaga, Adán Francisco Mina Castro, declaró que los comerciantes se estaban empadronando y asociando con el objeto de suscribir un convenio con el municipio y recibir los módulos metálicos. El dirigente señaló que «hasta que las autoridades municipales hallen una solución final al problema del comercio ambulatorio», ellos seguirían ocupando las calles del centro[139]. Aunque se continuó con los operativos destinados a desalojar a los comerciantes, sus resultados, cuando alcanzaban alguno, fueron siempre momentáneos. A principios de febrero, a pesar

[135] *Expreso*, 18-11-1992, «Ambulantes protestan contra tributos ediles». El municipio también intentó recaudar más ingresos subastando nuevamente los puestos de los mercados, medida que fue rechazada totalmente por los comerciantes. *Expreso*, 1-8-1992, «Mercados amenazan cerrar Lima». De acuerdo con Chávez y De la Flor, el municipio les intentó cobrar la sisa hasta la administración de Belmont (1998, p. 155).

[136] *Expreso*, 26-1-1992, «Siguen funcionando guarderías clandestinas de los ambulantes». De acuerdo con el testimonio de un vendedor ambulante, por lo menos desde 1980 se utilizaban diversos corralones para guardar los triciclos, carretas y puestos, proporcionando a los propietarios de esos espacios una sustancial ganancia económica. *El Diario* de Marka, 21-7-1980, «Un domingo popular en la Plaza Castilla».

[137] La ordenanza señalaba que «estaba prohibida la guardianía diurna y nocturna de triciclos, carretas, cajones y demás implementos del comercio informal en las playas de estacionamiento, terrenos sin construir y dentro de los inmuebles situados en la zona rígida» (*Expreso*, 11-2-1992, «Ni ambulantes ni guardianías salen del centro de Lima»).

[138] *Expreso*, 20-2-1992, «Cuatro mil ambulantes en módulos quedarán en Lima monumental». Wendy Morán (2013) también detectó estas ambigüedades.

[139] *Expreso*, 11-2-1992, «Ni ambulantes ni guardianías salen del centro de Lima».

de haberse prohibido la venta en las calles del centro, los comerciantes las ocupaban constantemente, retirándose por unas horas mientras duraba la custodia policial y retornando a sus lugares apenas se acababa el resguardo[140]. Por ejemplo, el 24 de abril de 1992, las autoridades lograron despejar una franja de cuatro metros en el jirón Ucayali, cerca del Mercado Central, luego de demostrar que los bomberos no podrían atender una emergencia en menos de veinte minutos, a pesar de que su local estaba a muy pocas cuadras. La situación de emergencia en el mercado no era nada nueva, por lo menos desde 1983 se denunció que las salidas del centro de abastos se encontraban bloqueadas por cientos de ambulantes, quienes en caso de un sismo o incendio, serían los responsables de la muerte de muchas personas[141]. En 1986, los bomberos informaron que en un simulacro de emergencia les llevó cuarenta minutos trasladar un 'herido' desde el mercado hasta la avenida Tacna, distante solo unas cuadras[142]. Otros espacios de la ciudad también fueron presentados como 'bombas de tiempo', con noticias que alarmaban a la población. Por ejemplo, se informó que la plaza Dos de Mayo corría el riesgo de hundirse por causa de las obsoletas cañerías de agua y desagüe que inundaban constantemente el lugar[143].

En 1992, el espacio que siempre debería estar libre en los alrededores del Mercado Central fue delimitado por medio de una línea blanca, medida que no fue cumplida por numerosos vendedores ambulantes[144]. En octubre de ese mismo año, un simulacro de incendio en la misma zona demostró que las calles estaban nuevamente obstruidas por ambulantes. Se tuvo que utilizar una pala mecánica para despejar la zona, una vez cumplida esa labor, nuevamente los comerciantes ocuparon las mismas calles, pero omitieron la zona de seguridad[145]. Sin embargo, poco antes de que Belmont termine su primera administración municipal, la alcaldía aprobó un cobro de treinta soles por el uso de la vía pública, lo que pone una vez más en evidencia la ambigüedad de su política, característica que se agravaría en su segundo periodo (Granados, 1997, pp. 109-111). Los vendedores rechazaron la propuesta y apelaron al presidente Fujimori a quien le exigieron la derogación del decreto (Granados, 1997, p. 108).

En el contexto del enfrentamiento entre las autoridades y los ambulantes hay que incorporar dos aspectos. En primer lugar, el incremento de acciones subversivas en el centro de Lima, las cuales aumentaron el nivel de violencia e inseguridad

---

[140] *Expreso*, 6-4-1992, «Destugurizan el Mercado Central».

[141] *Correo*, 16-4-1983, «Peligro acecha en puertas del Mercado Central».

[142] *La República*, 2-12-1986, «Mercado Central es una zona abierta a incendios en Lima».

[143] *Extra*, 29-12-1986, «plaza Dos de Mayo amenaza hundirse».

[144] *Expreso*, 24-4-1992, «Destugurizan calles adyacentes al Mercado Central».

[145] *Expreso*, 15-10-1992, «Ambulantes del Mercado Central entorpecen simulacro de incendio».

en las calles, donde los conflictos con los comerciantes agravaban esta situación, preocupando aún más a las autoridades. En segundo lugar, el valor del ambulante como apoyo político que enfrentó a los alcaldes de Lima con el presidente Alberto Fujimori (1990-2000). Es conocida la compleja relación del fujimorismo con los sectores populares; si bien su política económica era neoliberal, la relación que tenía con la población estaba marcada por el populismo y el clientelismo. La alcaldía era un puesto clave para obtener popularidad en el Perú, dada la cobertura de los medios y su peso electoral.

En el primer caso, varios atentados en la primera mitad del año 1992 amplificaron el clima de zozobra. El 7 de febrero un atentado dinamitero contra el local de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), en el centro de Lima, dejó decenas de heridos y un periodista fallecido; el 15 de febrero el PCP-SL asesinó en el distrito de Villa El Salvador a la dirigente popular María Elena Moyano, luego dinamitó su cuerpo delante de sus hijos; el 8 de abril un ómnibus-bomba destruyó la comisaría de Villa El Salvador, el 14 de mayo un camión-bomba con 300 kilos de dinamita arruinó una oficina policial detrás del Palacio de Gobierno, en el distrito del Rímac[146]; otro atentado dinamitero remeció el distrito de San Isidro el 22 de mayo, el 5 de junio un camión bomba voló en pedazos la fachada de Frecuencia Latina (canal 2 de televisión) y el fatídico 16 de julio se produjo la explosión del coche bomba en la calle Tarata del distrito de Miraflores (Jara, 1992, pp. 32-33). Cinco días después, un atentado en el local del ILD ubicado en el mismo distrito dejó el trágico saldo de cinco muertos[147]. Además, durante los paros armados convocados por el PCP-SL, los ambulantes muchas veces continuaban trabajando, debido a que dependían de ingresos diarios infringían los dictados de los subversivos[148]. Por esta razón, el 22 de julio un destacamento senderista atacó el Mercado Mayorista (La Parada), asesinando a un policía e hiriendo a otro, y se repitieron acciones de amedrentamiento en otros centros de abastos de la ciudad[149]. En las fiestas patrias de ese año las calles de la ciudad aparecieron desiertas, señal del gran temor que se había difundido[150].

En este contexto de gran violencia urbana las autoridades posiblemente consideraron que era necesario disminuir los conflictos con los ambulantes.

[146] *Expreso*, 15-5-1992, «Camión bomba estalló a espaldas de Palacio».

[147] *Expreso*, 21-7-1992, «Cinco muertos en atentado contra el ILD».

[148] *Expreso*, 15-2-1992, «Fue casi normal la actividad en el centro de la ciudad» y 3-4-1992, «Fracasó 'paro armado' en los mercados de La Victoria».

[149] *La República*, 22-7-1992, «Asesinan policía y hieren a otro en ataque en La Parada» y «Paro convocado por centrales solo fue acatado por gremios en conflicto».

[150] *Expreso*, 29-7-1992, «Calles desiertas en pleno 28», y 30-7-1992, «Calles de Lima de nuevo vacías» y «Mercados semicerrados con poco público y escasa venta».

Además, los comerciantes informales fueron víctimas de esta ola subversiva y, en algunas oportunidades, también fueron sindicados como responsables. De acuerdo con Guillermo Nolasco, sí existían ambulantes radicalizados en el centro de Lima, algunos de ellos se incorporaron a las filas de la subversión, pero, de acuerdo con su opinión, eran pocos y de escasa influencia en el resto de los comerciantes[151]. El gobierno, luego del autogolpe del 5 de abril de 1992, aplicó una política represiva más intensa; el presidente Fujimori declaró que los sindicatos serían 'limpiados' de senderistas, insinuando que todos los gremios estaban infiltrados por subversivos[152]. Meses después, la policía intervino un comerciante de artículos de ferretería bajo la acusación de vender materiales para explosivos; junto con él, fue detenido un dirigente de la asociación de comerciantes del lugar y otros vendedores más[153]. Otro vendedor de ferreterías en el Rímac fue detenido también bajo la acusación de vender insumos para explosivos y la posesión de armas de fuego[154]. Esta «senderización» de los ambulantes se hizo más notoria a lo largo del año 1992; por ejemplo, ante su oposición a un nuevo traslado desde las calles de Lima, el regidor Carlos Letts denunció que los vendedores se encontraban infiltrados por los senderistas, quienes los azuzaban a oponerse a las medidas del municipio[155].

Por otro lado, también los ambulantes fueron víctimas de las fuerzas subversivas[156]. Incluso la policía y el Ejército tenían un plan especial para cuidar la tranquilidad pública en los mercados durante los días en que Sendero Luminoso decretaba los paros armados[157]. A principios de marzo del año 1992 la policía redobló la vigilancia en los mercados, debido a los constantes repartos de volantes subversivos y pintas en los muros de los locales. Incluso se llegaron a colocar cargas de dinamita y se solicitaba cupo a los comerciantes[158]. De esta manera también los trabajadores fueron víctimas de la violencia terrorista. Una vendedora fue asesinada delante de su hijo en Santa Anita y dinamitada por un comando del PCP-SL, su cuerpo contenía el cartel: «Así mueren los asesinos de los mejores hijos del pueblo»; la policía no pudo aclarar si la mujer, de nombre Nelly Torres y de 40 años de edad,

---

[151] Entrevista personal, 2-2-2016, campus PUCP, San Miguel.

[152] *La República*, 8-7-1992, «"Vamos a limpiar los sindicatos de infiltración terrorista"».

[153] *Expreso*, 4-9-1992, «Vendedor ambulante arrestado en posesión de material explosivo».

[154] *Expreso*, 4-9-1992, «Subversivo fingía ser ambulante».

[155] *Expreso*, 28-4-1992, «Infiltrados terroristas azuzan a los ambulantes e impiden reordenamiento». Por su parte, los ambulantes denunciaron al regidor por corrupción afirmando que los quioscos que querían venderles en realidad eran una donación del gobierno español (Granados, 1997, p. 115).

[156] Se mencionan varios casos de ambulantes heridos o fallecidos por causa de atentados (Desco, 1989).

[157] *Expreso*, 15-2-1992, «Los mercados amanecieron fuertemente custodiados».

[158] *Expreso*, 3-4-1992, «Fracasó 'paro armado' en mercados de La Victoria».

había delatado a senderistas o había escapado de sus filas[159]. En abril, militantes senderistas asesinaron al dirigente de comerciantes de El Agustino, Susano Lagos Melgar, a quien anteriormente habían amenazado de muerte[160]. En el mes de setiembre nuevamente subversivos asesinaron a Luis Miguel Arenas Mendoza, ambulante que se ganaba la vida en El Agustino, acusándolo de ser un soplón de la policía. El infortunado vendedor sufría de poliomielitis y había llegado a zona hacía unos veinte días, se dedicaba a vender caramelos en las calles del distrito donde fue asesinado[161].

En cuanto a la relación de las autoridades con los sectores populares, los alcaldes, especialmente desde Belmont, encontraron en la construcción de grandes obras públicas una manera eficiente de lograr el apoyo de la población. De la misma manera, el presidente Fujimori, por medio del Ministerio de la Presidencia, realizaba el mismo plan a nivel nacional, pero sus esfuerzos en la ciudad chocaban y se superponían con el municipio limeño. Como se señaló anteriormente, a pesar de sus intentos, el partido de gobierno nunca pudo ganar la alcaldía limeña. Antes de ser elegido presidente, Fujimori se acercó a las organizaciones de los ambulantes. De acuerdo con los testimonios recopilados por Miriam Granados, los representantes de los gremios de Lima y Callao invitaron a Fujimori y Mario Vargas Llosa a debatir, la inasistencia de este último definió las inclinaciones de los comerciantes por el primero de los nombrados. Además, el futuro presidente les ofreció «un banco para los ambulantes, exceptuarlos del pago de impuestos y legalizar la actividad mediante una ley y su reconocimiento y valorización del rol socioeconómico del sector» (Granados, 1997, p. 68)[162]. Estas promesas más el enfrentamiento político entre la presidencia y la alcaldía, fueron el contexto de la batalla legal que se produjo posteriormente. El gobierno central promulgó el 25 de enero de 1991 un decreto supremo, 022-91-TR, firmado por el presidente Fujimori y el ministro de Trabajo, Carlos Torres y Torres Lara, el cual claramente interfería con las atribuciones del municipio en el tema del control del comercio callejero:

[159] *Expreso*, 20-1-1992, «Destrozan con dinamita a vendedora ambulante en Santa Anita». El mercado de esta zona fue objeto de encarnizadas luchas por la posesión del terreno (*La República*, 6-6-1992, «40 heridos en batalla campal entre comerciantes y ambulantes»).

[160] *La República*, 3-4-1992, «Terroristas matan a dirigente de asociación de ambulantes».

[161] *Expreso*, 25-9-1992, «El colmo: asesinan a vendedor de caramelos»; *La República*, 12-5-1983, «Bandas armadas con metralletas asaltan banco y cooperativa» (un vendedor resultó herido); *Expreso*, 3-2-1992, «Asaltante sidoso hirió de bala a ambulante en Matute» y 2-11-1992, «Ex detective drogadicto asesinó ambulante».

[162] También véase Carlos Iván Degregori y Romeo Grompone (1991).

El presidente de la República
Considerando:

Que, el comercio ambulatorio es una realidad social generada por la crisis económica que agobia al país desde hace varios años, como respuesta a [sic] la población frente al desempleo y subempleo;

Que, el comercio ambulatorio encierra una fuerza social que es necesaria encausarla adecuadamente;

Que, el inciso 13 del Artículo 2 de la Constitución garantiza el derecho a elegir y ejercer libremente el trabajo, con sumisión a la Ley;

Que, el Artículo 125 de la Constitución prescribe que la propiedad es inviolable y que el Estado la garantiza, no pudiendo privársela de ella a nadie, sino por causa de necesidad y utilidad pública o de interés social, declarada conforme a la ley, y previo pago en dinero por indemnización justipreciada, de conformidad con los incisos 11, 20 y 26 del Artículo 211 de la Constitución Política del Perú;

DECRETA
Artículo1.- Reconocer al trabajador ambulante la calidad jurídica de trabajador autónomo ambulatorio.

Artículo 2.- En tanto se dicte la Ley de Comercio Ambulatorio que establezca las acciones por incumplimiento de obligaciones de los trabajadores autónomos ambulatorios, suspéndanse el decomiso de los bienes materia del comercio ambulatorio.

Artículo 3.- Los trabajadores autónomos ambulatorios que constituyan cooperativas de ahorro y crédito podrán acogerse al beneficio establecido en el Artículo 69, inciso 2, de la Ley de Cooperativas para efecto de recibir créditos, para el efecto de orientar el trabajo autónomo con respeto de la higiene, la seguridad y el orden público[163].

Con este decreto el ambulante quedó protegido del decomiso de sus mercaderías, principal peligro al que se enfrentaban, y el gobierno dejaba al municipio con un poder recortado. Frente al éxito que suponía para el municipio el nombramiento de Lima como patrimonio mundial y la posibilidad de que el alcalde Belmont remontase en popularidad al presidente, este reaccionó rápidamente al proteger al comercio ambulatorio. Los alcaldes distritales de Lima y el Patronato resistieron la norma, incluso contaron con el apoyo de la Fedeval, quienes consideraban que la ley no solucionaba el fondo del problema, resistencia que motivó su derogación (Morán, 2013, p. 77). Como señala Morán, es posible que la oposición a esta norma

[163] Decreto supremo 005-91-TR, 26-1991, http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/SNIL/normas/1991-01-26_005-91-TR_292.pdf, fecha de consulta: 17/2/2016.

se haya originado en el peligro que significaba para la recuperación de la memoria criolla de la ciudad al favorecer la ocupación popular del centro.

La prueba de que el interés del ejecutivo no era la persona del comerciante y su encomiable labor, se evidencia en las intervenciones de la Sunat en el caso del campo ferial Polvos Azules. Desde enero de 1992 el gobierno aplicó un impuesto de 5% a las ventas en la vía pública, medida que fue rechazada por los comerciantes de Polvos Azules y Polvos Rosados; por ese motivo la Sunat, con apoyo del Ejército, cerró decenas de puestos en el primer campo ferial[164]. En este caso, el regidor de la municipalidad Carlos Letts consideró elevado el monto que se les cobraba a los comerciantes y sugirió que la tasa sea del 1%, tal como lo solicitaban los dirigentes del campo[165]. A pesar de todo, muchos comerciantes de Polvos Azules, el único espacio fiscalizado con dureza, pagaron el tributo con el monto señalado por el gobierno. En sus declaraciones indicaron que con este impuesto dejaron de ser competitivos, habían elevado sus precios y sus ventas habían caído drásticamente[166]. De acuerdo con sus cálculos las ventas habían caído en 70% debido a que los compradores preferían ir con otros ambulantes del Parque Universitario, campo ferial Grau y Mercado Central, los cuales no pagaban los impuestos[167]. Semanas después la Sunat inició el «operativo Arcángel», destinado a fiscalizar a los vendedores de las plazas Unión y Dos de Mayo, controlar la venta con factura y el pago del IGV[168].

La lucha contra el contrabando y la evasión tributaria se extendió hacia otras áreas de la ciudad. Los talleres de Gamarra, en el distrito de La Victoria, y los terminales terrestres de autobuses fueron intervenidos en busca de infractores. Fueron allanados los terminales de transporte que tenían conexión con la región Tacna, en el interior de estos locales se comerciaba gran cantidad de contrabando proveniente de las fronteras. Los comerciantes se resistieron fuertemente, produciéndose una batalla campal entre efectivos del Ejército, fuerzas especiales y los vendedores de las primeras cuadras de la avenida Grau. Cientos de ambulantes fueron afectados por las incautaciones de productos sin la debida documentación[169]. El emporio comercial de Gamarra también fue visitado por funcionarios de la Sunat, empadronaron a más de 7000 comerciantes. Más de 1800 fueron notificados

[164] *Expreso*, 5-1-1992, «Clausuran 13 puestos por diez días en Polvos Azules»; 19-1-1992, «Cerrarían cien puestos en Polvos Azules», y 25-1-1992, «Clausuran 51 puestos en Polvos Azules».

[165] *Expreso*, 12-1-1992, «Considera elevado impuesto de Sunat en Polvos Azules».

[166] *Expreso*, 12-1-1992, «Más de dos mil de Polvos Azules pagaron sus impuestos al [sic] Sunat».

[167] *Expreso*, 27-1-1992, «Los ambulantes acusan al IGV por bajas ventas».

[168] *Expreso*, 14-3-1992, «Sunat inició operación 'Arcángel' en plazas Unión y Dos de Mayo».

[169] *La República*, 15-8-1992, «200 soldados allanan fortines del contrabando».

por diversas faltas y un grupo de ellos sufrió el decomiso de su mercadería por no contar con la documentación debida[170].

Semanas después los operativos se extendieron a las zonas de venta de productos ferreteros, en las calles Nicolás de Piérola, Azángaro, Roosevelt, Pachitea y Carabaya. Alrededor de 500 fedatarios de la Sunat comenzaron a recabar información, como resultado tuvieron el registro de más de 750 negocios informales y muchos otros sin la debida regularización. Lo importante de esta nota es que el superintendente Sandro Fuentes reconoció que los informales eran parte de «una bien montada cadena de distribución de empresas formales que venden sus productos en el sistema formal […] queremos saber en qué momento este tipo de empresas se vuelven informales»[171]. Como se puede ver, el comerciante ambulante era parte de una cadena de intermediaciones.

Esta fiscalización continuó el resto del año, ampliaron su radio de acción a otras calles del centro de Lima e hicieron operativos contra la venta de medicinas adulteradas y fuegos artificiales prohibidos[172]. Esto se puede interpretar como un giro respecto al tratamiento del comercio informal, de cuestionar su informalidad por la ocupación de las calles, la falta de higiene y el maltrato al ornato de la ciudad, a su condición de ilegalidad por la evasión de impuestos y la venta de productos adulterados, vencidos o dañinos para la salud pública, de este modo se convertía el comerciante informal en un delincuente. Por ejemplo, los diarios de la época denunciaban que, en Polvos Azules, cuestionado por la evasión tributaria de varios de sus comerciantes, también se podía encontrar gran cantidad de medicinas en venta, incluidas muchas que escaseaban en las farmacias. Los medicamentos se vendían en varios puntos de la ciudad, aparte del campo ferial, se podían obtener fácilmente en las calles aledañas al Ministerio de Economía. En esos lugares de venta se podían comprar medicinas sin receta médica, antibióticos, analgésicos, sueros, jarabes, etcétera; una buena parte de ellos vencidos, de procedencia dudosa, de contrabando o en mal estado[173]. Los cálculos de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Perú señalaban que por lo menos el 15% de las medicinas que circulaban provenían del contrabando o de laboratorios clandestinos que falsificaban los productos[174]. Ciertamente los operativos policiales mostraron que una parte de las medicinas estaban adulteradas, mezcladas con agua y otros elementos,

[170] *Expreso*, 19-3-1992, «Sunat decomisó mercadería valorizada en cien mil dólares».

[171] *Expreso*, 13-12-1992, «Sunat interviene a informales en pleno centro de Lima».

[172] *Expreso*, véase la fotografía de la primera plana del 4-12-1992 y 14-12-1992, «Pese a prohibición ambulantes venden rascapiés al por mayor».

[173] *Extra*, 19-4-1989, «Boticas de la muerte en Polvos Azules».

[174] *Expreso*, 6-2-1992, «Ambulantes falsifican y adulteran medicamentos».

por ejemplo, contaminadas con kerosene[175]. En otros casos se demostró que los antibióticos que eran etiquetados como apropiados para pacientes alérgicos a la penicilina, contaban con dosis elevadas de ese compuesto, convirtiéndolos en productos mortales[176].

■ MIGUEL ANGEL



Figura 8. Caricatura acerca de la venta de medicinas adulteradas. *Expreso*, 26 de noviembre de 1992.

El conflicto por el pago de impuestos y la existencia de productos ilegales en Polvos Azules tuvo un final inesperado el 1° de enero de 1993. A las 6:15 a.m. un gigantesco incendio —de causas no esclarecidas hasta el día de hoy[177]— arrasó cerca de 1700 puestos (de los 2200) y dejó en la miseria a los ambulantes y sus familias. Además del incendio, una turba de personas aprovechó la desgracia para saquear las pertenencias de los infortunados comerciantes[178]. Si bien los incendios eran una amenaza real en el centro de la ciudad[179], el fuego en el campo ferial

[175] *Expreso*, 6-10-1992, «Incautan 'medicamentos de la muerte' en mercadillo 'Mesa redonda'».

[176] *Expreso*, 24-11-1992, «Mercado está lleno de medicinas adulteradas que atentan contra la salud de la población».

[177] De acuerdo con Guillermo Nolasco, hay cierto consenso en considerar que la precariedad de las construcciones y las instalaciones eléctricas fueron la causa del estallido del incendio (entrevista personal, 2-2-2016, campus PUCP, San Miguel). Las noticias de la época y los ambulantes señalaron que el hecho había sido producto de un atentado, con la intención de lograr su desalojo, pero nunca se llegó a establecer el origen de la tragedia.

[178] *La República*, 2-1-1993, «Incendio reduce a cenizas más de 1700 puestos de Polvos Azules».

[179] El 17 de enero de 1992 se incendiaron varias casonas en Mesa redonda, lugar de la gran tragedia del 29 de diciembre de 2001. *La República*, 18-1-1992, «Fuego destruye otras viejas casonas cerca a 'Mesa Redonda'».

mostró crudamente los peligros a los cuales había llegado el desorden urbano y la informalidad en los espacios de venta.

La situación tensa respecto a la relación de los comerciantes con las autoridades se notó claramente cuando los afectados intentaron explicar su drama. Algunos señalaron al gobierno como responsable, otros a la Sunat, «nos han estado acosando desde hace tiempo»; otros sostuvieron que eran los terroristas, incluso algunos sindicaron a exdirigentes que habían sido acusados de malversación de fondos de la asociación[180]. A pesar de esta desgracia, expresaron la voluntad de comenzar nuevamente su negocio desde la nada, algunos habían perdido todo su capital, y solicitaban que se les exonere del impuesto en ese año para permitir su recuperación[181].

En la elección municipal para el sillón limeño convocada para el 29 de enero de 1993, que daría como ganador nuevamente a Belmont, los candidatos ofrecieron medidas similares a las aplicadas anteriormente para solucionar el problema del comercio ambulatorio. El candidato del partido de gobierno, de la alianza Cambio 90-Nueva Mayoría, Pablo Gutiérrez, quien venía precedido de una exitosa gestión municipal en el distrito de Chorrillos, consideraba que el comercio ambulatorio era una consecuencia social de la crisis económica de los últimos años y su desaparición ocurriría con la mejora económica del país, mientras tanto, la Municipalidad apoyaría la regulación y el control del comercio mediante complejos comerciales destinados a reubicar a los ambulantes empadronados[182]. Raúl Diez Canseco, por AP, culpaba a la falta de empleo de la expansión del comercio; por la misma razón, consideraba que la represión no era la solución, sino corregir varios factores que contribuían con el problema, por ejemplo, la proliferación de transporte público en Lima cuadrada y la abundancia de paraderos. El candidato proponía trasladar las paradas fuera del centro y reubicar a los ambulantes en esos lugares[183]. Michel Azcueta, destacado exalcalde de Villa El Salvador, exregidor de IU y que candidateaba por la Plataforma Democrática, proponía regular el horario de las ventas ambulantes, con el compromiso de limpiar las calles luego de su uso, no se permitiría la venta de algunos productos, como las medicinas, y anunció estar de acuerdo con las propuestas del Patronato de Lima[184]. Luis Alvarado Contreras, por el APRA, también

---

[180] *La República*, 2-1-1993, «Incendio reduce a cenizas más de 1700 puestos de Polvos Azules».

[181] *La República*, 2-1-1993, «¡Volveremos a empezar de nuevo!»; 3-1-1993 «Damnificados reconstruirán campo ferial» y 4-1-1993, «Comerciantes damnificados de Polvos Azules no quieren dejar campo ferial». Para un panorama contemporáneo del campo ferial, véase Michelle Llona y Sandra Nakamura (2010).

[182] *El Comercio*, 19-1-1993, «Hablan los candidatos metropolitanos».

[183] *El Comercio*, 19-1-1993, «Hablan los candidatos metropolitanos».

[184] *El Comercio*, 29-12-1992, «Hablan los candidatos metropolitanos».

estaba en contra de la represión y proponía el uso de los recursos municipales para la construcción de mercados, galerías y ferias[185]. Carlos Neuhaus Tudela, por el PPC, también responsabilizaba del problema a las condiciones económicas, desde el municipio ofrecía promover la formalización de los ambulantes y su reubicación en centros comerciales populares[186]. Aída García Naranjo, por Partido Unificado Mariateguista, coincidía con el diagnóstico del origen del problema, proponía abandonar la represión, reanudar el empadronamiento de comerciantes y fijar una adecuada tributación, crear una comisión mixta municipio-ambulantes y retomar el antiguo FOMA. Además, proponía la construcción de cinco grandes centros comerciales en la periferia de Lima, con el objeto de facilitar el traslado de los ambulantes[187]. César Barrera Bazán, por la IU, propuso reorganizar el comercio ambulatorio en diálogo con comerciantes y vecinos, y establecer los lugares más apropiados para los campos feriales, «ligados estrechamente a los paraderos finales del transporte reordenado»[188]. Las propuestas de los candidatos coincidían con la necesidad de reubicar a los ambulantes y respetar la Lima cuadrada; además, prometían dialogar con los comerciantes para así evitar la violencia. Dos de ellos, los candidatos de AP y de IU, coincidían también con la necesidad de trasladar el transporte público de las calles céntricas para atraer a los ambulantes hacia los nuevos paraderos. Luis Cáceres Velásquez, exalcalde de Arequipa (1987-1992) y candidato por Lima al 2000, expresó en punto de vista un poco diferente. En una entrevista ofrecida al diario *Correo*, manifestó que sí apoyaría a los 'verdaderos' ambulantes por medio de un nuevo campo ferial, pero que «a los conchudos y sinvergüenzas que no respetan a nadie se me van. Por ejemplo, esos calderos de gallina que levantan carpas, ponen televisores e incluso llevan hasta sus camas. Esos son unos abusadores»[189].

Los conflictos con el comercio ambulatorio se reanudaron luego que en 1994 se creó el Programa Municipal para la Recuperación del centro histórico de Lima (Prolima), el cual aprobó en agosto el reglamento elaborado en 1991, publicado

[185] *El Comercio*, 29-12-1992, «Hablan los candidatos metropolitanos».

[186] *El Comercio*, 24-1-1993, «Hablan los candidatos metropolitanos».

[187] *El Comercio*, 10-1-1993, «Hablan los candidatos metropolitanos».

[188] *El Comercio*, 3-1-1993, «Hablan los candidatos metropolitanos».

[189] *Expreso*, El Suplemento, 17-1-1993, «Entrevista a Luis Cáceres Velásquez». En Arequipa, según Julio Fuentes, Cáceres hizo uso de métodos cuestionables para controlar al comercio ambulatorio, utilizó agua con kerosene, exigió la salida de los migrantes y cavó zanjas en los lugares de venta, lo que impidió su ocupación (1994, p. 11). Incluso el MRTA realizó un atentado en contra de la oficina de comercio ambulatorio del concejo municipal de Arequipa, «en respuesta a la constante hostilización del alcalde Luis Cáceres Velásquez, y en anticipo de acciones de mayor envergadura, por los atropellos de la GC y Policía Municipal contra los trabajadores ambulantes» (Desco, 1989, p. 217).

como Reglamento de la Administración del centro histórico de Lima, ordenanza 062, del 18 de agosto de 1994. Esta normativa se fijó como meta reducir la presión generada por el tráfico automotor y el comercio en las calles, consideraba que este último era incompatible con la condición de centro histórico: «Artículo 124. Se liberarán las vías céntricas mediante la erradicación progresiva del comercio callejero». Solo se permitirían a aquellos vendedores que «refuercen la función cultural y turística que tiene el centro histórico, tales como vendedores de monedas antiguas, estampillas, artículos religiosos, artesanía artística, libros, etcétera» (artículo 139). Como se puede observar, la mayoría de las actividades de los ambulantes quedaban fuera de esta excepción, salvo los fotógrafos ambulantes, quienes podían solicitar autorización en lugares y horarios especiales (artículo 158). Nuevamente se consideró como áreas rígidas «el perímetro de hospitales, instituciones financieras, centros educativos y edificios públicos, museos e inmuebles declarados monumentos históricos» (artículo 140). Sobre esta base las futuras alcaldías se encargarían de remozar el centro de Lima[190]. Esta disposición continúa vigente y se utiliza como base legal para las reglamentaciones del comercio ambulatorio en varios distritos de la capital[191].

En 1995 no se había avanzado mucho respecto al ordenamiento del comercio ambulatorio. El estudio de Chávez y De la Flor señala que el centro era ocupado por un poco más de 17 000 comerciantes con puesto fijo y unos 3000 itinerantes, repartidos en 207 cuadras. La mayor parte de ellos se encontraba en el campo ferial Las Malvinas (3000 comerciantes), Polvos Azules (2500), avenida Grau (850), Amazonas (600) y «Virgen de Lourdes», cerca de la avenida Nicolás de Piérola (250). Las calles más concurridas eran las inmediaciones del Mercado Central, con 4500 ambulantes; Mesa Redonda con 2500; jirón Paruro, 1500; plaza Unión, 650; avenida Abancay, 850; avenida La Colmena, 300; avenida Tacna, 200 y Jirón de la Unión, 200 (Chávez & De la Flor, 1998, p. 135). Aparentemente su situación había mejorado respecto a las décadas anteriores, 80% contaba con casa propia, estaban asociados y sus ingresos se habían incrementado en los últimos diez años (Chávez & De la Flor, 1997, p. 132).

Un ejemplo de estas marchas y contramarchas respecto al comercio ambulatorio se muestra en el caso de la calle La Colmena. Hacia mediados del año 1995, los ambulantes fueron erradicados de la zona, pero en junio retornaron uniformados

[190] Ordenanza 062, 18-8-1994, http://www.munlima.gob.pe/images/descargas/licencias-de-edificaciones/legislacion/ORD-062-Reg-de-la-administ-del-CHL.pdf, fecha de consulta: 14/2/2016.

[191] *Andina.pe*, «Comercio informal respetará intangibilidad de zonas rígidas del Centro Histórico de Lima», 11-2-2011, http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-comercio-informal-respetara-intangibilidad-zonas-rigidas-del-centro-historico-lima-342729.aspx, fecha de consulta: 12/2/2016.

y con puestos rodantes, debidamente empadronados y con carnés. Además, varias de las cuadras fueron ocupadas por nuevos ambulantes, esta vez dedicados a vender diversos productos para ejercicios físicos[192]. Los dueños de los comercios formales protestaron al cerrar sus establecimientos, denunciaron que esas calles parecían «Calcuta, y peor con la presencia de prostitutas, drogadictos y asaltantes»[193], afirmaron que de esa manera se espantaba a los compradores locales y a los turistas. Sin embargo, los ambulantes señalaron que tenían un compromiso firmado con Prolima y que podían ocupar las calles al cumplir con las condiciones señaladas. La Conaco denunció que de esta manera se incumplían las disposiciones que exigían la erradicación de los ambulantes del centro de Lima, «lo que convertirá el Damero de Pizarro en un gran campo ferial». Por otro lado, las medidas tomadas por Municipalidad, como restringir en las calles céntricas el tránsito de los autos y cerrarles el paso en Jirón de la Unión[194], también afectaron a los comerciantes formales. Junto con la presión de la Sunat, estos hechos fueron denunciados como los causantes del cierre de decenas de negocios, los comerciantes afirmaron que por causa de las excesivas cargas tributarias se verían obligados a ser informales en las calles y aprovechar que estos vendedores no pagaban ningún impuesto[195].

Días después, los directivos de Prolima señalaron que la medida era solo temporal y que luego del empadronamiento serían reubicados en inmuebles. De acuerdo con la declaración de la arquitecta Flor de María Valladolid, en efecto se había firmado un acuerdo entre los vendedores informales de La Colmena y los propietarios formales y vecinos de la zona, con el objeto de proceder a una reubicación ordenada, con Prolima como garante. Supuestamente quienes se habían retractado eran los comerciantes formales y los vecinos, lo que dificultó la labor de reubicación de los ambulantes[196]. Así, en julio se reiteró la prohibición de la venta ambulatoria en el centro de la ciudad y se repitieron todas las normas previas[197]. Los conflictos se extendieron a otras áreas de la ciudad, por ejemplo, en Lince se desalojaron a cientos de ambulantes en las inmediaciones del mercado Lobatón por orden de la alcaldesa Esther Álvarez. Fuerzas policiales y militares destruyeron con equipo pesado decenas de puestos de metal, a pesar de la enconada

[192] *El Mundo*, 21-1-1995, «Músculos ambulantes».

[193] *La República*, 13-6-1995, «Ambulantes retornan hoy a La Colmena».

[194] Se estableció que los autos solo podían ingresar si portaban un distintivo permanente, *La República*, 21-7-1995, «Limpiarán de ambulantes el centro histórico de Lima solo por 4 días».

[195] *La República*, 20-9-1995, «20 mil comerciantes formales cerrarán sus tiendas y venderán en la vía pública». En el Jirón de la Unión proliferaron los 'gancheros', vendedores que vendían ropa en percheros rodantes y afectaban a los comerciantes formales.

[196] *La República*, 17-6-1995, «Ambulante se irán definitivamente de La Colmena».

[197] *Expreso*, 10-7-1992, «Prohíben comercio ambulatorio en centro capitalino».

resistencia de los vendedores, quienes fueron fuertemente reprimidos. La alcaldesa sostenía que amparados en los quioscos por las noches proliferaban delincuentes, drogadictos y prostitutas. Sin embargo, los vendedores rechazaban las acusaciones, denunciaron los hechos como un atropello a su derecho al trabajo[198]. En setiembre de ese mismo año se anunció la erradicación de los ambulantes y maleteros del aeropuerto Jorge Chávez[199].

Como en otros tiempos, el Municipio se preocupó por mantener el orden durante las Fiestas Patrias, erradicó de forma temporal a los vendedores del centro de Lima por cuatro días, de acuerdo con la arquitecta Valladolid, «con la finalidad de que esta parte de la ciudad pueda mostrar esa imagen de prestigio que debe poseer una zona que ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad»[200]. El 27 de julio de 1995 el centro histórico fue aislado del resto de la ciudad, se prohibió el ingreso de vehículos y vendedores, y se restringió el tránsito peatonal[201]. Por otro lado, algunos ambulantes consideraron que esta decisión no había sido motivada por una preocupación por la conservación del centro de Lima, sino que señalaban a los comerciantes formales como los principales interesados y resaltaron que los culpaban injustamente de los problemas de seguridad del centro. Sin embargo, otros no pusieron peros a la recuperación del centro, ofrecieron colaborar con las autoridades y esperaban ser parte de las negociaciones con los miembros del Patronato y la alcaldía (Granados, 1997, pp. 120-121).

En agosto, una vez más, las autoridades intentaron reordenar los alrededores del Mercado Central, pero exigieron solo la desocupación de las pistas para permitir el paso de vehículos en el caso de emergencias. Estas medidas reforzaron el estatus ambiguo del comercio informal, debido a que para su cumplimiento se negoció con las asociaciones de vendedores, «debidamente registrados […] de esta manera se les expide mediante decreto municipal, su reconocimiento como comerciante ambulatorio y se adoptan las medidas de seguridad que se requieren»[202].

El 12 de noviembre de 1995 se enfrentaron por la alcaldía de Lima Alberto Andrade, por el partido Somos Perú y Jaime Yoshiyama, por el partido de gobierno Cambio 90-Nueva Mayoría. La victoria correspondió a Andrade, quien venía precedido de una exitosa gestión en el distrito de Miraflores. Su campaña por el sillón municipal enfatizó la idea de recuperar Lima, con el rescate de su tradición criolla representada en su centro histórico. De acuerdo con Wiley Ludeña, este proyecto

---

198 *La República*, 24-8-1992, «Violento desalojo a ambulantes que ocupaban calles de Lince».

199 *Expreso*, 6-9-1992, «Erradicarán ambulantes y maleteros del aeropuerto».

200 *La República*, 21-7-1995, «Limpiarán de ambulantes el centro histórico de Lima solo por 4 días».

201 *La República*, 27-7-1995, «Centro de Lima totalmente aislado».

202 *Expreso*, 13-8-1992, «Este fin de semana reordenarán a ambulantes del centro de Lima».

fue funcional al neoliberalismo de los años noventa, la elite neooligárquica estaba «urgida hoy de identidad histórica y que ya ha vuelto al centro a casarse con misa en la exclusiva capilla de la iglesia de San Pedro y fiesta en el rancio y oligárquico Club Nacional» (2009, p. 158).

Una vez que Andrade tomó el control de la ciudad, anunció un año de plazo para la descongestión del centro, para lo cual elaboró un plan de negociaciones y reubicaciones de los comerciantes. Una novedad es que la estabilidad de la economía, la afluencia de fondos del extranjero y la mejora de los ingresos de los ambulantes les permitió financiar la compra de terrenos y galerías. Las negociaciones entre los comerciantes y el alcalde fueron alentadoras, su principal exigencia era que el espacio desocupado no sea reutilizado por nuevos vendedores (Chávez & De la Flor, 1997, p. 152). Así se comenzó a delinear el último —por ahora— episodio del conflicto por las calles del centro entre las autoridades, los comerciantes y los habitantes de la ciudad.

Parte II
LA DÉCADA MALDITA

Capítulo 6
El apocalipsis a la vuelta de la esquina

Los debates acerca del significado de ser limeño se desarrollaron en medio de un proceso de decadencia urbana causado por poderosas fuerzas sociales, económicas y políticas. El objetivo de las siguientes secciones en mostrar la profundidad y variedad de la crisis en la ciudad, la cual remeció los cimientos de su identidad. Pocas veces en la historia de la capital convivieron por tantos años el miedo, la violencia, la crisis económica, la insalubridad y la pobreza, que generaron un contexto urbano tan peligroso como complejo.

Un futuro que cuestiona el pasado

¿Qué cambió en la ciudad entre los años 1980 y 2000? ¿Qué reflejan los medios de comunicación de estas transformaciones? ¿Cuál fue la reacción de las autoridades ante los cambios sociales, culturales y urbanos? Estas son algunas de las preguntas que esta parte del libro quiere resolver. Además, la intención de este apartado es señalar que el futuro que se preveía para Lima tuvo como consecuencia una relectura de su pasado, reelaborando los imaginarios urbanos y dio origen a diversas interpretaciones.

Mientras la ciudad se convertía en el escenario de un intenso conflicto por el control de las calles entre los ambulantes y las autoridades municipales, para bien o para mal, según quién opine, indudablemente la capital sufrió una transformación radical, tanto social como urbana, que generó nuevas miradas acerca de la ciudad. Así, los discursos acerca de la ciudad reflejaron esas transformaciones, expresando diferentes posturas en función de proyectos políticos o económicos. Como sostiene Wiley Ludeña (2009), es necesario analizar los discursos históricos acerca del centro de Lima porque ellos son una parte fundamental de la legitimidad de los proyectos políticos,

> es la historia permanente de un discurso interesado en inventar un 'centro' que ordene y pueda dar sentido a las aspiraciones de legitimización social y política de los diversos sectores sociales del país. Por ello, hacer república ha sido en el Perú y Lima sinónimo de buscar y construir de manera precaria un centro en la exacta dimensión de una tradición autoritaria (civil y militar), siempre insegura en virtud de su origen y legitimidad (p. 569).

Si por un lado los imaginarios se transforman a partir de estas narrativas que expresan identidades, por otro lado, Vega Centeno (2013) hace notar que esa identidad urbana no se genera solo desde un discurso escrito, sino también desde una narrativa urbana que se desarrolla a partir del espacio público, los cuales nos permiten visibilizar «nuestra posibilidad de ser transeúntes, de tener la posibilidad de ir y venir libremente por la ciudad» (p. 125). Desde esta perspectiva el discurso acerca de las calles y plazas, de la historia, presente y futuro de Lima, es de gran importancia en la definición de las identidades sociales y los proyectos políticos. De este modo tenemos dos fuentes que reflejan los cambios, los discursos escritos y las prácticas de los habitantes de la ciudad. Una tercera vertiente es la gestión de las autoridades edilicias, que tanto reflejan como tienen capacidad de transformar estas identidades.

La ciudad siempre tuvo diversos problemas en todas sus épocas, pero, como hemos visto en la primera parte, durante la década de 1980 se intensificaron los debates y acciones acerca de las funciones y significado del centro de Lima. Por ejemplo, a fines de 1980 las autoridades edilicias pensaban que la ciudad se encontraba en una gran crisis general y consideraban que los problemas eran muy variados (acelerado crecimiento demográfico, servicios públicos deficientes, aumento de la contaminación ambiental, etcétera)[1]. De este modo se desarrolló un debate acerca de las consecuencias del aumento de ambulantes y su impacto urbano, el cual iba más allá de la preocupación por el deterioro urbano y problemas de salud pública. El problema afectó los imaginarios urbanos, cuestionó la historia y el futuro de la ciudad[2].

En este debate se pueden observar dos tendencias en los medios de comunicación, que reflejan a su vez dos modos de concebir a Lima y su futuro. En ambos casos se trata de propuestas que se encuentran fragmentadas en artículos

---

1 El impacto cultural de este crecimiento se evidencia en la aparición de una narrativa que incorpora la imagen del decadente espacio urbano y sus personajes en las novelas. Véase David Wood (2005).

2 Como dice Danilo Martuccelli, «Lima se quedó sin rostro» (2015, p. 102). Es frecuente que los medios de comunicación reproduzcan un discurso que hace culpables a los ambulantes y a las actividades informales del desorden, falta de higiene e inseguridad de la ciudad, «lo que trae como consecuencia que los principales grupos excluidos marginados y estigmatizados de la ciudad estén constituidos, sobre todo, por los indigentes y los vendedores y vendedoras ambulantes» (Chinchilla & Alvarado, 2012, p. 9).

periodísticos, algunos de ellos anónimos, pero que pueden ser reagrupados de la siguiente manera. Por un lado, una propuesta emparentada con la «arcadia colonial», cuestionada desde la década de 1960 por Sebastián Salazar Bondy, que consiste en la exigencia de que las autoridades hagan lo posible para que retorne la antigua Lima, la urbe de tradición colonial previa a las grandes migraciones que la transformaron y alteraron su esencia. Esta tendencia tuvo paradójicamente su correlato andino, como se puede observar en canciones de esa década, interpretadas por Luis Abanto Morales («Cholo soy», «El provinciano»), en las que se presenta la pérdida que supone la migración y la ruptura con lo andino. Ambas canciones encajan dentro de la preocupación de las elites criollas por recuperar el pasado colonial de la ciudad, su énfasis subraya el carácter ajeno cultural y étnico del migrante, quien es presentado como un habitante extraño y de reciente llegada a la capital. En el imaginario de las elites criollas, Lima colonial era una ciudad sin indios, habitada por descendientes de españoles y africano; por eso a la arcadia colonial se le opone otra idealización, la de un pasado andino nostálgico que se pierde irremediablemente en la capital (Ccopa, 2009).

La propuesta que en la década de 1960 reivindicó el pasado colonial de la ciudad, identificado como una arcadia —edad de oro mítica—, tuvo algunas modificaciones a principios de la década de 1980. En esos años se incluyó la imagen de la ciudad dominada por la oligarquía, la que surgió bajo los gobiernos del Partido Civil y Augusto B. Leguía. Esta propuesta, si bien tiene evidentes puntos de contacto con la arcadia colonial de la década de 1960, se distingue de ella en la manera en que evoca la historia de la ciudad y el lugar de los grupos sociales en ese imaginario. Durante los gobiernos oligárquicos y el Oncenio (1899-1930) se desarrolló un proyecto urbano destinado a delimitar claramente las jerarquías sociales, dividiendo la sociedad entre señores y trabajadores, los cuales podían compartir las calles, pero nunca ser confundidos por sus diferentes modales, apariencia y origen. Si bien es cierto que el proyecto de modernidad que llevó adelante Leguía fue más complejo e incorporó elementos de la cultura popular urbana y rural en el discurso oficial, no es menos evidente que varias de las obras que dejó en la ciudad fueron identificadas con la ciudad oligárquica. De este modo el jirón de la Unión y la Plaza San Martín se convirtieron en los emblemas de una capital en la que, en las primeras décadas del siglo XX, los señores y señoras de la ciudad podían pasear sin ser afectados por la presencia de pobres, mendigos, vendedores y otros personajes que, para fines del siglo XX, habían tomado el control de las calles. En esta visión los sectores populares no solo carecían de un lugar en el centro, también estaban ausentes en las representaciones simbólicas de la capital.

La segunda tendencia consiste en el esfuerzo por comprender ese nuevo rostro urbano de cara al futuro, sin añorar el pasado limeño colonial u oligárquico,

propuesta que intenta descifrar las nuevas prácticas de sus habitantes y busca en ellas las claves de la nueva ciudad y su modernidad, que ciertamente no es capitalista en su totalidad. Esta segunda propuesta fue emitida desde la posición de un observador empático y favorable a la crítica antioligárquica, pero distante culturalmente de la masa que quería comprender. Los antecedentes de esta interpretación también se encuentran en la década de 1950, cuando los antropólogos y otros estudiosos comenzaron a interesarse en la migración y sus efectos en la ciudad.

Un ejemplo de la primera perspectiva, mezcla de arcadia colonial y añoranza oligárquica, lo ofrece el diario *Correo* en el contexto del retorno a la democracia. El medio exigió una acción más decidida del alcalde Pierantoni para la recuperación de la ciudad. Su opinión señalaba la necesidad de

> convertir a Lima en lo que fue antes, es decir una 'Ciudad Jardín', no obstante que ahora su población sobrepasa ya los cuatro millones de habitantes. Lima, como capital del Perú, tiene que ser una ciudad con personalidad propia, sin perder *su tradicional señorío y prestancia* que la han hecho la admiración de propios y extraños[3].

Las imágenes que ilustran la nota son reveladoras de su intención: una fotografía del monumento a Francisco Pizarro y un grabado del Palacio Torre Tagle, acompañadas de evocaciones del pasado colonial de la ciudad. El texto enfatiza el contraste entre ese tiempo hispano virreinal y la contemporánea masa de provincianos que, de acuerdo con los ideales del diario, se reduciría «con los programas de incentivos para la descentralización dados por el gobierno, el éxodo de habitantes de provincias hacia la capital [disminuirá] en forma considerable»[4]. La tarea consistía en desarrollar modernamente la ciudad, pero sin perder su antiguo señorío y «su tradicional encanto y rasgo colonial»[5]. El arquitecto Alfonso Estremadoyro opinaba que la reglamentación urbana debería evitar la proliferación de colores en las fachadas de las casas del centro histórico, prohibiéndose los colores «verde loro y rojo […] por ir contra la estética y buen gusto», además de otras regulaciones que deberían establecerse «para rescatar el ambiente ornamental de nuestra vieja y virreinal ciudad, para que ojalá con el tiempo no lejano sea como una hermosa gema engastada en el corazón de América»[6].

Desde la segunda perspectiva, crítica de la ciudad oligárquica pero temerosa de lo que surgía, se intentó comprender los cambios urbanos a partir de una visión más

---

[3] *Correo*, 20-2-1980, «Lima al compás del desarrollo». El énfasis es mío.

[4] *Correo*, 20-2-1980, «Lima al compás del desarrollo».

[5] *Correo*, 20-2-1980, «Lima al compás del desarrollo».

[6] *El Comercio*, 10-11-1980, «En defensa de Lima».

social y cultural, que trató de descifrar el enigma que encerraban las nuevas prácticas que desorientaban a una parte de los habitantes de la capital. Esta mirada no añoraba el pasado colonial, pero tampoco aceptaba las transformaciones producto de las migraciones y los cambios urbanos: «Lima es una ciudad desconocida e intratable. Sus calles —a las que solo se puede ir de paseo— permanecen casi ilegibles para los millares de personas que diariamente transitan entre la luz, la siempre impertinente llovizna y la oscuridad que cae como una frazada sobre las ansias desembozadas»[7]. Esta ciudad es descrita como indescifrable y violenta, no solo por el constante problema de la delincuencia, sino porque existía una tensión entre el 'viejo' limeño, quisquilloso e hipersensible, «acalzonado y engreído», y los migrantes, en una ciudad que se veía expuesta a

> una fortísima migración provinciana [que] ha llegado para aposentarse en las tierras baldías de esta parte de la costa peruana, la peculiaridad limeña va siendo arrinconada entre unos personajes de Palma (que ahora se sentarían en mesas de fórmica) y el impulso de una energía que sobrevive entre los marcos estrechos de los microbuses que cruzan empecinadamente la ciudad. *Lima ya no tiene limeños, tiene, ahora, clubes de provincianos*. Unos provincianos que no necesitan, para nada, mirarse en la otra Lima: la que se hunde con sus mástiles del 'Sheraton' y el 'Bolívar', su torre del Olivar y alguna jarana que haga 'honor' a lo peruano[8].

Este punto de vista muestra la tensión entre el rechazo de la ciudad colonial-oligárquica, racionalmente considerada anquilosada y caduca, y los cambios inevitables que trajo la migración, al sincerar a la capital respecto al rostro nacional, pero cuyas transformaciones destruían una estética aceptada por intelectuales de derecha e izquierda: la evolución sería aceptada a regañadientes, pero no era la deseada. No había nada que resucitar, la vieja ciudad criolla estaba en trance de muerte, pero la urbe que emergía de sus ruinas era indescifrable, sin personalidad y extraña a los ojos del observador. Por ello esta interpretación se centraba no solo en la crisis económica o en las características de las personas que poblaban la ciudad, también se fijaba en los grandes cambios que trajo la migración como fenómeno colectivo y estructural de origen histórico, transformaciones consideradas inevitables. Así, se señala que Lima dejaría de ser una ciudad aristocrática para representar de mejor manera el 'verdadero' rostro del Perú, concebido como andino. De este modo se cuestionaba a un tipo de visión del centro que, como señala Ludeña (2009), fue desarrollada durante el periodo de la «República Aristocrática» al consolidarse la idea de 'centro' con la expansión de la ciudad en forma radial

7 *El Diario* de Marka, 4-7-1980, «Una ciudad al paso».

8 *El Diario* de Marka, 4-7-1980, «Una ciudad al paso». El énfasis es mío.

hacia la periferia. Vega Centeno (2013) señala que ese lugar aristocrático permitía la puesta en escena de las diferencias sociales, función que perdió con los cambios entre las décadas de 1970 y 1980.

El problema es que esa nueva imagen para algunos intelectuales era políticamente correcta, pero estéticamente detestable[9]. Por ejemplo, un artículo publicado en *El Diario* de Marka firmado por Juan Alberto Aylas, señala la existencia de una estridencia de los colores en las fachadas limeñas, los cuales contrastaban fuertemente con la monotonía del gris de su cielo. El texto señala que la invasión de los ambulantes en Lima también dejaba una marca específica en el color de las carretillas de los trabajadores: «celeste ingenuo, seguramente, pero también chillón, desvergonzado, vulgar». De acuerdo con el articulista, tal color tenía su principio en los orígenes geográficos de los vendedores que habían tomado las calles, trabajadores provenientes de la sierra del Perú que habían elegido el color por «una atávica nostalgia por ese cielo azul profundo de la sierra peruana, de la cual procede la inmensa mayoría de esos negociantes [...] una compulsiva avidez de serenidad y equilibrio, negados por la angustiosa tensión que la pobreza y promiscuidad ocasionan». El atavismo, una esencia primigenia de la cual no se puede escapar, se reflejaba en la decisión de pintar las carretillas de color celeste; asumía, además, que las condiciones cotidianas de vida de estos vendedores eran igualmente duras y melancólicas para todos. Este improvisado psicoanálisis, sin dialogar con las personas analizadas[10], continúa con la afirmación de que el mencionado color tenía una relación muy estrecha con el modo de vida que llevaban los ambulantes, sórdido y alienado, en una sofocante «libertad en que vegetan [...] y ese color celeste que adquieren en sus triciclos y kioskos, una presencia casi obsesiva, se convierte así en el símbolo efectivo de la degradación a que se ven sometidos por el orden social, corrupto e inhumano que se nos ha impuesto»[11]. Sin embargo, otra fuente señala que el enigmático color de las carretillas no fue necesariamente una opción de los ambulantes, muchos de ellos las alquilaban pintadas con esa tonalidad[12].

Esta visión se complementa con otra que intentó resolver el acertijo de por qué algunos sectores se sentían incómodos con la presencia en la ciudad de los migrantes, ambulantes, y los consecuentes problemas sociales y estéticos.

---

[9] *El Diario* de Marka, 4-7-1980, «Una ciudad al paso».

[10] En ningún momento el articulista se acercó a las personas para indagar por las razones de la presencia del mencionado color, su posición es la de un observador racional y distante.

[11] *El Diario* de Marka, 7-9-1980, «Lima, ciudad celeste».

[12] *El Diario* de Marka, 29-5-1980, «Ese coqueteo con la muerte». En 1986 los vendedores de ceviche utilizaban carretillas de color verde claro, las cuales alquilaban junto con las fuentes de la comida que vendían (Eloy Jáuregui, «Seviches y fritangas en serie», *La República*, 30-11-1986).

Raúl Quiñónez ofrece un ejemplo interesante de esta interpretación al intentar situar el problema en términos histórico-marxistas, herramienta conceptual muy utilizada en la época, con la que realiza un recuento del carácter aristocrático y burgués de la ciudad desde el siglo XIX hasta el presente. Su eje de análisis es el Jirón de la Unión, espacio conquistado por los vendedores, acción que aplaude, pues representa la apropiación «por parte de las clases populares del espacio urbano». Esta ocupación permitía echar por tierra anquilosadas formas de urbanismo, aunque su resultado era caótico: «superposición y caos en las actividades que se pueden encontrar allí: academias para estudiar, academias para ingresar, libros y evangelios por los suelos sin que nadie se escandalice y salchipapas de sartén. Verdadera negación de la arquitectura, el comercio ambulante satisface innumerables deseos y necesidades al aire libre»[13]. Esta apropiación estaba a la espera de su debido interlocutor político y de los intelectuales que permitirían decodificar sus prácticas; mientras que, el nuevo uso del espacio urbano lo convertía en un escenario de lucha: así, «el conocimiento del espacio será entonces parte del conocimiento científico de nuestras condiciones materiales de existencia»[14]. En el siguiente apartado veremos cómo se consolidan y evolucionan esas dos propuestas durante la crisis de la década de los años 1980.

Nostalgia, melancolía y futuro de la ciudad

En 1983, año especialmente crítico, se agudizó la percepción angustiante de esa nueva Lima. Los medios de comunicación insistieron en la problemática urbana y adoptaron claramente la imagen de *Lima la horrible* propuesta por Sebastián Salazar Bondy, resaltaban la incapacidad de la ciudad para proporcionar el bienestar adecuado para sus habitantes[15]. Luis Alberto Sánchez escribió irónicamente que en 1922 él recorrió los peores lugares de Lima, «para saberle las entrañas. Hoy, todo lo que se ve son entrañas, vísceras, mondongo, hay que buscar la piel que los recubra»[16]. De acuerdo con una editorial del diario *La República* «para los ricos la ciudad se hace inhóspita por la sola presión demográfica, que los lleva hacia las afueras y hacia las alturas de los edificios de unas pocas áreas acosadas», enfatizaban la idea de una ciudad que segregaba cada vez más sus espacios urbanos. Lima había dejado de ser una ciudad hispana y debía celebrarse su 'segunda' fundación

[13] *El Caballo Rojo*, *El Diario* de Marka*,* 27-7-1980, «Lima: de la Unión al parque, un eje popular».

[14] *El Caballo Rojo*, *El Diario* de Marka*,* 27-7-1980, «Lima: de la Unión al parque, un eje popular». Véase también 25-5-1980, «Parque Universitario: Torre de Babel».

[15] *La República*, 19-1-1983, «Lima de fiesta y con problemas».

[16] *Correo*, 29-6-1983, «La pobre ciudad».

> Si la fundación hispánica de la urbe merece ser conmemorada, también lo merece la saga de los hombres que vinieron de todo el Perú en pos de una imagen de la modernidad y la libertad. Llamaríamos a esto la fundación provinciana de Lima. No ha de ser difícil para nuestros historiadores ubicar una fecha simbólica para este acontecimiento[17].

De este modo a principios de la década de 1980 se consolida una propuesta que se puede denominar como «nostálgico-criolla», la cual rechazaba el presente urbano y añoraba la vuelta a la ciudad colonial-republicana, lo que la emparenta con la arcadia colonial. La diferencia con ella radica en el énfasis que se hizo en la importancia de algunos espacios de la Lima de principios del siglo XX, como el Jirón de la Unión y la Plaza San Martín, emblemas de la Lima oligárquica y cosmopolita Así, a diferencia de la arcadia, esta interpretación no rechazó la modernidad, más bien retomó parte de los ideales modernizantes de las elites oligárquicas. Ese proyecto les permitiría a las elites mantener las diferencias en el espacio público, muy necesarias debido a que estas se diluían por efecto de los cambios sociales y económicos de la década de 1980.

Esta propuesta se puede remontar a mediados del siglo XX. Desde fines de los años cincuenta surgió una nostalgia que idealizó la vuelta al pasado colonial, representada, por ejemplo, por la Casa de la Tradición, movimiento cultural impulsado por César Revoredo. Esta primera añoranza tiene puntos en común con la postura nostálgico-criolla de los años ochenta, pero también sus diferencias. El movimiento de la Casa reivindicó una visión palmiano-panchofierrista de la ciudad, la cual reconstruyó una imagen idílica colonial[18]. Por ejemplo, en 1961 en la Casa se inauguró la sala «Pancho Fierro», «inspirado pintor costumbrista que nos ha legado en toda su múltiple expresión la etapa deslumbrante de trajes y danzas, de audaces manifestaciones del amor y recatadas formas de ir a la Iglesia, que nos ha dado, en suma, la versión gráfica de una época de nuestra vida limeña» (1963, p. 168)[19]. Esta mirada de la ciudad fue tempranamente cuestionada por Sebastián Salazar Bondy, quien en 1964 denunció la falsedad del criollismo en su celebrado y polémico libro *Lima la horrible,* originalmente publicado en México en 1964. Esta arcadia también ha sido analizada en detalle por Javier Protzel (2011), quien desarrolla su derrotero a partir de los discursos de las elites burguesas que construyeron una imagen idílica de la ciudad, imaginario que entra en descomposición a partir del

---

[17] *La República*, 21-1-1983, «Lima: ¿solo toros, tapadas y turrones?».

[18] Esta perspectiva llegó a efectuar presentaciones en espacios públicos, como la que fue organizada por la Asociación de Artistas Aficionados (*Caretas,* 384, 25-11-1968, «Alameda de los criollos»).

[19] Para un panorama de la influencia colonial en esta definición de la tradición, véase César Revoredo (1961).

surgimiento de la «ciudad popular»[20]. La literatura de fines de la década de 1980 ofrece un testimonio interesante de estas ideas en la novela de Cromwell Jara, *Patíbulo para un caballo*, por medio de la voz de la autoridad representada por un policía que afirma que «¡una montaña de indios y negros, pero sobre todo de indios, porque son la mayoría, fundarán una selva de barriadas en todo Lima! ¡Y eso sería el fin de la capital! ¡Lima perdería su aspecto virreinal, aristocrático y europeo! Y se transformaría en una olla de grillos, un lugar de vagabundos y mendigos, sin mundo espiritual» (citado por Wood, 2005, p. 67).

Sin embargo, la diferencia entre la añoranza de ese pasado criollo con la nostalgia que se observa en la década de 1980, es que esta última más que solo evocar el pasado colonial palmiano-panchofierrista, también entrañaba el pasado señorial-aristocrático de principios del siglo XX y del Oncenio, quizá como una estrategia diseñada para evitar la crítica de Salazar Bondy. Esta postura nostálgico-criolla fue seriamente cuestionada por las prácticas de los habitantes, por ejemplo, los ambulantes ocuparon los espacios emblemáticos construidos durante el Oncenio, lo que supuestamente desnaturalizaba su función. También el emblemático Jirón de la Unión dejó de ser la escenografía diseñada para mostrar las diferencias de clase y étnicas. Por estas razones la limitación de esta propuesta es su incapacidad para incorporar a los sectores populares urbanos, lo cual puede explicar por qué posteriormente durante la alcaldía de Andrade se retornó fundamentalmente a la arcadia colonial, la cual sí permitía esa inclusión. El discurso que finalmente acompañaría la recuperación del centro de Lima hacia fines del siglo XX y principios del XXI está más emparentado con la tradición palmiano-panchofierrista, de trasfondo colonial y republicano, que la nostálgico-criolla que añoraba la Lima oligárquica de los años veinte. La ventaja que tenía la propuesta palmiano-panchofierrista, a diferencia de la tradición oligárquica, es que en ella cada grupo étnico estaba claramente identificado en la estructura social, con funciones establecidas y reconocidas dentro de un discurso histórico; buena parte de ese reconocimiento provenía de la aceptación como nacionales de sus expresiones culturales, y de Lima como eje de 'todas las sangres' de la nación. Esta particularidad permitiría a las autoridades de fines del siglo XX incorporar a los sectores populares en las reformas del espacio urbano, con la condición de que se reproduzcan los imaginarios palmiano-panchofierristas.

Por otro lado, en la década de 1980 se definió claramente una mirada «melancólica-futurista» que igualmente se sentía incómoda con los cambios y la decadencia urbana, pero que intuía que algo nuevo surgiría de ese caos, más acorde con los perfiles sociales y económicos del país. Así lo percibía Matos Mar en 1984:

[20] Véase también Martuccelli (2015, pp. 62-63).

> La ciudad de Lima, convertida por el vertiginoso crecimiento migratorio de las últimas décadas, en foco privilegiado de la nueva conciencia nacional, aparece como protagónica ilustración del cambio estructural en marcha. El Perú presenta, al promediar la década de 1980, un rostro nuevo cuyos rasgos se perfilan con creciente nitidez en el mundo popular de la barriada y que es obligación del antropólogo comenzar a describir (1984, p. 21).

Entre ambas propuestas hay diferencias importantes, como también puntos de contacto. Por ejemplo, en las dos hay un acuerdo en considerar a la migración responsable de los cambios que se percibían en Lima, la diferencia más importante es que la nostálgico-criolla considera que se deben revertir esas transformaciones y recuperar el rostro oligárquico de Lima, mientras que la segunda proposición no quería regresar a ese pasado y avizoraba una metrópoli diferente, con la cual mantenía su distancia estética y cultural, urbe que posteriormente sería calificada por parte de sus seguidores como «ciudad chicha» (Martuccelli, 2015, pp. 210-218). La coincidencia se encuentra en el rechazo estético de los elementos culturales que afloraron en el espacio urbano con la presencia de la migración y los ambulantes[21]. Como señala Martuccelli, los migrantes de origen andino no se asimilaron a la cultura criolla ni mantuvieron inconmovibles sus costumbres previas, paulatinamente se desarrollaron varias formas de cultura popular (pp. 77 y 93).

Juan José Vega, conocido historiador, puede ser incluido dentro de la visión melancólica-futurista. Él señalaba que Lima no siempre había sido horrible, sus mejores épocas eran aquellas cuando fue considerada la segunda ciudad del imperio español, «o cuando constituía una multicolor ciudadela yunga del Imperio de los Incas. Aunque también bastante decaída, fue también hermosa durante el siglo XIX»[22]. A pesar de su conocida postura proandina e indigenista, el historiador consideraba que la ciudad «en la actualidad es una ciudad no solamente fea, sino sucia y desagradable»[23]. Su artículo destaca la enorme y desordenada extensión de Lima, carente de todo tipo de planificación, condiciones que trajeron como efecto la ruptura de las familias, amigos e instituciones por las «absurdas distancias»[24]. El texto no reconoce ninguna nueva forma de sociabilidad positiva generada por los migrantes, solo resalta su impacto negativo.

[21] En México también se observa el mismo rechazo estético en contra de los vendedores (Mendiola, 2017, p. 36).

[22] *La República*, 25-7-1989, «La deforme Lima».

[23] *La República*, 25-7-1989, «La deforme Lima».

[24] *La República*, 25-7-1989, «La deforme Lima».

Sin embargo, fue la poesía la que intuyó anticipadamente la destrucción de la arcadia colonial y de toda nostalgia. El conocido movimiento Hora Zero, fundado por Jorge Pimentel a principios de 1970 y con una segunda etapa a partir de 1977, integró a una serie de poetas iconoclastas y contestatarios que incorporaron una lectura popular de los procesos sociales y de los espacios. Por ejemplo, el poema «Rimbaud en Polvos Azules», escrito en 1973 por Jorge Pimentel, señala que al poeta francés «se le vio por la Colmena repartiendo volantes de apoyo a la huelga de los maestros y en una penosa marcha de los obreros trabajadores de calzado El Diamante y Moraveco S.A.» (citado por Wood, 2005, p. 91). Enrique Verástegui, otro importante miembro del movimiento, escribió:

> […]Hay también
> todos estos libros sobre Lima
> —crónicas anacrónicas y recientes—
> y todos bajo un mismo denominador común:
> una ciudad que se proyecta no como existir
> sino como irrealidad no contiene esta verdad acumulada suave-
> mente en el pasto
> bajo esos geranios donde unos enamorados se acarician lenta-
> mente: su futuro
> es el presente y una persona real
> ha de florecer como esta luna […] (citado por Wood, 2005, p. 92).

La visión de Lima que ofrece Verástegui incluye a los personajes marginales, las barriadas y la cultura popular de sus habitantes. De acuerdo con Wood, en este movimiento poético,

> La producción – y también el consumo – de la cultura es, entonces, parte íntegra de esta Lima de pueblos jóvenes, burdeles y viajes bamboleantes en bus. Dos tentativas de Hora Zero de hacer penetrar a su poesía en los ambientes que le sirven como fuente – circuitos de consumo muy atípicos en la época – fueron la producción de su propia revista y la realización de recitales públicos, mientras que el uso de un lenguaje más bien coloquial que incluye jergas y obscenidades rechaza el preciosismo de la poesía previa para dar voz a una experiencia popular (2005, p. 94).

Estas percepciones acerca de la ciudad comenzaron a marcar el paso de los partidos políticos en las competencias electorales para llegar al sillón municipal. Los movimientos se interesarían en los problemas urbanos generados por la migración y el comercio ambulatorio, sus consecuencias en la ciudad y sus imaginarios. Al principio, en el contexto de la elección de 1980, los efectos de la migración se medían por el crecimiento de los pueblos jóvenes, los cuales albergaban a casi un tercio

de la población limeña (CVR, 2003, p. 400)[25]. Los déficits en agua potable y desagüe, servicio eléctrico, transporte, limpieza, etcétera, eran bastante graves, mientras que, al mismo tiempo, la capital era la que contaba con los mayores servicios de salud y educación y mejores oportunidades laborales. De acuerdo con el alcalde Orrego, esta era una de las razones por las que 200 mil personas encontraban en el comercio ambulatorio una fuente de subsistencia[26]. Esos problemas continuaron en 1989, en ese año se afirmaba que 200 mil provincianos llegaban anualmente a Lima, una cantidad equivalente en ese momento a ciudades como Huancayo o Tacna[27]. La demanda por servicios básicos aumentó de tal forma que sobrepasó largamente la oferta estatal, insatisfacción que creció con fuerza con el alza del costo de los servicios[28].

De forma paulatina la discusión se centró en el significado de Lima como ciudad capital. En 1983 la Izquierda Unida accedió al sillón municipal y su plan de gobierno consideraba que Lima era una ciudad dominada por la pobreza, pero que finalmente representaba, ahora sí, al Perú. En sus calles convivían compatriotas de todos los lugares «y los provincianos son casi la mitad de los habitantes de Lima; con ellos han llegado sus peculiaridades regionales y sus riquísimas culturas»[29]. Ante esta realidad los habitantes limeños deberíamos estar felices por lograr «contemplar la maravillosa variedad de nuestro acervo cultural patrio»[30]. Estas líneas marcan conscientemente la distancia entre ese 'otro' de tradiciones diferentes, recién llegado, y un observador-político limeño que ve las cosas con complacencia, pero con cierta distancia. La activa política cultural que proponía el nuevo gobierno municipal consistía en promover el folclore en la ciudad, por medio de talleres, autorización para el uso de espacios públicos para espectáculos culturales y venta de artesanías, entrega de un coliseo para artistas y la construcción de un «Palacio del folclore». Sin embargo, al mismo tiempo, se exigía el «cese de la destrucción y desnaturalización de nuestro patrimonio cultural urbano»[31], propuesta que eventualmente podría colisionar con el uso del espacio público para espectáculos. La idea que primaba en el plan era la de crear un verdadero espacio público, especialmente en el centro de Lima, propuesta que hacia el final de la administración de Barrantes se mostraba mucho más inclusiva, sin diferenciar entre limeños y migrantes: «la misma área

[25] En 1990 se calculaba que allí residían la mitad de los limeños.

[26] *La República*, 19-1-1983, «Lima de fiesta y con problemas».

[27] *La República*, 3-9-1989, «Analizarán propuestas para humanizar Lima»

[28] *La República*, 15-1-1989, Jorge Ruiz de Somocurcio, «¿Lima en la boca del lobo?».

[29] *El Diario* de Marka, 16-11-1983, «Es posible una ciudad para todos».

[30] *El Diario* de Marka, 16-11-1983, «Es posible una ciudad para todos».

[31] *El Diario* de Marka, 16-11-1983, «Es posible una ciudad para todos».

central debe seguir convirtiéndose en un espacio de identidad de los limeños de ayer y hoy»[32].

En los siguientes años continuaron estas tensiones entre las diferentes miradas acerca de Lima. Algunos medios insistieron en la necesidad de preservar el centro histórico, regular el comercio y aceptar los cambios que trajo la migración; mientras otros fueron mucho más contundentes en el rechazo de esta nueva Lima. En 1989 Luis Ricardo Valcárcel, columnista de *Extra*, elaboró una imaginativa nota en la que describía las celebraciones por el aniversario de la fundación española de la ciudad y puso en evidencia que los actos oficiales habían dejado de ser limeños para reflejar una identidad extraña a la ciudad y específicamente andina, más claramente, serrana. Esta era una vieja idea: Lima siempre fue diferente al mundo andino, el presente de ella no era parte de su pasado, era una impostura.

En el texto se describen los actos que fueron encabezados por el alcalde Jorge del Castillo, quien aprobaba todo con gran alegría y cantaba al compás «de la música de un huaino ayacuchano». Más allá de los seguramente imaginativos diálogos, el retrato de esta fiesta es una pieza de colección que muestra de forma transparente todos los prejuicios y miedos que la migración trajo para un sector de la opinión pública. En el texto se atribuye al alcalde el diseño y ejecución de los actos celebratorios, compuestos de «bailarines de mulizas, banda de músicos, carretillas de frutas, camiones interprovinciales […]». Esta nueva cultura se revelaba como ajena a la esencia limeña que el autor intentaba defender y se mostraba como un patético desfile: «apreciado por gran cantidad de lorchos [cholos] invitados especialmente por la presidenta del Comité de Apoyo Municipal […] fue el desfile folklórico más completo que se haya visto después de muchas décadas». Los prejuicios acerca de estos nuevos habitantes de la ciudad mezclaban factores de clase y raciales, ponían énfasis en que se han adaptado solo de forma superficial a la vida urbana y que, finalmente, no son más que pobres advenedizos: «conjuntos musicales de La Parada y de los barracones del Callao asistieron al desfile. Cada conjunto acudió con ropa prestada y entonaron las canciones de su tierra en tiempo de salsa». Migrantes que finalmente en la ciudad solo generaban peligro, se relaciona el origen étnico de los habitantes de algunas zonas con la delincuencia: «estuvieron los cholitos de San Cosme, que ganaron los mejores aplausos por la destreza de las manos, desapareciendo las billeteras»[33].

Esta mirada completamente discriminadora, que rechazaba las nuevas formas culturales desarrolladas en el espacio urbano limeño, también incorporó una perspectiva de género que profundizó su rechazo: «cuadrillas de bailarinas huancas

[32] *La República*, 30-11-1986, «Las puertas del futuro».

[33] *Extra*, 25-1-1989, «¿Día de Lima?».

fueron ovacionadas largamente por la perfección de sus ritmos y por la alegría que demostraban cuando levantaban las polleras, sin que calzón alguno les cubriera su triángulo pélvico». Se puede señalar la similitud entre esta idea y la frase denigrante en el Perú para referirse a las mujeres de origen andino y señalar su inferioridad en función de clase, etnia y género: «la misma chola con diferente calzón».

La impostura de celebrar a Lima con tradiciones que supuestamente no le correspondían se revelaba en «los carros alegóricos que se componían de carretillas mostraban productos de toda la sierra peruana, fueron preparados con el auspicio del Banco Minero, Agrario, Andino, Ministerio de Agricultura, Centro Superior de Quechua, Asociación Túpac Yupanqui y conjunto Musical Manco Cápac de La Victoria». Como se puede observar, según el autor en esta relación de lo no representativo de la historia de la urbe se incluyen fundamentalmente referencias al entorno andino, no a otros lugares de la costa, fuera de la capital; solo lo serrano es extraño. Y la responsabilidad de esta traición a la 'verdadera' historia de la ciudad son las autoridades que permiten estas alteraciones. Así, ante la supuesta pregunta de cuánto le cuesta al municipio este desfile, el alcalde señala que «Nada, porque el íntegro de las actividades es auspiciado por el Centro Cultural Cuzco». La traición se revela en las últimas líneas. La otra pregunta que le lanzan es: «*Siguiendo la tradición limeña* de este 454 aniversario, ¿habrá participación de los artistas criollos?»[34]. Como se puede observar, el autor de la nota sí tiene claramente una idea de qué es efectivamente lo 'limeño'. Sin embargo, estas tradiciones ya no tienen lugar en ella: el alcalde señaló que las festividades criollas se darán cuando «llegue el aniversario de la fundación de la República de Arequipa»[35].

En los años posteriores el diario *La República* apoyó la redefinición y protección de la Lima monumental al favorecer regulaciones que aceptaban el presente, pero que buscaban preservar el pasado[36]. Mientras que, *Expreso* y *El Comercio* insistieron más en recordar el pasado colonial-aristocrático de la urbe, con un mayor contenido de rechazo del presente de la capital[37]. En 1992 una nota periodística firmada por Enrique Sánchez Hernani muestra una visión menos optimista del futuro de Lima, pero con una añoranza colonial que se percibe como anacrónica y utópica. El autor señala que Lima «ya no pertenece a la nostalgia que ha tratado de sancionar por décadas en inventario del vals peruano. Ajada por el comercio ambulatorio, mortificada por el desdén municipal, con el diario suplicio de la indiferencia

[34] *Extra*, 25-1-1989, «¿Día de Lima?». El énfasis es mío.

[35] *Extra*, 25-1-1989, «¿Día de Lima?».

[36] *La República*, 24-1-1986, «Redefiniendo el centro de Lima».

[37] *Expreso*, 27-1-1986, Álvaro Rojas Samanez, «A manera de homenaje a Lima» y *El Comercio*, 4-9-1986, Felipe Buendía, «Quintaesencia de la Lima popular».

ciudadana, ahora ofrece una pasmosa imagen que por ningún motivo podría merecer el apelativo de Ciudad Jardín»[38]. Su artículo describe a los mendigos y vendedores informales «donde se unen la tecnología chicha y el contrabando artero», quienes ocupaban la zona 'abajo el puente', es decir, la zona del Rímac, otrora dominada por la tradición hispana: «y pensar que esto era Malambo, altar barrial del criollismo, harto de nobles aguardientes, festivamente inmolado en las aguantadoras jaranas que se derrumbaban paulatinamente a lo largo y ancho de cuatro o cinco días, por donde alguna vez brillaron las voces canoras de Los doce Pares de Francia, el dúo Montes y Manrique o los inseparables hermanos Augusto y Elías Ascuez»; mientras que el actual espacio era utilizado por «mercachifles de revistas viejas, herramientas rotas, cubiertos de peltre de segundos apetitos y libros usados. Los acompañan triciclos que ofrecen fritangas e indiferentes baratijas domésticas, en convivencia sin privilegios»[39]. El futuro de Lima parecía destinado al fracaso, pero aún existía un pasado en sus calles que no solo recordaba sus mejores días, sino que podía ser preservado[40]. Así, la visión nostálgico-criolla consideraba que la ciudad colonial corría el peligro de desaparecer no solo por las corrientes migratorias, sino por causa del abandono de las familias tradicionales que ocupaban el centro. Desde esta perspectiva era necesario recuperar las estampas limeñas, al estilo panchofierrista «que increíblemente aún perduran. Ejemplos de ellas tenemos a veces en los barrios como el afilador, que va empujando su ruedo y tocando el silbador, el organillero con su mono saca fortuna, la vendedora de tamales y humitas, el carretillero de helados, el ropavejero y otros personajes que curiosamente aún se ven»[41]. Como se puede deducir de esta nota, la tradición sí se puede aprovechar para crear un mejor presente limeño.

La ciudad dejaba de ser española y «museo limpio de la colonia»[42] para convertirse en la pesadilla de los migrantes provincianos, población que se había convertido en la primera fuerza cultural de la urbe. Matos Mar afirmaba en 1984 que «las migraciones han logrado traer a las ciudades elementos culturales y sociales de sus lugares de origen, incluido el idioma que se expresan de muy variadas formas. Asistimos a la manifestación de nuevas combinaciones, ajenas a las expectativas de los agentes del Estado y de los operadores de los medios de masa y marcadas reciamente por el sello popular» (p. 52). En 1986 el diario *Extra* denunciaba que

[38] *Expreso*, 14-6-1992, «Extravíos limeños. Del Puente a la Alameda».

[39] *Expreso*, 14-6-1992, «Extravíos limeños. Del Puente a la Alameda».

[40] César Miró, *Expreso*, 19-10-1992, «La ciudad y su cultura». Es muy reveladora de esta tendencia la posición de Felipe Buendía, véanse *Expreso*, 29-12-1992, «Un alcalde para Lima»; *Expreso*, 21-2-1992, «Lima de Ayer y Hoy»; y las fechas 25-2-1992 y 1-4-1993.

[41] Rubén Ugarteche Villacorta, *El Comercio*, 17-1-1993, «La Lima de Ayer y Hoy».

[42] Alonso Cueto, *Expreso*, 17-1-1993, «Mi vieja Lima. Entre la mugre, la violencia y el desorden».

los carteles de la ciudad y el descuido de ella la asemejaban a una «ciudad andina» y que a «tres cuadras del Jirón de la Unión avisos burdos dan la impresión de que Lima se ha convertido en una ciudad folklórica»[43].

Pero no todo fue percibido de forma negativa. Juan Luis Dammert intuyó la fuerza creativa que emergía en el espacio urbano del encuentro de tantas tradiciones diferentes. Interesado en los procesos de creación musical, fue testigo de cómo los danzantes de tijeras utilizaban cucharas ante la escasez y de cómo un niño improvisaba una zampoña con una bolsita de plástico. Al preguntarle a uno de los músicos por el conflicto cultural en la capital, este le contestó que la cultura andina sobreviviría: «los españoles no pudieron con nosotros. La ciudad tampoco va a poder con nosotros». Dammert afirmaba que, con la música como eje, «vivimos una situación de carencia. La fortaleza de una cultura se demuestra por su creatividad más que por su fijación a normas. De existir una norma esta sería la tendencia a cumplir una función placentera y vital con los medios que uno tenga a la mano»[44]. Es decir, los músicos echarían mano de los recursos disponibles para mantener viva la cultura, incorporaban todo aquello que fuera funcional a su objetivo de crear nuevos sonidos.

Años después, en 1993, el famoso escritor Alonso Cueto también percibía una fuerza positiva en este proceso social. De acuerdo con él, esta «andinización» de la ciudad se notaba en hechos como la aparición de locales folklóricos en el centro de Lima y la celebración en el Club de la Unión del concurso de belleza para las mises regionales[45], «mientras que en el Paseo Colón, donde en la época de Leguía desfilaban los famosos corsos y se paseaban los grandes señores a las cinco, hoy alberga la sede de varios clubes provinciales». Sin embargo, su nostalgia por la Lima oligárquica no lo llevaba a rechazar el futuro de la ciudad, pero si a preguntarse por su significado: «de esta ciudad provinciana y mestiza que ha surgido desde el resto del país, ¿qué podemos esperar? […] ser 'limeño' ya no es lo que era, porque Lima no es la misma […] Ese 'ser' virreinal y español ha desaparecido para siempre y con él una imagen de Lima. ¿Pero qué la sustituye?»[46]. Un par de días después, Cueto fue más enfático al señalar que «ya nunca más seremos una ciudad de blancos, en la cual un ilustre vecino atravesaba todos los días el Jirón de la Unión y no podía ponerse el sombrero de copa de tanto saludar otros distinguidos vecinos de la

---

[43] *Extra*, 8-7-1986, «Erradican carteles sin licencia del centro».

[44] *La República*, 12-7-1986, «El danzante de cucharas».

[45] Felipe Buendía más bien consideraba que estos locales deberían ser erradicados «del sagrado recinto del centro» (*Expreso*, 29-12-1992, «Un alcalde para Lima»).

[46] Alonso Cueto, «Mi vieja Lima. Entre la mugre, la violencia y el desorden», *Expreso*, 17-1-1993.

ciudad». Su posición trata de reconciliar ese pasado con un futuro en el cual sería posible la convivencia:

> de todas las sangres. Indios, mestizos, chinos y blancos son limeños por nacimiento desde hace varias generaciones. Incluye además el mar, un valle, un pequeño desierto y el comienzo de los Andes. El resultado de todas esas superposiciones con las que la historia se ha entretenido a nuestra costa, puede explicar en parte, la falta de identidad de nuestra ciudad. No es una ciudad indígena y colonial como México o europeizada como Buenos Aires o hecha a semejanza de los Estados Unidos como Caracas. Pero, es una mezcla de todo eso. Como a lo mejor somos nosotros[47].

De forma significativa la tradición nostálgico-criolla se imagina a Lima femenina, objeto de un amor de sino trágico e irrenunciable, poderosa atracción para sus habitantes, que tanto la idolatran como son capaces de odiarla cotidianamente. Su destino es incierto y no podrá cambiar hasta «cuando Lima y los limeños comprendamos que estamos atados por algo más fuerte que el amor, que no podemos vivir el uno sin el otro. Hasta entonces será una ciudad como la que es hoy: descomponiéndose, sola»[48].

La postura nostálgico-criolla, en su versión más extrema, llegó a negar la existencia de alguna prestancia en el pasado de Lima. Este imaginario, golpeado por las reformas velasquistas y distante de la nueva sociedad proclamada por el experimento militar que incluyó la eliminación del término «indio» del lenguaje oficial y la incorporación del quechua como lenguaje oficial (Rénique, 2015, p. 121), adoptó una percepción apocalíptica de la ciudad. La realidad de principios de la década de 1990 era percibida como tan lacerante que se interpretó como la conclusión lógica de un destino trágicamente trazado desde su primer día. Wiley Ludeña señala que a fines de los años ochenta, el centro

> carecía de significado para los sectores tradicionalmente vinculados al poder económico y político. Pero este centro tampoco parecía haber consolidado un significado especial, no solo para sus miles de nuevos usuarios pobres llegados a él desde mediados del siglo XX, sino también para la vasta y 'deslimeñizada' periferia barrial urbana. O expresado de otra forma: estos cientos de miles de habitantes precarios del centro no encontraron el modo de resignificar simbólicamente los atributos de una nueva centralidad pertinente a sus aspiraciones sociales y culturales, más allá de las misas en quechua en la Catedral

[47] *Expreso*, 19-1-1992, «Amada Lima».

[48] *Expreso*, 19-1-1992, «Amada Lima». Armando Silva señala que es una sensación común que los habitantes de las ciudades de América Latina expresen su odio por la ciudad, aun cuando no vivirían en otra por elección propia (2001, p. 399).

> o los pasacalles andinos paseando por sus centenarias calles. Ambos hechos eran impensables unas décadas atrás, cuando en Lima oligárquica la cultura andina había sido recluida a la condición de guetto controlado. En todo caso, junto al nuevo rostro social y cultural del centro, el otro rasgo de este nuevo perfil estaba acompañado por la degradación la preexistencia histórica y el colapsamiento de su propio valor como espacio de residencia (2009, p. 155).

La ilusión de recuperar alguna forma previa de la ciudad quedó cancelada, no había ni pasado ni futuro[49]. El centro, siempre de acuerdo con Ludeña, vivió su época de esplendor durante las décadas de 1900-1940; su decadencia comenzó a partir de la década de 1960 cuando paulatinamente las principales sedes de instituciones privadas y públicas empezaron a reubicarse fuera del espacio central de la ciudad. A partir de la década de 1980 y hasta el año 2000 el centro se reconfigura,

> gracias a aquellos nuevos habitantes que entre migrantes y población de bajos recursos empezaron a habitarla desde mediados del siglo XX. Este es el centro de calles abarrotadas de miles de ambulantes, de callejones y conventillos cada vez más tugurizados. Este es el centro que adquiere una mayor significación social y cultural para la población barrial y los distritos populares. Es el centro del desborde popular sin límites y el caótico asalto cultural del Perú profundo (2009, p. 161).

Este 'nuevo' centro, producto del intercambio, la política, la migración y la crisis, fue consistentemente rechazado desde la década de 1970; oponiéndole el proyecto de retorno a la Lima de esplendor oligárquico-señorial. A fines de los años ochenta esta visión derivó en catastrófica, negó el pasado, presente y futuro de la ciudad. Sin embargo, la conexión entre esta perspectiva y la postura nostálgico-criolla se evidencia en el no tan velado racismo con el cual describe a los nuevos habitantes de la ciudad y la forma en que los políticos habían contribuido a «cholificar» la capital con una supuestamente mal entendida modernización de Lima. En 1992, en el contexto de la declaración de Lima como Patrimonio Cultural de la Humanidad, Sebastián Dam señalaba que la ciudad ya había dejado de ser la urbe colonial y criolla:

> Para quienes estamos metidos en este aromoso campo ferial recientemente designado patrimonio cultural de la humanidad, ni el viejo puente, ni el rio, ni la Alameda se han mecido nunca para nada en ningún sueño. Porque para criolla, alegra y jaranera la tierra nuestra, claro. Criolla como el caldo de gallina con huevo duro bajo un toldo a rayas en plena Emancipación. Alegre como el bochinche simultáneo de cinco carretillas estéreo vendiendo ediciones pirata

[49] Una visión de estas características en César Hildebrant, «Ay, señor», *La República*, 23-1-1995.

> de Lisa M, y el multicolor grupo Markahuasi. Jaranera como esas ciclópeas y horribles botellas de Pilsen de 4 pisos que acaba de instalar frente al Palacio de Justicia como gran metáfora del cumpleaños capitalino[50].

La reacción nostálgica en este momento parecía resignarse ante el peso de la realidad que superaba la ilusión del retorno al tiempo aristocrático; aunque el malhumor se transformó en mordaz ironía. Desde esta perspectiva, en Lima era

> fregado encontrarse en medio del berrinche metropolitano una sola, siquiera una limeña con alma de tradición a la cual repiquen castañuelas en su tacón. Fregado encontrar siquiera una limeña suelta en plaza, ahora que de Ciudad Jardín solo nos quedó el abono, ¿dónde, en que ghettos subterráneos se reunirán las cofradías a desempolvar las momias de sus valsecitos?, ¿qué de penurias no pasarán cada vez que, derribados de opios señoriales, se ven obligados a desayunar un cóctel de Vibrium Cholerae marinado en ácido acético o a formar cola con su balde en ristre frente a la pileta de la Plaza de Armas, porque agua no hay ni pan tampoco? Lima no es la novia, es *la empleada, la Natacha* con la que el pendejo Perú no se casará jamás. Por más que haya quedado embarazada[51].

El cambio en la postura nostálgica consiste en atribuir el 'fracaso' de la ciudad a su propia naturaleza, equivocada en su emplazamiento desde su fundación por doce «soldaditos» y un «chanchero»; atiborrada de iglesias y «caprichitos de pelucones virreyes […] los Nicolás de Ribera debieron saber que estaban criando a una urbe condenada sin remedio a la obesidad. Estaban cebando, pues, a esta *chola gorda*, incómoda, desmesurada»[52]. Ciudad engreída con exceso, sobreprotegida y sobrealimentada por la plata de la sierra, «la malacostumbraron a ser lo que es: insaciable, egoísta, irrespirable»[53]. Nótese como los prejuicios raciales tienden a reforzar la idea de que Lima nunca fue una ciudad con prestancia, urbe que desde el principio de su existencia estaba destinada al fracaso. De acuerdo con Dam, la etapa de la Ilustración solo maquilló Lima, mientras que

> fue la primera en empezar la alharaca de la Independencia […] la ciudad habría de comenzar su vocación de mercader vendiéndole a todo el mundo toneladas de caca de pelícano y de gaviota. Rica de nuevo, coqueteada por la oligarquía, se dio el lujo de ordenar un lote de negros y chinitos para que le hagan la chamba del algodón y la caña[54].

---

[50] *Expreso*, 19-1-1992, «Lima, la esponja inmortal».

[51] *Expreso*, 19-1-1992, «Lima, la esponja inmortal». El énfasis es mío.

[52] *Expreso*, 19-1-1992, «Lima, la esponja inmortal». El énfasis es mío.

[53] *Expreso*, 19-1-1992, «Lima, la esponja inmortal».

[54] *Expreso*, 19-1-1992, «Lima, la esponja inmortal».

Su carácter veleidoso e imitador de las costumbres europeas la hizo desde siempre falsa y fatua; mientras que el Oncenio intentó modernizarla al dar inicio su alocada expansión urbana, hasta que al general Manuel Odría «se le ocurrió la brillante idea de modernizar Lima», construyó las unidades vecinales, grandes hospitales y colegios, «que serían la mortal estocada que asesinaría todo resabio de cachet y abolengo. Esta modernización no hizo más que añadirle atractivo y gancho para las masas campesinas que, ante la crisis del agro, empezaron a venirse con todo, haciéndole caso al slogan de 'Educación y Trabajo' que no era otra cosa que un señuelo para captar cholos baratos a la capital». La superpoblación fue resultado de esta migración de «lorchos enfervorizados por conocer Limamanta» que ocuparon todo espacio disponible, «y después el chupo de habas empezó a rebalsarse de la cacerola y vinieron, una por una, silenciosas, las barriadas, luego los pueblos jóvenes, después los asentamientos. Y los hacinamientos. Un campamento más grande que toda la ciudad»[55].

Como se conoce hoy, la sobrepoblación no fue únicamente producto de la migración, también fue el resultado del cambio de funciones del centro de zona residencial a comercial, reduciéndose sensiblemente el área disponible para viviendas. De acuerdo con Aldo Panfichi, entre 1960 y 1980, 150 hectáreas del Cercado fueron demolidas para construir estacionamientos y edificios de oficinas, mientras que se paralizó la construcción de viviendas por la mala fama y peligrosidad del lugar. Incluso el número de habitantes de un espacio central como los Barrios Altos se había mantenido prácticamente estancado: pasó de 76 100 habitantes en 1940 a 79 897 en 1993 (Panfichi, 2013, p. 87).

Con este proceso migratorio, de acuerdo con Dam, los limeños resultaban los extraños en su propia ciudad, mientras que los ambulantes con sus megáfonos y gritos tomaban por «asalto el damero de Pizarro», destruían lo que quedaba de sus tradiciones, cambiaban «La flor de la canela» por «Pinturas Rojas [y] Nuevas Cremas[56] […] el Jirón de la Unión es la Feria de Huancayo y no hay patronato en el mundo capaz de cambiarlo». En esta nueva —y detestable— urbe el turista era el antiguo limeño, quien era asaltado por delincuentes y luego podía encontrar sus zapatos en La Cachina. La nota muestra claramente su desdén por la Lima contemporánea y, a diferencia de otras posturas nostálgicas, se considera perdida toda posibilidad de supervivencia de lo 'limeño'; tampoco se avizora, en desacuerdo con otras propuestas, algún germen positivo, era una nostalgia inútil. Lima está perdida para siempre por causa de la «cholificación»: «este es el único gusto que tiene Lima, el gusto a fiesta patronal y a mercado mayorista, a cocinería y a mingitorio

[55] *Expreso*, 19-1-1992, «Lima, la esponja inmortal».

[56] Una clara referencia a dos famosos grupos de música chicha.

urinal. Y el único sonido es la estridencia de las cinco carretillas estéreo vendiendo al unísono toda la chicha del mundo»[57].

La perspectiva melancólica-futurista, emparentada con la antropología y la literatura arguediana, evolucionó hacia la comprensión andinista de la ciudad. Esta postura tiene sus antecedentes académicos en el célebre libro de Matos Mar, *Desborde popular y crisis del Estado*, quien en 1984 afirmó que desde mediados de la década de 1950 la llegada de inmigrantes a la capital, «significó el inicio de la concentración de grandes contingentes de migrantes en Lima, en un nuevo tipo de asentamiento urbano denominado barriada. Este llegará después a ser el estilo dominante de crecimiento en todas las ciudades del Perú» (1984, p. 34). Wilfredo Kapsoli intenta una interpretación de esas características al señalar que la ocupación de la ciudad se corresponde con la lógica de la mentalidad andina, «la de la parcelación y el microcosmos»[58], desborde que llegó a Lima como un aluvión de los 'zorros de arriba' y que podría cumplir una profecía anunciada por Arguedas, son «metafóricamente, los *Amarus* (dios serpiente) que crecen subterráneamente y que presionados por la fuerza de las tripas; de la comida, son capaces de engullirse a sus antípodas cogotudos de cuello y corbata. Esta aterradora premonición del Dios Liberador Andino, felizmente no se ha concretado»[59]. A pesar de su fragmentación y del pragmatismo originado en la necesidad de supervivencia, Kapsoli detecta la presencia de «los valores y los signos de la tradición prehispánica: fiestas, carnavales, compadrazgos, faenas y la paciente espera. Es decir, lo colectivo, la reciprocidad, la solidaridad tan necesaria a ser potenciada en estos 'tiempos de cólera', de rabia y de muerte»[60]. La interpretación del presente y futuro de la ciudad recurría a una «solución arguediana», que consideraba que el caos y sufrimiento de la urbe eran los necesarios ritos de tránsito para lograr un país que sintetice 'todas las sangres'. Matos Mar afirmaba que «el enorme desplazamiento de las masas provincianas a la capital ha venido convirtiendo a la ciudad en el crisol y muestra de todos los procesos en marcha en el Perú» (1984, p. 76); mientras que una editorial de *La República* señalaba en 1992:

> muy pocos se atreverían sin embargo a negarle a esta ciudad, nuestra ciudad (pese a todas las decepciones) su rol de crisol del Perú futuro, de amalgama de

[57] *Expreso*, 19-1-1992, «Lima, la esponja inmortal». Kathrin Golda-Pongratz (2013), tiene un interesante trabajo en el que recorre una calle de la ciudad para mostrar las diferentes capas de convivencia urbana, producto de la migración y cómo «Lima ya no es la ciudad de los limeños clásicos».

[58] *La República*, 1-2-1992, «Lima. La utopía al revés».

[59] *La República*, 1-2-1992, «Lima. La utopía al revés».

[60] *La República*, 1-2-1992, «Lima. La utopía al revés».

> todas las sangres. Lima legitima y da curso común a los lenguajes diversos de una sociedad plural que pugna por lograr su identidad y unidad. Sin la comunión, intercambio o contagio de esos lenguajes entre sí difícilmente podría hablarse de peruanidad, de arte y cultura nacionales [...] es el lugar donde las masas reiteran su reclamo de otra historia y sus deseos de protagonismo, tantas veces postergado[61].

Desde esta perspectiva el rescate de la ciudad era difícil pero aún posible, debido a la constante migración y el deterioro urbano las perspectivas no eran las mejores, pero el tenor de la editorial sostiene que se debe hacer algo para reivindicar a la capital[62]. La propuesta del diario es que en ese futuro el pasado criollo y el presente andino se integrarían y formarían una nueva ciudad. Exactamente un año después el diario reprodujo íntegramente la misma editorial, cambiándole ligeramente el título y le sumó un pequeño párrafo final, sin mayor trascendencia[63]. Finalmente, nuevamente en 1995 publicó el texto, prácticamente sin cambios y con el título de 1993[64].

El apocalipsis

La década de 1980 comenzó con mucha esperanza. La anhelada democracia se reinauguró el 28 de julio de 1980 en medio de grandes expectativas de la ciudadanía, las cuales paulatinamente fueron cediéndole el paso a la frustración y descontento. Como he señalado anteriormente, la crisis económica, la subversión y los desastres naturales, sumadas a las deficiencias de la gestión estatal, fueron algunas de las punzantes causas de que esa década se convierta en una de las más convulsas y duras de nuestra historia republicana. Pero sería una noticia originada desde el exterior la que revelaría la inminente destrucción de la ciudad: el anuncio de un catastrófico terremoto para julio de 1981. Si bien toda la costa peruana se encuentra en una región altamente sísmica, Lima solo guarda memoria de algunos movimientos telúricos de alta intensidad. Entre otros, la historia ha señalado los desastres de 1746, 1940, 1970 y 1974. El relativo silencio sísmico desde este último año motiva hasta hoy especulaciones y temores respecto a la potencial devastación que podría ocasionar un terremoto de alta intensidad.

---

[61] *La República*, 18-1-1992, «Lima en busca de su utopía».

[62] En este punto coincide con un sector de la postura nostálgico-criolla que consideraba posible salvar y recuperar el pasado de Lima. Véase Lina García Calderón, *Expreso*, 14-3-1992, «Lima sí puede cambiar».

[63] *La República*, 18-1-1993, «Lima, ciudad y utopía».

[64] *La República*, 18-1-1995, «Lima, ciudad y utopía».

El geofísico Brian Brady, funcionario de la oficina de minas del gobierno norteamericano, se interesó por los sismos en la costa peruana luego del terremoto de grado 8 que afectó la capital el 3 de octubre de 1974, que dejó 78 muertos[65]. Asistido por William Spence, comenzó a estudiar el comportamiento de la placa de Nazca con el objeto de predecir sismos y llegó en 1977 a la conclusión de que pronto se produciría un terremoto de magnitud 8,4 en la costa peruana. En junio de 1978 precisó su predicción en un documento interno, en el cual afirmaba que entre octubre y noviembre de 1981 se produciría un devastador movimiento sísmico de 9,2 grados. Desde 1977 Brady se puso en contacto con el respetado ingeniero Alberto Giesecke[66], jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), quien fue invitado en mayo de 1979 a una conferencia en Golden (Colorado) con el objeto de discutir las predicciones. En esa reunión se discutió y criticó ampliamente la validez de las teorías de Brady. El geofísico afirmó que se produciría una secuencia de trece sismos que comenzarían en setiembre de 1980, seguidos de un terremoto de magnitud 9,8 en julio de 1981 y otro similar en abril de 1982. Además, el temible movimiento de 1981 también ocasionaría un devastador tsunami que destruiría completamente las costas del Callao y Lima. Aunque los asistentes discutieron la validez de la teoría y métodos de Brady, la alerta exigió la acción de instituciones como la Cruz Roja, la cual comenzó a prepararse para la emergencia (Olson, Podestá & Nigg, 1989, capítulo III). Giesecke se reunió con el presidente Francisco Morales Bermúdez con el objeto de discutir las acciones inmediatas ante la posible ocurrencia. Además, a fines de 1979 una misión japonesa llegó para analizar la situación y proponer medidas en caso de un sismo de gran magnitud. Pronto la noticia se difundió entre los medios de prensa peruanos, iniciándose una psicosis colectiva ante la inminencia de una catástrofe.

Un revelador informe preparado para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (llamada en ese tiempo AID, por sus siglas en inglés) por un equipo de especialistas muestra que, desde que se filtró la predicción, se difundieron rumores y temores respecto a la terrible posibilidad de un desastre de esa escala, este fue el contexto local que sirvió para la difusión de la afirmación de Brady (AID, 1982a). El caldo de cultivo que sirvió de plataforma de lanzamiento para la predicción estaba compuesto de la gran tensión que se generó por el fin del gobierno de los militares y la convocatoria a las elecciones de 1980. Algunos políticos y medios de prensa sospechaban que los militares no tenían la real

[65] Para la historia de Brady y su pronóstico sigo el texto de Susan E. Hough (2010). En 1970 el científico predijo un sismo de menor intensidad en los Estados Unidos, hecho que le dio rápida fama (*Caretas*, 23-8-2007, «Pronosticaron un cataclismo»).

[66] *Caretas*, 11-2-1980, «La predicción de Brady» (citado por AID, 1982a, p. 454).

intención de devolver el gobierno a los civiles, por lo tanto, nada más apropiado que el temor a un desastre para continuar al mando del país. El informe de la AID analiza cientos de notas de prensa que fueron remitidas a Washington con el objeto de estar preparados para la emergencia y las consecuencias políticas que traería el sismo. Las siguientes líneas muestran sus principales hallazgos.

A fines de 1979 la periodista Alfonsina Barrionuevo afirmó que el prestigioso ingeniero Julio Kuroiwa[67] y otros especialistas se encontraban en la ardua labor de «definir la fecha precisa de un terremoto que conmoverá a Lima en la década que viene. El ingeniero declaró que no era posible predecir la fecha exacta de un movimiento sísmico, pero «"sí se puede estimar dónde y cuál será su magnitud [...]" al referirse a las predicciones formuladas por el geólogo Brady, en el sentido de que en nuestro país habrá un sismo de graves consecuencias entre 1980 y 1981»[68]. El desastre no solo tendría consecuencias en la infraestructura y un alto costo en vidas humanas, también revelaría un problema de gestión gubernamental: «el problema, dice Kuroiwa, radica en saber cuáles serán las medidas más adecuadas que se deben tomar, ¿[a]visar a los limeños de la cercanía del peligro?, ¿[c]allar y que vivan tranquilos esperando, ignorando la espada de Damocles que tienen sobre la cabeza?»[69]. La nota continúa comentando las diversas medidas que deberían tomarse en caso de un sismo de alta intensidad, los planes de prevención y de evacuación que tendrían que practicarse de forma perenne para evitar hasta donde sea posible el costo humano.

En 1976 el mayor José Fernández Salvatecci y otros subalternos del Ejército intentaron un fallido intento de golpe de Estado en contra del presidente Francisco Morales Bermúdez con el objeto de reponer a Juan Velasco Alvarado en el poder. De acuerdo con el testimonio del capitán Eloy Villacrez, el movimiento reunió a una serie de oficiales y civiles de inspiración velasquista, encabezados por el mayor, quien, a su vez, sería posteriormente famoso por su investigación y la denuncia del delito de traición de otro personaje tristemente célebre de la historia peruana: el capitán Vladimiro Montesinos (Villacrez, 2002). Unos años después Fernández Salvatecci

---

[67] Su currículo profesional es muy extenso y exitoso. Profesor emérito de la Universidad Nacional de Ingeniería, con estudios de posgrado en sismología e ingeniería sísmica en el Japón, Estados Unidos y Gran Bretaña, desde el 2008 es considerado por el Centro Biográfico International de Cambridge entre los 100 científicos más destacados y lo incluyó en su salón de la fama. Sus diversas publicaciones han sido traducidas a diversos idiomas, entre ellos, *Disaster Reduction. Living in Harmony with Nature* es considerado por la ONU como uno de los libros de mayor interés en el tema. Véase su extensa hoja de vida (http://www.drperu-international.com/assets/julio-kuroiwa-cv-resumido.pdf, fecha de consulta: 29/1/2017).

[68] *El Comercio*, 12-12-1979, «El tramo Chancay-Nazca no está en peligro de hundirse en fosa marina dice experto» (citado por AID, 1982a, p. 444).

[69] *El Comercio*, 10-11-1979, «Terremoto en Lima» (citado por AID, 1982a, p. 441).

fundó y dirigió la revista *Teorema Militar*, desde la cual denunció un siniestro plan de «guerra psicológica», elaborado «por el psiquiatra a sueldo, Segisfredo Luza»[70]. Este médico posteriormente estaría vinculado con los numerosos psicosociales de la época del presidente Fujimori, incluso redactó un manual dedicado al tema. Villacrez cita como fuente el informe Brady, conocido con anticipación por el gobierno peruano y difundido en diversos medios de comunicación. El objetivo del plan consistía en crear el caos entre la población y elevar las tensiones para hacer violenta la campaña electoral, ampliar la represión y de ese modo disminuir la importancia política de la creciente izquierda peruana[71].

En el mes de febrero de 1980 la influyente revista *Caretas* dedicó un largo informe al respecto, en el cual el ingeniero Giesecke confirmó la información: «cuando uno habla con Brady y Spence se le ponen a uno los pelos de punta, pero, fíjense, estamos hablando de una teoría no comprobada, pero que no podemos descartar porque tiene fundamentos científicos»[72]. La revista llegó a comunicarse con el propio Brady, quien confirmó su hipótesis que, de producirse una sucesión de movimientos sísmicos a fines de 1980, toda la energía derivaría en el gran terremoto de julio de 1981: «si esa secuencia de precursores se inicia, entonces sí podríamos predecir con exactitud un terremoto para julio de 1981, y sería muy fuerte». Además, el terremoto «generaría una ola muy grande»[73]. Rápidamente estallaron los temores y las polémicas. Otros científicos sostuvieron la imposibilidad de predecir los sismos[74], mientras que algunos, más exaltados, calificaban de locura las afirmaciones de Brady o lo acusaban de ser parte de un plan para alejar la inversión extranjera[75]. Sin embargo, las autoridades comenzaron a prepararse seriamente para la posible emergencia.

Finalmente, llegó el mes de setiembre de 1980, que debía ser el de inicio de la cadena de sismos que destruirían la ciudad en el siguiente año. Durante varios días una buena cantidad de pobladores durmieron listos para la emergencia, asustados por la predicción de Brady, la cual nunca, felizmente, llegó a cumplirse; mientras

---

[70] *Perú21*, 29-9-2012, «Murió el psiquiatra Segisfredo Luza».

[71] *Teorema Militar*, 5-12-1979, «El plan del terror». También se puede consultar el texto de Roxana Canedo «En el terreno de los sismos» en *La Imagen*, 23-12-1979 (citados por AID, 1982a, pp. 442 y 445).

[72] *Caretas*, 11-2-1980, «La predicción de Brady». Semanas antes una nota de contenido similar también fue publicada por la revista *Oiga*, 11-1-1980, «La predicción de Brady» (citados por AID, 1982a, pp. 461 y 469).

[73] *Caretas*, 11-2-1980, «La predicción de Brady» (citado por AID, 1982a, p. 461).

[74] *El Comercio*, 17-2-1981, «Terremotos, nadie puede predecirlos» (citado por AID, 1982a, p. 477).

[75] *El Tiempo*, 20-2-1980, «Brady debe estar en la cárcel o manicomio de acuerdo a Ley de EEUU» y *La Prensa*, 27-11-1980, «¿Conjura para ahuyentar inversionistas?» (citados por AID, 1982, pp. 482 y 506).

que otros geólogos señalaban que no se produciría ningún terremoto en la zona[76]. En los meses siguientes el temor a que se produzca un gran sismo no desapareció del todo y en prevención se continuaron con los simulacros de evacuación y planes de contingencia[77]. Incluso, de acuerdo con la revista *Caretas*, en el mes de noviembre Brady se reunió en secreto con el presidente Belaunde para exponerle sus teorías[78]. Además, el mundo entero comenzó a interesarse en el caso. El 29 de enero de 1981 el prestigioso diario español *El País* publicó una nota en la cual se afirmaba que geólogos estadounidenses pronosticaban

> el peor terremoto del siglo, y que el temblor alcanzará el grado 9,9 en la escala de Richter [...] Brian Brady afirmó que los primeros temblores se registrarán cerca de Lima, a finales de julio, y alcanzarán entre 7,5 y 8 grados en la escala de Richter. Tras cuarenta días de enormes disturbios sísmicos se producirá otro temblor, hacia el 10 de agosto, cerca del epicentro de otro que ocurrió en 1974. Este alcanzará los 9,2 grados, y treinta días después se producirá un tercer temblor, el peor, que se extenderá desde la costa peruana hacia el centro-norte de Chile, con una intensidad de 9,9 grados[79].

Las noticias del supuesto sismo siguieron circulando con alguna regularidad en la prensa peruana, informaban de las diversas reuniones entre científicos peruanos y norteamericanos, discusión que llegó a preocupar a las autoridades del gobierno norteamericano y afectar con seriedad el flujo de turistas al Perú (AID, 1982, pp. 533, 549 y 566). El mayor impacto provino de la alarmista prensa local, la cual, a pesar de las objeciones científicas, presentó un cuadro apocalíptico resultado de un hipotético sismo. Por ejemplo, el diario sensacionalista *Última Hora* anunció que el pronóstico de Brady seguía en pie, relacionándolo con las profecías de Santa Rosa de Lima[80]. El movimiento sísmico sería de tal magnitud que causaría un

---

[76] Véase, entre los varios artículos citados, *Caretas*, 24-9-1980, «La falla de Brady» y *El Diario* de Marka, 18-12-1980, «Kuroiwa discute a Brady» (AID, 1982, pp. 488 y 517).

[77] *La Prensa*, 21-11-1980, «Restan seriedad a predicción de sismo 1980»; El Peruano, 27-11-1980, «5 millones de escolares efectuarán simulacro de evacuación por sismo»; *El Diario* de Marka, 15-12-1980, «No estamos preparados para una emergencia» (citados por AID, 1982a, pp. 503, 505 y 509). El plan de Defensa Civil se llamó «Alfa Centauro» y contemplaba una serie de medidas de gobierno luego de un grave sismo, *El Diario* de Marka, 12-4-1981, «¿Está Lima preparada para un terremoto?» (citado por AID, 1982a, p. 567).

[78] *Caretas*, 23-8-2007, «Pronosticaron un cataclismo».

[79] *El País*, 28-1-1981, «Predicen el peor terremoto del siglo en Perú para el próximo septiembre», http://elpais.com/diario/1981/01/28/sociedad/349484403_850215.html, fecha de consulta: 29/1/2017.

[80] Desde hace muchas décadas circula el rumor de una profecía lanzada por Isabel Flores de Oliva, canonizada como Santa Rosa de Lima, quien afirmó que la ciudad sufriría una grave destrucción por un maremoto y que los barcos llegarían al centro de la ciudad, distante alrededor de 10 kilómetros del puerto (*El Comercio*, 19-1-2014, «Relatos de temblores que los limeños no olvidarán»).

devastador tsunami que llegaría hasta el centro de la ciudad[81]. De acuerdo con una nota periodística el apocalipsis tenía fecha precisa: el 28 de junio de 1981, un mes antes de las fiestas patrias. La fecha no era una invención del diario, el dato provenía de una comunicación enviada por Brady el 20 de marzo de 1981 al embajador norteamericano en Lima, en la cual señaló la fecha de la catástrofe (AID, 1982b, p. 300). El 7 de mayo Brady informó nuevamente al gobierno norteamericano de la inminencia de un sismo a principios de julio, seguido de otros terremotos entre agosto y setiembre (AID, 1982b, p. 343).

Las viviendas que serían las más afectadas por los sismos se ubicaban en Barrios Altos, Rímac, Callao, la parte baja de Barranco y Chorrillos y los barrios marginales. La emergencia se complicaría por «la posibilidad de que tras el supuesto sismo se produzca una serie de actos punibles como robos pillaje, especulación, etc.»[82]. El conocido historiador Pablo Macera, entrevistado por la prensa, señaló que lo importante eran las reacciones sociales ante la predicción, más allá de su validez. Por ejemplo, de acuerdo con su opinión, el temor adquiría ribetes de lucha de clases: «el sismo ha desatado un cierto temor en las clases medias y en las clases altas. Además, de arroz, azúcar y leches envasadas, se empieza a acumular armas precautorias». El entrevistado sostenía que el temor al sismo era una proyección de las angustias de la sociedad peruana, imbuida en creencias religiosas y miedo ante el incierto futuro del país[83].

El diario hace hincapié en el estado de zozobra en que vivían los limeños, quienes ya se encontraban angustiados por la situación económica y por las dudas de si se produciría la transferencia del gobierno a los civiles. El peligro de este estado mental, de acuerdo con un psicólogo citado por el medio, era mayor entre los más pobres quienes «son los más desarmados anímicamente y los más golpeados por una serie de sucesivos fenómenos desestabilizadores […] señaló entre ellos a la crisis económica, a la desnutrición, a la desocupación, etc., que afectan precisamente y en mayor grado a estos sectores poblacionales»[84]. Los especialistas consideraban que este estado mental ocasionaba daño físico en las poblaciones y mermaba su capacidad productiva, especialmente entre los más pobres. Una encuesta de Peruana de Opinión Pública, encargada por la revista *Caretas*, reveló que la gran mayoría

[81] *Última Hora*, 7-4-1981, «Mar llegará hasta la capital» y *El Diario* de Marka, 12-4-1981, «Hay angustia por predicción de terremoto» (citados por AID, 1982a, pp. 552 y 564).

[82] *El Diario* de Marka, 12-4-1981, «Hay angustia por predicción de terremoto» (citado por AID, 1982a, p. 568).

[83] *El Diario* de Marka, 12-4-1981, «Hay angustia por predicción de terremoto» (citado por AID, 1982a, p. 568).

[84] *El Diario* de Marka, 12-4-1981, «Hay angustia por predicción de terremoto» (citado en AID, 1982a, p. 565).

de limeños (76%) estaban enterados de la predicción, especialmente entre los sectores más altos (90%) y que el 15% de los encuestados creía que sí se produciría el sismo. Por lo menos, de acuerdo con los datos, casi 30% de la población consideraba que la ciudad vivía un temor colectivo por causa de la predicción y 22% había alterado su vida cotidiana por causa de ella (AID, 1982a, p. 586).

Los temores aumentaron cuando el 20 de abril de 1981 una serie de sismos golpearon la región andina, primero fue afectado el departamento de Ayacucho y luego, el 25 de abril, la región del Mantaro, en el centro del país[85]. Rápidamente los expertos comenzaron a discutir la posible relación entre estos movimientos y las predicciones de Brady. La conclusión fue que los sismos en los Andes fueron causados por otras fallas geológicas, las cuales no tenían relación con la placa de Nazca[86]. Incluso el IGP, por medio del ingeniero Mateo Casaverde, realizó una exhaustiva evaluación sismográfica que tuvo como resultado la desestimación de las predicciones de Brady. El científico señaló que el geólogo se había comprometido a retirar sus afirmaciones si hasta el 15 de mayo no se producían los sismos previos a su gran predicción (AID, 1982a, p. 584). Finalmente, en una extensa comunicación dirigida al gobierno norteamericano, el instituto desechó los argumentos de Brady (AID, 1982b, p. 383). Sin embargo, la opinión pública no se tranquilizó del todo con esta noticia. Una encuesta de la revista *Gente* reveló que cerca de la cuarta parte de los limeños creía en la predicción, 36% sentía que no estaba preparada para la emergencia y, más importante, 66% estaba seguro que su vivienda sería muy afectada por el sismo (AID, 1982a, p. 590).

A mediados del año 1981 el temor comenzó a disiparse, no ocurrieron los sismos previos y la predicción comenzó a ser cada vez más cuestionada. Spence, uno de los colaboradores de Brady, le retiró su apoyo por medio de un informe entregado a la embajada norteamericana en Lima. El 15 de junio de 1981 el embajador Edwin Corr se reunió con el ministro del Interior, José de la Jara, y le comunicó la decisión de su gobierno de retirar el apoyo a la predicción de Brady (AID, 1982a, pp. 590-594). De acuerdo con la revista *Oiga*, el geólogo había informado a la embajada estadounidense en el Perú de la inminencia de un terremoto entre el 14 y 15 de junio, rápidamente el embajador se comunicó con el IGP, cuyas autoridades activaron las alarmas y los planes de contingencia, comunicándolas al presidente Belaunde y al alcalde de Lima, Eduardo Orrego (AID, 1982a, p. 600). Sin embargo, nada de lo anunciado ocurrió y pocos días después el científico anunció reajustes

[85] *El Comercio*, 21-4-1981, «Sismos han dañado 14 pueblos en Ayacucho» y 26-4-1981, «Sismo grado 6.5 tuvo epicentro en Rio Marañón» (citados por AID, 1982a, pp. 565 y 582).

[86] Correo, 22-4-1981, «Nada tiene que ver con las predicciones de Brady» (citado por AID, 1982a, p. 572).

en su predicción[87]. Pero en la semana posterior la región andina sufrió sismos de moderada intensidad (AID, 1982a, p. 604), situación que facilitó una nueva ola de temores. El diario *Expreso* señaló que Brady no había retirado su predicción totalmente (AID, 1982a, p. 613), incluso el prestigioso diario *The Washington Post* continuó informando de la posibilidad de un gran sismo anunciado por el geólogo (AID, 1982a, p. 621). A pesar de estas noticias, finalmente la predicción perdió su validez y los limeños comenzaron a olvidarse del inminente peligro de un sismo de gran intensidad.

Aunque la profecía de Brady no se cumplió, la sensación de temor ante un nuevo movimiento sísmico de gran intensidad no ha desaparecido. Por ejemplo, en abril del año 2016 el director del IGP, Héctor Tavera, recordó el conocido «silencio sísmico» de la costa de Lima, señaló que siempre hay que estar preparado para cualquier movimiento telúrico. Rápidamente la noticia fue presentada de forma alarmista: «IGP advierte que un terremoto de 8,8 grados podría afectar la costa central»[88]. El mismo especialista afirmó en un programa de televisión que el sismo de todas maneras ocurriría y superaría los 8,5 grados[89]. Si bien en parte este temor tiene su razón de ser en las condiciones geológicas de la costa peruana, también las angustias son amplificadas por los medios de comunicación, los cuales generalmente presentan de manera sensacionalista las opiniones de los científicos. Por ejemplo, en 1986 el diario *Extra* señaló que, de acuerdo con varios especialistas, de producirse un sismo de alta intensidad cientos de miles de personas morirían por el pánico que se desataría en las inmediaciones del Mercado Central, zona altamente tugurizada y sin vías de escape: «quedarían mortalmente atrapadas unas veinte mil personas, varios cientos, o tal vez miles, desde las plantas superiores tratarían de arrojarse pero una caída de cuatro metros lo menos que puede ocasionar es invalidez parcial o total»[90]. A este terrible escenario se le sumaría el dantesco incendio originado por los depósitos de combustible del sótano del mercado, más el estallido de cientos de balones de gas de los puestos de comida y restaurantes. Lima se había convertido en una trampa mortal.

[87] *La Prensa*, 21-6-1981, «Brady anuncia reajustes y que retira su predicción» (citado por AID, 1982a, p. 599 y 1982b, p. 416).

[88] Radio *Capital*, 20-4-2016, http://www.capital.com.pe/actualidad/igp-advierte-que-un-terremoto-de-88-grados-podria-afectar-la-costa-central-de-peru-noticia-955683, fecha de consulta: 30/1/2017.

[89] *América Televisión*, 4-11-2016, «Terremoto superior a 8,5 grados se dará en el Perú, advierte IGP», http://www.americatv.com.pe/doctor-tv/clips/terremoto-superior-85-grados-se-dara-peru-advierte-igp-noticia-61030, fecha de consulta: 30/1/2017.

[90] *Extra*, 10-6-1986, «Pánico mataría a más de 100 mil en mercado».

La violencia nuestra de cada día

No fue necesario esperar un gran terremoto para ser testigo de la destrucción física de la ciudad, otros eventos cumplieron ese macabro papel. Aunque posiblemente no tuvo el costo humano y material que sí traería un desastre sísmico en la ciudad, sí causó numerosas víctimas entre la población, así como cuantiosos daños en la infraestructura urbana.

En la primera parte de este libro mostré parcialmente el impacto de las acciones terroristas que afectaron a la ciudad durante la década de 1980; sin embargo, su presencia no se reduce a las arteras ejecuciones, atentados dinamiteros y otras acciones violentas. También ocasionaron una alteración en el comportamiento de los habitantes, difundieron el temor en la ciudad y generaron una serie de cambios en la vida cotidiana. Una suerte de psicosis colectiva se apropió de la población, indefensa ante los atentados y víctima de los apagones, producto de las voladuras de torres de alta tensión que por varios días causaban la falta de fluido eléctrico, a las que se sumaron las continuas detenciones de la policía y las Fuerzas Armadas, muchas de ellas arbitrarias. Además, este escenario complicó la sensación de inseguridad urbana, debida a la siempre presente delincuencia urbana, la cual atraía a los medios de comunicación.

Los atentados en la capital se incrementaron a partir del año 1982. El 26 de marzo apareció un grupo de personas que lanzaban vivas a Ayacucho, lugar de inicio de la lucha armada, en Lince, un distrito vecino al centro de Lima[91]. Lanzaron bombas incendiarias en el centro comercial Arenales y en Miraflores. Ese día se produjo el primer atentado en contra de torres de alta tensión; tres días después se produjo el segundo apagón en la ciudad. En agosto se produjo otro corte eléctrico de gran dimensión y varios ataques a entidades públicas y privadas —fueron afectados la Cancillería, el Banco Popular y una mueblería—. El 20 de agosto el gobierno decretó por primera vez el estado de emergencia en la capital por varias semanas, suspendió las garantías constitucionales de inviolabilidad de domicilio, el libre tránsito y a reunirse pacíficamente, cualquier persona podía ser detenida sin mandato judicial.

Ante la amenaza de una huelga policial que incluía a la GC, PIP y GR, instituciones que reclamaban mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo, el gobierno decretó nuevamente el estado de emergencia el 26 de mayo de 1983,

[91] Todo el recuento siguiente proviene de *El Diario* de Marka, 25-7-1983, «Lima transita acelerado camino de la subversión».

manteniéndose la situación por varios meses[92]. A partir del mediodía tanquetas y camiones tomaron el control de la ciudad, con soldados armados y listos para entrar en acción[93]. A las siete de la noche del día siguiente se produjo otro apagón y un ataque a la fábrica Bayer, lo que generó un gran incendio que exigió la evacuación de la población en dos kilómetros a la redonda, además de decenas de ataques en contra de delegaciones policiales, bancos y otras instituciones. La falta de fluido duró poco menos de dos horas, pero produjo gran pánico entre los habitantes, especialmente ante la vista de los mecheros que iluminaban la hoz y el martillo en los cerros aledaños a la ciudad[94]. Además, el terror se difundió por otros medios, numerosas llamadas anónimas amenazaban con atentados dinamiteros a embajadas, entidades públicas y privadas, centros de enseñanza y tiendas comerciales. Ni siquiera los domicilios privados estaban exentos de estas intimidaciones[95]. Algunas amenazas se cumplieron, por ejemplo, el 18 de junio se ejecutaron varias acciones en contra de edificios en la avenida Tacna, una de las arterias centrales de la capital, más otros atentados en la Plaza San Martín, el hotel Bolívar, la Municipalidad de Breña, diversos bancos y entidades públicas[96].

El 11 de julio se produjo un grave ataque en contra del local del partido de gobierno, Acción Popular, y el 21 de julio a las 7:14 p.m. una sistemática voladura de torres causó el apagón más grave desde el inicio de la violencia senderista. Los efectos de este apagón eléctrico duraron más de 24 horas, restableciéndose paulatinamente el servicio[97]. Las consecuencias de este atentado fueron diversas y fue considerado el más grave hasta ese momento[98]. La oscuridad se hizo presente totalmente en la ciudad, acostumbrada al alumbrado público; afectó los hogares y las calles, incluidos los semáforos, ascensores, servicio de agua, etcétera. Las actividades en la capital se paralizaron, cientos de miles de personas salieron desesperadamente a la calle con el objeto de conseguir algún medio de transporte para retornar a sus hogares. Estudiantes, trabajadores, vendedores, compradores, transeúntes, etcétera, sobrepasaban largamente la escasa red de transporte. Además, amparados por la oscuridad, se multiplicaban los robos, los atentados y las explosiones, lo que causó

[92] *La República*, 26-5-1983, «Decretan estado de emergencia», «Descontento logró unir a las fuerzas policiales» y «Aumento de sueldos y jornada de ocho horas reclaman los policías». Unas semanas antes el presidente Belaunde se manifestó a favor de la restauración de la pena de muerte (*La República*, 4-4-1983, «Belaunde pide restablecer pena de muerte en el Perú»).

[93] *La República*, 26-5-1983, «Salieron las tanquetas».

[94] *La República*, 28-5-1983, «90 minutos de pánico».

[95] *La República*, 29-6-1983, «Ola de 'terrorismo blanco' causa pánico en la capital».

[96] *La República*, 18-6-1983, «En el centro de Lima se produjeron explosiones».

[97] *La República*, 23-7-1983, «Voladura de seis torres dejó sin luz a la capital».

[98] *El Diario* de Marka, 22-7-1983, «Apagón de noche afectó desde Lima a Nazca».

víctimas en varios puntos de la capital; una estación de gasolina en el distrito del Rímac estuvo a punto de sufrir un atentado[99] y la tienda Oechsle de Miraflores sufrió un incendio[100]; mientras en el populoso distrito de San Juan de Miraflores se produjo una balacera entre las fuerzas del orden y los subversivos[101]. Como dice una nota de la época, «el apagón de anoche como nunca antes provocó el inmediato refugio de los transeúntes en los locales comerciales o su traslado a sus domicilios. Las líneas de ómnibus desaparecieron prácticamente de su circulación»[102]. En octubre una serie de atentados dinamiteros nuevamente causaron cortes de electricidad; uno de los objetivos era la planta de tratamiento de agua de la Atarjea, atentado que fue repelido por los efectivos policiales[103]. Este tipo de acciones de Sendero Luminoso incrementaron el control de la ciudad por parte de las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y Aviación), que distribuyeron destacamentos militares en las plazas más importantes, avenidas, puentes, etcétera[104].

El miedo se difundía, mientras que, casi el único canal de comunicación con el exterior eran los infaltables radios domésticos[105]. Sin las ventajas contemporáneas de los teléfonos móviles, con una red de telefonía doméstica que cubría relativamente pocos hogares, con la imposibilidad de utilizar los teléfonos públicos por causa de las filas de gente que los necesitaba y el temor a exponerse aún más en la calle, muchas familias vivían horas de angustia al tratar de conocer el paradero de sus seres queridos. Se temía que hubieran sido víctimas de los atentados, que estuvieran atrapados en los ascensores o que estuvieran detenidos por las fuerzas del orden.

En estas condiciones se hizo famoso un conductor de Radio Programas del Perú, Miguel Humberto Aguirre. Nacido en Chile, dueño de una voz profunda y pausada, tomaba el control del micrófono y trasmitía calma a la población. Era usual que las personas se comunicaran con la radiodifusora para solicitar que sus familiares no ubicados envíen algún mensaje a la radio o que alguien que sepa de su paradero avise al conductor radial. Este tipo de programas contribuyeron a amainar los miedos y recuperar paulatinamente la calma[106].

---

[99] *La República*, 23-7-1983, «Grifo de Amancaes fue otro de los objetivos».

[100] *La República*, 23-7-1983 «Incendio causó gran temor en Miraflores».

[101] *El Diario* de Marka, 22-7-1983, «Apagón de noche afectó desde Lima a Nazca».

[102] *El Diario* de Marka, 22-7-1983, «Confusión y pánico reinó entre limeños».

[103] *El Diario* de Marka, 16-10-1983, «Atentados dinamiteros conmocionan a limeños».

[104] *El Diario* de Marka, 22-7-1983, «FFAA controlaron anoche la ciudad».

[105] *La República*, 23-7-1983, «Sicosis de terror se vivió en Lima».

[106] Daissy Ochoa, «La luz en medio de los apagones», 21-11-2016, http://daissyochoa47.blogspot.pe/, fecha de consulta: 28/1/2017.

Entre 1986 y 1989 la violencia continuó con intensidad. Se atacaron locales partidarios del APRA, bancos, monumentos públicos y negocios privados[107]. A pesar de los intentos de las fuerzas del orden para controlar la ciudad, las explosiones continuaban amenazando y atemorizando a los limeños. Sus ecos podían oírse a kilómetros de distancia y su radio de acción abarcaba toda la ciudad, destruyendo propiedades, lanzando vidrios y residuos por los aires, hiriendo y matando a numerosas personas[108]. A fines de la década la ciudad era un territorio de guerra. Las tanquetas controlaban las calles y plazas, restringían el tránsito peatonal, evitaban no solo los atentados sino las continuas marchas de protesta[109].

El endurecimiento de las condiciones económicas, cada vez más difíciles para los más pobres, causó un incremento de huelgas, paros y marchas en la capital. Se convocaban protestas que bloqueaban las principales avenidas de la ciudad, las cuales provocaban la reacción represiva del gobierno, lo que aumentaba la violencia en las calles. Pocos meses después de instalado el presidente Belaunde, el 15 de enero de 1981, la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) convocó a un paro nacional cuya represión causó tres muertos. El 19 de setiembre se produjo el segundo paro desde el retorno a la democracia y el 10 de marzo de 1983 se realizó otra paralización a nivel nacional[110]. Las movilizaciones se multiplicaron por la ciudad, diversos gremios en conflicto utilizaban las calles y plazas con el objeto de presionar a las autoridades el cumplimiento de sus mejorar laborales. Mineros, empleados públicos, obreros, profesores, etcétera, marchaban constantemente en la ciudad y fueron duramente reprimidos por las fuerzas policiales[111]. Las calles se vieron afectadas por los gases lacrimógenos, persecuciones y disparos de perdigones; mientras que los policías golpeaban y detenían a todos a quienes se interponían en el desalojo de las calles, incluidos parlamentarios y dirigentes[112]. El 15 de setiembre se desarrolló una protesta en contra del alza de los pasajes, varios grupos bloquearon las calles y marcharon hacia el centro de Lima donde recibieron una dura represión, al mismo tiempo que los manifestantes lanzaban bombas caseras[113]. El 14 de octubre de 1983 una marcha que tenía como objetivo llegar al palacio de gobierno se

[107] *Expreso*, 4-2-1986, «Otra madrugada de terror»; *Extra*, 14-8-1986, «Quince explosiones alarmaron Lima».

[108] *Extra*, 14-8-1986. «Quince explosiones alarmaron Lima».

[109] *Expreso*, 25-2-1989, «Tanquetas del ejército patrullaron la ciudad».

[110] *El Diario* de Marka, 19-3-1983, «El sétimo paro desde el histórico 19 de julio» y *La República*, 11-3-1983, «El paro superó todas las expectativas de centrales».

[111] *El Diario* de Marka, 24-5-1983, «Marcha partirá de plaza Dos de Mayo»; 21-9-1983, «Miles de trabajadores se movilizan hoy en Lima»; 27-9-1983, «Paro, movilizaciones y asambleas populares en Lima y provincias» y 13-10-1983, «Ministro Leguía admite pliego laboral».

[112] *La República*, 28-9-1983, «Parlamentarios y dirigentes de izquierda también fueron reprimidos».

[113] *El Diario* de Marka, 15-9-1983, «El pueblo protesta».

convirtió en una batalla campal, con un saldo de 300 detenidos y muchos heridos, entre ellos un periodista de televisión alcanzado por una esquirla de bomba[114].

En cierto momento los métodos de protestas de las marchas laborales o cívicas se mezclaron con algunas prácticas violentas de los subversivos, lo que exacerbó la represión policial. Más allá de la certeza o no de la infiltración senderista entre los sindicatos y gremios, lo importante es que de una manera u otra los habitantes estaban expuestos a las consecuencias de la represión al estar ubicados en la esquina equivocada en el momento errado. Por ejemplo, una marcha de trabajadores estatales fue acompañada del bloqueo de calles con el incendio de neumáticos; en otra un artefacto estalló en las cercanías de la Catedral de Lima. La represión policial hacía uso indiscriminado de los gases lacrimógenos y de las escopetas de perdigones, afectaban frecuentemente a inocentes, entre ellos, a los hijos de los ambulantes que laboraban en esas zonas[115].

Una situación de esta naturaleza, que muestra la gravedad de la violencia e inseguridad urbana, se produjo el 1° de noviembre de 1989. Diversos partidos políticos convocaron a una gran marcha a favor de la paz para el día 3 de noviembre, el mismo día que SL había convocado a uno de sus temibles paros armados. Una columna senderista marchó por la avenida Manco Cápac (La Victoria), pronto se desataron explosiones y una balacera entre los subversivos y las fuerzas del orden. Los policías comenzaron a disparar y perseguir a los senderistas, quienes se mezclaron con unos centenares de evangélicos que estaban orando en la plaza cercana. La violencia fue muy intensa, se produjeron explosiones que afectaron a los transeúntes, entre ellos resultó herido un vendedor de periódicos, llamado Sabino Loyola. Durante horas las casas, callejones, restaurantes y otros locales fueron intervenidos en busca de sospechosos, lo que tuvo como resultado varias decenas de detenidos, tres muertos y trece heridos[116].

El relato de la señora Eulogia Torres, vendedora ambulante de dulces, es un buen testimonio de los peligros a los que se veían expuestos comerciantes y transeúntes. Luego de iniciarse el tiroteo la vendedora se escudó detrás de su carretilla, protegiéndose en el piso de las balas que cruzaban por todas partes. Ella declaró que los policías disparaban a cualquiera que corría por la plaza, mientras intentaba huir fue testigo de la muerte de un par de jóvenes, salvándose gracias a una vecina que le permitió refugiarse en un edificio. Al intentar preservar su vida, abandonó su carretilla, la cual posteriormente recuperó y retornó a su lugar de

[114] *El Diario* de Marka, 14-10-1983, «Accidentada marcha a Palacio realizan gremios en conflicto» y «Hieren en la pierna a reportero de TV».

[115] *La República*, 21-9-1989, «Bomba estalla cerca a Catedral».

[116] *La República*, 2-11-1989, «Feriado de terror en avenida Manco Cápac».

venta horas después. Su reflexión fue tan sencilla como profunda: «hasta ahora no entiendo por qué nos matamos unos a otros, no sé qué está pasando»[117].

Los efectos de estos temores se potenciaron por las medidas tomadas en medio de una ciudad en guerra. En el fatídico año 1992 eran frecuentes los constantes rumores, llamados «bolas» por la población, que alertaban de atentados senderistas en diversos puntos de la capital, de represalias contra quienes asistan a espectáculos o a la popular Feria del Hogar, toma de algunas radioemisoras, saqueos de negocios y mercados, etcétera[118]. Para prevenir o solo como una reacción nerviosa, autoridades locales y vecinos comenzaron un sistemático bloqueo de calles que convirtió a Lima en una ciudad cercada y enrejada. Los apagones eléctricos, la ausencia de vigilancia policial por las noches y el legítimo temor a ser víctima de la violencia contribuyeron a que con y sin autorización se utilicen cercas y otros medios para cerrarle el paso a vehículos y transeúntes.

Las famosas rejas, tranqueras y casetas de vigilancia particular se multiplicaron en la capital, pues impedían el ingreso de personas extrañas[119]. Solo en Lima cuadrada se calculaban más de cien barreras, las cuales protegían edificios públicos y empresas privadas «debido a la intensidad de atentados terroristas en la capital»[120], esto hacía casi imposible el tránsito vehicular a partir de las ocho de la noche. Lima se convirtió en un laberinto intransitable, esto fue posible debido la ausencia de un ente que controle eficazmente las calles, no por exceso de reglamentación, sino por la imposibilidad de cumplirlas por parte de las autoridades y ofrecer seguridad a sus ciudadanos[121]. Las tranqueras eran utilizadas por todo tipo de instituciones privadas y públicas, personas y negocios, todo aquel que temía ser víctima de un atentado se preocupó por contar con medidas de protección tales como tranqueras, cercos eléctricos, vidrios a prueba de explosiones y puertas blindadas, lo que contribuyó a profundizar la sensación de una ciudad en guerra[122]. La situación empeoraba cuando, por causa de la amenaza de una bomba u otra eventualidad, la policía decidía cerrar las calles y generaba enormes embotellamientos en la ciudad[123].

Como se puede observar en la figura anterior, la ciudad era un territorio ocupado por las tranqueras y el miedo, sensaciones agravadas con otra medida que alteró el ritmo normal de la vida en la ciudad: los constantes toques de queda que

[117] *La República*, 2-11-1989, «¿Qué está pasando? ¿Por qué nos matamos unos a otros?».

[118] *Expreso*, 29-7-1992, «Rumores pretendieron crear pánico en Lima» y «Aseguraban que se había tomado una radioemisora».

[119] *Expreso*, 7-6-1992, «Medio Lima bloqueada por temor y seguridad de la población».

[120] *Expreso*, 7-6-1992, «Tránsito sufrió anoche el peor caos».

[121] *Expreso*, 9-6-1992, «Lima es un laberinto para los miles de automovilistas».

[122] *Expreso*, 2-8-1992, «Tranqueras por todos lados».

[123] *Expreso*, 15-5-1992, «Embotellamiento en calles limeñas generó un caos en el centro».

se aplicaron desde la década de 1970[124], pero que con la subversión se convirtieron en casi la norma de vida. De acuerdo con un diario, sus resultados fueron ambiguos: entre 1986 y 1987 no menos de treinta personas fallecieron por violar la medida[125]. En 1992 se restringió el tránsito de vehículos desde las diez de la noche hasta las cinco de la mañana, con el objeto de prevenir los constantes atentados[126]. La novedad consistía en que solo se prohibió el paso de automóviles, motocicletas y triciclos, los transeúntes podían circular libremente[127]. Si bien se informó de la disminución de atentados[128], esta medida alteró completamente la vida nocturna de la ciudad, muchos locales tuvieron que cerrar sus puertas o adelantar sus horarios de atención, razones por las cuales se planteó reducir el horario el toque de queda durante los fines de semana[129].

Como se mencionó en la primera parte, en julio de ese mismo año 1992 se desataron varios atentados en la ciudad, entre ellos los coches bomba en Tarata y en el local del ILD; sin embargo, pocas semanas después, el 12 de setiembre fue capturado el líder de SL, Abimael Guzmán. Si bien los atentados no desaparecieron, su intensidad disminuyó, lo que permitió la lenta recuperación de la vida urbana. El saldo de más de una década de violencia fue profundo. No solo murieron miles de personas, también se alteraron las costumbres, cambiaron el espacio y las identidades urbanas. Los hechos de violencia se desarrollaron en medio de grandes cambios sociales que motivaron una serie de opiniones acerca del pasado, presente y futuro de la ciudad, tal como se verá en la siguiente sección.

La ciudad tomada[130]

Estas preocupaciones sobre el pasado, presente y futuro de la ciudad se concretan en las diferentes opiniones acerca de las plazas más emblemáticas de la ciudad, las

---

[124] Un breve recuento de los toques de queda: del 5 al 24 de febrero de 1975, del 2 de julio de 1976 al 7 abril de 1977, del 18 de mayo al 8 de junio de 1978 y del 10 de febrero de 1986 al 28 de julio de 1987. Véase *Expreso*, 9-6-1992, «Toque de queda vehicular es insólito en el Perú».

[125] *Expreso*, 9-6-1992, «Toque de queda vehicular es insólito en el Perú» y 10-6-1992, «Último toque de queda causó una treintena de muertos».

[126] *Expreso*, 9-6-1992, «Desde mañana habrá toque de queda vehicular».

[127] *Expreso*, 9-6-1992, «Toque de queda vehicular es insólito en el Perú».

[128] *Expreso*, 18-6-1992, «Disminuyó el índice de atentados en Lima».

[129] *Expreso*, 28-6-1992, «Reducirán el toque de queda durante los fines de semana» y 18-6-1992, «Decaen ingresos de negocios nocturnos».

[130] Primero Silva (2008) y luego Vega Centeno (2013) hicieron notar esta característica de la ciudad, producto de una población flotante que acudía al centro por diferentes razones. Una buena parte de ellos realizaban actividades informales en las calles de Lima, ambulantes que fueron responsabilizados del caos y decadencia de la ciudad. Un ejemplo emblemático era el antiguamente aristocrático Jirón

cuales eran percibidas como invadidas por diversos personajes que las utilizaban como mercado o escenario para actividades ilegales. La sensación de invasión y de reconfiguración violenta de Lima comenzó a profundizarse al transcurrir la década de 1980 y al difundirse sus efectos en otros espacios de la ciudad. Por ejemplo, Miraflores, de acuerdo con el diario *Extra*, era invadida en las horas de la noche por multitud de niños y niñas, muchas de ellas dedicadas a la prostitución[131].

Se consideraba que las plazas San Martín, Unión, Dos de Mayo y el Parque Universitario eran los lugares más frecuentados por los vendedores, charlatanes y todo tipo de embaucadores[132], pero la que fue considerada la más afectada era la Plaza San Martín[133]. Desde 1980, como señala Silva, se intentó en diversos momentos remodelar el centro para devolverle su antigua prestancia europea, especialmente el eje La Colmena-Plaza San Martín, incluido el simbólico Jirón de la Unión, espacio de reminiscencias coloniales y de señoríos aristocráticos (2008, p. 13). Esta calle también había sido tomada por nuevos ocupantes quienes ofrecían un sinfín de mercaderías importadas, introducidas luego de la apertura comercial del año 1980[134]. En los siguientes años una y otra vez los ambulantes, masa compuesta por diversos tipos de vendedores, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos y ancianos, serían infructuosamente desalojados de ese espacio[135]. En 1983 la popular calle era considerada una suerte de pequeño infierno cotidiano, tal como lo relata una nota del diario *La República* escrita por J.J. Vega Miranda. La calle era transitada por «gente humilde que acude quizá en busca de distraer en algo la desesperanza –algunos en familia– pero la mayor parte paseando su soledad por esa arteria que no hace muchas décadas era punto de reunión de la flor y nata de Lima». Los ambulantes en doble fila prácticamente ocupaban toda la calle, ofrecían todo tipo de productos importados, mientras que diversos charlatanes, supuestos magos, predicadores, expertos en sexualidad humana y medicina tradicional, pugnaban por atraer a los caminantes. El autor de la nota menciona, con cierta nostalgia,

de la Unión, que pasó de ser el escenario de las diferencias sociales a un gran mercado en el que todos, peatones y vendedores, se igualaban entre sí (2013, p. 133). Véase también Bonilla, Castro y Zevallos (2013).

131 *Extra*, 4-1-1986, «La otra Miraflores».

132 *El Comercio*, 18-5-1980, «Charlatanes invaden las principales plazas de Lima Metropolitana».

133 La plaza es uno de los espacios más estudiados por parte de historiadores, arquitectos y otros especialistas. Su historia es emblemática por la relación que tiene con el centenario de la Independencia durante el gobierno de Augusto B. Leguía y los proyectos de modernización urbana. Uno de los últimos trabajos dedicados a este espacio es el de Johanna Hamann (2015).

134 *El Diario* de Marka, 20-9-1980, «Jirón de la Unión, sucursal del mercadillo de Tacna».

135 *Correo*, 20-5-1983, «Otra vez hay ambulantes en el Jirón de la Unión».

las épocas de oro del Jirón, cuando las tiendas ofrecían elegantes y costosos productos importados y personas de importancia se paseaban por sus cuadras[136].

En 1983 el alcalde Orrego anunció un plan de reconversión del espacio urbano de La Colmena, con el objeto de convertirla en bulevar, pero conservando su elegancia europea (Silva, 2008, p. 14)[137]. El plan no logró ser aplicado y el siguiente alcalde, Alfonso Barrantes, no continuó con esas ideas, concentrándose en la reforma del transporte. Como señala Silva (2008), solo en 1989, con el alcalde Jorge del Castillo, se logró prohibir el ingreso de unidades de transporte público[138]; mientras que recién en 1997, con Alberto Andrade, se logró la recuperación del centro. Esta larga letanía de fracasos en su recuperación, contribuyó a difundir la sensación de decadencia del espacio urbano. Como causas se encontraban, por un lado, la enorme proliferación de tugurios, vetustas casonas divididas al *infinitum*[139]; por otro lado, se consideraba que la desidia de los ciudadanos contribuía con el deterioro de los monumentos y plazas[140]. Wiley Ludeña (2009) señala que el proceso de subdivisión de las propiedades en el centro se inició con la propia oligarquía, la cual en su marcha hacia al sur iniciada en las primeras décadas del siglo XX, las utilizó como fuente de rentas mientras residía en las nuevas zonas destinadas para la clases media y alta.

La Plaza San Martín fue inicialmente considerada un ejemplo de la modernización de Lima y de la ciudad aristocrática, un espacio que a partir de la década de 1940 comenzó a ser utilizado como escenario político y la asistencia a los mítines como un termómetro de la popularidad de los partidos[141]. Sin embargo, en 1980 el uso proselitista competía con la ocupación del lugar por parte de numerosos personajes que componían una suerte de «corte de los milagros [...] vendedores ambulantes, faquires, jugadores de fútbol y lustrabotas, oficia también de mingitorio y playa de estacionamiento»[142]. Incluso era muy conocida por la presencia de niños y niñas que mendigaban o robaban en sus inmediaciones. Este nuevo escenario humano, tal como lo señalé anteriormente, entraba en tensión con el significado

---

[136] *La República*, 26-9-1986, «El Jirón de la Unión. Los infiernillos dominicales».

[137] Armando Silva indica que pensar en la ciudad es «recordar el nombre evocador de ciertos lugares», los cuales pueden ser calles, plazas, monumentos o locales particulares. «Algunos imaginarios urbanos desde centros históricos de América Latina» (2001, p. 401).

[138] *Expreso*, 5-3-1989, «Asean Plaza San Martín».

[139] *Correo*, 30-10-1983, «Esta Lima que se cae».

[140] *Correo*, 3-7-1983, «Nuestras plazas y parques se desmoronan».

[141] En 1945 el Frente Democrático Nacional utilizó este espacio. Luego, desde 1956, Acción Popular y el APRA la emplearon como escenario de sus mítines. En mayo 1980 allí se realizaron las reuniones finales para la elección presidencial del PPC, APRA y AP (Ricardo del Castillo, *El Comercio*, 21-4-1980, «Plaza: San Martín ánfora viviente»).

[142] Stefan. Roggenbuck, «Historia social de la infancia callejera limeña» (1996).

que la Plaza tenía para algunos sectores de la población: «por cierto, pues, su imagen actual es muy distinta a la que tenía en los días espléndidos del Palace Concert o de la Casa de Cartón, reminiscencias de otras épocas que traen a la memoria nombres de José María Eguren, Abraham Valdelomar y otros intelectuales»[143].

Como señala con propiedad Silva, la Plaza fue considerada como el mejor ejemplo de la decadencia de la ciudad. Gracias a su centralidad y diseño, la confluencia de vías y el alto flujo peatonal, se convirtió en un escenario ideal para «el desarrollo de un sinnúmero de oficios realizados en plena vía pública. Esto no solo agravaba su deterioro físico, sino que degradaba aún más su valor como espacio 'decente' de la ciudad» (2008, p. 10)[144]. De acuerdo con su análisis, el reclamo de un sector de la prensa consistía en que se había convertido en una feria de pueblo, con personajes que poco tenían que ver con lo limeño. La prensa que añoraba el pasado de la Plaza señalaba que alrededor del monumento se encontraban

> los inefables ambulantes, que todo lo ensucian y que de todo hacen escarnio sin importarles nada ni nadie [...] por la noche, el espectáculo adquiere perfiles realmente repudiables. En el momento en que se acumulan los vendedores de comida preparada y de golosinas. Bien se comprenderá lo que esto significa dada la incultura de gente congregada. Hay sectores en que los desperdicios se amontonan de tal manera que se tiene la impresión de haberse trasladado a las inmediaciones del mercado mayorista –prototipo del desaseo– o a un lugar donde se arroja la basura[145].

Esta percepción fue apoyada por medio de la opinión de algunos ciudadanos, presentada como una opinión general por el diario *El Comercio*, quienes señalaban que la plaza debería recuperar su prestancia y su significado histórico. Por ejemplo, el empleado público Eduardo Valcárcel declaró que la plaza, «es el corazón de la ciudad, su plaza más representativa y da pena que se vea atestada de charlatanes y ambulantes a todas horas del día. Pienso que la Guardia Civil debe establecer una vigilancia permanente para evitar estos desmanes que desdicen de nuestra cultura y civismo»[146]. Los personajes que utilizaban el lugar eran considerados «folclóricos», daban un mal aspecto a la plaza y desnaturalizaban la función original del espacio público; mientras que, de acuerdo con otro entrevistado, el economista Alberto Gómez, «allí está el monumento al Generalísimo don José de San Martín, fundador

143 Ricardo del Castillo, *El Comercio*, 21-4-1980, «Plaza: San Martín ánfora viviente».

144 También se puede consultar a David Blaz (2010).

145 José Augusto Jiménez, «Así está la Plaza San Martín» en *El Comercio*, 14-5-1980 (citado por Silva, 2008, pp. 10-11).

146 *El Comercio*, 3-7-1980, «Ciudadanía apoya erradicación de ambulantes en Plaza san Martín».

de la República y lo menos que se puede hacer en su homenaje es mantener una plaza bien presentada y dispuesta a ser admiración de propios y extraños»[147].

La malhumorada nostalgia criolla no era la única perspectiva acerca de la plaza. Como he señalado anteriormente, la posición melancólica-futurista coincide en la descripción, pero discrepa acerca del porvenir del espacio. Los rostros humanos que poblaban la plaza eran la manifestación de las distancias socioeconómicas del Perú y hasta cierto punto democratizaban el uso del espacio, «la comparsa la encabezan los miserables; poco a poco irán vislumbrándose los humildes empleados de las tiendas o librerías o mozos, para dar paso a los muy de moda oficinistas»[148]. Las actividades se alternaban con el pasar de las horas; en la mañana se vendían objetos para turistas, los charlatanes ofrecían diversos productos o recolectaban dinero, también se alquilaban revistas pornográficas y aparentemente en las noches aumentaba la venta de alimentos, tales como los choclos con queso, las pancitas y anticuchos, humitas; mientras que al amparo de la oscuridad transitaban prostitutas y homosexuales[149]. Desde esta perspectiva es menor la condena del presente de la plaza y no se añoraba su pasado aristocrático, hay cierta complacencia en describir cómo este universo humano reta el significado de la plaza y, a diferencia de la nostalgia criolla, no se menciona su importancia como símbolo patriótico.

Si bien la Plaza San Martín se convirtió en el espejo de la crisis, no fue el único lugar invadido por las nuevas actividades. Como señala Hamann, la propuesta urbanística desarrollada entre la República Aristocrática y el Oncenio de Leguía tuvo como eje central las plazas Dos de Mayo, San Martín y el Parque Universitario. El presidente Leguía utilizó como recurso legitimador los monumentos públicos y por medio de la prolongación de la avenida La Colmena (hoy Nicolás de Piérola), se consolidó el eje que iba desde la plaza Dos de Mayo al Parque Universitario, que reemplazaba el antiguo eje colonial de la Plaza Mayor por uno moderno, reflejo de la «Patria Nueva» (Hamann, 2015, p. 171)[150]. En la década de 1980 los tres puntos nodales fueron utilizados intensamente por diversas actividades que distaban de las deseadas por las autoridades y buena parte de la opinión pública. Por ejemplo, el parque se convertía en una suerte de Babel en la que proliferaban charlatanes, predicadores religiosos y vendedores de diversos productos que hacían olvidar la función original del espacio y sus monumentos. Los usuarios, a pesar de su diversidad, desde la perspectiva melancólica-futurista, eran capaces de dividirse el uso del espacio: «cada gremio respeta los linderos del otro y entre congéneres se

---

[147] *El Comercio*, 3-7-1980, «Ciudadanía apoya erradicación de ambulantes en Plaza san Martín».

[148] *El Diario* de Marka, 30-9-1980, «El circo de la Plaza San Martín» (citado por Silva, 2008, p. 12).

[149] *El Diario* de Marka, 30-9-1980, «El circo de la Plaza San Martín».

[150] Véase también Ludeña (2009, pp. 146-147).

ceden el ruedo»[151]; insinuaban una tolerancia democrática de la cual carecía el resto de la sociedad. De acuerdo con Martínez, en ese pequeño espacio convivían personas de diversos orígenes sociales y geográficos, rodeados de una masa de transeúntes y posibles clientes. Mientras que, para la mirada nostálgico-criolla, el parque había sido invadido por vendedores de comida que en condiciones antihigiénicas amenazaban la salud de la capital y reclamaban su rápida erradicación[152]. En 1986 la situación del Parque Universitario no era nada mejor. Augusto Brener lo consideraba en estado terminal, invadido por «vendedores de fritanga, choros al escape y proteicos homosexuales, el Parque Universitario sobrevive somnoliento a los embates de la *cholificación acelerada* con su entorno de histórica casona, cripta de los héroes y mudas efigies de Hipólito Unanue y otros prohombres»[153]. La nota rememora el pasado estudiantil de la plaza, el coliseo de gallos de la calle Sandia y los aficionados, los bandidos que cayeron enfrentándose heroicamente a las fuerzas del orden, etcétera; añoraba un entorno humano que se encontraba muy distante de la lacerante realidad de «un reloj [el de la torre del parque, donativo de la colonia alemana para el Centenario de la Independencia en 1921] que agoniza sobre un parque que no muere»[154].

Del mismo modo, en un tono claramente defensivo, se denunciaba el deterioro de la plaza Dos de Mayo y su entorno de edificaciones de estilo francés, decadencia que se expresaba en los aullidos permanentes «de altavoces que vilipendian al ángel de la victoria», al dejar de lado su importancia como monumento, al tiempo que su uso político se intensificaba. La plaza era considerada no solo «una nostalgia y un alarde arquitectónico prístino. Es piedra de toque del orgullo limense que va siendo sistemáticamente mofado y atacado por detractores, que últimamente han desatado campañas equívocas y maniáticas»[155]. El deterioro de la plaza llegó a tal punto de que las filtraciones e inundaciones producto de las vetustas conexiones de agua y desagüe amenazaban hundirla completamente[156].

Incluso fuera del mencionado eje central se generó otro circuito compuesto por las plazas Ramón Castilla, Dos de Mayo y Bolognesi. La primera de ellas, antiguamente llamada Unión, fue rebautizada a fines de los años sesenta y se incluyó

151 Gregorio Martínez, «Parque Universitario: torre de Babel», *El Caballo Rojo*, 25-5-1980.

152 *El Comercio*, 8-5-1980, «Paradita en Parque Universitario».

153 *La República*, 9-2-1986, «Réquiem por el Parque Universitario». El énfasis es mío.

154 *La República*, 9-2-1986, «Réquiem por el Parque Universitario».

155 Felipe Buendía, «Plaza 2 de Mayo», *El Comercio*, 22-7-1980. El autor fue un conocido literato, pintor y cineasta, autor de numerosas crónicas de la ciudad y un declarado amante de su tradición (http://felipebuendia.blogspot.pe/, fecha de consulta: 20/7/2016).

156 *Extra*, 29-12-1986, «Plaza Dos de Mayo amenaza hundirse». La nota menciona la alerta señalada por el prestigioso ingeniero y sismólogo Fernando Oshiro Higa.

un monumento ecuestre al presidente Castilla. Este espacio correspondía a otro eje que provenía de la zona norte de la ciudad, las avenidas Caquetá y Alfonso Ugarte, y finalizaba en la plaza Bolognesi, inaugurada en 1905. La plaza Castilla también fue 'invadida' por vendedores ambulantes y diversos personajes que fueron descritos, desde la mirada melancólica-futurista, como el futuro rostro popular de la ciudad:

> obreros […], empleadas domésticas, familias enteras de modesta condición social, se dan cita desde muy temprano en la plaza y permanecen en ella hasta las 8 de la noche, hora en que se retiran a sus hogares. Ellos no pueden buscar sitios fuera de Lima, ni siquiera pueden acudir a los parques zonales porque 'hasta el pasaje urbano está caro'. En la plaza hay de todo. Están los juegos de habilidad, los aros que se arrojan a botellas de guinda, conservas, gaseosas, cajetillas de cigarros y chicles […] También hay una extraña ruleta de la suerte, [y] el infaltable juego del cuy[157].

La virulencia de la crisis económica se percibe en los premios de los juegos ofrecidos en la plaza, consistentes en su mayoría en alimentos, y se evidencia también en el caso de una señora que llevaba un pan francés como único almuerzo para sus hijos, mientras que diversos personajes como profesores de artes marciales, de música, alquiladores de revistas pornográficas, payasos, vendedores de comida, fotógrafos y charlatanes pugnaban por concitar el interés del público. La comida que se vendía reflejaba esa mixtura, uno de los platos favoritos era el tallarín con tuco, papa a la huancaína y «una porción de ceviche encima, todo mezclado»[158]. De todos los que hacían uso comercial de este espacio el único que contaba con autorización municipal era el fotógrafo, quien pagaba mensualmente el impuesto respectivo. La mirada menos sancionadora e interesada en el resultado de estas nuevas prácticas, distantes del autor de la nota, pero inevitables por causa de la emergencia de nuevas fuerzas sociales, se evidencia en la descripción de las personas que visitaban el espacio. Por ejemplo, se señala que «rodeando a la plaza, ubicadas en las pocas bancas que hay, están decenas de jóvenes que departen y también flirtean. Allí nacen no pocos romances. Como también acaban otros. El domingo popular en la plaza Castilla cumple también las necesidades de amistad y roce social»[159].

La avenida Alfonso Ugarte fue casi completamente ocupada por una diversidad de ambulantes, especialmente los vendedores de carteras. En esta populosa calle, que conecta la zona norte con el centro de Lima, se pueden encontrar varios locales públicos, tales como los hospitales Arzobispo Loayza y San Bartolomé, la sede del

---

[157] *El Diario* de Marka, 21-7-1980, «Un domingo popular en la Plaza Castilla».

[158] En 1986 a esta combinación de le conocía como «mostro». Eloy Jáuregui, «Seviches y fritangas en serie», *La República*, 30-11-1986.

[159] *El Diario* de Marka, 21-7-1980, «Un domingo popular en la Plaza Castilla».

diario *El Peruano* y el emblemático Colegio Guadalupe. Además, se interconecta con las avenidas Venezuela, Arica y Brasil, parte de las grandes arterias de la ciudad que permiten el tránsito hacia el Callao, Breña, Pueblo Libre y Magdalena. En la década de 1980 en la avenida Alfonso Ugarte se podían encontrar en venta una gran variedad de carteras y bolsos femeninos, exhibidas en colgadores de madera que atraían a gran cantidad de mujeres gracias a los bajos precios de los productos y la creciente demanda de este tipo de objetos, no solo por coquetería o vanidad, sino, de acuerdo con una nota periodística, por su provecho «como elemento útil [para ir] al trabajo, a estudiar o cuando hay que cumplir otras actividades»[160]. Esta proliferación de vendedores solo se reducía cuando se acercaba el 7 de junio y la celebración del Día de la Bandera en la plaza Bolognesi, en esos días, se limpiaba el entorno del monumento, se reasfaltaban las pistas, se reparaban las veredas y, por último, se desalojaba a los vendedores. Sin embargo, ellos se reinstalaban en las primeras cuadras de la avenida Brasil, «en las inmediaciones de la Iglesia de La Inmaculada. Allí se [instalaron] comerciantes ambulantes de comida que hasta han colocado mesas y sillas en plena vía pública, sin que las autoridades municipales hagan nada por corregir esta situación»[161].

La percepción de un espacio urbano de origen oligárquico, pero que era conquistado por las masas populares de origen inmigrante está claramente reflejada en la nota de Raúl Quiñonez, publicada en el célebre *El Caballo Rojo*. Luego de pasar revista a los proyectos urbano-modernizadores desde la época colonial y el siglo XIX en el eje plaza Unión (Ramón Castilla)-Parque Universitario, el autor menciona el uso político de las plazas y el paulatino abandono de la elite de sus residencias en el centro. Sin embargo, en consonancia con la postura melancólica-futurista, considera que el deterioro urbano y el traslado de las elites, «así como la articulación vial de esa zona a los grandes conos barriales del norte y sur de la ciudad, han configurado el carácter popular del sector». A pesar del caos y la superposición de actividades, nadie se escandalizaba de la heterogeneidad de uso del espacio, producto de la proliferación de comercio ambulatorio, que «satisface innumerables deseos y necesidades al aire libre […] Así, en términos de ambulantazgo y necesidad es que la Plaza Unión hasta el Parque Universitario *se ha producido la apropiación por parte de las clases populares del espacio urbano*»[162]. El articulista rechazaba las afirmaciones fatalistas de los arquitectos de la época, quienes consideraban que esta ocupación destruía el centro de Lima; por el contrario, encontraba en esta 'invasión' una enorme potencia: «las organizaciones políticas del campo popular

[160] *Correo*, 15-4-1983, «La Avenida Alfonso Ugarte: el gran mercado de carteras».

[161] *Correo*, 5-6-1983, «Ambiente limpio para el 7 de junio».

[162] *El Caballo Rojo*, 27-7-1980, «Lima: de la Unión al Parque, un eje popular». El énfasis es mío.

tienen su 'espacio natural' en este eje urbano». Quiñonez clasificó el espacio en función del uso y clase social, destacaba la presencia popular en el eje. Como señala en la nota, el uso del espacio «para marchas y manifestaciones para localizar allí organizaciones políticas, sindicales, así como de investigación popular no hace sino expresar esta identificación clase-espacio», el espacio público era el mejor escenario para esta lucha de clases.

Nuevos rostros, nuevos mundos

Esta nueva ocupación del espacio, por las consideradas en ese momento 'masas populares', fue incluida dentro del proceso mayor de expansión de la informalidad en la ciudad. La diversidad de actividades económicas, muchas de ellas nuevas en el entorno urbano, fue considerada la responsable de las transformaciones caracterizadas por el desorden, evasión de los controles y deterioro de la ciudad. A mediados de la década de 1980 se afirmaba que «las actividades informales o fuera del circuito oficial han asaltado las calles como una respuesta original de un gran sector marginado por la oficialidad, sin posibilidades de trabajo estable, vivienda y acceso a los servicios más elementales»[163]. El citado informe del diario trata de distanciarse de la interpretación del ILD al afirmar que estos informales, que pretendían ser incorporados al capitalismo liberal individualista por De Soto, operaban bajo una lógica diferente:

> Si bien el carácter individual o familiar de la actividad informal puede conducir a un personalismo, existen otros factores de mayor arraigo entre los informales que marcan su propio sendero. Entre ellos, el desarrollo de estrategias que se nutren de las costumbres de la sociedad andina. Asimismo, frente a la precariedad y las situaciones adversas se genera una solidaridad que los unifica en asociaciones y otros organismos para defender lo que con tanto esfuerzo han logrado. Así, la propuesta del nuevo empresario podrá tener cierto eco, pero existe un sustento real de la propia idiosincrasia del informal que se puede evidenciar en esta serie de reportajes[164].

Se puede observar una relación informalidad-migrante, reflejada en el título de la nota introductoria: «Economía chicha: puro ingenio popular». El resto de artículos pasa revista a las nuevas formas de negocios que utilizaban el espacio urbano, lo que deshace el mito del «empresario popular» al encontrar que muchos

[163] *La República*, 30-11-1986, «Informal soy y no me compadezcas». Este fue un especial dedicado al tema publicado en el suplemento *Estilo*. La editora fue Aurora Bravo y la publicación contó con artículos de la autoría de Eloy Jáuregui, entre otros redactores. Como es obvio, el título del informe especial parafrasea el conocido vals «Cholo soy», adaptado e interpretado por Luis Abanto Morales.
[164] *La República*, 30-11-1986, «Informal soy y no me compadezcas».

de los ambulantes eran en realidad intermediarios de negocios mucho más grandes. Tal era el caso de los vendedores de ceviche que se encontraban en diversas calles de la ciudad, aparentemente todos los comerciantes se abastecían del mismo lugar: un negocio al por mayor en San Pablo (La Victoria) que les ofrecía a consignación la mercadería, además de una carretilla color verde. Los espacios de venta de ese potaje se situaban en las inmediaciones del Mercado Central, la plaza San Francisco, el Palacio de Justicia, la avenida Grau, entre otros puntos clave de la capital. Lo que era evidente para Jáuregui es que los vendedores eran de origen inmigrante y seguidores de las nuevas expresiones culturales producto de las transformaciones, de las cuales también eran agentes de cambio. Así, uno de sus entrevistados, Julio Chunga, de 19 años y originario de Cora Cora, obtenía con la venta de comida el dinero suficiente para «comprar un par de zapatillas cada dos meses y no perderse un domingo de baile con el grupo Pintura Roja»[165].

La venta de comida no fue la única actividad que transformó el uso de las calles. El informe revisa la venta de ropa en La Parada, definido como un «Hong Kong cholo», el Jirón de la Unión, la plaza Castilla, Polvos Azules, Polvos Rosados y algunas calles miraflorinas. Este proceso de influencia general de la informalidad en la ciudad se evidenciaba en distritos de clase media, tales como algunas zonas de Surquillo y San Borja, en los cuales se encontraba la venta callejera de muebles, adornos, plantas, etcétera. Estos hechos también demostraban que los vendedores no eran únicamente los migrantes andinos, «así, en navidad, podemos observar a lo largo de la avenida Larco, cómo gringuitos y gringuitas venden su alma al diablo». En los dos últimos distritos mencionados se ofrecían, aparte de ropa y zapatos, «juguetes y variados artículos de contrabando que hacen la delicia de los compradores también informales, buscadores incansables de artículos raros a bajo precio y con algún sello de distinción». Las diferencias entre los vendedores ambulantes y los de Polvos Rosados eran étnicas y de clase, mientras los primeros eran «de mal aspecto y derrotan con un perfume poco ortodoxo», los segundos «transpiran jabón, perfume chileno, el pelo tiene brillo reacondicionador»[166].

Efectivamente, por lo menos desde la navidad de 1980 la avenida Larco fue invadida por vendedores de diferentes características a los ambulantes del centro. De acuerdo con un policía municipal, entrevistado por *El Diario* de Marka[167], «los blanquitos se habían vuelto locos [...] están jugando a la venta de productos». Con seguridad la crisis también había golpeado a los hogares de clase media, obligándolos a buscar nuevas fuentes de ingresos, pero los comentarios del reportero

[165] *La República*, 30-11-1986, «Informal soy y no me compadezcas».
[166] *La República*, 30-11-1986, «Informal soy y no me compadezcas».
[167] *El Diario* de Marka, 24-12-1980, «Y ahora los niños bien se dedican a vender contrabando».

apuntaban a deslegitimar este tipo de ambulantes. Por ejemplo, menciona el caso de Marilú Suchard, «una linda gringuita, pecosa, que descalza y con un polo color rojo pregonaba la calidad de un vino chileno cosecha de 1963 que tenía en la mano». El comentario de la vendedora es que también «a los que ustedes llaman burgueses» les llegó la crisis. Según ella, era una estudiante de sociología que también aplicaba una observación participante: «de paso veo de cerca el problema ambulatorio». Tanto reportero como entrevistada sintieron la necesidad común de explicar su presencia en las calles, la cual no podía justificarse solo por la necesidad de sobrevivir. Otro 'blanquito' señalaba que le iba bien en el negocio: Jaime Risso combinaba la venta de patines con el gusto por la tabla hawaiana. Por otro lado, otras personas catalogadas como «blancas» seguían ofreciendo sus productos, «como divirtiéndose, sin el apremio de los auténticos ambulantes por conseguir el sustento diario». Además, la nota desliza una percepción del género que se relaciona con elementos de clase y etnicidad. Miraflores era un barrio de clase media y se describe a las mujeres dentro de una estética femenina «aceptable» para el reportero, diferente a las descripciones de mujeres realizadas en otros barrios. Así, el reportero se acercó a un par de muchachitas que le llamaron poderosamente la atención: «hermanitas, rubias, tostaditas, de imponentes cuerpos, venden telas»; su motivo para vender era absolutamente trivial. De acuerdo con la nota, ante la pregunta de para qué estaban vendiendo productos, contestaron «para vacilarnos en el verano, preguntón». No todos asumían la nueva actividad de manera tan despercudida, cual feria escolar. Cuando el periodista quiso fotografiar a otras personas obtuvo como respuesta desde una sonrisa que más sonaba a burla nerviosa, hasta una limeñísima mentada de madre. Una señora cuarentona, «pero enterita», vendía polos para el verano, al recibir el flash del reportero alcanzó a exclamar. «¡Ay, me jodiste! [...] ¡Si publicas la foto me mata mi marido!». Quizá el reportero asumió que salir en el diario retratado de ambulante tenía algo de indecente e inventó la historia o realmente la mujer mencionada tenía esa percepción; en ambos casos el resultado es el mismo: ser ambulante, aún si tienes necesidades reales, tenía algo de indecente y te estigmatizaba[168]. Esta imagen denigrante del ambulante será la base de la reconfiguración del espacio urbano en los años noventa (Morán, 2013, p. 70).

No solo se transformaron las calles, también las edificaciones comerciales fueron afectadas por la informalidad. Si bien el proceso de construcción de galerías comenzó con la edificación de la elegante galería Boza, inaugurada en 1956 en el Jirón de la Unión, no sería hasta la década de 1980 cuando ese tipo

[168] *El Diario* de Marka, 24-12-1980, «Y ahora los niños bien se dedican a vender contrabando».

de construcción se extendió por otras calles y distritos de Lima[169]. Debido a este fenómeno, el informe tildó de «país galería» al Perú[170], metáfora de una nación tan caótica como diversa, hacinada, dispuesta a aguantar casi de todo: «hoy el país es una galería: con sótano de mercado y techos de boutique»[171]. Quizá un aspecto interesante es que esta ocupación de las calles también permitió una actividad considerada más 'decente' y que podía ser estimada como positiva para la ciudad: la venta de objetos de arte y artesanías. Los ambulantes se ubicaban en La Colmena y el Parque Central de Miraflores (o parque Kennedy), a veces eran perseguidos por la policía municipal; en otros lugares, como en el parque, contaban con el apoyo de la Municipalidad por considerarla una actividad capaz de atraer el turismo. La ocupación de las calles sí tuvo como resultado el desarrollo de nuevos espacios dedicados, por ejemplo, al teatro o las artes. En 1980 Jorge Chiarella dedicó una nota a la labor de la actriz Raida Callalle, quien fue una de las pioneras del teatro de la calle y utilizaba frecuentemente la Plaza San Martín como escenario de sus actos[172]. También se establecieron vendedores de libros en Amazonas (Villanueva, 2004) y pintores ambulantes en calles como La Colmena, la Plaza San Martín, el óvalo de Miraflores y el parque Kennedy[173]. Un caso interesante es el del jirón Quilca, en el cual se estableció el «Bulevar de la Cultura», espacio que los vendedores de libros conquistaron con el objeto, de acuerdo con sus testimonios, de difundir la cultura en la capital (Blaz, 2010, pp. 25-26).

El informe evidencia una ansiedad respecto al futuro de la ciudad, el cual se expresa, por ejemplo, en la sensación de que estas actividades le «han dado un rostro raro a la ciudad»[174]. Pero si de nerviosismos se trata, posiblemente el mayor temor presente en las notas de este tiempo, es la angustia de que la ciudad se convierta en una suerte de «gran La Parada o Tacora». Desde esta perspectiva la ciudad dejaría de cumplir su función esencial de hábitat urbano (Augé, 1993, p. 41). Estos espacios fueron considerados los peores ejemplos de la informalización de las actividades económicas. La Parada es mencionada por lo menos desde fines de la década

[169] Actualmente se considera a Lima como una ciudad policéntrica: «notablemente, estos se han consolidado en un espacio no muy lejano del antiguo centro histórico, conformando un policentrismo centralizado, aunque con especializaciones en sus funciones urbanas: un centro financiero en San Isidro, otro comercial en Miraflores y otros industriales-comerciales en Gamarra y Mesa Redonda» (Gonzales de Olarte & Pozo Segura, 2012, s/p).

[170] Matos Mar la calificó de «ciudad bazar» (1984, p. 60).

[171] *La República*, 30-11-1986, «Informal soy y no me compadezcas».

[172] *El Comercio*, 14-12-1980, «El teatro sin paredes».

[173] Enrique Sánchez Hernani, «La biblioteca por los suelos», *La República*, 24-8-1986. Véase también *Correo*, 3-3-1983 y 3-7-1983.

[174] *La República*, 30-11-1986, «Informal soy y no me compadezcas».

de 1960 como un espacio en el que las mafias, el hampa, la miseria y la degradación humana se daban cita de forma cotidiana (Patch, 1973). En 1980 era concebido como una suerte de espejo microscópico del Perú, espacio que, más allá de contar con el local del mercado mayorista, ocupaba varias cuadras a la redonda, sin límites determinados, una especie de enorme monstruo con tentáculos que controlaban las calles[175]. Era un gran mercado en el que se podían oír voces en castellano, aimara y quechua, en medio de la multitud de personas y mercaderías destinadas a alimentar a la ciudad, comercio dominado por las mafias. La esencia del desconcierto de la perspectiva melancólica-futurista consiste en que se reconocían la extrema explotación y proletarización de los trabajadores, pero las personas eran incapaces de organizarse: eran el lumpen proletariado. Una de las personas entrevistadas por De los Ríos, señaló, ante la pregunta por la posibilidad de asociarse, que «no se quiere saber de sindicatos o comités, y si no hay unión nada se hace, y así explotan más, porque aquí en La Parada, señor, hay explotadores y ponen a otros a trabajar en su lugar por miserias o mandones que se apoderan de la distribución de las aves o de las papas, y los mafiosos se aprovechan y joden a más no poder»[176].

Esta incapacidad para organizarse y enfrentar la explotación diferencia a los trabajadores de La Parada y Tacora de los nuevos informales, pero al mismo tiempo es el horizonte con el que estos últimos pueden ser observados, la «lumpenización» podría convertirse en el punto de llegada de los ambulantes de la ciudad. Ambos espacios, La Parada y Tacora —rebautizada como Tacora motors por el continuo tráfico de autopartes robadas—, compartían el sino trágico de sus actividades, a los jóvenes de la zona no les quedaba otra cosa que continuar en el mundo de la delincuencia: «La Parada, Tacora Motors, es la constancia, pese a todo, de una fuerza que no se repliega ante la desesperanza. La huella agrietada rebelde ante la injusticia. La protesta soterrada que clama en el movimiento acertado de la chaira [cuchillo de delincuente]. En la carrera desaforada luego del violento jalón de cartera»[177]. En ese ambiente, la juventud solo puede contemplar desgracias, canaliza y malgasta su energía en actividades delictivas:

> tanta efusión, tanta energía de animales jóvenes [sic] y bellos, tanto entusiasmo e ideales por estudiar y trabajar y ser como todos los hombres que viven en el resto de la ciudad y aparecen en las películas, es una carga que va creciendo y se acrecienta en la desesperación , en la frustración, en esa actitud que hay que imaginar del joven que siendo joven para dar una larga vida de provecho y pro bien, como lo pregonan los libros y las encíclicas y los discursos politiqueros,

---

175 Edmundo de los Ríos, «La Parada: cárcel abierta», *El Caballo Rojo*, 12-10-1980.

176 Edmundo de los Ríos, «La Parada: cárcel abierta», *El Caballo Rojo*, 12-10-1980.

177 Edmundo de los Ríos, «La Parada: cárcel abierta», *El Caballo Rojo*, 12-10-1980.

> ser cercenado en sus sueños y así aparece el ladronzuelo sagaz, la imagen del gran inocente en medio de una cárcel donde nadie, ni el ministro de Justicia, dice una promesa de 'reorganización'. Ahí, en esas cárceles abiertas, no siquiera hay la lejana imagen de la esperanza[178].

El redactor sentencia con dureza que «aquí, los jóvenes son ya los decrépitos de toda la miserable indolencia». La Parada y Tacora, que, según el autor, sobrevivirían a todos los cambios posibles, son percibidos como los destinos de la informalidad llevada al extremo. Esta angustia continuaría manifestándose en los siguientes años. Un artículo de Christian Vallejo escrito en 1983 refleja esta percepción: «Tacora es un centro comercial extraído de *Las mil y una noches* (junto a *Ali Babá y los cuarenta ladrones* encontramos la lámpara de *Aladino*), nuestro mercado persa de lo inusitado y lo imprevisto […] en Tacora se dan la mano los más ágiles rateros, que desprenden relojes al vuelo de la carrera, con los comerciantes más hábiles»[179]. El autor describe la peligrosidad de la zona, fue testigo de robos y de la variedad de productos de segunda mano ofrecidos —ropa, calzados, botellas, cintas de video, autopartes, discos, etcétera—, muchos de muy dudosa procedencia. Su etnografía descubre tanto a un anciano vendedor, enfermo y semiparalizado, como a muchos niños que intentaban sobrevivir en medio de la dureza de la vida cotidiana en la zona:

> hay niños que aún no conocen la vida, niños que despertarán – luego de haber nacido – contra el suelo, que conocerán el espesor de una capa de mugre antes de saber qué, más allá un puesto más allá, se repara una cama, se vende un colchón, una almohada, una sábana, todo, cualquier cosa, desde un lapicero que no da más tinta hasta el irreparable camión del Ministerio de Agricultura completamente pintado de verde, con las ventanas condenadas, sin llantas, inservible, pero que se vende[180].

La Parada y Tacora podrían ser el futuro de la informalidad en Lima, los ambulantes de las calles de la capital vendían todo lo que podían, también en condiciones poco apropiadas y arriesgaban el futuro de sus hijos. Los lugares mencionados, conocidos por todos los limeños, fueron usados como fantasmas que se acercaban de forma amenazadora a toda la ciudad. Desde 1984, desde el lado académico, Matos Mar mostró claramente el proceso:

> nuevos fenómenos concurren a alterar no solo el rostro de la vieja y tradicional ciudad, sino de toda el área metropolitana. Hay nuevos centros de gravedad

---

178 Edmundo de los Ríos, «La Parada: cárcel abierta», *El Caballo Rojo*, 12-10-1980.
179 *La República*, 9-12-1983, «¿Sabe Ud. lo que pasa en Tacora?». En 1986 se publicó otra nota con una descripción muy similar. Ángel Páez, «Rastros y rostros de La Parada», *La República*, 29-8-1986.
180 *La República*, 9-12-1983, «¿Sabe Ud. lo que pasa en Tacora?».

> como los representados por los grandes bazares callejeros que distribuyen mercaderías y productos en Polvos Azules y Amazonas, Emancipación-Abancay, la Avenida Grau, el Mercado Central, el Jirón Gamarra, la Avenida Aviación, Tacora, la Diagonal de Miraflores; los mercados y paraditas de Ciudad de Dios y Comas, La Parada, Caquetá y otros muchos desparramados por doquier (1984, p. 80).

Una nota del diario *Extra* de 1986 señalaba que estaban apareciendo peligrosos «tacoritas en Lima […] hasta en el residencial Monterrico»[181]. Estos nuevos mercados fueron considerados sucursales de los originales, como si fueran parte de un plan de expansión:

> Hace casi seis meses que los comerciantes de 'La Parada', mercado vecino no menos afamado por la delincuencia reinante, contrataron a ex reclusos con el propósito de vigilar a sus ocasionales clientes y evitarles que sean robados o asaltados. Ello sucedía a plena luz del día, a vista y paciencia del gentío y de la policía […] hace poco tiempo empezaron a brotar nuevos 'Tacoritas' en diversos puntos de la gran capital peruana. Primero en la avenida Grau, luego en Emancipación […], después un grupo en la avenida Pachacútec en San Juan de Miraflores, otro en la primera cuadra de la avenida Colonial […] uno más en Villa María del Triunfo y por último en el residencial Monterrico […] los pobladores están alarmados por la presencia de gente de dudosa conducta y constantes robos de piezas de automóviles y viviendas[182].

La sensación de un 'cáncer' que contaminaba a la ciudad se agravó porque estos ambulantes sí estaban agrupados: «los de San Juan de Miraflores están organizados bajo un sindicato y solo se asocian quienes tienen carga de familia y un hombre soltero no puede hacerlo. No ocultan que mucha parte de los robos van a parar a esos mercadillos, pero cada quien defiende su zona señalando que 'en Tacora de La Victoria si venden puro robo'»[183]. Esta asociación La Parada-Tacora-robos fue utilizada por el diario *Extra* para calificar a algunos espacios de la ciudad, independientemente de si efectivamente vendían o no productos robados. En 1986 el diario denunció la existencia de una «escuelita del crimen» en La Parada, manejada por peligrosos homicidas quienes 'educaban' a más de veinte menores en «asaltos, arrebatos, manejo de armas punzo cortantes, como chavetas y verduguillos, reveló la policía. Los menores estaban amenazados de muerte y los drogaban para que salieran a cometer delitos»[184].

---

[181] *Extra*, 7-6-1986, «Peligrosos 'Tacoritas' aparecen en todo Lima».

[182] *Extra*, 7-6-1986, «Peligrosos 'Tacoritas' aparecen en todo Lima».

[183] *Extra*, 7-6-1986, «Peligrosos 'Tacoritas' aparecen en todo Lima».

[184] *Extra*, 24-10-1986, «Policía descubre 'Escuelita del crimen'»

Ese temor fue el preludio de la expansión de este mal por la ciudad. Por ejemplo, una nota de 1989 señalaba que Tacora se había mudado al Jirón de la Unión, debido a que en ese lugar un sinnúmero de ambulantes vendían relojes, ropas, video casetes pornográficos, etcétera, que denunciaban eran objetos provenientes de robos[185]. Días después se insistió en que varias calles de Lima tenían las mismas características, los vendedores se ganaban la vida al estafar a los clientes con productos de baja calidad o dañados[186]. Es posible que esta campaña del diario haya tenido como objetivo difundir el temor en la ciudad como consecuencia de las operaciones de erradicación de la delincuencia en Tacora y de la movilidad de los vendedores a otros espacios. Algunos meses antes el mismo diario informaba de la enorme venta de productos robados, de la alta incidencia de la delincuencia en la zona y de la incapacidad de la policía de controlar la situación[187]. En la segunda semana de febrero de 1989, la policía finalmente allanó esas calles de manera sorpresiva. Cientos de policías fuertemente armados irrumpieron en el mercado, capturaron a 500 supuestos delincuentes, decenas de prostitutas, drogadictos y traficantes de drogas[188]. Como efecto de este proceso de desalojo en 1992 se consolidó en la avenida La Colmena un mercadillo muy similar a Tacora, bautizado como «La Cachina», espacio de venta de ropa usada, supuestamente de «gente que se fue a Miami», pero que era el mercado de ropa y diversos objetos hurtados o rematados por gente necesitada de dinero. Como señala Luis Miranda en su nota acerca del lugar: «por eso, *cachinear* es un verbo sagrado que, hoy, a multitudes saca de apuros […] unos dejan su casaca por cinco soles y otros luego, la compran por diez». Se podía conseguir ropa de diversa calidad y precios, siempre muy por debajo de los que se solicitaban en los negocios formales[189].

Como hemos visto, los migrantes fueron considerados unánimemente los responsables del deterioro urbano por causa de sus actividades económicas realizadas en las calles, sus malas costumbres de higiene o porque, sencillamente, su presencia daba mal aspecto a la antigua ciudad aristocrática. En 1981, 42% de los habitantes de la ciudad era de origen migrante, siendo los más numerosos los ancashinos (10,6% de la población total de la ciudad), los migrantes provenientes de la sierra

185 *Extra*, 19-7-1989, «Tacora se muda al Jirón de la Unión».

186 *Extra*, 22-7-1989, «Tacoras de Lima cuadrada hacen su agosto».

187 *Extra*, 7-2-1989, «Supermercado del robo en Tacora».

188 *La República*, 12-2-1989, «Allanan Tacora y capturan 500 delincuentes». El control del espacio demoraría varios años más, los vendedores y los demás personajes retornaban a las mismas zonas a retomar sus actividades. Recién en 1998 se pudo controlar el espacio, con una agresiva intervención en la zona por medio de maquinaria pesada y un fuerte resguardo policial (*La República*, 27-11-1998, «Tenebrosa zona comercial de Tacora ya es historia»).

189 *Expreso*, 17-5-1992, «La moda está tela» y Otta, 2014, p. 92.

de Lima (10,5%), ayacuchanos (8,4%) y los originarios de Junín (8,4%). La gran mayoría de ellos (81%) se encontraban en los pueblos jóvenes y en «los suburbios de la zona urbana, [ocupan] las fincas ruinosas, los conventillos, los callejones miserables; en fin, las zonas tugurizadas de la ciudad»[190]. Muchos de estos migrantes vivían en condiciones muy por debajo de lo humanamente tolerable. Por ejemplo, se ofrece el testimonio de Luciano Rojas, campesino del Cusco, quien en busca de un supuesto futuro mejor para su familia solo consiguió empeorar su vida, su esposa murió de tuberculosis, él se accidentó como albañil y no le ofrecieron atención, y sus hijos no pudieron continuar estudiando. Si no se regresaban, según su declaración, era porque no contaban con recursos[191].

Algunos diarios difundieron la imagen de una ciudad tomada por el incontenible éxodo de los migrantes. Hay que recordar que durante la década de 1980 y hasta 1992 se produjo el desplazamiento de poco más de 400 000 personas por causa de la violencia política, una buena parte de ellos llegaron a Lima intentado escapar de ese flagelo. Sin embargo, en 1983 el desplazamiento no era percibido como la principal causa de la migración. Los informes de corte sensacionalista del diario *La República* listaban a la pobreza, la desocupación, los desastres naturales y el abandono de las zonas por parte del Estado como las causas de la llegada de un millón de provincianos por año a la capital, y señalaban en último caso el desplazamiento por causa de la violencia:

> los migrantes vienen en oleadas cada vez más numerosas de todos los rincones del territorio nacional, motivados por el afán de encontrar trabajo o mejorar su educación, tal como lo hicieron en épocas pasadas sus antecesores. Pero, en esta oportunidad también huyen de los flagelos de la naturaleza, que en los últimos meses han castigado con toda su violencia el norte del país, con torrenciales lluvias e inundaciones, al centro, con huaycos y aluviones, y al sur con una espantosa sequía. Y como si esto no fuera suficiente, otros cientos están llegando a la capital de la República, aterrorizados por todas las formas de violencia que se están dando en Ayacucho y Huancavelica[192].

El tenor dramático de la nota complementa, en definitiva, la imagen de una ciudad tomada. De acuerdo con los autores, los provincianos se trasladaban a Lima a bordo de buses destartalados y atestados de pasajeros, arribaban en condiciones muy precarias. Los testimonios de los recién llegados remarcan la situación de abandono de sus pueblos de origen, algunos lograron acceder a mejoras económicas

[190] *El Diario* de Marka, 12-2-1983, «Lima, bien jodida es».

[191] *El Diario* de Marka, 12-2-1983, «Lima, bien jodida es».

[192] Roberto Mejía Alarcón y Christian Vallejo, «Ante abandono, miseria y desastres naturales: éxodo hacia Lima», *La República*, 24-7-1983.

en Lima; mientras que la gran mayoría todavía estaba esperando su redención. La nota señala que la gran mayoría de los recién llegados no contaba con mayor educación, sin preparación para «servir de fuerza de trabajo a la industria citadina», por eso terminan marginalizados, «creando un grave problema a la ciudad»[193]. En el mismo informe se entrevista al reconocido geógrafo Javier Pulgar-Vidal, quien señaló que la migración, aparte de a las dificultades del clima, también se debía al conocimiento que tenían los migrantes de que en Lima han «prosperado nuevas formas de subsistencia, ente ellas la de vendedor callejero o ambulante, que en realidad es un comerciante fijo que expende en la vía pública, sin pagar local ni otra obligación». Su opinión era que el déficit de servicios públicos sería grave en el futuro y, además, el efecto de la migración en la cultura era negativo: «estamos en un mundo descompuesto, que se va acentuando. Los alumnos son cada vez menos estudiosos y cada vez menos respetuosos. La gente vive resentida porque carece de servicios, no tiene comida, ni trabajo»[194].

La invasión de Lima no fue producto únicamente de la migración por causa de los desastres ambientales, la pobreza, la violencia o la crisis agraria. También los conflictos laborales causaron la migración forzada de muchos trabajadores y sus familias, quienes llegaban en largas y sacrificadas marchas con el objeto de encontrar la solución a sus reclamos, la cual podía demorar meses, si es que finalmente se resolvían. Tal fue el caso de los mineros de Canaria, Cata Acarí y del Águila, quienes se mantenían impagos por meses. En mayo de 1983 tomaron desesperadamente la avenida Tacna y luego la Plaza de Armas, con el objeto de llamar la atención de las autoridades para entregar su pliego de reclamos[195]. Mientras residían en la ciudad, acampaban en diversos lugares y salían a recolectar fondos para mantener a sus familias. Según cálculos de un medio de comunicación, los mineros de Cata Acarí y sus familias, eran cerca de 1800 personas, para junio de 1983 ya tenían cerca de siete meses en Lima y los del Águila, sumaban unas 500 personas. Todos estaban sufriendo de graves problemas alimenticios, enfermedades y de hacinamiento[196]. Se calculaba que entre las familias de Cata Acarí se encontraban cerca de 300 niños, quienes acompañaban a sus padres en la recolección de fondos en los autobuses y micros de la ciudad, abandonaban la posibilidad de estudiar y se exponían al maltrato de algunos habitantes de la capital. De acuerdo con el diario, la sensación de invasión se acrecentó con estos migrantes forzados, quienes a veces eran

[193] *La República*, 24-7-1983, «Ante abandono, miseria y desastres naturales: éxodo hacia Lima».

[194] *La República*, 24-7-1983, «Ante abandono, miseria y desastres naturales: éxodo hacia Lima».

[195] *El Diario* de Marka, 10-5-1983, «Mineros ocuparon Av. Tacna».

[196] *El Diario* de Marka, 5-6-1983, «Lima es peor que el socavón». Por lo menos quince personas ya habían fallecido, y cerca de la mitad estaba amenazada por la tuberculosis (*El Diario* de Marka, 9-9-1983, «¡Los mineros en Lima se mueren de hambre!»).

rechazados de las unidades de transporte: «se suben a los micros buscando los 100 soles generosos y alguna imprecación también de inconscientes, que aseguran que en Lima ya hay mucho provinciano y que lo mejor es que se vayan para su tierra»[197].

Para una buena parte de los inmigrantes la ilusión de encontrar en Lima una mejor vida, era derribada rápidamente por la realidad. Muchas de las mujeres trabajaron de domésticas y sufrían abusos por parte de los patrones y sus hijos; otras se casaron a temprana edad y comenzaron a trabajar como ambulantes o en la venta de comida en las calles, así sobrevivían a duras penas. Muchos de los hombres se emplearon como ayudantes, cargadores, ambulantes, etcétera; varios de ellos continuaron estudiando en Lima para lograr una mejora en sus vidas. Incluso uno de los entrevistados, Juan Prado, natural de Ayacucho, sufrió muchas veces discriminación y fue objeto de sospechas por causa de su origen[198]. La explotación y el maltrato eran frecuentes, especialmente en contra de los niños migrantes que laboraban en las fábricas clandestinas. Ese fue el caso de un taller de confecciones ubicado en el distrito de El Agustino, el cual utilizaba la mano de obra de niños provenientes de Puno en condiciones casi de esclavitud. En la intervención policial encontraron varios niños en estado de desnutrición, más allá de los desmentidos por parte del dueño del local[199].

A pesar de esta dura realidad la migración a la ciudad continuó y los diarios siguieron mostrando la sensación de un flujo incontenible, asociado con la creación de nuevos pueblos jóvenes y de una «cholificación» de la ciudad[200]. El periódico *Expreso* la denominó «la presencia de las provincias en Lima», masa de campesinos indígenas que transformaron la capital. Aquí queda claro que el efecto de su llegada fue cambiar el imaginario de la ciudad, pues hasta la llegada de los migrantes «Lima no era sino un solo jirón: el Jirón de la Unión, el Palais Concert, al que se refería Abraham Valdelomar, reduciendo al Perú a un establecimiento bohemio […] Ya no existe el limeño, sino el limeño provinciano»[201].

A fines de la década de 1980 la migración se intensificó por el recrudecimiento de la violencia en las zonas de altura y la selva central[202].

Además, estos migrantes, especialmente los niños, eran fácilmente víctimas de las enfermedades, tales como la tuberculosis, sarna, parasitosis, etcétera. Muchos de los niños eran explotados, terminaban como alcohólicos y drogadictos, «y al no

[197] *El Diario* de Marka, 9-9-1983, «¡Los mineros en Lima se mueren de hambre!».

[198] Marlene Macedo, «¿Por qué no vivo en mi provincia?», *La República*, 13-8-1983.

[199] *La República*, 30-3-1986, «Hay más talleres en Lima donde explotan a niños provincianos».

[200] César Terán Vega, «Lima: la invasión de la miseria», *La República*, 3-8-1986.

[201] *Expreso*, 26-10-1986, «Las locas ilusiones me sacaron de mi pueblo…».

[202] Úrsula Picón, «Huyendo de la guerra», *La República*, 2-10-1989.

tener dinero para mantener sus vicios, se dedican al pillaje naciendo así las bandas de 'pirañas' que es la antesala de la delincuencia»[203].

Como se puede observar, migración, informalidad, marginalidad y miseria se daban las manos como producto de la «invasión» de los recién llegados. Como hemos mostrado anteriormente, la informalidad y el ambulantaje tiene múltiples causas, una de ellas puede ser la migración, pero esta no hubiera generado el impacto que conocemos sin la crisis económica y el derrumbe del Estado a nivel nacional y local:

> Al tiempo que crece y se expande la presencia andina, el crecimiento inorgánico de los centros urbanos y la ineficiencia del sistema municipal han generalizado la crisis del sistema de los servicios públicos. Así, tanto la falta de recursos financieros y materiales como el escaso apoyo que reciben los gobiernos locales de parte del gobierno central, han llevado a la ciudad a enfrentar los más serios problemas de higiene y salubridad en toda su historia. La acumulación de basura, la escasez de agua potable, la insuficiencia de los sistemas de alcantarillado y el deterioro creciente en el abastecimiento de fluido eléctrico y en la red de comunicaciones, afectan como nunca la vida de las mayorías urbanas (Matos Mar, 1984, p. 87)[204].

La migración, la crisis y la informalidad, junto con la evidente relajación del control urbano por parte de las autoridades, no solo provocaron la decadencia de la ciudad. También crearon nuevos espacios de convivencia y de ocio, extraños para muchos de los habitantes de esos tiempos, pero que paulatinamente se convirtieron en familiares para todos. En 1984 Matos Mar señalaba que «Lima es ciudad de forasteros. Las multitudes de origen provinciano, desbordadas en el espacio urbano, determinan profundas alteraciones en el estilo de vida de la capital y dan un nuevo rostro a la ciudad» (1984, p. 60). Dadas las condiciones económicas y sociales de la época, la línea divisoria entre un desempleado, un vago, e incluso un delincuente, era muy borrosa para los observadores. Por ejemplo, algunos ambulantes o vendedores de las calles, mientras esperaban clientes, jugaban a las cartas, dormían o practicaban el ajedrez, lo cual podía dar al público la impresión de que desaprovechaban el tiempo, como los vagos[205].

En el centro de Lima aparecieron nuevas expresiones, entre ellas, el rock subterráneo en la avenida La Colmena, «equidistante, por extraña metáfora, de prostitutas y sindicalistas». Por lo menos desde 1982 con la aparición de Kola

[203] Carlos Aylas, «Éxodo en los Andes», *Extra*, 2-11-1989.

[204] Recientemente Romeo Grompone también lista la debilidad del Estado como una de las causas (2005, p. 146).

[205] Gonzalo Rojas Samanez, «Guía y práctica del ocio limeño», *La República*, 26-9-1986.

Rock y Kloaka comenzó este movimiento que integraba en sus letras parte de los personajes urbano-marginales: prostitutas, drogadictos, etcétera, «entre ellos podemos encontrar a pintores de Bellas Artes, escenógrafos de la Universidad Ricardo Palma, antiperiodistas [...] y poetas»[206]. Además, algunos medios informaban del crecimiento de las enfermedades de trasmisión sexual, especialmente el temible SIDA, cuya difusión era atribuida fundamentalmente a los homosexuales y prostitutas, muchos de ellos frecuentes habitantes del centro de Lima. Se consideraba que el porcentaje de homosexuales en Lima había aumentado[207], tanto como se había extendido la prostitución[208].

También fue este el tiempo en el que la playa, como experiencia de ocio y mercado, se intensificó[209]. Como señaló Sánchez Hernani, «la informalidad también va a la playa». Por ejemplo, en la popular playa de Agua dulce, se podía encontrar a vendedores de comida de todo tipo y ofertantes de servicios como la típica carpa de rayas para cambiarse de ropa y de guardianía de objetos[210]. La génesis novedosa de este espacio, en las antípodas de la ciudad aristocrática, señorial y católica, se evidencia en la descripción humana realizada por el reportero:

> se pueden hallar todas las posibilidades de opciones humanas. Desde el 'gay' mestizo, quien arrojaba arena a unos niñitos hurtando mal la coquetería femenina, a señoras adustas que no se mojan ni la punta del pie. De la buenamoza del barrio, esa que bajo redondeadas formas no se anima a lucir su esplendor a toda desnudez – tanga de por medio – y que prefiere la ropa de baño negra y de cuerpo entero [...] al pato Donald sudando bajo el disfraz de dunlopillo sintético, medio único para que el fotógrafo ambulante se gane el pan. Y entre todos, bañistas, semi bañistas y curiosos de domingo, un ejército desordenado de oferentes de raspadillas[211], sánguches de atún con arreglo visual de lechuga a 'mil soles', 'marcianos' de pura fruta [...] helados, choclos, huevos, gaseosas y mil y un artificios inimaginables para una playa. Como si una versión circense de Polvos Azules se hubiese venido a veranear, aunque sea los fines de semana[212].

El relato del periodista evidencia los cambios ocurridos en la década de 1980: una ciudad mestiza, irreverente e informal emergió de las ruinas de la ciudad

---

[206] Carlos Chávez-Toro, «La nave de los prófugos», *La República*, 14-9-1986.

[207] *Extra*, 21-7-1986, «Homosexualidad aumenta en la adolescencia».

[208] Hay muchas notas acerca de los intentos de erradicación de la prostitución del centro de Lima, especialmente en las inmediaciones del jirón Cailloma.

[209] Existen referencias de la venta ambulatoria en las playas por lo menos desde la década de 1930 (Macera & Soria, 2015, p. 179).

[210] *La República*, 22-3-1986, «Un domingo en Agua Dulce».

[211] Una raspadilla es un granizado mezclado con jarabes de diversos sabores.

[212] *La República*, 22-3-1986, «Un domingo en Agua Dulce».

señorial. La mención a los ambulantes y Polvos Azules no es meramente incidental, es una comparación inevitable dado que esos dos elementos son los que le permiten dar significado al escenario playero. Esta última no es un caos incomprensible, es la proyección de la Lima de los ochentas en las riberas del mar, incluso, como señala el autor, con su pequeño ejército de ladronzuelos dispuestos a dejar sin ropa a más de un distraído bañista. La ruptura con la ciudad señorial se completa con la costumbre de muchas familias de llevar comida a la playa con el objeto de alimentar a su familia: desfilan la papa a la huancaína, los tallarines, arroz con pollo, etcétera, «entonces la playa se convierte en un comedor gigantesco»[213]. En los siguientes años esta imagen se ratificó con la contaminación producto de la venta de alimentos, los quioscos y del alquiler de las carpas, lugar en que, según un medio de comunicación, «se hacía de todo»[214].

Entre fines de 1970 y la década de 1980, la ciudad cambió su rostro para siempre, las reformas del gobierno militar, su posterior crisis y el derrumbe del Estado, la migración, la informalidad, los ambulantes, la violencia y la marginalidad, entre otros aspectos, interactuaron en el espacio urbano transformándolo radicalmente. La propuesta de conservar y retornar a la ciudad señorial, aristocrática y jerárquica, fue hecha añicos por la realidad de una ciudad mestiza, plebeya, irreverente y caótica; sin embargo, esta nueva urbe para muchos reflejaba de forma más justa la heterogeneidad étnica y cultural del Perú. En ese sentido, no les faltaba razón a quienes, a pesar del desconcierto que les causaba la nueva ciudad, percibían que era imposible un retorno a la Lima señorial y avizoraban una ciudad con rasgos andinos y de habitantes de todas las sangres. Sin embargo, esa visión crítica de la arcadia colonial-señorial no necesariamente se alejó completamente de esa tradición.

A fines del siglo XX, por intermedio del alcalde Alberto Andrade el discurso que se impuso estaría más emparentado con la Lima colonial y republicana[215], la tradición palmiana y panchofierrista, más que la oligárquica-señorial[216]. Los trabajos que han abordado el estudio del proyecto de restauración de la Lima criolla por parte del alcalde no se percataron de que la imagen de la Lima virreinal proyectada desde estas fuentes permitía una inclusión de los sectores populares afro-mestizos; en las tradiciones de Palma y las acuarelas de Pancho Fierro estos grupos tienen su lugar dentro de la historia de la ciudad, otorgándoles identidad como parte de la construcción de la nación. El imaginario colonial también permitía una relectura

[213] *La República*, 22-3-1986, «Un domingo en Agua Dulce».

[214] *Expreso*, 22-1-1989, «Playas sucias y contaminadas». Véase también, «En la Costa Verde bañarse es un riesgo» y 23-1-1989, «Ambulantes y veraneantes colmaron ayer las playas».

[215] Una excelente crítica a este proyecto en Gandolfo (2009). También debe consultarse Morán (2013).

[216] Blaz también menciona este retorno a la arcadia (2010, pp. 15-17).

de la tradición, incorporaba la presencia popular como parte del folclore, de tipos populares que, a diferencia de la arcadia, son más representativos de lo limeño que las elites oligárquicas. Así, esta lectura, paradójicamente, también podía enraizarse sin problemas en la propia tradición colonial, representadas en el acuarelista y el escritor. Desde esta perspectiva, en un medio que se consideraba de izquierda, las descripciones de las ventas callejeras también podían reforzar un imaginario panchofierrista, inclusivo y jerárquico, pero que justamente permitía una lectura integradora y empática de los sectores populares, y al mismo tiempo reafirmaba las diferencias. Antonio Muñoz en una nota de *El Diario* de Marka, describe al «raspadillero» como una neoacuarela:

> cholo bueno, sudoroso, viene de lejos pedaleando su triciclo (su universo todo). Se ha levantado a las cuatro, cinco de la mañana. Allá en Comas, Tahuantinsuyu, La Parada. A su lado su mujer, pálida arcilla ahora, vende plátanos y encarnadas rodajas de sandía y como musgo tierno que nos cosquillea en el pecho, el hijo de ambos dormita en un espacio de la carretilla a la sombra de plásticos y cartones[217].

Se debe hacer notar que la narración simula el acercamiento a un personaje real, pero cuya historia individual no merece nombre ni apellido, ni una residencia específica, es una historia emblemática que supone el mismo origen para todos los trabajadores en este rubro, los nuevos personajes de la ciudad: cholos y migrantes residentes en los pueblos jóvenes. Su nota continúa estableciendo una genealogía del personaje con los vendedores de nieve de la época colonial, republicana y del siglo XX, una continuidad que, contradictoriamente al supuesto origen del personaje, se mantiene a lo largo del tiempo, «y la ciudad prosigue su trote diario con pañuelo al cuello sudoroso, para defender la elemental camisa elevándose sobre el pedaleo vigoroso de un triciclo»[218].

La transformación del espacio no fue únicamente producto de estas influencias sociales y culturales. Existió un peculiar escenario material que facilitó la destrucción de la imagen señorial. Especialmente durante la década de 1980 la ciudad sufrió una larga serie de problemas respecto a su salubridad, servicios públicos y seguridad que fueron percibidos como los aspectos que reflejaban de forma negativa y dramática el nuevo rostro de la ciudad, imagen que al mismo tiempo nacía decadente y putrefacta.

[217] *El Diario* de Marka, 8-2-1983, «Verano y raspadilla».
[218] *El Diario* de Marka, 8-2-1983, «Verano y raspadilla».

Capítulo 7
Lima, la trampa mortal

Durante el siglo XX la década de 1980 fue una de las más duras que le tocó vivir al país y fue en 1983 cuando todos los males parecieron juntarse al unísono. A mediados de ese año la fiscalía informó que de un poco más de 30 000 detenidos, 43% fueron encausados por robos, 8% por narcotráfico y solo 1% por actos terroristas, esta última una cantidad bastante pequeña, ubicada luego de otros delitos como faltas contra la vida, buenas costumbres, vagancia, etcétera, pero que muestra la variedad de peligros que se cernían sobre las calles[1]. A este ambiente urbano percibido como peligroso, se le sumó el impacto del fenómeno de El Niño, considerado un «meganiño» que abarcó desde mediados del año 1982 hasta agosto del año siguiente[2]. Los efectos de este fenómeno fueron mundiales, en el Perú y Bolivia se registraron fuertes sequías, mientras que la costa norte del país sufrió un notable aumento de la temperatura y de humedad, lo que provocó inusuales y destructivas lluvias (Rocha, 2007). Solo en el norte del país se destruyeron más de 17 000 viviendas, 122 km de carreteras y 120 000 hectáreas de cultivos. En el sur, la sequía afectó a cerca de medio millón de personas, lo que disminuyó gravemente la producción de alimentos y ganado en las comunidades alto andinas[3]. El efecto económico, como hemos señalado anteriormente, fue devastador: el PBI descendió en casi 13%.

---

[1] *El Diario* de Marka, 28-6-1983, «Robo y narcotráfico ocupan primer puesto en Lima».

[2] A fines del verano de 1983 se anunciaba un escenario catastrófico para la ciudad, véanse *Expreso*, 27-3-1983, «Lima está indefensa ante lluvias torrenciales» y *El Diario* de Marka, 2-4-1983, «Lima, ¿el diluvio que viene?».

[3] Se informó del sacrificio o muerte de más de dos millones y medio de cabezas de ganado (Rocha, 2007, pp. 31-33).

En la ciudad capital uno de sus efectos fue el impacto en los precios y disponibilidad de los alimentos. Los huaycos en la sierra central, producto de la inusual intensidad de las lluvias, bloquearon la carretera central, una de las arterias que alimenta a Lima. Una consecuencia directa fue el alza de los precios de las subsistencias, las cuales tenían que ser transportadas a lomo de animales, hasta encontrar el tramo de la carretera no afectado por los desbordes, para luego ser embarcadas en camiones. El resultado fue un aumento de los precios entre el 100% y 300%, que motivó las protestas de los consumidores quienes no podían comprar las cantidades necesarias y culpaban del alza a los comerciantes minoristas, quienes a su vez responsabilizaban a los mayoristas[4]. Las carnes rojas y blancas también fueron seriamente afectadas por el alza de precios, lo que redujo seriamente su consumo en los diversos mercados limeños[5]. A estos problemas se le sumarían otros que convirtieron a la capital en un lugar muy complicado para vivir.

La cultura «combi»

A los problemas urbanos anteriormente mencionados hay que sumarle las dificultades en el transporte público, uno de los flagelos más constantes de las últimas décadas y que en los años 1980 comenzó a preocupar seriamente a la ciudadanía. En 1983 una encuesta publicada por el diario *La República* ubicó al transporte como sexto problema de la capital (6,7%), anticipado por la limpieza pública (25%), el hambre (21%), el terrorismo (14%), la corrupción (7%) y la delincuencia (7%)[6]. Mientras que, en el 2008 el transporte fue considerado el segundo problema (46%), anticipado por la inseguridad ciudadana (75%) (Bielich, 2009). El empeoramiento se explica por las complicaciones que trajo su administración y regulación durante estos últimos años.

Hacia mediados de la década de 1960 el transporte público en Lima se hallaba en crisis, muchas empresas habían quebrado y en 1965 dejó de funcionar la red de tranvías (Poole Fuller, 2016, p. 24). Ese mismo año se creó la Administradora Municipal de Transporte de Lima (APTL) y luego, en 1976, durante el régimen militar, se organizó la Empresa Nacional de Transporte Urbano (Enatru) dirigida por el gobierno central. Sin embargo, la presencia de unidades informales nunca pudo ser eliminada por la insuficiencia de la red de transporte. Para evitar el descontrol, en 1965 se promulgó el Reglamento de Transporte Colectivo, que permitió a los microbuses operar por medio de la asociación y regulación de las rutas y frecuencias,

4 *La República*, 27-3-1983, «Lluvias y huaycos agudizan aún más astronómicas alzas».

5 *La República*, 5-5-1983, «Ya casi nadie come carne en Lima».

6 *La República*, 4-11-1983, «Los males de Lima».

pero con tarifas fijadas por el gobierno. Estos gremios no estaban obligados a regirse por las leyes laborales, por lo que operaban de informalmente y con bajos costos operativos. Así, la importancia de estos comités de transportistas en la oferta total de unidades pasó del 70% en 1971 al 91% en 1984, en ese año cubrían el 80% de los viajes de la ciudad (Poole Fuller, 2016, p. 27). Desde 1983 la Municipalidad de Lima administró el transporte, pero su labor fue más reguladora que gestora, los pocos proyectos de reforma se paralizaron a fines de los años ochenta, únicamente se lograron implementar los corredores viales de las avenidas Brasil, Alfonso Ugarte y Marsano; además, el publicitado proyecto del tren eléctrico estaba paralizado. Así, a principios de la década de 1990, la demanda por transporte superaba largamente la oferta y el 95% de las rutas eran cubiertas por comités, la mayoría de ellos informales (Poole Fuller, 2016 y Bielich, 2009).

Las cosas cambiarían, pero no mejorarían, con la elección de Fujimori. En julio de 1991 se promulgó el decreto que liberaba el sistema de transporte, en él se eliminaron las concesiones de rutas y los controles tarifarios, y se permitió la importación de unidades usadas. Las regulaciones se reiniciarían en 1997, estableciéndose nuevamente las concesiones municipales de forma obligatoria, pero el daño ya estaba hecho (Bielich, 2009). Las consecuencias de estas políticas son conocidas. En el año 2006 cerca de la mitad de las unidades, denominadas camionetas rurales, tenían escasa capacidad de transportar pasajeros (49%) y brindaban el 33% de los viajes; los ómnibus cubrían 18% de la oferta y 19% de los viajes; los microbuses que ofertaban 33% de unidades y 38% de viajes; más cerca de 200 mil taxis y miles de mototaxis informales (Barbero, 2006, p. 274). Además, la falta de regulación trajo como consecuencia que Lima se convierta en una de las ciudades con mayor número de víctimas por accidentes de tránsito, de diez a quince veces por encima de los países desarrollados. En el año 2007 murieron en Lima 653 personas por esta causa, una cifra alarmantemente alta que generó gran preocupación en las autoridades (Barbero, 2006, p. 276 y Defensoría del Pueblo, 2008, p. 23). De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la indiscriminada liberación del transporte trajo como consecuencia la «“Guerra por el centavo”. Al haber más vehículos de los necesarios, los transportistas se disputan violentamente los pasajeros, situación que aumenta el riesgo de choques y atropellos» (Defensoría del Pueblo, 2008, p. 51). Además, la estabilidad de precios producto de la sobreoferta desestimuló la inversión y redujo los márgenes de operación. Estos cambios legales agravaron la congestión y contaminación pues

> la existencia de un número excesivo de vehículos de transporte público contribuye a agravar la congestión, como se observa en algunas ciudades. Una de las características de los modelos económicos en vigor es la desregulación.

> En el área del transporte urbano de pasajeros, una desregulación amplia normalmente se traduce en una acentuada expansión de las flotas de buses y taxis y un deterioro del orden y la disciplina asociadas con su operación. Este fenómeno contribuyó de manera importante al deterioro en la congestión en Santiago en el decenio de 1980 y en Lima en la década siguiente (Thomson, 2002, p. 112).

Desde principios de los años ochenta se evidencia en la opinión pública una seria preocupación por las deficiencias en el transporte público de pasajeros. El crecimiento urbano y la escasa oferta de transporte se expresaban en las unidades atestadas de pasajeros, que ponían en riesgo a los usuarios. El público en general solía quejarse del mal estado del transporte, cuyos asientos, como hasta el día de hoy, «han sido recortados con la finalidad de dar mayor capacidad a los pasajeros de pie»[7]. La desesperación de choferes y pasajeros hacían obsoletas las reglamentaciones de transporte, tal como declaró un joven oficial de policía: «si se trata de multar por eso a los micros, tendríamos que castigar a todos»; exigían que el gobierno implemente el sistema de metro y trolebuses[8]. Como sabemos, su pedido demoraría décadas en ser atendido. Muchas de las unidades se encontraban en «estado calamitoso», sus asientos no contaban con las medidas autorizadas y la mayor parte del tiempo los vehículos se encontraban atiborrados de pasajeros. El servicio era de baja calidad, los choferes, que a su turno culpaban a los pasajeros, constantemente eran acusados de maltrato a los estudiantes de todos los niveles, quienes contaban con pasajes subsidiados y por esa razón no eran bien recibidos por los conductores: «en época de escolares, los niños son el depósito de la bilis de los choferes»[9].

Para ese entonces, año 1983, los conductores se encontraban agremiados en la poderosa Federación de Choferes del Perú (Fechop), bajo la secretaría general de Hernán Chang Lafock. Su poder residía en la capacidad que tenían de paralizar la ciudad, gracias al control mayoritario de la oferta, especialmente en las zonas más alejadas de la capital. Como ocurre hasta el día de hoy, los conductores de las unidades usualmente no eran los propietarios de las mismas, eran tildados de «palancas», quienes, además, no cumplían con los requisitos de ley para la licencia respectiva. Como cobradores empleaban frecuentemente a menores de edad, quienes arriesgaban su vida al borde de las puertas de micros atestados de pasajeros. Así, los vehículos fueron bautizados como «la muerte en cuatro llantas». Las autoridades no contaban con demasiados mecanismos de presión para exigir el cumplimiento de la reglamentación. Como en otros aspectos de la década, el gobierno había perdido la capacidad de hacer cumplir las leyes. De acuerdo con las autoridades

7 *Correo*, 25-1-1983, «Choferes y cobradores no respetan reglamento».

8 *Correo*, 25-1-1983, «Los microbuses. El drama diario de los limeños».

9 *Correo*, 25-1-1983, «Los microbuses. El drama diario de los limeños».

policiales, cada vez que se ejecutaban campañas para imponer el reglamento, el gremio lo consideraba una agresión general y paralizaba el transporte, lo que afectaba seriamente la ciudad[10]. Más que un exceso de reglamentación lo que ocurrió fue la incapacidad de hacer cumplir las disposiciones.

En 1983 la situación del tránsito en Lima era considerada caótica. La antigüedad de la flota, la escasa inversión en señalización y semaforización, el incumplimiento de la reglamentación y la escasa cultura cívica fueron señalados como los responsables de la situación: «en muchas calles se transita en sentido contrario al autorizado, por la simple ociosidad de no dar la vuelta a la manzana; pasan los semáforos en rojo, los ómnibus, los micros, los autos de señoritos bien y los taxistas»[11]. Este caos agravó el congestionamiento de las calles en varios puntos de la ciudad y se empeoraba por la escasez de efectivos policiales, empleados en otras tareas consideradas más urgentes: la vigilancia de la creciente delincuencia y la represión de los movimientos urbanos y subversivos.

En el mes de mayo de 1983, como una manera de controlar las graves consecuencias económicas de la crisis, el gobierno aumentó escalonadamente el precio de la gasolina, medida que fue contundentemente rechazada por la Fechop. El 17 de mayo alrededor de 50 mil choferes a nivel nacional decretaron una paralización con la que exigían el congelamiento del precio de los combustibles. En Lima no menos de 12 mil unidades dejaron de circular y dejó como única alternativa al público la alicaída flota de buses estatales. Una preocupación más se agregó a la atribulada vida de los limeños.

El día del paro los limeños buscaron transportarse, a pesar de las dificultades y los peligros a los que se exponían. Muchos eran trabajadores independientes que se ganaban diariamente su sustento; otros eran ambulantes que también estaban en la misma condición, y, finalmente, otros más temían ser despedidos en medio de una crisis tan atroz. Lamentablemente no sería la última vez que sufrirían estas dificultades.

Además del vetusto estado de la flota de transportes, era frecuente la violación del reglamento, los pasajeros arriesgaban su vida al intentar abordar las unidades de transporte lejos de la acera. Sin embargo, no toda la responsabilidad recaía en los choferes. Ciertamente la avenida Abancay, una de las más transitadas de la ciudad, siempre se encontraba atiborrada de transeúntes y vendedores ambulantes, lo que hacía prácticamente imposible el adecuado recojo de pasajeros. Además, la sobrecarga de pasajeros en las unidades causaba accidentes, algunos de ellos de consecuencias fatales por la caída de cobradores o pasajeros que viajaban colgados

[10] *Correo*, 25-1-1983, «Choferes y cobradores no respetan reglamento».
[11] 'Albatros', en *La República*, 7-3-1983, «El caos del tránsito en Lima».

de las barandas en las puertas de los vehículos. Las autoridades locales habían perdido el control de las calles.

Las autoridades intentaron varias veces resolver este complicado problema, sin mayores resultados. En enero de 1986, bajo el mandato del alcalde Alfonso Barrantes, se desarrolló un plan coordinado con los ambulantes de la zona con el objeto de ordenar el tránsito y el uso del espacio público. Se determinó que solo vehículos autorizados podrían ingresar a Lima cuadrada, y se dejó para el transporte público la avenida Emancipación. Al mismo tiempo, se prohibió la circulación y estacionamiento de carretillas, triciclos y otros vehículos similares en las mismas zonas. Los quioscos y puestos de venta no podían ubicarse a menos de doce metros de las esquinas, para evitar las aglomeraciones de vendedores y compradores[12]. Esto exigía que el transito se convierta básicamente en peatonal, salvo los taxis autorizados y aquellos que poseían estacionamientos registrados. Para tal efecto se llevó a cabo un empadronamiento, además se restringieron las horas de carga y descarga de mercaderías. Por último, la secretaría de transporte municipal estableció paraderos de uso obligatorio en la avenida Emancipación[13].

Se decidió que el plan se aplicaría desde el 23 de enero de 1986 y al día siguiente los resultados fueron considerados muy satisfactorios[14]. Con un abundante apoyo policial, las autoridades municipales lograron hacer cumplir las disposiciones y se aligeró notablemente el tránsito. Incluso algunos ambulantes, dirigidos por el presidente de la Fedeval y también regidor del municipio, Guillermo Nolasco, prestaron apoyo a la medida; otros se opusieron a las disposiciones, entre ellos los vendedores de libros y los lustrabotas[15]. Sin embargo, el optimismo fue desmedido. Si bien los micros y ómnibus fueron desalojados de la mayoría de las calles del centro, todavía circulaban por la avenida Emancipación entre la avenida Abancay y la populosa plaza Unión, espacio que sufrió una sobrecarga vehicular. Los ambulantes, como sabemos, retomaron sus antiguos lugares en el centro, mientras que los automóviles particulares nunca tuvieron mayores problemas para ingresar al centro.

El problema del flujo de transporte y la seguridad continuó en los siguientes años. Los micros siguieron causando accidentes y provocando víctimas entre los transeúntes y los vendedores[16]. Esto llevó a que la alcaldía, esta vez bajo el gobierno de Jorge del Castillo, amplíe el plan de exclusión del transporte público a la avenida La Colmena, arteria que comunica el importante Parque Universitario

---

[12] *Expreso*, 13-1-1986, «Limitarán tránsito en 'Lima cuadrada'».

[13] *La República*, 13-1-1986, «La gente tendrá que caminar en el centro».

[14] *Extra*, 23-1-1986, «Hoy se inicia reordenamiento de tránsito vehicular».

[15] *La República*, 24-1-1986, «Caos llegó a su fin en el centro de Lima».

[16] *Expreso*, 12-1-1989, «Micro arrolla a veinte».

con la plaza Dos de Mayo; pero, lamentablemente, desvió el tráfico hacia la ya recargada avenida Emancipación, con un aumento de 750 unidades de transporte en su carga vehicular[17]. Unas semanas después la municipalidad anunció que la avenida Emancipación también sería cerrada al transporte público, se desviaron las rutas fuera del centro histórico de la ciudad, el cuadrado delimitado por las avenidas. Nicolás de Piérola, Abancay, Tacna y Amazonas, lo que congestionó aún más estas calles[18].

El 24 de julio de 1991 el gobierno de Fujimori promulgó el decreto legislativo 651, que estableció «la libre competencia en las tarifas de servicio público de transporte urbano e interurbano de pasajeros en todo el país» y se declaró «el libre acceso a las rutas del servicio público de transporte urbano e interurbano de pasajeros, autorizados por los Consejos Provinciales». Además, se permitió que cualquiera que quisiera ofrecer servicio de transporte público pueda realizarlo de manera excepcional «y bajo su responsabilidad […] en todo tipo de vehículos automotores, salvo camiones y vehículos de dos ruedas». Esta medida, que abandonó casi toda la regulación, facilitó el incremento de unidades, lo que provocó, como se dijo antes, una sobreoferta de vehículos que deterioró la calidad del transporte urbano (Defensoría del Pueblo, 2008, p. 58). El decreto fue cuestionado por el Concejo Municipal, quienes solicitaron su derogatoria al Senado. Entre los argumentos que señalaron, se mencionó la intromisión del gobierno en temas locales y que la liberación traería como consecuencia el aumento de tráfico en el centro, y ponía en peligro el apoyo internacional para su recuperación. Los concejales consideraban que «los empresarios no deben tener el libre acceso a las rutas, porque obviamente escogerían las que producen mayores rentas, dejando al desamparo los sectores pauperizados y más necesitados»[19]. Además, aunque en las fuentes consultadas no hay una evidencia sustantiva al respecto, no se debe desestimar la posibilidad de que el desempleo haya contribuido con la informalidad del transporte al incorporar choferes y cobradores que no conseguían o habían perdido sus empleos (Vega Centeno, 2009, p. 86).

Desde febrero de 1992 en el municipio se discutió la necesidad de una reforma del transporte, medidas que apuntaban a racionalizar el uso de las vías y disminuir el tráfico en el centro considerado monumental, proyecto que fue cuestionado por los gremios de transportistas[20]. Hernán Chang declaró que lo más importante era erradicar a los ambulantes, mejorar las calles y señalizaciones; recordó que los cambios que se hicieron en 1989 no contribuyeron en nada a mejorar la vialidad,

[17] *Expreso*, 7-3-1989, «Desconcierto en la Av. Emancipación».

[18] *Expreso*, 22-4-1989, «No circularán micros en la Av. Emancipación».

[19] *Expreso*, 16-2-1992, «Piden acabar con la liberación de las rutas y pasajes urbanos».

[20] Para un diagnóstico del sector véase Figari y Ricou (1990, pp. 24-26).

por el contrario, el espacio liberado había sido ocupado por más ambulantes[21]. Al mismo tiempo, el gobierno de Fujimori se enfrentó a los gremios de transportistas por causa de las tarifas. Se acusó a varias asociaciones, entre ellas la Fechop, de impedir la libre competencia al acordar precios entre ellas, estas acusaciones contribuyeron a desprestigiar al gremio[22]. El diario *Expreso*, que ofreció una cobertura amplia del tema, cuestionó la eficacia de las medidas que se querían tomar. Al citar las declaraciones de Eduardo Arrarte, presidente del Patronato de Lima, enfatizó que la reorganización del tránsito no mejoraría la vialidad, solo desviaría el tráfico hacia otras calles del centro, lo que causaría mayor congestión en ellas[23]. Mientras que, David Quintana[24], secretario general de la Central de Empresas de Transporte Urbano (CETU), declaró que era necesario primero mejorar las calles y la señalización, y que se reabran otras avenidas para descongestionar aquellas que estaban sobrecargadas[25]. Por estas tensiones, quizá como una manera de no perder el apoyo de la población, los gremios decidieron mantener congeladas las tarifas por un mes, de acuerdo con Chang, para no «despertar el proceso inflacionario en el país»[26].

En julio de 1992 nuevamente se anunció un plan de reordenamiento del tránsito, para ser aplicado a fines de ese mismo año. Por causa del decreto 651 las camionetas rurales de baja capacidad de pasajeros, denominadas «piratas» por no estar organizadas, habían tomado el control de las calles, y saturaban el tráfico en varios puntos de la ciudad, especialmente en el centro de Lima[27]. Se calculaba que, gracias al decreto, el número de unidades de transporte tipo camioneta rural o «combi»[28] pasó de 278 en 1991 a 1779 solo en los tres primeros meses del año, y más de la mitad de ellas trabajaban informalmente[29]. Los choferes de esas unidades rechazaron el reordenamiento, aducían que aún estaban pagando los vehículos y de

---

[21] *Expreso*, 6-2-1992, «Caos y desconcierto por cambio de tránsito en Lima».

[22] Indecopi, resolución 015-1993/CLC del 23 de diciembre de 1993, Comisión de Libre Competencia contra Federación de Choferes del Perú y otros, 015-093, https://www.osiptel.gob.pe/Archivos/ResolucionAltaDireccion/ConsejoDirectivo/Res009-2014-CD_Inf020-ST-2013.pdf, fecha de consulta: 1/2/2017.

[23] *Expreso*, 8-2-1992, «Reorganización del tránsito estrangularía Lima».

[24] Por lo menos hasta el 2012, Quintana continuaba al mando del gremio (http://elcomercio.pe/sociedad/lima/solucion-que-no-suba-pasaje-que-se-use-gas-natural-noticia-1379187, fecha de consulta: 1/2/2017).

[25] *Expreso*, 9-2-1992, «Aplazar cuatro meses reorganización del tránsito vehicular pide Quintana».

[26] *Expreso*, 9-5-1992, «Por treinta días prorrogan tarifa urbana de transporte».

[27] *Expreso*, 14-7-1992, «Proliferación de camionetas rurales congestionan el tránsito capitalino».

[28] Este término deriva de «Kombinationsfahrzeug», nombre de un modelo de vehículo fabricado por la compañía alemana Volkswagen, y se convirtió en el término genérico para diversos vehículos de pequeño tamaño para el transporte de pasajeros.

[29] *Expreso*, 16-7-1992, «Sacarán a unas 10 mil camionetas rurales para descongestionar el tránsito en Lima».

ser desalojados no tendrían como sufragar sus gastos. De acuerdo con el secretario municipal de transporte, Raúl Medina Saavedra, en la avenida Abancay circulaban 68 rutas, 39 en Tacna, 43 por Garcilaso, 74 por Alfonso Ugarte y 68 por Grau[30]. Todo este caos se complicaba aún más cuando se hacían reparaciones o por motivos de seguridad se cerraban las calles con tranqueras, lo que convirtió la ciudad en un laberinto intransitable[31].

Finalmente, en 1993, mediante el decreto de alcaldía 054–93–MML, la Municipalidad Metropolitana de Lima aprobó un plan regulador del transporte. La disposición era inaplicable en la práctica, el municipio no tenía control de las rutas por causa del decreto 651 (Venero, 2014, p. 66). Como se puede notar a partir de esta breve historia, no fue el exceso de reglamentación lo que empeoró el transporte y desestimuló la participación privada; por el contrario, la evidencia muestra que la falta de una autoridad que regule eficazmente el transporte y la crisis del Estado en general, contribuyeron a que el sistema se deteriore gravemente. Por otro lado, esta red informal de transporte permite una flexibilidad inusual a comparación de otras ciudades. Por ejemplo, funciona prácticamente las 24 horas al día, cubre casi toda la ciudad y su frecuencia es muy alta, favorecía la movilidad, aunque no la calidad ni la seguridad en el transporte (Vega Centeno, 2009, p. 88).

La capital de la inmundicia

En 1983 una nota periodística hizo un nuevo recuento de los problemas urbanos, entre ellos los huecos en las pistas y veredas, los ambulantes, y, especialmente, los basurales[32]. En la primera parte he mostrado parte de la batalla del municipio contra este flagelo, problema que se mantuvo durante toda la década. Esta vez me interesa mostrar cómo este problema también modificó los imaginarios urbanos, al mismo tiempo que generaba un contexto caótico y decadente que cuestionaba el futuro de la capital.

En 1983 los montículos de basura se podían encontrar en diversos puntos de la ciudad[33], lo que generó que la capital se sitúe al borde de la emergencia sanitaria. La imagen de una ciudad jardín, impuesta por la oligarquía señorial, fue destrozada por la realidad de la inmundicia cotidiana, asociada con la presencia de los miles de inmigrantes que la desbordaron: «los nuevos habitantes se instalaron en terrenos que

[30] *Expreso*, 14-7-1992, «Por fin reordenarán el tránsito en Lima».

[31] *Expreso*, 31-7-1992, «Severa restricción del tránsito sigue en Lima»; 2-8-1992, «Por todos lados congestionan tránsito en Lima»; 9-9-1992, «Intransitable el centro de Lima» y 20-9-1992, «Caos vehicular en el centro de Lima».

[32] *Correo*, 7-8-1983, «Basura, baches, ambulantes, el reto de la gran Lima».

[33] *El Diario* de Marka, 15-3-1983, «Municipalidad de Lima fomenta los basurales».

no contaban con servicios de agua y desagüe y así tuvieron que vivir en medio de aguas servidas, de la basura y de los virus que se generaban en los desperdicios»[34]. Se consideraba que Lima producía diariamente 3500 toneladas de basura, de las cuales solo se recogían 2 mil. Los lugares más sucios eran los distritos del Cercado, Rímac, Breña, La Victoria, entre otros, más los pueblos jóvenes. Además, el vetusto sistema de desagüe producía constantes aniegos[35], lo que atraía insectos y ratas[36]. Como hemos visto anteriormente, la causa de este desastre ambiental no se encontraba únicamente en el «desborde popular», fue también la crisis general del Estado lo que produjo esta situación. Para el recojo de basura se contaba con escasos recursos, pero, sobre todo, mal distribuidos. Mientras San Isidro contaba con 16 carros recolectores, los distritos más populosos como San Martín, La Victoria o Comas no contaban con más de siete[37].

> En estas circunstancias no debe extrañarnos las grandes concentraciones de basura que se encuentran en los sectores populares. Allí se generan los gérmenes mortales que provocan tifoideas, enfermedades gastrointestinales y otros que afectan sobre todo a la niñez. El problema se agravará en los próximos meses del verano, pues los desechos se descomponen rápidamente y afectan a los niños que juegan en las calles, sin saber el grave peligro que corren[38].

De acuerdo con la nota, los camiones recolectores de basura ni siquiera llegaban a los rellenos sanitarios, sea por desidia o por la escasez de combustible, los trabajadores se deshacían de su carga antes de llegar a los lugares designados, que, además, se encontraban en las zonas marginales de la ciudad, muchas de ellas habitadas por pueblos jóvenes. Por esa razón Lima se había convertido en «un depósito de basura» que ponía en peligro la salud de sus habitantes, especialmente de los más pobres. El problema continuó durante los siguientes años. En 1986 los basurales se encontraban en las inmediaciones de los centros de salud, como la Maternidad de Lima, lugar en que las ratas salían a merodear entre las montañas de desperdicios. Otro espacio famoso por su basural era el cruce de las calles Miró Quesada y Billinghurst en el centro de la ciudad, esquina en la que se arrojaban

[34] *La República*, 24-12-1983, «¿Hasta cuándo la basura?».

[35] Todavía en 1992 se menciona el problema de los aniegos en el centro por causa de las lloviznas, especialmente intensas a mediados de ese año (*Expreso*, 2-7-1992, «Gigantesco aniego en el centro de Lima»). Las autoridades consideraban que la red de desagüe estaba obsoleta, causando aniegos en muchos distritos de la capital (*La República*, 11-1-1992, «Río Rímac es ahora el gran basurero de Lima»).

[36] A principios de la década de 1990 se produjo un espectacular aniego de aguas servidas entre los cruces de las avenidas Tacna y Emancipación, producto del colapso de la pista (Reyna & Zapata, 1991, p. 15).

[37] *La República*, 24-12-1983, «¿Hasta cuándo la basura?».

[38] *La República*, 24-12-1983, «¿Hasta cuándo la basura?».

todo tipo de inmundicias. Además, de acuerdo con una nota periodística, los vendedores de la zona utilizaban el basural como baño público, lo que afectaba la salud de compradores, vendedores y sus familiares[39]. A pesar de la existencia de contenedores metálicos, la basura abundaba en las calles, desbordaba los recipientes y se regaba por las calles, una amenaza a la salud pública. Las personas, ante la ausencia crónica de baños públicos, aprovechaban los muladares para hacer sus necesidades básicas, formaban «ríos de orines [que] llegan a las pistas formándose lagunillas»[40]. Para evitar estos problemas en muchos casos la población optaba por quemar los basurales, lo que aumentaba la contaminación del aire.

Lo mismo se podía encontrar en el mercado de Buenos Aires, en los Barrios Altos. Se calculaba que por causa de los basurales y del desborde de los desagües todos los mercados de la ciudad estaban infestados de roedores, de acuerdo con un medio de comunicación eran «ejércitos enteros de ratas gigantes, la mayoría de ellas agresivas»[41]. Esta situación comprometía seriamente la sanidad de los alimentos en los mercados y exponía a la población con menos recursos a las enfermedades. Las autoridades de la Municipalidad se defendían al resaltar la insuficiencia de recursos, el escaso número de rellenos sanitarios y los intereses creados en torno a la «ilegal comercialización a los criadores clandestinos de chanchos ubicados en los mismos botaderos que son focos permanentes de infección»[42].

Una nota señala que «Lima fue posiblemente una Ciudad Jardín con olor a perfume francés en la época de Leguía cuando los limeños eran cuatro gatos, pero actualmente con más de seis millones de habitantes, invadida hasta la punta de los cerros y desordenada como ninguna en el mundo, es una ciudad pestilente, alfombrada por cincuenta mil toneladas de basura, capital de las ratas y foco de enfermedades y epidemias»[43]. Esta vez los basurales no solo afectaban los lugares usualmente mencionados, casi todos los distritos de la ciudad contaban con ellos, incluso en aquellos habitados por familias de clase media: Magdalena, Pueblo Libre, San Miguel, Surco, San Borja, Barranco, Miraflores y San Isidro. Las ratas dejaron de ser únicamente habitantes de las zonas populosas, «también se les encuentra en el parque Kennedy y el Parque Central de Miraflores, parque El Olivar y las playas Waikiki, Redondo y Marbella […] el rellenar de la Costa Verde —entre Marbella y Bertolotto— con basura causa similar situación en San Miguel»[44].

[39] *La República*, 24-12-1983, «¿Hasta cuándo la basura?».

[40] *Extra*, 5-12-1989, «Buscadores de basura».

[41] *Extra*, 3-1-1986, «Lima es una de las ciudades más contaminadas del mundo».

[42] *Extra*, 3-1-1986, «Calle de la Maternidad es un basural gigante».

[43] *Extra*, 6-2-1989, «Lima capital de la mugre».

[44] *Extra*, 6-2-1989, «Lima capital de la mugre».

Anteriormente hemos visto que entre 1980 y 1981 el alcalde Orrego intentó resolver el problema de la basura al apelar a la colaboración de los vecinos, quienes fueron convocados para la limpieza de las calles. Tal política continuó en los años siguientes, lo que hacía evidente la falta de recursos del municipio para resolver el problema; por ejemplo, los municipios trataron de controlar el problema con contenedores, pero su poca capacidad para atenderlos dejaba acumular la basura por varios días, esto empeoraba la situación. Incluso al poco tiempo la basura contaminó nuevos espacios, como los tramos del inacabado tren eléctrico a la altura de la avenida Aviación en Surquillo[45]. A tal punto llegó la incapacidad de la Municipalidad de Lima que insistió en los planes de limpieza de las calles con el apoyo ciudadano. En 1986 se aplicó una jornada llamada «Limpiemos Lima», coordinada por el municipio y con el apoyo de vendedores ambulantes, de diarios, lustrabotas, etcétera, quienes desde muy temprano limpiaron fachadas y algunas plazas de la ciudad[46]. En 1989 las autoridades implementaron un plan de limpieza, de acuerdo con el presidente del directorio de la Empresa de Servicios Municipales de Lima, «que se centra en dos acciones: una edil y la otra vecinal, con un control municipal en base a un equipo de pesquisadores y el seguimiento del vecino infractor». Quienes incumplían con las disposiciones eran sancionados, correspondiéndole al municipio la recolección de basura, «operativos especiales (baldeos, rastrillado, limpieza de techos y trastos viejos en mercados y zonas comerciales), [...] en tanto que la acción vecinal se basa en el cumplimiento de las normas de aseo urbano, como sacar la basura cuando pase el compactador, arrojar la basura dentro de los contenedores *y baldear y barrer diariamente el frontero de su casa antes de la 9 de la mañana*»[47].

Como se puede notar, no solo se pedía a los vecinos el cumplimiento de las normas básicas de convivencia ciudadana, también se exigía la limpieza del espacio público delante de sus viviendas y, además, desde muy temprano por la mañana. Este plan se puso en práctica en la Plaza San Martín, la avenida Abancay, algunas calles de los Barrios Altos, y se planeaba aplicarlo con apoyo vecinal en la avenida La Colmena. En otros casos fueron los mismos ambulantes quienes sufragaron los costos de la limpieza. Por ejemplo, en el Mercado Central, la Fevacel, de acuerdo

---

[45] *Expreso*, 13-2-1989, «Paraditas y basurales en tramo del tren eléctrico». La situación se agravaba en las épocas de fiestas, véase *Extra*, 25-12-1989, «Lima contaminada»; *La República*, 2-1-1992, «Lima amaneció en 1992 repleta de basura y caótica como siempre»; y *Expreso*, 2-1-1989, «Lima amaneció sucia».

[46] *Extra*, 13-1-1986, «Jóvenes 'lavaron cara' de la ciudad». También la basura afectaba gravemente al Mercado Central, 10-1-1986, «Mercado Central es foco de contaminación».

[47] *Expreso*, 12-3-1989, «En marcha nuevo plan de Limpieza en Lima». El énfasis es mío. Véase también *Expreso*, 27-4-1989, «Limpian Plaza Dos de Mayo».

con su presidente, compró tres tanques cisterna, escobas, detergentes y otros implementos, con el objeto de baldear las calles. Sin embargo, en esa zona la falta de un buen sistema de alcantarillado tuvo como consecuencia el aniego de las calles, un problema más que resolver[48].

En la década de 1980 la difusión del basural más allá de un entorno considerado 'natural' (los barrios marginales y pobres de Lima) fue lo que causó la preocupación de los medios y de una buena parte de la opinión pública. La ubicación de los desperdicios en el centro de Lima, cerca de los edificios emblemáticos del poder político y económico, no solo afectaba la salud de los habitantes, también cuestionaba el imaginario de una ciudad jardín y retaba su significado futuro. Si la ciudad cambiaba aceleradamente su rostro social por causa de las migraciones, ¿ese sería su futuro? ¿Qué pasado y qué presente debían ser considerados? Además, ese pasado incorporaba la historia de una parte del escenario urbano, el de las calles céntricas y sus distritos de clase media, mientras que, paulatinamente se considerarían como naturales las condiciones de insalubridad de los barrios marginales producto del origen migrante y andino de sus habitantes, lo que reforzaba las jerarquías étnicas de origen oligárquico. La periferia era definida al margen de esa historia: se la percibía desde su aparición como caótica, miserable, desaliñada y sucia[49].

En 1992 a los diversos problemas urbanos se le sumaron los efectos de los innumerables basurales que se encontraban en las calles y, nuevamente, otro fenómeno de El Niño. En ese año se consideró que los distritos del Rímac, La Victoria, Breña, Surquillo y Chorrillos fueron los más afectados por el deficiente recojo de basura, no contaban con un número suficiente de unidades para el servicio y este solo se realizaba cada dos o tres días a la semana. Las altas temperaturas ocasionaban que los desperdicios se conviertan rápidamente en focos infecciosos, agravado por los cortes en el servicio de agua potable y electricidad. Además, frecuentemente se convocaban paros en los trabajadores del sector, agobiados por la caída de sus salarios[50].

Años después el problema de la basura sería percibido de manera diferente, desde principios del siglo XXI dejó de ser considerado como la principal dificultad de la capital[51]. En el año 2014, los limeños creían que la inseguridad era el principal problema (82%), el segundo puesto lo tenía el transporte público con el 53,8%

[48] *Expreso*, 24-2-1989, «Ambulantes limpian el Mercado Central».

[49] Véase Figari y Ricou (1990, pp. 11-13).

[50] *Expreso*, 12-2-1992, «A la falta de agua se suma ahora la basura en la calle».

[51] Todavía a mediados de la década de 1990 el tema seguía con gran vigencia, Javier Sota Nadal consideraba que la ciudad era un «Chernobyl biológico» (*El Comercio*, 22-2-1995, «Al pie de la basura»).

y luego la contaminación ambiental con 35,2%[52]. Estas cifras se repitieron en el año 2016, una encuesta de Radio Programas del Perú señaló que la inseguridad ciudadana era la preocupación de la mayoría de los limeños (85%), seguida del transporte público (49%) y la limpieza pública con 35%[53]. Sin embargo, esta percepción no significa que realmente el problema sea de naturaleza secundaria en todos los distritos de Lima. Lo que ocurrió entre los años ochenta y el 2016 fue que los basurales y la contaminación ambiental fueron parcialmente controlados —al menos en sus aspectos más visibles— en los distritos de clase media y del centro de Lima, es decir, en aquellos espacios simbólicos que representaban el rostro concebido como histórico de la ciudad; mientras que se mantuvieron —y aún, empeoraron—, en las zonas marginales y distritos considerados periféricos, aquellos que no estaban incluidos en la identidad criolla limeña. Por ejemplo, en distritos como Pachacámac, en el cual solo el 3% paga arbitrios, financiar el recojo de basura es casi imposible, razón por la que se usan botaderos, con el peligro que esto supone para la salud pública. Incluso varios distritos muy poblados solo reciben el servicio de recojo de dos a tres veces por semana: Carabayllo, Comas, Ancón y Villa El Salvador; en San Juan de Lurigancho el 46% de los desperdicios no tiene un destino adecuado, y terminan en botaderos (Dulanto, 2013, p. 175).

De acuerdo con Paolo Rivas, en el año 2015 el 83% de los residuos acumulados en las calles y lugares públicos de la ciudad estuvieron concentrados en tres distritos de la periferia: Villa María del Triunfo (39,4%), Villa El Salvador (25,3%) y El Agustino (18,3%), a pesar de albergar únicamente al 12% de la población de la ciudad[54]. Otra nota de ese año informa que de las 8 mil toneladas de desperdicios que la ciudad generaba, por lo menos 20% era depositado en los basurales en las afueras de la ciudad, en las cuencas de los ríos Rímac, Chillón y Lurín; mientras que por lo menos 800 toneladas de residuos sólidos eran arrojadas a las calles. Los principales 'productores' de desperdicios medidos en toneladas eran: San Juan de Lurigancho (780), Comas (400) y Villa El Salvador (300). Además, más de la

[52] *El Comercio*, 26-11-2014, «La contaminación es el tercer problema más grave en Lima», http://elcomercio.pe/sociedad/lima/contaminacion-tercer-problema-mas-grave-lima-noticia-1774109, fecha de consulta: 31/7/2016.

[53] *RPP*, 18-1-2016, http://rpp.pe/lima/actualidad/481-aniversario-de-lima-problemas-de-la-ciudad-noticia-930565, fecha de consulta: 31/7/2016.

[54] *El Comercio*, 10-6-2015, «3 distritos concentran el 83% de acumulación de basura de Lima», http://elcomercio.pe/sociedad/lima/3-distritos-concentran-83-acumulacion-basura-lima-noticia-181752, fecha de consulta: 31/7/2016.

mitad de los encuestados de Lima norte y Lima sur consideraban que la limpieza de sus distritos era deficiente[55].

Aguas peligrosas

Estos problemas ambientales de la década de 1980, cuyo rostro más visible era la basura, afectaron seriamente la calidad de vida de los limeños, pero no serían los únicos. En el verano de 1983 los huaycos provocados por las intensas lluvias en la sierra central causaron el colapso del abastecimiento de agua potable en la ciudad. En febrero las bocatomas de la Atarjea, la planta de tratamiento de agua, fueron afectadas por la crecida del río Rímac, lo que paralizó su purificación y afectó a cerca de 5 millones de limeños, más de la mitad de la población total. Los habitantes tuvieron que recurrir a los pocos surtidores de agua que existían en gasolineras y otros lugares con el objeto de abastecerse[56]. Un mes después el problema no se había solucionado, las crecidas del río causaban el cierre temporal de la planta, que operaba únicamente con las reservas, capaces de sostener la demanda de la ciudad por solo diez horas. La Atarjea funcionaba en promedio al 75% de su capacidad, lo cual exigía continuos racionamientos de agua, lo que afectaba también a los lugares donde no llegaba la red de agua y desagüe debido a que disminuía el servicio de los camiones cisternas y se encarecía el costo del abastecimiento[57]. Después de estos muy poco alentadores anuncios, una serie de huaycos afectó nuevamente el suministro. El mismo día en que la tarifa de agua fue reajustada en 30% se tuvo que cortar el servicio a toda la ciudad por cerca de doce horas, lo que afectó seriamente a toda la población y, especialmente, a los hospitales. Esto trajo como consecuencia que los camiones cisternas, que se convertían en la única alternativa de abastecimiento, se aprovechen de la situación y elevaran sus precios. En algunas zonas de la ciudad los habitantes hacían largas filas para conseguir agua y pagaban casi el doble de lo acostumbrado[58].

A fines de marzo otro enorme huayco, uno de los peores de esos años, cortó el suministro por 48 horas, lo que empeoró las angustias de los limeños y, esta vez, también la seguridad de la urbe: el cuerpo de bomberos voluntarios alertó que los surtidores de emergencia se habían agotado, lo que dejó solo los depósitos de agua de las unidades para combatir los incendios. Quizá un efecto colateral inesperado

---

[55] *Perú21*, 1-11-2015, «Lima genera más de 8 000 toneladas de basura al día», http://peru21.pe/actualidad/lima-genera-mas-8000-toneladas-basura-al-dia-y-solo-1-desechos-son-reciclados-2231060, fecha de consulta: 31/7/2016.

[56] *La República*, 24-2-1983, «Cinco millones de limeños sin agua».

[57] *La República*, 8-3-1983, «Limeños seguirán sin agua potable».

[58] *El Diario* de Marka, 17-3-1983, «Huaycos dejaron sin agua a Lima».

fue que las fuerzas del orden no podían contar con los carros rompe manifestaciones que utilizaban agua. Las marchas y protestas contaron con algunos días de beneficio por la ausencia del líquido en las unidades policiales[59]. Como si esto fuera poco, el río Rímac, sobrealimentado por las lluvias de El Niño, amenazaba desbordarse en varios puntos de su ribera, lo que puso en peligro la vida de más de dos mil hogares. Incluso las bases del popular Coliseo del Puente del Ejército se carcomían por la crecida del río, lo que causó una seria preocupación a los habitantes de la zona y las autoridades[60].

Así, a fines del verano de 1983 el aire, el agua y las playas mostraban signos de contaminación elevados[61], aunque a juicio del director general de medio ambiente del Ministerio de Salud, el ingeniero Javier Bacigalupo, aún no alcanzaban niveles críticos. La suma de un verano muy caluroso por efecto de El Niño y la falta de recojo de basura en las calles trajo como consecuencia un preocupante aumento de las enfermedades infecciosas, según el mismo ministerio. No solo el aire estaba contaminado, el agua potable también se vio afectada: el rio Rímac tenía alta incidencia de contaminación por causa de los huaycos, los desagües y los relaves mineros. A mediados del año 1983 se informó que habían caído cerca de 300 huaycos en la cuenca del Rímac, razón por la que el río presentaba rastros de plomo, hierro y manganeso, «sin contar la contaminación bacteriológica». De acuerdo con el ingeniero Bacigalupo, no se habían encontrado restos de mercurio o arsénico[62], sin embargo, el costo de purificar el agua se hizo extremadamente caro para la empresa estatal (Sedapal); además, aunque el agua salía limpia de la Atarjea, la contaminación se producía en las cañerías y en los defectuosos sistemas de almacenaje (tanques, cisternas, etcétera)[63].

Un acontecimiento recordado por muchos limeños fue la contaminación de la red de agua potable el 22 de noviembre de 1988, esa mañana el agua de las cañerías salió con olor fétido, lo que afectó a millones de limeños. Este impactante hecho es una muestra de los peligros que acechaban la vida cotidiana de los habitantes de la

---

[59] *El Diario* de Marka, 25-3-1983, «Hoy se normalizará suministro de agua».

[60] *El Diario* de Marka, 5-4-1983, «Lima en peligro por furia del río Rímac».

[61] Desde 1980 todos los veranos, hasta el presente, se informa de la mala calidad de varias de las playas de la ciudad. En la década de los ochenta varias de ellas estaban contaminadas por los colectores de aguas servidas que desembocaban a pocos metros de las playas, más la cantidad descontrolada de restaurantes y kioscos que lanzaban sus desperdicios en las arenas y mar cercanos. Incluso un puesto de la entonces Guardia Civil también participaba de esta escalada de contaminación. *Extra*, 4-1-1989, «Siete playas altamente contaminadas».

[62] *La República*, 12-7-1983, «Lima se hunde agobiada por la contaminación».

[63] En 1986 las autoridades comenzaron a preocuparse por la calidad del aire que los limeños respiraban. Una de las medidas tomadas consistió en recortar el tránsito vehicular en el centro de Lima. *Extra*, 24-1-1986, «Lima respiró menos humo con nuevo orden vehicular».

capital.[64] Paradójicamente ese mismo día, por la noche, el Ministro de Economía del gobierno aprista, Abel Salinas, anunció un paquete de medidas económicas que profundizaron la recesión económica y que tampoco sirvieron para controlar la espiral inflacionaria.

Años después, el efecto de décadas de contaminación y descuido dejaron en estado mortal al río Rímac, lo que agravó los problemas urbanos. En 1992 se informó que el río, muy lejos de su ideal colonial, estaba altamente contaminado con residuos fecales, los cuales podían ser eliminados por medio del cloro en la planta de tratamiento de La Atarjea, pero el agua no potable era abundantemente utilizada para regar los cultivos alimenticios del valle. Además, muchas familias aún usaban el río como fuente de abastecimiento para lavar la ropa o lugar de recreo; sin contar con que una buena parte de la población aún se abastecía por medio de cisternas sin control respecto a la calidad del agua que ofrecían. El río se había convertido en un gran botadero de basura, los desagües de la ciudad lo alimentaban al igual que el lanzamiento de desperdicios de los vecinos a la cuenca[65].

A pesar de no contar con las condiciones apropiadas, en 1992 la ausencia de planificación e inversión estatal dejó al río Rímac casi como la única fuente de abastecimiento de agua (70%), sumada a los pozos que disminuyen constantemente las reservas subterráneas. Una parte del problema se originaba en el rendimiento deficitario de las empresas públicas de agua y electricidad, las cuales ofertaban los servicios por debajo de sus costos operativos. Y, como si fuera poco, la falta de agua por el fenómeno de El Niño de 1992 agravó la deficiencia en el abastecimiento de electricidad lo que generó continuos racionamientos y cortes. Ríos y lagunas de la sierra central se encontraban en niveles mínimos históricos, lo que causó que la potencia generada se reduzca por lo menos en 20%; esto llevó a que se aplique un calendario de cortes interdiarios de electricidad[66]. En mayo de 1992 Electrolima informó que el alumbrado público sería restringido, además, se aplicaría un plan de reducción del consumo en los negocios que utilizaban avisos luminosos, considerándose una disminución del 20% del servicio. Incluso los cortes de electricidad agravaban el desabastecimiento de agua debido a que no menos del 40% de la población se abastecía de pozos que dejaban de funcionar por el

[64] Testimonio de César Vásquez Bazán, ex ministro de economía del gobierno aprista (https://cavb.blogspot.com/2012/03/esa-bestialidad-de-politica-economica.html, fecha de consulta: 20/8/2018).

[65] *La República*, 11-1-1992, «Río Rímac es ahora el gran basurero de Lima» y 14-1-1992, «Lima al rescate de su río».

[66] *Expreso*, 10-5-1992, «Población limeña tendrá que acostumbrarse a vivir a oscuras».

racionamiento[67]. En el mes de agosto la empresa redujo en 30% el servicio, lo que afectó a millones de habitantes[68].

Sedapal desarrolló un plan de emergencia para intentar paliar el problema del abastecimiento de agua. Sus acciones incluían una agresiva campaña educativa para usar responsablemente el recurso, prohibición de regar jardines y parques con agua potable entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m., revisión de las instalaciones domésticas, control de las cisternas y un plan de inversiones para ampliar la capacidad de reserva. Sin embargo, todas estas medidas no lograron los efectos esperados[69]. Entre las explicaciones acerca del déficit en el servicio de agua potable se mencionan la obsoleta red, que causaba pérdidas cercanas al 45% del agua y el uso incontrolado de los pozos por parte de empresas (por ejemplo, los embotelladores de aguas gaseosas y las cerveceras). Mientras que, muchos de los barrios eran abastecidos por medio de camiones cisternas que nadie controlaba eficazmente[70]. Algunas autoridades consideraban que el problema también se originaba en el aumento exponencial de la población de la ciudad, incremento que trajo como consecuencia un gran aumento de la demanda de agua, y responsabilizaban a la migración de este efecto. Entre 1980 y 1990, se reconocieron 432 nuevos asentamientos, es decir, más de la mitad de todos los anotados desde 1961; mientras que, solo en 1990, se reconocieron el 22% de todos los pueblos jóvenes. Del total de registrados en 1992 (826), 65% carecía de abastecimiento de agua, 77% de desagüe y 63% carecía de servicio eléctrico. Estas privaciones afectaban a poco menos de un millón y medio de habitantes, cerca del 20% de la población total de Lima[71].

A esta emergencia en los servicios se sumó otro problema poco usual, pero que en la década de 1980 se hizo muy frecuente: el robo de las tapas de los buzones del alcantarillado, hecho que obviamente facilitaba la proliferación de los insectos y roedores. La escasez de medios de subsistencia y la falta de control, o desidia de las autoridades[72], llevaron a que bandas de delincuentes hurten las piezas de metal con el objeto de traficarlas entre las diversas fundiciones de la ciudad. El problema incluía a alrededor de mil buzones de los 90 mil que existían en la ciudad, pero su ausencia no se distribuía de manera uniforme, afectaba mucho más a los distritos más antiguos de la ciudad, tales como La Victoria, el centro de Lima y Breña.

[67] *Expreso*, 10-5-1992, «Población limeña tendrá que acostumbrarse a vivir a oscuras».

[68] *Expreso*, 4-8-1992, «Racionamiento de luz alcanza el 30%».

[69] *Expreso*, 12-2-1992, «Decomisarán mangueras y sancionarán a los que no reparen sanitarios».

[70] *La República*, 1-2-1992, «Lima, ciudad sedienta».

[71] *La República*, 2-2-1992, «Población limeña crece a un ritmo incontrolable». Véase también Driant, 1991.

[72] La fiscalía consideraba el delito como menor, tanto ladrones como compradores de las tapas no podían ser castigados por la ley.

En las calles de este último espacio, como Tingo María, Zorritos y otras en La Victoria se contabilizaban por decenas los buzones sin tapa. Hasta 1984 se reportaban un promedio de 300 a 400 robos de tapas por año, pero al parecer desde 1985 el problema se agravó. De acuerdo con el gerente general de Sedapal, el ingeniero Luis Atkins, en 1985 se sustrajeron más de mil piezas, aunque la empresa reponía las tapas, rápidamente desaparecían en otros lugares: «lo que ocurre es que se repone una tapa en La Victoria y se roban dos en Pueblo Libre. Se reponen dos tapas en Jesús María y se roban otras dos en el Porvenir». No solo se robaban las tapas de los buzones, también se hurtaban medidores de agua, de luz, conexiones, etcétera; esto dejaba verdaderas trampas mortales en las calles. Un operativo policial ubicó más de siete toneladas de fierro en las fundiciones, todas proveniente de los robos mencionados. Todas las medidas de la empresa parecían fracasar rápidamente; por ejemplo, se soldaban las tapas o se las cambiaba por cubiertas de cemento; sin embargo, igualmente rompían las soldaduras o se llevaban el fierro de las tapas de concreto. Algunos de los buzones sin tapa tenían varios meses sin ser protegidos, un vecino de La Victoria, Demetrio López, señaló con ironía, que había «uno que va a cumplir un año sin cubierta, estamos por ponerle una velita de cumpleaños»[73]. Los resultados de esta desidia eran trágicamente previsibles. Una criatura cayó víctima de estas trampas urbanas: Alex Raúl Montes murió por esta causa y dejó a su familia llena de dolor e indignación[74].

Alimentos que matan

Como he señalado en la primera parte, entre 1980 y 1985 se impusieron ajustes estructurales que deprimieron la demanda, sin lograr estabilizar la economía. Con la entrada de Alan García como presidente en 1985, se produjo un año de expansión que sería el preludio de una serie de erráticas políticas económicas que fracasarían estrepitosamente a fines de los años ochenta. En 1986 el incremento de la demanda ocasionada por el aumento de salarios y del gasto público tuvo como previsible resultado un mayor consumo de alimentos, el cual sobrepasó largamente la capacidad de producción interna, especialmente por el congelamiento de precios que actuó a manera de dique, mientras se agotaban las reservas internacionales que financiaban las crecientes importaciones. Esta política de subsidios de los precios

[73] *La República*, 11-1-1986, «Hay más de tres mil trampas mortales en calles de Lima». Todavía en el año 2015 se registraron accidentes por esta causa, como lo sufrió una mujer embarazada (https://www.youtube.com/watch?v=MBirJIiayj4, también http://panamericana.pe/buenosdiasperu/locales/148558-peligro-200-tapas-buzones-robadas-2014, fecha de consulta: 31/7/2016).

[74] Además, un inescrupuloso empresario los estafó con el ataúd. *La República*, 11-1-1986, «Estafaron a padre del bebé que murió en buzón sin tapa».

de los alimentos, presente desde la década de 1970, tuvo como consecuencia en los años ochenta el acaparamiento y la especulación por parte de los comerciantes, en parte para protegerse de los inevitables reajustes y quizá porque esperaban ganar más al negociar los alimentos fuera de los mecanismos de control[75]. Este problema se agravaba en los veranos por causa de los huaycos que obstruían las carreteras, pero también la política de precios controlados no estimuló la producción agrícola, incapaz de competir con los productos subsidiados por medio de las importaciones financiadas con un valor del dólar por debajo del real[76]. Así, en 1986 comenzó a sentirse fuertemente la dificultad para obtener los comestibles necesarios para la vida cotidiana, estos salían de las fronteras para ser negociados en los países vecinos por sus mejores precios. Otro caso fue el mal uso de los subsidios, por ejemplo, utilizar el combustible doméstico, que tenía un precio especial, en actividades industriales, lo que reducía los costos y aumentaba las ganancias, pero generaba desabastecimiento.

En los años siguientes la escasez e inflación de precios aumentaron gravemente, lo que dejó un recuerdo amargo entre los habitantes. Como se señaló en la primera parte, a fines de la década de 1980 el plan económico aprista fracasó estrepitosamente. Los controles de precios no funcionaron y, más bien, generaron un creciente mercado clandestino de alimentos. Se aplicaron racionamientos en su distribución, cual economía de guerra, que, sumados a la corrupción en su administración, complicaron aún más la situación alimenticia. Las entidades públicas que regulaban el acopio y venta de alimentos colapsaron, y se revelaron incapaces de sostener la oferta, especialmente cuando las reservas internacionales se acercaron al cero. Por ejemplo, una de ellas, la Empresa Nacional de Comercialización de Insumos (ENCI), tristemente conocida por la leche en polvo que distribuía, también se encargaba de la importación de arroz, el cual era distribuido a los minoristas por la Empresa de Comercialización del Arroz (ECASA), una entidad de capital mixto. A principios de 1989 la distribución de este cereal, fundamental en la dieta peruana, colapsó a nivel minorista. Entre las deudas que tenía ECASA con los productores[77], quienes ya no enviaban el cereal a Lima y la incapacidad de continuar con la importación de alimentos, se produjo una aguda escasez en Lima. Largas filas en

[75] Desde mediados de la década de 1970 comenzaron a notarse con mayor claridad los problemas de abastecimiento de alimentos (Babb, 2008, pp. 268-269).

[76] *Extra*, 10-1-1986, «Ejército impedirá contrabando de alimentos» y 10-1-1986, «Arrojan alimentos al Río Mantaro».

[77] De acuerdo con el diario *Expreso*, 29-1-1989, ECASA les debía los pagos de arroz desde el mes de diciembre anterior. Considerando la inflación de la época, este retraso es bastante más grave de lo que se puede deducir por el tiempo. Por esa razón decidieron compensar a los productores nacionales reajustando los pagos con una nueva tasa.

los pequeños negocios y mercados provocaron conflictos entre los compradores y vendedores, lo que generó en muchos lugares la necesidad de la intervención policial. La situación llegó a tales extremos que tuvieron que intervenir tanquetas policiales, mientras que con un sello se marcaba el brazo de los y las compradoras para evitar que adquieran el cereal más de una vez[78].

La falta de abastecimiento en 1989 llegó a niveles críticos. La leche en polvo subsidiada por el gobierno y comercializada por ENCI desapareció de la mayoría de los mercados. Este producto buscaba mejorar la capacidad alimenticia de los más pobres, aun cuando se obtuviera por encima del precio oficial era mejor que comprar la leche evaporada, la cual rendía la mitad de la leche en polvo. Sin embargo, algunos medios denunciaron que se podía comprar de forma clandestina en otros lugares, con un costo mayor al oficial, mientras que, en los barrios populares había desaparecido. En distritos como Miraflores, Surco, Surquillo y San Isidro se pudo fotografiar a vendedores y compradores a bordo de automóviles que conseguían las esquivas bolsas de leche. La empresa organizaba ventas directas por medio de camiones distribuidores, pero usualmente el producto se agotaba con rapidez, y dejaba una larga fila de compradores insatisfechos y molestos. La sospecha era que los encargados ofrecían el producto a los vendedores callejeros antes que al público minorista y así obtenían ganancias ilegales. Por ejemplo, algunos de los ambulantes sostuvieron que pagaban 20 mil intis por caja, cuando su precio oficial era de 13 mil; otros hacían la fila con sus familiares, luego acopiaban las bolsas y las revendían en las calles[79]. Finalmente, también se denunció que parte de las bolsas comercializadas provenían del lote entregado a programas de asistencia alimentaria, tal como el Vaso de Leche[80].

La situación empeoró un par de días después de estas denuncias. El director de ENCI declaró que la codiciada bolsita solo sería distribuida en los comedores populares y el programa del Vaso de Leche, mientras que, en la venta minorista dejaría de estar subsidiada. Además, para limpiar la imagen del producto, estratégicamente propuso un cambio de nombre a «Delicia». Esta nueva presentación sería distribuida por medio de la prefectura y los municipios, como una medida para evitar los conflictos[81].

[78] Se debe hacer notar que la nota introduce una variable de género importante: el desabastecimiento era sufrido fundamentalmente por las amas de casa: «madres de familia tuvieron que formar largas y madrugadoras colas, mientras la vigilancia policial se extremaba para evitar brotes de violencia y la protesta de los pobladores». El testimonio del sellado de brazos también es parte de la tradición oral limeña de esa época (*Expreso*, 29-1-1989, «Sellan brazos a las compradoras de arroz»).

[79] *La República*, 19-2-1989, «Venden cualquier cantidad de leche ENCI en Miraflores y San Isidro».

[80] *La República*, 21-2-1989, «Leche 'ENCI' desaparecerá en forma definitiva de los mercados».

[81] *La República*, 21-2-1989, «Leche 'ENCI' desaparecerá en forma definitiva de los mercados».

A fines del verano de 1989 la crisis aumentó. No solo se trataba del desabastecimiento, también habían disminuido fuertemente los salarios reales. Los trabajadores estatales en huelga por casi dos meses exigían mejoras salariales, los jubilados protestaban por el recorte de sus pensiones, mientras que, las diversas organizaciones de los pueblos jóvenes reclamaban urgentes mejoras en los servicios básicos, mostraban sus canastas de compras y ollas vacías durante las marchas[82]. Incluso la empresa estatal de servicios pesqueros (EPSEP) que usualmente abastecía de pescado a bajo costo, fue desbordada por la demanda, lo que incrementó la deficiencia en la oferta de alimentos[83]. La reacción del gobierno fue básicamente represiva, lo cual, comprensiblemente, no solucionó nada.

El Ministerio de Agricultura prohibió la venta callejera de leche, aceite, azúcar, fideos y arroz; subestimó las necesidades y capacidades de los vendedores y compradores para obtener los productos. Los dirigentes de los ambulantes consideraban que estas medidas no se podían cumplir por causa del ineficiente abastecimiento y el peso que tenía la venta ambulatoria en la oferta. Además, las ganancias de los minoristas no se generaban en la venta de los productos controlados: normalmente servían de enganche para exigir la compra de otros bienes, tales como jabón, detergentes, etcétera[84]. Estas disposiciones se convirtieron rápidamente en letra muerta, los ambulantes continuaron vendiendo los productos por encima de los precios oficiales, lo que empeoró las condiciones de vida de los más pobres[85].

En agosto de ese año el gobierno intentó controlar la inflación al reajustar los precios y comprimió aún más la demanda, medidas que fueron bautizadas como el «gasolinazo» o el «aceitazo»[86], las cuales tampoco lograron estabilizar la economía[87]. El alza del costo de vida fue general, carnes, pescados, menestras, frutas, etcétera, aumentaron sus precios y los salarios continuaron su disminución; mientras que los productos eran vendidos en las calles muy por encima de los precios oficiales[88]. Incluso el pan, otro producto básico, aumentó su precio, lo que generó el rechazo de los panaderos y compradores[89]. A fines de ese año, el alarmista diario *Extra*

---

[82] *La República*, 17-3-1989, «Amas de casa marchan con canastas vacías».

[83] *Expreso*, 25-3-1989, «En otro 'vía crucis' no hubo pescado barato».

[84] *La República*, 15-5-1989, «Prohíben la venta ambulatoria de arroz, azúcar, aceite y leche».

[85] *La República*, 21-5-1989, «Ambulantes se enriquecen con arroz» y *Extra*, 19-8-1989, fotografía de la portada.

[86] *Extra*, 16-8-1989, «El aceitazo».

[87] *Extra*, 9-8-1989, «Tras cada mate un paquetazo».

[88] *La República*, 2-7-1989, «Comerciantes esconden alimentos para venderlos con sobreprecios» y 24-11-1989, «Hay azúcar… ¡en la calle!».

[89] *Extra*, 19-8-1989, «Lima sin pan».

anunció un inminente colapso alimentario al citar las declaraciones de Alberto Fujimori, líder de Cambio 90[90].

Además, por lo menos desde los primeros años de la década, se detectó la falsificación de productos de fábrica, lo que provocó mayor inseguridad para comprar alimentos entre la población[91]. A mediados de la década un buen número de ambulantes vendían una serie de productos que no contaban con los registros sanitarios correspondientes, alteraban su composición al punto de convertirlos en altamente peligrosos para la salud. Por ejemplo, se denunció que la pimienta que se comercializaba solo contenía alrededor del 40% del producto, desconociéndose el origen del resto[92]. En junio de 1986 el diario *Extra* llevó adelante una campaña de denuncias que desprestigiaban las ventas de alimentos callejeros y reafirmaba la ineficacia del municipio en la regulación urbana. En agosto reveló que los ajos eran lavados con agua contaminada[93] y en setiembre denunció que las papas importadas clandestinamente desde el Ecuador estaban infectadas de ácaros y estaban contaminadas de pesticidas[94]. A fines de año se concentró en denunciar el robo en el peso de los productos vendidos por los ambulantes provocado por las deficientes balanzas adulteradas[95]. Tres años después el mismo diario informó que el vinagre y hasta los aparentemente inofensivos caramelos estaban afectados por contaminantes. Especialmente estos productos ofertados por los vendedores en micros y ómnibus eran preparados con insumos tóxicos, entre ellos, ácido acético, magenta ácida y otros químicos altamente peligrosos para la salud. La relación entre el problema de salud pública y la migración se revela en los lugares en los cuales supuestamente se manufacturaban estos productos, «ubicados en La Victoria, Comas, San Juan de Lurigancho y Cantogrande». En estas fábricas clandestinas también elaboraban insumos como esencia de vainilla, «sillao» (salsa de soya), colorantes y otros productos necesarios para la fabricación de dulces, helados, «raspadillas», etcétera[96].

En la década de 1980 otro problema se sumó a los anteriormente mencionados: la calidad de la comida ofertada en las calles de Lima. Desde el primer año de la década los medios informaron de la escasa sanidad de los productos que se vendían y del enorme peligro que suponían para la población, especialmente en la difusión

[90] 21-12-1989, «Se viene colapso alimentario».

[91] *Correo*, 8-1-1983, «Lo enjuician por vender panetones 'falsificados'».

[92] *Extra*, 7-6-1986, «Sazonadores mortales venden ambulantes» y 11-6-1986, «Gaseosas de fabricación clandestina invaden Lima».

[93] *Extra*, 14-8-1986, «Lavan ajos con agua altamente contaminada».

[94] *Extra*, 26-9-1989, «Papa de contrabando y con sarna».

[95] *Extra*, 20-12-1989, «Con balanzas roban peso en mercados».

[96] *Extra*, 25-1-1989, «Venden vinagre y caramelos supertóxicos».

de enfermedades como la tifoidea[97]. Como señalaba un medio, incluso con una línea editorial condescendiente con los ambulantes, existían miles de carretillas «donde se expenden alimentos sin las más mínimas condiciones de higiene»[98], especialmente en el centro de la ciudad. De acuerdo con un funcionario municipal, eran «restaurantes rodantes, donde el transeúnte ingiere tifoidea a raudales, bajo la forma de ceviche, papa a la huancaína, seco, chanfainita, etc.»[99]. Esta forma de vender comida sería, de acuerdo con las autoridades, la responsable de los 18 mil casos detectados de tifoidea hasta mayo de 1980, de los cuales cerca de 500 tuvieron consecuencias fatales[100]. A esta situación se le sumaron los ya conocidos basurales, que aumentaron gravemente la contaminación ambiental y afectaron especialmente a los niños. En el Hospital de El Niño se atendían a decenas de infantes afectados de enfermedades de la piel y males gástricos, producto de la contaminación, a su vez consecuencia de la acumulación de basura en las calles. De acuerdo con el doctor Patricio Reinoso, las autoridades «deben dar rápida solución al problema sino quieren que Lima se convierta en una trampa mortal»[101], especialmente había que erradicar los basurales que se habían convertido en «un amasijo de desperdicios malolientes e infectos», que además atraían insectos y roedores, lo que elevó su peligrosidad. Por su parte, el doctor Ricardo Galdino, jefe de la División de Epidemiología de la Región de Salud Lima, consideraba que el problema era mucho más grave en aquellos lugares en los cuales se carecía de servicios básicos, especialmente en los pueblos jóvenes, «de cada 100 enfermos de tifoidea, 70 viven en Pueblos Jóvenes»[102], lugares, como hemos visto, mayormente carentes de servicios de agua y desagüe.

Esta grave situación sanitaria motivó una campaña municipal en setiembre de 1980, titulada «Adiós tifoidea», con la que se trató de erradicar las carretillas y cambiarlas por quioscos. Los vendedores de comida se opusieron a las medidas, pero proponían mejorar la presentación de sus carretillas, pagar los derechos respectivos por el uso del espacio, obtener el carné sanitario, usar guardapolvos, dotarse de tanques de agua hervida y otras disposiciones para mejorar la higiene de sus lugares

[97] *Correo*, 12-3-1980, «Municipio contra tifoidea. Hará campaña contra venta ambulante de alimentos».

[98] *El Diario* de Marka, 13-5-1980, «La tifoidea se vende en carretillas».

[99] *El Diario* de Marka, 13-5-1980, «La tifoidea se vende en carretillas».

[100] *El Diario* de Marka, 13-5-1980, «La tifoidea se vende en carretillas». En setiembre del mismo año se consideraba que la tifoidea se había convertido en una epidemia (*El Diario* de Marka, 5-9-1980, «Actualmente la tifoidea ya es una epidemia»).

[101] *El Diario* de Marka, 23-5-1980, «Lima está envenenada; tifoidea y enfermedades a la piel proliferan».

[102] *El Diario* de Marka, 5-9-1980, «Tifoidea: problema socio económico y no médico».

de venta[103]. Como hemos visto en otros casos, los ambulantes no se oponían a la reglamentación, por el contrario, ellos la proponían y aceptaban como una manera de legitimar su presencia en las calles.

A pesar de todos estos peligros, los limeños recurrían a la alimentación callejera como una manera de sobrevivir a la crisis. El impacto de las dificultades económicas llevó a que se diversifique la forma de obtener alimentación en las calles. Por un lado, se encontraban los siete comedores populares en Lima, varios de ellos creados durante el gobierno del general Óscar R. Benavides (1933-1939); ofrecían menú por menos de 100 soles a más de 1400 personas a la hora del almuerzo y cerca de 800 para la cena[104]. Este servicio estatal se deterioró con el transcurrir del tiempo, a partir de 1986 las raciones disminuyeron y corría el rumor de que era la misma dieta que se utilizaba en las prisiones, a pesar de lo cual las raciones se acababan rápidamente[105]. Incluso en 1989 los restaurantes dejaron de funcionar por varios días por causa de los cortes de electricidad que los dejaban inoperativos[106]. La baja cobertura de estos restaurantes explica la aparición del comedor barrial surgido a fines de la década de 1970 y organizado por ciudadanos de los sectores populares, en ellos el costo bordeaba los 300 soles para las tres comidas diarias. Por último, se encontraba el comedor ambulante, quienes ofrecían platos entre 100 a 140 soles, pero sin ningún control sanitario. Esta última modalidad fue la que se incrementó notablemente y dejó atrás a los restaurantes que ofrecían comida a precios bastante más altos[107].

Una extensa nota publicada en *El Diario* de Marka, realizó un recuento de la diversidad de menús que se ofrecían sin mediar ninguna carta, como usualmente sucede. En los alrededores del Parque Universitario se podía elegir entre una multiplicidad de carretillas que ofrecían comida, guiaban al comensal por medio de los aromas. Se podía comer por un precio módico ceviche de jurel, pero los mismos vendedores alertaban de que era mejor comerlo temprano, antes de que el sol haga sus efectos en el pescado[108], también se podía encontrar la popular chanfainita, sin ninguna garantía de que provenga de carne de vacuno; en todos los casos era difícil establecer la procedencia de los alimentos, especialmente porque la mayoría no era elaborada por los ambulantes, ellos los adquirían a intermediarios. Por ejemplo, el autor de la nota señalaba que las carretillas de los vendedores

[103] *El Diario* de Marka, 26-9-1980, «Ambulantes de comida dicen no a erradicación».

[104] *El Diario* de Marka, 13-9-1980, «En Lima existen tres tipos de comedores populares».

[105] *Extra*, 12-9-1989, «Comedores populares: muerte lenta».

[106] Ismael León, *La República*, 9-1-1989, «Si tengo suerte, podré comer hoy».

[107] *El Diario* de Marka, 13-9-1980, «En Lima existen tres tipos de comedores populares».

[108] *El Diario* de Marka, 29-5-1980, «…Ese coqueteo con la muerte».

de ceviche de conchas negras tenían el mismo diseño, detalle que podría indicar la intermediación. Desde esa perspectiva, el ambulante era un punto en la cadena, quizá el más débil. Algunos de los vendedores señalaron que el alquiler de la carretilla estaba por los 100 soles diarios (más o menos el costo de un plato de comida). Los depósitos en los que se alquilaban y guardaban carretillas se podían encontrar casi en toda Lima, especialmente en La Parada y en el centro de la ciudad[109].

Sin duda una de las razones del por qué la gente se alimentaba en las calles consistía en el impacto de la crisis económica[110]. El comensal de la calle, «tiene los bolsillos sin plata y siempre anda de prisa. Obreros, artesanos, viajeros, estudiantes, cachueleros, madres de familia, gente de las barriadas, que viene al centro»[111]. De acuerdo con la última nota, los vendedores de comida no tenían muchas opciones para sobrevivir, pero era necesario regular y controlar la higiene de los alimentos, para lo que se sugería la participación de médicos y dietistas. Por una parte, los bajos salarios empujaron a la población a buscar comida a bajos precios, mientras aumentaba rápidamente el costo de vida; por otro lado, cada vez era más difícil conseguir insumos alimenticios por sus altos precios, mientras que los ambulantes podían ofrecer comida a un costo más bajo del que se podía lograr en un hogar limeño[112].

La situación se agravó con el fenómeno de El Niño en 1983. El calor extremo convirtió rápidamente los desperdicios en focos infecciosos, al mismo tiempo que empujó a los limeños a consumir bebidas frías artesanales, como la típica raspadilla (o «raspado», como suele decirse en otros lugares) elaborada con escasas condiciones de higiene y con agua de dudosa procedencia[113]. Este inusual verano de 1983 generó una emergencia ambiental que rápidamente superó la capacidad de las autoridades. Los establecimientos hospitalarios fueron desbordados por casos de infección de salmonela[114], presente en la descomposición de alimentos, la proliferación de

[109] *El Diario* de Marka, 29-5-1980, «…Ese coqueteo con la muerte».

[110] No solo el centro de Lima era escenario de esta proliferación de carretillas que vendían alimentos, el Callao también sufrió el mismo proceso (*Correo*, 6-8-1980, «Restaurantes callejeros han invadido el Callao»).

[111] *El Diario* de Marka, 29-5-1980, «…Ese coqueteo con la muerte».

[112] Por ejemplo, aunque *El Diario* de Marka claramente exageró la nota, se anunció en 1980 que la sequía había afectado seriamente la producción agrícola peruana, razón por la cual el Ministerio de Agricultura anunció una ampliación de la importación de alimentos (*El Diario* de Marka, 13-5-1980, «La próxima quincena el hambre se agudizará»).

[113] *El Diario* de Marka, 8-2-1983, «Verano y raspadilla» y *Correo*, 15-1-1983, «Cuando la sed apremia».

[114] Estas bacterias eran responsables de diversas enfermedades, entre ellas, la tifoidea y las fiebres paratíficas (*La República*, 16-1-1983, «No solo el calor mata a los niños»). En el barrio de Condevilla cerca de 300 niños estaban amenazados luego de que se detectó un brote de tifoidea, producto de las aguas servidas y la inexistencia de desagües (*Correo*, 11-7-1983, «La tifoidea amenaza a 300 niños en Condevilla»).

la basura y las plagas de insectos y roedores, todo esto potenciado por las altas temperaturas —en enero la temperatura se elevó hasta los 31 °C—. De acuerdo con los médicos, la principal causa era la contaminación de los alimentos, entre ellos, especialmente los pescados y mariscos. Otro medio de contaminación era la calidad del agua, las cisternas y tanques que la distribuían rara vez recibían mantenimiento, hechos que ayudaban a la difusión de enfermedades. Para desesperación de las autoridades y temor de los habitantes, la evaporación —producto de las altas temperaturas— era capaz de dispersar las bacterias en la humedad, que entraban al cuerpo humano mediante la respiración. También las legumbres y verduras frescas, muchas de ellas regadas con las aguas contaminadas del río Rímac, eran otro medio de exposición a las enfermedades, al punto que los médicos recomendaban no comer nada sin hervir. Lo mismo se pedía respecto a los quesos y derivados lácteos, incluso se alertaba de las gaseosas mal conservadas. Además, existía el consenso de que, a pesar de las razones, las personas que se alimentaban en las calles exponían su vida debido a la escasa higiene de los vendedores de comida[115]. Este relato dantesco dejaba a los limeños en una situación angustiante, expuestos a las enfermedades y sin muchas opciones para alimentarse sanamente. Lima se había convertido en una trampa mortal.



Figura 9. Representación de vendedora de «sebichi». *El Comercio*, 16 de junio de 1980.

En junio de 1986 el diario *Extra* llevó adelante una campaña de tono alarmista en contra de la venta de alimentos y de comida preparada por parte de los ambulantes,

[115] *La República*, 16-1-1983, «No solo el calor mata a los niños».

se publicaron notas que informaban de la venta de carne de caballo o burro en el Mercado Central[116] y la comercialización de licores adulterados (llamados «bamba»)[117]. La venta de comida fue un tema abordado varias veces, destacaban su alta peligrosidad para la salud pública con datos que, hoy sabemos, son errados. Por ejemplo, la denuncia de que se preparaba el ceviche ofrecido en las carretillas en «pestilentes piscinas» y con «algún ácido que sustituye al limón», fue acompañada de la información de que el comensal no solo podía enfermarse de tifoidea o parasitosis, sino «también [de] otras enfermedades más graves como el cáncer y hasta el SIDA, lo que se puede contraer cuando se habitúa al consumo de los diversos alimentos, bebidas y refrescos que a vista y paciencia de las autoridades de salud ediles expenden miles de vendedores ambulantes»[118]. Este ceviche era preparado por personas que se introducían en grandes recipientes de plástico, como piscinas, «sin zapatos y a veces hasta con ellos y a lampazos preparan el 'rico' ceviche. Una cola de ambulantes espera con sus tinajones que les den su ración, de acuerdo a las posibilidades de cada quien». La certeza de que estos productos eran altamente peligrosos se refuerza porque «este típico plato es preparado tal vez por personas atacadas del bacilo de Koch o portadores del SIDA y va a parar a numerosas mesas y kioskos de la Parada y diversos mercadillos y paraditas de Lima»[119]. Si a este problema se le suman la falta de agua y las bajas condiciones sanitarias en la limpieza de los platos y menaje de cocina, la situación resultante era altamente peligrosa para la salud pública. Unos días después el mismo diario denunció que los vendedores de alimentos habían invadido casi todo el centro de Lima, en desacato de las disposiciones, y atentaban contra la salud de la capital (Macera & Soria, 2015, p. 17).

Uno de los lugares predilectos para la venta eran las inmediaciones de los hospitales, los vendedores obstruían las entradas y ofrecían alimentos que a veces eran introducidos clandestinamente por los familiares para deleite de sus enfermos, pero preocupación de los médicos. De acuerdo con el diario, una dirigente de los comerciantes, llamada Isidra López, señaló que eran desalojados de todas partes y que necesitaban un espacio, «mientras expendía un pan con huevo a todas luces

---

[116] *Extra*, 12-6-1986, «Carnes de caballo y burro venden en Mercado Central» y 11-2-1989, «Era de caballo. Kilo de carne a mil intis». Se denunció en el mismo diario que en el mercado de Breña se ofertaba a vista y paciencia del público carne de gato de dos variedades distintas: común y angora. Además, la vendedora, llamada Juana Carbajal, enviaba la carne a pedido y que provenía posiblemente de un criadero ubicado en la carretera central (*Extra*, 11-2-1989, «Venden gatos en mercados»).

[117] *Extra*, 17-7-1986, «Licores 'bamba' pueden matar».

[118] *Extra*, 19-7-1986, «En mugrientas piscinas y a lampazos preparan ceviche».

[119] *Extra*, 19-7-1986, «En mugrientas piscinas y a lampazos preparan ceviche». Dos días antes se había informado que las populares «pancitas» que se servían en las calles eran preparadas con las vísceras de animales enfermos de tuberculosis, afectando seriamente a los comensales (*Extra*, 17-7-1989, «'Pancitas' con TBC en Lima»).

altamente contaminante»[120]. Nuevamente en un tono claramente alarmista, el diario describía las escasas condiciones de higiene de los ambulantes, quienes quizá estaban enfermos de males contagiosos, «donde la que predomina es la tuberculosis y, sin descartarse, la sífilis»[121]. A fines de ese año las denuncias pasaron a demostrar los efectos concretos del consumo de alimentos vendidos por los ambulantes. Una nota periodística informó de la intoxicación de cerca de veinte personas por consumir panetón en mal estado, «pese a las advertencias que hiciera *Extra* sobre el peligro, las autoridades no hicieron nada por controlar la calidad de los panetones». Las víctimas, de acuerdo con el doctor Carlos Sánchez Vidalón, «compraron panetones en ambulantes», luego de su consumo fueron afectados de cólicos, vómitos, y «hasta alucinaciones», por causa de estar contaminados con «los hongos astergillus [sic]»[122]. Sánchez Vidalón indicó que el calor y las bajas condiciones de higiene en la elaboración de los panetones eran las causantes de la difusión del hongo; en el hospital San Juan del Callao no menos de diecisiete personas fueron atendidas por estas dolencias. La situación era tan grave que el médico declaró que «si por desgracia se hubieran formado los hongos Amamita Verna [sic] o Amamita Bisporigena [sic], los pacientes habrían fallecido, porque son venenosos y destruyen en cuestión de horas el hígado y el riñón»[123].

La campaña contra los ambulantes que ofrecían panetones no cesó en los años posteriores, por el contrario, adquirió un tono apocalíptico[124]. A principios de enero de 1989 se informó de la existencia en los distritos del cono norte de un misterioso

---

[120] *Extra*, 22-7-1986, «Comida de ambulantes consumen hospitales».

[121] *Extra*, 22-7-1986, «Comida de ambulantes consumen hospitales».

[122] El hongo es conocido como *aspergillus*, es una de las variedades más frecuentes de moho y efectivamente su presencia puede provocar diversos males, entre ellos la aspergilosis que afecta a los pulmones y que, eventualmente, podría alterar la visión.

[123] *Extra*, 24-12-1986, «Panetones con hongos intoxica [sic] 2º personas». Los hongos deben ser el *amanita verna* y el *amanita bisporigera*, efectivamente son venenosos y mortales, pero no crecen en el interior del ser humano, son setas de diez centímetros de diámetro. El mismo diario denunció la venta de alucinógenos y otras hierbas venenosas entre los yerberos ambulantes (*Extra*, 31-12-1986, «Ambulantes venden cicuta y alucinógenos»).

[124] La inseguridad se extendió hasta los aparentemente inofensivos yerberos. Un enfermo, llamado Luis Arca, cansado de no encontrar solución a sus males en los hospitales públicos, acudió a un vendedor ambulante del centro. El brebaje que consumió le ocasionó un envenenamiento mortal (*Extra*, 22-6-1989, «Muere en manos de yerbero»). Efectivamente, en las calles del centro se podían comprar brebajes anunciados como la cura de enfermedades pulmonares, estomacales, etcétera (*La República*, 17-9-1989, «Traigo hierba santa»). También se informó que los productos que se ofrecían en las calles como «curas milagrosas» para diversos males eran, en realidad, disparadores del cáncer y de otras dolencias mortales (*Extra*, 19-12-1989, «'Eterna juventud' venden en frascos»). Incluso la aparentemente inofensiva miel de abejas, uno de los productos más ofertados por los ambulantes en las calles, estaba mayormente contaminada y adulterada (*Extra*, 20-12-1989, «Miel de abejas de ambulantes trae tifoidea»).

vendedor que distribuía a bordo de un vehículo el producto contaminado con insecticida. La nota comienza de forma impactante: «un vendedor ambulante de panetones recorre el cono norte sembrando la muerte con sus productos». Una familia fue afectada por el dulce navideño, ofertado «vistosamente envuelto con papel celofán» y comprado a bajo precio. El hijo, llamado Marcelino Aburto, media hora después de consumirlo tuvo que ser trasladado al Hospital de Collique, aquejado de fuertes dolores estomacales. Al poco tiempo también llegó su madre, Julia Ocaña, quien no pudo sobrevivir a la intoxicación. La descripción del vendedor lo relacionó indirectamente con los grupos inmigrantes: «de raza mestiza, mide entre 1,55 y 1,60 metros, tiene cabellos negros bien recortados, estilo 'alemán' y usaba una camisa celeste desteñida, blue jean azul y botas como los que usan los miembros del Ejército». Con estos datos se llevó adelante una «redada de informales [...] para hallar al ambulante que tal vez sin quererlo se ha convertido en una especia de jinete apocalíptico»[125]. Lo paradójico de la nota es que también había otro personaje que en el mismo momento repartía panetones e iniciaba una campaña de visitas populares a las playas, incluidos los habitantes de la zona afectadas por la intoxicación:

> tras efectuar su tradicional reparto de panetón en pueblos jóvenes de Lima y del interior del país, Jorge Chávez Guillerhua, el inquieto dirigente pepecista convertido en especie [sic] de Papa Noel para esas poblaciones, iniciará este domingo sus paseos playeros contando para ello con la colaboración de siete ómnibus de la Empresa de Transportes Perú Línea 70. Miles de niños y adultos y adultos podrán gozar de un buen domingo totalmente gratuito. Los primeros beneficiados son moradores de Villa María del Triunfo y Collique[126].

En 1986 también se denunció que el consumo de cremoladas[127] era la causante de la aparición de colitis y tifoideas. De acuerdo con el diario *Extra*, en el 90% de las muestras tomadas de ese producto en diversas calles del centro resultaron portadores de los bacilos «Esherichia colienteropatonega, causante de la gastroenteritis [sic]»[128]. Aquí claramente el diario asumió la relación completa entre ambulante-migrante-falta de agua-suciedad. De acuerdo con el doctor Víctor Durand, presidente del instituto de investigaciones Louis Pasteur[129], las infecciones tenían como causa

[125] *Extra*, 4-1-1989, «Muere envenenada con panetón de ambulante».

[126] *Extra*, 4-1-1989, «Orden del día».

[127] Una variante de la raspadilla.

[128] Debe ser la *escherichia coli* enteropatogénica, causante de diversos males gástricos.

[129] No he encontrado mayores referencias de esta institución.

> que los ambulantes que son en su mayoría moradores del sector de Juan de Lurigancho [sic] y otros pueblos jóvenes aledaños utilizan agua que mantienen en cilindros que compran en los camiones cisternas […] utilizan el agua de acequias […] esa agua, en la que en dos de las muestras se halla Salmonela Ty Phiy[130] [sic] que produce la fiebre tifoidea, también contenía hongos cándida y aspergillus y otros productos orgánicos indeseables que solo desaparecen con el proceso del cocimiento [sic] o hervido a cien grados centígrados[131].

Además, otra causa de contaminación era el deficiente lavado de los utensilios y vasos, generalmente se utilizaba varias veces la misma agua, lo que provocó la aparición de numerosos casos de gastroenterocolitis. La nota señala que las autoridades no tomaban en serio el problema, exponiéndose a una emergencia ambiental que afectaría gravemente la salud de la población, especialmente de los niños. Si bien las denuncias de *Extra* contienen un tono alarmista, diversas fuentes coinciden en las deficiencias sanitarias de la venta de comida. El diario *La República*, por medio de Gonzalo Rojas Samanez, publicó una pintoresca nota acerca de los vendedores ubicados entre la plaza Dos de Mayo y La Colmena, en la que describía con gracia los diversos menús al alcance de cualquier bolsillo. Arroz chaufa, tallarines, pollo «broster», salchipapas, chanfainita, yucas fritas, hígado guisado, etcétera, todo listo para la multitud de personas que «comen rápido, de pie y luego, a emprender carrera para tomar el microbús y pasarse una o dos horas de pie o dormitando sentados». Lo perturbador de la nota es que algunos vendedores les confesaron sus secretos para aumentar el rendimiento de sus insumos. Por ejemplo, una señora le comentó que hacía alcanzar el aceite agregándole la grasa del pollo, mientras que un vigilante le confesó que era testigo de cómo se preparaban las hamburguesas con cartón: «si yo veo cómo las hacen, les meten pan y un poco de carne remojado [sic], cebolla y carne pasada… esos huevos los fríen en la mañana y están allí mosqueándose hasta la noche y si no los venden, los guardan para el día siguiente»[132]. Total, como le dijo una vendedora, «lo que no mata engorda». Como señala la nota, en aquellos tiempos de escaso presupuesto, comer en esa zona «no será el Vivaldi o el Sheraton, pero cuando el hambre apremia y el bolsillo no da para más, nadie puede ponerse exquisito»[133]. El problema sanitario no mejoraría en el futuro. En 1989 en un mercadillo de La Parada se encontraron grandes cantidades de carne de dudosa procedencia (quizá hasta de perro) con la cual se abastecía a

[130] Esta debe ser la *salmonella typhi*.

[131] *Extra*, 31-12-1986, «Cremoladas con bacilos de colitis y tifoidea».

[132] *La República*, 10-10-1986, «El 'Gran combo' de la calle».

[133] *La República*, 10-10-1986, «El 'Gran combo' de la calle».

los innumerables vendedores de comida, especialmente destinada a los puestos de venta de pollo broster y hamburguesas[134].

A fines de la década de 1980, la situación era tan crítica que la vida en la ciudad parecía casi imposible. Se reiteraron las denuncias de la preparación de ceviche «a lampazos» en lamentables condiciones de higiene en la zona de El Agustino, utilizaban como recipiente enormes tinas de dos metros de diámetro. La nota informa de la intervención policial y reitera los parámetros de la nota publicada en el mismo diario en 1986, se afirma que los cocineros, llamados Juan Flores y Carlos Rivera, ingresaban a esas tinas «con los pies descalzos y en short, removiendo con palas el ceviche, mientras que en la puerta de su corralón, cito en jirón Pablo Patrón 242, esperaba una larga cola de ambulantes con sus blancas fuentes». Aún más alarmantes fueron las declaraciones de los ambulantes, quienes señalaron que en este local la calidad del producto era buena, mientras que el que se ofrecía en otros lugares solo terminaban de venderlo en un lapso de dos a tres días[135].

La escasez provocada por la política económica aprista, la inflación, el terrorismo que afectaba el suministro eléctrico y azotaba cruelmente las calles, los cortes en el abastecimiento de agua, las huelgas de los empleados públicos y privados, y el aumento de la pobreza parecían indicar que los limeños no sobrevivirían a los males que afectaban a la ciudad[136]. Con mordacidad, Pedro Hernández escribió que «el 'futuro diferente' pasará a la historia como la época en que el agua, el teléfono y la luz jamás pudieron estar juntos al mismo tiempo. En efecto, si hay luz, no hay agua ni teléfono. Si hay teléfono, no hay agua ni luz, y así por el estilo»[137].

Un derecho básico, tal como alimentarse, no era tan fácil de cumplir en la Lima de la década de 1980. Si el dinero alcanzaba para comprar víveres, cosa que solo era posible con holgura para una minoría, otro drama era conseguir dónde comprarlos. La escasez generó especulación, largas filas, mercados clandestinos y tensiones entre los habitantes; si por fin se conseguía dónde abastecerse se podía ser víctima de productos adulterados, en mal estado de conservación o contaminados. La escasez y costo de los combustibles también obstaculizaban la elaboración de comidas en casa; además, los cortes de electricidad y agua hacían más difícil la conservación doméstica de los productos y complicaban aún más el escenario. Incluso el sensacionalista *Extra* publicó una nota avalada por un especialista que

[134] *Extra*, 6-6-1989, «Con carne de perro hacen hamburguesas».

[135] *Extra*, 5-5-1989, «Dos mil con tifoidea por ceviche».

[136] *Extra*, 25-12-1989, «Endulzan con caramelos».

[137] *Extra*, 20-7-1989, «En buen romance».

recomendaba el consumo de lombrices en reemplazo de las carnes[138]. Como señalaba una mujer dedicada a la venta de comida,

> Mucha gente sufre de hambre, en la calle y en los restaurantes cobran exageradamente el precio y todavía dan una cosa que cuesta menos, los cobran más. Así como yo muchos no ganan mucha plata, entonces no tienen que comer y se comparte un plato entre dos y tres… No se gana mucho con la comida, depende del precio que uno vende porque si uno vende un poco más cómodo sale la comida y aunque se gana poco, ya sobra para las chicas, yo me conformo con lo que sobra (Picasso, 1986, p. 20).

Este caótico escenario exige una interrogante obvia: ¿por qué arriesgarse a comer en las calles? El bajo costo de la comida fue una de las razones más mencionadas por los comensales, hecho que fue factible gracias a las facilidades de los ambulantes para reducir sus gastos operativos (alquiler de local, electricidad, agua y mano de obra familiar), como también de disminuir el costo de sus insumos con sustitutos o trucos que eran potencialmente dañinos para la población, pero que permitían alimentarse a corto plazo. Algunos de esos insumos solo podían obtenerse por medio de una red que incluía a distribuidores mayoristas y minoristas (arroz, azúcar, leche, aceite, entre otros).

Los costos de la comida en la calle eran variados, algunos números nos pueden orientar para tener una idea más precisa. En enero de 1989 la tasa de cambio del dólar en las calles se encontraba alrededor de los 1850 intis, mientras que a principios de enero el salario mínimo era de cerca de 40 000 intis, un poco menos de 22 dólares americanos. Además, el salario real había caído a cerca de 50% de su valor respecto al año anterior. La inflación acumulada del año 1988 fue de 1722%, en los combustibles fue de 2300%, la inflación de precios de los alimentos controlados fue de 2000% y los alimentos ofertados fuera de los precios oficiales aumentaron en 1500%[139]. Como se puede notar, de acuerdo con las cifras oficiales, los alimentos y combustibles controlados aumentaron por encima de la tasa general de inflación de 1988, pero el impacto más importante de la debacle económica se puede observar en el siguiente cuadro.

[138] *Extra*, 10-10-1989, «Lombrices para vencer el hambre».

[139] Datos extraídos de la Memoria al 31 de diciembre de 1989 del Banco Central de Reserva del Perú (http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/Memoria-BCRP-1989.pdf, fecha de consulta: 23/1/2017).

Cuadro 3
Ingreso promedio real de los trabajadores (intis de 1979, estimados del BCRP)

				Variación porcentual	
	1987	1988	1989	88/87	89/88
Ingreso promedio	34,19	24,67	15,57	27,74	36,89
Dependientes	36,37	23,34	14,08	22,05	50,34
—Obreros	22,35	17,16	9,08	23,23	47,08
—Empleados	56,28	44,25	21,18	21,39	52,14
Independientes	32,41	21,79	16,75	32,76	23,14

Fuente: Memoria al 31 de diciembre de 1989, Banco Central de Reserva del Perú, http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/Memoria-BCRP-1989.pdf. Fecha de consulta: 23/1/2017.

La caída del salario real es dramática en todos los niveles, pero hay algunas diferencias importantes. Los dependientes, obreros y empleados, fueron quienes sufrieron la disminución más drástica de su salario, especialmente el último grupo que vio recortado su sueldo en 21% entre 1987 y 1988 y a la mitad entre 1988 y 1989. Dicho de otro modo, un empleado —peor aún si se encontraba en el sector público— recibía en 1989 el 40% del salario que tenía en 1987; sin embargo, los obreros sufrieron una caída similar entre 1988 y 1989 porque su salario se redujo más que en entre 1987 y 1988 (23%), al final también percibían en 1989 cerca del 40% de lo que ganaban en 1987. Los trabajadores independientes no tenían una situación mucho mejor, sus ingresos se redujeron en 1989 al 52% de lo que recibían en 1987. Este panorama desolador en cuanto a los ingresos puede explicar alguna de las tendencias. Por ejemplo, los empleados y obreros que no cuentan con total libertad para decidir sus horas de refrigerio y, es lo más probable, no pueden regresar a sus casas para alimentarse, necesitan encontrar alimentos a bajo costo. Si bien la solución podría ser la preparación de refrigerios para sostenerse en el día, cosa que ocurría en algunos casos[140], estas no estaban al alcance de todos por las razones anteriormente mencionadas.

La feroz crisis económica expresada en la caída de sueldos y salarios también fue la razón de la aparición en la década de 1990 de una práctica muy peruana: la célebre «pollada». Esta actividad se define por la venta anticipada de raciones de pollo aderezado y frito, ofrecido por medio de tarjetas que se vendían entre los amigos y familiares. En muchos casos este potaje era vendido en locales en los cuales

[140] Ismael León, *La República*, 9-1-1989, «Si tengo suerte, podré comer hoy».

se acompañaba de baile y el consumo de licor. De acuerdo con Béjar y Álvarez, los trabajadores de la Municipalidad de Lima, despedidos en 1996, sobrevivieron gracias a las polladas que organizaban todos los meses (Béjar & Álvarez, 2010, p. 265). Los datos de los autores muestran un notable incremento del consumo promedio per cápita de carne de aves de 11.47 kg/hab entre 1982 y 1989, a 16.57 kg/hab entre 1990 y 1999 (Béjar & Álvarez, 2010, p. 267). Evidentemente estas cifras no aumentaron solo por la extensión del fenómeno de las polladas, también el consumo de aves desplazó el de carne de vacuno por su menor costo.

En este contexto de dificultades para agenciarse la alimentación cotidiana, el menú en las calles era capaz de resolver casi todas las situaciones, sin importar las condiciones de higiene o peligro para la salud. Por ejemplo, como Ismael León lo relata, se podían encontrar empleados, obreros y trabajadores de toda condición, que comían incómodos en las calles. Se podía conseguir desayuno por 150 intis (menos de diez centavos de dólar), consistente en una taza de té y un pan con pescado frito. En un canchón cerca de la avenida La Colmena se podía almorzar con 200 intis (diez centavos de dólar), un plato especial costaba 800 intis (cuarenta centavos de dólar), mientras que en un restaurante popular se podía conseguir lo mismo por 50 intis (tres centavos de dólar). En los mejores restaurantes del centro los platos oscilaban entre los 1200 y los 4000 intis (cerca de 0,70 centavos a dos dólares). A pesar de estos precios tan bajos, comparados con el presente, el Hotel Maury tuvo que reducir de doscientos platos diarios a sesenta por causa de la disminución de clientes. Como se puede notar, para la mayoría de limeños que contaban con un escaso salario comer en las calles se convertía en la única opción, a pesar de los peligros que todos conocían[141]. Como señala el autor de la nota: «trabajadores y estudiantes se alejan de restaurantes y se refugian en carretillas para poder llevarse algo a la boca».

La epidemia de cólera de 1991 fue el corolario de esta peligrosa situación, gestada lentamente por el deterioro de la calidad de vida en la ciudad. El deficiente sistema de saneamiento y la baja calidad del agua eran algunos de los problemas más graves de la época. Además, el famoso ajuste de precios que realizó el ministro Juan Carlos Hurtado Miller en agosto de 1990 tuvo como consecuencia inmediata un aumento record de la inflación y un empobrecimiento aún mayor de la población, aunque fue el punto de quiebre para la estabilidad y la recuperación económica. De acuerdo con los datos de Valdivia, el costo de hervir el agua para evitar las enfermedades podía consumir el 20% de los ingresos familiares, además, disponían cada vez de menos ingresos para cubrir las necesidades médicas (2014, p. 19)[142]. Entre otros

[141] Ismael León, *La República*, 9-1-1989, «Si tengo suerte, podré comer hoy».

[142] El ministro Carlos Boloña se opuso a bajar el costo del kerosene, el principal combustible doméstico.

factores importantes que explican el desarrollo de la epidemia, Valdivia menciona la crisis del sistema hospitalario, las pésimas condiciones de los colegios estatales, especialmente en cuanto a los servicios higiénicos y la conocida contaminación de las playas limeñas provocadas por los colectores, restaurantes, kioscos y bañistas. Y, nuevamente, en la venta de comida en las calles, incluso en las inmediaciones de los hospitales, se encontró abundante evidencia de contaminación con el *vibrio cholerae*. La evidencia se reveló cuando el jefe del Programa de la Enfermedad del Cólera, el doctor Carlos Moreno, informó que el 90% de las personas hospitalizadas habían contraído el mal por comer en las carretillas (Valdivia, 2014, p. 35)[143].Como he señalado anteriormente, para buena parte de la población esta era la única manera de alimentarse aún con el riesgo de contraer el peligroso mal y, como indica Valdivia, a pesar de los diversos esfuerzos estatales, a principios de 1992 se temió un rebrote de la epidemia. También hay que agregar que las condiciones de racionamiento de electricidad y agua, que como he señalado continuaron durante 1991 y 1992, y empeoraron las condiciones de vida de la población[144].

El trabajo de Valdivia muestra que la epidemia reforzó los estereotipos de clase y etnia. Su presencia se asoció con los pobres e inmigrantes. El diario *La República*, citado por la autora, señalaba que las víctimas del mal habían

> participado en fiestas de todo tipo [...] sobre todo provincianas. Los enfermos dijeron que en esas reuniones habían libado abundante licor y consumido comidas preparadas en sospechosas condiciones de higiene. Algunos revelaron haber comido ceviches de pescado y de mariscos, otros bebidas y refrescos hechos con agua no hervida y otros consumido alimentos en los puestos de ambulantes. [...] [L]a mayoría de los afectados procedieron de los pueblos jóvenes, los asentamientos humanos y las barriadas marginales (Valdivia, 2014, p. 65)[145].

Sin embargo, a pesar de todas las denuncias y del peligro epidémico en ciernes, las crónicas periodísticas tradicionalmente adversas de algunos diarios comenzaron a percibir con mayor empatía la venta de comida en la calle. Una crónica de Luis Miranda de la culinaria limeña, publicada en el diario *Expreso*, hizo un extenso recuento de los diversos lugares y potajes que se podían degustar, en un recorrido que iba por calles como Polvos Azules, Abancay, Grau, Azángaro, etcétera. En esta

---

[143] La municipalidad reaccionó prohibiendo la venta de una serie de alimentos y bebidas (Valdivia, 2014, p. 36; también, *La República*, 6-1-1992, «Decenas contraen el cólera por ingerir alimentos en carretilla»).

[144] Adicionalmente se puede consultar, *Expreso*, 16-12-1992, «El más severo racionamiento de luz se inicia esta semana en el país» y 12-2-1992, «Verano y escasez de agua puede provocar gran epidemia en Lima».

[145] Prejuicio que se extendía al resto del Perú.

oportunidad el texto describía con gusto los tallarines, sopas, guisos y otros potajes ofrecidos en las calles de la ciudad; por ejemplo, avisaba que «si usted ama el tallarín saltado, vaya a ver cómo lo hace brincar hasta medio metro de altura Don Lucho y su gigante sartén de bronce. El hombre es todo un espectáculo chino en la cuadra seis de Andahuaylas»[146].

Meses después, el periodista Sánchez Hernani, quien se caracterizaba por poseer una mirada menos prejuiciosa de la venta de comida, publicó otra crónica en el mismo diario en la que percibe los cambios en la culinaria limeña. Comienza al recordar las bondades de la comida criolla ofrecida en algunos emblemáticos restaurantes, señalaba que también contaban con manjares similares, pero superiores, a las comidas rápidas que se imponían en el escenario urbano (salchipapas, pollos broster, etcétera). En su relato reivindica la venta callejera de potajes considerados limeños: anticuchos, chanfainita, humitas, tamales, etcétera. Este giro en la crítica es importante. El rechazo ya no consistía en la forma de la venta en sí misma, la clave era si se ofrecía algo que fuera considerado tradicional o no:

> están las humitas y los tamales, artificios preparados con maíz de lesa peruanidad, que las manos cholas y zambas, y en patriótico contrapunto, en hojas de maíz o plátano, con rellenos de chancho o pato, aceitunas y maní tostado, pusieron de fiesta las lenguas nacionales y dieron notoriedad a un personaje casi desaparecido: la tamalera[147].

Luego de más de una década de duras críticas la venta de comida en las calles parecía encontrar una solución armonizada con los imaginarios urbanos: se podía tolerar y hasta fomentar su presencia con la condición de que represente a la tradición. Así, mujeres y hombres de origen diverso, vistos como mestizos y afrodescendientes, podían conseguir un espacio en ese imaginario como representantes de la tradición culinaria limeña. Este sería el punto clave en los siguientes años.

[146] *La República*, 19-1-1992, «Guía del Gourmet de carretilla».

[147] *La República*, 26-7-1992, «A la hora del bitute».

Parte III
LOS SUPERVIVIENTES

Capítulo 8
La calle y la disolución de las diferencias

Una ambigua aceptación

Más allá de las particularidades de las décadas de 1980 y 1990, la presencia de los ambulantes y de las diversas actividades informales es una constante en la capital tanto como en otros lugares del país y del mundo. A principios del siglo XXI el proyecto DAI-3495 realizó una encuesta a 962 personas de la ciudad de Lima, con el objeto de conocer con mayor detalle las razones por las cuales compraban en los ambulantes[1]. La aplicación de la herramienta permite mostrar cómo lo que facilita la existencia de los vendedores no es únicamente la crisis, el desempleo y otros aspectos que se han mencionado anteriormente. Un factor muy importante es la ventaja que supone su presencia, más allá de las incomodidades que generan la forma en que usan el espacio público[2].

La muestra se aplicó en cuatro espacios urbanos de Lima: centro (Lince, Magdalena, Centro de Lima, La Victoria, Breña, Jesús María, Ate y La Molina), 254 encuestados; cercado (centro histórico y alrededores), 174; norte (San Juan de Lurigancho, Los Olivos, San Martín de Porres y Ventanilla), 278 y sur (Barranco, Surco, Chorrillos, san Juan de Miraflores, Villa el Salvador y Villa María del Triunfo), 256. Del total, 561 son mujeres y 401 hombres; las edades van desde

[1] Esta encuesta se realizó en el marco del proyecto Tácticas y supervivencia de nuevos actores sociales en el mundo urbano. Una aproximación (Lima, 1980-2005) (DAI-3495, 2007), financiado por la Dirección de Gestión de la Investigación de la PUCP. El equipo estuvo dirigido por Jesús Cosamalón, José Ragas y Martín Monsalve. Como asistentes participaron María Elena Gushiken, Luis Miguel Silva-Novoa, John Sifuentes, Ignacio Vargas Murillo y Raúl Silva. A todos ellos mi agradecimiento por la gran labor desarrollada.

[2] Un balance de los aspectos favorables y negativos del comercio en las calles en Bromley (2000, pp. 6-7).

los 16 hasta los 85 años, con el 38% entre los 16 y 29 años, 33% entre los 30 y 44 y 20% entre los 45 y 59 años. En cuanto a sus actividades, 27% son empleados, 21% trabajadores independientes, 19% amas de casa, 16% profesionales, 11% estudiantes y 6% no declaró ocupación. Como se puede observar, la muestra ofrece una variedad apropiada en cuanto a ubicación, género, edad y ocupación.

El cuadro 4 muestra la frecuencia con que los encuestados compran a los ambulantes, divididos por ocupaciones. Como se puede observar, el 31% se servía de ellos muy frecuentemente y 25% por lo menos un par de veces a la semana. Ambos grupos suman más de la mitad de los entrevistados. En términos relativos respecto al total por ocupaciones, los trabajadores independientes (68% de 200); las amas de casa (60% de 178) y los estudiantes (58% de 107), son los grupos que compran con mayor frecuencia en los ambulantes (de dos a cinco o más veces por semana); los demás oscilan cerca de 50% en el mismo rango (empleados y profesionales), más alejados aquellas personas que no declararon ocupación alguna (32%). Tiene sentido que quienes se mueven más frecuentemente en el espacio público (estudiantes y trabajadores independientes) sean quienes más utilizan a los ambulantes para abastecerse. Ocurre de igual manera con las amas de casa quienes, al menos en teoría, se encargan de la mayor parte de las compras.

Cuadro 4
Frecuencia de compras en ambulantes

Ocupación	5 a más	2 a 4 veces	1 vez o menos	No precisa	Total
Ama de casa	64	42	70	2	178
Empleado	63	70	123	4	260
Estudiante	23	39	44	1	107
Profesional	30	45	75	5	155
Independiente	106	29	63	2	200
Sin trabajo declarado	8	12	41	1	62
Total	294	237	416	15	962

Fuente: encuesta elaborada para el proyecto DAI-3495, 2007.

En el siguiente cuadro se expresan las razones por las cuales compran en los ambulantes. Se ha contabilizado la primera razón que los encuestados señalaron,

independientemente de las siguientes que añadieron[3]. Si bien esto podría cercenar parte de la información, es una de las maneras más lógicas de procesar los datos para que nos ofrezcan algún indicador relevante.

Cuadro 5
Razones de las compras en ambulantes

Ocupación	Buen precio	Calidad	Cercanía	Novedad u oportunidad	Otras	Total
Ama de casa	120	3	31	16	8	178
Empleado	145	4	74	17	20	260
Estudiante	55	1	39	8	4	107
Profesional	72	4	52	16	11	155
Independiente	132	2	45	11	10	200
Sin trabajo declarado	30	1	20	6	5	62
Total	554	15	261	74	58	962

Fuente: encuesta elaborada para el proyecto DAI-3495, 2007.

La gran mayoría de encuestados reconoce que la mayor ventaja de las compras en ambulantes es el precio (58%), seguida de la cercanía (27%)[4]. Ambos factores son muy coherentes respecto a la historia previa, los ambulantes siempre venden por debajo de los precios promedio de las tiendas y se ubican en lugares estratégicos que les permiten captar con facilidad a los compradores. Las demás razones son mucho menos importantes. Además, quienes más reconocen la ventaja en el precio son las amas de casa (67% de 178) y los trabajadores independientes (66% de 200). En cuanto a la cercanía, quienes la valoran son los estudiantes (36% de 107) y los profesionales (34% de 155).

[3] El mismo criterio se aplicó en los siguientes cuadros.

[4] Algunas de las respuestas se pueden comparar con las conclusiones del estudio realizado en Santiago de Chile (Prealc, 1988, p. 72).

Cuadro 6
Desventajas de las compras en ambulantes

Ocupación	Sin garantía	Ninguna	Baja calidad	Mala imagen	Inseguridad	Precio alto	Otras	Total
Ama de casa	80	35	28	21	9	2	3	178
Empleado	128	55	36	33	4	0	4	260
Estudiante	47	28	14	12	2	4	0	107
Profesional	69	27	25	21	4	5	4	155
Independiente	73	48	39	28	6	2	4	200
Sin trabajo declarado	23	12	11	10	3	1	2	62
Total	420	205	153	125	28	14	17	962

Fuente: encuesta elaborada para el proyecto DAI-3495, 2007.

El cuadro 6 presenta las desventajas de comprar en los ambulantes, la principal razón es la falta de garantía de los productos (44%), bastante alejada de los demás, luego vienen quienes afirman que no hay ninguna desventaja (21%), la baja calidad de los productos (16%), la mala imagen que da comprar en ellos (13%), la inseguridad (3%), los precios altos (1,5%) y otras razones (1,5%). Estos datos muestran que los encuestados conocen los riesgos de comprar a los comerciantes, pero están dispuestos a adquirir sus productos en ellos porque las razones positivas pesan más que las negativas. Esta combinación de factores configura la relación ambigua entre los ambulantes y la ciudad, se reconoce su valor, pero también se les hace responsables de algunos problemas urbanos.

El cuadro siguiente sintetiza la primera categoría mencionada por los encuestados a la pregunta de qué producto compran con más frecuencia. La importancia de los ambulantes en la vida cotidiana es muy grande: 80% los utiliza para abastecerse de alimentos, bebidas o comida rápida[5]. En este aspecto hay algunas notorias variantes respecto a las ocupaciones. Para el 54% de las amas de casa, 48% de los trabajadores independientes y 41% de los empleados, son la fuente de abastecimiento de alimentos[6]; mientras que para el 59% de los profesionales y 58%

[5] Esta última incluye golosinas y otros productos equivalentes.

[6] Aquí se considera la venta de alimentos frescos y comida preparada en general. No menciono el caso de quienes no declararon ocupación alguna debido a que esa condición impide un análisis más profundo.

de los estudiantes son el lugar de compra de bebidas y comida rápida. En todos los casos lo más importante es que entre el 75% y 87% de cada grupo los utiliza para la vida cotidiana. Incluso alrededor del 40% de quienes consumen alimentos y bebidas-comida rápida, compran a los ambulantes de tres a todos los días de la semana. Aquí se puede reafirmar que la ambigüedad de la relación se genera en la importancia que tienen en la vida cotidiana, pues ofrecen los productos a un precio más apropiado o en una mejor ubicación que otras fuentes. Es una experiencia común encontrarse con ellos en las rutas de transporte o lugares estratégicos, lo cual permite que el transeúnte no pierda tiempo en busca de lo que necesita. Como lo ha estudiado el equipo de investigadores dirigidos por Jérôme Monnet, en la actual metrópoli el tiempo de traslado de un punto a otro de la ciudad consume cada vez más minutos y hasta horas, esto hace que el transeúnte busque cómo optimizar su escaso tiempo. Así, el ambulante ofrece desayunos al paso, comidas rápidas, bebidas, etcétera, en la ruta de los viajantes urbanos, sea a pie o en vehículos, y evita el desgaste de tiempo en la búsqueda de una tienda o supermercado (Monnet, Giglia & Capron, 2005).

Cuadro 7
Producto mencionado como la compra más frecuente

Ocupación	Alimentos	Bebidas-comida rápida	Manufacturas	Ropa	Otro	Total
Ama de casa	97	39	16	21	5	178
Empleado	106	99	20	31	4	260
Estudiante	24	62	16	5	0	107
Profesional	42	92	12	5	4	155
Independiente	96	61	22	14	7	200
Sin trabajo declarado	27	20	5	8	2	62
Total	392	373	91	84	22	962

Fuente: encuesta elaborada para el proyecto DAI-3495, 2007.

A pesar de estas ventajas y de su presencia en la vida cotidiana, la mayor parte de los encuestados señaló que el comercio ambulatorio sí representa un problema para la ciudad (53%), aunque están relativamente cerca de quienes piensan que no lo es (44%). Son los profesionales quienes piensan de forma más frecuente que es un problema (63%), mientras que para los trabajadores independientes no lo

son (44%). Un aspecto interesante es el caso de quienes no declararon ocupación alguna, 73% está de acuerdo que son un problema. Con los datos de la encuesta es imposible llegar a una explicación coherente de esta última cifra, pero no es descabellado suponer que su situación laboral pueda influir en su valoración negativa del comercio ambulatorio. Evidentemente la ventaja de poder abastecerse de una oferta móvil también trae como consecuencia la interrupción de la fluidez del tránsito vehicular y peatonal, además de otras externalidades negativas.

Cuadro 8
¿Es un problema el comercio ambulatorio?

Ocupación	Si	No	No sabe/No opina	Total
Ama de casa	84	88	6	178
Empleado	141	118	1	260
Estudiante	55	49	3	107
Profesional	97	52	6	155
Independiente	87	107	6	200
Sin trabajo declarado	45	7	10	62
Total	509	421	32	962

Fuente: encuesta elaborada para el proyecto DAI-3495, 2007.

Cuando en el cuadro 9 se indagó por los responsables del aumento del número de ambulantes, las respuestas mayormente no culpan a los propios vendedores. Por el contrario, como se puede ver en el cuadro siguiente, 42% acusó a las autoridades, 16% a los consumidores y 10% a consumidores y autoridades. 8% señaló como responsable a los ambulantes, 8% a los ambulantes y autoridades y 2% a ambulantes y consumidores. Finalmente, 9% responsabilizó a los tres actores. Esto muestra que la mayor tendencia es considerar que el problema es la ausencia o escasa reglamentación y orden a cargo de las autoridades, más que dificultades producto únicamente de las decisiones de los ambulantes.

Cuadro 9
Responsable del aumento de los ambulantes en la ciudad

	Ambulantes	Autoridades	Consumidores	Las tres anteriores	Situación del país	Otras, no sabe	Total
Ambulantes	42	40	10				92
Autoridades		212	50		8		270
Consumidores			82				82
Los tres anteriores				49			49
Situación del país					11		11
Otras, no sabe						5	5
Total	42	252	142	49	19	5	509

Fuente: encuesta elaborada para el proyecto DAI-3495, 2007.

Se evidencia en el cuadro 10 la percepción de que el problema es de orden y que no solo proviene de la condición misma de ambulante. Al preguntar por las razones por las que los ambulantes son considerados un problema 66% contestó que generan dificultades de orden y tránsito en la ciudad. Incluso la higiene, uno de los aspectos más negativos que se difunde en los medios de comunicación, solo importa como primera razón en el 6% de los casos.

Cuadro 10
Razones por las que los ambulantes son un problema

Ocupación	Desorden	Tránsito	Informalidad	Higiene	Inseguridad	Calidad	Otras/ no sabe	Total
Ama de casa	30	27	5	3	4	9	6	84
Empleado	51	47	5	12	9	7	10	141
Estudiante	18	20	3	2	3	2	7	55
Profesional	29	33	8	6	8	2	11	97
Independiente	29	21	7	3	5	4	18	87
Sin trabajo declarado	14	16	3	4	1	2	5	45
Total	171	164	31	30	30	26	57	509

Fuente: encuesta elaborada para el proyecto DAI-3495, 2007.

Por último, el siguiente cuadro muestra que para los encuestados que declararon que los ambulantes no son un problema para la ciudad, la principal razón es el derecho a trabajar (56%), seguida de su contribución a la economía del país y doméstica (27%). Finalmente, el 11% considera que mientras la labor se realice en orden y regulada no afecta a la ciudad.

Cuadro 11
Razones positivas para la presencia de los ambulantes

Ocupación	Derecho al trabajo	Ayudan a la economía	Depende del orden	Otras/ No sabe	Total
Ama de casa	47	30	8	3	88
Empleado	68	25	13	12	118
Estudiante	29	12	4	4	49
Profesional	16	16	9	11	52
Independiente	60	27	10	6	103
Sin trabajo declarado	9	5	2	1	17
Total	229	115	46	37	427

Fuente: encuesta elaborada para el proyecto DAI-3495, 2007.

Los datos presentados ofrecen un panorama ambiguo respecto a los ambulantes. Por una parte, se destaca su importancia en la vida cotidiana pues ellos abastecen de bienes y servicios a una buena parte de la población, más de la mitad de los encuestados compra a los ambulantes alimentos y bebidas esenciales para la vida dos veces o más por semana, gracias a sus ventajosos precios. Además, se reconoce su aporte a la economía nacional, el derecho a trabajar honestamente y que los problemas que generan son más responsabilidad de las autoridades que de ellos mismos. Pero, por otro lado, los ambulantes generan desorden, como señalaron varios de los encuestados «afean» las calles y dan mala impresión. Se les sigue considerando peligrosos por su supuesta cercanía con la delincuencia, como declararon varios encuestados «algunos son ladrones y se disfrazan de ambulantes», «mayormente son delincuentes, están por todas partes», «podrían estar disfrazados de ambulantes, pero ser delincuentes», «dan miedo al verlos por la calle, muchos podrían robar en cualquier parte porque muchos son delincuentes», etcétera. También se les hace responsables de la falta de higiene, su comida es dañina, no tienen el menor cuidado con la sanidad, «me parece que dan mal aspecto y no conservan medidas de higiene», «los que venden comida dejan cochino el lugar»,

etcétera. Por último, también se desconfía del origen y calidad de sus productos, lo que provoca que el comprador siempre esté alerta ante la posibilidad de ser estafado: «venden productos adulterados, no confiables», «a veces no sabemos cómo nos venden los productos, en qué estado están», «adulteran los productos», «se pasa la fecha de vencimiento», «no siempre puedes confiar en ellos, pueden falsificar el producto», etcétera.

El proceso social y su impacto urbano en las décadas de 1980 a 2000 son, sin duda, el aspecto que explica esta ambigüedad. En las calles de Lima las distancias entre los trabajadores, los desempleados, los delincuentes, los mendigos y los enajenados mentales se diluyeron como producto de la crisis, de modo que en el espacio público ya no se podía distinguir con claridad la separación entre cada uno de ellos[7]. Más de una década de problemas económicos, sociales, políticos y urbanos dejaron una profunda huella en la ciudad. No solo se transformaron el espacio físico, los habitantes y sus costumbres; también se generaron nuevas identidades producto de la migración y de las múltiples formas de supervivencia que se desarrollaron en esos años. Algunas de estas actividades tenían una presencia más antigua en la ciudad, otras eran novedosas, pero todas tenían como característica el uso del espacio público para ganarse la vida.

En busca del(a) limeño(a)

Quizá lo más resaltante de los estudios sociales dedicados a la identidad limeña de fines del siglo XX sea su desconcierto. Las propuestas iniciales de Quijano sobre la «cholificación» de la ciudad producto de la migración y el «desborde popular» sostenido por Matos Mar, claramente resultan insuficientes para comprender el complejo proceso de los años 1980-2000[8]. Sus aportes para comprender los procesos sociales desarrollados desde 1950, analizan el desplazamiento del término «cholo», con su carga negativa, a la nueva configuración de un sector social resultado de la aculturación de los campesinos a la vida urbana, con un significado positivo relacionado con la capacidad de superación y entereza personal, especialmente reflejada en la primera y segunda generación de migrantes (Noel Aguado, 2009, p. 20). Sin embargo, la insistencia en explicar este proceso como resultado del encuentro de dos mundos separados, lo andino y lo occidental, como unidades

[7] Esta consecuencia de la venta en las calles también se puede observar en Puebla (Mendiola, 2017, p. 14).

[8] La propuesta inicial de Quijano fue publicada en el año 1964, fue un esfuerzo valioso y pionero de reflexión sobre los cambios en la relación entre etnicidad y clase en el Perú contemporáneo. Para un recuento y actualización de sus aportes, véase Quijano (2014, pp. 635-663).

homogéneas[9], no permite comprender adecuadamente lo que ocurrió en ciudades como Lima, urbe en que la migración desde las zonas de altura siempre había ocurrido, aunque nunca con la intensidad que se vivió a partir de la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué tanto de occidental tenía la sociedad limeña en 1950 y qué tan pura era la cultura andina de los migrantes?[10] ¿Fue la llegada de un elemento cultural desconocido en el acervo limeño el factor fundamental que la transformó?[11] Como se pregunta Pablo Sandoval, «¿Pero lo "criollo" se mantenía inmutable eludiendo el paso del tiempo?, ¿se puede afirmar que sigue existiendo "lo criollo", ¿era posible seguir entendiendo la organización cultural de la ciudad bajo la lupa de lo criollo y lo andino?» (2000, p. 303). Como señala el autor, la mayor parte de la producción académica de los años 1980 desarrolló una visión dual acerca de los sectores populares. Por un lado, se enfatizó la emergencia de nuevas identidades políticas y la creación de una nueva cultura urbana producto de la migración; mientras que, otros enfatizaron una visión bastante más pesimista que relacionó la pobreza con la anomia social que destruía a individuos y colectividades (Sandoval, 2000, p. 306).

En principio, la mayor parte de estudios de la década de 1990 trataron de comprender la migración y la modernización como proceso general, antes que en los cambios en la vida cotidiana y las identidades de la ciudad[12]. Un esfuerzo diferente es el de Guillermo Nugent, quien cuestionó la vigencia de la etnicidad indígena como criterio analítico, defiende una visión de clase:

> lentamente el Perú ya no es definido en su identidad como país indígena, sino como país pobre […] ex indígenas, ex vecinos pobres de tugurios, el surgimiento de la pobreza como horizonte social supone la posibilidad de construir activamente una identidad. Los arenales que circundan la ciudad son particularmente propicios para escenificar representaciones colectivas de construcción de una nueva identidad (2012, p. 32).

Su propuesta concluye con la afirmación de que existe una «identidad chola» que va más allá del mestizaje, es una experiencia de ciudadanía urbana y plebeya atravesada por nociones de lo puro/impuro; sin embargo, su agudo ensayo no menciona a los ambulantes ni vendedores de la calle, los personajes están ausentes

9 En su muy interesante tesis, Gabriela Noel define lo cholo como «toda aquella persona de ascendencia andina campesina, que mezcló y agregó a su vida y a su cultura, modos y prácticas occidentales, al dejar su tierra natal y migrar hacia Lima, un ser moderno, pero que rememora su pasado, recreándolo con nuevos elementos culturales» (2009, p. 35).

10 Un cuestionamiento similar en Sandoval (2000, pp. 292-294).

11 Una reflexión interesante que opone lo andino a lo criollo, pero buscando sus puntos de contacto en Adams y Valdivia (1991, pp. 33-43).

12 Véase el balance de Claux (2005, pp. 7-10).

en su reflexión. Además, el espacio de esa nueva gesta cultural no es el centro de la ciudad, sino sus márgenes.

Otro aporte es el conjunto de ensayos publicado por el grupo de estudio Tempo, dirigido por Gonzalo Portocarrero, quien se encargó de la edición de un volumen con las contribuciones de sus estudiantes. En ese momento la preocupación más importante giraba en torno a las identidades étnicas y los discursos, más que propiamente las prácticas[13]. En esa edición Carmen Rosa Balbi considera que a fines del milenio anterior el reconocimiento del «cholo» traería necesariamente un proceso de democratización de la sociedad (1997, p. 15). Esta identidad se define por «una dimensión cultural importante, pero su construcción y legitimización es efectivamente definida por esa marcada ética del trabajo y por la apuesta del esfuerzo personal como vía central de movilidad social» (Balbi, 1997, pp. 15-16), e identifica a este nuevo sector social con los denominados empresarios populares o emprendedores, como también lo hacen Rolando Arellano y David Burgos (2010). Desde esta perspectiva, la conciencia de clase se diluyó, cediéndole el paso a una nueva identidad urbana alimentada desde el mundo andino y los espacios marginales de la capital. Así, los estudios de la década de 1990 privilegian las interrelaciones urbanas sin forzar su vínculo con lo andino, en busca de la reconfiguración de lo limeño (Sandoval, 2000, pp. 308-309).

Los estudios se concentran principalmente en la nueva identidad representada por los «emprendedores», término que vino a reemplazar al de «empresario popular» que cayó en desuso por su connotación algo despectiva. En ambos casos se refiere a aquellos trabajadores que por cuenta propia administran negocios de pequeño y mediano capital, aprovechan las ventajas de la libertad de mercado. Estos empresarios son identificados como no-blancos, es decir, de origen mestizo y diferentes a las elites más antiguas. Una publicación destaca que entre los emprendedores se «incluye a la población y los jóvenes de los sectores marginales suburbanos y rurales, lo cual ha incentivado la formación, desde su situación de autoempleo, de redes empresariales con alto potencial de impacto» (Serida y otros, 2013, p. 65). Sin embargo, en esta caracterización no se incorpora la experiencia más amplia de los trabajadores de la calle por cuenta propia que no cuentan con un capital relevante, ni pequeño ni mediano. Aquellos que solo cuentan con recursos como su propio cuerpo e ingenio para conseguir el sustento diario. La mayoría de ellos son ambulantes, productores o vendedores de servicios que surgieron y se expandieron durante 1980 y 1990, retaron el antiguo rostro criollo de la ciudad por medio de sus prácticas de supervivencia, pero, al mismo tiempo, desarrollaron un conjunto de nuevas identidades urbanas que caracterizarían posteriormente

[13] Véase especialmente Ana Lucía Cosamalón (1993).

a la ciudad. No se trató únicamente de una resistencia originada en la necesidad de ganarse el sustento; también se negociaron las formas de supervivencia de acuerdo con los imaginarios urbanos, las necesidades e identidad de la ciudad[14]. Por ejemplo, los vendedores de comida, como hemos visto anteriormente, fueron incorporados en el nuevo rostro de la ciudad en cuanto representaban la continuidad de las tradiciones limeñas. Otros casos similares fueron los lustrabotas, los vendedores de emoliente y los cómicos ambulantes. Estos últimos incorporaron en su performance la picardía criolla y sentido del humor que se consideran parte de la identidad de los limeños[15]. Así, las formas de supervivencia urbana no son únicamente una manera de ganarse la vida, son también medios de construcción de una nueva identidad limeña, ni chola, ni emprendedora, sino una Lima reinterpretada y apropiada desde las prácticas cotidianas de los sectores populares.

La clave del proceso no reside en la creación de una identidad chola, resultado del encuentro de los dos mundos. Lo fundamental es que en la década de 1980 se hizo cada vez más difícil establecer una diferencia entre el migrante, sus hijos nacidos en Lima y los nietos, con la empobrecida clase media y el nacido en la ciudad. La crisis económica lanzó a todos a ganarse la vida en las calles de la ciudad, diluyó las antiguas diferencias de clase y étnicas. Este proceso de destrucción de las antiguas barreras no eliminó las jerarquías de etnicidad y clase, las reconfiguró al fundar una identidad que ha sido bautizada como «chola», la cual ocupa el espacio intermedio entre lo supuestamente occidental y lo andino, sin reparar en que este proceso siempre existió y redefinió en todos los tiempos las expresiones culturales de la ciudad. Nos podríamos preguntar qué tanto existe lo cholo como identidad y qué tanto se ha usado como un concepto nacido para continuar diferenciando a la población con criterios étnicos. Se asume con demasiada libertad que el migrante de origen andino posee una homogeneidad cultural que no existe en la realidad y la definición no contempla la posibilidad de una hibridez cultural en ambos puntos de la cadena. Además, se opone a esta construcción de lo andino una forma de cultura criolla definida por la oligarquía de los años 1950. Este criollismo fue el resultado de una estrategia defensiva ante la migración, la sensación de invasión y de destrucción de lo considerado limeño; así se generó un esencialismo criollo que por oposición definió lo andino y, por consiguiente, lo cholo, al considerarlo un híbrido de lo costeño y lo andino.

De hecho, entre los entrevistados por Gabriela Noel, solo se menciona el término «cholo» emitido desde fuera, desde un otro que lo utiliza como discriminación (2009, p. 92). Uno de los productos culturales más citado para

---

[14] Un caso similar en Palacios (2016), véase también Graaf y Ha (2015).

[15] Véase Vich (2001).

demostrar la existencia de una identidad positiva asociado con lo cholo es el vals interpretado por Luis Abanto Morales, titulado «Cholo soy», tema presentado en el Perú en el año 1973, época de efervescencia proandina producto del gobierno militar[16]. El cantante ha admitido que la canción es una adaptación de un poema de la autoría del argentino Boris Elkin[17], convirtiéndose en un éxito local, favorecido por el contexto político y social del momento.

Como señala William Stein, el uso de una categoría analítica como «cholo» se relaciona con la necesidad de interpretar las experiencias urbanas y mantener los criterios étnicos, mientras que, la propia población de origen migrante intenta dejarlos de lado:

> miles de estos nuevos habitantes urbanos terminaron como vendedores de una serie de baratijas en los semáforos, de carteristas, prostitutas, buscadores de basura, o gente de la calle. Algunos sobreviven bajo mejores condiciones. Pero aquí hay una idea posmoderna: la liberación de la explotación, de la opresión, de la pobreza, de la cortedad de vida, de la desinformación-malentendimiento-no reconocimiento, iliteracidad, es lo mismo que liberarse de una muerte simbólica. Cuando los peruanos cesen de ser indios, entonces todo cambiará y no habrán más blancos, criollos, mestizos, ni cholos tampoco. ¿Imposible? Sí, pero también posible. Si las personas de otro siglo vivieran en la región hoy conocida como Perú, y alguna vez leyeran esto, podrían sonreír. ¿Por qué sonreirían? Porque ellos serían libres de encontrar su singularidad puesto que la elegirían sin referencia a una nación, etnicidad, raza, género, o cualquier otro enmarcamiento que los confine (2003, p. 69).

Uno de los productos culturales más importantes de las décadas de 1970 y 1980 fue la aparición de la cumbia peruana y luego de la cumbia andina, mejor conocida como «chicha». Como señala Romero, antes de este fenómeno, el huayno tuvo un enorme impacto en la década de 1950, apropiándose de los espacios urbanos, que contribuyó a crear un mercado alternativo al de las elites y de lo considerado criollo (2007, pp. 10-11 y 18-19). En las décadas posteriores un estilo derivado del contacto de esta música con otras sonoridades urbanas dio origen a la chicha (2007, pp. 27-32). La popularidad comercial de este género trajo como contrapartida la imagen pública de peligrosidad de quienes disfrutaban de esta música. Desde fines de la década de 1970 se consideró que la música de Lorenzo Palacios, 'Chacalón', era consumida por personas de mal vivir; los locales de música chicha se convirtieron en escenario de batallas campales producto del gran consumo

[16] Un análisis del contenido de la letra y su relación con la identidad en Vich (2003).

[17] Entrevista de Fernando Vivas, *El Comercio*, 29-4-2014, «Luis Abanto Morales: Noventa años de choledad».

de alcohol de los asistentes (Tantaleán, 2016, p. 80). El género musical se identificó con el «achoramiento» de los cholos, término que aludía a la criollización popular de los migrantes, acusados de arribismo vulgar y amoralidad (Medina, 2000, p. 33). Su definición contemporánea podría incluir a:

> individuos como los delincuentes (ladrones, estafadores), trabajadores populares (los microbuseros, los «cobradores de combi», los taxistas, los «dateros», los albañiles, los vendedores de mercado, los «guachimanes», los vendedores ambulantes, los cargadores de mercado, los barrenderos, etc.). Los actores también pueden ser grupos como los pandilleros y los barristas. Si examinamos las actividades que están asociadas al achoramiento encontramos que la mayoría de ellas son eminentemente masculinas (vigilantes, choferes, albañiles, pandilleros, barristas). Al parecer hay una relación entre el achoramiento y la masculinidad (Rondán, 2010, p. 24)[18].

Esta relación entre trabajadores pobres-eventuales-migración-gustos musicales-delincuencia, contribuyó a diluir la diferencia entre los 'decentes' y los 'indecentes', entre el criollo y el 'achorado', especialmente porque este último compartía los nuevos gustos surgidos en el ambiente urbano. En algunos barrios tradicionales, como La Victoria, se gestaron esos nuevos sonidos, producto de un paisaje musical que incluía fuentes muy diversas, algunas provenientes de las zonas andinas, otras tenían su origen en el extranjero (rock, cumbia colombiana, guaracha, salsa, etcétera), pero lo importante es que la capital fue uno de los espacios en los que se gestan estos cambios. El universo de lo popular empieza a transformarse con la migración, su adaptación y sus aportes culturales en la ciudad. Por ejemplo, si bien buena parte de los músicos y del público consumidor de la chicha había nacido fuera de la capital, especialmente en las zonas andinas, la figura más representativa del género, Lorenzo Palacios, nació en La Victoria en el seno de una familia de migrantes[19]. Se dedicó a varias labores, entre ellas la zapatería, como también a actividades delictivas de menor cuantía, como los hurtos. Luego de purgar prisión por agredir a un policía, se dedicó de lleno a la música y compuso su célebre canción «Soy provinciano».

La solución en la redefinición de «lo limeño» consistió en la invención de una tradición, tal como la considera Hobsbawm. De acuerdo con el historiador británico, la «tradición inventada», supone la existencia de una serie de rituales que inculcan valores o normas de comportamiento por medio de su repetición o su conexión con un pasado histórico considerado adecuado. En la mayoría de los casos

---

[18] En la televisión este tipo de actitud se presentó en los programas desde 1980, especialmente en el célebre «Risas y salsa» (Vivas, 2008, p. 205).

[19] Otra importante figura de la cumbia peruana nació en el mismo distrito: Claudio Morán (Alfonso Alejandro Morán Sirumbal), cantante de Los destellos e intérprete del éxito «Muchachita celosa».

la invocación de ese tiempo anterior es ficticia en el sentido de que «toman la forma de referencia a viejas situaciones o que imponen su propio pasado por medio de una repetición casi obligatoria» (1983, p. 8). Esto se puede interpretar como la creación de un universo cultural que es considerado como «lo tradicional», aunque esas prácticas, gestos o símbolos también fueron en su momento el resultado histórico de cambios. Además, el autor considera que este proceso es más frecuente cuando

> una rápida transformación de la sociedad debilita o destruye los modelos sociales para los que se habían diseñado las 'viejas' tradiciones, produciendo otros nuevos en los que esas tradiciones no pueden aplicarse, o cuando esas viejas tradiciones y sus portadores y promulgadores institucionales se convierten en insuficientemente adaptables y flexibles, o son de algún modo eliminados: en resumen, cuando se producen cambios los bastante amplios y rápidos en la oferta y demanda (Hobsbawm, 1983, p. 11).

En la ciudad de Lima durante las últimas décadas del siglo XX los rápidos cambios sociales, económicos y culturales, reflejados en las nuevas prácticas, fueron contenidos a partir de su definición de no-tradicionales, a pesar de que «lo limeño» también es el resultado de intercambios culturales que incluyen a los inmigrantes nacionales e internacionales. Así, la religiosidad, la gastronomía, el léxico y la música, entre otros aspectos, fueron definidos como «la tradición limeña» a pesar de que algunos de ellos no eran tan antiguos ni de práctica tan general como se pretendía. Por ejemplo, uno de los pilares de este proceso, la música criolla, y dentro de ella el vals, fue 'inventada' como tradición, tal como Rohner lo señala en su reciente trabajo (2016, p. 435). De este modo se descalificaron a los nuevos productos culturales a pesar de que su génesis es la misma que todos los elementos previamente citados. Como señala el autor, históricamente las poblaciones de origen indígena, africano y mestizo desdibujaron esos rasgos por medio de «la apropiación de símbolos y elementos de la cultura criolla», y redefinían constantemente qué era lo limeño (Rohner, 2016, p. 208).

Huevo en ceviche

La frase anterior es una de las más difundidas por los cómicos ambulantes, se emplea en el Perú para referirse a alguien que se encuentra desubicado en cualquier situación. La composición empieza con «más perdido que…» y se puede completar con varios finales: «….que Adán en el día de la madre», «… que cuy en tómbola», etcétera[20]. Así, a principios de la década de 1980, causó un gran desconcierto

[20] *Losperuanos.com*, 10-10-2009, http://www.losperuanos.com/humor_04-04-10.htm, fecha de consulta: 2/2/2017.

interpretar los cambios sociales en la capital. Por diversas causas, como lo hemos visto en capítulos previos, se resquebrajaron las fronteras de aquello que se consideraba o no popular. La crisis económica empobreció a la clase media, acercándola o sumergiéndola en la pobreza, los más pobres se hicieron miserables y estos últimos descendieron a escalas no registradas por las ciencias sociales. Además, como suele ocurrir, la pobreza suele acarrear discriminación por diversas causas (etnicidad, género, cultura, clase, etcétera)[21] y vulnerabilidad ante los problemas de la vida, tales como la muerte de alguno o ambos padres, enfermedades, desastres naturales, etcétera (Bastidas, 2008, p. 5). Los ambulantes, la delincuencia, el hacinamiento, las drogas y otros problemas se hicieron más visibles en los barrios populares, pero al no ser exclusivos de esos lugares contribuyeron a desdibujar las fronteras sociales.

Los sectores progresistas, en teoría más inclinados a comprender lo popular, no contaban con un arsenal teórico-conceptual para comprender este desplazamiento, e insistían en tratar de separar al lumpen del personaje genuinamente popular. Una nota periodística señala que en el centro de Lima existía un antro del vicio en el cual se vendía la famosa y peligrosa pasta básica de cocaína (PBC), una de las drogas con mayor poder de adicción y de destrucción corporal[22]. Además, esta droga se asoció rápidamente con los más pobres, mientras que la marihuana y la cocaína se relacionaron con los sectores más altos[23]. De acuerdo con estudios de Devida, el consumo de PBC comenzó en la década de 1970, difundiéndose entre la población escolar en los siguientes años (2013, p. 37). Su consumo por medio de cigarrillos en los que se podía mezclar con más de una droga potenciaba su poder adictivo, así, con tabaco se denomina «tabacazo» y con marihuana, «mixto». Un estudio de principios del siglo XXI estableció que de 110 pacientes adictos a la PBC, 89% fueron identificados como mestizos, seguidos por 7% como blancos y 4% como negros (Pimentel, Rodríguez, Pinto & Carrión, 2005, p. 168). Estos datos quizá revelan más las percepciones de los propios especialistas antes que una realidad objetiva, imposible de aplicar a los colores de piel.

La nota periodística de Vicus señala que el destino de quienes nacían en esos lugares era inexorablemente trágico: «la enorme masa popular transcurre sus días abatida por la suciedad y la desesperanza, atraída por la brillantez fulgurante y vacía del lumpen»[24]. Aquí la pobreza no genera ninguna solidaridad de clase, por

[21] La «racialización» de los vendedores es una práctica usual entre las autoridades europeas, véase Graaf y Noa Ha (2015, p. 9).

[22] Roy Vicus, *El Diario* de Marka, 4-9-1980, «Pasta, lumpen y socialismo».

[23] Devida señala que la droga más frecuente entre los universitarios limeños es la marihuana (2013, p. 46). Un informe de la revista *Caretas,* 383 revela su presencia entre la clase media limeña desde fines de la década de 1960 («Marihuana: las malas juntas», 26-11-1968).

[24] Roy Vicus, *El Diario* de Marka, 4-9-1980, «Pasta, lumpen y socialismo».

el contrario, favorece el consumo de PBC que «ha conseguido captar miles de adictos entre los jóvenes marginales de la Lima monstruo, la de los callejones y los guetos infestados de soledad, hambre, desocupación, desamparo y odio social»[25]. Como se lee, el escenario de esta decadencia no son los márgenes de la ciudad, es el mismo centro de la capital, poblado de delincuentes capaces de asesinar sin ningún escrúpulo. Estos personajes representan el límite inferior de la miseria económica y humana, «seres pensantes y con toda su posibilidad creadora virgen», son finalmente «atrapados por el sistema [...] el capitalismo los quiere para explotarlos y alienarlos» y al intentar salir de esa prisión terminan en las garras del vicio y se convierten en delincuentes, «por eso inventa el lumpen sus propias reglas y su particular lenguaje. Sin ninguna conciencia se entregan desmesuradamente a la posibilidad del dinero fácil, de algún placer que les oculte las tragedias de su vida»[26]. La PBC era el real opio del pueblo. La confusión se revela al diluir las diferencias entre un trabajador que vive en la miseria y un delincuente: ambos podrían compartir el gusto por la PBC. La nota se cierra con un deseo ambiguo, el autor cree que los personajes de su escrito no lo leerán nunca, lo cual indica que se encuentran al margen de cualquier proceso de educación política, sin embargo, «de todos modos quisiera decirles que para ellos también es el socialismo»[27].

En las calles de la ciudad era una tarea difícil establecer quiénes eran los pobres redimibles y quiénes los lumpen. La pauperización de la sociedad diluyó las diferencias entre trabajadores y vagos, obreros, empleados y delincuentes, cuerdos y locos. Se podía observar a personas que rebuscaban en la basura, pero no se podría afirmar si eran mendigos, recicladores o locos[28]. Peor aún, durante la crisis aumentó el número de enajenados mentales en las calles, sea por las tensiones que disparaban los males, o porque sus familiares no podían mantenerlos o, como se denunció, por causa del abandono del Estado de las instituciones encargadas de su tratamiento y cuidado. Solo en el respetado Jirón de la Unión un periodista contabilizó catorce enfermos mentales, casi dos por cuadra. La policía no podía hacer nada con ellos, eran inimputables a pesar de que algunos eran agresivos y

[25] No era inusual encontrar a vendedores de PBC en las inmediaciones de las escuelas (*Extra*, 23-4-1986, «'Paqueteros' disfrazados venden PBC en colegios»).

[26] Roy Vicus, *El Diario* de Marka, 4-9-1980, «Pasta, lumpen y socialismo».

[27] Roy Vicus, *El Diario* de Marka, 4-9-1980, «Pasta, lumpen y socialismo».

[28] La ausencia de un recojo eficiente de basura facilitó la aparición de basureros informales: «cientos de personajes que se dedicaban a recolectar desperdicios para negociarlos» (*Extra*, 3-1-1989, «Baja policía informal»).

atacaban a los transeúntes. Los detenían por un rato, pero ante la imposibilidad de derivarlos a alguna institución psiquiátrica eran devueltos a las calles[29].

Esta era una de las situaciones extremas que se podía encontrar en Lima durante la década de 1980, el otro polo estaba compuesto por los miembros de la clase media que también tomaron las calles para vender mercadería. Percibidos como blancos, educados y decentes, durante la navidad de 1980 se asentaron en varios distritos de la capital donde ofertaban todo tipo de productos, especialmente importados[30]. Otro ejemplo similar fue la difusión de una nueva moda de adornos personales, bautizados como «hippies» por la prensa. Walter Miletich, antiguo viajero («mochilero»), desde la década de 1970 aprendió el oficio de otros hippies que llegaron a Lima. Conocedor del mercado local, en el verano se instalaba en las puertas de las academias y atraía como clientela a las adolescentes. Según su testimonio, no trabajaba por necesidades familiares o por supervivencia, con su trabajo conseguía la bolsa de viaje para sus recorridos por el Perú: «lo más importante es que me siento un hombre libre, sin compromiso. No soy casado ni pienso hacerlo por el momento. Lo único que me preocupa es aprender». La prensa calificó a estos vendedores como «hippies criollos [...] que han asimilado costumbres que nacieron en otras culturas y que encontraron eco en nuestro país»[31]. Así, un extremo y otro del espectro social usaron el espacio público para conseguir ingresos en medio de la crisis, y diluyeron parcialmente las diferencias sociales.

Entre ambas situaciones surgió una multiplicidad de formas de supervivencia que retaban el ingenio humano. En la capital se podían ver a niños que cantaban en las unidades de transporte (hasta hoy)[32], comediantes y payasos en plazas públicas, buscadores en la basura, medidores de la presión arterial, gente que pesaba con balanzas a los transeúntes, escritores y tramitadores de documentos, vendedores de loterías y de periódicos, adivinadores, limpiadores de vidrios de automóviles,

---

[29] *El Diario* de Marka, 15-5-1980, «Los locos andan sueltos». Más de diez años después el problema continuaba. De acuerdo con las autoridades municipales, los enfermos recogidos en las calles no eran admitidos por el Hospital Larco Herrera por no contar con los medios para atenderlos. En 1992 un operativo municipal con apoyo policial, calificado de 'redada', detuvo a cerca de cincuenta enajenados que fueron llevados a la fuerza al Hospital (*Expreso*, 2-4-1992, «En redada captan a 50 dementes abandonados en centro de Lima»). En 1992, mientras se reestructuraba el nosocomio, los enfermos fueron derivados a la ciudad de Barranca, pero el médico Andrés Zavaleta afirmó que en ese lugar se maltrató a los pacientes. Además, señaló que cuando se cerró el Hospital tenían más de 900 pacientes y cuando se reabrió, en 1999, solo se registraron 450, sin tener noticia de que pasó con los demás (*Liberación*, 11-1-2001, «Los silenciosos crímenes de la dictadura en el Larco Herrera»). En el año 2001 se denunció una serie de malos manejos en la administración del Hospital.

[30] *El Diario* de Marka, 24-12-1980, «... Y ahora los 'niños bien' se dedican a vender contrabando».

[31] *Correo*, 7-2-1983, «Las joyas de los hippies».

[32] *El Diario* de Marka, 23-5-1980, «Los pájaros fruteros».

apostadores del juego del cuy[33], vendedores de comida, de libros y revistas, de flores, de ropa y zapatos en desuso, de yerbas, de animales domésticos, pordioseros, canillitas (repartidores de diarios), etcétera; más las actividades ilegales, como la prostitución, que amplió su presencia en la ciudad[34]. Como señala una nota, «la lucha por la supervivencia es más dura y más llena de coraje en los sectores populares. Pero también se entabla, aunque en otro nivel, en las capas medias y también en las altas de la población»[35]. La desocupación era tan grande y las necesidades tan insatisfechas que

> en Miraflores y San Isidro muchas amas de casa, antes dedicadas solo a actividades sociales, han tenido que salir a las calles para incorporarse al comercio de dulces, de venta de ropa, de artículos obtenidos generalmente de contrabando […] la búsqueda de trabajo es incesante, periódico en mano hombres y mujeres buscan en los avisos alguna ocupación, algún empleo, algún cachuelo [trabajo temporal] […] «la situación es desesperada», dice Lucio Ramos, joven de 27 años. «Hace seis meses que estoy pateando latas»[36].

En tiempos contemporáneos el problema no ha desaparecido. El trabajo de Beltrán y otros muestra que de 150 mujeres ambulantes entrevistadas la gran mayoría operaba negocios de bajo capital, dedicándose a diversas labores como la venta de alimentos sin preparar y elaborados, manufacturas de bajo costo (ropas, calzado, plásticos, etcétera), comida rápida, golosinas, bebidas, cigarros, etcétera (Beltrán y otros, 2016, pp. 65-66). La gran mayoría (70%) comenzó con menos de 150 dólares americanos de capital (unos 500 soles en el año 2016) (Beltrán y otros, 2016, p. 78). Aún hoy la venta ambulatoria ofrece ventajas a muchos trabajadores en cuanto a ingresos y flexibilidad de los horarios, especialmente en el caso de las mujeres que todavía cuentan con un nivel educativo inferior en promedio respecto a los hombres[37]. El trabajo de Beltrán y otros encontró que muchas ambulantes son conscientes de estas ventajas, una de ellas declaró que tenía «muchos beneficios, lo más importante los ingresos son para ti, no dependes de otros, de un sueldo que no te alcanza, aquí son tus ingresos y tienes la posibilidad de crecer; otra indicó que «no me cambiaría de trabajo, porque aquí estoy con mis hijos, no los descuido,

[33] Se trata de un juego de apuesta que consiste en adivinar en qué casilla se refugiará el asustadizo animalito (véase un ejemplo en https://www.youtube.com/watch?v=9986qfDnt_Y, fecha de consulta: 2/2/2017).

[34] *El Diario* de Marka, 13-7-1983, «La sobrevivencia está llena de ingenio». Lamentablemente también esta práctica se extendió a los menores de edad (*Expreso*, 12-2-2001, «La inocencia perdida»).

[35] *El Diario* de Marka, 13-7-1983, «La sobrevivencia está llena de ingenio».

[36] *El Diario* de Marka, 13-7-1983, «La sobrevivencia está llena de ingenio».

[37] Véase Bastidas (2008, p. 4) y Di Laura (2016, p. 52).

estoy ahí viéndolos, no los dejo con otra persona. La prioridad es estar con mis hijos y para trabajar para otra persona tendría que dejarlos a ellos y no me gusta eso» (Beltrán y otros, 2016, p. 91).

A lo largo del tiempo ha cambiado la noción de lo que es o no un trabajo decente. En la década de 1980 si bien el discurso en las notas publicadas el Día del trabajo ensalzó las diversas maneras de ganarse la vida, esto no significa que todas las actividades hayan sido consideradas una adecuada forma de subsistencia. Muchas de ellas no fueron apreciadas como decentes, debido a que su ejercicio estuvo asociado con los sectores más pobres y «menos blancos» de la ciudad. Las actividades con menor valor simbólico son aquellas que tienen como objetivo básico la supervivencia, generalmente ejercidas por personas sumergidas en la pobreza, con bajas condiciones de vida, bajos ingresos y escasa educación (Saldarriaga y otros, 2016, p. 163). Sin embargo, las notas periodísticas tienden a realzar el valor positivo del trabajo, por más que se considere «sucio» o se realice de una manera precaria. Por ejemplo, las mujeres entrevistadas en una nota periodística tienen en común su dedicación a oficios de poco entrenamiento, a diferencia de los hombres, quienes se dedicaban a tareas de mayor complejidad. Así, la señora María Rosa Nieves se encargaba de desplumar los pollos que vendía su marido, pero, para lograr los ingresos suficientes y darles bienestar a sus cinco hijos, también lavaba ropa, vendía alimentos, etcétera, según explicó «hago todo lo posible por educarlos, para que puedan defenderse mejor que yo en la vida»[38]. De esta manera la nota asocia el esfuerzo de los padres con el deseo superación de los hijos, no solo con lograr su supervivencia[39].

Una característica repetida, desde tiempos coloniales, es la diversidad de oficios que las personas realizaban a lo largo de su existencia. En el caso de las mujeres el punto de partida fue el servicio doméstico, generalmente ejercido por los migrantes como una condición de paso para adaptarse a la ciudad y buscar un mejor empleo[40]. Además, con lamentable frecuencia las trabajadoras domésticas son víctimas de agresiones sexuales, razón adicional para tratar de salir de esa condición lo más rápido posible[41]. María Gutiérrez, trabajadora de limpieza en una empresa privada y huancaína de nacimiento, laboró desde muy niña como empleada del

[38] *Correo*, 1-5-1980, «Día del Trabajo». Una historia cubierta por el diario *Extra*, con la clara intención de criticar al gobierno aprista, cuenta la dramática historia de una lavandera y varios de sus hijos que viven y trabajan en la calle (7-2-1986, «20 años viviendo en la calle»).

[39] En la actualidad, de acuerdo con el estudio de Beltrán y otros, 80% de las mujeres ambulantes considera que el mayor logro es la educación de sus hijos (2016, p. 94). Los migrantes siempre fueron conscientes de la importancia de la educación, véase Chávez (1990, pp. 86-87).

[40] Véase a Jesús Cosamalón (2011).

[41] Se pueden leer testimonios de esta penosa situación en Bastidas, 2008, p. 16. También el testimonio de la niña María, quien dejó la casa de su empleador, un ingeniero, luego de sus proposiciones sexuales (*Expreso*, 15-3-1992, «Ochocientos niños abandonados viven en Cercado de Lima»).

hogar, luego fue obrera textil y realizó otras actividades antes de entrar a su último empleo[42]. Ella se dedicaba a recolectar los desperdicios en las inmediaciones del Centro Cívico y declaró, de acuerdo con el diario, «soy ante todo una trabajadora y la labor que realizo es tan digna como cualquier otra»[43].

Los otros dos personajes citados en la nota son un peluquero que perdió su local y por ello ejercía su labor en la vía pública y un discapacitado que tenía un taller de cerrajería en la avenida Grau. La característica de ambos trabajadores es que utilizaban las calles, compartían su actividad con el resto de personajes urbanos, lo que disminuye la distancia entre el trabajo decente ejercido en un local fijo y regulado, y las actividades callejeras informales y precarias. Mauro Cárdenas a los 14 años perdió sus piernas por un accidente, aprendió a movilizarse por medio de una silla de ruedas, a valerse por sí mismo y así evitar pedir limosna. Se especializó en la cerrajería, oficio en el que le iba bastante bien. Su taller era «una carretilla que los trabajadores la ubican todos los días en la última cuadra de la avenida Grau para ofrecer sus servicios». El testimonio que dio, citado por el diario, refuerza la idea del valor del trabajo: «ahora soy un trabajador auténtico y me siento orgulloso de mi condición»[44]. Por último, el caso de Nicolás de los Reyes, peluquero, quien ejercía su labor en la primera cuadra de Gamarra, una de las zonas más comerciales de Lima, había trabajado de vendedor de alimentos y ambulante, hasta que aprendió el oficio. Luego de ser desalojado del local que ocupaba, decidió utilizar la vía pública y mantener así su leal clientela. Todos los días, alrededor de las nueve de la mañana, «planta sus cuatro palos y tiende la lona. Coloca la silla y los dos espejos y se pone a trabajar»[45].

Todos los trabajadores fueron registrados con fotografías, se mostraban sus nombres y rostros, señal evidente de que la intención de la nota era dignificar su trabajo. Si bien esos eran los objetivos periodísticos, los artículos también muestran el uso decente y justificado de la calle por parte de auténticos trabajadores que luchan por su supervivencia y la de sus familiares[46]. El problema era distinguir a los 'auténticos' entre la masa de personajes que usaban las vías públicas, especialmente en esos años en que las actividades callejeras se diversificaron en tipos y extensión en el espacio urbano. Por otro lado, este resquicio interpretativo permitía a los trabajadores populares reivindicar su derecho a usar las calles, independientemente de su origen, color de piel y género.

[42] *Correo*, 1-5-1980, «Día del Trabajo».

[43] *Correo*, 1-5-1980, «Día del Trabajo».

[44] *Correo*, 1-5-1980, «No quise la limosna».

[45] *Correo*, 1-5-1980, «Corte de pelo al paso».

[46] Véase la importancia de la familia para la venta en las calles en Rodríguez (2006).

Un caso que muestra claramente la borrosa frontera entre la miseria, la locura y el trabajo en las calles, es el de un par de recolectores de basura. De acuerdo con un reporte periodístico, Florencio Cáceres y Antonio Guzmán eran un par de indigentes cuya apariencia e higiene los asemejaban a enfermos mentales, ambos llegaron a pedir comida a un comedor barrial y fueron acogidos por las encargadas[47]. Semanas después a las señoras del comedor se les ocurrió ayudarlos para que tengan un medio de ganarse la vida. Con un préstamo de la AID les compraron un par de triciclos para que se conviertan en recolectores de basura, y les dijeron: «como el municipio no recoge la basura, ustedes podrán cobrar por hacerlo»[48]. Como sabemos, los municipios carecían de la infraestructura apropiada para el recojo de basura, lo que daba a otros la oportunidad de ganarse la vida al acopiar los desechos en las calles. Así, en las calles de Carmen de la Legua, donde se encontraba el comedor, paulatinamente se notó una mejora en la limpieza y «los vecinos gustosos, pagaban sus cuotas de recojo de basura, mientras veían desaparecer los eternos basurales». Rápidamente la vida de ambos trabajadores mejoró, «empezaron a dejar sus indumentarias de pordioseros para vestirse como la gente decente: pobres pero limpios». De acuerdo con el autor de la nota, llegaron a prosperar al punto de convertirse en empresarios formales, contrataron más trabajadores y compraron más triciclos[49]. Si bien parece una historia extraída de un cuento, más allá de la certeza o no de las características del caso, lo que interesa es que el relato introduce un aspecto: si uno ve a alguien husmear en la basura podría ser un enajenado mental, un mendigo, un trabajador decente y hasta un futuro empresario de éxito. La frontera entre cada uno de ellos se borraba al tomar contacto con la basura en las calles.

A principios de la década de 1990 el suplemento del diario *Expreso* publicó una nota con personajes ficticios para mostrar quiénes eran los nuevos limeños. La distancia temporal entre las referencias de 1980 y 1992 permite reconocer con mayor claridad los cambios en los discursos periodísticos. La nota señala que «el limeño promedio está en todas partes y en ningún lugar. Por eso es difícil encontrarlo o dejar de verlo»[50]. Esto significa que: aceptamos que el limeño desapareció o admitimos que todos los habitantes de la ciudad son limeños. Finalmente, la supuesta homogeneidad de la cultura limeña se derrumbaba ante la diversidad cultural de los habitantes de la capital.

---

[47] Los comedores populares fueron una de las estrategias de supervivencia más importantes de la época, véase Huamán (s/f).

[48] Manuel Arévalo, *Expreso*, El suplemento, 13-9-1992, «De pordioseros a empresarios».

[49] Manuel Arévalo, *Expreso*, El suplemento, 13-9-1992, «De pordioseros a empresarios».

[50] *Expreso*, El Suplemento, 19-1-1992, «En busca del limeño promedio».

De acuerdo con el diario, se había producido «un nuevo tipo de limeño [...] de raíz provinciana, pero con proyección cosmopolita. Estos nuevos personajes poco tienen que ver con el limeño de antaño, aquel que caminaba con sombrero, decía piropos galantes y emulaba al ciudadano europeo»[51]. Por esta razón el redactor de la nota imagina cinco perfiles del habitante de la capital. El perfil promedio, compuesto por un migrante de la sierra, de mediana edad y con familia nacida en Lima. Su calidad de vida no es la óptima, solo él cuenta con trabajo estable, mientras que los demás miembros de la familia se las ingenian para ganar algún dinero extra. Su casa es pequeña y su familia numerosa, aunque la nota no hace mención a su etnicidad, induce a imaginarlo como alguien de origen andino y residente en alguno de los tantos pueblos jóvenes de la capital. El segundo perfil corresponde al sector alto de Lima, identificado como «pituco». El jefe de familia es natural de Lima y el único que trabaja en la casa, residente en una vivienda cómoda con muchos cuartos, agua fría y caliente, y desagüe. «En su distrito las pistas están en buen estado al igual que las veredas, solo las usan las domésticas para pasear a las mascotas. Tiene jardín interior y exterior y un garaje doble donde guarda su auto y el de su esposa». Sus gustos y consumo corresponden a la clase media, con capacidad de disfrutar sus vacaciones lejos de casa y de comer fuera de ella. El perfil del sector de clase media está compuesto de padres de familia sobrecargados de los costos de manutención, no cuentan con auto ni casa propia, pero los desean fervientemente, su consumo es menor y sus vacaciones las viven en las cercanías de Lima, en la Costa Verde o Huachipa y pocas veces pueden comer fuera de casa. El perfil del sector más bajo contiene otra vez a un migrante de la sierra hablante de quechua, quien no cuenta con trabajo estable, ni nadie en su familia. Su casa no cuenta con servicios y está construida con materiales provisionales. Finalmente, un perfil considerado extraño: el migrante amazónico, que se supone existe en la ciudad y que es descrito con un menor grado de detalle que los anteriores casos. La ironía del diario consiste en recrear personajes que a pesar de sus diferencias comparten algo más que el espacio urbano. Los cuatro primeros perfiles asisten a la procesión del Señor de los Milagros, independientemente de sus orígenes. Finalmente, las formas culturales preexistentes en la capital los unen y los convierten en limeños.

[51] *Expreso*, El Suplemento, 19-1-1992, «En busca del limeño promedio».

Capítulo 9
La calle es una selva de cemento[1]

En la variedad está el gusto

En la Lima contemporánea la presencia del trabajador en las calles, ambulante por definición, pasó por varias transformaciones. Por lo menos desde 1980 la variedad de productos y servicios ofertados se amplió, pero todas las actividades no eran consideradas de la misma manera. Algunas se convirtieron en respetables por razones como su tradición histórica —real o inventada—, el público hacia el cual estaba dirigida o las características del producto o servicio ofrecido. Por ejemplo, una actividad de tipo intelectual fue la difusión de las mesas de ajedrez para los transeúntes. Desde fines de la década de 1970 se instalaron tableros que se alquilaban para jugar entre los pasantes o contra el dueño de los juegos. Entre los tableros del jirón Lampa se formaron algunos jugadores, como el Gran Maestro Internacional Henry Urday, incluso Susan Polgar, campeona mundial de ajedrez que visitó Lima en 1993, se acercó admirada a los tableros que se encontraban en la plaza Francia (García Toledo, 2005).

Otro ejemplo importante surgió en las calles de la ciudad, especialmente en la avenida Grau, cuando se difundió el negocio de la venta de libros usados y el alquiler de revistas para los transeúntes. Esta última actividad tuvo gran acogida entre los limeños, quienes podían leer revistas de historietas, fotonovelas y hasta la novedosa industria pornográfica de la época (Rojas Samanez, 1985). A principios de la década de 1980 los libros se ofertaban en las puertas de las universidades para aprovechar la demanda de los estudiantes, por ejemplo, en las inmediaciones de la

[1] Frase de la canción «Juanito alimaña», interpretada Héctor Lavoe y de autoría de Catalino 'Tite' Curet.

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) los precios podían estar por debajo de la mitad de su valor en las librerías, su fuente de abastecimiento eran los propios estudiantes que remataban sus textos al final de cada semestre[2]. Pronto otras calles de la ciudad, como el céntrico jirón Lampa, fueron el escenario de los puestos revistas alquiladas, al igual que el Parque Universitario.

Su modo de operación era móvil, transportaban sus libros en carros de madera que guardaban en las cercanías, el mismo que les podía servir de refugio y lugar de descanso mientras llegaban los compradores. La venta de libros en la calle fue considerada una actividad tan apropiada que el director de la Biblioteca Nacional, Juan Mejía Baca, era un cliente habitual de los libreros de la avenida Grau.

El negocio de alquiler de revistas mejoró al punto de que, unos años después, los vendedores disponían de bancas para una lectura más cómoda y la oferta de impresos incluía revistas pornográficas. En julio de 1980 se abolió la censura cinematográfica, lo que relajó los controles sobre la sociedad (Valdez, 2005, p. 50), hecho que coincide con la apertura comercial, la inundación de mercaderías importadas y la aparición de una industria editorial peruana dedicada al rubro[3].

Pronto apareció la piratería de libros como parte del negocio, el cual comenzó a combinarse con la venta de casetes y otros medios de reproducción audiovisuales. El 24 de diciembre de 1982 se promulgó la ley 23535 que amplió los alcances del Código penal, que establecía que se castigaría con prisión vender, distribuir o alquilar copias o reproducciones «por cualquier medio de impresión, grabación o fijación, una obra literaria, artística o científica, sin la autorización escrita del autor o del editor o del productor de fonogramas, videogramas o de obras cinematográficas». Los distribuidores legales de estos productos se quejaban de la competencia desleal de quienes, por ejemplo, alquilaban o vendían copias de películas[4]. Sin embargo, la piratería de libros y discos en diversos formatos continuó y se amplió con el tiempo. Desde 1990 cualquier éxito de librería se convierte rápidamente en un triunfo en las calles en la versión pirata. A principios de la década de 1990 el problema se agudizó por el alza en el costo de los libros, afectados por el IGV y un impuesto a la importación de libros[5], más la ausencia de una ley del libro, que no se promulgaría hasta el año 2003.

---

[2] *El Comercio*, 23-5-1980, «Libros a mitad del precio real venden frente a la UNI».

[3] Véase una carátula de la revista *Zeta* en http://www.arkivperu.com/cuchita-salazar-en-revista-zeta-1981/, fecha de consulta: 8/2/2017.

[4] *Correo*, 4-1-1983, «Los 'piratas' de cassettes ya no harán de las suyas».

[5] *El Comercio*, 3-9-1995, «La piratería, esa plaga creciente».

Por otro lado, en la década de 1980 los cambios sociales y culturales en la ciudad favorecieron la difusión de la piratería, especialmente en la música. El auge de la llamada chicha, fenómeno musical asociado con la presencia de origen andino en los pueblos jóvenes de la capital, favoreció la aparición de una gran cantidad de grupos dedicados el género. La lista de grupos es casi interminable, pero se pueden mencionar a Los Destellos, Los Mirlos, Los Pakines, el Grupo Celeste, Chacalón y la Nueva Crema, La Mermelada, el Grupo Guinda, el Grupo Alegría, el Grupo Maravilla, Vico y su Grupo Karicia y Pintura Roja (Tantaleán, 2016, p. 86). La gran mayoría de estas agrupaciones ganaba mucho más por los bailes que animaban que por las regalías que les proporcionaban sus composiciones.

> Al ser una música muy bailable se convirtió en el mejor acompañante de fiestas y reuniones. Distintos tipos de local como restaurantes, playas de estacionamiento, terrenos públicos y privados, descampados y losas deportivas eran alquilados para realizar los conciertos, especialmente los fines de semana. Tenían lugar en los conos norte y sur (periferias de Lima) y en el centro de la ciudad. El público asistente estaba conformado, básicamente, por jóvenes solteros de ambos sexos y de origen provinciano (Tantaleán, 2016, p. 89).

Por estas razones a los músicos no les incomodaban la piratería y la difusión ilegal de sus producciones. Además, desde fines de la década de 1970 aparecieron nuevos sellos discográficos, algunos de ellos operaban informalmente y con bajos costos, al acceso de pequeñas agrupaciones o novatos. De acuerdo con Tantaleán, el modelo de operación era entregar un número de copias de la grabación a los autores para que las vendan por su cuenta, esta sería el pago equivalente a sus regalías. Por ejemplo, el famoso Eusebio 'Chato' Grados señala que: «en el aspecto económico ellos me dicen 'por cada casete que yo grabe, te voy a dar 150 casetes'. Y eso me sale a cuenta ya que en 100 casetes, no más vendiéndolos a 4 soles me dan 400 soles y en 150 gano 600 soles, o sea mucho más que las regalías. Y te dan los precios bajos» (entrevista en Tantaleán, 2016, p. 89). La distribución se realizaba por medio de los cientos o miles de vendedores de música de la capital, al mismo tiempo los empresarios ocuparon el espacio de algunas emisoras radiales en la amplitud modulada. Desde ellas enviaban saludos a los grupos musicales y a los vendedores de casetes pirata: «los "saludos" a vendedores callejeros de discos y casetes piratas que se enviaban desde emisoras radiales como Radio Inca eran muy comunes en el ambiente de la cumbia peruana» (Tantaleán, 2016, p. 89).

Por último, las líneas divisorias entre el vendedor, el profesional, el intelectual y el marginal se diluyeron desde la década de 1980. En 1995 entre los vendedores que ofertaban lentes con medida en el jirón Andahuaylas, a menos de la mitad de su valor en las ópticas formales, se podía consultar a especialistas en optometría.

De acuerdo con una crónica periodística y el testimonio de uno de los vendedores: «no porque nos ve aquí trabajando en la calle no vamos a saber del oficio. La mayoría que trabaja con cristales o resinas tiene su cartón de optometría». Como prueba de estas afirmaciones mostraron las credenciales correspondientes[6].

En 1986 entre los diversos comerciantes de la temible Tacora se podía encontrar al conocido poeta Ángel Izquierdo Duclós, experto buscador y vendedor de libros y manuscritos raros. Gracias a su labor se rescató un ejemplar de la primera edición de *Trilce*, el célebre poemario de César Vallejo, dedicado y firmado de su puño y letra. También obras de José María Arguedas, Carlos Oquendo de Amat, Martín Adán, etcétera. Asimismo, recuperó un manuscrito de poemas de Enrique Verástegui, perdido hacía años de manera misteriosa. En el año 2013 el poeta aún continuaba trabajando en ese lugar vendiendo libros. De acuerdo con su testimonio comenzó su negocio el año 1983, todos los días llegaba a las 8 de la mañana y en ese ambiente, escribió «sus mejores textos» (Ybarra, 2003).

Las calles fueron el escenario de esta disolución de las diferencias. La crisis económica lanzó a muchas personas al espacio público a buscarse el sustento de mil maneras posibles, a pesar de que contaban con oficios o formación que en otro contexto serían su fuente de ingreso. Se impuso el perfil de trabajador «todo terreno» —mejor conocido como «cachuelero»—, que combinaba la práctica de múltiples oficios eventuales para alimentar a sus familias. El célebre Vico (Víctor Carrasco Tineo) y su grupo Karicia compusieron en 1985 la canción «El cachuelero» en homenaje al trabajador eventual con múltiples oficios y que intentaba ganarse el pan de cada día[7]. Al inicio del tema señala que este está dedicado a «todos los obreros y artesanos y gente que no tiene ningún trabajo estable». Su letra relata la lucha diaria de una persona que busca «algún cachuelito [...] y si lo encuentro trabajo de sol a sol, con solo la ilusión de llevar algo a mis hijitos y a mi cholita [...] todas las mañanas voy pa' la calle y no encuentro ningún trabajo».

Como se puede observar, la canción está dirigida a quienes se identifican o son percibidos como migrantes andinos, quienes, a pesar de contar con algún oficio, se ven obligados a buscar cualquier medio de ganarse la vida. Para el cantante, los únicos «felices son los que tienen un trabajo seguro, porque siempre tendrán un pan para su hogar». Mientras que, el cachuelero se define en la canción como un trabajador por contrato informal, quien muchas veces no consigue nada y solo le queda llorar su desgracia.

---

[6] *El Mundo*, 22-1-1995, «Solo para sus ojos».

[7] Puede escucharse en https://www.youtube.com/watch?v=I8xHph0sDIE, fecha de consulta: 9/2/2017.

La religiosidad popular limeña encontró en la historia del niño Ricardo Spiell una devoción asociada con la solicitud de trabajo, aunque sea eventual. El niño falleció de malaria a los seis años de edad en 1893 y su sepultura en el cementerio Presbítero Maestro contiene una estatua de mármol construida por su familia en su memoria. Aunque no hay evidencia de que en vida haya tenido capacidades especiales de curación, la tradición popular le ha atribuido sanaciones y otros milagros. De acuerdo con Fabiola Chávez, a principios de la década de 1990 se comenzó a gestar el culto, las personas le solicitaban favores de diverso tipo, pero se comenzó a correr la voz de que podía conceder el 'milagro' de conseguir empleo (2013, pp. 16-17). Los medios de comunicación difundieron el culto como «el patroncito cachuelero», lo que contribuyó a propagar su fama en la ciudad (Chávez, 2013, p. 40).

Los supervivientes

Desde siempre la ciudad albergó múltiples formas de ganarse la vida. Algunas de ellas tuvieron una larga vigencia en la capital y aunque hoy todavía perduran, la impresión es que cada vez son menos frecuentes. Sin pretender, para nada, un recuento exhaustivo, se pueden señalar a afiladores de cuchillos y tijeras, vendedores de «sanguito» y de «revolución caliente», panaderos en triciclo, herreros callejeros, raspadilla al estilo artesanal, fotógrafos de plazuela, etcétera.

Algunas de estas ocupaciones lograron mantenerse en el espacio público por la demanda y por su consideración como tradicionales, como la venta de anticuchos, pancitas y picarones, entre otras. Entre todas estas actividades, el proyecto DAI-3495 decidió entrevistar a personas dedicadas a dos de ellas: los fotógrafos de plazuela y la venta de emoliente[8]. La primera ocupación por lo menos se mantiene, a pesar de la facilidad que hoy existe para tomarse fotografías y la última ocupación no solo ha logrado sobrevivir al paso del tiempo, su presencia se ha ampliado a pesar de que estuvo relacionada con la presencia de migrantes en la capital.

En el año 2014, según el registro municipal, todavía laboraban veintisiete fotógrafos; casi la mitad de ellos se encontraban en la Plaza de Armas (trece), y diez en la Plaza San Martín[9]. Los fotógrafos que laboran en las calles retienen una memoria especial de la ciudad y sus cambios. Por su propio oficio, son sensibles

[8] Notas a oficios casi extinguidos, como el herrero en las calles, en *El Comercio*, 7-6-1992, «Fierro a pedal»; *Expreso*, 26-11-2001, «Herrero; trabajo de calor y fuego». Otra nota a un intérprete de un instrumento también poco usual, el acordeón, en *Liberación*, 16-7-2001, «Melodía triste para un acordeón callejero».

[9] Municipalidad de Lima, Padrón de comerciantes, http://www.munlima.gob.pe/consultas-en-linea/padron-de-comerciantes-ambulantes-regulados, fecha de consulta: 15/2/2017.

a los cambios en el paisaje urbano. Por ejemplo, el señor 'Carlos' (53), natural de Trujillo, llegó a Lima en la década de 1960, cuando la capital aún era pequeña. Una de sus primeras observaciones es el incremento de los hostales:

> en Lima hay mucho hostal. No sé para qué tanto hostal; mucha huevada [tontería]; por eso abundan los maricones y hay mucha delincuencia. Antes no había tanto hostal ni siquiera veías a las parejas chapando [besándose] como ahora pues, todo era bien caleta. Si querías salir con tu jerma [novia], tenías que chambear duro para llevarla a comer y bailar a algún lado; y si querías la cuestión, tenías que llevarla a un buen sitio. Pero mira ahora, estos huevones [idiotas] (señala el horizonte y apunta con el dedo a una pareja de jóvenes) no saben a dónde meterse; van a cualquier lado; y si lo hacen, van con puros cabros y todavía abrazados. Qué feo (Sifuentes, 2007, pp. 7-8).

'Carlos' aprendió a fotografiar en un instituto, dedicándose por décadas al oficio. Con ese trabajo logró alimentar a su familia, algunas veces trabajaba para la prensa, pero no le gustaba tomar fotos a cualquier cliente.

> así como me ves, aquí con mis cosas, yo tengo mucho talento para tomar los paisajes, las calles, las casas, pero no me pidas que le tome fotos a un serrano, ¡por favor! Esos son los más huevones; no saben de nada, no saben lo que es el arte. Por ejemplo, imagínate, se toman sus fotos con sus zapatillas de astronauta, su polo feo y en medio de un parque. Pero las hembritas [mujeres] tienen mejor gusto, por lo menos ellas se arreglan, salen, feítas, pero se arreglan. Yo no les tomo fotos a esos patas [amigos], yo solo trabajo aquí para cachuelearme; yo soy artista y hago trabajos grandes (Sifuentes, 2007, pp. 7-8).

Él llegaba a su lugar de trabajo ubicado en las inmediaciones del Palacio de Justicia, entre las nueve y diez de la mañana. Contaba con dos cámaras, una de ellas instantánea y un catálogo de fotos para que el cliente escoja, mientras él seleccionaba el ángulo y momento preciso de la fotografía, para evadir el tráfico en la instantánea. Los fines de semana utilizaba la cámara Polaroid en las iglesias del centro, aprovechándose de la asistencia a diversas ceremonias religiosas. Dado que su labor de fotógrafo lo hizo sensible con el entorno urbano[10], guardaba una memoria muy particular de la gestión de los alcaldes limeños:

> para mí la peor época fue la de Belmont; ese huevón me cagó bien feo; no había nadie, nadie quería venir a Lima. Tanto choro, tanto ratero; quién hubiese querido venir porque además la ciudad estaba sucia y los ambulantes no dejaban

[10] Se ha establecido que en las ciudades contemporáneas los trabajadores que laboran en las calles son rápidamente afectados por los cambios en las políticas urbanas, especialmente la privatización del espacio público (Graaf y Noa, 2015, p. 4).

> tomar fotos a nadie, por todos lados se veía suciedad; yo tuve que ir a Miraflores o a Barranco; pero claro allí me pedían muchos papeles y varias cosas, no dejaban trabajar. Tuve que dedicarme a chambear de lo que sea porque si no, no podía mantenerme. En cambio con el Chino [Alberto Fujimori] y Andrade era mejor, ese sí fue un buen año [no estableció la fecha] porque había más gente, ya existía el serenazgo, la gente estaba tranquila; también habían gringos que llegaban al centro y no les pasaba nada como antes (Sifuentes, 2007, p. 10).

El señor González (60), natural de Lima y fotógrafo de la Plaza de Armas, comenzó a ganarse la vida al tomar fotos mientras trabajaba como obrero. Paulatinamente comenzó a tener más trabajo y logró solventar los gastos de su familia con el oficio. Igual que el caso anterior, él toma la decisión sobre el lugar de la fotografía, evita que ingresen en la imagen inadvertidamente otras personas. El Sr. González también guarda una percepción de los cambios urbanos:

> A mí lo que me sorprende es ver tanto muchacho por las calles, tanta gente joven y con plata: algunos tienen buenos carros, bonitas mujeres, buena ropa y celulares. Antes en mis tiempos quién iba ir por la calle así, nosotros nos vestíamos de manera diferente, pero ahora hay cada raro que usa casacas negras y se pintan el pelo. Pero ellos son hijos de familias fracasadas, en cambio hay otros que tienen plata, ¿no? Para mí Lima es bonita porque mantiene sus calles y antiguos lugares. Eso se lo debemos al Chino, sin él estaríamos mal, además nadie ha hecho las cosas que hizo él, ni Toledo, ni la bestia de Alan. Con él sí se ganaba mejor; ahora no me quejo pero antes era mejor porque la gente venía más (Sifuentes, 2007, p. 13).

Una razón para que el oficio de fotógrafo aún tenga alguna vigencia es su propia mirada. Conocedores de los mejores ángulos de las plazas y otros espacios urbanos, los fotógrafos todavía hacen gala de su profesionalismo al seleccionar con cuidado el entorno y momento exacto de la fotografía. Por otro lado, muchas personas no cuentan con equipos portátiles capaces de tomar fotos de alta resolución; mientras otros prefieren el retrato impreso. Lo que resulta evidente es que el fotógrafo de plaza sobrevivió a las peores décadas de la historia de la ciudad gracias a su ubicación y respuesta a una demanda que sigue visitando los lugares emblemáticos de la capital. Sus fotos todavía superan lo que un peatón puede lograr por sus propios medios.



Figura 10. Fotógrafo trabajando en la Plaza de Armas. Proyecto DAI-3495, 2007.

La venta de bebidas tradicionales, como el emoliente, es una antigua tradición urbano-limeña. Su antecedente colonial son las famosas «tisaneras» y «fresqueras», mujeres que se dedicaban a la venta de aguas preparadas. Las tisaneras ofrecían una infusión producto del hervido de hierbas, combinada con cáscaras de piña o limón. César Coloma cita a una cocinera peruana, Josefina Brusco, quien definió a la tisana como un tipo de infusión que en algunos casos incluía linaza, uno de los ingredientes del emoliente actual (2010, p. 64). Las fresqueras ofrecían bebidas frías en el verano, especialmente en la Plaza de Armas, chicha de piña, de guindas, de horchatas, etcétera (Prince, 1890, p. 8). A fines del siglo XIX fueron desalojadas de la plaza por razones de aseo y ornato, refugiándose en otros lugares de la ciudad (Prince, 1890, p. 9).

Las fuentes del siglo XIX describieron a las vendedoras como afrodescendientes, quienes, sentadas en algún lugar de las plazas o mercados, o al caminar por las calles, ofrecían por medio de un pregón una bebida que frecuentemente no era «sino agua sucia con pequeños trozos de cáscaras de piña o de limón» (Prince, 1890, p. 7). Por lo menos desde el siglo XIX el emoliente figura como una de las tisanas que se ofrecían en la ciudad. Palma lo menciona en sus *Tradiciones* y pronto fue considerada una bebida con propiedades medicinales recomendada a los convalecientes (Coloma, 2010, p. 32).

En las primeras décadas del siglo XX la venta de este tipo de tisana, reconocida en definitiva como emoliente, estuvo asociada con la inmigración japonesa. Aparentemente el introductor del negocio, tal como lo conocemos en su forma actual, fue el huaracino Pedro Castillo Yupanqui, quien logró crear una sociedad

de emolienteros con la participación de la colonia japonesa[11]. La imagen de una actividad poco decorosa, realizada por personas de baja condición social y étnica, se profundizó con la xenofobia antiasiática de este tiempo. Con la caída de Augusto B. Leguía se produjo una reacción antijaponesa por los beneficios que el presidente había otorgado a su inmigración. Esto suscitó la preocupación de los dirigentes de esa comunidad en el país, quienes recomendaron a sus connacionales no emplearse en actividades consideradas de poco prestigio: venta de emoliente, verduras, comida en la calle, raspadillas, etcétera (Fukumoto, 1997).

A partir de la década de 1930 el negocio de la venta de emoliente incorporó a migrantes nacionales, quienes comenzaron a insertarse en la ciudad por medio de este trabajo (Pinilla, 2004, cap. I, cuadro 2)[12]. En los años 1980 estaba firmemente instalada la percepción del cholo o chola emolienteros, personajes que se ubicaban en las esquinas de la ciudad para ofrecer la bebida caliente en una carretilla con numerosas botellas que contenían extractos de hierbas, mezclados con abundante jugo de limón. Esto dio origen a la popular frase «más exprimido que limón de emolientero».



Figura 11. Carretilla y botellas del tradicional emoliente. Proyecto DAI-3495, 2007.

En el año 2007 una entrevista realizada a un emolientero, 'Eliazar', quien trabajaba en las inmediaciones del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, nos ofrece la posibilidad de comprender con mayor profundidad el problema. Originario de Huancavelica, comenzaba su labor cotidiana antes del amanecer hervía la cebada, las frutas y la linaza, y preparaba adicionalmente sánguches para la venta como

[11] Martín Acosta, *El Comercio*, 21-5-2011, «La historia del emoliente, una bebida con esquina»; Macera y Soria, 2015, pp. 172-173.

[12] Alberto Escobar utiliza la voz «emoliente» como uno de los ejemplos del bilingüismo, pronunciado como «emolinte» o «emolente» (1978, p. 90).

desayuno. Usualmente su labor iba desde las cinco de la mañana hasta el mediodía. Antes de dedicarse a este negocio, trabajó como vendedor de verduras, lustrabotas y ayudante de su tía quien se dedicaba a vender emoliente; luego comenzó a estudiar educación en su lugar de origen, actividad que combinaba con la venta estacional de la bebida en Lima. La clientela de Eliazar estaba mayormente compuesta por médicos, enfermeras, personal del servicio y pacientes del hospital, con algunos de ellos (sus «caseritos») tenía cierto grado de confianza que se expresaba en ofrecerles un poco más de emoliente (la «yapa»[13]) u otorgarles un crédito informal («fiado»). Además, solía establecer conversación con ellos, lo que creaba un ambiente distendido que favorecía sus ventas. Este tipo de estrategia no es inusual en el comercio ambulante, por el contrario, se sabe que su éxito radica en la comunicación directa con el comprador (Saldarriaga, Vélez y Betancur, 2016, p. 168).

Es usual que los ambulantes aprendan el negocio como ayudantes o por la experiencia familiar, independizándose posteriormente. En el caso de Eliazar el aporte familiar consistió en la carretilla para la venta, obsequiada por su tía. El estudio de Beltrán y otros encontró que el 33,3% de las mujeres entrevistadas aprendió su labor como ambulante a partir de su trabajo como ayudante; mientras que otro 43,3% lo hizo como parte del entorno familiar (2016, p. 74)[14]. Un ejemplo es el caso de una mujer que declaró que:

> aprendí de un amigo, él venía a vender aquí en la playa porque en Lima quitaban mucho a los ambulantes, no permitían ambulantes, nos fuimos a la playa a trabajar un verano, y el vendía sus libros y discos y me trajo como chacal se le dice no, como ayudante, y ahí aprendí a través de él. Y le dije yo voy a trabajar para mí con mi capital y aprendía a trabajar así para mí (Beltrán y otros, 2016, p. 75).

Otro caso interesante es el de la vendedora de emoliente llamada Sebastiana (50). Su puesto se encontraba en el límite de los distritos de Surquillo y Miraflores, a media cuadra del mercado, esta estratégica ubicación le permitía contar con una gran cantidad de clientes. Según su información, comenzó en el negocio hacia mediados de la década de 1980; trabajó anteriormente de empleada doméstica y de vendedora de golosinas en la vía pública. De igual manera que en otros casos conocidos, Sebastiana valoraba la independencia personal que le permitía su trabajo[15]. La venta de emoliente le facilitaba decidir sus horarios gracias a que

[13] Palabra de origen quechua que puede traducirse como «añadido».

[14] Romeo Grompone (1985) encontró las mismas características a mediados de la década de 1980.

[15] Esta es una característica del trabajo femenino en las calles en diversas partes del mundo, véase Babb (2008, p. 100).

contaba con ayudantes para reemplazarla; en ese momento administraba dos carretillas. Gracias a su esforzada labor, que llegaba hasta las dos de la madrugada, ella había logrado educar a sus hijos y construirse una casa. A unos centenares de metros de su puesto también se encontraban como emolienteros su madre y dos de sus hermanos, lo que confirma el principio de las redes familiares en los negocios[16]. A pesar de todos los beneficios que le había traído la venta de emoliente, Sebastiana no deseaba que sus hijos continúen esa labor debido a lo sacrificado de ese trabajo.

Contrariamente a las diversas acusaciones de la insalubridad de la venta de alimentos y bebidas en las calles, el emoliente no solo sobrevivió a esos ataques, sino que consolidó su presencia en la ciudad. De acuerdo con el padrón de comerciantes ambulantes del municipio capitalino, en el año 2014 en Lima distrital existían dos asociaciones conformadas exclusivamente por emolienteros: la Asociación Emolienteros del Cercado de Lima 1, con 16 afiliados; y la Asociación Metropolitana de Lima Vendedores de Emoliente, Quinua, Maca, Pan y Afines, con 91 miembros; más 163 personas que ejercían el oficio de manera independiente o afiliados a otras asociaciones[17].

Aunque a principios del siglo XXI la relación con las autoridades era menos conflictiva, no siempre fue de esa manera. En las últimas décadas del siglo XX los emolienteros fueron constantemente reprimidos por el uso indebido y el mal estado de aseo en que dejaban a la vía pública. No se reconocía ningún beneficio a la bebida que ofrecían y se les incorporaba dentro de la larga lista de productos que fueron considerados dañinos para la salud pública, por la baja higiene con la cual eran elaborados y vendidos. De acuerdo con Monsalve, esto explica la estrategia de los emolienteros de remarcar constantemente su higiene y la de sus productos, lo cual les permite en muchos casos negociar el lugar de venta, otorgándoles cierta estabilidad (Monsalve, 2007).

Sin duda esta serie de respuestas a los obstáculos sociales o institucionales se vieron potenciadas por el posicionamiento del emoliente como una bebida tradicional y sana. Como señala Martín Monsalve (2007), parte de su defensa consistió en conocer y difundir las propiedades medicinales del emoliente. Abundan las páginas web, blogs y otras fuentes de información que lo catalogan como saludable y beneficioso para el alivio o prevención de algunos males. La nutricionista Sara Abu Sabbah señaló que podía ayudar en la digestión, sistema respiratorio y

[16] Las redes sociales también están analizadas en Babb (2008, pp. 201-222).

[17] Municipalidad de Lima, Padrón de comerciantes, http://www.munlima.gob.pe/consultas-en-linea/padron-de-comerciantes-ambulantes-regulados, fecha de consulta: 15/2/2017.

el control del colesterol[18]. Una nota periodística realizada a un emolientero del distrito de Pueblo Libre, Walter Villegas, presidente de una asociación, quien reveló su receta, informó que el brebaje había sido registrado en Indecopi como «tradiciones del Inca». Gracias a su éxito, Villegas, fue invitado a la famosa feria gastronómica Mistura, el primer emolientero en ser invitado, y logró vender cerca de 2 mil emolientes al día[19]. El éxito de la bebida traspasó las fronteras étnicas y de clase, ahora se puede encontrar locales destinados a la venta de emoliente en Miraflores y otros distritos de clase media, como La Emolientería Bar, recomendada en las páginas de información para viajeros[20].

No solo este contexto favorable es el que explica la vigencia de la bebida. Indudablemente la flexibilidad para adaptarse a la demanda es un factor crucial. Usualmente ubicados en zonas de alto tránsito, en la medida en que las distancias se hicieron más grandes en la capital y el tiempo más escaso, la bebida se incorporó dentro del desayuno rápido de estudiantes, trabajadores, empleados, etcétera, todos en busca de alimentación en medio de su ruta cotidiana de transporte[21]. Como señala Monsalve (2007), paulatinamente los emolienteros incluyeron sánguches y otros productos como parte de su oferta, para atraer clientes que necesitan desayunar. El emolientero Walter Villegas lo reconoció al afirmar que «antes yo vendía emoliente y pan con manteca. Ahora tengo que vender de todo»[22]. En ese sentido, este tipo de reacción ante los cambios de la demanda ha sido definido como un «marketing intuitivo» resultado del

> conocimiento empírico que desarrollan cada día. Una sola persona puede ser la encargada de todas las funciones administrativas de su venta ambulante, desde planear, controlar, buscar los recursos, vender, prestar un servicio al cliente, manejo de caja, control de calidad, apropiación de un espacio público y promociones. Muchos de estos negocios son móviles, la persona surte sus insumos, se encarga en casa de adelantar algunos procesos incluyendo la

[18] *RPP*, 6-8-2015, «¿Realmente tiene el emoliente beneficios para la salud?», http://vital.rpp.pe/salud/realmente-tiene-el-emoliente-beneficios-para-la-salud-noticia-824065, fecha de consulta: 22/2/2017.

[19] *La República*, 7-7-2013, «Viaje al emoliente».

[20] También se puede citar la deliciosa descripción que hace el cantautor Andrés Soto de la bebida: «emoliente caliente, para curar los dolores […] para limpiar los riñones, para aliviar los pulmones y también los corazones» («Emoliente caliente», 1981, https://www.youtube.com/watch?v=lulc6cF5WzY, fecha de consulta: 3/1/2017).

[21] Otro producto de gran consumo callejero y con efectos positivos para la salud es el jugo de manzana, bautizado por el público como «agua de locos», por su supuesto efecto relajante de los nervios. Sin embargo, no pudo consolidarse como el emoliente, quizá porque quienes vendían el producto no tenían puesto fijo y eran identificados claramente como migrantes (*Correo*, 8-5-1983, «Prepara agua de locos. 'Mela' Ferrer, una madre que celebrará trabajando»).

[22] *La República*, 7-7-2013, «Viaje al emoliente».

> limpieza de su estructura y, en el caso de las comidas callejeras, de preparar algunos alimentos para que a la hora de su venta solo tenga que ensamblarlos y brindárselos a sus clientes (Saldarriaga, Vélez & Betancur, 2016, p. 164).

La venta de emoliente sobrevivió a los cambios de las décadas de 1980 y 1990. En este proceso no solo contribuyó la construcción de la bebida como tradicional y sana, los propios vendedores se encargaron de responder a una demanda que no era cubierta por otro tipo de trabajadores. En otras ciudades de América se repite esta situación, por ejemplo, en la ciudad de México actualmente se ofrece el tradicional atole, bebida elaborada con harina de maíz, que es especialmente consumido como parte del desayuno al paso, acompañado de los infaltables tamales. Los puestos dedicados a este tipo de productos se ubican en las cercanías de los flujos peatonales, como las estaciones de metro (Jiménez y otros, 2010).

Existen otras dos actividades callejeras con una larga historia en la ciudad, como en otras partes del mundo, pero que en el caso peruano son especialmente importantes por su rápida organización sindical y politización. La venta de diarios y revistas realizada por los «canillitas» tiene una larga historia, al igual que las personas dedicadas al lustrado de calzado, popularmente conocidos como «lustrabotas»; en ambos casos es bastante frecuente la presencia de menores de edad.

La labor de ofrecer diarios a viva voz en la calle aparentemente comenzó en la ciudad de Buenos Aires hacia fines de la década de 1860, difundiéndose por el resto del mundo. En 1904 el dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez estrenó un sainete de un acto con el título de *Canillita*, basado en la historia de un joven que vendía diarios en las calles y que vestía unos pantalones cortos que no llegaban a cubrirle las canillas; de allí el apelativo saltó a todos estos vendedores[23]. En el Perú el trabajo de anunciar las noticias o vender impresos en las calles tiene su antecesor en los personajes que se encargaban de leer los bandos y los vendedores de suertes o loterías (Prince, 1890a, p. 14 y 1890b, pp. 26-27). Felipe Pinglo Alva, uno de los compositores de valses más renombrados de las primeras décadas del siglo, compuso una canción en homenaje a los voceadores de diarios, titulada «El canillita». Como se puede ver en este vals, Pinglo lo retrata como un joven, casi niño, que no tiene otra manera de ganarse la vida, pero que lo hace esforzadamente con un oficio decente:

[23] Néstor Pinsón, «Origen de la palabra "canillita"», http://www.parquechasweb.com.ar/parquechas/notas/Nota_canillita_061108.htm, fecha de consulta: 22/2/2017.

Anunciando los diarios
que a la venta lleva
cruza el canillita
sudoroso y fugaz,
corriendo fuertemente
por ser de los primeros
en vender los diarios
y ganar el jornal.
Acaso mis ojos
tal vez hayan mirado
a un muchacho que lucha
por el pan de su hogar,
o también es posible
que me haya inspirado
en un huérfano humilde
en un desamparado
sin padres que adorar.
"El Comercio" vocea
con afán el pequeño,
"La crónica interesante",
enseguida dirá.
"el Callao" "Suplemento"
"La Tribuna" y " La Noche"
le oiremos pregonar.
Si muchos de nosotros
auscultar pudiéramos
la verdad cruel y triste
de este diario luchar
viviendo en un instante
de mortal desengaño,
compráramos los diarios
para otorgar el pan.
Canillita travieso
juguetón, bullanguero
de alma que ayer fue buena
y siempre lo será;
si cruzas muy temprano
las calles de tu pueblo
semejas a un obrero

con rumbo a trabajar.
Más tarde cuando corres
pregonando los diarios
te muestras todo un hombre
que lucha por el pan,
y al llevar la ganancia
a tus padres y hermanos
tu pequeñez de niño
humilla a la crueldad[24].

La politización de los canillitas comenzó tempranamente, al calor de los conflictos que trajo a principios de la década de 1930 la contienda electoral entre el coronel Luis Sánchez Cerro y el fundador del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre. Desde 1931 el Partido Aprista Peruano ensalzó la labor de los vendedores de periódicos, ellos recibían frecuentes menciones en el periódico *La Tribuna*, publicación del partido, que describía la sacrificada forma con la que voceaban cotidianamente el diario. Además, el periódico entrevistó a canillitas niños y adolescentes que confesaban su admiración y compromiso con Haya de la Torre y su partido. Incluso cuando *La Tribuna* pasó a la clandestinidad (1932-1945), los canillitas se encargaron de continuar su distribución y algunos de ellos se convirtieron en militantes del movimiento. En 1932 su compromiso los llevó a protestar en las calles por la persecución al APRA y sufrieron una represión policial que dejó tres muertos (Berge, 2015, pp. 106 y 111).

Cuando José Luis Bustamante y Rivero ganó las elecciones de 1945 con el apoyo del APRA, el 5 de octubre de 1946 el presidente promulgó la ley 10674 promovida por el líder aprista Manuel Seoane[25], en favor de «la protección y asistencia de los expendedores de diarios, revistas y billetes de lotería en el territorio de la República». Esta ley tuvo el objetivo de regular las condiciones de trabajo, especialmente en el caso de los menores de edad. Por ejemplo, se establecía que las empresas editoras con sede en Lima deberían ofrecerles desayunos a los vendedores y las que editaban en horario vespertino les darían un servicio de té. También se señala la necesidad de estudiar la prestación de albergues nocturnos para los menores que carecían de hogar y la incorporación de los trabajadores al seguro social[26]. Además, se creó la

[24] Felipe Pinglo, vals «El canillita», http://www.criollosperuanos.com/letradecanciones/elcanillita.htm, fecha de consulta: 23/2/2017.

[25] La fecha de promulgación de la ley se celebra como el Día del canillita en el Perú.

[26] Ley que rige en la actualidad, a pesar de su desfase con la realidad; sus principales requerimientos nunca se cumplieron adecuadamente y no generaron el bienestar que se esperaba. En el año 2016 el congresista Yonhy Lescano presentó un proyecto de ley para asegurarles a los canillitas una pensión

Caja de Protección y Asistencia Social del Canillita para ampliar los beneficios de los trabajadores.

En el año 1973 se fundó la Federación Nacional de Vendedores de Diarios Revistas y Loterías del Perú (Fenvendrelp), reconocida por el Ministerio de Trabajo, la cual agrupó a los diversos sindicatos del gremio. Esta asociación se preocupó por lograr mejoras en las ganancias por ventas y negoció con las empresas editoras los aumentos (Pérez, 2013, p. 54). En 1980 comenzaron los primeros conflictos de envergadura entre las empresas y los canillitas. La ley de 1946 exigía un trato de trabajador regular por parte de las editoras hacia los vendedores, aspecto que no se pudo cumplir. Así, en el ambiente neoliberal de 1980 y de los primeros escarceos para reformar el mercado de trabajo, las empresas comenzaron a contratar nuevos repartidores de diarios, no asociados con la Federación. Esta medida fue rápidamente rechazada por el gremio, iniciándose un conflicto con las editoras[27]. A fines del mes de octubre la situación se agravó con un paro de los canillitas, calificado de boicot por los diarios afectados, los vendedores decidieron dejar de repartir los periódicos y obstaculizaron el reparto de los mismos en quioscos y otros vendedores callejeros. De acuerdo con *El Comercio* —uno de los principales perjudicados—, salvo *El Diario* de Marka, identificado con la izquierda política, todos los demás medios de comunicación fueron afectados por «boicots escalonados» que provenían de «consignas políticas dirigidas a coactar la libre difusión de ideas a través de la prensa»[28]. La nota periodística rechazó los pedidos de los canillitas para ser tratados como trabajadores de los editores, por considerar que no procedían dado que no laboraban para la empresa, eran trabajadores independientes. Mientras que, *El Diario* de Marka señaló que de igual modo fue afectado por la paralización y también buscó otras formas de distribuir sus ejemplares, como venderlos directamente en su local con la ayuda de sus trabajadores y empleados o contratar a otros vendedores. Este diario informó con más detalle el pliego de reclamos de la Federación, el cual incluía aumento de los beneficios en las ventas, gratificación por fiestas patrias y navidad, bono por escolaridad y fallecimiento de familiares, etcétera. De acuerdo con el periódico de izquierda, la represión por parte de la policía contra los dirigentes y piquetes de huelguistas fue intensa[29].

---

de jubilación, utilizando para ese efecto un porcentaje de su ganancia por las ventas, abandonando los otros aspectos de la ley de 1946 (http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0012420160824-.pdf, fecha de consulta: 23/2/2017).

[27] *El Diario* de Marka, 19-10-1980, «Canillitas rechazan intromisión de nuevos vendedores de diarios».

[28] *El Comercio*, 30-10-1980, «Azuzados por políticos. Vendedores efectuaron ayer boicot contra los periódicos».

[29] *El Diario* de Marka, 30-10-1980, «Paro de canillitas dejó a los limeños sin diarios ayer».

Esta situación tensa, producto de la crisis económica, la politización general del inicio de la nueva era democrática y del especial papel que cumplen los canillitas, se reflejó días antes del paro cuando *El Diario* de Marka denunció la quema de un quiosco de venta de periódicos perteneciente a Armando Quispe Vara, secretario general del Sindicato de Canillitas de Breña. En este contexto conflictivo, acicateado por la elección municipal, Quispe afirmó que el hecho fue resultado de «una represalia política. Ya nos habían amenazado porque hicimos propaganda a Barrantes, cubrimos nuestro quiosco con propaganda del candidato de la Izquierda Unida y le decíamos a nuestros clientes que voten por la izquierda»[30]. Sin embargo, no era inusual que los ladrones utilicen la táctica de incendiar los quioscos luego de robar con el objeto de confundir las investigaciones. Así ocurrió en el caso de Tiburcio Rojas, cuyo quiosco fue misteriosamente incendiado y aparentemente sin conexión con la postura política de su propietario[31].

La ley que los favorecía, pero que no se cumplía, y la importancia de su labor como repartidores de diarios, fueron dos de los elementos que contribuyeron a mantener su organización y sus objetivos de lucha. Por ejemplo, como se puede observar en la siguiente figura, se puede citar el caso de Fortunata Quino (61), vendedora de periódicos en la calle sin quiosco que aprovechaba las paredes de las casas para colgar los diarios, sus dos hijas también eran ambulantes que vendían comida. Ella solicitaba que se otorgue a los canillitas el seguro social y que el gobierno no suba más el costo de vida. La ley de 1946 estableció un gravamen contra la publicidad de los diarios, el cual estaba destinado a ser entregado a la Caja; sin embargo, el Estado desde 1972 recaudaba los ingresos de todos los impuestos similares y entregaba una cantidad bastante menor a la Federación y la Caja. En 1983 el Senado comenzó a discutir un proyecto de ley para regular la entrega de los fondos, pero que distinguía a los canillitas de los dueños de los quioscos, división rechazada totalmente por la dirigencia de la Federación[32]. Las protestas del gremio para que se les entregue la totalidad de lo recaudado por el gravamen (solo se les concedía el 3% del total recolectado) fueron cada vez más intensas, exigieron la reglamentación de la ley por medio de movilizaciones en las calles[33]. La reacción del gobierno fue la misma que aplicaba a los demás movimientos: la represión[34].

---

[30] *El Diario* de Marka, 24-11-1980, «Queman quiosco a canillita que apoyó a Izquierda Unida».

[31] *El Diario* de Marka, 1-9-1983, «Canillita vive terrible drama».

[32] *La República*, 18-5-1983, «Quieren desunir a los canillitas».

[33] *El Diario* de Marka, 23-4-1983, «Restitución de sus rentas demandan los 'canillitas'» y 18-11-1983, «Vendedores de periódicos organizan movilización»; *La República*, 28-4-1983, «Canillitas van al congreso».

[34] *La República*, 4-11-1983, «Violencia contra los vendedores de diarios.» Años después el problema seguía vigente, *Extra*, 17-7-1986, «Canillitas tienen cita hoy».

En el crispado ambiente del año 1983 los canillitas tampoco se libraban de la sospecha de terrorismo. Hoy se conoce que entre los militantes captados por Sendero, especialmente en la zona norte de la ciudad, se encontraban jóvenes canillitas (CVR, 2003, p. 444). Esta vinculación de algunos trabajadores con la subversión contribuyó a que dirigentes de la Fenvendrelp fueran acusados de ser parte del comando que incendió la fábrica Bayer en mayo de ese año. Varios líderes fueron detenidos y de acuerdo con su testimonio, injustamente incriminados y torturados durante los largos quince días que duró su detención[35]. A fines de la década de 1980 diversos medios de comunicación afirmaban que en las protestas del gremio y las marchas por las calles se encontraban infiltrados que azuzaban la violencia. Esto se hacía evidente cuando la Federación ordenaba boicots contra algunos medios de prensa por causa de la negociación de los beneficios, en esos momentos aparecían supuestos canillitas que agredían a periodistas y otras personas que colaboraban en la venta de los ejemplares[36]. Otro conflicto usual se generaba cuando los alcaldes decidían aumentar el cobro a los quioscos o su remoción del espacio público que ocupaban[37].

A pesar de todos estos conflictos e imputaciones, falsas o no, el canillita fue reivindicado como un trabajador valioso para el país, lo cual facilitó la continuidad de su presencia en la ciudad. El diario *Expreso* los consideraba parte esencial de la libertad de prensa, al saludarlos en su día reafirmó su importancia:

> de la redacción al taller y de este a la calle hay muchos eslabones, todos importantes, que unidos unos con otros configuran un itinerario vital para la democracia, la institucionalidad y civismo de cada pueblo. Ya en la calle, un diario con todo su bagaje de historia y anécdota, precisa llegar a la mano de los lectores y lo hace a través de un voceador anónimo que se identifica con la noticia que vende y que en mañanas y tardes, es sinónimo de novedad y de buenos y malos augurios, mucho más malos que buenos en el Perú de hoy[38].

La década de 1990 trajo algunos cambios que aumentaron la importancia de los canillitas en la política. Los medios de prensa fueron remecidos por la aparición masiva de tabloides, la gran mayoría de bajo costo, situación vigente hasta el día de hoy[39]. Los temas que abordan les aseguran la venta masiva: espectáculos, deporte,

---

[35] *El Diario* de Marka, 7-7-1983, «Canillas apresados por caso 'Bayer' denuncian torturas».

[36] *La República*, 26-8-1989, «Diarios vuelven a venderse hoy en todos los kioscos de Lima».

[37] *Expreso*, 6-4-1989, «Canillitas marchan contra municipio».

[38] *Expreso*, 5-10-1986, «El día del canillita». Ese mismo día el diario cubrió la noticia de la inauguración del nuevo local de la Federación. Véase también *Extra*, 23-7-1986, «Canillitas con nueva directiva».

[39] Gargurevich ha elaborado una exhaustiva historia de la aparición y características de estos medios (2002, pp. 252-256).

violencia, sexo, etcétera. El lenguaje escrito y visual enfatiza esos temas, atrayendo lectores por la exposición de la noticia de forma sensacionalista y al usar la jerga cotidiana. Como señala Gargurevich, los diarios paulatinamente utilizaron esas noticias como una manera de reemplazar el vacío noticioso generado por la derrota del terrorismo. De acuerdo con el autor, el diario más leído en el año 1996 fue *El chino* (111 mil lectores), seguido de *Ojo* (61 mil), ambos considerados «diario chicha» y sensacionalista respectivamente; mientras que en tercer lugar se encontraba *El Comercio* con casi 51 mil lectores. El apelativo «chicha» hace referencia no solo a la manera grotesca y escandalosa de mostrar ciertos acontecimientos, sino a su público consumidor, identificado con los sectores más pobres y marginales de la ciudad (Gargurevich, 2002, p. 260). Su crudeza llevó a que se discutan los márgenes de la libertad de prensa, lo cual ocasionó que algunos municipios, como el de Lince, prohíban la exhibición de las portadas de esos diarios por afectar la moral y buenas costumbres (Gargurevich, 2002, p. 275)[40].

Sin embargo, como es conocido, el bajo costo de esos tabloides y la avidez de la población por los temas abordados, aseguran que los canillitas y quioscos cuenten con ventas sostenidas gracias a su alta demanda, a pesar de la creciente importancia de la edición digital de algunos medios. Por esta razón fueron usados como medio de ataque político por parte del gobierno de Fujimori, estrategia desarrollada por su tristemente célebre asesor Montesinos. Tabloides como *La chuchi* y *La nueva chuchi*[41], *El tío*, *La yuca* y *El mañanero*, entre otros, fueron comprados en su línea editorial por el régimen, utilizándolos para difamar a sus opositores. La distribución de estos diarios se facilitaba por su bajo costo y la presencia de canillitas, quienes los ofrecían en las calles de la ciudad. La importancia de su labor se reflejó en el polémico y misterioso caso ocurrido en mayo de 1999, cuando un grupo de falsos vendedores repartió un diario titulado «*La Repúdica*», émulo de *La República*, en el cual se denunciaba al director de este último, Gustavo Mohme, de negociados con el entonces fugitivo expresidente Alan García (Gargurevich, 2002, p. 291)[42]. Sin canillitas, aunque sea fraguados, no había manera de que esta operación tenga

[40] *La República*, 30-3-1998, «Lima: ¿Babilónica ciudad de papel?».

[41] Ambos periódicos deben su nombre a la vedette Susy Díaz, émula de la actriz de origen húngaro Ilona Staller («la Cicciolina»), quien fue elegida parlamentaria italiana en 1987. Díaz realizó una muy comentada campaña para el Congreso del año 1995, resultando elegida, pero se atribuyó su elección a la estrategia de mostrar el número 13, con el cual postulaba, en una zona bastante sugerente de su cuerpo.

[42] A mediados del año 2016 el expresidente Fujimori fue absuelto de las acusaciones en su contra por el caso del desvío de fondos públicos para la compra de la línea editorial de los llamados «diarios chicha» (*RPP*, 16-8-2016, «Alberto Fujimori quedó absuelto en el caso Diarios Chicha», http://rpp.pe/politica/judiciales/alberto-fujimori-quedo-absuelto-en-el-caso-diarios-chicha-noticia-987613, fecha de consulta: 25/2/2017).

éxito. En la actualidad su lugar en la política cotidiana continúa siendo relevante gracias al contacto directo que mantienen con la población. En el año 2013 la Federación expresó su rechazo a la campaña de revocación de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán[43] y el 2014, año en que enfrentaron problemas internos, el gremio se manifestó en contra de la llamada «concentración de medios» producto de la fusión de las empresas editoras del ramo[44].

Todavía hoy, a pesar del peso de las ediciones digitales, una buena parte de los diarios más leídos llega a las mayorías gracias a los quioscos o los vendedores que aprovechan el engorroso y lento tráfico limeño para vender los periódicos. Aunque casi no se emplea el término «canillita», todavía siguen luchando por conseguir mejoras laborales y humanas. El 20 de enero del año 2015 la Fenvendrelp organizó una nueva marcha con el objeto de que se incremente el presupuesto de su Caja de Protección y Asistencia Social. En la marcha se denunciaron los malos manejos en su administración y la ausencia de atención médica para los trabajadores[45]. Setenta años después de la ley de 1946, la lucha continúa.

La mañana del 3 de setiembre del trágico año 1983 los limeños despertaron con una desgarradora noticia: un niño sin identificación, de alrededor de siete años, fue encontrado muerto «antes de tiempo»[46] en el interior de una de las pequeñas cabinas de cemento que cubren los reflectores de la Plaza San Martín. En la madrugada de ese día, el reportero Alejandro Guerrero advirtió un grupo de niños reunidos en una de las casetas de iluminación de la plaza; cuando se acercó para indagar acerca de lo que sucedía le avisaron de la trágica muerte. Al preguntar a los niños el nombre de la criatura fallecida, solo obtuvo como respuesta 'Petiso', un lustrabotas que no tenía hogar y que en ese lugar se ganaba la vida igual que decenas de otros niños[47]. El niño había intentado resguardarse en ese sitio de la fría llovizna, donde murió

---

[43] Jorge Paúcar, «'Canillitas' le dicen NO a la revocatoria a alcaldesa Susana Villarán», *La Mula.pe*, 8-2-2013, https://redaccion.lamula.pe/2013/02/08/canillitas-le-dicen-no-a-la-revocatoria-a-alcaldesa-susana-villaran/jorgepaucar/, fecha de consulta: 25/2/2017.

[44] Enrique Larrea, «División entre canillitas impide venta de "Exitosa Diario" en Barranco y Jesús María», *La Mula.pe*, 3-1-2014, https://redaccion.lamula.pe/2014/01/30/division-entre-canillitas-impide-venta-de-exitosa-diario-en-barranco-y-jesus-maria/enriquelarrea/, fecha de consulta: 25/2/2017.

[45] Elena Chávez Goycochea, «Los canillitas también luchan por sus derechos», *La Mula.pe*, 21-1-2015, https://redaccion.lamula.pe/2015/01/21/canillitas-marchan-para-recuperar-sus-derechos/elenachavez/, fecha de consulta: 25/2/2017.

[46] Esta frase proviene de Bartolomé de las Casas, pero aquí la cito recordando las innumerables veces que Gustavo Gutiérrez la emplea para referirse a la muerte injusta, causada por la pobreza y el abandono.

[47] Relato de Alejandro Guerrero en la entrevista de Yasmith Palma, «La trágica muerte de petiso», http://trabajosyasmithpalma.blogspot.pe/2016_06_01_archive.html, fecha de consulta: 26/2/2017.

trágicamente electrocutado[48]. Un par de días antes, el famoso fotógrafo Carlos 'el Chino' Domínguez casualmente lo había retratado mientras se bañaba en una de las fuentes de la plaza[49]. Su desnudez y anonimato, condiciones iguales al resto de niños de ese lugar, quedarían grabadas como una de las escenas trágicas de ese fatídico año[50]. Días después, al no reclamar nadie su cadáver, el pequeño registrado como NN fue enterrado en el cementerio Presbítero Maestro con un féretro donado por la funeraria Lincoln y cargado por sus pequeños amigos, quienes declararon a un medio que «no queríamos que lo entierren sin nuestra presencia, éramos como hermanos [...] él no tiene familia acá»[51].

Estas notas periodísticas acerca del drama real de los niños abandonados llamaron rápidamente la atención de todos los medios de comunicación y de las autoridades municipales. Desde principios de la década de 1980 los programas periodísticos emitidos por la señal televisiva ganaron en importancia gracias a su difusión nacional, especialmente por medio de Panamericana Televisión (canal 5), muchos de esos programas aprovechaban este tipo de noticias para atraer televidentes (Vivas, 2008, pp. 321-366). El dramatismo del caso de 'Petiso' tuvo dos efectos, por una parte puso en el escenario la labor del lustrabotas y, por otro lado, reveló la tragedia de los niños abandonados en la ciudad. El 31 de octubre la esposa del alcalde de Lima, Carolina de Orrego, inauguró un albergue dedicado a cuidar a los niños abandonados, bautizado como «Casa de los petisos». Estos hechos cambiaron la actitud de las autoridades ante los lustrabotas. En 1980 habían sido desalojados de la plaza por las autoridades municipales, incluso también aquellos que tenían puestos fijos en los portales[52]. A principios del año 1983, luego de la renovación del Jirón de la Unión, los trabajadores de la municipalidad desalojaron a los niños lustrabotas de las calles ejerciendo violencia en su contra[53].

En 1985 se estrenó la película *Gregorio*, dirigida por el grupo Chasqui, basada en el cuento *El niño de junto al cielo* de Enrique Congrains. La cinta narra la historia de un niño migrante andino, quien para ayudar a su familia labora como

[48] Los niños abandonados usualmente dormían en las bancas de la plaza, Jirón de la Unión o en las calles del centro. Otros utilizaban sus puestos de lustrado de zapatos (Roggenbuck, 1996, p. 98).

[49] Esta era una de las actividades favoritas de los niños abandonados en la plaza (Roggenbuck, 1996, p. 97).

[50] La Orquesta Macondo compuso y grabó el tema «Petiso», en homenaje al niño fallecido trágicamente el 3 de setiembre de 1983. Versión de la Orquesta Macondo de Freddy Tara en https://www.youtube.com/watch?v=ur2jLZR-Hzo, fecha de consulta: 26/2/2017.

[51] Pablo Panizo, «El NN que estremeció Lima», https://hombrealagua.lamula.pe/2015/09/12/el-nn-que-estremecio-lima/pablopanizo/, fecha de consulta: 26/2/2017.

[52] *El Diario* de Marka, 12-12-1980, «En navidad dejan sin trabajo a lustrabotas de la Plaza San Martín».

[53] *Correo*, 15-3-1983, «Correo de Lima».

lustrabotas en la Plaza San Martín, compartiendo tensamente el oficio con otros niños, tal como ocurrió con 'Petiso'. Como señala Contreras, la película muestra los conflictos surgidos de la adaptación a la agresiva vida urbana, sus peligros y la rápida conversión de estos niños en desalmados adultos (Contreras, 2013, pp. 68-69)[54]. El impacto mediático y comercial de la película fue muy positivo, dado el ambiente sensibilizado desde la trágica muerte de 'Petiso'. La acogida del público permitió que se exhiba por más tiempo del exigido por la ley de cine e incluso los lustrabotas fueron parte del público que asistía a las funciones (Contreras, 2013, p. 70).

Esta asociación del lustrabotas con el drama de la subsistencia de los niños en la ciudad continuó alimentada por medio de las crónicas periodísticas, lo que consolidó un imaginario urbano. Por ejemplo, Benjamín Torres Salcedo, desde las páginas del diario *Expreso*, narró cómo estos niños eran asaltados por otros de su edad, arrebatándoles lo que esforzadamente habían ganado en el día. Así, uno de ellos, «ha aprendido en sus escasos 8 años de que también los hombres —esforzados y valientes como él— derraman lágrimas. Pero lágrimas amargas y de verdad»[55]. Sin embargo, no todos los niños que trabajaban en la calle fueron bien considerados, algunos de ellos, incluidos los lustrabotas, eran confundidos con los numerosos delincuentes de las calles limeñas (Roggenbuck, 1996, p. 97).

La inquietud por la creciente masa de niños que trabajaban en las calles comenzó desde mucho tiempo atrás de la muerte de 'Petiso', pero a partir de la década de 1980, con el aumento del número de niños trabajadores por la crisis económica, se incrementó la preocupación por su destino. Si bien la ley que prohibía el trabajo de todo menor de 14 años databa de 1918, disposición que fue ratificada por el Código de menores de 1962, en las calles la realidad era radicalmente diferente (INEI, 2009, pp. 45-46)[56]. A partir de 1940 comenzó a aumentar la presencia de niños en las calles, según Roggenbuck, muchos de ellos hijos de migrantes, quienes robaban las frutas de las huertas que rodeaban la ciudad; razón por la cual el profesor Bernardino Jinés los bautizó como «pájaros fruteros» y creó en 1943 un albergue para ofrecerles educación para el trabajo (1996, p. 93). Dos años después el Estado creó el Instituto N° 1 de Menores de Maranga, para recluir a los menores que cometían delitos en las calles limeñas. Los periódicos de las décadas de 1950 y 1960 continuaron informando de la creciente presencia de menores abandonados, especialmente en la zona de los mercados de La Victoria, que temían incremente

[54] En el año 1989 el mismo grupo estrenó *Juliana*, película que también abordó el tema del abandono de los niños.

[55] *Expreso*, 9-3-1986, «El lustrabotas valiente».

[56] Recién en el año 1992 se intentó modernizar las disposiciones aceptando la realidad del trabajo infantil, se redujo la edad mínima a 12 años, pero nuevamente en el año 2001 se tuvo que adecuar la norma a los convenios internacionales, fijándola en 14 años.

la masa de delincuentes en el futuro (Roggenbuck, 1996, p. 93). A partir de los años 1960 se detecta la presencia de estos infantes en el centro de la ciudad, especialmente en la Plaza San Martín, espacio en el cual en la década de 1980 una anciana de origen indígena se encargaba de darles algo de comida (Roggenbuck, 1996, p. 96). En 1962 se promulgó el primer Código de Menores, el cual no distinguía entre el menor en situación de abandono del que era considerado peligroso, los menores eran sujetos de penas fundamentalmente correctivas (Capuñay, 2012). Esta doctrina cambió en 1990 cuando el Perú se adhirió a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, lo cual se expresó en el nuevo Código de los Niños y Adolescentes (1993), modificado el año 2000. En esta nueva legislación sí se consideran imputables los delitos cometidos por ellos, pero con la posibilidad de garantizarle sus derechos fundamentales y con alternativas al internamiento penal (Capuñay, 2012).

El trabajo infantil a nivel nacional aumentó entre las décadas de 1970 y 1980. En el año 1972 trabajaba 1,9% del total de niños urbanos y 3,5% de los residentes en zonas rurales; mientras que en Lima laboraban el 1,6% de los infantes. Estas cifras crecieron en la década de 1980: el total de niños trabajadores aumentó en 1986 a 3% a nivel urbano, 4% en zonas rurales y 3,4% en Lima (Ramos, 1993, p. 18). La mayoría de ellos realizaba labores no remuneradas en el entorno familiar (52,4% en zonas urbanas, 72,3% en las rurales), mientras que en las ciudades la actividad más frecuente era el empleo doméstico con más de 18 mil niños, el 80% niñas (Ramos, 1993, p. 25).

En las calles de la ciudad también aumentó el número de niños trabajadores, en 1988 su número se estimaba en cerca de 100 mil infantes y el 71% había nacido en la capital, contrariamente al pensamiento generalizado que suponía su origen migrante (Ordoñez & Mejía, 1993, p. 83). Las actividades callejeras se habían diversificado a la venta ambulatoria, lavado y guardianía de automóviles, carga de bultos, venta de agua y flores en cementerios, reciclaje de basura, cobradores de micro, lustradores de calzado, entre otras (Ordoñez & Mejía, 1993, p. 42). De acuerdo con una encuesta de 1992, el 60% de los niños trabajaba de forma ambulatoria y 10% vendía en los ómnibus. Solo 30% laboraba en un local fijo, en mercado o en la calle (Ordoñez & Mejía, 1993, p. 59). La realidad solo ha mejorado un poco en los últimos años, en el 2008, «siendo mesurado, con absoluta seguridad se puede afirmar que en el Perú, por lo menos, 3 de cada 10 niños, niñas o adolescentes entre 6 a 17 años están trabajando» (INEI, 2009, p. 23).

Esta realidad, como señalan diversos autores, esto llevó a la confusión entre niños *en* la calle y los niños *de* la calle. Los primeros trabajaban en un entorno familiar en las calles, sin estar en situación de total de abandono; mientras que

los otros sí vivían esa lamentable realidad (Ordoñez & Mejía, 1993, pp. 43-44)[57]. El niño en la calle usa el espacio público como medio laboral, mientras que, el niño de la calle la usa como hábitat, por ejemplo, no pernocta regularmente con sus familiares ni asiste a la escuela. Así, el primero está integrado al circuito de la supervivencia y el segundo en el de la marginalidad (Ordoñez & Mejía, 1993, p. 44), pero, a pesar de esta distinción, son tenues las fronteras entre una y otra situación y las diferencias son más de orden analítico que una realidad observable para los habitantes de la ciudad[58]. Cornejo considera, para la realidad de la ciudad de México, que el niño de la calle, más allá de si cuenta o no con cobertura familiar, es un «sujeto activo con posibilidades de hacer del espacio citadino callejero un lugar de reconocimiento, y que pese a su característica nómada, le provee de algún sentido de pertenencia al habitar y apropiarse de ciertas parcelas del Distrito Federal» (1999, p. 210). Su definición es adecuada a nuestro entorno limeño:

> Los «niños de la calle» son personas menores de 18 años, de uno y otro sexo (la mayoría varones), que habiendo roto el vínculo familiar temporal o permanente, viven y trabajan en las calles de las grandes ciudades realizando actividades marginales dentro de la economía informal. Con el abandono de una estructura y dinámica familiares caracterizadas por estilos de comunicación agresivos y violentos, estos niños sujetos activos estarían cimentando —espontánea o voluntariamente—, y con base en su propia actividad laboral, un intento por sobrevivir (Cornejo, 1999, p. 211).

Si bien los niños en la calle no viven una realidad tan riesgosa, los de la calle no solo se dedican a robar o asaltar transeúntes, también trabajan en oficios como la limpieza de los parabrisas o el lustrado de calzado, entre otras labores, lo que hace difícil la diferenciación entre unos y otros (Roggenbuck, 1996, p. 98). Incluso, según la encuesta de 1992, 60% de los niños en la calle trabajaban sin la compañía directa de sus familiares, laboraban solos o con algún amigo y el 26% no asistía a la escuela; 38% vendía golosinas en las calles, 24% eran cargadores de carretillas, 16% lustrabotas y 6% limpiaban lunas, entre las actividades más relevantes (Ordoñez & Mejía, 1993, pp. 63, 66 y 67). Esto muestra con claridad que en las calles de la ciudad no siempre se puede diferenciar entre uno y otro grupo, en ambos casos lo que se observaba son niños que trabajan en actividades precarias y con condiciones de vida cercanas a la miseria. Así, lo que se percibe es un proceso de «callejerización» consistente en una adaptación paulatina a la vida en las calles en la que «esta última

[57] Véase también Jaramillo, 2015, pp. 143-144.

[58] Una interesante revisión de los conceptos aplicados a la realidad de la infancia callejera en Cornejo (1999).

se convierte es espacio de sobrevivencia a partir de la propia actividad laboral de los menores» (Cornejo, 1999, p. 211).

> Miguel canta canciones en los ómnibus y micros, Raúl vende tamales tocando un bongó. Luis Alberto se gana el pan pelando pollos, Ricardo carga bolsas en los mercados. Lorenzo vende drogas en los mercados en el Porvenir, Gerónimo lava botellas, Josefina hurga en los basurales, Natividad vende revistas pornográficas, Manuel es pordiosero, Juan Alberto vende yerbas medicinales[59].

Meses antes de la tragedia de 'Petiso' la prensa se había interesado en el drama de los niños que trabajaban en la calle. Como se puede ver en la nota anterior, se percibía que sus labores eran variadas, algunas peligrosas e ilegales, pero el denominador común era el uso del espacio público, el bajo estatus de sus ocupaciones y los peligros a los cuales se exponían. Una nota[60] llama la atención acerca del trastocado papel de los niños, quienes con frecuencia son los que mantienen a las familias con sus escasos ingresos: «muchos de ellos se han convertido, a temprana edad, en los verdaderos sostenedores de sus hogares»[61]. En el caso de Marcos Luna (14), vendedor de flores en el distrito de Miraflores, él contribuía con más dinero que su madre que se dedicaba a lavar ropa. La misma realidad se observaba en el caso de los numerosos lustrabotas de las plazas San Martín, de Armas, Bolognesi, Dos de Mayo, y otros espacios de la ciudad. De acuerdo con el testimonio de Remigio Ripacti (12), niño de origen puneño y que nunca había asistido a la escuela, la dureza de la vida en las calles ya había cobrado varias víctimas entre sus conocidos: «varios de mis amigos lustrabotas han muerto»[62]. No solo entre ellos. Su propia familia, compuesta de su madre viuda y sus cinco hermanos, y que había migrado cuatro años antes a la capital, sufrió esta terrible situación: lamentablemente dos de sus hermanos murieron en Lima. Remigio comentó que «lo que más temen los lustrabotas, sobre todo los niños, es a la lluvia del invierno limeño, a la humedad, a los rateros y a la policía». Su palabras fueron citadas directamente en el reporte: «la lluvia nos enferma, los rateros nos quitan nuestras ganancias del día y la policía nos para echando de nuestros sitios de trabajo»[63]. Estas proféticas palabras fueron publicadas menos de dos meses antes de la muerte de 'Petiso'.

Otro importante conjunto de niños se dedicaba a limpiar los parabrisas de los carros, usualmente embarrados por el polvo y la llovizna de la ciudad. Aprovechaban

[59] *El Diario* de Marka, 18-7-1983, «Los niños trabajan como gente grande».
[60] *El Diario* de Marka, 18-7-1983, «Los niños trabajan como gente grande».
[61] *El Diario* de Marka, 18-7-1983, «Los niños trabajan como gente grande».
[62] *El Diario* de Marka, 18-7-1983, «Los niños trabajan como gente grande».
[63] *El Diario* de Marka, 18-7-1983, «Los niños trabajan como gente grande».

las demoras en el tráfico, como ocurre hasta hoy, y se abalanzaban a la caza de los automóviles para ofrecer su labor, a veces más por la fuerza que por necesidad del conductor. Uno de estos niños se llamaba Juan Carlos Ikebata, quien a sus escasos ocho años se trepaba a los autos con su franela roja, a pesar de su escaso tamaño que aparentaba menos edad. Además, por las noches cuidaba los vehículos, junto con su hermano de 14 años, hasta las dos o tres de la madrugada. Ambos retornaban en taxi a su hogar, ubicado en las afueras de Lima, llevaban comida a su casa compuesta por más hermanos y su madre enferma. No tenía padre[64]. Como ayer y hoy, lamentablemente, era frecuente el número de madres abandonadas que afrontaban la manutención de sus hijos al trabajar en lo que estaba a su alcance: servicio doméstico, limpieza pública, comercio ambulatorio, lavandería, etcétera, y cuando no, tristemente, la prostitución. El precario bienestar de su familia dependía de su salud, muchas veces debilitada por el exceso de trabajo, una vez que caían enfermas, sin seguro ni protección social, solo quedaban los hijos para enfrentar la supervivencia de la familia[65]. Sin embargo, Roggenbuck encontró que entre los niños que vivían en las calles no se hallaban niñas, salvo las adolescentes que ya se dedicaban a la prostitución, quizá porque a ellas todavía les quedaban las tareas domésticas en reemplazo de las madres enfermas o trabajadoras, o porque aún contaban con el servicio doméstico como opción (Roggenbuck, 1996, p. 101).

La labor de limpiar los parabrisas es el antecesor de las ventas a los conductores. Hoy en día se ofrecen a los conductores muchas cosas, especialmente productos como golosinas, bebidas, regalos, entre otros. Trabajar de esta manera exponía a los niños a accidentes, sumado a que algunos conductores maltrataban a los infantes[66]. El resto de labores reseñadas no hacía sino ratificar la dura realidad de estos niños: pelador de pollos, vendedores de drogas, mendigos, entre otras. Una nota del diario *La República* descubrió cientos de niños que dormían en las calles de La Parada y el Mercado Central, pues al ser de madrugada no podían regresar a sus hogares, cuando los tenían. Algunos grupos alquilaban habitaciones, otros buscaban abrigo debajo de los autos o en las portadas de las casas. Lo común es que estaban expuestos a agresiones de todo tipo, incluidas, lamentablemente, las de tipo sexual. También estaban a merced de muchas tentaciones, como robar o drogarse con el famoso y peligroso pegamento para zapatería de marca comercial

---

[64] *La República*, 18-3-1983, «Con el sudor de tu frente».

[65] Véanse las notas realizadas a mujeres abandonadas por sus parejas: *El Diario* de Marka, 8-5-1983, «Opinan en su día 3 madres abandonadas»; *Extra*, 17-5-1989, «Madre en crisis»; y *Liberación*, 14-5-2001, «Cuando la necesidad de trabajar es más fuerte que las ganas de celebrar y descansar».

[66] *El Diario* de Marka, 18-7-1983, «Los niños trabajan como gente grande».

Terokal[67]. El especialista consultado por el diario, el doctor Carlos Castillo Ríos[68], afirmó que muchos de los niños de la calle no carecían de hogares, pero al vivir en situación de miseria y con padres de bajos ingresos o enfermos, afrontaban la dura tarea de mantener a sus familias. Castillo percibía con tanta gravedad la realidad que consideraba potencialmente catastrófica esa situación e irrecuperables los casos de muchos de esos niños:

> estamos frente a algo cuatrocientas veces más grande que el fenómeno llamado terrorismo, estamos frente a algo muchas veces más grande que una posible invasión de Ecuador o Chile. Eso es lo que no nos damos cuenta. Frente a nosotros mismos, en nuestras narices se nos mueren los niños de hambre, de tuberculosis y no saltamos con la misma furia, con la misma indignación. Estamos frente a un problema que si empezara a conmovernos entonces sí habría estado de emergencia en todo el país. Solo vale la pena insistir en [una] cruzada nacional, estado de emergencia, en guerra civil para salvar a la infancia, guerra civil contra la miseria[69].

De acuerdo con *El Diario* de Marka así era la dura realidad del futuro de nuestra niñez: «el nuevo niño peruano, fruto directo de la crisis, es de talla menor, de un coeficiente mental más bajo, de un rendimiento escolar menor y de un comportamiento antisocial más agudo»[70]. Efectivamente, en 1993 a nivel nacional el retardo en el crecimiento de los niños era de 39%; 56% en zonas rurales y 27,2% en las ciudades (Pajuelo y otros, 2003, p. 6).

En la década de 1980 las dificultades para diferenciar al niño trabajador del abandonado y marginal, incluso delincuente, se hizo cada vez más difícil. Además, su conducta irrespetuosa contribuía con aumentar su marginalidad, aunque no solo ellos se comportaban de esa manera:

> Una especialidad de los niños callejeros consiste en sacarse el pene en medio de la acera y orinar frente a sí, haciendo un gran arco. Algunos hacen de esto un "arte", tratando de orinar figuras o letras. Pero no son los únicos que orinan en público, pues los hombres adultos hacen lo mismo en el césped de la Plaza San Martín; debido, por un lado, a la falta de servicios sanitarios públicos y, por otro lado, siguiendo las costumbres indígenas de las tierras altas. Los niños callejeros,

[67] *La República*, 18-3-1983, «Con el sudor de tu frente». Véase una descripción del pegamento y sus riesgos en http://hybris.cms.henkel.com/henkel/msdspdf?matnr=1072467&country=US&language=ES, fecha de consulta: 1/3/2017; y en Roggenbuck, 1996, p. 98.

[68] En 1974 Castillo publicó *Los niños del Perú. Clases sociales, ideología y política,* trabajo que le dio un lugar destacado en los medios de comunicación.

[69] *La República*, 18-3-1983, «Con el sudor de tu frente».

[70] *El Diario* de Marka, 18-7-1983, «Los niños trabajan como gente grande».

> así como algunos vagos adultos, no se frenan de hacer sus 'necesidades mayores' cerca de la pila de la fuente. Por eso, en la Plaza San Martín, como en todo el centro de Lima, huele a cloaca. Contra esta situación no ayuda el imperativo de "¡Prohibido orinar!" que se lee en algunos letreros (Roggenbuck, 1996, p. 97).

Se puede percibir desde el año 1980 al 2000 el tránsito de «pájaro frutero» a «pirañita», que criminalizaba la pobreza y diluía la línea divisoria entre el niño trabajador[71], usualmente lustrabotas, vendedor de golosinas o limpiador de autos, entre otras actividades; de los delincuentes menores de edad, los drogadictos y otros personajes marginales[72]. En 1980, una crónica periodística informaba de la existencia de una «escuelita del crimen» en las calles cercanas a la plaza Unión, en jirón Cárcamo. De acuerdo con el redactor, «muchos de estos niños que ahora escarban sobre los basurales no podrán oponerse a lo que parece un destino y seguramente —de continuar la sociedad capitalista— terminarán por convertirse en delincuentes»[73].

El periodista, quien hizo una peligrosa incursión a la zona, tuvo la oportunidad de dialogar con los niños, los cuales, de acuerdo con su testimonio, estaban «cubiertos por costras de suciedad, apestaban y tenían los dientes cariados. Sin embargo, sonrieron». Descubrió que varios niños que hurgaban en la basura, llamados Tulio Jesús (7) y Yoni (8), más siete hermanos, no buscaban comida, sino desechos para vender. Ambos iban a la escuela cercana, la 1144 de Cárcamo, lugar donde vendían los borradores elaborados con los desechos de plásticos lanzados a la basura por una fábrica. Ellos vivían en una quinta desecha y maloliente, llamada «La balalaika», hacinados en pequeños espacios, lugar que albergaba a trabajadores ocasionales dedicados al comercio ambulatorio, lavanderas, etcétera. En otra calle del mismo barrio ubicó una «escuela de pájaros fruteros y futuros delincuentes famosos», cerca de allí vivía un niño limpiador de parabrisas llamado Raúl, de seis años, quien todos los días tenía que salir a trabajar para conseguir algo que comer. El periodista consideraba que el destino ineludible de estos niños era la delincuencia, así retozaban en una vida sin juguetes similares a los de otros infantes:

> el juguete, la diversión y la alegría de estos niños tan maltratados por nuestra sociedad es limpiar los parabrisas de cualquier auto, mientras el semáforo permanece en rojo. Y el juguete puede ser, también, arrancarle la cartera a una

[71] El año 2001 un conductor de automóvil asesinó de un balazo al vendedor ambulante Cosme Escalante, quién se acercó al conductor, según este último, para asaltarlo; según los hermanos de la víctima para ofrecerle en venta cinturones de seguridad (*Liberación*, 7-9-2001).

[72] La misma tendencia a criminalizar se puede percibir en México (Cornejo, 1999 y Mendiola, 2017, p. 150).

[73] *El Diario* de Marka, 23-5-1980, «Los pájaros fruteros».

> señora y volar más rápido que inmediatamente. De no hacerlo, se quedarían tristes. Es una manera de canalizar su energía, pues tampoco pueden hacer otra cosa…el modo de vida – que es la delincuencia – a lo que esta sociedad los destina, es su mejor forma de defenderse de la sociedad[74].

El redactor no solo tiene una opinión pesimista del futuro de estos niños. Les otorga una función política a sus actos contestatarios, peligrosos y llenos de paradojas. Es una mirada compatible con «la cultura de la pobreza», tal como la planteó el célebre Oscar Lewis en sus numerosos trabajos, la cual atribuye fatalismo a los pobres e incapacidad para alterar las condiciones negativas de su existencia[75]: «para ellos no robar, no asaltar, no quitar un reloj, no prorrumpir en un mercado, es algo que equivale a un suicidio». Sin embargo, la diferencia radica en una mirada que intenta ser empática respecto a sus actos delictivos: «es una forma de rebelión, una rebelión no aconsejable pero que puede ser encauzada teniendo como meta la crítica o destrucción de la sociedad que ha producido este tipo de lumpen». Efectivamente, el periodista no solo temía por el futuro de los niños, en el presente ya eran lúmpenes: «roban para comer pero también roban porque es un modo de vida, el único que conocen. Hay pájaros fruteros que roban para llevar algo a la mamá, sin embargo, hay quienes ya desde los once años lo hacen para drogarse fumando pasta de coca»[76]. Esta perspectiva también encaja dentro de lo que se denominó la «anomia social», que percibe a la pobreza y su repercusión negativa en el mundo interno de las personas, «dificultando su proyección hacia el futuro y la capacidad de idear y organizar propuestas individuales y colectivas que conduzcan a cambios sociales cualitativos» (Sandoval, 2000, p. 305).

En ese mundo lo heroico era defenderse de la policía y lo decente era no robar en el barrio y, por el contrario, ayudar a los vecinos. El periodista no les reconoce, como Lewis, ninguna conciencia social de la realidad, mucho menos de clase, pero encuentra que los personajes de su historia tienen honor y se mantienen leales a sus amistades. Su nota se cierra cuando, mientras caminaba con un «choro» (ladrón) de más edad apodado 'Nomeolvides' (25), el reportero confiesa, con el enorme candor de la época, que su objetivo es escribir una nota acerca de la cultura de los marginales, «esta forma de vida a la que ustedes se han visto empujados por el capitalismo y de la que ustedes no tienen culpa alguna, pues la esencia del capital es hacer del hombre una simple mercancía y lo que no le rinde lo arroja al basural»[77].

[74] *El Diario* de Marka, 23-5-1980, «Los pájaros fruteros».

[75] Lo esencial de su propuesta se encuentra en «The Culture of Poverty» (1966). También se puede consultar a César Rodríguez Rabanal en «Pobreza y mundo interno» (1991).

[76] *El Diario* de Marka, 23-5-1980, «Los pájaros fruteros».

[77] *El Diario* de Marka, 23-5-1980, «Los pájaros fruteros».

Su interlocutor, solo sonrió y le contó cómo era su vida cotidiana. El periodista afirmó que el mundo del lumpen era cerrado al exterior, no le reconoció mayor valor a los trabajos legales que sus propios entrevistados le contaron; su obsesión consistía en demostrar la inevitabilidad de sus vidas delincuenciales como producto del capitalismo opresor y alienante. Aunque quizá simpatizaba con las vidas de los marginales, su nota no hizo más que borrar la diferencia entre los delincuentes y los trabajadores de las calles, ambos eran lúmpenes o estaban en tránsito de serlo. La dureza de la vida en la calle borraba las diferencias, a juicio del redactor: «no tener futuro pero vivir al día, en continua lucha contra un medio de por sí adverso e inhumano es el mundo del pájaro frutero, *del pequeño mendigo que rápidamente habrá de transformarse en ladrón porque la sociedad no le da otro camino. Aquí, la mierda es el camino*»[78]. Como señala Sandoval, las revelaciones de estas situaciones traumáticas hace preguntarnos sobre la evolución de estos lugares, dado que la mirada parece condenarlos irremediablemente: «¿qué nuevas formas de sociabilidad se están generando entre los pobres urbanos?, ¿más de treinta años después, las barriadas son espacios de esperanza o de crisis permanente?» (2000, p. 306).

Guido Vignolo, famoso periodista del diario *Extra*, también se interesó por la situación de los niños de la calle. A partir de la presentación de un anteproyecto para un nuevo Código de Menores elaborado por el jurista Fermín Chunga, el redactor elaboró una nota acerca de los «pájaros fruteros». En ella figuran las historias y rostros de los niños abandonados, quienes trabajaban en el lavado de autos, la recolección de desperdicios, cantar en los micros, entre otras actividades. Algunos huían de la violencia familiar, otros trataban de sobrevivir a la pobreza, pero todos usaban la calle como espacio de trabajo, exponiéndose a los peligros que traía ese tipo de vida. La nota los cataloga de 'antisociales', basado en el juicio de Chunga, considera que el 40% proviene de la sierra y 40% de otros lugares, con solo 20% de nacidos en la capital. La mayoría de ellos, a pesar de su corta edad, ya tenía experiencia con las drogas y el alcohol, «es decir, conscientemente se autoeliminan»[79]. Según Chunga, esta vida tenía su guion escrito desde su nacimiento:

> los menores antisociales son consecuencia de un estado social que se genera en el mismo instante del nacimiento y que se acentúa por los desajustes que existen en la sociedad. Es por ello que la característica más frecuente de estos actos, se identifica con los delitos contra el patrimonio. De allí que es común ver a niños arrebatando carteras, robando en los microbuses, ómnibus. Forman pequeñas gavillas que generalmente son adiestradas por adultos que no dan la cara…

[78] *El Diario* de Marka, 23-5-1980, «Los pájaros fruteros». El énfasis es mío. La última oración es una clara referencia al lema de la campaña presidencial del aprismo en 1980: «el APRA es el camino».
[79] *Extra*, 21-8-1986, «'Pájaros fruteros', puerta abierta a la delincuencia».

> Incluso hay padres, familiares y tutores que bajo amenazas de castigos corporales y hasta de muerte, los obligan a asaltar, robar y cometer toda clase de delitos[80].

Efectivamente, como todo limeño sabe, aún existe un número importante de niños y adolescentes que se dedican a la delincuencia y que incluso son empleados como sicarios[81]. Roggenbuck observó cómo funcionaba la delincuencia en la Plaza San Martín a mediados de la década de 1990. Los robos eran realizados por pequeñas bandas de asaltantes que generalmente no usaban armas y que preferían atacar a personas desprevenidas o que no podían defenderse, especialmente mujeres jóvenes y ebrios (Roggenbuck, 1996, p. 99). Sin embargo, el autor no encontró evidencia de que en la plaza algún adulto se encontrase detrás de las bandas, instruyéndolas u organizándolas. Sí ubicó tal realidad en la Parada, lugar en el que el 'negro' Raúl, expresidiario y lisiado de una pierna, se encargaba de educar en el hurto a los pequeños ladrones. En este mercado los asaltos si eran en grupos más grandes, con armas y atacaban a todo tipo de víctimas (Roggenbuck, 1996, p. 103).

En 1999 se registraron en Lima 32 204 detenidos, 37% por delitos contra la seguridad pública y 38% contra el patrimonio; de todos los procesados, 17% fueron niños o adolescentes; 42% por delitos contra el patrimonio y 6% contra la vida y la salud; 5% por tráfico ilícito de drogas, entre otras faltas (INEI, 2001, pp. 88-89). No se trata de negar esa realidad ni de establecer en estas páginas la responsabilidad de la familia, la educación, el Estado, la sociedad o de los propios niños. Lo que importa es que la nota de 1986, como otras fuentes, borra la distinción entre el niño trabajador y el que se dedica a robar para vivir o enviciarse. Al final, esta postura creó un ambiente de sospecha sobre todo niño pobre que transitaba por las calles. Algunos podían ser pordioseros, otros recicladores o lustrabotas, pero sobre todos ellos recaía la sospecha de ser delincuentes reales o en potencia. Un trabajo más reciente desmitifica este contexto fatalista de la infancia en las calles y muestra su complejidad:

> El robo se convierte en una forma de vida cuando no consiguen suficiente dinero trabajando. El robo no es una actividad que los niños disfruten. Para ellos el robo, implica el riesgo de ser maltratados por los efectivos de serenazgo o de la PNP y también es un conflicto moral. Muchos niños se inician en el robo ya que es una actividad que les brinda status dentro de su grupo. Entre los niños manejan sus propios códigos y valores con respecto a su víctima. Por ejemplo, no puede ser desvalida, pero tampoco alguien que pueda maltratarlos, el dinero lo comparten entre ellos mismos y en ocasiones suele ser el último recurso para no morir en la calle… El robo les causa mucha culpa a los niños y lo justifican por

[80] *Extra*, 21-8-1986, «'Pájaros fruteros', puerta abierta a la delincuencia».

[81] *El Comercio*, 3-8-2014, «De Canebo a Gringasho: historia de crimen en la adolescencia».

> alguna gran necesidad familiar, o de consumo de sustancias psicoactivas, pero lo que más llama la atención es que un mecanismo que utilizan para liberarse de la culpa, es el apelar a la injusticia social y a la brecha económica que existe en nuestro país, racionalizando; «pero ellos tienen plata y nosotros no tenemos para comer» (Casamán, 2005, p. 76)[82].

La tendencia de criminalizar a los niños de la calle se hizo más clara cuando se utilizó el apelativo de «petisos» para los niños que vivían en la calle y que se drogaban con Terokal.[83] De este modo el sobrenombre de un niño trabajador, del cual no hay noticia de que haya utilizado drogas, comenzó a denominar a todos los infantes que vivían o trabajaban en las calles. Una nota del diario *Extra* afirma que un operativo de «recojo de menores» aplicado por el Instituto Nacional de Bienestar Familiar (Inabif), descubrió que el 40% de los niños que «deambulaban por las calles céntricas de la capital y duermen en parques y plazas, noche a noche cumplen con el ritual de reunirse y aspirar pegamentos del tipo del 'Terokal'». Solo en la Plaza San Martín, quince de los veintinueve niños recogidos consumía el pegamento[84]. Esta percepción del niño callejero justificó el trato denigrante que se le dio. Como se puede ver en las siguientes imágenes, cuando los capturaban eran agredidos físicamente y literalmente eran fumigados por las autoridades, quienes sin ningún respeto atentaban claramente en contra de su dignidad.

La realidad ha empeorado en tiempos recientes, la investigación de Casamán señala que el 90% de los niños de la calle consumen Terokal, iniciándose en el vicio en promedio a los 6 años de vida y a la semana de vivir en la calle. El estrés de vivir en abandono, reflejado en la lucha cotidiana por conseguir qué comer y dónde dormir, son parte de los condicionantes que los acercan al peligroso pegamento (2005, p. 80). Este producto se consume por medio de su absorción por inhalación en bolsas de plástico, tras pocos minutos se produce una reacción similar a la del alcohol: euforia, arrojo, desvergüenza, etcétera. Los testimonios recopilados por Roggenbuck son reveladores de sus efectos:

> Cuando tú jalas, jalas y tú crees que eres Superman, corres, corres y crees que eres el ganador, el campeón. Ves visiones, crees que es Navidad y que Papa Noel

[82] Un caso más dramático de robo lo vivió el niño Óscar Pizarro (10), quien, desesperado por la agonía de su madre, víctima de la falta de medicinas para la tuberculosis y el cáncer, y abandonado por su padre, optó por rezarle a la Virgen del Carmen. Al no mejorar su progenitora, decidió robar la efigie de la virgen de la iglesia de Santa Eulalia. Con mucho trabajo subió al altar y bajó la virgen, la desvistió para que pueda entrar en las bolsas que llevaba; luego la logró subir a un micro para llevarla hasta su humilde casa. Días después se entregó a las autoridades y devolvió lo hurtado (*La República*, 30-6-1986, «Óscar, el niño que robó a la virgen»).

[83] Nombre comercial de un pegamento para zapatería.

[84] *Extra*, 7-6-1986, «40% de 'petisos' consumen terokal».

> viene, te sientes fuerte y sientes que te pegan y que tiran piedras contra ti y tú no sientes dolor […] Cuando yo jalo alucino cosas, veo al pato Donald de la televisión. Alucino que robo millones, trillones y que soy un buen piraña y que tengo mucho valor para robar (Roggenbuck, 1996, p. 98).

Los efectos a largo plazo incluyen daño cerebral con síntomas como mareos, pérdida de visión, de equilibrio y demencia (Casamán, 2005, p. 82). Los lustrabotas fueron uno de los grupos más vulnerables a este tipo de drogadicción, usualmente la puerta para otras formas de consumo, debido a que utilizaban el pegamento para su labor cotidiana en la cual incluían pequeñas reparaciones de los calzados. El bajo costo del producto y su libre distribución siguen siendo parte de las causas del problema[85].

El siguiente paso fue considerar a los niños que trabajaban como integrantes de las bandas de ladrones y asaltantes menores de edad que azotaban la capital, bautizados como «niños pirañas». Estas 'lacras', como los llamó Vignolo, se aprovechaban de las demoras en el tráfico y el caos para asaltar a los automovilistas. Su estrategia consistía en simular ser limpiadores de parabrisas, acercándose a los conductores, si estos se negaban, como era usual, le lanzaban piedras para obligarlo a salir del vehículo. En ese momento aparecía otro grupo armado con cuchillos y otros objetos, ellos eran los encargados de desvalijar al chofer y al auto, incluso como expertos desmanteladores. Además, actuaban impunemente a la luz del día, de acuerdo con el autor, escondidos con «pasamontañas y medias de nylon». La relación con los migrantes es clara: «la mayoría son provincianos, hijos de familias de escasos recursos económicos. Estos niños son traídos diariamente del interior del país por algunos familiares que al poco tiempo los abandonan y caen en manos de mafiosos o rufianes quienes los adiestran en el robo y asalto»[86]. Sin embargo, el trabajo de campo de Ruggenbuck mostró que los niños de la calle tenían una vida más sociable y compleja de lo que las notas periodísticas reconocen. Por ejemplo, iban al cine, a la playa y buscaban divertirse sanamente en medio de su complicada situación (Roggenbuck, 1996, p. 100).

A fines de la década de 1980 resultaba muy difícil distinguir entre un potencial delincuente infantil, un niño trabajador, un pordiosero o uno degradado por la drogadicción. *Extra*, fiel a su espíritu, lanzó la sorprendente cifra de 300 mil niños «de uno y otro sexo los que deambulan por la ciudad explotados por sus propios padres, quienes los obligan a vender golosinas, contar chistes en micros y estirar

[85] A principios de la década de 1990 se informa que los niños también inhalan la gasolina de los autos en los estacionamientos de la ciudad, *Expreso*, 15-3-1992, «Ochocientos niños abandonados viven en Cercado de Lima» y *Expreso*, 5-5-1992, «A la droga dile ¡tengo hambre!».

[86] *Extra*, 4-6-1986, «'Niños pirañas' atacan micros y automóviles».

la mano para pedir limosna». En la nota se afirma que, de acuerdo con autoridades del Inabif, el 80% eran retenidos por la policía para ser enviados a las instituciones respectivas, pero pronto eran recuperados por sus padres, quienes alegaban que se habían escapado de sus hogares, para nuevamente ser atrapados en las calles. El titular de la nota deliberadamente mezcla a todos como mendigos, a pesar de que seguramente una parte eran trabajadores en las calles: «300 mil niños mendigan en semana santa»[87]. Parte de la solución aplicada por las autoridades consistió en reprimir a los niños en y de la calle. Este tipo de medida en contra de los mendigos es muy antigua. Desde los tiempos coloniales se buscó erradicar de las calles a limosneros y otros personajes, siempre con escaso éxito. En el caso de la capital, parece que al empezar la década de 1970 se reavivó esta tendencia. En ese año el municipio inició una campaña de erradicación de mendigos: se consideró que deambulaban cerca de 3000 limosneros, de los cuales solo 200 fueron considerados 'reales'. La campaña incluía diapositivas para ser presentadas en los cines, con el lema: «Diga no al falso mendigo, campaña de erradicación de falsos mendigos del Concejo Provincial de Lima»[88].

Paradójicamente, en 1992, el operativo fue llamado Petiso 92, los infantes capturados fueron remitidos a los albergues respectivos. Solo en el año anterior habían ingresado casi tres mil niños en las instituciones, dos mil de ellos por causa de abandono[89]. Para *Expreso*, y de acuerdo con las autoridades, muchos de esos niños se apropiaban de los espacios públicos, combinaban «el asalto y arrebato con la venta de chocolates y la limpieza de autos al paso, todo es posible, con tal de conseguir unas monedas que les permitan comer y, algunas veces, comprar Terokal». Muchos de estos niños eran percibidos como delincuentes y detenidos, al margen de si habían cometido o no algún delito. Por ejemplo, un menor detenido, Daniel, un experto buscador de lugares para pernoctar y vendedor de varios productos en las calles, reconoció que «mi plata me la gastaba en el vicio y en comer mis empanadas o chocolates. Paro en Wilson a veces, para qué le voy a mentir, a veces hemos robado, pero en Miraflores solo trabajamos y dormimos, por eso quiero irme, me han agarrado por las puras»[90].

Paulatinamente comenzó nuevamente a distinguirse a los niños trabajadores de los llamados «pirañitas». En una serie de notas promovidas por Radda Barnen (Save the Children), Manuel Verau señala que «los niños terokaleros subsisten apropiándose de accesorios de autos o pidiendo limosna, comida o ropa.

[87] *Extra*, 23-3-1989.

[88] AHML, Actas del Concejo, 24-4-1970.

[89] *Expreso*, 15-3-1992, «Ochocientos niños abandonados viven en Cercado de Lima».

[90] *Expreso*, 15-3-1992, «Ochocientos niños abandonados viven en Cercado de Lima».

No trabajan, no venden caramelos en los micros, por ejemplo, porque el tiempo de sus cabezas está en la inhalación y no en otra práctica mínimamente estructurada»[91]. Reprimidos por las autoridades y expulsados de los espacios públicos, se refugiaban en algunos lugares de la ciudad. Uno de los sitios más recurridos era la plaza Grau, espacio que reunía a los niños adictos al Terokal, abastecidos por una misteriosa emolientera[92]. Además, pronto se comenzó a reconocer que entre los niños de la calle subsistían cientos de niños desplazados por la violencia, quienes rápidamente se incorporaban a la economía informal[93]. También se mencionaron como causas a la crisis de la década de 1980, el choque económico del año 1990 y las altas tasas de natalidad, especialmente rurales[94]. En un giro solo en apariencia paradójico, los «pirañitas» se convirtieron en un drama comercializable por la televisión. Luis Llosa, conocido cineasta, dirigió una miniserie de diez capítulos con la actuación de reconocidos actores del momento. La propaganda señalaba que la infancia abandonada es un tema que

> agobia al mundo, la conducta antisocial de niños y adolescentes puede explicarse por las dificultades del país para ofrecer a sus pobladores empleos adecuadamente remunerados, capaces de satisfacer las necesidades esenciales de los menores de una familia. La prolongada crisis económica en el Perú también ha impedido que el Estado pueda prever servicios adecuados a niños y adolescentes[95].

La nota no responsabiliza moralmente a los infantes y adolescentes, sus conductas eran el resultado del abandono o de la huida ante situaciones de maltrato y violencia, o la orfandad. Los medios de comunicación separan a los «pirañitas» del resto de los trabajadores, retratándolos en su deambular por las calles de Lima cuando inhalaban el peligroso pegamento[96].

Por otro lado, desde fines del siglo XX se retomó con mayor intensidad el problema de los niños que trabajan en la ciudad, quienes —a pesar de que los seguían llamando «pirañitas»—, intentaban mantenerse alejados de la delincuencia. Tal fue el caso de 'Miguel' (11), buceador en la basura y quien confesó haber robado alguna vez, pero que luego de una dura golpiza policial decidió dedicarse

[91] *Expreso*, 5-5-1992, «A la droga dile ¡tengo hambre!».

[92] Elsa Úrsula, *Expreso*, 5-5-1992, «La vida viene en bolsita plástica y solo cuesta medio sol» y «El amigo Almirante y el pegamento de la risa y el olvido».

[93] *La República*, 6-4-1992, «325 mil niños librados a su suerte».

[94] *La República*, 6-4-1992, «325 mil niños librados a su suerte» y Rosa Vásquez Bertini, 19-6-1995, «'Pirañitas' esperanzados».

[95] *La República*, 23-1-1995, «Desde hoy 'pirañitas' en tv».

[96] *Expreso*, 15-8-1998, «Sobreviven en una selva de cemento» y 28-9-2001, «Niños de la calle».

a reciclar papel[97]. Una nota del diario *La República*, publicada con motivo del día del niño, muestra el caso de cuatro infantes trabajadores, aparentemente alejados del mundo de las drogas, Hermes (12), Grimaldo (7), Maribel (11) y Alex, quienes se dedicaban, respectivamente, a cargar bultos, vender pescado frito, vender frutas y cambiar llantas[98]. La Municipalidad de Lima, dirigida por Alberto Andrade, ofreció emplear como jardineros a 600 niños y jóvenes que vivían o trabajaban en las calles, con el objeto, de acuerdo con el alcalde, de tener «la oportunidad de desarrollar sus capacidades y habilidades y destrezas que les permitan romper el círculo vicioso de la pobreza»[99].

Esta nueva transformación de «piraña» a «trabajador» se produjo por diversas causas. Una de ellas es el reconocimiento de algunas actividades como decentes y funcionales respecto a la demanda urbana, por ejemplo, la limpieza de calzado, entre otras[100]. Otro factor fundamental fue la firma de los convenios internacionales de protección a la infancia. El 4 de octubre de 1990 entró en vigencia la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Perú en ese mismo año; en 1993, en consonancia con estos principios como se mencionó anteriormente, se promulgó un nuevo código y en 1994 se estableció la Comisión Nacional por los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, presidida por el Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano. Entre 1992 y 1995 se desarrolló el Plan de Acción por la Infancia y la Adolescencia, seguido de una segunda fase 1996-2000 (Unicef, 2004, p. 22). La mayor parte de estas acciones se realizaron entre los años 1993-1995, especialmente generadas por la necesidad del presidente Fujimori de alcanzar su primera reelección[101], pero que, al margen de ese objetivo político, favorecieron un cambio en el discurso acerca del trabajo de los niños en la calle. Este contexto permitió la agencia de instituciones como Save the Children, la cual convocó a mediados de la década de 1990[102] un concurso para componer canciones dedicadas a la infancia peruana, en diversos géneros y ritmos. Como parte de la

---

[97] Heidi Grossman, *Liberación*, 18-1-2001, «Niños hurgan los basurales para poder ganarse un plato de comida». Un problema que trasciende los límites de este trabajo es el caso de los «pandilleros» que aún afecta diversos lugares de la ciudad. Véanse, por ejemplo, *Expreso*, 5-2-2001, «Pandilleros apuñalan a joven de 19 años» y 24-9-2001, «De los verduguillos y machetes al deporte y la carpintería».

[98] *La República*, 20-7-1998, «4 niños con una historia común: el trabajo».

[99] *Expreso*, 27-5-1998, «Darán trabajo a niños que viven abandonados en la ciudad».

[100] Véase la nota a los niños trabajadores en *Expreso*, 25-12-2001, «El otro rostro de la navidad». El reportero intenta mostrar su alegría en medio de sus condiciones de vida.

[101] Carlos Parodi (2004) considera que en esos años el aumento del gasto público no tuvo como primer objetivo la recuperación del país, sino la reelección. Por esa razón una vez producida esta, nuevamente disminuyó en los siguientes años.

[102] Fecha probable, no he logrado datar con exactitud el año, ni siquiera figura en la producción musical editada bajo el título «A una sola voz. Canto por los niños».

edición del casete con las canciones seleccionadas se presentó la composición de Juan Manuel González Mascías ('Miki González'), titulada «Chicles, cigarrillos, caramelos»[103]. La letra y el videoclip[104], que fueron muy populares, no muestran a un niño agobiado por la pobreza y con el destino fatal de la delincuencia por delante. Por el contrario, presenta a un niño que en medio de su situación de pobreza intenta progresar y ser feliz:

> Chicles, cigarrillos, caramelos
> tofes, menta, fósforos
> Chicles, cigarrillos, caramelos
> compre caserito por favor.
> De noche voy a la escuela
> la primaria voy a terminar
> de día hago mi tarea
> de tarde ayudo a mi mama.
> Salgo a trabajar
> por toda la ciudad,
> vendo en la puerta del estadio,
> luego voy a un cine del barrio.

Por otro lado, la reivindicación de la labor del lustrabotas comenzó en el espacio público poco tiempo después de la muerte de 'Petiso'. En el año 1984 el municipio limeño, comandado por Alfonso Barrantes, encargó al escultor Humberto Hoyos un monumento dedicado a los lustrabotas y a 'Petiso', el cual fue inaugurado en la plazuela de Santo Domingo. La figura del niño fallecido ha sido incorporada como el representante del gremio a nivel nacional. En el año 2012 los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Limpieza de Calzados de Huancayo, con la participación de delegaciones de otras ciudades, develaron una escultura de 'Petiso' como homenaje a su oficio[105].

Otro factor que contribuyó a su reposicionamiento es el desarrollo de sus gremios y la defensa de sus plataformas de lucha a nivel nacional. Se creó la Federación Nacional de Trabajadores Lustradores de Calzado y Afines del Perú (Fentraluc), reconocida en 1989 y que agrupa a cerca de treinta asociaciones. En Lima, en el año 2014 el Sindicato de Trabajadores de Mantenimiento de Calzado de Lima Metropolitana contaba con 77 afiliados, el Sindicato Único de

[103] Tema incluido posteriormente en su disco «A todo rock».

[104] Micky Gonzales, «Chicle, cigarrillos caramelos», 10-9-2006, https://www.youtube.com/watch?v=oNxfVz985So, fecha de consulta: 2/3/2017.

[105] *Correo*, 22-7-2012, «Develan imagen de 'Petiso', representante de los lustrabotas».

Trabajadores Lustradores de Calzado de Lima con 57 asociados y el Sindicato Único de Trabajadores del Mantenimiento de Calzados y Artículos de Cuero con 70 socios, todos ellos repartidos en las calles de Lima[106].

En 1990, por medio de la ley 25249 se creó la Caja de Protección y Asistencia de los Trabajadores Lustradores de Calzado del Perú con el objeto de ofrecer albergue, comedor popular, créditos, vivienda, educación, servicios sociales y centros de esparcimiento a los lustrabotas. Para tal efecto, se creó un impuesto de 1% a los productores de betún, escobillas y otros artículos empleados en esa labor. En la administración de la Caja participaban miembros del gobierno y de la Fentraluc. En 1998 el impuesto fue derogado, lo que redujo el financiamiento a la Caja, la cual pasó a ser cubierta por transferencia directa del Ministerio de Economía. Los lustrabotas exigieron aumento de las asignaciones debido al importante número de niños y ancianos entre sus integrantes[107]. Además, desde fines del siglo XX los lustrabotas fueron incorporados como parte del ordenamiento urbano, para lo que fueron capacitados como inspectores municipales[108]. Incluso en el 2001 fueron convertidos en informantes de la policía en su lucha contra la delincuencia y recibieron capacitación por parte del municipio en el marco del Primer Congreso Metropolitano de Lustradores de Calzado de Lima. Como parte de su formalización fueron empadronados y se tenía previsto pintar sus cajas, repartirles gorras y chalecos[109].

Pero el golpe definitivo en favor de su imagen fue la confesión del entonces candidato Alejandro Toledo de su pasado como lustrabotas en el puerto de Chimbote. En medio de la campaña del año 2001, tuvo el gesto de pedirle los implementos a un pequeño lustrador de calzado y él mismo empezó a limpiar los zapatos del lustrabotas[110]. A mediados de ese año el Congreso de la República promulgó la ley 27475 que regulaba la actividad de los lustrabotas, definiéndolos como «trabajadores que prestan servicios de mantenimiento de calzado a la comunidad en la vía pública en puestos debidamente autorizados o de manera ambulatoria»[111]. Una vez que Toledo fue elegido, cambió la denominación de «lustrabotas» a «lustradores de calzado», y prometió el acceso de los trabajadores

[106] Municipalidad de Lima, Padrón de comerciantes, http://www.munlima.gob.pe/padrondecomerciantes, fecha de consulta: 15/2/2017.

[107] *La República*, 20-12-1998, «Lustrabotas exigen aumento de su asignación especial».

[108] *La República*, 18-4-1998, «180 lustradores juramentan como inspectores municipales».

[109] *Expreso*, 14-12-2001, «Lustradores de calzado lucharán contra la delincuencia».

[110] *La República*, 15-1-2001, «Alejandro Toledo limpió zapatos de un lustrabotas».

[111] Ley 27475, 5-6-2001, https://docs.peru.justia.com/federales/leyes/27475-jun-5-2001.pdf, fecha de consulta: 2/2/2018.

al programa de seguro de salud[112]. Esta declaración generó más de una ilusión en los trabajadores[113], un niño dedicado al oficio, llamado Wilber (13), declaró el mismo día de la toma de mando: «yo sí le creo a Toledo porque él sabe lo que es ser pobre. Él ha trabajado en el mismo oficio que yo y por eso creo que no se va a olvidar de nosotros»[114]. Sin embargo, la Fentraluc actualmente continúa su lucha para incorporar a sus afiliados a la seguridad social y las pensiones[115].

[112] *Expreso*, 16-12-2001, «Lustradores de calzado accederán a seguro de salud».

[113] *La República*, 25-12-2001, «¿Papa Noel lustrabotas?».

[114] *La República*, 28-7-2001, «Presidente Toledo, no nos defraude».

[115] *Terra.com.pe*, «Lustrabotas presentan proyecto de ley al Congreso», 10-7-2015, https://noticias.terra.com.pe, fecha de consulta: 2/3/2017.

Capítulo 10
El difícil arte de amanecer con vida

Durante las décadas de 1980 y 1990, desde el caos, la pobreza, la violencia y marginalidad, emergió un conjunto de peruanos que se las ingenió para ganarse la vida con diversas formas de subsistencia. Algunas de ellas derivaban de otras más antiguas, adaptadas a los cambios de esas décadas, otras aparecieron poco antes y se consolidaron en ese tiempo, mientras que otras más eran absolutamente novedosas para ganarse el pan día tras día. Lo común a todas estas prácticas es que permitieron la subsistencia de muchas personas y familias enteras que durante el desastre de esas décadas se vieron obligadas a buscar un medio de vida.

Chamba es chamba: los «recurseros»[1]

En la década de 1980 surgió una variedad de «cachueleo» que tiene como característica hacer uso del mayor ingenio posible para obtener el sustento en las calles, beneficiándose de la falta de regulación y el escaso control en el uso del espacio público[2]. Estas actividades fueron calificadas de «recurseos», formas de ganarse la vida por medio de diferentes maneras, unas más arriesgadas que otras, pero todas dejaron una huella en el escenario urbano[3]. Por ejemplo, en la Plaza San Martín se podía contemplar a los faquires limeños, un conjunto de personajes que se encargaban de ofrecer al público una serie de pruebas que retaban su capacidad de supervivencia. El más antiguo de ellos, Lázaro Mendizábal Cruz, prometía que

[1] Término usado en México y en el Perú para referirse al trabajo.

[2] Sin duda un pionero en este camino fue el mimo Jorge Acuña, quien desde mediados de la década de 1960 utilizó el Parque Universitario para sus espectáculos, «Un mimo anda suelto», *Caretas,* s/n, 27-5-1966.

[3] Deriva de la idea de buscar cualquier recurso para obtener el sustento diario.

si alguien pagaba dos millones de soles era capaz de incinerarse como una antorcha humana por ocho minutos. Mientras conseguía el auspicio, se ganaba la vida como faquir y tragafuegos.

Como comentaba la leyenda de la imagen publicada en un diario limeño, «los arriesgados tragafuegos llevando su espectáculo impresionante con la única finalidad, paradójica, de llevarse un pan al estómago con la voluntad que le dispense el respetable espectador»[4]. Varios de los artistas callejeros habían abandonado la vida circense por la escasa paga[5], utilizaban la plaza para sus rutinas, en los cuales Mendizábal oficiaba de presentador. Todos se conocían entre sí, aunque no tenían ninguna asociación, pero consideraban a Mendizábal su dirigente natural.

Otro de los personajes era Francisco Rivera y sus hijos, él cargaba a dos de ellos, mientras hacía equilibrio encima de unos endebles tarros de pintura. La policía frecuentemente perseguía a los artistas callejeros, a pesar de que ellos consideraban que no hacían daño a nadie. Rivera señaló que: «se gana para vivir, pero nos deben dejar trabajar. No se puede estar corriendo siempre de la policía. Nosotros presentamos un espectáculo que gusta a la gente. Nosotros los entretenemos un rato y nuestra ganancia está en la bondad de nuestro público»[6]. Juan Salvatierra era el artista más joven, natural de Huancayo y con solo 14 años arriesgaba su vida introduciéndose largos clavos por las fosas nasales y acostándose entre vidrios rotos. En todos los casos las rutinas incluían dosis de humor, por ejemplo, Juan decía: «lo que van a ver nadie lo ha hecho nunca, solo yo puedo hacerlo. Por eso cuando yo muera y vaya al infierno el diablo se va a quedar cojudo»[7]. Es posible que estos actos constituyan los inicios de lo que posteriormente se conocerá como los cómicos ambulantes. Vich menciona a Lázaro Mendizábal como uno de los personajes claves de la comicidad callejera, él introdujo «dos elementos fundamentales de la identidad del humor callejero tal como lo conocemos en la actualidad: el lenguaje popular y el comentario cotidiano sobre la realidad nacional. Con él, por primera vez, aparecieron las lisuras en la calle y, con ellas, un sinnúmero de diversas y corrosivas historias sobre la discriminación, la violencia y la desigualdad social en el Perú contemporáneo» (Vich, 2001, p. 35).

4 *Extra*, 27-10-1989, «Tragafuego por hambre».

5 Hasta el día de hoy se pueden encontrar circos de barrio en las zonas periféricas de la ciudad y en el interior del país. Ofrecen números de trapecistas, animales amaestrados y los infaltables payasos. Véase *El Comercio*, 26-7-1992, «Peruvian circus».

6 *La República*, 16-12-1983, «Por dios que este no muere de hambre. ¡Pa' su diablo!».

7 *La República*, 16-12-1983, «Por dios que este no muere de hambre. ¡Pa' su diablo!». Como Juan mostró al reportero, su acto le dejaba heridas todos los días.

En 1983 los artistas tenían la esperanza de que el triunfo de Alfonso Barrantes en las elecciones para la alcaldía les facilite el uso de la plaza. Mendizábal opinaba que tenían confianza en Barrantes, «como hombre del pueblo, sabrá entender nuestra situación. A nadie hacemos daño y ni siquiera ensuciamos las plazas. Hay que vivir de algo y para nosotros las plazas públicas son nuestras fuentes de trabajo»[8]. Estos artistas circenses compartían el espacio con quienes se dedicaban al mimo y otros personajes más, entre ellos, predicadores evangélicos y vendedores de todo tipo de productos, muchos de ellos considerados charlatanes. Todos trataban de demostrar que su forma de ganarse la vida era tan válida y decente, como cualquier otra. En esa tarea destacó Enrique Vitaliano, quien se encargaba de vender una serie de productos de limpieza para metales. Su facilidad de palabra le permitía convencer con destreza al público, labor que no consideraba fácil: «yo no tengo complejos cuando me dicen charlatán porque cualquiera no puede serlo. ¿Sí o no? Haber pongan a cualquiera frente al público, se chupa ahí mismo, y eso se vence con experiencia. *Esta para mí es una profesión, como cualquiera. ¿Sí o no?*»[9].

El redactor de la nota, Dennis Álvaro, cierra su texto con una noción que hoy reconoceríamos como «recurseo»: «oficio o profesión, como Vitaliano, hay cientos de jóvenes y adultos que cifran sus esperanzas en su habilidad de convencer a los demás. Es una de las tantas formas de ganarse la vida en este país, que cada día empuja a miles de personas a buscarse un sustento por sus propios medios»[10].

En tiempos tan difíciles, convencer a los demás para ganarse algo de dinero se convirtió en un auténtico reto. Algunos tenían que hacer uso de sus dotes de profeta, como los predicadores evangélicos, otros intentaban seducir al auditorio por medio de ilusiones, trucos de magia o adivinaciones. Un caso interesante de estos artistas de la palabra son los vendedores de diversos recursos para lograr conquistar el amor de una mujer. A principios de la década de 1990 en la avenida Emancipación se podía encontrar a Tristán Casas, quien vendía pequeños libros con sugerentes títulos como *Obtenga éxito con las chicas. Las frases del conquistador, piropos, pensamientos y versitos amorosos, El arte de conquistar a las mujeres. Versitos amorosos*, *Versos y poemas de amor*, entre otros. Cerca del Palacio de Justicia se encontraba a Ascencio García, quien con su máquina de escribir se dedicaba por las mañanas a redactar escritos jurídicos

8 *La República*, 16-12-1983, «Por dios que este no muere de hambre. ¡Pa' su diablo!».

9 *La República*, 16-12-1983, «Por dios que este no muere de hambre. ¡Pa' su diablo!». El énfasis es mío.

10 *La República*, 16-12-1983, «Por dios que este no muere de hambre. ¡Pa' su diablo!».

y diversas solicitudes, y por las tardes y noches se ganaba la vida redactando cartas de amor, de rechazo o de desamor. Según él, su estilo era más bien directo, por ejemplo, en una carta encargada por un joven escribió: «te convengo Julia, tengo negocio propio y soy cariñoso». Su clientela era especial, quienes más lo empleaban eran soldados que iban vestidos de civil, «con todas sus cartas para leer, y yo tengo que contestar». El ejemplo más completo lo ofrece el bachiller en derecho Huber Sánchez, huancaíno de origen, quien a principios de la década de 1990 era conocido como 'el sabelotodo'. En su quiosco ubicado en la céntrica avenida Wilson ofrecía, entre otros servicios, asesoría jurídica, redacción de trabajos universitarios y traducciones del inglés al castellano[11].

Lamentablemente el trabajo en las calles traía riesgos. No solo se debía sortear constantemente la represión municipal y policial, a veces la dureza de trabajar en las calles les pasaba la factura. Todavía hoy no es inusual observar a trabajadores rendidos por la jornada y que dormitan junto a sus mercaderías. Largas horas de labor, más la exposición a la contaminación, ruidos y otros factores, doblegaba fácilmente a más de un vendedor. Este descanso los hacía más vulnerables a los peligros, especialmente los robos.

En otros casos los riesgos eran mayores. Por ejemplo, Celso Augusto Prado Inga, un vendedor de sogas para saltar, tuvo que cambiar de negocio al ser atropellado por un automóvil, y reapareció como vendedor de folletos de preguntas capciosas para divertir a los oyentes y aumentar la simpatía de quien haga uso de ellas[12]. Como se puede ver en la siguiente fotografía, el lema de la nota refleja bastante bien la situación de muchos de estos trabajadores: «La calle es mi centro de labores. Chamba es… chamba». En otros casos la suerte era aún menos favorable. Gregorio Paredes, cargador de verduras por cerca de 25 años en La Parada, fue atropellado trágicamente por un camión. Como no tenía casa, dormía debajo de ese vehículo, una mañana trágica el chofer inadvertidamente lo arrolló. Al no tener familiares ni dinero, sus colegas de oficio y los lustrabotas pagaron los gastos del sepelio y lo velaron en su mismo lugar de trabajo: la calle.

Los artistas callejeros tampoco salían bien librados de su coqueteo con la muerte. Además de los riesgos que corrían por trabajar en la calle y la represión de las autoridades, el esfuerzo al que sometían a sus cuerpos podía ser fatal. Así fue en el caso de Jorge Vásquez Huamaní (34), apodado 'Blankun', un faquir que se ganaba la vida «masticando tubos de fluorescentes y atravesándose el cuerpo con agujas». Cada cierto tiempo recurría al Hospital Dos de Mayo para hacerse un lavado gástrico y eliminar los restos que pudieran dañar sus intestinos. En julio de

[11] *Expreso*, 9-8-1992.

[12] *La República*, 18-10-1998.

1989 los médicos del hospital se encontraban en huelga, motivo por el cual no pudo recibir atención, y permaneció internado por varias semanas. De acuerdo con la nota, «una semana después de su ingreso al hospital, los residuos de vidrios como [sic] kerosene le empezaron a carcomer las paredes estomacales hasta producirle una hemorragia interna que por falta de coagulantes no pudo ser contenida y le produjo la muerte»[13]. Su historia clínica reveló que, a lo largo de doce años, cada dos meses acudía al nosocomio para realizarse lavados gástricos y transfusiones de sangre. Rosa Calderón, su cónyuge, señaló que Vásquez se consideraba «el verdadero y único faquir del Perú porque brindaba un espectáculo honesto y sin trucos». Su última voluntad consistía en que sus restos mortales fueran quemados, «como la costumbre de los hindúes». Sin embargo, la pobreza no solo le impidió cumplir sus deseos en vida, su esposa afirmó que «la situación no lo permite y se tendrá que contentar con ser sepultado»[14].

«Nadie sabe muy bien cómo fueron a dar con su cuerpo y su espuma plástica por allí»[15]. Así comienza una nota que se interesó por un conjunto de individuos que se popularizaron en Lima durante la década de 1980: las personas que se disfrazaban de personajes de fantasía con el objeto de ofrecerse para retratos. En varios puntos de la ciudad, especialmente en el Jirón de la Unión, decenas de hombres y mujeres caminaban de arriba abajo vestidos con disfraces de personajes de Walt Disney, cada uno con su fotógrafo y cautivaban a los niños para que convenzan a sus padres de retratarse con ellos, luego irían a su domicilio para entregar la ansiada fotografía y cobrar el dinero respectivo. De acuerdo con la nota, los misteriosos muñecos eran producto de pequeñas empresas que se dedicaban a este negocio, donde empleaban a sus familiares; en otros casos, alquilaban a sus «sobrinos con muñeco encima, por el cual los fotógrafos que los emplean tienen que pagar una cuota»; a veces los retratistas alquilaban directamente el traje y contrataban a alguien más para que lo porte por las calles[16].

Heredera de una práctica un poco más antigua, y aún vigente, la de disfrazarse de Papá Noel en tiempos de las calurosas fiestas navideñas, esta forma de ganarse la vida era uno de los diferentes cachuelos que se podían ejercer, especialmente durante el verano, por más asfixiante que pueda parecer. Por lo menos desde fines de la década de 1960 se registran fotógrafos acompañados con muñecos inflables que alquilaban para el respectivo retrato playero y personas disfrazadas del venerable anciano. Por otro lado, en los años sesenta la multitud de personas que llenaba

[13] *Extra*, 20-7-1989, «Tragavidrio muere con estómago cortado».

[14] *Extra*, 20-7-1989, «Tragavidrio muere con estómago cortado».

[15] Enrique Sánchez Hernani, *La República*, 18-7-1986, «Los muñecos de la ciudad».

[16] Enrique Sánchez Hernani, *La República*, 18-7-1986, «Los muñecos de la ciudad».

las playas de la capital permitía a muchos individuos ganarse la vida gracias a la demanda de diversos productos, desde helados, golosinas, comida, bebidas, carpas, sillas, sombrillas, etcétera, hasta fotografías con muñecos[17].





Figura 12. Retrato de niño acompañado de Batman en la playa de agua dulce (1968) y de Papá Noel en la puerta de una tienda (1971). Archivo personal.

Durante la década de 1970 el GRFA desarrolló una campaña antiimperialista y nacionalista que buscó desterrar lo que consideraban el gusto burgués y extranjero por Papá Noel y el árbol navideño. En 1972 por orden del gobierno se desalojó al célebre anciano de las propagandas de la temporada de fiestas, mientras que, el supermercado Tía difundió la imagen de un nuevo personaje, 'Taita Noel'[18], creado por el gerente de la sucursal de Miraflores: «vestido con chullo, ojotas y poncho, la versión peruana de Papá Noel está atrayendo las miradas de las legiones infantiles que acuden a diario a Tía […] García Naranjo consiguió 'peruanizar' a Papá Noel, hacerlo un personaje mucho más estrechamente ligado a nosotros, más simpático, con mucho más atractivo»[19].

---

[17] Estas prácticas continúan hasta el presente. Muchos jóvenes venden diversos productos en la playa, algunos lo hacen con el objeto de financiarse sus propias diversiones veraniegas (*El Mundo*, 12-1-1995, «Sánguches playeros»).

[18] «Taita» es una palabra de origen quechua, traducida como «padre».

[19] *Arkivperu.com*, «Papá Noel es desterrado del Perú (1972)/Actualizado», http://www.arkivperu.com/papa-noel-desterrado-peru-1972/, fecha de consulta: 12/2/2017.



Figura 13. Manolo García personificando a 'Taita Noel'. Fuente: http://www.arkivperu.com/papa-noel-desterrado-peru-1972/. Fecha de consulta: 12/2/2017.

En las fotografías anteriores se puede observar a Manolo García representando a 'Taita Noel', cuya imagen promocionó a la empresa en el Jirón de la Unión. Aunque no existe algún estudio al respecto, las razones por las que el personaje no cautivó más allá de esos años no son imposibles de determinar. Su presencia estuvo asociada con las reformas antioligárquicas del régimen, especialmente la reforma agraria; además, la indumentaria del personaje, a pesar de su espesa barba blanca, delataba su origen campesino y serrano, aspectos que en la década de 1970 estaban en el ojo de la tormenta por causa del racismo con el cual se discriminaba a los migrantes. Quizá este hecho pueda explicar la limitada difusión de la representación de 'Taita Noel' en las calles, ocupación que reaparecería a partir de 1980 con la salida de los militares del poder, pero en la versión del norte.

Aparentemente la difusión de los muñecos y sus fotógrafos tuvo como epicentro el Jirón de la Unión. El Sr. Abusada, un comerciante con muchos años a cuestas y presidente de la asociación de comerciantes del lugar, recordó que fue en 1980 cuando una galería de esa calle contrató por primera vez a estos personajes con el objeto de atraer clientes a sus negocios[20]. En 1995 José Rodríguez, un veterano Papá Noel de las calles, afirmaba que su representación comenzó a mitad de la década de 1980. Su relato refleja con claridad las características de este negocio:

[20] *El Mundo*, 15-12-1995, «El mes de los Papa Noel».

> Recuerdo que un día me quedé sin trabajo y comencé a caminar por el Jirón de la Unión. Era diciembre, se acercaba la navidad y me desesperaba saber que ese año en casa no habría ni para un panetón. Estaba en eso cuando me topé con un hombre vestido de Papa Noel. Lo miré, vi que lo acompañaba un fotógrafo. Lo observé y me di cuenta que tenía mi talla, mi peso ¿por qué no hacer lo mismo?, me dije. Total, no tenía nada que perder. Busqué ayuda en unos amigos y familiares, convencí a un vecino sin trabajo y con cámara, y nos pusimos a trabajar. Desde entonces, todos los meses de diciembre, hacemos lo mismo. Y para qué, no me quejo ¿Si hubo panetón ese año? A Dios gracias, felizmente sí[21].

En los siguientes años las representaciones de personajes de series de televisión y de películas se hicieron cada vez más frecuentes. Actualmente no solo se les encuentra esperando atraer a los niños para los retratos, también promocionan todo tipo de productos, venden golosinas, apoyan campañas de candidatos a cargos públicos o simplemente buscan a alguien interesado en una foto. Así, para tener más opciones, un par de hermanos vestían los trajes de El Zorro que ofertaban por varias calles de Lima; mientras que los pintores Martín Flores (37) y Edgar Malca (32) se encargaban de la fachada de un centro comercial de Lima vestidos de Flash y Batman, respectivamente. Por último, el caso de Avelino Chávez, conocido como 'el Superman cholo', quien viste el traje del famoso personaje con el fin de ganarse algunos ingresos tomándose fotos[22].

En las calles de Lima durante las décadas de 1980 y 1990 se podía encontrar todo tipo de personajes, que diluían las diferencias de clase: «en las calles de Lima en cualquier momento, ahora mismo, puede Ud. cruzarse con mineros pidiendo limosna, locos desnudos y como estallido surrealista, con el ratón Mickey y su pareja Minnie»[23]. Además, la manera en que se ofertaban los productos y servicios no permitía distinguir con claridad a vendedores de mendigos. En las ciudades desde siglos atrás era usual observar a indigentes que solicitaban caridad y a personas con diversas limitaciones que ofrecían productos o tocaban instrumentos como una manera de ganarse la vida. Esas prácticas continuaron y se ampliaron en Lima durante las décadas de 1970, 1980 y 1990. Sin embargo, lo que comenzó a desarrollarse fue una forma de vender que apelaba más a la caridad que a la noción de oferta-demanda. De esta manera tendía a desaparecer en las calles la diferencia entre un mendigo y un vendedor ambulante. Por ejemplo, el caso de un anciano puneño y su nieto, quienes llegaron a Lima para ofrecer sus artesanías.

---

[21] *El Mundo*, 15-12-1995, «El mes de los Papa Noel».

[22] *Correo*, «Fox News le dedica fotoreportaje al Superman peruano», http://diariocorreo.pe/miscelanea/fox-news-le-dedica-fotoreportaje-al-superman-247835/, fecha de consulta: 13/2/2017.

[23] Enrique Sánchez Hernani, *La República*, 18-7-1986, «Los muñecos de la ciudad».

Al no vender como lo esperaban, un día antes de emprender el regreso a su tierra, «quizá desesperado por la mercadería que se le quedaba, exclamó, '¡Cómpreme señor!' a cuanta persona pasaba por su lado»[24].

Esas confusiones también se pueden observar en otras actividades. Desde la década de 1980 y 1990 se puede encontrar con facilidad a pintores y dibujantes que trabajan en las calles y plazas de la ciudad, labor considerada decente y que es ejercida por personas con formación académica que supuestamente las debería alejar de la miseria. Sin embargo, un caso que borra las diferencias entre mendigo y artista fue el del egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes, Manuel Rolando Linares, apodado 'el Dalí peruano'. Al no poder pagar el alquiler de un cuarto en un callejón, Linares optó por vivir en el Parque Universitario. Fue desalojado de ese lugar por la policía y pasó a vivir en las inmediaciones del parque del Trabajo, en el límite de los distritos del Rímac y San Martín de Porres. En ese lugar instaló «su mugroso taller, que es a su vez su vivienda y monumento al desprecio por la vida»[25]. Se ganaba la vida pintando retratos y realizando pequeñas esculturas por encargo. Su apariencia personal fue descrita como «un asqueroso y mugriento vagabundo, un banco de microbios, criador de moscas y cucarachas, un muerto de hambre». Además, posiblemente estaba enfermo de tuberculosis. El periodista que lo entrevistó no podía tolerar que un egresado de la escuela de arte viva de esa manera y le preguntó a boca de jarro: «¿No te da vergüenza vivir así, entre la suciedad?». La respuesta de Linares fue igual de tajante: «¿Por qué? Vergüenza deben tener los que me negaron trabajo y me botaron del Parque Universitario». Sin embargo, agregó: «la vida de este endemoniado artista aún puede corregirse. Falta la mano piadosa que lo levante y lo traslade a un centro médico. Una vez curado podrá instalar su taller en algún rinconcito de Lima, pero no en la calle», afirmaba que Linares tenía como deseo «morir de frío, a la medianoche en un día de luna llena»[26]. Una situación similar de confusión se muestra en la película dirigida por Francisco Lombardi, *Maruja en el infierno*, estrenada en 1983 y basada en una novela de Enrique Congrains, *No una sino muchas muertes* (1957). Es una historia que mezcla la realidad con lo onírico y muestra la débil separación entre los trabajadores y los enajenados mentales, como señala Moisés Contreras,

> en Maruja en el infierno la representación de la sociedad es paradójica. Pues, antes de llevar al loco hacia la «fábrica», observamos a un grupo de obreros sindicalistas reunidos en un bar. Los obreros están aparentemente en huelga, quizá han sido despedidos como el padre del otro muchacho del grupo, un obrero comunista.

[24] *Correo*, 9-2-1983, «¡Cómpreme señor!».

[25] *Correo*, 5-9-1983, «El Dalí peruano… quiere morir de frío».

[26] *Correo*, 5-9-1983, «El Dalí peruano… quiere morir de frío».

> De esta forma, los «sanos» de la película no trabajan, sino están en huelga, o delinquen, o viven del trabajo de los locos. Es como si el mundo estuviese al revés, en donde los locos trabajan y los «sanos» viven al margen de ello, están ahí pero son casi elementos accesorios del universo de los locos, los cuales están por todas partes, son los guardianes de paso (los locos del vagón) de la ciudad de los «sanos» hacía el mundo de los locos (Contreras, 2013, p. 61).

En la década de 1980 no se distinguía fácilmente entre un mendigo, un enajenado mental o un vendedor, en las calles sus discursos y formas de vidas eran similares. A principios de la década, de acuerdo con sus testimonios, los mendigos de iglesia no lograban reunir la cantidad de dinero suficiente para alimentarse. Un indigente llamado Salomón pensaba que esa situación era especialmente extraña, de acuerdo con las características de los creyentes:

> Nosotros los mendigos deberíamos ganar bien. Deja que te explique amigo periodista. Mira hay tanto y tanto pecador que viene a las iglesias. Y los he visto entrar tristes y salir contentos. Los curas seguramente los perdonan a nombre de Dios, pero sería bueno que aconsejaran a los pecadores que como indulgencia den por obligación una limosna por cada pecado que cometen… así no nos moriríamos de hambre[27].

Por estas razones y otras más, como el aumento de las personas dedicadas a la mendicidad, los lugares considerados tradicionales no bastaban para pedir limosna, motivo por el cual los indigentes se difundieron en otros espacios de la ciudad. Una publicación del año 1983 denunció la llegada a la capital de mujeres cajamarquinas, «especialmente para mendigar y deben abonar una especie de cupo a una mujer que las aloja». Las señoras que pedían caridad vestían sus ropas típicas y cargaban a niños, según el reportero, propios o prestados. Una de ellas negó ser víctima de la explotación, pero el reportero insistió en que existía una misteriosa mujer que las utilizaba[28]. Aparentemente en los años posteriores los lugares más rentables fueron acaparados por una organización que cobraba cupo a los mendigos para permitirles pedir caridad en calles, iglesias y plazas[29].

Además, una nueva manera de pedir caridad se sumó a las conocidas: subir a las unidades de transporte para pedir limosna o vender algo, utilizaban en ambos casos las mismas estrategias discursivas. La discusión pública giró en torno al uso en este trabajo de niños por parte de algunos inescrupulosos, quienes los prepararían en la oratoria para convencer a los oyentes, mientras les exigían parte de lo recaudado

---

[27] *Correo*, 1-3-1983, «A mendigos también afecta la actual crisis económica».

[28] *Correo*, 23-3-1983, «Limosneras víctimas de la explotación».

[29] *Extra*, 22-3-1989, «Mafia cobra cupo a mendigos».

en el día[30]. Por ejemplo, aunque es más tardío, se pueden citar fragmentos de los discursos de vendedores de caramelos en los microbuses, como

> [Y]o tengo una mujer que está bien delicada de salud/ y tengo dos bebés a quien mantener y tengo poco tiempo que he salido del penal/ haber estado marginados por la sociedad/ no hay trabajo/ tengo que buscármelas como sea para poder sustentar a mi familia/ darles qué comer así como cada uno en sus hogares.
>
> yo soy una persona con estudios superiores que también tenía un trabajo estable al igual que todos ustedes amigos/ a no ser por un accidente del cual ninguno de ustedes está libre/ […] amigo/ camino al trabajo yo fui atropellado por un auto/ en este accidente lamentablemente perdí dos dedos de mi mano derecha/ como pueden ver amigos/ un dedo me fue amputado y el otro dedo paralizado/ por esta razón me sacaron de la empresa en la cual laboraba/ amigos yo soy un profesional/ fácilmente pueden darse cuenta/ la razón por la cual perdí mi trabajo/(Robertson, 2010, pp. 21 y 24).

La respuesta de las autoridades municipales para resolver el tema de la mendicidad fue fundamentalmente represiva (Roggenbuck, 1996, p. 105). El municipio anunció una campaña «para recoger a todos los mendigos de la ciudad, en fiel cumplimiento a la ordenanza municipal», que alcanzaba también a quienes subían a las unidades de transporte a vender golosinas. Una de las autoridades citadas en el artículo del diario Extra señaló: «hasta el momento se viene realizando el seguimiento de los mendigos y vendedores de golosinas. Posteriormente, se aplicarán sanciones económicas a los conductores que permitan subir a estas personas causando molestias e incomodidades a los pasajeros»[31]. La Municipalidad fue un poco más lejos, prohibió en todo vehículo público la práctica de la mendicidad, la venta de artículos y los números artísticos. Ante esta situación, surgió la Asociación de Trabajadores en Transporte Urbano, dirigida por Eusebio Paúcar. Los vendedores sostenían que no tenían otra manera de ganarse la vida y que estarían expuestos a la miseria sino les permitían trabajar[32], situación que se agravó cuando los comedores de la Beneficencia pública fueron cerrados por falta de fondos[33].

Lamentablemente no todas las personas que subían a los vehículos para solicitar ayuda o vender eran verdaderos discapacitados, drogadictos recuperados, enfermos mortales o desesperados padres de familia que reunían el dinero para las medicinas de sus familiares. Por ejemplo, según un diario, un falso mudo fue golpeado por el cobrador y los pasajeros de un micro, quienes se sintieron estafados cuando luego

---

[30] *Extra*, 3-1-1986, «Explotadores dirigen venta en vehículos».

[31] *Extra*, 3-1-1986, «Explotadores dirigen venta en vehículos».

[32] *Extra*, 3-1-1986, «Artistas y mendigos de micros se unen en sindicato».

[33] *La República*, 19-3-1992, «Beneficencia cierra comedor de ancianos».

de vender los folletos de su triste historia, al mudo se le escapó un espontáneo «gracias» al bajar de la unidad[34].

Supervivencia al extremo: los recicladores

Lima 2012:

> Trinidad Huamán es una anciana de setenta y un años de pelo plateado y dentadura incompleta que trabaja con tres chompas encima y una chalina que le cubre el cuello. Ha pasado los últimos veinte años buscando plásticos, papeles y vidrios. Actúa con la precisión de un cirujano. Después de cinco minutos de hurgar terminará por descartar cáscaras de mandarina, vasos de teknopor y bordes de pizza. Los desperdicios de una cena mal medida, quizás el almuerzo que alguien no comió. Para ella no tienen valor. Cuatro cajas de cartón y unas treinta hojas de papel bond es lo único que la mujer rescatará de esa bolsa en el Jirón de la Unión. En unos minutos esta bolsa de plástico viajará en un camión hasta una planta de transferencia en San Juan de Miraflores, al sur de Lima […] Un hombre cojea a causa de las placas de platino que lleva en la pierna derecha. Un carro lo atropelló hace diez años cuando iba en su triciclo recogiendo chatarra. Dice que si pudiera caminar sin ellas las vendería. Son las diez y media de la noche de un jueves y de las setenta mil personas que pasan al día por el Jirón de la Unión solo quedan unas cuantas con el andar de quienes tienen ganas de volver a casa. Media docena de paquetes negros esperaban ser manoseados antes de que pase el camión. Sin que nadie les preste atención, dos hombres y Trinidad Huamán abren la basura envuelta y eligen lo que puede venderse. Después la vuelven a cerrar, como si nada hubiera pasado. Si estuvieran en el distrito de Surco, dejarían las bolsas volteadas de cabeza, para que sus colegas supieran que allí no hay nada más que rescatar. Una luz amarilla revela las huellas de los borrachos que manchan las paredes y chorrean hasta el pavimento. Hacía dos semanas que se había iniciado la primavera, pero corría un viento helado. Como otros recicladores, Huamán se preocupa por la limpieza para que la municipalidad la deje trabajar. Barre el piso pendiente de que no la confundan con drogadictos que destruyen los bultos cuando buscan algo que puedan comer o vender para comprarse un poco de pegamento. Mientras hace su trabajo, un joven pasa de largo con la nariz dentro de una bolsa más pequeña cuyo contenido le ha puesto los ojos rojos y el andar zigzagueante[35].

---

[34] *Extra*, 22-12-1989, «Masacran mudo por decir gracias».

[35] Jack Lo Lau, *Etiqueta Negra,* 1-2-2012, «Una cita con tu bolsa de basura a medianoche», http://etiquetanegra.com.pe/articulos/una-cita-con-tu-bolsa-de-basura-a-medianoche, fecha de consulta: 15/2/2017.

Otro ejemplo de dificultad para distinguir entre un delincuente, indigente, un drogadicto, un enajenado mental o un trabajador, lo representan los recicladores de desperdicios. A diferencia de los recolectores, estos trabajadores buscaban objetos negociables entre los desechos[36]. Al principio fueron llamados simplemente

> 'buscadores de basura', pequeño Ejército compuesto especialmente por niños y madres de familia que se ganan la vida escarbando en montículos de basura, así como en el interior de contenedores de basura, donde buscan papel y especialmente plástico, desechos que luego venden obteniendo algunos intis que llevan a sus humildes hogares o en todo caso les sirven para 'parar la olla' en sus casas[37].



Figura 14. Ropavejero. Fotografía de Pedro Laos Delgado, http://www.limaphotos.com/2013/03/ropavejero.html. Fecha de consulta: 14/2/2017.

Esta actividad derivó de dos formas más antiguas de ganarse la vida, por un lado, los ropavejeros, quienes alimentaban el mercado de objetos usados y robados de Tacora y los recolectores de basura quienes vendían los desperdicios a las chancherías clandestinas. En el primer caso, esa actividad tiene una larga historia en el espacio urbano, desde décadas atrás, con un triciclo o por medio de un vehículo motorizado, transitaban la ciudad con el objeto de cambiar objetos en desuso por animales domésticos o dinero en efectivo. La segunda actividad también tiene una larga historia en la capital. Un famoso cuento de Julio Ramón Ribeyro publicado en 1955, *Los gallinazos sin plumas*, narra la historia de un par de niños, Efraín y

---

[36] Un lejano antecesor de esta labor se encuentra entre los chinos que recogían excrementos en las calles de Lima, especialmente desde aquellos lugares «adonde no había llegado aún el sistema de desagüe. Los desperdicios recolectados eran vendidos a los propietarios de terrenos agrícolas [...] colindantes con la ciudad, para que fuesen utilizados como abono» (Macera & Soria, 2015, p. 136).

[37] *Extra*, 5-12-1989, «Buscadores de basura».

Enrique, explotados por un implacable y gruñón anciano, para quien recolectaban desperdicios en las calles de Lima para alimentar a sus cerdos.

Como sabemos, en las décadas de 1970 y 1980 en todo Lima los basurales eran parte del paisaje urbano, incluida la castigada Lima cuadrada[38]. La actividad era tan común que no era raro observar a recicladores paseándose por el centro, incluso en la Plaza de Armas, en la cual confluyen la Catedral, el Palacio municipal y el Palacio de Gobierno. Este trabajo tiene jerarquías internas. Un tipo de reciclado es el 'campanero', quien se aprovecha de la falta de recojo de basura por parte del municipio. Suele pasearse por las calles con un triciclo mientras hace sonar una campana para que los vecinos que no alcanzaron a entregar sus desperdicios o que no fueron servidos por los carros municipales, salgan a la calle con ellos y entreguen la basura pagando unos centavos. El otro tipo de reciclador es el que trabaja «bolsa por bolsa», buscan en la basura depositada por los vecinos en las calles antes de que el servicio municipal se las lleve, «o también, [recogen la basura] en ciertos sitios no cubiertos por el servicio de recojo municipal (normalmente las zonas periféricas de la ciudad)» (Madueño, 2012, p. 12). Otras fuentes señalan la presencia especializada de los 'botelleros' y 'papeleros', estos últimos son abastecidos por los desechos de las numerosas imprentas de la ciudad[39].

Una tercera forma de esta ocupación es el heredero del ropavejero, el 'cachinero' o chatarrero, quien compra botellas vacías y vidrios para venderlos posteriormente; también se encuentran aquellos que recogen desperdicios para alimentar a sus animales. Algunos de ellos tienen contratos «con restaurantes o viviendas para recoger los residuos orgánicos y, así, criar a sus chanchos» (Madueño, 2012, p. 12). Los menos considerados en el oficio son los 'buzos' y las 'mulas'. Los primeros se sumergen en los tachos y depósitos de basura, los segundos buscan entre los basurales de la ciudad, ambos rompen las bolsas de desperdicios, esparcen la basura y toman contacto directo con ella, tal como lo indica el testimonio de una mujer dedicada a esta labor:

> […] el buceador es el que se mete a las bolsas y las abre y las destroza, bucean dentro de la basura. La mula es el peor, son los que trabajan en los rellenos… están acostumbrados a sacar las cosas, ya no les duele, paran así llenos […] nos íbamos a bucear y nos amanecíamos hasta las tres de la mañana […] [buceando] he encontrados bebes, he encontrado brazos, he encontrado de todo (Madueño, 2012, p. 12).

[38] Para un estudio general del sistema de recojo de la basura véase Callirgos, Olivera y Riofrío (1994).

[39] Sandro Mairata, *La República*, 27-3-2005, «Vivir de la basura».

Hoy en día todavía una parte de lo recolectado llega a Tacora para ser reutilizado. Otta hace una interesante distinción entre 'basura' y 'desecho', estos últimos «conservan un grado de utilidad potencial que puede ser aprovechado una vez agotadas sus posibilidades primarias de uso: desechamos lo que dejó de cumplir la función que nos interesaba, pero eso no quiere decir que el mismo objeto no pueda ser de utilidad para otra persona» (2014, p. 90). Acopiados por los numerosos recicladores,

> en Tacora podemos encontrar residuos materiales de todo tipo, chatarra, artículos personales, ropa y calzado de segunda mano, productos de higiene y belleza, casettes, discos, libros, antigüedades, muebles y tecnología en desuso: aparatos electrodomésticos, de cómputo y entretenimiento, y un interminable etc. Además, es un espacio apropiado para muy diversos usos: reciclaje de botellas plásticas, cartones, aparatos electrónicos; trabajos en fierro y en madera; bares, puestos de comida y puestos especializados en música; oficios variados: tatuadores, peluqueros, expertos en máquinas de coser (Otta, 2014, p. 90).

En 1998 se estableció que en todo el país operaban cerca de 6 mil recicladores y más de 100 mil en el año 2012; la mayoría eran hombres, la tercera parte solo había estudiado primaria y solo el 13% contaba con secundaria completa. El diagnóstico presentado por Gustavo Riofrío y Teresa Cabrera (2012) considera que en el año 2012 en Lima existían entre 12 y 17 mil recolectores, con 42% de mujeres; además, la participación de la familia es vital para cumplir con las diversas tareas del reciclaje: recolección, clasificación, limpieza y venta (2012, p. 48). De todos ellos, cerca de 5 mil recicladores estaban asociados en 127 organizaciones, mientras que el 87% trabajaba independientemente (López, 2013, p. 46).

Desde fines del siglo XX los trabajadores comenzaron a organizarse para lograr el reconocimiento jurídico que les permita operar sin conflictos con las autoridades, lo que demuestra su capacidad de negociación. El año 2005 se formó la Federación Nacional de Recicladores del Perú (Fenarep), asociación que se creó con el objetivo de promover el reconocimiento de los derechos laborales de estos trabajadores. Hacia el año 2013 contaban con más de 24 asociaciones, las cuales impulsaron la discusión de la ley 29419. De acuerdo con sus datos, en 1998 comenzaron los esfuerzos para coordinar una plataforma de lucha por sus derechos (Pérez Herrera, 2013, p. 51)[40]. En el año 2003 Villa El Salvador fue el primer distrito en impulsar la formalización de estos trabajadores con el programa Bono verde, el cual premiaba a los vecinos con descuentos en los arbitrios sin entregaban los desechos reciclables a

[40] En ese año se fundaron y se registraron la Asociación de Trabajadores Independientes de Residuos Sólidos (Atiares) y la Asociación de Trabajadores de Limpieza y Reciclaje (Atalir), que reunían a principios del siglo XXI poco menos de 500 asociados (Palla, 2008, p. 39).

los trabajadores reconocidos por el municipio (Palla, 2008, p. 32). En el año 2008 se creó el Movimiento Nacional de Recicladores del Perú (MNRP), con el objeto de formular un proyecto de ley, que luego fue promulgado por el presidente Alan García el 9 de octubre del año 2009 como la ley 29419, Ley que regula la actividad de los recicladores. Esta norma estableció los lineamientos básicos de la actividad, creó, entre otros aspectos, el Día nacional del reciclador, a celebrarse todos los 1° de junio. A mediados del año siguiente, en la celebración de su día, las asociaciones de recicladores organizaron el Primer Congreso Nacional de Recicladores del Perú y, además, la capital fue sede del IV Congreso Latinoamericano y Caribeño de Recicladores los días 2 y 3 de junio[41]. En este evento se discutió la implementación de la ley y los avances de las organizaciones en sus negociaciones con el poder ejecutivo, específicamente con el Ministerio de Ambiente, cuyo ministro, Antonio Brack, fue invitado a las sesiones del congreso.

El año 2010 se emitió el reglamento de la ley 29419, que promueve la protección, asociación y capacitación de «los trabajadores del reciclaje […] contribuyendo a la mejora en el manejo adecuado para el aprovechamiento de los residuos sólidos en el país». La disposición exige a las empresas su formalización y el uso de equipo por parte del personal, compuesto de guantes, mascarillas, ropa y calzado adecuados. También reglamentó el uso de vehículos no convencionales, como triciclos y carretas; las modalidades de recojo y clasificación de los residuos sólidos, y permite a las personas empleadas «un carné de identificación emitido por la Municipalidad distrital […] este carné deberá ser llevado en un lugar visible por el reciclador».

De acuerdo con otro estudio publicado el año 2012, algunos trabajadores comenzaron por cuenta propia[42], otros con sus familias, pero todos consideraban que, a pesar de la vergüenza que viven o les hacen sentir, es un trabajo honesto que no causaba daño a nadie: «yo comencé a trabajar y ya podía pagar el dinero de mi cuartito, me sentía bien […] un día la señora me preguntó: "Y de qué trabajas, ah" Señora, yo reciclo, pero chamba es chamba, yo no le hago ningún mal a nadie» (entrevista citada en Madueño, 2012, p. 11). Otro testimonio señala que las agresiones no son cosa inusual: «vienen en camioneta, vienen y me atacaron. ¿Qué voy a hacer? Yo les digo: "Pero ustedes tienen trabajo siquiera, yo no tengo trabajo, soy madre de familia". Pero todavía se amargan, me insultan. Disculpe la

[41] Haciendo camino, «Primer congreso nacional de recicladores del Perú», https://haciendocamino1.wordpress.com/2010/05/12/primer-congreso-nacional-de-recicladores-del-peru/, fecha de consulta: 25/2/2017.

[42] El negocio aparentemente no era tan malo, a juzgar por el hecho de unos delincuentes que asaltaron un camión de basura en Huachipa (*Expreso*, 28-9-2001, «Ladrones roban camión recolector de basura»).

palabra: "Concha tu madre, lárgate". Yo no hago nada malo, pero así es» (Riofrío y Cabrera, 2012, p. 58). Otro testimonio muestra la incomprensión de la gente hacia quienes ejercen este trabajo:

> [C]uando iba a las casas me mentaban la madre, me insultaban; decían… «váyanse de acá, rateros [ladrones]». Una vez a mi compañero le han pegado por eso. […] Decían «estos cochinos [sucios, que ensucian]», o te dicen «estos recicladores se la llevan fácil». Si supieran cómo es, que tengo que ir los sábados; a veces vamos a limpiar las playas. […] No digo nada. A veces les explico, les digo: «No me llevo, como usted piensa. Yo recojo perros muertos ¿Usted haría eso?». Ahí se quedan callados. Antes decía, me sentía mal, pero ya no ya (Riofrío y Cabrera, 2012, p. 76).
>
> Mira varón, nosotros somos bien chamba, no somos rateros como la gente dice. Miran a uno y dicen 'ese reciclador es choro', dicen. Ese otro es esto, ese otro es otra. Y eso llega pe'. Nosotros no molestamos, hay unos que sí te rompen la bolsa y te desparraman (la basura) todita la vereda. Esos sí dan cólera, castíguenlos, bótenlos, hagan lo que quieran, te acepto. A esos deberían sacarlos porque malean. ¿A quién molestamos, a ver dime? ¿A quién?[43]

Los accidentes también son muy frecuentes. Un joven de 17 años falleció trágicamente mientras recogía cartones y fierros de la ribera del río Rímac. En 1992 a quienes se dedicaban a esta labor les llamaban 'cachineros' o 'mineros'; según los testigos, el joven se dedicaba a esta labor junto con otras decenas de adolescentes. Lamentablemente el derrumbe de un cerro cercano lo enterró, agonizó por un par de horas y la ayuda de los bomberos solo llegó a rescatar el cadáver cuatro horas más tarde[44]. En el año 2001, otro reciclador, Eduardo Cruz (50), intentó recoger una botella vacía en el acantilado de la Costa Verde, perdió el equilibrio y rodó cuesta abajo, aunque quedó muy golpeado, conservó la vida[45]. Sin embargo, el mayor peligro lo representa el caótico tráfico limeño:

> Yo estaba justo para subir y la combi viene y me lleva el triciclo, y mi hijo estaba adentro[46]. Yo grité, el carro paró y el cobrador vino corriendo. Me ayudó a subir el triciclo del puente hasta el otro puente; de ahí se fue corriendo. Yo a mi hijo le dije: «Quédate acá». Me fui corriendo y le alcancé a la combi… «Anda a las

[43] Sandro Mairata, *La República*, 27-3-2005, «Vivir de la basura».

[44] *La República*, 1-7-1992, «Alud sepulta joven que recogía desperdicios en el río Rímac».

[45] *Expreso*, 17-4-2001, «Reciclador casi pierde la vida por una botella». Otros ejemplos de recicladores en el mismo año en *Liberación*, 2-1-2001, «La otra bolsa de valores».

[46] Es usual, hasta hoy, que los ambulantes carguen a sus hijos pequeños en los triciclos por no contar con quien dejarlos, optando por trabajar con ellos (*Correo*, 4-3-1983, «El niño y el triciclo»).

> 9 de la noche, porque a las 7 es tráfico y los carros se meten nomás y no respetan al triciclo» (Riofrío & Cabrera, 2012, p. 59).

Por último, las autoridades también actúan violentamente en su contra. El gerente de Seguridad Ciudadana de Miraflores opinaba que «está comprobado que buena parte coordina con otros individuos para robar casas. Por eso siempre hacemos redadas contra los buzos»[47]. El subgerente de limpieza pública del mismo distrito señaló que «visto por donde sea, reciclar informalmente es denigrante […] por un lado es un negociazo. Por el otro es inestable si te quitamos tu mercancía. Si esto no ocurre, un reciclador puede ganar el equivalente a un sueldo promedio mensual. Pero que lo gane en otro distrito, porque aquí no se los vamos a permitir»[48]. En Santiago de Surco el personal del serenazgo decomisaba mensualmente cerca de 4 toneladas de basura[49]. Otro testimonio narra lo siguiente:

> [H]a habido operativo, nosotros no sabíamos. Se bajaron de la camioneta y nos quitaron el triciclo; tiraron todas las cosas al suelo, el triciclo solo lo subieron. Ahí estaban ocho, entre ocho nos quitaron. […] El Serenazgo es muy abusivo. Nosotros podemos traer a nuestros hijos que nos ayuden, pero ¿qué pasa? Los golpean, los lastiman, a los niños, los jovencitos. Había un jovencito de 15 años [de edad], así, señorita, y le pegaron duro a ese niño. Tuvimos que saltar entre todos: «¡Es un niño! ¡Cómo le vas a pegar!» [dijimos]. «¡No, está prohibido el reciclaje» [nos contestaban]. […] Lo único que hemos hecho con la mamá del niño lo hemos recogido y lo hemos curado. Se pasa bastante experiencia en la calle (Riofrío & Cabrera, 2012, p. 73).

Uno de los recicladores afectados en San Borja fue José Luis Jácobe Santos, quien desde las 5 de la tarde comenzó a reciclar en el distrito. A las 10:20 p.m. fue intervenido por el serenazgo, su copiosa bolsa fue confiscada y él se quedó en la acera cabizbajo, luego declaró ante un reportero que «nos tratan como delincuentes […] No es justo. Tengo veintidós años, una esposa, seis hijos. Sí, seis. Vivo en Manzanilla. Una noche bien trabajada saco 30 soles. Ya tengo cuatro años en esto. Estoy cansado […] Señor, ¿qué hago? Ya me iba a ir… Pucha, ya me iba a ir…»[50].

De acuerdo con los datos de Durant y Metzger (2009), los distritos más adinerados de Lima son los que producen más residuos por habitante. En Lima y Callao el promedio es de 278 kg/hab, mientras que, en el 2007 en San Isidro se producían 569 kg/hab y, en el último lugar, Villa El Salvador con 164 kg/hab.

[47] Sandro Mairata, *La República*, 27-3-2005, «Vivir de la basura».

[48] Sandro Mairata, *La República*, 27-3-2005, «Vivir de la basura».

[49] Sandro Mairata, *La República*, 27-3-2005, «Vivir de la basura».

[50] Sandro Mairata, *La República*, 27-3-2005, «Vivir de la basura».

Mientras que, «el 51,6% de la basura es material orgánico, el 9,1% es plástico, el 3,8% es vidrio, el 1,4% son latas y el 1,3% es chatarra. Solo el 0,67% y el 0,1% corresponde a papel y a cartón»[51]. Además, los distritos de clase media y alta son los que ofrecen mejores servicios de limpieza pública, donde se llega a recolectar el 98% de los desechos; en el otro extremo se encuentran los distritos más pobres que controlan alrededor del 80% de los residuos. Estas características explican por qué el 60% de los recicladores operan en distritos como Surco, Miraflores, San Isidro y san Borja[52]. En el año 2011 solo la mitad de la población recibía semanalmente el recojo de basura, 35% solo una vez por semana y 15% dos a tres veces por semana (Dulanto, 2013, p. 141). Un espacio considerado marginal, como el cerro El Pino, no tuvo ningún servicio de limpieza hasta la aparición de los recicladores del Programa de Recuperación Ambiental de Cerro el Pino, empleados directos de la municipalidad de El Agustino. Este programa solo permitía la incorporación de recicladores con experiencia en el manejo de los residuos (Palla, 2008, p. 37). Si esto ocurre en el siglo XXI, con todas las mejoras desarrolladas, en la década de 1980 las condiciones del servicio eran mucho peores, con lo cual la aparición de los recicladores resolvía un problema real de la población[53]. De hecho, como señala Madueño, estos trabajadores tienen la competencia de los basureros oficiales, quienes los persiguen y les quitan sus pertenencias (2012, p. 12). Es conocido que también los trabajadores de los camiones recolectores reciclan los residuos, aprovechándose clandestinamente del valor de los desechos[54].

Como señalan Riofrío y Cabrera, difícilmente los recicladores pueden evitar el contacto directo con los residuos. La separación del material reciclable de la basura supone hurgar en ella para encontrar aquello que será utilizado luego de su limpieza (Riofrío & Cabrera, 2012, p. 53). Quienes ejercen este oficio están constantemente expuestos a muchas enfermedades, tales como infecciones respiratorias, parasitosis, males estomacales, enfermedades de la piel, etcétera. Una dolencia frecuente son los mareos y dolores de cabeza resultado de la respiración del metano emitido por los basurales (Cesip, 2006). Un ejemplo dramático de los peligros de esta ocupación es el caso de Aquilina Cerquin, quien el 2012 ya tenía quince años trabajando como recicladora:

[51] *Correo*, 27-3-2016, «El drama de los residuos sólidos en Lima», http://diariocorreo.pe/ciudad/el-drama-de-los-residuos-solidos-en-lima-662594/, fecha de consulta: 15/2/2017.

[52] Sandro Mairata, *La República*, 27-3-2005, «Vivir de la basura».

[53] Un trabajo que muestra el panorama en América Latina es el de Gustavo Riofrío y Teresa Cabrera (2012).

[54] Jack Lo Lau, *Etiqueta Negra*, 1-2-2012, «Una cita con tu bolsa de basura a medianoche», http://etiquetanegra.com.pe/articulos/una-cita-con-tu-bolsa-de-basura-a-medianoche, fecha de consulta: 15/2/2017.

> [S]us palmas son un gran callo blanco y áspero como una lija desgastada. Cada dedo tiene la textura de las cáscaras secas de un maní. Sus uñas son amarillas porque el contacto habitual con los desechos le ha dejado una infección. Sobre la reseca piel de sus manos cada línea parece un tajo como si un cuchillo hubiera tallado su mano al envejecer. Las manos de los recicladores se parecen. La línea de la vida que parte entre el índice y el pulgar es tan larga que termina en la base de su mano. No solo se puede predecir el tiempo que vivirá, sino también la forma. Su línea es profunda. Tiene cáncer al estómago y no intenta curarlo. Para ella un tratamiento sería como planear vacaciones a Punta Cana, por eso prefiere no pensar en la enfermedad. A sus cincuenta y cinco años nunca usó guantes. Todos los días camina de cinco a seis horas como si estuviera sana en busca de la basura de los alrededores de la avenida Argentina en el centro de Lima. Cuando empezó a reciclar cargaba hasta diez kilos de papel al hombro. Se levantaba cuando todavía era de noche a recoger basura por la Plaza Unión en el centro de Lima para mantener a sus siete hijos[55].

Otra característica del oficio es que permite solo planificar los ingresos día por día, por el poco beneficio que trae la venta, la falta de ahorro y los pocos volúmenes de materiales que recolectan y venden[56]. Uno de los entrevistados por Madueño considera que el 90% de los recicladores venden diariamente lo recolectado. La mayoría de ellos provenía de largos periodos de desempleo y de miseria, tal como lo señala una de las mujeres entrevistadas por Riofrío y Cabrera al responder la pregunta de quién le aconsejó comenzar a trabajar como recicladora: «unas amigas. Yo conté mi historia: que no tenía para comer, que a mis hijos les daba a veces nomás agüita con sal. Se ponían a llorar, yo también me ponía a llorar; bien triste era mi vida» (2012, p. 67). Además, existen cadenas de intermediación que acopian los materiales y los venden al comprador final, usualmente industrias que compran residuos (Madueño, 2012, p. 13). Un ejemplo de esta recolección a pequeña escala es el caso de los envases, modalidad que

> no produce grandes ingresos, pero permite liquidez inmediata a alguien con gran necesidad y poco conocimiento de los procesos de segregación para el reciclaje. Por ello, a la par de las muchas mujeres que se inician en este oficio con el recojo oportunista de envases en las calles, es usual que los mendigos y

---

[55] Jack Lo Lau, *Etiqueta Negra,* 1-2-2012, «Una cita con tu bolsa de basura a medianoche», http://etiquetanegra.com.pe/articulos/una-cita-con-tu-bolsa-de-basura-a-medianoche, fecha de consulta: 15/2/2017.

[56] Según Jack Lo Lau, en el año 2012 una botella de vidrio valía «tres centavos de dólar. El kilo de botellas descartables sesenta centavos de dólar. El kilo de aluminio puede valer hasta un dólar. El kilo de papel bond limpio está cincuenta centavos de dólar» (*Etiqueta Negra*, 1-2-2012, «Una cita con tu bolsa de basura a medianoche», http://etiquetanegra.com.pe/articulos/una-cita-con-tu-bolsa-de-basura-a-medianoche, fecha de consulta: 15/2/2017).

> personas con dependencia de alcohol y drogas encuentren en estos materiales una vía para obtener pequeños ingresos para gastos inmediatos (Riofrío & Cabrera, 2012, p. 39).

Por estas razones, como es obvio, esta actividad es desarrollada por los más pobres de la ciudad. Por ejemplo, un estudio de El Zapallal (Carabayllo), zona en la que se encuentra un relleno sanitario, confirmó que esta era una estrategia de supervivencia: casi 28% de la población de ese lugar se dedicaba a la recolección y segregación de residuos (Cesip, 2006, p. 22). Sin embargo, aunque en contadas ocasiones, el hurgar en la basura les puede traer sorpresas muy apreciadas debido a las condiciones económicas en que viven:

> [A] una semana para la Navidad de hace unos años, Aquilina Cerquín rezaba para encontrar mucho cartón que podría vender hasta en diez centavos de dólar. Recuerda que de una bolsa en el jirón Zorritos en Breña sacó un reloj de mujer. Lo metió en su bolsillo. En el mismo saco encontró una cartera de mano con bordados chinos. Dentro había el equivalente a mil ochocientos dólares en soles. Entendió que lo que tenía en sus manos era una lotería. En su hogar encontró cien dólares más en la cartera. Logró en un día lo que le tomaría medio año. Vistió a sus siete hijos de pies a cabeza y compró cincuenta juguetes para regalarlos a todos los niños de su barrio[57].

Emprendedores de calles y pistas

Durante los años de 1980 al 2000 uno de los síntomas más visibles del caos en la ciudad fue el desorden en la reparación o ampliación de los servicios públicos y el parchado de las calles. La ausencia de una efectiva coordinación entre las empresas públicas (Sedapal, Electrolima y la CPT) y los municipios distritales, dejaban sin terminar muchas de las obras o, en el mejor de los casos, abandonaban las pistas con enormes huecos producto de la ausencia de asfaltado o de su deficiente aplicación. Como consecuencia de esta situación se generaron miles de agujeros, los llamados 'baches', que hacía difícil el tránsito vehicular en todos los distritos de la capital.

[57] Jack Lo Lau, *Etiqueta Negra*, 1-2-2012, «Una cita con tu bolsa de basura a medianoche», http://etiquetanegra.com.pe/articulos/una-cita-con-tu-bolsa-de-basura-a-medianoche, fecha de consulta: 15/2/2017.



Figura 15. Propaganda del 'escarabajo' de Volkswagen con referencia a los baches en Lima de alrededor de 1975. http://www.arkivperu.com/escarabajo-de-volkswagen-1969-75/, fecha de consulta: 4/3/2017.

A principios de la década de 1980 el caos en la administración de la ciudad y la crisis económica contribuyeron para la proliferación de los baches y su percepción como uno de los grandes problemas urbanos. La ausencia de inversión pública en su reparación, sumado al evidente impacto en el transporte urbano, trajeron como consecuencia una creciente preocupación por la extensión del problema. En 1983 los municipios se habían comprometido a invertir alrededor de 2 600 000 de soles para la reparación de los baches, pero se calculaba que se necesitaba seis veces más para parchar totalmente las pistas limeñas[58]. En 1986 la situación no había variado mayormente, por el contrario, había empeorado. La ciudad parecía, de acuerdo con algunos diarios, una capital 'bombardeada' por la enorme cantidad de agujeros, lo que generaba gran demora en el tráfico y graves accidentes[59]. Las reparaciones de las calles realizadas por los municipios o empresas públicas, en el mejor de los casos, demoraban semanas en acabarse y generalmente duraban poco tiempo antes de volverse a estropear. Las obras realizadas para mejorar el suministro de agua, saneamiento, teléfonos o electrificación, muchas veces eran abandonadas por falta

[58] *La República*, 10-10-1983, «Lima: las negras líneas de su mano».

[59] *Extra*, 12-1-1989, «Micro loco mata tres ambulantes». El chofer atribuyó a un bache la causa de la desgracia, por tratar de evitar caer en el agujero perdió en control del vehículo.

de presupuesto, lo que empeoraba el problema. Además, los innumerables buzones sin tapa también afectaban seriamente la vialidad urbana[60].

Tres años después se calculaba en 300 000 los baches de la ciudad. Las autoridades del Fondo Metropolitano de Inversiones - Invermet, el ente encargado de las inversiones en la capital, consideraban que la mayor parte de las grandes avenidas debían ser rehechas íntegramente, tenían más de 80 años sin renovarse; mientras que, en algunos distritos como La Victoria y el Rímac, más del 80% de las pistas se encontraba en mal estado. El centro de Lima también sufría estas malas condiciones, se estimaba en 5 km^2 la cantidad de huecos, algunos de ellos con una larga historia[61]. Para colmo de males, cuando a principios de la década de 1990 se comenzó la modernización de los semáforos del centro, las empresas encargadas demoraron más de lo previsto, no coordinaron adecuadamente con las autoridades y transportistas, lo que aumentó el caos en la Lima cuadrada[62]. De acuerdo con algunos automovilistas, al margen del aumento del costo de la gasolina y del mantenimiento del vehículo, era devastador el impacto de los baches en el auto. Los testimonios de los choferes señalan que el desgaste de amortiguadores y suspensión de los coches obligaba a un mayor gasto del usual, además, los neumáticos se desgastaban rápidamente, lo que hacía más caro su mantenimiento.

Desde principios de 1983, sino antes, los municipios aceptaron que los comerciantes u otros personajes que trabajaban en las calles, se encarguen por su cuenta de reparar las pistas y veredas. Por ejemplo, en el caso del distrito de Miraflores, el alcalde Jorge Rodríguez Larraín, exigió que los artesanos cuiden el pasto y los jardines del parque Kennedy, lo cual cumplieron construyendo las veredas para evitar que los compradores dañen la vegetación[63]; poco tiempo después apareció la noticia de los 'arreglabaches', quienes aliviaban el sufrimiento de los conductores intentando reparar los agujeros. Rosa López, redactora de *Correo*, reconoció en su ruta de transporte varios agujeros entre Miraflores y Barranco. Algunos baches eran cubiertos con tierra por los desocupados, haciéndolos temporalmente transitables, pidiéndoles a los conductores una compensación por el servicio[64]. Los Rodríguez fue una familia que destacó en esta labor. Su trabajo era constantemente obstaculizado por la GC, quienes consideraban que dañaban la propiedad privada, la familia fue detenida mientras intentaba reparar unos baches en la avenida Aviación. Semanas antes, un diputado y ex alto oficial de la

[60] *Extra*, 30-10-1986, «Rompen pistas y veredas y los dejan abandonados».

[61] *La República*, 9-7-1986, «¿Y los 300 mil huecos?».

[62] *Expreso*, 13-9-1992, «El centro de Lima es un caos por huecos en pistas y veredas».

[63] *La República*, 14-1-1983, «Artesanos hacen veredas en parque».

[64] *Correo*, 8-3-1983, «La danza diaria de los baches».

GC, Óscar Olivares Montano, había solicitado que en lugar de perseguirlos se les otorgue las facilidades necesarias, porque gracias a ellos las avenidas Tomás Marsano, Brasil, Javier Prado, Salaverry y México permanecían transitables. De acuerdo con el testimonio del cabeza de familia, Luis Rodríguez, «fueron tratados como vulgares delincuentes y agredidos físicamente». Él declaró que «en el país no hay trabajo y nosotros hemos encontrado una forma de servir a la comunidad y de ganarnos la vida con esfuerzo y dedicación trabajando hasta 18 horas diarias»[65]. Otra fuente les dedica una nota similar, en la que ensalzan la encomiable labor que realizaban los cinco miembros de la familia, compuesta por el padre, dos hijos y dos nietos. Miguel Quiroz Cartagena, columnista de *La República*, señaló que «esa es una forma de trabajar, de hacer algo útil por la comunidad, de ganarse la vida con el sudor de la frente antes que dedicarse a la chupeta [bebida] o la catrera [cama]». Según él, quien contribuyó a que salgan libres fue el periodista Víctor Manuel Avendaño, quien abogó por ellos desde su programa radial. Los Rodríguez, una vez liberados, recibieron las garantías del alcalde de Villa María del Triunfo para que trabajen sin persecuciones en las pistas del distrito[66]. Así, el 'arreglabaches' se convirtió en un trabajador que cumplía un servicio público desde el sector privado y como tal tenía derecho a una compensación por su tiempo, inversión de capital y mano de obra. Era un 'emprendedor' de las calles y en las calles.

Pocas semanas después el oficio fue detectado en varios lugares de Lima; grupos de personas premunidos de herramientas y materiales de construcción se encargaban de reparar las calles, con lo que obtenían a cambio el agradecimiento de los conductores y sus propinas. Como menciona una nota, «el trabajo de resanamiento de las pistas y de arreglo de los baches corresponde a los municipios. Pero la negligencia o la falta de rentas no permiten a estas entidades desarrollar estas labores»[67]. Por esta razón los 'arreglabaches', según el testimonio de Gonzalo Trigoso (42), se habían «impuesto este trabajo un poco para ayudar a la colectividad, pero sobre todo para poder subsistir»[68]. Estos constructores usualmente laboraban en grupos familiares y recayeron en esa labor por causa de la desocupación, cese por accidente o despido. No todos los conductores reconocían su trabajo, muchos colaboraban, especialmente los transportistas, pero otros choferes de vehículos privados no les tenían consideración, por el contrario, los recriminaban por perder su tiempo y los mandaban a realizar un 'verdadero' trabajo. Por supuesto que los 'arreglabaches' consideraban que sí estaban trabajando: «nosotros nos dedicamos

[65] *Correo*, 6-4-1983, «GC detiene a toda una familia que se ocupa en tapar baches».
[66] *La República*, 24-4-1983, «Un gesto digno de aplauso».
[67] *El Diario* de Marka, 16-7-1983, «Los 'arreglabaches'»
[68] *El Diario* de Marka, 16-7-1983, «Los 'arreglabaches'»

a esta labor porque no tenemos donde trabajar, porque se nos han cerrado todas las puertas»[69]. Según la nota, en la ciudad no menos de cincuenta familias se dedicaban a esta labor, solo en La Victoria cerca de doce familias trabajaban de esa manera, algunas de ellas empleaban materiales como cemento y arena, quienes comenzaban su tarea muy temprano por la mañana. Las familias de 'arreglabaches' eran hostigadas por la policía, incluso detenidas sin mayor argumento. A Rosendo La Madrid, lo llevaron a la comisaría, pero lo soltaron rápidamente cuando increpó a sus captores: «¿qué quieren, que me dedique a robar?»[70].

La existencia contemporánea de los 'parchadores', como se les llama hoy, tiene como origen la misma situación que se observa en otras actividades: en agosto de 2001 se calculaba en más de 53 mil los baches de la capital[71]. Si la necesidad aún existe y no se produce una eficaz acción de las autoridades, la labor continuará en los siguientes años. Un ejemplo extremo de esta constante situación lo ofrece el singular caso de un bache ubicado en las inmediaciones del Congreso de la República, en la primera cuadra de la avenida Abancay, una de las arterias más importantes de la ciudad, soporte de un gran flujo vehicular y peatonal. En el año 2012 personas sin identificar, desesperadas por la situación, decidieron tapar con un viejo colchón el agujero que interrumpía el tráfico. Al poco tiempo de publicada la bochornosa noticia personal del municipio se encargó de arreglar el bache.



Figura 16. Bache en la avenida Abancay cubierto por un colchón y luego reparado por el municipio. *El Comercio*, 30 de marzo de 2012, http://elcomercio.pe/sociedad/lima/tapan-bache-colchon-viejo-plena-avenida-abancay-noticia-1394605 y http://elcomercio.pe/sociedad/lima/bache-que-habia-sido-tapado-colchon-av-abancay-fue-parchado-noticia-1394828. Fecha de consulta: 5/3/2017.

Diversas fuentes del año 2016 señalan que en Lima existía un agujero por cada kilómetro de recorrido, muchos de esos baches se producían por la caduca red de agua y desagüe que al colapsar dejaba vacíos que deprimían la acera y el asfalto.

[69] *El Diario* de Marka, 16-7-1983, «Los 'arreglabaches.'»

[70] *El Diario* de Marka, 16-7-1983, «Los 'arreglabaches.'»

[71] *Expreso*, 29-8-2001, «Lima posee más de 53 mil baches».

De acuerdo con los especialistas, no es adecuado improvisar de manera informal la reparación de los baches, debido a que «se pueden perjudicar las capas de apoyo por debajo de la pista»[72]. Por otro lado, los municipios aún no cuentan con los recursos ni con un plan de inversiones eficiente para solucionar este problema. Luis Quispe Candía, presidente de la ONG Luz Ámbar, dedicada al transporte, informó que por lo menos 70% de las vías de la capital «están en mal estado o tienen algún tipo de problema en su infraestructura […] están ubicadas, en su mayoría, en La Victoria, Breña, Surquillo, Rímac, Independencia y Villa María del Triunfo»[73]. Mientras que, un informe de la Defensoría del Pueblo identificó 245 puntos difíciles para el transporte público, de los cuales 53% contaba con huecos peligrosos[74]. Un caso emblemático, y aprovechado por la prensa hasta el agotamiento, fue el de un agujero de enormes proporciones en la avenida México, en el distrito de La Victoria. El tamaño del bache era tan imponente que ningún reportero se resistió a emitir su nota desde el cráter.

Los actuales 'arreglabaches' todavía se encuentran en muchos puntos en la ciudad y su labor frecuentemente es la única que trata de solucionar, aunque sea temporalmente, el problema. Una nota televisiva mostró a uno de ellos con 17 años en el oficio —comenzó más o menos en 1996—, quien señaló que su labor no era para nada improvisada, siempre realizaba un estudio previo: «voy a diferentes sitios, donde encuentro los huecos más grandes, yo voy un día, superviso todos los huecos, todo, y al otro día ya sé el material que se va, compro el material y lo relleno»[75]. A diferencia de sus predecesores de la década de 1980, este trabajador conoce bastante mejor su oficio y el mercado. Consciente de la crítica de que su labor no es eficaz, él utiliza asfalto y según su criterio, «queda como la misma pista […] yo trabajo con asfalto, un promedio de 50 soles diarios»[76]. La inversión lo obligaba a muchas horas de trabajo para recuperar el capital y ganar algo más, no todos los choferes colaboraban con él, solo los que «tienen buena voluntad, hay otros que no, pues». Su trabajo era supervisado personalmente, cada quince días regresaba a verificar la refacción para asegurarse de su buen estado. El trabajador, que en el informe nunca es interrogado por su nombre, señaló que a veces la Municipalidad metropolitana lo había contratado y no le pagaba nada, «mejor

[72] *Perú.com*, 5-8-2016, «Hay 8 baches por cada kilómetro recorrido en Lima, revela estudio».

[73] *Correo*, 15-5-2016, «Lima, la ciudad de los huecos y los baches».

[74] *Correo*, 15-5-2016, «Lima, la ciudad de los huecos y los baches» y *Perú21*, 16-11-2014, «Lima: pistas con huecos son peligro latente para conductores».

[75] *Willax Televisión*, 25-9-2013, «Parchadores reparan pistas de Lima», https://www.youtube.com/watch?v=ZakKchNqjN0, fecha de consulta: 4/3/2017.

[76] *Willax Televisión*, 25-9-2013, «Parchadores reparan pistas de Lima», https://www.youtube.com/watch?v=ZakKchNqjN0, fecha de consulta: 4/3/2017.

trabajo de mi cuenta, más seguro»[77]. Otro informe de la televisión presentó a un anciano 'parchabaches' como «el peruano del día». Santos Segovia (70), natural de Abancay, quien realizaba este trabajo aproximadamente desde el año 1994 para mantener a sus nueve hijos. Todos los días recorría la ciudad con su moto desde las dos de la madrugada buscando huecos para rellenar y también usaba asfalto en las reparaciones. La nota lo presenta como un peruano ejemplar, pero omite el hecho de que su trabajo respondía a la ausencia de un empleo adecuado, dada su edad[78].

Como podemos notar, los 'areglabaches' o 'parchadores' comenzaron su labor como una solución a la falta de empleo en las décadas de 1980 y 1990 y el problema concreto de la gran cantidad de agujeros en las calles. Por esa razón, siempre contaron con la simpatía de un sector de la opinión pública, agotada de lidiar con los innumerables baches de la ciudad. Poco a poco se especializaron en esa labor, como respuesta a un problema facilitado por la desidia de los municipios. Sin embargo, parecería que actualmente, al igual que los problemas con la basura, la presencia de los baches es más frecuente en los distritos lejanos del centro, razón por la cual estos trabajadores se encuentran ubicados habitualmente en esas zonas.

Otro personaje de las calles limeñas se consolidó gradualmente. Su origen se puede remontar a las épocas colonial y republicana, en las cuales los vendedores de diversos productos transitaban la ciudad en todas direcciones y ofrecían una gran variedad de géneros[79]. Paulatinamente a lo largo del siglo XX las calles con alta densidad de tráfico vehicular se convirtieron en un mercado móvil que rápidamente atrajo vendedores. Aunque posiblemente desde mucho tiempo atrás existieron vendedores que se acercaban a las ventanillas de los automóviles a vender o abordaban las unidades de transporte a ofrecer productos, en Lima a lo largo de las décadas de 1980 y 1990 aumentó considerablemente el número de personas dedicadas a este trabajo. Uno de esos personajes fue el vendedor callejero de dólares, quien ofrecía el servicio con calculadora en mano, cambista necesario en los tiempos de la alta volatilidad del dólar y la hiperinflación (Cosamalón Aguilar, 2013). Otro caso, como hemos visto, era el de los limpiadores de parabrisas siempre útiles en una ciudad polvorienta y húmeda.

La forma de trabajo de estos vendedores ambulantes se gestó entre fines de la década de 1970 y principios de la siguiente. Sacando provecho del incremento de la congestión vehicular, se apostaban —hasta hoy— en los cruces de las

[77] *Willax Televisión*, 25-9-2013, «Parchadores reparan pistas de Lima», https://www.youtube.com/watch?v=ZakKchNqjN0, fecha de consulta: 4/3/2017.

[78] *Latina.pe*, 9-1-2014, «El peruano del día: anciano parchador de pistas es ejemplo de virtud», https://www.youtube.com/watch?v=J8qlg2KpYQk, fecha de consulta: 4/3/2017.

[79] Véase un recuento y descripción de los vendedores en Prince (1890).

avenidas más transitadas para ofrecer a los automovilistas diversos productos. Así, actualmente podemos observar, por ejemplo, en el cruce conformado por la avenida Javier Prado y la avenida Arenales, una multiplicidad de vendedores que ofrecen a lo largo del día bebidas, bocaditos, discos compactos de películas y música, regalos, flores, adornos, etcétera[80]. Su característica principal es la alta movilidad y flexibilidad para adaptarse a una demanda igualmente móvil. Ellos suelen denominar a su estrategia de venta «pistear», pues recorren las avenidas caminando entre los autos, beneficiándose de la demora en el semáforo o la congestión vehicular. Así, el vendedor que ejerce esta forma de venta puede ser llamado 'pistero', personaje representativo de la ciudad de fines del siglo XX y principios del XXI, siempre presente en los cruces de las grandes avenidas limeñas. Estos ambulantes comparten el espacio con otros que se dedican a informar a los conductores de buses y micros la frecuencia de sus competidores en las rutas, popularmente conocidos como 'dateros', quienes, además, son muy útiles para orientar a los peatones en el caótico y estresante transporte público limeño.

> Estos personajes se ubican en ciertos paraderos, en puntos estratégicos que les permiten vender información a los choferes. La información brindada incluye el tiempo que le lleva el chofer de la unidad que le precede, el número de pasajeros que transporta, es decir, si está planchado (vacío) o sopa (lleno), y si existen policías u operativos policiales (batidas, moto) en la ruta. El chofer, de esta manera, tiene un mayor control de la situación y tiene más elementos para juzgar cómo continuar su recorrido (Antonio & Rojas, 2014, p. 51)[81].

No existe un momento específico de la aparición de los 'pisteros', no hay huella de esa denominación en las fuentes escritas, aunque obviamente esta práctica sí está registrada bajo otras formas de comercio ambulatorio, tal como se ha mostrado a lo largo de este libro[82]. Sin embargo, considero que dentro del mundo del trabajo en las calles corresponde a un tipo muy particular de vendedor que a lo largo del día cambia de oferta, gracias a su conocimiento del mercado, diferenciándolo de otros ambulantes.

---

[80] Fue esta singular situación la que llamó mi atención a principios del siglo XXI y fue la base del proyecto que dio origen a esta publicación. Observé que se podía comprar de todo, incluso adornos de gran tamaño como barcos de madera o juguetes. Estos productos usualmente se encontraban por las tardes, justamente cuando una buena parte de la población retornaba a sus hogares.

[81] También se puede consultar a Vigil-Lazo (2013).

[82] También se encuentra en diversas partes del mundo, bajo las mismas condiciones, véase Bromley (2000, p. 15).

Por otro lado, el 'pistero' es uno de los que más sufre la persecución de las autoridades municipales por ser considerado responsable de la lentitud del tráfico, de la falta de higiene de las calles y hasta del aumento de la delincuencia[83]. El distrito de San Isidro es uno de los que más ha lidiado con ellos, muchas veces con una represión desmedida, de la cual citaremos algunos casos como lamentables ejemplos.

Poco tiempo antes de comenzar esta investigación, la tarde del 5 de enero del año 2005, Christian Freddy Venancio Huapaya (22), un vendedor de jabones y peines en la avenida Javier Prado, fue duramente golpeado por el personal de la Municipalidad. Luego de dejarlo mal herido y sin auxilio médico, los testigos de los hechos y compañeros de Venancio lo llevaron a una clínica local en la cual lamentablemente falleció horas después[84]. Aunque inicialmente el alcalde de San Isidro, Jorge Salmón, no reconoció los hechos, en los días siguientes la investigación policial demostró que el pobre vendedor había sido asfixiado por los serenos mientras se le incautaba la mercadería[85]. La indignación de la familia y de sus compañeros de labores fue tal, que semanas después casi linchan al principal inculpado del crimen mientras reconstruían los hechos[86]. Lamentablemente, como ocurre frecuentemente con la justicia peruana, recién a fines del año 2015 se decidió que el municipio de San Isidro debía pagar una reparación civil a los padres del infortunado joven, consistente en poco más de medio millón de soles[87]. El papá, Freddy Venancio Portilla, también vendía en las calles del mismo distrito y era testigo de la forma en que se perseguía la venta ambulatoria. Su reclamo era claro: «no somos animales, somos seres humanos también, tenemos el derecho a trabajar pero todo por conducto regular, así como dicen, con las órdenes de la municipalidad, pero ellos no puede ser que actúen de esa manera»[88].

[83] La misma realidad se observa en Santiago de Chile, los vendedores en las pistas son el ejemplo más extremo del comercio ambulante (Prealc, 2008, p. 41).

[84] *La República*, 6-5-2005, «Joven perece en desalojo de ambulantes en San Isidro».

[85] *La República*, 7-1-2005, «Forenses confirman que policías ediles estrangularon ambulante».

[86] *La República*, 15-7-2005, «El crimen de un joven ambulante».

[87] *Perú21*, 19-11-2015, «San Isidro: Municipalidad deberá pagar S/.571 mil a padres de joven que murió por golpiza de serenos».

[88] *América TV*, 19-11-2011, http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/indemnizaran-padres-ambulante-que-murio-asfixiado-serenos-hace-10-anos-n207513, fecha de consulta: 5/3/2017.




Figura 17. Calles de la avenida Javier Prado en San Isidro con alta densidad de tráfico y 'pisteros'. Jorge Paredes Quevedo, «El infierno del transporte público en Lima», http://desdelacancha9.blogspot.pe/2016/06/el-infierno-del-transporte-publico-en.html, fecha de consulta: 5/3/2017; y Renzo Arrieta, «Las diversas caras de la combi» en http://renzoarrieta.blogspot.pe/, fecha de consulta: 5/3/2017.

En ese punto álgido de la ciudad, el cruce de la avenida Javier Prado con otras importantes arterias, la situación se repite con frecuencia. Por ejemplo, una pareja de ambulantes, Jhon Solís y Pilar Santos, denunciaron haber sido agredidos por serenos mientras ofrecían desayunos al paso. La Sra. Santos dijo que «aunque sabe que está prohibido el comercio ambulatorio en San Isidro, seguirá vendiendo desayunos porque así no le hace mal a nadie y con eso puede llevar el sustento a su familia»[89]. En otro lamentable caso, los serenos del distrito golpearon duramente a un transeúnte que intentó defender a una vendedora ambulante que estaba siendo agredida por el personal del municipio[90].

Este contexto tenso y peligroso causa que los 'pisteros' tengan una actitud recelosa y hasta agresiva con los extraños, lo que hace difícil poder acercarse a ellos. Solo la tenacidad de dos de los asistentes de investigación, María Elena Gushiken y Luis Miguel Silva-Novoa (Proyecto DAI-3495, 2007) permitió ganarse la confianza de algunos de ellos, a quienes lograron interrogarlos mientras compartían su almuerzo cotidiano[91], para evitar que pierdan tiempo si intentaban abordarlos mientras trabajaban en las calles. Allí se descubrió que los vendedores llamaban a su tipo de trabajo 'pistear', para diferenciarse de aquellos que subían a las combis y otros medios de transporte, con quienes rivalizaban.

[89] *El Popular*, 19-9-2014, «Ambulantes denuncian agresión de serenos de San Isidro»; también «San Isidro: serenos 'matones' agreden a otro vendedor ambulante (VIDEO)», http://www.elpopular.pe/actualidad-y-policiales/2015-11-20-san-isidro-serenos-abusivos-agreden-otro-vendedor-ambulante-video, fecha de consulta: 4/3/2017.

[90] *El Comercio*, 19-11-2015, «San Isidro: fiscalizadores agarraron a golpes a motociclista».

[91] Luego se determinó que los almuerzos eran ofrecidos por un ex 'pistero' que descubrió el negocio.

Para comprender mejor este trabajo, ambos asistentes compraron algunos objetos para vender ‘pisteando’, descubriendo, al no tener mucho éxito, las dificultades de esa labor. Esta estrategia de observación participante logró frutos importantes, mientras vendían recibían consejos de los ‘pisteros’ y les explicaban algunas de sus destrezas. Gracias a esta osada táctica se ganaron la confianza de uno de los veteranos de las calles, a quien identificaremos como ‘Saladito’, trabajador que accedió a explicar varias características del oficio.

‘Saladito’ tenía más de 30 años en esta labor, comenzó a los 12 años a fines de la década de 1970 vendiendo las siempre necesarias bolsas de basura en el trébol de la avenida Javier Prado[92]. Luego ofreció lo que llamó ‘novedades’, género que iba desde los juguetes hasta mapas, cuadros, reproducciones de pinturas, entre otros objetos. En el momento de la entrevista se dedicaba a la venta de libros. Señaló que los ‘pisteros’ cuidan de que otros vendedores no entren en el espacio que controlan, salvo que vendan un producto diferente a los demás. Los libros que ofrecía, en ediciones ‘pirata’ que variaba aproximadamente cada dos meses, los vendía hasta las ocho de la noche, luego recogía su mochila escondida en la berma central de la avenida y se retiraba a su casa. En los momentos en que el negocio no funcionaba también trabajaba como albañil, pero la mayor parte del tiempo se ganaba la vida ‘pisteando’.

Por causa de la dura represión que recibían los ‘pisteros’ —los vendedores recordaban con precisión los nombres de los alcaldes de San Isidro— se generó una red de solidaridad entre ellos. En algunas oportunidades se defendían entre todos, acudiendo a las calles en que se estaba produciendo algún decomiso de mercadería por parte de los serenos. Sin embargo, también tienen reglas que todos deben respetar, por ejemplo, no incomodarse entre sí. Por esta razón expulsaron de la zona a un vendedor de sogas para saltar, quien pasaba demostrando su uso, lo cual perjudicaba el contacto entre los ‘pisteros’ y sus clientes. Estas redes solidarias permiten que se generen jerarquías entre los más antiguos y el resto de ambulantes, lo que mostró indicios de que los primeros, más que vender, dirigían y supervisaban el orden de las calles. Además, estos vínculos les permitían organizar eventos con el objeto de reunir capital por medio de las usuales «pollladas»[93].

Las estrategias de venta estaban bien establecidas. Una de las primeras era reconocer con claridad el tiempo que demoraba el cambio de luz del semáforo, para retirarse a tiempo de la vía. En ese sentido, un consejo práctico que ofreció el entrevistado fue nunca perder el contacto visual con los conductores, porque de lo contrario se podría sufrir accidentes. Otros detalles que reveló fueron que

[92] Los siguientes párrafos están basados en Martín Monsalve (2007).

[93] Para una descripción de la actividad y su función solidaria véase Béjar y Álvarez (2010).

los productos deberían estar presentables, ofrecidos con higiene y ordenados, y de preferencia, mostrar un solo tipo de objetos para no confundir al conductor. 'Saladito' por su antigüedad en la zona y el contacto diario que disfrutaba con los automovilistas, de acuerdo con su testimonio, logró tener una 'clientela' a la que incluso le ofrecía crédito. También escuchaba los pedidos de sus compradores y recomendaba algunos libros de acuerdo con sus perfiles. Él era consciente de que los textos que vendía estaban dirigidos principalmente a los empresarios, por eso eran novelas, libros de marketing o autoayuda. Para evitar perder su capital en los decomisos, no ofertaba todo lo que tenía, guardaba en otro lugar un buen conjunto de objetos que le permitiría recuperarse ante cualquier eventualidad[94].

Un aspecto interesante es que en realidad él no comenzó eligiendo ser 'pistero'. Según su testimonio, un antiguo jefe de un empleo lo dejó en el trébol de avenida Javier Prado con un paquete de bolsas para vender, posteriormente la empresa quebró y continuó la labor por su cuenta. Luego de una buena etapa en ese lugar, la construcción de un intercambio vial en la zona lo obligó a buscar otro espacio, mudándose al cruce de las avenidas Javier Prado y Arenales. Allí comenzó a vender las novedades llegadas por medio del contrabando, antes que las cadenas de supermercados ofrezcan los mismos productos; luego se dedicó a la venta de libros. Esta inestabilidad quizá influyó para que no tenga una imagen positiva de su futuro, su labor claramente era de supervivencia y era imposible pensar en una formalización del negocio.

Aunque no es una fuente de información abundante, la entrevista a 'Saladito' revela el caso de los vendedores con mayor inestabilidad en Lima y los que sufren la mayor cantidad de violencia y accidentes. Sin embargo, paradójicamente son los que mejor revelan la esencia del comercio ambulatorio consistente en acercar la oferta al comprador y no esperar con pasividad su llegada. Su gran movilidad y capacidad de adaptación a la demanda les permite ofertar colectivamente una gran gama de productos, lo que le ahorra tiempo a los conductores atrapados en el tráfico. En ese sentido, como Monnet, Giglia y Capron (2005) han demostrado, este tipo de venta es el resultado de la propia evolución de la metrópoli que exige desplazamientos más lejanos y que demandan mayor tiempo. En una ciudad como Lima, al igual que en otros casos, por ejemplo, si uno tiene sed o hambre y está en algún vehículo, no se baja a comprar, es muy probable que en el camino se ofrezcan bebidas. Además, tenemos un mapa mental de la capital en el cual reconocemos en qué esquina podríamos encontrar un vendedor 'pistero'. Usualmente nadie tiene en su lista de compras hilos, agujas o cortaúñas, pero una vez que los tenemos

[94] Es la misma estrategia de los vendedores de los cruces en Santiago de Chile (Prealc, 2008, p. 41).

delante mágicamente recordamos la necesidad de adquirirlos. Así, el 'pistero' no desaparecerá a pesar de la dura represión, es un resultado de nuestra forma de vida.

Fuerza emprendedora: el guachimán

Centinela de las noches, me dicen el guachimán
mi deber es ver los coches de un barrio residencial;
soy testigo de indecencias
de manera muy casual,
el guardián de confidencias,
terapeuta nocturnal.
Porque yo soy el guachimán,
no solo toco pitos, ¡yo soy mucho más!
Yo voy a internet, navego en la web,
me gusta la poesía,
Beethoven también.
Guachimán, I'm the man, the man, the man!
Guachimán, I'm the man, the man, the man!
Me entristecen ciertas cosas y me alegran otras más,
unos mueren, otros nacen;
unos llegan y otros van.
Veo a los chicos que han crecido y en la vida han triunfa'o
ellos son una esperanza,
tabla de mi salvación.
Porque yo soy el guachimán,
no solo toco pitos, ¡yo soy mucho más!
Yo voy a internet, navego en la web,
me gusta la poesía,
Beethoven también.
Guachimán, I'm the man, the man, the man!
Guachimán, I'm the man, the man, the man!
Y a pesar de todo,
hay gente mezquina que no valora el trabajo del guardián
y me pagan lo que les parece,
¡si hasta mis perros han tenido más suerte que yoooooo!
Porque yo soy el guachimán
No solo toco pitos, ¡yo soy mucho más![95]

[95] Letra de la canción «Guachimán» del grupo La Sarita, incluida en el disco *Danza la raza* (2010).

Como se puede notar a lo largo de estas páginas, la situación de la capital durante los años 1980 fue especialmente peligrosa, crítica y caótica. La violencia subversiva y delincuencial azotaban cotidianamente la ciudad, lo que aumentó el clima de inseguridad que siempre existe en Lima. La policía era desbordada por la situación, los bajos salarios, el notable aumento de la población y la escasez de efectivos trajeron como consecuencia la disminución del número de efectivos per cápita. Además, por causa del terrorismo urbano era usual que la policía no contase con muchos efectivos ni patrullas para cuidar las calles y barrios; ante esa situación la solución fue contar con vigilantes privados. En el año 1986 se contaba con 120 mil policías, mientras que, en el 2006 se redujo a 92 mil (Arias, 2009, p. 56).

Para brindar algún tipo de solución ante estos problemas surgieron empresas que ofrecían seguridad. La empresa Boxer afirma que comenzó a operar desde mediados de la década de 1970[96]. En 1985 comenzó a operar la empresa Hermes, especializada en la custodia y transporte de valores en camiones blindados, pero todavía no ofrecía vigilantes[97]. Actualmente se registran más de 450 empresas dedicadas a la seguridad, con más de 50 mil vigilantes formales y unos 25 mil informales (Arias, 2009, p. 55). Sin embargo, esta no fue la solución para todos aquellos preocupados por su seguridad.

A mediados de la década de 1980 se registró el uso de la palabra «guachimán» o «huachimán» para referirse al vigilante privado, vocablo proveniente del término *watch man*. En 1984 el programa cómico «Risas y salsa», uno de los más populares de todos los tiempos, presentó al personaje llamado Guachimán Pacheco, interpretado por el popular actor Adolfo Chuiman[98]. Usualmente trabajaban en solitario y bajo su propio riesgo, contratados por comerciantes o ciudadanos que deseaban contar con seguridad ante la desconfianza o la falta de efectivos policiales[99]. Esto se evidencia en el uso flexible de sus servicios, por ejemplo, las mujeres dedicadas a la prostitución contrataron a un vigilante para protegerlas de personas consideradas indeseables. Por otro lado, la necesidad de custodios llevó a que se generen empresas informales, una de las cuales estuvo bajo el mando de Dionisio Romero, homónimo del célebre banquero, en La Parada[100].

---

[96] Boxer, «Aspectos que nos diferencian», http://boxer.com.pe/#Aspectos, fecha de consulta: 6/3/2017.

[97] Hermes, «Nuestra historia», https://www.hermes.com.pe/webhtb/index.htm, fecha de consulta: 6/3/2017.

[98] *Arkivperu.com*, http://www.arkivperu.com/el-huachiman-pacheco-1984, fecha de consulta: 6/3/2017.

[99] Juan Luis Dammert, *La República*, 28-6-1986, «Huachimán».

[100] *Expreso*, 24-2-1992 y 24-5-1992.

En el marco del Proyecto DAI-3495, se entrevistó a tres vigilantes, cuyos seudónimos son 'Lobo' (Pueblo Libre), 'Pajarito' (Los Olivos) y 'Johnny' (La Molina), con el objeto de profundizar en el conocimiento de la realidad de estos trabajadores en las calles. Un aspecto común de todos ellos es que se encargaban de vigilar principalmente la seguridad de las viviendas, calles y espacios públicos de los barrios. En ese sentido uno de los lugares más complicados son los parques, a veces frecuentado por «borrachines y fumones». Normalmente trabajaban de lunes a sábado, mientras que, los domingos era otra persona, llamado el 'descansero', quien se encargaba de cubrir el servicio. Se debe destacar que en el caso de Lobo su labor como vigilante comenzó en un mercado. Esta función todavía es una de las usuales, se emplea tanto para evitar los robos como para impedir el ingreso de vendedores ambulantes a las instalaciones de los mercados.

Antes de dedicarse a la vigilancia todos realizaron diversos trabajos, como vendedores, obreros, albañiles, etcétera; igualmente, los tres entrevistados eran licenciados de las Fuerzas Armadas, instituciones en las que aprendieron la defensa personal y el manejo de armas. Salvo el caso de Johnny, quien trabajaba para la empresa Boxer, los demás laboraban de manera independiente, adquirían sus uniformes en lugares como Las Malvinas. En algún momento de su historia personal, Lobo y José estuvieron contratados por empresas formales, las cuales les dieron de baja por diversas razones, entre ellas la edad. Para obtener el empleo usualmente recurrían a sus contactos personales y colegas de oficio, quienes les informaban de la necesidad de vigilantes en algunos lugares. La estabilidad de este trabajo es muy precaria, depende de la buena relación con los directivos de las vecindades y de su voluntad de cumplir con los acuerdos verbales. Todos tienen una larga historia de lugares en los cuales trabajaron como vigilantes, que pasaba por barrios, calles, parques y negocios que recordaban con alguna precisión.

Los peligros de trabajar en este oficio son muchos, por esa razón cuentan con diversas formas de apoyo, desde silbatos, alarmas y red de apoyo con el serenazgo y policía de cada distrito. Esta realidad se evidencia desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en 1992 un vigilante llamado Alejandro Sifuentes falleció por la explosión de una bomba camuflada en un parque zonal[101]; a principios del siglo XXI unos delincuentes asesinaron a un par de vigilantes en el Rímac, Isidro Layme (35) y Julio Flores (40), entre otros casos[102].

101 *Expreso*, 2-3-1992, «Bomba camuflada en bolsa destroza a guardián de parque recreativo».

102 *Liberación*, 15-9-2001, «Caen criminares que asesinaron a dos vigilantes en el Rímac»; 4-9-2001, «Asesinan vigilante en frustrado asalto a casa de máquinas tragamonedas» y 26-10-2001, «Estrangulan vigilante para robar medicamentos».

Solo José llegó a portar un arma mientras trabajaba en las calles de forma independiente, pero en un intento de robo de vehículo los delincuentes se la arrebataron[103]. Sin embargo, especialmente en la experiencia de José, la prevención de la delincuencia les causa graves complicaciones. Por ejemplo, en el tiempo que trabajó en una conocida discoteca limeña se encargó de evitar la introducción de droga en el local. En más de una oportunidad tuvo que intervenir a los clientes que pretendían usarlas en el interior, hecho que, en un par de casos, según su testimonio, lo enfrentó a un par de policías que lo amenazaron de muerte si revelaba su adicción. En otra ocasión recibió un botellazo en la cabeza mientras caminada por 'la calle de las pizzas' (Miraflores), presumiblemente lanzado por uno de los intervenidos por él, y perdió el conocimiento. En varias oportunidades ha frustrado el robo de vehículos o contribuido con el arresto de algunos de los ladrones, siendo amenazado de muerte por los delincuentes. Por lo menos una vez estuvo a punto de ser asesinado en su casa por una banda que lo tenía en su mira.

Para los vigilantes el trabajo que realizan es físicamente exigente. A pesar de esto se acostumbran a esta labor, como dijo Pajarito: «me he acostumbrado ya. Claro que me gustaría meterme a otra chamba, pero está difícil pe'... Pero bueno, qué se puede hacer. Ya me acostumbré ya, ya me gusta un poco ya, tranquilo. Y después, como te digo, acá la zona es tranquila. Tal vez siendo en otro lado no sé, porque dicen que en otros lados es más difícil... así es». Mientras que, Johnny señala que el oficio es muy cansado, se realiza de pie por muchas horas, «no te puedes ni sentar en el día porque entran y salen, entran y salen. Aparte que vienen proveedores, visitas, vienen este… taxistas, asu tantas cosas». A pesar de todas estas dificultades y peligros, cuando trabajan de manera independiente, los vigilantes carecen de todo tipo de protección de salud, seguro de vida y pensión. 'José' creía «que el gobierno debería ver sobre esto, de que muchas veces están desamparados, no tienen seguro… digamos, este… una estabilidad para ellos también ¿no?, porque arriesgan mucho»[104].

Las décadas de la crisis (1980-2000) fueron el contexto de la aparición de numerosos oficios desarrollados en las calles, la gran mayoría de ellos sumamente precarios y con pocas opciones de acumulación de recursos. Se trata de ocupaciones de supervivencia, ingeniosas y atrevidas, pero también desgastantes y peligrosas.

---

[103] No siempre las armas fueron utilizadas solo para repeler a asaltantes o evitar crímenes. Lamentablemente también fueron causantes de incidentes en que los vigilantes las utilizaron en hechos delictivos. *Expreso*, 6-10-2001, «Vigilante ebrio dispara contra padre y hermano».

[104] Además de regular la actividad de las empresas dedicadas a la seguridad (ley 28879, del 31 de marzo de 2011), poco se ha hecho en favor del vigilante independiente. Lo más importante, pero solo simbólico, es la creación del Día del vigilante de seguridad privada, todos los 11 de marzo (resolución directoral 1987-2010-IN-1704 – Sucamec).

Esta multiplicidad de actividades genera la idea del peruano como ingenioso y «chambeador», sin reconocer que la gran mayoría de esas ocupaciones no son las ideales incluso para sus propios ejecutores. La evidencia señala que llegaron a ellas por diversas causas, casi nunca fue su primera opción de vida y se quedaron en ellas por no contar con otras más. Su difusión se produjo gracias al debilitamiento del Estado en diversos frentes, caos en el manejo económico, ausencia de recursos para el control de las calles y la seguridad ciudadana, entre otros factores; además, esas actividades respondieron a problemas concretos tales como la ausencia de inversión pública, una oferta más dinámica y más barata, nuevas necesidades, etcétera.

Por otro lado, estas nuevas ocupaciones no solo sirvieron para que muchos limeños y sus familias sobrevivan a la grave crisis económica, también impactaron en los imaginarios urbanos, al crear nuevos personajes que se han convertido en los limeños de hoy, más allá de las resistencias de quienes los consideran elementos foráneos. Quizá lo más importante de toda esta historia es rescatar el enorme esfuerzo que realizaron miles de personas, hombres, mujeres y niños, para no sucumbir a todos los problemas que he señalado. Con todo mérito podrían portar la insignia de los verdaderos supervivientes.

Epílogo
¿El ave fénix? Las cenizas de la ciudad

En 1996 Alberto Andrade (1943-2009), exitoso alcalde de Miraflores, alcanzó el sillón municipal con su partido Somos Perú, luego de derrotar a Jaime Yoshiyama, representante del partido de gobierno. Nacido en los Barrios Altos, criado y educado en Lima, representaba a la tradición limeña en medio de una ciudad formada por migrantes y sus descendientes. Su gestión, considerada por la mayoría de los habitantes limeños como una de las más exitosas de todos los tiempos, mereció su reelección para un segundo periodo y gobernó la capital entre los años 1996 y 2002. Esta parte final no tiene como objetivo analizar su gestión en totalidad, sino mostrar de qué manera las políticas neoliberales aplicadas desde el año 1990 y consolidadas durante su gestión no acabaron con los principales problemas de la ciudad; incluso en algunos casos sus efectos causaron nuevas dificultades, especialmente en cuanto a la salud pública. Por otro lado, la recuperación del centro histórico fue acompañada de un discurso silenciosamente excluyente de los procesos sociales y culturales de las últimas décadas. La ciudad renació asumiendo que durante décadas estuvo muerta, lejos de su verdadera esencia histórica, la cual pretendió retomar con su política municipal[1].

Como señala Ludeña, la segunda mitad de la década de 1990 representa la consolidación del neoliberalismo económico y su correlato urbano, proceso que necesitaba de un complemento: un centro histórico, «la ciudad de Fujimori necesitaba de la ciudad histórica de Andrade como la ciudad del alcalde limeño precisaba de la ciudad neoliberal de Fujimori» (2012, p. 63). Este centro es funcional a una nueva elite que es cosmopolita, pero que urge de una identidad

[1] Un inventario de los problemas que debía enfrentar al inicio de su mandato en *Caretas,* 1397, 18-1-1997, «Lima».

que le otorgue sentido. Por eso la campaña de Andrade, titulada «Volvamos al centro», estuvo dirigida a las clases altas, «consigna discriminatoria que supone no solo la presunción de un centro perdido, sino la idea de que en las últimas décadas el centro hubiera estado vaciado de habitantes, cultura o historia» (Ludeña, 2012, p. 63). Como señala el autor citado, tras este proyecto de recuperación se escondían estrategias de exclusión:

> ¿Para quienes, para qué y hasta qué punto se pretende recuperar el centro tradicional de la ciudad? ¿Se trata solo de revertir el proceso de degradación que se registraba como inexorable en los últimos años? ¿O se trata de evitar que el centro termine de consolidarse como un «centro popular» dispuesta [sic]para la Lima migrante e imposible de ser revertida? [sic] ¿Se trata de ir en la búsqueda del centro perdido? ¿O se trata de refundar un nuevo centro coherente con las transformaciones experimentadas por Lima en las últimas décadas? ¿Cómo refundar un centro si el poder que lo requeriría para lograr autorrepresentarse lo hace muy bien en sus múltiples centros móviles de poder como son el nuevo barrio financiero de San Isidro, los nuevos malls de los noventa y los centros mediáticos del sur de Lima? Los cambios producidos dejan más interrogantes que certezas. Sin embargo, algo es seguro: que esta etapa de cambios que experimenta el centro es una etapa en la que es posible advertir las señales del fin e inicio de un nuevo ciclo histórico en la transformación de este importante espacio de la ciudad (Ludeña, 2012, p. 75).

Uno de los ejemplos emblemáticos fue la conversión del antiguo campo ferial Polvos Azules en la Alameda Chabuca Granda, un espacio para escenificar las tradiciones limeñas, especialmente en la música, gastronomía y repostería[2]. La elección de la célebre compositora no proviene únicamente de su reconocida trayectoria musical, ella desde la segunda mitad del siglo XX comenzó a representar a la tradición limeña por medio de sus composiciones que le cantaron al imaginario urbano de la ciudad: «La flor de la canela» (1950), «Zeñó Manué» (1956), «Fina estampa» (1956), «José Antonio» (1957), entre otras célebres obras.

Por otro lado, desde la década de 1960, César Revoredo y su proyecto cultural de la Casa de la Tradición, reunió un conjunto de intelectuales, políticos, personalidades y miembros de las elites residentes en la capital con el objetivo de rendirle homenaje a la Lima tradicional, o lo que consideraba que era parte de ella. Entre sus actividades durante los inicios de la década de 1960, la Casa realizó conferencias de diverso tipo, entre ellas, algunas dedicadas a Francisco Pizarro, fundador de la ciudad; otras dirigidas a homenajear a instituciones como las

[2] Isabel Granda Larco, conocida como Chabuca Granda (1920-1983), prolífica e importante compositora de música peruana.

Fuerzas Armadas y sus héroes. También realizaron conciertos de música criolla y de otras expresiones del folclor peruano. Además, desarrollaron actividades didácticas destinadas a atraer a los escolares a la Casa, la cual ofrecía maquetas de la antigua ciudad colonial con la Plaza de Armas en el centro (Casa de la Tradición, 1963, pp. 328-329). La idea era que la cultura criolla representaba totalmente a la capital y, finalmente, al país. Esto sería lo que posteriormente se plasmaría en la Alameda.

En el discurso inaugural de la casa (1960), César Revoredo enfatizó la importancia de la Plaza de Armas: «con sus torres catedralicias, como eminencias tutelares e inconfundibles darían a la maqueta que se hiciera el sello de autenticidad y permanencia para la fisonomía de Lima [...] nuestra Plaza de Armas es la gran ágora de la historia y de la geografía del Perú». Y, dentro de ella, el símbolo fundamental es la pila de agua: «el gran personaje es la pila. Por ella discurre la savia fresca de la vida urbana. Guarda la memoria cinematográfica de los grandes hechos y divisa desde allí cómo descuellan pináculos que atisban la crónica, la leyenda y la historia» (Casa de la Tradición, 1963, p. 45). La memoria que querían recobrar estaba mucho más emparentada con la época colonial y republicana que con la oligárquica-señorial de principios del siglo XX. Además, para legitimar esta interpretación del pasado de la ciudad se consolidó la importancia de Ricardo Palma y de Francisco 'Pancho' Fierro. Este último sirvió para darle contenido visual a las estampas tradicionales, convirtiéndolo en el referente obligatorio de las tradiciones limeñas.

La ventaja que tiene esta lectura de la ciudad es que facilita la incorporación de todos los grupos sociales, sin renunciar a su etnicidad. Las acuarelas de Fierro, como las tradiciones de Palma y la literatura de principios del siglo XX, incluyen a negros, mestizos, blancos, etcétera, que realizan todo tipo de labores y también participan en las festividades, la religiosidad, la gastronomía y las diversiones como los gallos o los toros. Estas prácticas culturales serían reivindicadas por las elites, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, como una manera de distanciarse de los grandes cambios provocados por las migraciones; al mismo tiempo que convirtieron a la cultura criolla en el eje de la identidad nacional. Por esa razón, a pesar del espíritu aristocrático del proyecto, no es extraño que una personalidad como Nicomedes Santa Cruz haya asistido a leer sus décimas en la Casa (Casa de la Tradición, 1963 p. 303).

Chabuca Granda fue una de las entusiastas asistentes a las conferencias y actividades de la Casa (Casa de la Tradición, 1963, p. 169), su renombrado vals «La flor de la canela» fue considerado dentro de la antología de la tradición publicada por Revoredo (Revoredo, 1961, pp. 230-231). De este modo la compositora fue reconocida como la voz que le cantaba a las tradiciones limeñas, desplazando a otros autores más tempranos y que se consideraban las grandes figuras de la música criolla, como Felipe Pinglo, cuya producción no fue considerada en ninguna de

las publicaciones mencionadas. Solo se rindió homenaje a otra personalidad de la música, asociada especialmente con la elite: Rosa Mercedes Ayarza. Además, fue la madrina de la inauguración de la Casa en 1960 (Casa de la Tradición, 1963, pp. 35).

Si bien en 1994 se comenzó a gestar la recuperación del centro histórico, sería con Andrade que ese proyecto se consolidaría. Andrade se inspiró en el imaginario urbano palmiano-panchofierrista, el cual otorga mayor énfasis al periodo colonial y republicano. Evidentemente no se basó en estos ideales porque haya conocido —al menos no consta— las propuestas de la Casa, sino porque esos principios eran comunes a las elites de fines del XX, pero habían germinado en espacios como los que Revoredo auspició. Por esa razón Andrade se concentró en lo que se consideraba criollo, de trasfondo colonial:

> la respuesta tomada por la Municipalidad frente a esta imagen de conflicto y violencia que se vivía en la Lima de mitad de la década de 1990 tuvo un tono que se inclinó por reafirmar el elemento costeño, por una mirada hacia atrás que trató de rescatar aquellos valores perdidos de una ciudad que ya había dejado de ser aquella de antaño, imagen que pasaba a convertirse en el objeto de deseo de la nueva gestión municipal (Blaz, 2010, p. 6).

En el año 1996, a poco de iniciado el mandato de Andrade y coincidiendo con la visión de la elite limeña representada por la Casa en la década de 1960, Andrade inició la recuperación de la Plaza de Armas, rebautizándola con su denominación colonial de «Plaza Mayor». Una anécdota que refleja la tensión de la época es el hallazgo de un cañón enterrado en la plaza, posiblemente desde los tiempos de la Independencia, Andrade lo liberó de su sepultura y lo reubicó en el balcón municipal, desde donde apuntaba hacia el Palacio de Gobierno[3].

En mayo de 1995, meses antes de la elección de Andrade, el alcalde Belmont comenzó a aplicar un plan de reforma del transporte público en la ciudad[4]. Este consistía en impedir el ingreso de vehículos no autorizados en el centro histórico, estableciendo un perímetro alrededor de la Lima cuadrada, declarada el año anterior Patrimonio Cultural de la Humanidad. El plan incluía una reubicación del comercio informal de la zona, al amparo del Reglamento de la Administración del Centro Histórico de Lima, ordenanza 062 del 18 de agosto de 1994. Los comerciantes no fueron impedidos de ingresar, pero las medidas de reordenamiento los afectaron por el caos que se generó; además, intuían un inminente desalojo. El municipio comunicó que se aplicaría un plan de reubicaciones de los vendedores debidamente

[3] *Caretas,* 1436, 17-10-1996, «Plaza en la mira».

[4] Véase Martuccelli (2015, pp. 186-187).

empadronados, medidas apoyadas por el Patronato de Lima[5]. Pocas semanas antes del inicio de la gestión de Andrade, el municipio inició una jornada de limpieza del centro, apoyado por el personal de Miraflores, encabezada por su alcalde y futuro burgomaestre de la ciudad. Como en otras oportunidades de la historia de la capital, cientos de comerciantes ambulantes apoyaron la iniciativa bajo el liderazgo de su dirigente Marcelo Rojas. Además, fieles a su tradición de negociación, dialogaron con Andrade, a quien le expresaron que estaban dispuestos a acatar el reordenamiento y habían tomado la dura decisión de «expulsar a los vendedores de comida, si es que no quieren cambiar de giro, y a los que pernoctan en las calles, sector que solo significa un dos por ciento del total de diez mil vendedores ambulantes». Agregó que estaban dispuestos a «aceptar cualquier propuesta siempre y cuando no nos perjudique económicamente. Tenemos expectativa en el diálogo que sostendremos porque sabemos que [el alcalde electo] es comprensivo, sensible y que gusta de comunicarse». Esta conocida estrategia de negociación añadió elementos sensibles a la opinión pública, de los cuales eran conscientes los ambulantes. El dirigente afirmó que organizarían un cuerpo de vigilantes compuesto de 1500 integrantes para vigilar las calles, también se comprometieron a comprar en la zona edificaciones de la municipalidad para formalizar sus negocios. Contrariamente a lo ocurrido en las décadas anteriores, esta vez la estrategia no sería suficiente[6].

El proceso de reelaboración de la memoria histórica de Lima como criolla se consolida con la alcaldía de Andrade, quien se encargaría de soslayar el elemento urbano andino-indígena que había contribuido con los grandes cambios de la segunda mitad del siglo XX[7]. Su proyecto se orientó mucho más hacia la valorización turística de la capital que a la recuperación de la calidad de vida de los habitantes del centro (Morán, 2013, p. 12). Su discurso de «patrimonialización» puso en valor inmuebles del centro, por medio de la inversión privada, lo que generó un tipo de memoria urbana que excluyó otras prácticas populares que se habían creado. Es un nuevo tipo de representación que, en el caso de Lima, tomó como base la tradición reinventada de lo criollo (Morán, 2013, pp. 20-21). Como señala Cánepa, durante la gestión de Andrade, «el municipio empezó a patrocinar la celebración de la Virgen del Carmen de Barrios Altos […] esta iniciativa se realizó como parte de las actividades culturales dirigidas a revitalizar la identidad criolla del centro histórico» (2006, p. 225).

---

5 *La República*, 23-5-1995, «Desconcierto y caos en el centro de Lima».

6 *La República*, 11-12-1998, «Obreros municipales y ambulantes limpian calles céntricas de Lima».

7 Las estrategias de negociación cultural de los migrantes en el espacio urbano están analizadas en Cánepa (2006).

El 14 de mayo de 1997 comenzaron los desalojos de los ambulantes del centro de Lima. El alcalde Andrade denunció el poco apoyo policial que recibió, motivado por el interés del gobierno central en que fracasen las medidas y desprestigiar su mandato municipal. El operativo estuvo a punto de naufragar por causa del apoyo de los policías a los ambulantes, en lugar de colaborar con el municipio. Al grito de «¡adelante carajo!», Andrade arengó a los serenos municipales para continuar con el desalojo. Aunque no logró su objetivo inmediatamente, fue la señal de que esta vez la alcaldía estaba decidida a lograr resultados concretos, lo que se logró completamente en los siguientes días[8]. A fines de mayo el Mercado Central lucía desocupado de ambulantes, lo mismo se hizo en la Plaza San Martín, la cual fue reinaugurada con una fiesta y la asistencia de los exalcaldes Luis Bedoya Reyes y Alfonso Barrantes[9]. En este caso la plaza sería paulatinamente recuperada por diversos personajes de la calle, hasta un segundo operativo en el año 2001.

El 7 de julio de 1997 los comerciantes de Polvos Azules entregaron al municipio, con alguna tensión, el terreno del campo ferial; los vendedores desde fines del año anterior habían comprado un gran terreno para trasladarse, ubicado en el Paseo de la República, en el distrito de La Victoria. En el espacio del campo ferial se construyó la alameda. El éxito de estos desalojos se debe, de acuerdo con Morán (2013), al uso de estrategias de disuasión y de convencimiento del apoyo que el municipio les daría para abandonar las calles. Además, lograron el soporte de las dirigencias que aceptaron los cambios.

Como señala Morán, la Alameda Chabuca Granda consolidó una memoria de lo criollo, que rescataba lo colonial y republicano, pero no como factor excluyente en la ciudad, sino en el sentido que tenía la propuesta de Revoredo. La Alameda permite la venta de diversos potajes representativos del Perú, especialmente de la costa y de la capital, y la venta de artesanías, compatible con las reglamentaciones vigentes (Morán, 2013, p. 91). Sin embargo, la cercanía del espacio con las edificaciones más emblemáticas de la historia colonial y republicana, el propio entorno del río y el tipo de gastronomía dominante, indican que lo criollo es la fuerza que aglutina a las demás. Se utilizó la Alameda como un escenario de la cultura popular que forma la identidad limeña, adecuadas a la función turística del espacio, «adecentadas» para ser aceptables (Morán, 2013, pp. 133-134). Como Elsie Guerrero, una de las funcionarias del gobierno de Andrade, le comentó a Morán, se consideró solo a aquellas actividades compatibles con la tradición: «los vendedores de emoliente,

[8] Gerardolipe, «Alberto Andrade desalojo de ambulantes de Lima», 11-1-2012, https://www.youtube.com/watch?v=8nrg4Ncg4iw, fecha de consulta: 6/3/2017; también Macera y Soria (2015, pp. 204-205).

[9] *Caretas,* 1467, 29-5-1997, «Andando con Andrade».

los lustradores de calzado, o sea cosas compatibles con la vocación que se le quería dar al centro, que queríamos promover» (Morán, 2013, p. 137). A este conjunto de actividades las bautizaron como «grupo de la red turística», convirtiéndose en un adorno del espacio urbano (Morán, 2013, pp. 138-139). En coherencia con lo declarado el 18 de junio de 1998 por la funcionaria, 200 lustrabotas fueron capacitados como guías turísticos de la ciudad, en coordinación con los dirigentes de su gremio[10].

Posteriormente el alcalde continuó la recuperación de otros espacios de la ciudad, no identificados con la Lima colonial, pero igualmente emblemáticos[11]. Esto podría indicar que en sus prioridades el centro colonial y republicano se convirtió en el objetivo primordial, base del imaginario urbano que se quería rescatar; luego de intervenir en su recuperación continuó con otros lugares identificados con la Lima de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Por ejemplo, a principios del año 1998 se anunció la construcción de un centro cultural en el Parque de la Exposición[12].

Otro caso interesante es el de la Plaza San Martín, lugar en el cual muchas personas desde hacía décadas se ganaban la vida con diversas actividades, legales e ilegales. A principios del siglo XXI en ella no se reconocía más que la presencia de delincuentes, sin considerar a las personas que se ganaban la vida honestamente. El 4 de julio de 2001 se retomaron los intentos fallidos de 1997, en un operativo municipal se 'limpió' la plaza de delincuentes, prostitutas y drogadictos «que habían convertido ese importante punto turístico en un lugar intransitable»[13]. En la madrugada del día 5 centenares de policías detuvieron a muchas personas acusadas de 'malvivir' «con el objeto de recuperar zonas del centro histórico tomadas por el hampa». Inmediatamente el municipio desplegó una continua vigilancia sobre la plaza, luego de informar que «no se permitirá que nadie pernocte en sus bancas y jardines. Tampoco que se consuma licor», se buscaba «darle a la plaza el atractivo turístico que nunca debió perder»[14]. Se declaró que el mismo operativo se realizaría en el Parque Universitario y otros espacios de la ciudad.

Esta reconstrucción de la memoria criolla de la ciudad explica por qué actualmente las vendedoras de comida, tan cuestionadas en el pasado, son aceptadas

[10] *La República*, 18-6-1998, «Más de 200 lustrabotas se desempeñarán como guías de turismo del Centro Histórico».

[11] Felipe Buendía, desde las páginas del diario *Expreso*, publicó una serie de crónicas de la vieja Lima, coincidiendo con la política del alcalde. Véase, 6-5-2001, «¡Lima de arrabal!»; 17-6-2001, «¡El reloj del Parque Universitario!»; 9-9-2001, «La calle Huaquilla» y 8-3-2001, «Roxana a las seis de la tarde».

[12] *Expreso*, 3-2-1998, «Levantarán centro cultural en antiguo palacio de la Exposición».

[13] *La República*, 5-7-2001, «Recuperan Plaza San Martín que había sido tomada por el hampa».

[14] *La República*, 5-7-2001, «Recuperan Plaza San Martín que había sido tomada por el hampa».

como representativas de las tradiciones limeñas con la condición de que ofrezcan algunos potajes en particular (anticuchos, picarones, chanfainita, entre otros) y se encuentren ataviadas de forma tal que simulen a las antiguas vendedoras o lo que se cree eran sus atuendos. En ese sentido, más que las representaciones de Fierro, lo que ha tenido enorme éxito es la vestimenta compuesta de lunares rojos o blancos, difundida en las últimas décadas como atuendo de las cocineras afroperuanas, más allá de la ausencia de evidencia histórica de la vestimenta. Por ejemplo, a diferencia de lo ocurrido en los años anteriores, las anticucheras y picaroneras se presentaron frente al Palacio Municipal invitadas por el alcalde Andrade para celebrar las fiestas patrias, las primeras ofrecían al público consumidor sus productos: «a solo cuatro soles la porción de rachi, pancitas y dos palos de anticucho»[15].



Figura 18. Leonor Lezama, vendedora en la Alameda Chabuca Granda. http://www.elpopular.pe/actualidad-y-policiales/2016-02-19-peru-los-picarones-mas-antiguos-se-hicieron-en-nuestro-pais. Fecha de consulta: 7/3/2017.

Sin embargo, con todos los méritos de esta política municipal que recuperó el uso de los espacios públicos, no todos los problemas urgentes de la capital fueron solucionados. Por el contrario, continúan como flagelos hasta el día de hoy. Por ejemplo, no se habían resuelto adecuadamente los problemas de abastecimiento de alimentos para la ciudad. Los antiguos mercados Central y Mayorista estaban desbordados por una demanda que superaba largamente su infraestructura y capacidad. Aun cuando la edificación del Mercado Central se encuentra en un lugar histórico, cuyo uso como lugar de intercambio se remonta a la época colonial, no fue considerado parte del patrimonio urbano, mucho menos La Parada. Por el contrario, la reivindicación histórica del centro pasó por su privatización en

[15] *Liberación*, 17-7-2001.

lugar de su recuperación por medio de la inversión municipal. El desalojo de los ambulantes del centro mejoró su valor inmobiliario, pero no para beneficio de los comerciantes formales o informales que lo ocupaban en ese momento sino para las inversiones privadas; así, esta revalorización del centro histórico fue funcional a la política neoliberal[16].

Como se sabe, desde décadas atrás se anunciaron proyectos de construcción de nuevos mercados y el traslado de los comerciantes de sus antiguos puestos. En 1992 el directorio de la Empresa de Mercados Mayoristas S.A. (EMMSA)[17], revivió el proyecto del Mercado Mayorista de Santa Anita con el objeto de trasladar a los vendedores de La Parada. La empresa, con el apoyo del presidente Fujimori, comenzó la venta de los nuevos locales, los cuales estarían disponibles a mediados del año 1993[18]. La situación del mercado de Santa Anita fue compleja desde su inicio. El terreno fue objeto de una violenta disputa entre diversos bandos que afirmaban ser los propietarios de los puestos y que se enfrentaron con piedras y armas desde julio de 1992[19]. Como conocemos, este proyecto solo se completaría de veinte años después luego de un violento desalojo, el cual tampoco logró la erradicación total de los comerciantes de La Parada[20].

En 1998, con Andrade a la cabeza, en lugar de reinvertir en su infraestructura, se decidió la subasta del emblemático Mercado Central, medida que fue rápidamente rechazada por los inquilinos de los puestos porque el precio base superaba largamente la capacidad de compra de los vendedores. La mayoría de ellos trabajaba en ese lugar más de una década y algunos por más de 30 años[21]. Al principio la base legal era la ley 26569, del 2 de enero de 1996, la cual permitía la venta de los mercados propiedad de los municipios, bajo tasación y hasta con 60 meses para pagar; esta disposición fue reemplazada por la ley 27304, del 15 de junio de 2000, que otorgó

---

[16] En junio del año 2001 la cervecería Backus y Johnston donó medio millón de dólares al municipio para la recuperación de la ciudad, *Expreso*, 1-6-2001, «Donación al Patronato de Lima».

[17] Empresa inicialmente propiedad del Ministerio de Agricultura, pero que desde el año 1987 pertenece completamente a la Municipalidad.

[18] *Expreso*, 19-3-1992, «Cierran 'La Parada' a fin de año».

[19] *Expreso*, 6-7-1992, «Batalla en mercado de productores: 20 heridos».

[20] El 25 de octubre de 2012 la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, decidió cerrar el acceso al Mercado Mayorista N° 1, desatándose un grave enfrentamiento entre la policía y los vendedores, que dejó dos muertos y más de cien heridos (*El Comercio*, 16-3-2014, «Cronología: La Parada y el fin de un largo y tortuoso camino»).

[21] *Expreso*, 24-1-1998, «Suspenden subasta del ex Mercado Central»; 8-10-1998, «Comerciantes marcharon hasta municipio»; 10-7-2001, «Comerciantes del Mercado de Frutas atacan municipio de La Victoria»; 12-7-2001, «Paro en Mercado de Frutas genera pérdidas diarias de S/. 2 millones» y *Liberación*, 12-7-2001, «Pérdidas en el mercado mayorista de frutas alcanzan los dos millones de soles diarios»

facultades a la Corporación de Formalización de la Propiedad Privada (Cofopri) para la adjudicación de los lotes vacíos o edificaciones dedicadas a mercados.

Facilitada por las leyes que permitían a los municipios la recuperación de su administración y la venta de los puestos de mercados, las medidas causaron enfrentamientos entre grupos de comerciantes entre sí y las autoridades[22]. Numerosos grupos de vendedores se resistieron a la entrega administrativa de los mercados, especialmente en el Mercado Mayorista N° 2 de Frutas de La Victoria. Fueron intensas las batallas judiciales entre el municipio metropolitano y el distrital, por un lado, y, por el otro, algunas asociaciones de comerciantes. Además, la situación se complicaba por el engorroso problema de las diferentes directivas que se atribuían la administración del mercado, enfrentándose entre sí. Estos problemas provocaron paralizaciones en el funcionamiento de los mercados de La Victoria, vitales para el abastecimiento de la capital[23]. En agosto de 2001 un operativo del municipio distrital para retomar el control del mercado de frutas fracasó por la cerrada defensa de los comerciantes quienes se atrincheraron en el interior con sus familias, a pesar de las frutas descompuestas y del inminente peligro del desalojo. Según el principal dirigente de los vendedores, Wilfredo Arana, se defenderían con todo ante la amenaza de perder su medio de vida[24].

Los gremios de comerciantes no se oponían totalmente a la venta de los puestos. Lo que exigían es que se realice bajo la ley 26569 que les permitiría contar con precios base más adecuados fundados en el arancel correspondiente; mientras que el alcalde Andrade pretendía desactivar esa ley y vender los puestos con su valor de mercado, cinco veces mayor al arancel, lo que alejaba la posibilidad de que los comerciantes adquieran los puestos. Así lo declaró Carlos Aguilar Contreras, secretario general de la Confederación de Trabajadores en Mercados del Perú. [25]

Semanas después Andrade anunció el relanzamiento del proyecto del Mercado de Productores de Santa Anita por medio de una licitación convocada por EMMSA en asociación con el Ministerio de Agricultura[26]. Esta noticia no impidió la continuación de los enfrentamientos entre los comerciantes y las autoridades, por el contrario, reforzó la posición de las asociaciones de vendedores interesadas en la privatización de los mercados en conjunto con los municipios[27]. Por ejemplo, el intento de desalojo de los vendedores del Mercado Mayorista N° 2 de Frutas

---

[22] *Expreso*, 25-1-2001, «Paro en defensa de la privatización del Mercado Mayorista».

[23] *Expreso*, 9-7-2001, «Comerciantes toman mercado mayorista de La Victoria».

[24] *Liberación*, 5-8-2001, «Comerciantes frustran operativo municipal para retomar administración de Mercado de Frutas».

[25] *Expreso*, 22-8-2001, «Comerciantes de mercados amenazan con paralizar».

[26] *Expreso*, 3-10-2001, «Relanzarán Mercado Mayorista de Santa Anita».

[27] *Expreso*, 27-10-2001, «Policías y comerciantes se enfrentan por control de Mercado de Frutas».

terminó en una gresca generalizada, con balas, piedras y hasta bombas molotov, con un saldo de decenas de heridos entre comerciantes, serenos del distrito de La Victoria, reporteros de televisión y periodistas. La prensa acusó a los vendedores de utilizar a delincuentes y pandilleros de la zona para rechazar el desalojo[28]. Estos enfrentamientos muestran que el municipio capitalino bajo la gestión de Andrade actuó, por un lado, al incorporar una idea de lo popular identificado con lo criollo en el espacio público; mientras que, desde su gestión de los servicios, aplicó una política neoliberal de privatización, sin incorporar a los mercados dentro del patrimonio de la capital.

Otras actividades de las calles fueron consideradas inadecuadas, más allá de su perjuicio o no a la ciudadanía, seguridad o higiene, siendo reubicadas siempre con la intención de mejorar la imagen turística de la capital, por ejemplo, los vendedores de libros y de calzados de la avenida Grau fueron desalojados pacíficamente. El operativo se realizó en horas de la madrugada con el apoyo de cientos de efectivos policiales y de serenazgo municipal, pero, de acuerdo con su dirigente Víctor Reyes, no habían sido notificados de su salida, por lo menos contaban con un nuevo lugar en el jirón Amazonas en el que se crearía la «Alameda de la cultura»[29]. El 3 de diciembre se inauguró el espacio, con la asistencia de la directora de comercialización de la Municipalidad de Lima, Elsie Guerrero; el director del diario *El Comercio*, Francisco Miró Quesada Rada y el reconocido historiador Pablo Macera. En el discurso inaugural, Uldarico Balvín, presidente de la Cámara Popular de Libreros, señaló que la alameda sería el «circuito cultural, ecológico y turístico más importante de Barrios Altos»[30].

En el año 2001 el municipio pretendió reorganizar en algo el caótico transporte público, al licitar las rutas y enfrentándose a los choferes que ya tenían concesiones[31]. Por ejemplo, se estableció que en la avenida Abancay solo deberían circular combis, ómnibus y taxis autorizados[32]. La informalización del transporte era tan grande que el entonces candidato presidencial Alan García utilizó en el cono norte una

[28] *Liberación*, 27-10-2001, «Cuarenta heridos dejo brutal enfrentamiento para tomar administración del Mercado de Frutas».

[29] *La República*, 9-11-1998, «Desalojan pacíficamente a comerciantes informales y libreros de la avenida Grau». En otros casos la violencia fue bastante grande, especialmente en La Victoria, *La República*, 28-4-2001, «Violencia en desalojo de ambulantes» y 27-4-2001, «Erradican materiales de construcción que vendían en calles de La Victoria».

[30] *Expreso*, 4-12-1998, «Inauguran 'Alameda de la cultura' en jirón Amazonas».

[31] *Expreso*, 10-1-2001, «Transportistas bloquearon vías de ingreso a Lima» y «Choferes anuncian paro nacional para el 18 y 19» y 20-7-2001, «Lima vivió jornada caótica por paro de transportistas y marchas» y *Liberación*, 10-8-2001, «El negocio del caos».

[32] *Liberación*, 3-7-2001, «A partir del lunes, solo podrán circulas combis y taxis autorizados por la avenida Abancay».

comitiva de mototaxistas para recorrer las calles de Comas, luego, en un mitin les ofreció crédito para la compra de unidades[33]. La situación se había complicado enormemente por causa de la injerencia de los municipios provinciales del Callao y Huarochirí, quienes habían otorgado permisos a una gran cantidad de unidades de transporte, sin la debida coordinación con Lima. Los transportistas concesionarios de la Municipalidad de Lima se oponían al funcionamiento del resto de asociaciones y de las unidades 'piratas'[34], y bloquearon las calles de la capital en protesta[35].

La privatización del transporte había tocado el inevitable fondo. No había mejorado su calidad y por el contrario, generó problemas de salud pública por causa del exceso de unidades y del incremento del número de accidentes por la temeridad de los choferes en su competencia por atraer pasajeros[36]. El municipio no fue capaz de resolver el problema en parte por la legislación vigente y el escaso apoyo del gobierno central. Solo en el año 2001, luego de un trágico accidente que costó la vida a dos mujeres de la Iglesia Cristiana Misionera Mundial, la Comisión de Transporte del Congreso solicitó al ministro de Transporte el diseño de un nuevo plan con carácter de urgencia, pedido que, para variar, quedó en el olvido[37].

El efecto de este desorden en el transporte no solo es el alto índice de accidentes de tránsito. También la calidad del aire que respiramos se ha afectado notablemente desde la década de 1990 al presente. Esta contaminación se suma a la conocida por causa de los basurales y la falta de limpieza urbana. En 1995 el municipio metropolitano licitó la limpieza pública del distrito centro, y otorgó la buena pro al Consorcio Vega Upaca S.A. Relima por un lapso de diez años, privatizó el recojo de desechos, algo que ya sucedía en otros distritos de Lima con contratos a corto plazo (Arenas, 2000). Si bien la situación pareció mejorar en el centro, es evidente, como hemos visto, que en las zonas periféricas la situación no ha cambiado, especialmente en el caso de la contaminación de la cuenca del río Rímac[38].

De acuerdo con los datos del informe de la Defensoría del Pueblo, en el año 1996 el 43,7% de los niños pertenecientes a los estratos muy bajo, bajo y medio

---

[33] *Liberación*, 24-5-2001, «¿García sueña con una Lima calcutizada inundada de mototaxistas?».

[34] Se estableció en el 2001 que los vehículos 'pirata' eran responsables de la mayoría de las infracciones al reglamento de tránsito, *Liberación*, 20-6-2001, «Más de 5500 infracciones de tránsito fueron cometidas en Lima en solo cinco meses» y 18-8-2001, «Más de 400 muertos por accidentes de tránsito en lo que va del año».

[35] *Liberación*, 10-1-2001, «Transportistas bloquean tránsito y exigen expulsión de micros 'piratas'».

[36] *Liberación*, 7-8-2001, «Más de 200 vehículos intervenidos en primer operativo de la policía de tránsito».

[37] *Liberación*, 9-1-2001, «Comisión congresal de transportes solicita medidas urgentes para el sector».

[38] *Liberación*, 23-7-2001, «Pobladores de San Juan de Lurigancho exigen erradicación de basural clandestino»; 18-9-2001, «Boca negra. El Rímac, río hablador, sigue colmado de toneladas de basura», y *Expreso*, 6-1-2001, «Comprueban contaminación del Rímac».

de la población y entre uno y cuatro años, había desarrollado alguna patología respiratoria tales como, bronquitis, bronquitis aguda, rinofaringitis aguda, faringitis aguda, faringo-amigdalitis y asma bronquial; además, el incremento de estas enfermedades fue de 100% entre los años 1997 y 1999; casi 14% de la población de los distritos norte de Comas, Independencia y Carabayllo sufría de asma y las infecciones respiratorias agudas casi se triplicaron entre 1995 y 2005, en todos los casos muy por encima de los estándares mundiales y de varias ciudades conocidas por su contaminación (Defensoría del Pueblo, 2006, pp. 34-35). Entre las causales de esta emergencia ambiental que afecta especialmente a Lima cuadrada y a los distritos de las zonas marginales, especialmente zonas Norte y Este, se señala la mala calidad del transporte que se expresa en el envejecimiento de los vehículos. En el año 2006 el promedio era de veinte años de antigüedad para los ómnibus, dieciocho para los microbuses y 15,5 para las camionetas rurales (combis); hasta ese año la Municipalidad no había normado el número de años máximo que podía circular una unidad[39]. Además, el informe señala que la caótica política de concesiones, el exceso de unidades, la ausencia de un eficaz plan de revisiones técnicas y el mal estado de la mayoría de los vehículos, son causantes del incremento de la mala calidad del aire de la ciudad:

> La contaminación del aire en Lima se explica principalmente por las emisiones generadas por la actividad de transporte. Los factores que producen altos niveles de contaminación por cada vehículo son la pésima calidad del combustible, en especial el diesel, que presenta altos niveles de azufre, el estado de conservación, la antigüedad de los vehículos y el exceso de oferta de transporte El sistema de transporte público es altamente ineficiente y contaminante debido, fundamentalmente, a la no aplicación de un plan de transporte que ordene y racionalice las rutas y su explotación. Los hábitos de manejo, la poca cultura de la prevención de los automovilistas y las condiciones del tránsito son factores que contribuyen con el problema (Defensoría del Pueblo, 2006, p. 76)[40].

Esta situación de emergencia ambiental se comenzó a notar desde los inicios del siglo XXI. El Municipio decretó la obligatoriedad de las revisiones técnicas,

[39] Recién en el año 2012, con la ordenanza 1595, se estableció el retiro de las unidades entre los 15 y más de 30 años de fabricación, como parte de un plan de renovación de la flota de transporte urbano. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el año 2014 Lima tenía la peor calidad del aire en Latinoamérica y «en el cono norte de la capital se encontró casi seis veces el nivel establecido de microorganismos contaminantes por metro cúbico». *Perú21*, 7-5-2014, «OMS: Lima tiene el aire más contaminado de América Latina». Nada señala que la situación sea mejor tres años después.

[40] Sin mencionar la contaminación sonora, otro flagelo de la capital y que también afecta la salud de la población. *Liberación*, 6-6-2001, «El ruido en Lima supera hasta 13 veces los límites aceptables».

alertado por el incremento de la contaminación del aire[41]. Tardíamente se instaló un equipo de monitoreo del aire en el Centro, en coordinación con el Ministerio de Salud. De acuerdo con las autoridades y los técnicos especializados, aún no existía una norma que establezca los estándares mínimos de la calidad del aire, a pesar que, de acuerdo con estudios de los especialistas, en Lima se producían tres veces más enfermedades respiratorias que el promedio internacional[42]. Además, la crónica falta de áreas verdes de la ciudad contribuía a que empeore la contaminación ambiental. Para variar, los beneficios de contar con un área adecuada no se distribuyen de manera uniforme en la capital. El estándar internacional es de 9 metros cuadrados de área verde por habitante y Lima contaba, en el año 2001, con un promedio de 1,08 metros cuadrados, y solo los distritos de clase media como San Isidro, San Borja, La Molina y Surco, entre otros, pasaban el mínimo aceptable[43]. En la década de 2010, si bien se ha mejorado en algo, se considera que Lima cuenta con un déficit de 56 millones de metros cuadrados de áreas verdes, actualmente se cuenta con solo 2,71 metros cuadrados por habitante, ubicándose en el último lugar en América Latina (Remy, 2017). Todavía se observa una segregación en la calidad de vida, Santa María del Mar, San Isidro, La Molina, Jesús María y Miraflores, entre otros, pasan la norma ambiental (Remy, 2017), mientras que, los que cuentan con el menor promedio de metros cuadrados de área verde por habitante son Comas (1,78); Puente Piedra (1,71); La Victoria (2,14); el Agustino (2,38), entre otros (Instituto Metropolitano de Planificación, 2010, pp. 8-9).

La ciudad también continuó sufriendo los embates de los problemas sociales, marchas, protestas y hasta amenazas de atentados continuaron a principios del siglo presente, además de la siempre presente delincuencia y la sensación de una alta inseguridad ciudadana, como ocurre hasta el día de hoy[44].Sin embargo, el año 2001 trajo como característica que la mayor inseguridad no la ocasionaba la

---

[41] *Liberación*, 20-3-2001, «Los transportistas no tienen derecho a seguir envenenando aire que respiramos» y «Lima es considerada la más contaminada de América Latina».

[42] *Liberación*, 22-6-2001, «Municipalidad de Lima instala por fin equipo de monitoreo de calidad del aire». También hay que considerar que el alto índice de enfermedades respiratorias también se debe a la mala calidad de la vivienda y de la vestimenta en las zonas más pobres de Lima. Véase *Liberación*, 1-7-2001, «Más de la mitad de asistencias médicas es por causa de enfermedades respiratorias».

[43] *Liberación*, 26-12-2001, «Contaminación está matando áreas verdes de nuestra capital».

[44] *Expreso*, 1-3-2001, «Ciudad Tomada»; 25-5-2001, «Protestas y demandas abarrotan la capital»; 24-9-2001, «Marcha del Collasuyo llegará hoy a Palacio»; 17-5-2001, «Mujer adulta y dos jóvenes dejaron mochila-bomba cerca al JNE», 25-9-2001, «Hallan propaganda subversiva en cuatro mercados de Lima»; *Liberación*, 17-5-2001, «Mochila bomba siembra el terror en centro de Lima»; 18-6-2001; «Vecinos del cercado de Lima coordinarán acciones con Serenazgo y Policía Nacional para combatir delincuencia»; 26-6-2001, «En menos de cuatro meses, delincuentes roban más de dos mil vehículos en Lima» y 10-10-2001, «Peligro en Lima: avezados delincuentes vuelven a las calles».

delincuencia sino la falta de control de los lugares de venta de los ambulantes y comerciantes de las calles de Lima. La situación económica de fines del siglo XX, provocada por las repercusiones mundiales de la crisis asiática (1997-1999), causó un aumento del comercio informal en la capital, especialmente en la temporada navideña, lo que mostraba la fragilidad del nuevo ordenamiento. Incluso en uno de los operativos de desalojo fue agredida la directora de comercialización, Elsie Guerrero, quien sufrió la fractura del tabique nasal por causa de un ataque de los vendedores. En las inmediaciones del Mercado Central, en el lugar conocido como Mesa Redonda, se encontraban cientos de comerciantes informales, muchos de ellos ofreciendo peligrosos fuegos artificiales, los cuales años después tendrán consecuencias catastróficas[45]. En la víspera de la navidad las calles de Lima centro rebosaban de ambulantes[46], hecho que fue aprovechado rápidamente por la prensa opositora al alcalde como una prueba de su ineficiencia[47].

A lo largo del año 2001 las galerías de la capital fueron percibidas y denunciadas como inseguras, lugares como «El Hueco», ubicado frente al Parque Universitario, los puestos fijos de la avenida Grau y Las Malvinas, entre otros, fueron considerados 'bombas de tiempo' por causa de la falta de seguridad, inadecuadas instalaciones eléctricas y deficientes materiales de construcción[48]. Los simulacros de desastres, como los terremotos, indicaban a las autoridades que el número de víctimas sería muy alto por causa de la dificultad para atender a los heridos por el intenso tráfico, entre otros factores[49].

Los peores temores no demoraron en hacerse realidad. Los problemas comenzaron a las 8:15 a.m. del 4 de mayo del año 2001, cuando un incendio afectó a más de setenta puestos del campo ferial Las Malvinas, y dejó dieciocho heridos. La falta de agua en la zona y las dificultades para llegar, complicaron la labor de los bomberos[50]. La Municipalidad de Lima, por medio de Elsie Guerrero, señaló que se aceleraría el proceso de formalización de los 3000 comerciantes para facilitar su reubicación[51]. El proyecto del municipio era convertir al campo ferial

---

45 *La República*, 15-12-1998, «Comerciantes del centro de Lima protestan contra ambulantes».

46 *La República*, 24-12-1998, «Ambulantes invadieron centro de Lima».

47 *Expreso*, 24-12-1998, «Por incumplimiento de Andrade Lima a merced de ambulantes». (Portada del diario) y 24-12-1998, «Amenazan con permitir regreso ambulatorio. Policía municipal abandonaría vigilancia por falta de pago».

48 *Liberación*, 10-6-2001, «Galerías y centros comerciales de Lima siguen siendo 'bombas de tiempo'».

49 *Expreso*, 11-10-2001, «'Terremoto' deja 440 'muertos' y 968 mil 'damnificados'» y *Liberación*, 8-7-2001, «Un sismo de regular magnitud destruiría gran parte de los 5,500 tugurios de Lima» y 27-8-2001, «Gamarra es una bomba de tiempo».

50 *La República*, 5-5-2001, «Las Malvinas en llamas».

51 *Expreso*, 5-5-2001, «Incendio consume 40 puestos en Las Malvinas».

en un espacio similar a la Alameda Chabuca Granda, y reubicar los vendedores, según Guerrero, para evitar más accidentes[52]. En julio de ese año se decidió el desalojo de los comerciantes, se dio por concluido el funcionamiento del campo ferial y se destinó el espacio para una alameda. De acuerdo con los dirigentes de la zona, en las seis primeras cuadras de la avenida Argentina trabajaban cerca de 8000 personas y 40% ya tenía un puesto comprado en un terreno de las cuadras posteriores; sin embargo, se quejaban de la ausencia de diálogo con el municipio y solicitaban un plazo mayor para abandonar el campo[53]. Para complicar las cosas a los comerciantes, en las semanas siguientes la policía inició una serie de operativos con el objeto de incautar objetos robados[54].

Pocos días después del siniestro en Las Malvinas, el 8 de junio a las 9:30 p.m., estalló otro incendio en la galería informal conocida como «El Hueco». Nuevamente las dificultades en el abastecimiento de agua, la estrechez de los espacios, y el tipo de materiales de construcción facilitó la propagación del fuego; sin embargo, aparentemente nadie resultó herido[55]. Semanas después, el 28 de agosto de 2001, otro incendio arrasó un centro comercial en La Victoria, destruyendo más de cien puestos de comerciantes dedicados a la venta de productos de ferretería y materiales eléctricos[56]. Estos hechos solo serían el presagio desatendido de una desgracia mayor con la cual se cerraría el año.

Por lo menos desde 1990 se registraron varios incendios en las inmediaciones del Mercado Central y en la zona conocida como Mesa Redonda[57]. Además, varios de ellos fueron producto de la peligrosa manipulación de fuegos artificiales por parte de ambulantes, explosivos ingresados al país por medio del contrabando. El 8 de enero de 1990 las llamas consumieron un edificio cercano al Mercado Central y decenas de puestos de ambulantes; el 5 de diciembre de 1991 se produjo un incendio en el jirón Andahuaylas, con el saldo de doce víctimas; el 13 de noviembre de 1993 estalló otro incendio en la sexta cuadra de jirón Cusco, felizmente sin víctimas; el 28 de diciembre 1998 una vendedora pretendió demostrar el funcionamiento de un

[52] *Expreso*, 6-5-2001, «Comerciantes de Las Malvinas serán reubicados».

[53] *Liberación*, 15-7-2001, «Municipalidad de Lima dispone de desalojo de comerciantes de Las Malvinas».

[54] *Expreso*, 10-10-2001, «Incautan gran cantidad de artefactos robados y detienen a 500 personas» y 9-11-2001, «Gigantesca operación policial en Las Malvinas». Para un análisis del impacto de las reubicaciones puede verse Alternativa y Desco (2001).

[55] *Liberación*, 9-6-2001, «Se incendia galería comercial 'El Hueco'». Posteriormente los diferentes grupos de comerciantes se culparían entre sí como responsables del siniestro, 10-6-2001, «Comerciantes se acusan mutuamente por incendio en alrededores de 'El Hueco'».

[56] *Liberación*, 29-8-2001, «Fuego arrasa más de 100 puesto en centro comercial de La Victoria».

[57] Un recuento en *El Comercio*, 18-2-2012, «Incendios en Mesa redonda: es la zona que más siniestros ha sufrido» y Juan Arce (2008).

'cohete silbador' lo que generó un incendio que causó la muerte de siete personas[58] y el 1° de enero del año 2000 otro incendio afectó un almacén de tres pisos y varias casas de la manzana, sin víctimas que lamentar (Arce, 2008, p. 120). El incendio de 1998 fue el anticipo más cercano del desastre del año 2001.

A pesar de las intervenciones de los agentes municipales que requisaron toneladas de pirotécnicos, los vendedores ofertaban clandestinamente los productos. La falta de coordinación entre la policía y el municipio, quizá acicateada por las rencillas políticas entre el alcalde y el presidente, trajo como consecuencia que, a pesar del siniestro, no se pueda controlar la venta de estos productos, la mayoría ingresados por medio del contrabando[59]. Otro factor muy importante era la importancia económica de la zona, llena de galerías y de negocios formalizados, aunque carentes de seguridad, desarrollados desde principios de la década de 1980 con el apoyo de la Conaco[60]. Estos centros comerciales movían millones de soles en mercaderías importadas por empresas legalmente establecidas[61], negocios hacinados en espacios reducidos y otros en peores condiciones dentro de vetustas casonas de quincha y barro. Estos comercios alimentaban a una extensa red de vendedores ambulantes que distribuían en toda la ciudad juguetes, artefactos, regalos, etcétera, y también pirotécnicos.

A pesar de que esta era, sin duda, la zona que más peligro representaba para la ciudad por la densidad de público, ambulantes y comercios inseguros, no se produjo ningún desalojo como los realizados en las otras zonas de la capital. Posiblemente su alejamiento de los circuitos turísticos y la presencia de los millonarios negocios formales permitieron la continuidad en el funcionamiento de esta zona, a pesar de su reconocida y anunciada peligrosidad. Por una razón o por otra, la realidad concreta es que la autoridad municipal permitió su funcionamiento exponiendo a la capital a un desastre que, lamentablemente, estaba anunciado. Como indica el informe del Ministerio de Salud, «todos los siniestros mencionados ocurrieron en el Cercado de Lima, los seis primeros [incluye el de Polvos Azules de 1993] son identificados como los incendios más severos de los últimos años, de los cuales tres ocurrieron en vísperas de las fiestas de fin de año o el mismo 1° de enero» (Ministerio de Salud, 2002, p. 16).

Semanas antes del dantesco incendio, la policía, con la presencia del personal de la Municipalidad, incautó tres toneladas de fuegos artificiales, considerados de alta

---

[58] *Expreso*, 30-12-2001, «La historia de vuelve a repetir».

[59] *Expreso*, 30-12-1998, «Continúa venta de explosivos en galerías y calles del centro».

[60] *Correo*, 17-9-1983, «Ambulantes inauguran galería de tiendas en centro de Lima».

[61] Incluso Matilde Pinchi Pinchi, brazo derecho de Vladimiro Montesinos, era dueña de uno de los locales afectados (*Expreso*, 30-12-2001, «Pinchi Pinchi es dueña de uno de los locales afectados»).

peligrosidad, escondidos en las galerías dentro del perímetro de Mesa Redonda. Días antes el comandante general del Cuerpo de Bomberos, Tulio Nicolini, denunció la existencia de poco más de mil toneladas de pirotécnicos almacenados ilegalmente en la zona (Ministerio de Salud, 2002, p. 14). Según la policía, entre las cuadras 5 y 7 de jirón Cusco, el centro de Mesa Redonda, posiblemente se hallaban buena parte de esos productos, de los cuales solo recuperaron el 0,3%[62]. Además, la Municipalidad tuvo que suspender los decomisos por causa de las acciones de amparo presentadas por las empresas importadoras de fuegos artificiales; por último, desde el día 20 de diciembre el cerco policial fue diluyéndose, lo que facilitó la venta de los peligrosos fuegos artificiales en las calles (Ministerio de Salud, 2002, p. 14). De acuerdo con un informe del Ministerio de Salud, en Mesa Redonda se ofrecían diversos productos, algunos de ellos importados con licencia de las autoridades respectivas. Por ejemplo, entre los productos que causaron el incendio se encontraban el «*Star ball*» y la «caja misilera», introducidos con los permisos respectivos.

Desde mayo del año 2001 Defensa Civil remitió diversos oficios a los municipios de Lima y de La Victoria en los que alertaba sobre la inseguridad de los negocios de sus distritos. Por ejemplo, luego de una inspección a diversas galerías del centro se informó de la grave inseguridad en «El Hueco», campo ferial Las Malvinas, Galerías «Mercado Central» y Andahuaylas, entre otros. Estos locales se encontraban en «alto riesgo de incendio, por encontrarse instalaciones eléctricas precarias con empalmes defectuosos y existir sobrecarga, asimismo no contar con gabinetes contra incendios ni extintores, entre otros puntos» (Indeci, 2001, s/p). El 5 de diciembre se envió un oficio múltiple dirigido a los municipios, policía y prefectura con el objeto de que se adopten las medidas del caso y «se realicen operativos conjuntos con el Ministerio Público, PNP, Prefectura, Direcciones Municipales, etc., para ubicar e inspeccionar los locales donde se fabriquen o comercialicen dichos artefactos y evitar el comercio clandestino». El 17 de diciembre se produjo una reunión entre los directivos de Defensa Civil, el cuerpo general de bomberos y representantes del Estado con el objeto de establecer medidas preventivas para la venta y uso de los pirotécnicos. Más grave aún, el 21 de diciembre por medio del oficio 1872-SDRC/DR (14.2), se elevó al alcalde de Lima un pedido para que urgentemente se realicen operativos de decomiso, solicitud extendida al prefecto de Lima dos días antes del desastre:

> que en la esquina de los jirones Cusco y Andahuaylas existen gran cantidad de comerciantes ambulantes informales que comercializan productos pirotécnicos sin licencia, lo cual representa un gran riesgo por lo que se solicita se realicen

[62] *Liberación*, 9-12-2001, «Incautan tres toneladas de juegos pirotécnicos escondidos en galerías del centro de Lima».

> operativos conjuntos a fin de prevenir daños. Además, se le comunica que en la zona existe gran congestionamiento en el flujo peatonal y vehicular, poniendo en alto riesgo dicha zona, lo cual en caso de producirse una emergencia, obstaculizaría la labor de los bomberos, serenazgo, ambulancias, policía nacional, etc. (Indeci, 2001, s/p).

Como era tristemente previsible, el temido incendio se inició a las 7:15 p.m. del sábado 29 de diciembre de 2001, luego que una vendedora intentó demostrar en la vía pública el funcionamiento de uno de los fuegos artificiales[63]. Las llamas se extendieron con rapidez a las galerías cercanas en las cuatro manzanas que rodean la zona; muchas personas y dueños de locales no pudieron salvarse por encontrarse atrapados en los estrechos pasadizos de las tiendas, mientras otras quedaron encerradas en los locales por causa del temor a los saqueos, falleciendo quemadas o asfixiadas. Los bomberos, a pesar de que su local se encuentra a muy pocas cuadras de la zona del siniestro, tardaron largos diez minutos en llegar a la zona, por causa de la tugurización de los vendedores y el numeroso público comprador. El fuego fue controlado aproximadamente cuatro horas después, y dejó un panorama desolador de destrucción y de cuerpos devorados por las llamas[64]. La voracidad del incendio se produjo por los ocho focos simultáneos de fuego, que causaron 280 muertos por calcinamiento o asfixia, 80% en estado irreconocible, 187 personas quemadas, 180 desaparecidos y cuantiosos daños materiales (Indeci, 2001, s/p).

Entre las causas de esta enorme tragedia, el Ministerio señala que «a pesar de los antecedentes de incendios ocurridos años anteriores e incluso un amago de incendio ocurrido una semana antes de esta tragedia, no se tomaron las medidas de prevención tanto por las autoridades como por los comerciantes» (Ministerio de Salud, 2002, p. 69). Efectivamente, llama poderosamente la atención la desidia de las autoridades, incluido el alcalde, quien a pesar de tener conocimiento de los peligros no tomó medidas eficaces, tal como lo había hecho anteriormente. Si bien se efectuaron diversos operativos con apoyo municipal y policial, estos no llegaron a decomisar más de 6 toneladas en total, de las 1100 que se estimaba existían en la zona[65]. Gabriela Adrianzén, la directora de la Dirección de Fiscalización y Control del municipio señaló que en el último operativo del 27 de diciembre se logró incautar la irrisoria cantidad de 80 kilos de juegos pirotécnicos[66]. Por otro lado,

[63] El relato siguiente está basado en el recuento de los hechos elaborado por el Ministerio de Salud (2002, pp. 17-20).

[64] *Expreso*, 30-12-2001, «Jirón Cusco fue trampa mortal para más de un centenar de personas»; *Liberación*, 30-12-2001, «Un incendio que iluminó Lima y apagó miles de vidas».

[65] *Expreso*, 30-12-2001, «Atribuyen responsabilidad a comerciantes ilegales».

[66] *Expreso*, 31-12-2001, «Desde el 24 efectivos abandonaron Mesa Redonda».

el jefe del Instituto de Defensa Civil, Juan Luis Podestá, declaró inexplicablemente que desconocía si en el lugar del incendio se almacenaban productos pirotécnicos[67]. Además, Andrade había habilitado campos feriales para la venta legal de los fuegos artificiales, los cuales siguieron funcionando normalmente luego de la tragedia[68]; peor aún, en la misma zona continuó la venta clandestina de los peligrosos productos[69].

Luego de la tormenta

¿Qué queda de esta excursión por la convulsionada ciudad de las décadas de 1980 al 2000? Sin que estas sean las únicas conclusiones que se pueden extraer de estas páginas, me permito citar algunas ideas. En primer lugar, una sensación ambigua respecto a los trabajadores en las calles. Por un lado, ternura y simpatía por la energía con la que miles de personas, hombres, mujeres, niños y niñas, crearon innumerables formas de sobrevivir a la salvaje crisis económica, violencia y desintegración del Estado. Por otro lado, indignación por la enorme injusticia que supone haber expuesto a los límites de la supervivencia a más de una generación de peruanos, sometiéndolos a una grave declinación de sus ingresos reales, recortarle derechos vitales como la salud, vivienda y educación; además, de exponerlos a la discriminación por las formas de supervivencia que ejercían en el espacio público.

En segundo lugar, estas duras condiciones no se produjeron por un exceso de regulaciones, estatales o municipales, que limitaban la capacidad empresarial. Por el contrario, si hay un hilo conductor en esta trama es la incapacidad del Estado para regular, controlar y hacer cumplir las disposiciones; realidad que se hizo más clara en los años de 1990 por causa de una política neoliberal que, en muchos casos, abandonó la labor de regular y dio por hecho que las privatizaciones y el mercado serían eficaces reguladores de las actividades económicas. ¿Fue acaso el exceso de regulaciones el que empeoró el aire o causó los desastrosos incendios?

En tercer lugar, los cambios que se gestaron en las calles destruyeron la vieja sociedad criolla y las diferencias de clase basadas en el color de piel, por esa razón en el presente el racismo aparentemente se ha incrementado. Es un intento tardío de mantener diferencias que son inviables luego del proceso de desclasamiento y de movilidad social de estas décadas. El color de piel y la condición económica dejaron de ser coherentes entre sí, por eso existe una reacción en contra de la discriminación

---

[67] *Expreso*, 30-12-2001, «Atribuyen responsabilidad a comerciantes ilegales». Véase también Riofrío, 2009, p. 40.

[68] *Expreso*, 31-12-2001, «Flores-Aráoz: 'el municipio y la policía no hicieron cumplir la ley'» y «Venta de fuegos artificiales continúa en Parque de la Reserva».

[69] *Expreso*, 31-12-2001, «Continúa venta de explosivos en galerías y calles del centro».

por el color de piel en las personas de diversos orígenes, quienes ya no permiten a los demás esas actitudes. El trabajo en las calles contribuyó con esta disolución por medio de la destrucción de las diferencias entre aquellos que trabajaban en las calles; 'gringos', 'cholos', 'zambos' y 'negros', etcétera, fueron igualmente empobrecidos por la crisis de los años ochenta, todos tuvieron que buscar formas alternativas de supervivencia en las calles para evitar morir de hambre.

En cuarto lugar, si bien esta historia se cierra a principios del siglo XXI, sus personajes continúan en las calles de Lima. Lamentablemente la pobreza, la marginación y la falta de atención del Estado traen como consecuencia niños abandonados y que trabajan en las calles, infantes que deberían estar en la escuela, ancianos que trabajan cuando deberían estar con sus nietos o simplemente disfrutar de un merecido descanso, mujeres que aún alquilan sus cuerpos en las calles, mientras las persiguen las autoridades y las miradas de los transeúntes las sancionan; enajenados mentales y mendigos que siguen hurgando en los basurales, cuando deberían contar con servicios sociales, y ambulantes que deben cuidarse de los automóviles que los pueden atropellar y de serenos que los pueden golpear hasta la muerte, entre otros personajes. Historia azarosa, de lucha continua y de supervivencia, tiene sin duda un lado heroico y otras aristas que despiertan cotidianamente nuestra indignación.

Quizá la aspiración mayor de estas páginas es no olvidar a las personas que construyen la historia, con sus grandezas y mezquindades, sus riquezas y sus miserias humanas. No se trata de un romanticismo cegador que asume la existencia de buena voluntad entre todos los pobres. Como más de una vez le escuché decir al teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, uno de los principales intelectuales de la Teología de la Liberación, la «opción por los pobres» no supone que todos los pobres son merecedores de caridad o compasión por su buena conducta. Gutiérrez comentaba con tono irónico, pero finalmente realista, que él conocía muchos pobres que preferiría no encontrárselos en alguna esquina oscura de la ciudad. Ciertamente, en los tiempos de crisis afloraron cosas positivas y negativas, pero lo que no puede negarse es que la pobreza, la marginación y la violencia redujeron sensiblemente las posibilidades de superación de miles de peruanos. Niños, jóvenes, adultos, hombres y mujeres, fueron empujados a resolver sus problemas de diversas maneras ante el derrumbe del poco Estado que siempre tuvimos. Su historia fue y es parte de la construcción de la ciudad, la mayoría de ellos aún son anónimos en nuestras vidas; pero sin duda, no pasarán muchas horas después de leer estás páginas para que les compremos algo empujados por la sed, el hambre o la necesidad cotidiana. Trabajar en las calles no es el ideal para muchos de estas personas; seguramente preferirían contar con otra forma de ganarse la vida, menos agotadora, más respetada, más segura. Ojalá algún día solo tengamos en las vías públicas a quienes tuvieron

capacidad de elección para escoger su medio de vida, que los niños puedan ir a la escuela y los ancianos puedan tener protección. Mientras tanto, me negaré a ver en ellos 'emprendedores', son, como en otros momentos de la historia, supervivientes que contra todo pronóstico luchan para mantenerse con una vida anónima y persistentemente a lo largo de los tiempos.

Bibliografía

Adams, Norma & Jürgen Golte (1987). *Los caballos de Troya de los invasores: estrategias campesinas en la conquista de la gran Lima*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Adams, Norma & Néstor Valdivia (1991). *Los otros empresarios. Ética de migrantes y formación de empresas en Lima*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Agency for International Development - AID (1982a). *Selected Available Documentation: The Brady Earthquake Predictions.* Washington: Offices of U.S. Foreign Disaster Assistance.

Agency for International Development - AID (1982b). *Selected Available Documentation: The Brady Earthquake Predictions. Book B: Reports, Memoranda, Correspondence and Other Communication.* Washington: Offices of U.S. Foreign Disaster Assistance.

Alba, Martha de; Arnaud Exbalin & Georgina Rodríguez (2007). El ambulantaje en imágenes: una historia de representaciones de la venta callejera en la ciudad de México (siglos XVIII-XX). *Cybergeo: Revue Européene de Géographie,* (373), 1-44.

Aliaga Linares, Lisette (2002a). El capital activo de los comerciantes ambulantes: un análisis cualitativo de sus redes sociales. *Redes - Revista hispánica para el análisis de Redes Sociales, 2*(3), 1-33.

Aliaga Linares, Lisette (2002b). *Sumas y restas. El capital social como recurso en la informalidad (las redes de los comerciantes ambulantes de Independencia)*. Lima: Alternativa y UNMSM.

Aliaga Linares, Lisette (2003). «¿Qué haría yo si tuviera capital social?» Las redes sociales en los ambulantes y sus activos para la subsistencia y/o desarrollo. *Debates en Sociología,* (28), 107-131.

Alonso, Iván (1989). El comercio ambulatorio desde un punto de vista económico. En Enrique Ghersi (ed.), *El comercio ambulatorio en Lima* (pp. 21-65). Lima: Instituto Libertad y Democracia.

Alternativa y Desco (2001). *¿De ambulantes a empresarios? Reubicación y reordenamiento del comercio ambulatorio en Lima metropolitana.* Lima: Alternativa y Desco.

Álvarez Alderete, Magno & Héctor Béjar Rivera (2010). Las polladas: una estrategia de sobrevivencia en época de crisis económica y política. Lima, 1980-2003. *Investigaciones sociales*, *14*(24), 259-283.

Antonio, Vicuña, Nancy Leonor & Néstor Rojas Campos (2014). «La jerga en los actores del transporte público de Lima Metropolitana». Tesis de licenciatura. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.

Arce Palomino, Juan (2008). Grandes incendios urbanos: Mesa Redonda, Lima 2001. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, *25*(1), 118-124.

Arellano, Rolando (1991). Las estrategias del comercio informal: una alternativa administrativa de explicación del crecimiento explosivo del sector informal en América Latina. En Alejando Toledo y Alain Chalat (eds.), *Las otras caras de la sociedad informal. Una visión multidisciplinaria* (pp. 363-386). Lima: ESAN e IDE.

Arellano, Rolando & David Burgos (2010). *Ciudad de los Reyes, de los Chávez, de los Quispe…* Lima: Planeta.

Arenas Lizana, Juan Alberto (2000). *Sumsel municipal de los servicios de limpieza pública de Lima Perú*. Ponencia presentada en el Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Porto Alegre, 3-8 de diciembre. http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/resisoli/iii-158.pdf. Fecha de consulta: 8/3/2017.

Arias, Patricia (2009). *Seguridad privada en América Latina: el lucro y los dilemas de la regulación deficitaria.* Santiago de Chile: Flacso.

Arteaga, Vivian & Noemí Larrazábal (1988). *La mujer pobre en la crisis económica. Las vendedoras ambulantes de La Paz.* La Paz: Flacso.

Augé, Marc (1993). *Los «no lugares». Espacios del anonimato*. Barcelona: Gedisa.

Babb, Florence E. (2008). *Entre la chacra y la olla. Economía política y las vendedoras de mercado en el Perú.* Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Bailón, Jaime (2004). La chicha no muere ni se destruye, solo se transforma. *Íconos,* (18), 53-62.

Balbi, Carmen Rosa (1997). ¿Una ciudadanía descoyuntada o redefinida por la crisis? De «Lima la horrible» a la identidad chola. En Carmen Rosa Balbi (ed.), *Lima: aspiraciones, reconocimiento y ciudadanía en los noventa* (pp. 11-28). Lima: Fondo Editorial PUCP.

Banco Central de Reserva del Perú (1990). *Memoria al 31 de diciembre de 1989*. http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/Memoria-BCRP-1989.pdf. Fecha de consulta: 23/1/2017.

Barbero, José (2006). Transporte urbano. En Marcelo M. Giugale, Vicente Febres-Cibils y John L. Newman (eds.), *Perú. La oportunidad de un país diferente. Próspero, equitativo, gobernable* (pp. 273-288). Washington: Banco Mundial.

Barbosa Cruz, Mario (2008). *El trabajo en las calles. Subsistencia y negociación política en la ciudad de México a comienzos del siglo XX.* México DF: El Colegio de México.

Barrig, Maruja (2014). Perú: de la sumisión a la rebeldía. En María Emma Mannarelli (investigadora principal), *De la casa a la política: escritos colectivos de las mujeres organizadas de Lima. Investigación Regional Participación Política de las Mujeres y Transformación del poder* (pp. 11-21). Lima: Oxfam.

Bastidas Aliaga, María (2008). *Ser trabajadora informal, pobre y mujer en el Perú*. Comunicación presentada en el I Congreso Internacional sobre Género, Trabajo y Economía Informal, Elche, España, 27-29 de febrero. http://ve.umh.es/sieg.1/docs/icongresointernacional/comunicaciones/sci06.pdf. Fecha de consulta: 22/2/2017.

Bazalar Huamán, Bertha (1976). «Condiciones de vida de los vendedores ambulantes». Tesis de bachillerato. PUCP.

Beltrán Cárdenas, Susy; Rodrigo Flores Pari, Luis García Morán & Felícitas Martínez Si Hui (2016). «Mujeres autoempleadas en la economía informal: una mirada hacia la mujer ambulante en Lima metropolitana, 2016». Tesis de maestría. Centrum - PUCP.

Bensús, Viktor (2012). Ideología de la inseguridad y segregación del espacio público en Lima Metropolitana: el caso de la gestión 2007-2010 en Miraflores. *Debates en Sociología*, (37), 77-108.

Bergel, Martín (2015). De canillitas a militantes. Los niños y la circulación de materiales impresos en el proceso de popularización del Partido Aprista Peruano (1930-1945). *Iberoamericana, 15*(60), 101-115.

Bergesio, Liliana (2004). Lo popular en la economía de América Latina. Conceptos y políticas posibles. *Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales*, (24), 23-44.

Bergesio, Liliana; Laura Golovanevsky & María E. Marcoleri (2007). Debate teórico metodológico y un nuevo intento de medición del sector informal urbano para el caso del barrio Alto Comedero (San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina). *Lavboratorio*, *Estudios sobre cambio estructural y desigualdad social, 8*(20), 16-23.

Bielich, Claudia (2009). El transporte público limeño y la guerra del centavo. *Argumentos*, *2*. http://revistaargumentos.iep.org.pe/articulos/el-trasnporte-publico-limeno-y-la-guerra-del-centavo/. Fecha de consulta: 31/1/2017.

Blaz Sialer, David (2010). «La ciudad vacía: imaginarios urbanos sobre el centro histórico de Lima en la época del neoliberalismo». Tesis de maestría. PUCP.

Bonilla, Diana, Alonso Castro & Juan Carlos Zevallos (2013). El Perú es Lima, Lima es el Palais Concert. *La Colmena*, *6*. http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/lacolmena/article/view/12505. Fecha de consulta: 20/7/2016.

Bossio, Juan Carlos (ed.) (1993). *El trabajo infantil en el Perú*. Ginebra: OIT.

Bromley, Ray (2000). Street Vending and Public Policy: A Global Review. *International Journal and Social Policy*, *20*(1/2), 1-29.

Budlender, Debbie (2009). Análisis presupuestal de la economía informal en el Perú y la Municipalidad Metropolitana de Lima. http://wiego.org/sites/wiego.org/files/publications/files/Budlender_WIEGO_BB2_Espanol.pdf. Fecha de consulta: 20/1/2015.

Büren, María Paula de (2007). *Sector informal: una aproximación teórica para su estudio en América Latina*. Ponencia presentada en el Pre-congreso de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo – ASET, Río Cuarto, 26 de julio. http://www.eco.unrc.edu.ar/almacen/instituto/de_B%FCren.pdf. Fecha de consulta: 15/10/2007.

Burt, Jo-Marie (2009). *Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos y Servicios Educativos Rurales (SER).

Bustamante, Alberto (1990). Informalidad: superando las viejas tesis. En Gustavo Riofrío (ed.), *De marginales a informales* (pp. 15-32). Lima: Desco.

Bustamante, Alberto (1991). Economía informal, Estado mercantilista y reformas institucionales. En Alejando Toledo y Alain Chalat (eds.), *Las otras caras de la sociedad informal. Una visión multidisciplinaria* (pp. 443-494). Lima: ESAN e IDE.

Bustamante, Alberto; Eliana Chávez, Romeo Grompone, Samuel Machacuay & Gustavo Riofrío (ed.) (1990). *De marginales a informales*. Lima: Desco.

Calderón, Julio (2009). Políticas urbanas y expansión de las barriadas 1961-2000. En Pablo Vega Centeno (ed.), *Lima, diversidad y fragmentación de una metrópoli emergente* (pp. 223-253). Quito: Olacchi.

Calderón, Julio; Gustavo Riofrío, Jaime Joseph, Teresa Cabrera y otros (2009). *Foro urbano. Los nuevos rostros de la ciudad de Lima*. Lima: Colegio de Sociólogos del Perú.

Callirgos, Juan Carlos; Luis Olivera & Gustavo Riofrío (1994). *¿Basura o desechos?: el destino de lo que botamos en Lima.* Lima: Desco.

Cámara Argentina de Comercio (2006). Relevamiento de puestos de venta ilegal callejera. *Observatorio de Comercio y Servicios PYMES*, (30), 1-4.

Candia, José Miguel (2003). Sector Informal ¿treinta años de un debate bizantino? http://www.rau.edu.uy/universidad/inst_derecho_del_trabajo/candia.htm. Fecha de consulta: 20/10/2007.

Cánepa, Gisela (2006). La ciudadanía en escena: fiesta andina, patrimonio y agencia cultural. En Gisela Cánepa y María Eugenia Ulfe (eds.), *Mirando la esfera pública desde la cultura en el Perú* (pp. 221-242). Lima: Concytec.

Capron, Guénola; Angela Giglia & Jérôme Monnet (2005). *Cruces comerciales: ambulantaje y servicios a la movilidad en la ciudad de México*. Ponencia presentada en el Seminario Científico Internacional «Comercio y movilidades urbana en tiempos de metropolización», México DF, 11-13 de julio.

Capuñay, Luz María (2012). A diez años de la vigencia del Código del niño y adolescente. http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/cij/documentos/C4-09_a_diez_a%C3%B1os_vigencia_cod_ni%C3%B1o_210208.pdf. Fecha de consulta: 1/3/2017.

Carbajal, Carlos (1991). *I Encuentro de trabajadores ambulantes del cono norte y Lima metropolitana. Problemas y alternativas.* Lima: Alternativa.

Carbonetto, Daniel & Eliana Chávez (1982). El sector informal urbano. *Socialismo y participación*, (26), 1-31.

Carbonetto, Daniel; Jenny Hoyle & Mario Tueros (1988). *Lima. Sector informal*. Lima: Cedep.

Caria, Stefano (2008). *Estudios urbanos. Títulos sin desarrollo: los efectos de la titulación de tierras en los nuevos barrios de Lima.* Lima: Desco.

Casa de la Tradición (1963). *Casa de la Tradición. Anales 1960-1962*. Lima: Enrique Rávago e hijos.

Casamán Díaz, Desirée (2005). El consumo del Terokal en los niños y niñas en situación de calle. *Avances en Psicología, 13*(5). http://www.unife.edu.pe/pub/revpsicologia/ninez.html. Fecha de consulta: 1/3/2017.

Castellanos, Themis, Jaime Joseph & Mercedes Ubillús (2003). *Lima: ciudad cada vez menos pretenciosa.* Lima: Alternativa.

Castillo Gómez, Cintia (2015). Gentrificación a la limeña en el centro histórico de Lima. ¿Expulsión o inclusión? 1993-2013. En Víctor Delgadillo, Ibán Díaz y Luis Salinas (coords.), *Perspectivas del estudio de la gentrificación en México y América Latina* (pp. 133-152). México DF: Universidad Nacional Autónoma de México.

Castillo Ríos, Carlos (1985 [1974]). *Los niños del Perú. Clases sociales, ideología y política.* Cuarta edición. Lima: Limasa.

Ccopa, Pedro Pablo (2009). Música popular, migrantes y el nuevo espíritu de la ciudad. En Julio Calderón y otros, *Foro urbano. Los nuevos rostros de la ciudad de Lima* (pp. 113-140). Lima: Colegio de Sociólogos del Perú.

Centro de Estudios Sociales y Publicaciones - Cesip (2006). *Una experiencia con niñas, niños y adolescentes que trabajaban en el reciclaje de la basura en Las Lomas de Carabayllo*. Lima: Cesip.

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública - Cesop (2005). *Reporte temático 2. Comercio ambulante*. http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/21212/105355/file/ITSDM001%20Comercio%20Ambulante.pdf. Fecha de consulta: 17/10/2007.

Chávez, Eliana (1990). El empleo en los sectores populares urbanos: de marginales a informales. En Gustavo Riofrío (ed.), *De marginales a informales* (pp. 71-124). Lima: Desco.

Chávez, Eliana (1991). Mujer y economía informal. En Alejandro Toledo y Alain Chalat (eds.), *Las otras caras de la sociedad informal. Una visión multidisciplinaria* (pp. 327-362). Lima: ESAN e IDE.

Chávez, Eliana (2001). Los municipios y el comercio ambulante. En Manuel Délano y Víctor E. Tokman (eds.), *De la informalidad a la modernidad* (pp. 121-144). Santiago de Chile: OIT.

Chávez, Eliana & Ricardo de la Flor (1998). Nuevo rostro de la vieja urbe: comercio ambulatorio y recuperación del centro histórico de Lima. En Eliana Chávez y otros, *Perú: el sector informal frente al reto de la modernización* (pp. 121-170). Lima: OIT.

Chávez Hualpa, Fabiola (2013). «Pide lo que quieras, él te lo concede». La devoción popular al niño Ricardo Espiell en un cementerio de Lima. *Revista de Folklore*, (379), 2-41.

Chinchilla Rojas, Melissa & Evelyn Valerín Alvarado (2012). Significado del trabajo para las vendedoras ambulantes de la Avenida Central San José. *Cuadernos de Antropología*, (22), 1-22.

Chion, Miriam & Wiley Ludeña (2009). Espacios públicos, centralidad y democracia. El centro histórico de Lima. Periodo 1980-2004. En Pablo Vega Centeno (ed.), *Lima, diversidad y fragmentación de una metrópoli emergente* (pp. 325-362). Quito: Olacchi.

Cimoli, Mario, Annalisa Primi & Maurizio Pugno (2005). *An Enclave-Led Model Growth: The Structural Problem of Informality Persistence in Latin America*. Trento: Grade.

Cimoli, Mario, Annalisa Primi & Maurizio Pugno (2006). Un modelo de bajo crecimiento: la informalidad. *Revista de la Cepal,* (88), 89-107.

Claux, Denise (2005). «Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. *Upper class* limeños, *National Identity, and Cultural Change in the 21st Century*». Tesis de maestría. Universidad de Londres.

Collier, David (1978). *Barriadas y elites. De Odría a Velasco.* Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Coloma Portari, César (2010). *La comida tradicional del Perú en la obra de Ricardo Palma*. Lima: Instituto Nacional de Cultura.

Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003). La región Lima metropolitana. http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20IV/SECCION%20TERCERA-Los%20Escenarios%20de%20la%20Violencia/Historias%20Regionales/1.5%20REGION%20LIMA%20METROPOLITANA.pdf. Fecha de consulta: 2/2/2016.

Contreras Zanabria, Moisés (2013). «La ciudad desbordada: imaginarios y mentalidades sobre la marginalidad en la ciudad de Lima a partir de su representación cinematográfica, 1978-1990». Tesis de licenciatura. PUCP.

Cornejo Portugal, Inés (1999). Los hijos del asfalto. Una prospección cualitativa a los niños de la calle. *Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, 6*(19), 207-243.

Cortés, Fernando (1988). La informalidad: comedia de equivocaciones. *Nueva Sociedad*, (97), 41-49.

Cosamalón Aguilar, Ana Lucía (1993). Notas sobre el uso de la palabra «cholo». En Gonzalo Portocarrero (ed.), *Los nuevos limeños. Sueños, fervores y caminos en el mundo popular* (pp. 279- 284). Lima: SUR y TAFOS.

Cosamalón Aguilar, Jesús (2011). Entre la discriminación y la integración. La servidumbre doméstica y la construcción del mestizaje en Lima en el siglo XIX. En Claudia Rosas (ed.), *«Nosotros también somos peruanos». La marginación en el Perú, siglos XVI-XXI* (pp. 141-168). Lima: Fondo Editorial PUCP.

Cosamalón Aguilar, Jesús (2013). El dólar en la calle. Los cambistas, la ciudad y la crisis (1980-1990). En Carlos Aguirre y Aldo Panfichi (eds.), *Lima siglo XX, cultura, socialización y cambio* (pp. 145-170). Lima: Fondo Editorial PUCP.

Cosamalón Aguilar, Jesús (2017). *El juego de las apariencias. La alquimia de los mestizajes y las jerarquías sociales en Lima, siglo XIX*. Lima y México DF: Instituto de Estudios Peruanos y El Colegio de México.

Cosamalón Aguilar, Jesús; Martín Monsalve & José Ragas (2007). «Los rostros de la calle. Tácticas y supervivencia de nuevos actores sociales en el mundo urbano. Una aproximación (Lima, 1980-2005)». Manuscrito inédito. Proyecto DAI-3495. PUCP.

De la Flor Arbulú, Marcia (2000). *Cultura cívica en ambulantes de Lima: concepto de política y confianza interpersonal.* Nimega, Holanda: Universidad Católica de Nimega.

Defensoría del Pueblo (2006). *La calidad del aire en Lima y su impacto en la salud de los habitantes.* Informe 136. Lima: Defensoría del Pueblo.

Defensoría del Pueblo (2008). *El transporte urbano en Lima metropolitana: un desafía en defensa de la vida.* Informe 137. Lima: Defensoría del Pueblo.

Degregori, Carlos Iván & Romeo Grompone (1991). *Elecciones 1990. Demonios y redentores en el nuevo Perú. Una tragedia en dos vueltas.* Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Desco (1989). *Violencia política en el Perú (1980-1988).* Tomo I. Lima: Desco.

Devida (2013). *Pasta Básica de Cocaína. Cuatro décadas de historia, actualidad y desafíos*. Lima: Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito.

Di Laura Mendoza, Giovanna (2016). «Estudio sobre el uso del capital social en mujeres empresarias». Tesis de maestría. PUCP.

Domínguez, Carlos (1999). *Los peruanos.* Lima: América Leasingeniero

Donaire, Ricardo (2007). ¿Quiénes son los «trabajadores por cuenta propia»? *Lavboratorio, Estudios sobre cambio estructural y desigualdad social, 8*(20), 58-62.

Donovan, Michael G. (2004). La guerra por el espacio en Bogotá: la «recuperación» del espacio público y su impacto sobre los vendedores ambulantes (1988-2003). *Territorios*, (12), 109-146.

Driant, Jean-Claude (1991). *Las barriadas de Lima*. Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos.

Dulanto Tello, Andrés (2013). «Asignación de competencias en materia de residuos sólidos de ámbito municipal y sus impactos en el ambiente». Tesis de licenciatura. PUCP.

Durand, Mathieu & Pascale Metzger (2009). Gestión de residuos y transferencia de vulnerabilidad en Lima/Callao. *Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos, 38*(9), 623-646.

Escobar, Alberto (1978). *Variaciones sociolingüísticas del castellano en el Perú.* Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Fernández-Maldonado, Ana (2013). La larga marcha de las barriadas en la segunda mitad del siglo XX. En Carlos Aguirre y Aldo Panfichi (eds.), *Lima siglo XX, cultura, socialización y cambio* (pp. 57-81). Lima: Fondo Editorial PUCP.

Fernández-Maldonado, Ana (2015). Las barriadas de Lima como estímulo a la reflexión urbana sobre la vivienda. Revisitando a Turner y De Soto. *Revista de Estudios sobre Vivienda (WASI), 2*(3), 2-20.

Figari, Eduardo & Xavier Ricou (1990). *Lima en crisis. Propuestas para la gestión de los servicios urbanos en Lima metropolitana*. Lima: Universidad del Pacífico.

Flores Galindo, Alberto (1988). *Tiempo de plagas.* Lima: El Caballo Rojo.

Fokdal, Josefine & Peter Herrle (2011). Beyond the Urban Informality Discourse: Negotiation Power, Legitimacy and Resources. *Geograophische Zitschrift,* IC, (1), 3-15.

Franco, César (1989). *Informales: nuevos rostros en la vieja Lima*. Lima: CEDEP.

Fuentes, Sandro (1998). Cómo formalizar a los informales. En Eliana Chávez y otros, *Perú: el sector informal frente al reto de la modernización* (pp. 247-263). Lima: OIT.

Fuentes, Julio (1994). *Los ambulantes y el entorno urbano.* Arequipa: s.e.

Fukumoto, Mary (1997). *Hacia un nuevo sol. Japoneses y sus descendientes en el Perú. Historia, cultura, identidad*. Lima: Asociación Peruano Japonesa del Perú.

Gandolfo, Daniella (2009). *The City at Its Limits. Taboo, Transgression, and Urban Renewal in Lima*. Chicago: The University of Chicago Press.

Garavito, Cecilia (2000a). *Empleo, salarios reales y producto: 1970-1995.* Lima: Departamento de Economía PUCP.

Garavito, Cecilia (2000b). *Empleo y desempleo: un análisis de la elaboración de estadísticas*. Lima: Departamento de Economía PUCP.

García Guzmán, José (2001). «Los vendedores ambulantes en la Ciudad de México. Planteamiento para un modelo econométrico». Tesis de licenciatura. Universidad Nacional Autónoma de México.

García Toledo, Pedro (2005). Los niños y el ajedrez. *Nuestro ajedrez, 4*(161), 479-480.

Gargurevich, Juan (2002). *La prensa sensacionalista en el Perú*. Lima: Fondo Editorial PUCP.

Ghersi, Enrique (ed.) (1989). *El comercio ambulatorio en Lima*. Lima: Instituto Libertad y Democracia.

Ghersi, Enrique (1991). Instituciones formales e informales. En Alejando Toledo y Alain Chalat (eds.), *Las otras caras de la sociedad informal. Una visión multidisciplinaria* (pp. 401-442). Lima: ESAN e IDE.

Golda-Pongratz, Kathrin (2013). El jirón Camaná: un retrato contemporáneo. Notas de paso, lecturas de historia, apuntes de archivo y cuentos de adentro y afuera. En Carlos Aguirre y Aldo Panfichi (eds.), *Lima siglo XX, cultura, socialización y cambio* (pp. 105-144). Lima: Fondo Editorial PUCP.

Gonzales de Olarte, Efraín & Juan Manuel del Pozo Segura (2012). Lima, una ciudad policéntrica. Un análisis a partir de la localización del empleo. *Investigaciones Regionales,* (23), 29-52.

Graaff, Kristina & Noa Ha (2015). *Street Vending in the Neoliberal City. A Global Perspective on the Practices and Policies of a Marginalized Economy*. Oxford: Berghahn.

Granados, Miriam (1997). *Actores sociales de la ciudad: el caso de los vendedores ambulantes de Lima*. Ginebra: Instituto de Estudios de Desarrollo.

Grompone, Romeo (1985). *Talleristas y vendedores ambulantes en Lima.* Lima: Desco.

Grompone, Romeo (1990). Las lecturas políticas de la informalidad. En Gustavo Riofrío (ed.), *De marginales a informales* (pp. 33-67). Lima: Desco.

Grompone, Romeo (1991). Iniciativas populares en Lima: nuevos espacios y límites. En Alejando Toledo y Alain Chalat (eds.), *Las otras caras de la sociedad informal. Una visión multidisciplinaria* (pp. 221-274). Lima: ESAN e IDE.

Grompone, Romeo (1999). *Las nuevas reglas de juego. Transformaciones sociales, culturales y políticas en Lima*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Grompone, Romeo (2005). El sector informal y su relación con el Estado. En Patricia Zárate (ed.), *¿Hay lugar para los pobres en el Perú? Las relaciones Estado-sociedad y el rol de la cooperación internacional* (pp. 133-201). Lima: Ministerio Británico para el Desarrollo Internacional.

Guerrero, Raúl & Abelardo Sánchez León (1977). *La trampa urbana. Ideología y problemas urbanos. El caso de Lima*. Lima: Desco.

Hamann, Johanna (2015). *Leguía, el Centenario y sus monumentos. Lima: 1919-1930.* Lima: Fondo Editorial PUCP.

Hobsbawm, Eric (1983). Introducción. La invención de la tradición. En Eric Hobsbawm y Terence Ranger (eds.), *La invención de la tradición* (pp. 7-22). Barcelona: Crítica.

Hough, Susan (2010). A Seismological Retrospective of the Brady-Spence Prediction. http://www.seismosoc.org/Publications/srl/SRL_81/srl_81-1_hs.html. Fecha de consulta: 29/1/2017.

Huamán, María Josefina (s.f.). *Comedores populares y estrategias de sobrevivencia*. Lima: Alternativa.

Iguíñiz Echevarría, Javier (2008). *The power, Rigour and Effectiveness of an idea: The Case of the Poor's Legal Informality.* Lima: Departamento de Economía PUCP.

Instituto de Desarrollo del Sector Informal - Idesi (1992). *Rostros de la informalidad (testimonios)*. Lima: Idesi.

Instituto Metropolitano de Planificación - IMP (2010). *Inventario de áreas verdes a nivel metropolitano*. Lima: IMP.

Instituto Nacional de Defensa Civil - Indeci (2001). *Compendio estadístico de emergencias 2001. 2.3.7 Incendio en Mesa Redonda - Lima*. http://www.indeci.gob.pe/compend_estad/2001/comp_2001_05.pdf. Fecha de consulta: 9/3/2017.

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI (2001). *Conociendo Lima.* Lima: INEI.

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI (2009). *Perú: niños, niñas y adolescentes que trabajan, 1993-2008*. Lima: INEI.

Iwasaki, Fernando (1989). Aproximaciones hacia una historia social: el comercio ambulatorio en Lima colonial. En Enrique Ghersi (ed.), *El comercio ambulatorio en Lima* (pp. 103-174). Lima: Instituto Libertad y Democracia.

Jaramillo García, Enrique (2015). «Niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Actores sociales en la vida social de Lima Metropolitana, 1990-2010». Tesis de maestría. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Jiménez, Félix (2009). Perú: Crisis y restricciones al crecimiento. *EconoQuantum*, *6*(1). http://www.redalyc.org/pdf/1250/125012551012.pdf. Fecha de consulta: s.f.

Jiménez, Manuel, Rosalva Mora y otros (2010). *Elaboración de una bebida tradicional: champurreado en forma instantánea*. Ponencia en el XII Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Guanajuato, 27-28 de mayo. http://respyn2.uanl.mx/especiales/2010/ee-09-2010/documentos/desarrollo_nuevos_productos/DPN95.pdf

Kuchta-Helbling, Catherine (2000). *Barriers to Participation: The Informal Sector in Emerging Democracies*. Documento académico preparado para el taller Barriers to Participation: The Informal Sector in Emerging Democracies, Sao Paulo, 13 de noviembre. https://www.yumpu.com/en/document/view/25879126/barriers-to-participation-the-informal-sector-in-emerging-democracies

Lazarte, Rolando (2000). El «sector informal»: una revisión conceptual bibliográfica. *Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía*, *31*(121), 35-62.

León Camargo, Astrid & Hugo Caicedo Mora (2005). Elementos conceptuales para el estudio de la economía informal en Villavicencio: Ventas informales. *Revista Orinoquia*, *9*(1), 6-18.

Lewis, Oscar (1966). The Culture of Poverty. *Scientific American*, *215*(4), 19-25.

Lindón, Alicia (2007). La ciudad y la vida urbana a través de los imaginarios urbanos. *EURE. Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales, 33*(99), 7-15.

Llona, Michelle & Sandra Nakamura (2010). *Lecturas urbanas. Polvos Azules*. Lima: Impresora Gráfica.

López Flores, Lucía (2013). «Representación y reconocimiento de los recicladores en el espacio público local y sus implicancias para el diseño de políticas concertadas en Lima Cercado». Tesis de licenciatura. PUCP.

López Jiménez, Sinesio (2004). Comentario. ¿Desborde popular o incursión democratizadora? En José Matos Mar, *Desborde popular y crisis del Estado. Veinte años después* (pp. 195-227). Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.

Ludeña, Wiley (2009). *Urbanismo dixit. Inquisiciones.* Quito: Olacchi.

Macera, Pablo (1992). Prólogo. En Idesi, *Rostros de la informalidad (testimonios)* (pp. 17-21). Lima: Idesi.

Macera, Pablo (2009). Los verdaderos ambulantes. *Puente. Revista del Colegio de Ingenieros del Perú*, *4*(15), 44-47.

Macera, Pablo & María Belén Soria (2015). *La comida popular ambulante de antaño y hogaño en Lima.* Lima: Fondo Editorial Universidad San Martín de Porres.

Madueño Ruiz, Diego (2012). *El proceso de formalización de los recicladores y la reproducción de las condiciones de desigualdad en la microempresa Fuerza Emprendedora de Lima Norte (FELN)*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Mangin, William (1967). Latin American Squatter Settlements: A Problem and a Solution. *Latin American Research Review*, *2*(3), 65-98.

Martí, Juan Pablo (2000). *Implicancias epistemológicas, metodológicas y políticas de las diferentes perspectivas teóricas sobre la economía popular*. Ensayo presentado en el simposio Primeras Jornadas de Historia Regional Comparada, Porto Alegre, 23-25 de agosto. http://www.riless.org/investigadores_desarrollo.shtml?x=24466. Fecha de consulta: 12/10/2007.

Martucelli, Danilo (2015). *Lima y sus arenas. Poderes sociales y jerarquías culturales.* Lima: Cauces.

Matos Mar, José (1984). *Desborde popular y crisis del Estado*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Matos Mar, José (1991). El sector informal: sociedad y cultura. En Alejandro Toledo y Alain Chalat (eds.), *Las otras caras de la sociedad informal. Una visión multidisciplinaria* (pp. 135-154). Lima: ESAN e IDE.

Matos Mar, José (2004). *Desborde popular y crisis del Estado. Veinte años después.* Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.

Medina Muñoz, Lina (2005). Comercio callejero: sistema racional de distribución minorista. *Universitas Humanistica*, (60), 38-59.

Medina, Oswaldo (2000). *El achoramiento: una interpretación sociológica*. Lima: Universidad del Pacífico.

Mejía, Daniel & Carlos Posada (2007). *Informalidad: teoría e implicaciones de política*. Conferencia en la Unidad de investigaciones del Banco de la República, Bogotá, 28 de setiembre. http://www.banrep.org/seminarios/index_con.html. Fecha de consulta: 15/10/2007.

Mendiola García, Sandra (2017). *Street Democracy. Vendors, Violence, and Public Space in Late Twentieh*. Lincoln: University of Nebraska.

Ministerio de Salud (2002). *El incendio de Mesa Redonda: lecciones aprendidas de la intervención del Ministerio de Salud*. Lima: Ministerio de Salud.

Möller, Alois (1979). Los vendedores ambulantes de Lima. En Emililo Klein y Viktor Tokman (comps.), *El subempleo en América Latina* (pp. 415-471). Buenos Aires: Clacso.

Monnet, Jérôme (2005a). Ambulantaje y metropolización: nuevas preguntas para la inclusión social. *Summa de Voluntades*, (5), 36-43.

Monnet, Jérôme (2005b). El prisma del ambulantaje. Conceptualización del ambulantaje, de los vendedores a los clientes: un acercamiento a la metrópoli posfordista. En Juliette Bonnaffe y Jérôme Monnet (coords.), *Memoria del Seminario El ambulantaje en la ciudad de México: investigaciones recientes* (pp. 1-14). México DF: PUEC-UNAM y Cemca.

Monnet, Jérôme (2006). The Geopolitics of Visibility: Urban Icons in Contemporary México City. En *Atlas of Urban Icons. Studies in Urban Virtual History.* Multimedia Companion to Special Issue of *Urban History*. *XXXIII*(1), 1-21.

Monsalve, Martín (2007). La emolientera, el pistero y la búsqueda de reconocimiento social. En Jesús Cosamalón, Martín Monsalve y José Ragas, «Los rostros de la calle. Tácticas y supervivencia de nuevos actores sociales en el mundo urbano. Una aproximación (Lima, 1980-2005)» (s/p). Manuscrito inédito. Proyecto DAI-3495. PUCP.

Morán León, Wendy (2013). «Negociaciones y persecuciones: el centro de Lima y su patrimonio como campo de exclusión. El caso del Campo Ferial Polvos Azules durante la primera gestión de Alberto Andrade (1996-1998)». Tesis de maestría. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - Flacso.

Noel Aguado, Gabriela (2009). «Neocholos: entre la tradición y la modernidad. Estudio acerca de la construcción de la identidad de los nietos de los migrantes». Tesis de licenciatura. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Nolasco, Guillermo (1993). *Tributación y comercio ambulatorio.* Lima: Alternativa.

Nugent, Guillermo (2012 [1992]). *El laberinto de la choledad.* Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Ochoa León, Sara (2004). *Economía informal. Evolución reciente y perspectivas*. México: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/04_centro_de_estudios_sociales_y_de_opinion_publica. Fecha de consulta: 25/10/2007.

Olson, Richard, Bruno Podestá & Joanne M. Nigg, (1989). *The Politics of Earthquake Prediction*. Princeton: Princeton University Press.

Ordoñez, Dwight & María del Pilar Mejía (1993). El trabajo infantil callejero en Lima: aproximación descriptiva sobre la base de la aplicación de una encuesta. En Juan Carlos Bossio (ed.), *El trabajo infantil en el Perú* (pp. 41-97). Ginebra: OIT.

Ortiz de Zevallos, Augusto (1992). *Urbanismo para sobrevivir.* Lima: Apoyo.

Osterling, Jorge (1979). La organización de los vendedores ambulantes: el caso de Lima Metropolitana. *Revista de la Universidad Católica,* (61), 185-202.

Osterling, Jorge, Jaime de Althaus & Jorge Morelli (1979). Los vendedores ambulantes de ropa en el Cercado: un ejemplo del sector económico informal en Lima metropolitana. *Debates en Sociología*, (4), 23-41.

Otta Vildoso, Eliana (2014). Proceso urbano y dinámicas en el Reino de la reutilización: Tacora. *La Colmena,* (7), 86-101.

Pajuelo, Jaime, Pedro Lizarzaburu, Pedro Orihuela & Miguel Acevedo Roman (2003). El retardo del crecimiento en los niños del Perú. *Revista Peruana de Pediatría, 56*(2), 4-9.

Palacios, Rosario (2016). The New Identities of Street Vendors in Santiago, Chile. *Space and Culture*, *19*(4), 421-434.

Palla, Tatiana (2008). Estado de Desecho. *Revista Somos*, (1136), 30-39.

Palmer, David (ed.) (1992). *The Shining Path of Peru.* Nueva York: St. Martin's Press.

Panfichi, Aldo (2013). Sociología de los barrios populares del centro de Lima, siglo XX. En Carlos Aguirre y Aldo Panfichi (eds.), *Lima siglo XX, cultura, socialización y cambio* (pp. 83-104). Lima: Fondo Editorial PUCP.

Parodi, Carlos (2004). *Perú 1960-2000. Políticas económicas y sociales en entornos cambiantes*. Lima: Universidad del Pacífico.

Patch, Richard (1973). *La Parada. Estudio de un mundo alucinante*. Lima: Mosca Azul.

Peirano, Luis & Abelardo Sánchez León (1984). *Risa y cultura en la televisión peruana.* Lima: Desco.

Pérez Herrera, Marcial (2013). *Estudio sobre buenas prácticas de formalización desde las experiencias de las organizaciones de trabajadores de la economía informal.* Lima: OIT.

Perry, Guillermo; William Maloney, Omar Arias, Pablo Fajnzylber, Andrew D. Mason & Jaime Saavedra-Chanduví (2007). *Informalidad: escape y exclusión*. *Resumen ejecutivo*. Washington: Banco Mundial.

Picasso, Estrella (1986). *Las alimentadoras del pueblo. Vendedoras ambulantes de alimentos preparados*. Lima: Documento de trabajo.

Pimentel, Carolina; Martín Rodríguez, Javier Pinto & Mario Carrión (2005). Uso de pasta básica de cocaína y sus alteraciones cardiacas. Estudio de casos y controles. *Revista Peruana de Cardiología, 31*(3), 166-175.

Pinilla Cisneros, Susana (2004). «Condiciones de éxito de los Emprendedores Emergentes de Lima en el contexto de la globalización». Tesis de licenciatura. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Plöger, Jörg (2009). La formación de enclaves residenciales en Lima en el contexto de la inseguridad. En Pablo Vega Centeno (ed.), *Lima, diversidad y fragmentación de una metrópoli emergente* (pp. 97-140). Quito: Olacchi.

Pok, Cynthia & Andrea Lorenzetti (2007). El abordaje conceptual-metodológico de la informalidad. *Lavboratorio*, *Estudios sobre cambio estructural y desigualdad social, 8*(20), 5-13.

Policastro, Betsabe & Emilse Romero (2006). *Las relaciones de intercambio en el mundo de la venta ambulante*. Ponencia presentada en el 7mo Congreso Nacional de Estudios del Trabajo de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo – ASET. Buenos Aires, 10-12 de agosto. https://www.aset.org.ar/congresos/7/04011.pdf. Fecha de consulta: 20/10/2008.

Poole Fuller, Esteban (2016). «Rectificando las fallas del mercado: balance del proceso de implementación en lima del sistema integrado de transporte (SIT) y propuestas para su perfeccionamiento bajo un régimen de servicio público». Tesis de licenciatura. PUCP.

Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe - PREALC (1998). *Sobrevivir en las calles. El comercio ambulante en Santiago.* Santiago de Chile: OIT.

Programa Municipal para la Recuperación del centro histórico de Lima - Prolima (2014). *Plan maestro del centro histórico de Lima al 2025*. http://www.munlima.gob.pe/images/descargas/programas/prolima/PLAN-MAESTRO.pdf. Fecha de consulta: s.f.

Prince, Carlos (1890a). *Lima antigua. Fiestas religiosas y profanas con numerosas viñetas*. Lima: Imprenta del Universo.

Prince, Carlos (1890b). *Lima antigua. Tipos de antaño con numerosas viñetas.* Lima: Imprenta del Universo.

Protzel, Javier (2011). *Lima imaginada*. Lima: Fondo Editorial de la Universidad de Lima.

Quijano, Aníbal (1972). La constitución del 'mundo' de la marginalidad urbana. *EURE. Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales, 2*(5), 90-106.

Quijano, Aníbal (2014). *Cuestiones y horizontes. Antología esencial*. Buenos Aires: CLACSO.

Ramón, Gabriel (2014). *Neoperuano: arqueología, estilo nacional y paisaje urbano en Lima, 1910-1940*. Lima: Municipalidad Metropolitana de Lima y Sequilao.

Ramos Tenorio, Elena (1993). El trabajo infantil en empresas, microempresas y hogares en el Perú. En Juan Carlos Bossio (ed.), *El trabajo infantil en el Perú* (pp. 15-40). Ginebra: OIT.

Remy Valentín, Enrique (2017). Lima tiene un déficit de áreas verdes de 56 millones de metros cuadrados. https://enriqueremy.lamula.pe/2017/01/12/lima-tiene-un-deficit-areas-verdes-de-56-millones-de-metros-cuadrados/eremy/. Fecha de consulta: 8/3/2017.

Rénique, José Luis (2015). *Incendiar la pradera. Un ensayo sobre la revolución en el Perú*. Lima: La Siniestra.

Revoredo, César (ed.) (1961). *Antología de la tradición*. Lima: Imprenta DPPGC.

Reyna, Carlos & Antonio Zapata (1991). *Crónica sobre el Cólera en el Perú*. Lima: Desco.

Riofrío, Gustavo (1991). *Producir la ciudad (popular) de los '90. Entre el mercado y el Estado*. Lima: Desco.

Riofrío, Gustavo (2009). Imágenes y perspectivas del crecimiento urbano de Lima. En Julio Calderón y otros, *Foro urbano. Los nuevos rostros de la ciudad de Lima* (pp. 31-50). Lima: Colegio de Sociólogos del Perú.

Riofrío, Gustavo & Teresa Cabrera (2012). *Trabajadoras por la ciudad aporte de las mujeres a la gestión ambiental de los residuos sólidos en América Latina*. Lima: Desco.

Robertson Sotelo, Karem (2010). «Tradiciones discursivas y estrategias de cortesía en el discurso de los vendedores de caramelos de los microbuses de Lima». Tesis de licenciatura. PUCP.

Rocha, Arturo (2007). *El meganiño 1982-1983, «la madre de todos los niños»*. Lima: Instituto para la mitigación de los efectos de El Niño (IMEFEN). http://www.imefen.uni.edu.pe/Temas_interes/ROCHA/FEN_1982-1983.pdf. Fecha de consulta: 30/7/2016.

Rodríguez Pastor, Humberto (2006). *De tamales y tamaleros. Tres historias de vida.* Lima: Universidad de San Martín de Porres.

Rodríguez Rabanal, César (1991). Pobreza y mundo interno. En Alejando Toledo y Alain Chalat (eds.), *Las otras caras de la sociedad informal. Una visión multidisciplinaria* (pp. 176-220). Lima: ESAN e IDE.

Rodríguez Robles, Elena (1997). Migración y violencia: jóvenes ayacuchanos y huancavelicanos en Lima. En Carmen Rosa Balbi (ed.), *Lima: aspiraciones, reconocimiento y ciudadanía en los noventa* (pp. 57-84). Lima: Fondo Editorial PUCP.

Roggenbuck, Stefan (1996). Historia social de la infancia callejera en Lima. *Apuntes,* (39), 89-112.

Rohner, Fred (2016). «La Guardia Vieja. El vals criollo y la formación de la ciudadanía en las clases populares. Estrategias de representación y de negociación en la consolidación del vals popular limeño. (1885-1930)». Tesis de doctorado. Université de Rennes 1.

Rojas Samanez, Gonzalo (1985). La lectura ambulante: de Abancay a Tacora, pasando por Grau. *Quehacer,* (35), 96-101.

Roldán, Luis (2010). El achoramiento: una práctica problemática o la solución práctica de un problema. *La Colmena,* (3), 22-29.

Romero, Raúl (2007). *Andinos y tropicales. La cumbia peruana en la ciudad global*. Lima: Instituto de Etnomusicología de la PUCP.

Salas, Carlos (2006). El sector informal: auxilio u obstáculo para el conocimiento de la realidad social en América Latina. En Enrique de la Garza (coord.), *Teorías sociales y estudios del trabajo: nuevos enfoques* (pp. 192-223). México DF: Anthropos y UNAM-Iztapalapa.

Salazar Bondy, Sebastián (1974). *Lima la horrible.* Lima: Peisa.

Salcedo, José María (1993). *El jefe. De ambulante a magnate*. Lima: Filmart.

Saldarriaga, Juan Miguel; Claudia Vélez Zapata & Gabriel Betancur Ramírez (2016). Estrategias de mercadeo de los vendedores ambulantes. *Semestre Económico, 19*(39), 155-172.

Sandoval, Pablo (2000). Los rostros cambiantes de la ciudad: cultura urbana y antropología en el Perú. En Carlos Iván Degregori, Pablo F. Sendón y Pablo Sandoval (eds.), *No hay país más diverso. Compendio de antropología peruana* (pp. 278-329). Lima: Red Para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú.

Sarria Icaza, Ana & Lía Tiribia (2004). Economía popular. En Antonio David Cattani (org.), *La otra economía* (pp. 173-185). Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento, Altamira y Fundación OSDE.

Schönwälder, Gerd (2002). *Linking Civil Society and the State. Urban Popular Movements, the Left and Local Government in Peru, 1980-1992.* Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.

Schuldt, Jürgen (2005). *Bonanza macroeconómica y malestar microeconómico.* Lima: Universidad del Pacífico.

Sean, John (2001). *La economía peruana desde 1950. Buscando una sociedad mejor*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Seminario, Bruno (2015). *El desarrollo de la economía peruana en la era moderna. Precios, población y demanda desde 1700*. Lima: Universidad del Pacífico.

Senamhi (2015). *Evaluación de la Calidad del Aire en Lima Metropolitana, 2014*. Lima: Senamhi.

Serida, Jaime, Keiko Nakamatsu, Armando Borda & Oswaldo Morales (2015). *Global Entrepreneurship Monitor: Perú 2013*. Lima: ESAN.

Sifuentes Pinedo, John (2007). «Informe etnográfico sobre los fotógrafos de la ciudad de Lima». Manuscrito inédito. Proyecto DAI-3495. PUCP.

Silva, Armando (2001). Algunos imaginarios urbanos desde centros históricos de América Latina. En Fernando Carrión (ed.), La *ciudad construida. Urbanismo en América Latina* (pp. 397-408). Quito: FLACSO.

Silva, Raúl (2007). «Oficios de la calle: antiguos y nuevos rostros (1980-1989). La información periodística». Manuscrito inédito. Proyecto DAI-3495. PUCP.

Silva, Raúl (2008). De plaza pueblerina a símbolo vivo de una nueva ciudad: la Plaza San Martín, 1980-1997. *Summa Humanitatis, 2*(1). http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/summa_humanitatis/article/view/2336. Fecha de consulta: 20/7/2016.

Smith, Michael (1992). Shining Path's Urban Strategy. En David Scott Palmer (ed.), *The Shining Path of Peru* (pp. 127-148). Nueva York: St. Martin's Press.

Soares Costa, Idalina (1991). De la basura también se vive. En Alejando Toledo y Alain Chalat (eds.), *Las otras caras de la sociedad informal. Una visión multidisciplinaria* (pp. 495-539). Lima: ESAN e IDE.

Soto, Hernando de (1986). *El otro sendero. La revolución informal*. Lima: El Barranco.

Soto, Hernando de (2000). *El misterio del capital. Por qué el capitalismo triunfa en occidente y fracasa en el resto del mundo*. Lima: El Comercio.

Stein, William (2003). Los letreros de las calles del centro de Lima: memoria e identidad en el Perú. En Marita Hamann y otros (eds.), *Batallas por la memoria: antagonismos de la promesa peruana* (pp. 31-76). Lima: PUCP, Universidad del Pacífico e Instituto de Estudios Peruanos.

Tantaleán Pinilla, Javier (2016). «¿Por qué la cumbia peruana no ha muerto? Estrategias de adaptación y permanencia desde 1968 hasta el 2000». Tesis de licenciatura. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Thomson, Ian (2002). La congestión del tránsito urbano: causas y consecuencias económicas y sociales. *Revista de la CEPAL*, (76), 109-121.

Tokman, Víctor (1991). El sector informal: quince años después. En Alejando Toledo y Alain Chalat (eds.), *Las otras caras de la sociedad informal. Una visión multidisciplinaria* (pp. 37-70). Lima: ESAN e IDE.

Tokman, Víctor (2007). Informalidad, inseguridad social y cohesión social en América Latina. R*evista Internacional del Trabajo*, *126*(1-2), 93-120.

Tokman, Víctor & Manuel Délano (eds.) (2001). *De la informalidad a la modernidad.* Santiago de Chile: OIT.

Toledo, Alejandro (1991). La economía informal: amortiguadora de la crisis peruana. En Alejando Toledo y Alain Chalat (eds.), *Las otras caras de la sociedad informal. Una visión multidisciplinaria* (pp. 71-131). Lima: ESAN e IDE.

Toledo, Alejandro & Alain Chalat (eds.) (1991). *Las otras caras de la sociedad informal. Una visión multidisciplinaria*. Lima: ESAN e IDE.

Tueros, Mario & Daniel Carbonetto (1985). *Barreras institucionales de entrada al sector informal en Lima.* Santiago de Chile: OIT.

Tuesta, Fernando (1991). Pobreza urbana y participación política: clases populares y cambios electorales en Lima. En Alejandro Toledo y Alain Chalat (eds.), *Las otras caras de la sociedad informal. Una visión multidisciplinaria* (pp. 275-321). Lima: ESAN e IDE.

Turner, John (1963). Lima Barriadas Today. *Architectural Design*, *8.* http://www.communityplanningenieronet/JohnTurnerArchive/. Fecha de consulta: 11/3/2017.

Unicef (2004). *Evaluación del programa de cooperación (EPC) Perú-Unicef*. Nueva York: Unicef.

Uribe, José Ignacio & Carlos Humberto Ortíz (2004). *Una propuesta de conceptualización y medición del sector informal.* Documento de trabajo CIDSE-Universidad del Valle. http://econpapers.repec.org/paper/col000149/003720.htm. Fecha de consulta: 15/10/2007.

Valdez, Jorge (2005). «Imaginarios y mentalidades del conflicto armado interno en el Perú, 1980-2000. Una aproximación historiográfica al cine peruano sobre violencia política». Tesis de licenciatura. PUCP.

Valdivia Rey, Milagros (2014). «Sensacionalismo, prejuicios y estereotipos en los diarios limeños durante la epidemia de cólera de 1991». Tesis de licenciatura. PUCP.

Valdivia Rey, Milagros (2015). La epidemia de cólera de 1991 a través de los diarios limeños. *Acta Herediana*, (56), 51-59.

Valladares, Manuel (2005). *5 de febrero de 1975: huelga policial, saqueos e incendios en Lima*. Lima: Universidad y Sociedad.

Vega Centeno, Pablo (2004). Movilidad y vida cotidiana de mujeres de sector popular de Lima: un análisis del testimonio de la señora Eufemia. *Anthropologica*, *22*(22), 31-62.

Vega Centeno, Pablo (2006). El espacio público la movilidad y la revaloración de la ciudad. *Cuadernos. Arquitectura y ciudad*, (3), 1-75.

Vega Centeno, Pablo (2009). Movilidad espacial y vida cotidiana. En Julio Calderón y otros, *Foro urbano. Los nuevos rostros de la ciudad de Lima* (pp. 81-92). Lima: Colegio de Sociólogos del Perú.

Vega Centeno, Pablo (2013). ¿De dónde somos limeños? Explorando los espacios públicos de la ciudad. En Carlos Aguirre y Aldo Panfichi (eds.), *Lima siglo XX, cultura, socialización y cambio* (pp. 123-144). Lima: Fondo Editorial PUCP.

Venero Cruz, Paloma (2014). «Representaciones periodísticas de la reforma del transporte. Caso: Metropolitano en los diarios *El Comercio*, *Perú 21* y *Trome*». Tesis de licenciatura. PUCP.

Verdera, Francisco (2004). *El mercado de trabajo de Lima Metropolitana: estructura y evolución 1970-1990*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Vich, Víctor (2001). *El discurso de la calle. Los cómicos ambulantes y las tensiones de la modernidad en el Perú*. Lima: Fondo Editorial PUCP, Universidad del Pacífico e Instituto de Estudios Peruanos.

Vich, Víctor (2003). «Borrachos de amor». Las luchas por la ciudadanía en el cancionero popular peruano. En Marita Hamann y otros (eds.), *Batallas por la memoria: antagonismos de la promesa peruana* (pp. 338-363). Lima: PUCP, Universidad del Pacífico e Instituto de Estudios Peruanos.

Vigil-Lazo, Yolanda (2013). Condiciones de trabajo y enfermedades ocupacionales de los conductores de transporte público urbano de Lima Metropolitana. *San Martín Emprendedor. Revista de Ciencias Empresariales*, *4*(2), 52-69.

Villacrez, Eloy (2002). El día que Velasco debió volver al poder. http://www.peruesmas.com/sociedadlatina/velasco.htm. Fecha de consulta: 29/2/2017.

Villanueva Montalvo, Aída (2004). El circuito informal de libros en el Perú: el caso de la Cámara Popular de Libreros del jirón Amazonas. *Biblios*, (17), 3-15.

Vivas Sabroso, Fernando (2008). *En vivo y en directo. Una historia de la televisión peruana.* Lima: Universidad de Lima.

Wilson, Fiona (2014). *Ciudadanía y violencia política en el Perú: una ciudad andina, 1870-1980*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Wood, David (2005). *De sabor nacional. El impacto de la cultura popular en el Perú*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Wood, Ian (2011). «The Neoliberalization of Street Vending policy in Lima. Peru: the Politics of Citizenship Property and Public Space in the Production of a New Urban Marginality». Tesis de maestría. Brock University.

Yamada, Gustavo; Adriana Lizarzaburu & Katia Samanamud (2012). La persistencia de las brechas étnicas en el mercado laboral peruano. En Francisco Galarza (ed.), *Discriminación en el Perú. Exploraciones en el Estado, la empresa y el mercado laboral*. Lima: Universidad del Pacífico.

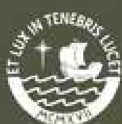
Ybarra, Rodolfo (2013). Un ángel de Pasolini en Tacora. *Lima Gris*, (3), 10-16.

Yeung, Yue Man (1977). «Campesinos de la ciudad». Los vendedores ambulantes de las ciudades asiáticas. https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/23573/109880.pdf?sequence=1. Fecha de consulta: 12/7/2018.

Se terminó de imprimir en
los talleres gráficos de
Tarea Asociación Gráfica Educativa
Psje. María Auxiliadora 156, Breña
Correo e.: tareagrafica@tareagrafica.com
Teléfono: 332-3229 Fax: 424-1582
Se utilizaron caracteres
Adobe Garamond Pro en 11 puntos
para el cuerpo del texto
noviembre 2018 Lima - Perú

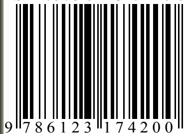
Para quienes vivimos las décadas de 1980 y 1990, recordarlas a través de sus registros periodísticos, documentos oficiales y otros testimonios, nos permite tomar conciencia de la gran cantidad de dificultades que afrontamos: violencia, amenaza de cataclismos, basurales, epidemias, interminables huelgas, y, como si fuera poco, una profunda crisis económica que nos hizo creer que las plagas del apocalipsis se habían ensañado con los peruanos. Mientras esto ocurría a nivel nacional, otro conflicto no menos importante se desarrollaba en las calles de Lima: la expansión del comercio informal, que agregó enfrentamientos entre autoridades, comerciantes y vecinos.

Este libro enfrenta la tarea de explicar esa expansión, analizando este fenómeno y su relación con la crisis mayor del Estado nacional y local, sus vínculos con la extensa y profunda crisis económica y su impacto en los imaginarios urbanos. Además, esta investigación busca incorporar la perspectiva de los propios ambulantes, por medio de la información periodística y entrevistas. Una propuesta importante de este libro se resume en discutir si la expansión del ambulantaje, una de las caras más visibles de la informalidad, se debió a un exceso de regulación estatal, la cual se habría producido paradójicamente en un contexto de extrema debilidad del Estado peruano, agobiado por la crisis y la violencia política.



FONDO
EDITORIAL

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ


ISBN: 978-612-317-420-0
9 786123 174200